Gabriel Jackson



La República Española y la Guerra Civil

Éste es uno de los libros míticos de la educación histórica y política del antifranquismo. Editado por primera vez en 1975, la feroz censura del régimen de Franco impidió su publicación en España. Sin embargo, tuvo una vida clandestina desde las trastiendas de las mejores librerías españolas a las manos de lectores ávidos de conocer una historia que se les había escamoteado. En 1976, poco después de la muerte de Franco, Crítica publicó, al fin, la primera edición española.

El gran mérito de esta obra ha sido, quizá, que ofrecía en aquellos tiempos miserables en todos los sentidos una visión equilibrada de la España republicana y en guerra, tan alejada de los prejuicios de la extrema derecha como de los de la extrema izquierda, que no abordaba los acontecimientos como simples remedos de las revoluciones francesa o rusa o como imitaciones del fascismo italiano o alemán, sino que, como nos dice el autor, «interpretaba la República y la guerra civil a la luz de la peripecia del pueblo español, con causas originadas en la historia española y con concepciones de democracia, socialismo, comunismo, anarquismo, nacionalismo y fascismo que tenían que ver directamente con la experiencia española».

epublibre

Gabriel Jackson

LA REPÚBLICA ESPAÑOLA Y LA GUERRA CIVIL

ePub r1.3

jasopa1963 01.02.2020

Título original: *The Spanish Republic and the Civil War*
Gabriel Jackson, 1965
Traducción: Enrique de Obregón
Retoque de cubierta: Titivillus

Editor digital: jasopa1963
r1.2 (Variolae, 20.11.19 y 23.11.19) y (dino51bd, 24.11.19) Informes de erratas
r1.3 (01.02.20) Se reestructura el Apéndice A
ePub base r2.1







PRÓLOGO A LA EDICIÓN ESPAÑOLA DE 1976

ME sería imposible exagerar si digo lo emocionado y feliz que me siento al ver que, doce años después de haber terminado *La República española y la guerra civil*, la obra va a estar por fin legalmente al alcance de los lectores españoles. No es que fuera desconocida, ya que miles de españoles decididos a conocer la verdad sobre su heroica y trágica guerra civil han conseguido de una u otra forma las obras de autores como Gerald Brenan, Hugh Thomas, Broué y Témime, Herbert R. Southworth y yo mismo. Pero la autorización de una edición española me parece una oportunidad excelente para decir qué pienso de la obra a la luz de mis lecturas y mi experiencia a partir de 1964. Hay una serie de detalles que tal vez habrían sido diferentes si la hubiera escrito en 1974 en vez de en 1964. Pero, excepto errores poco importantes de nombres o cifras que he intentado corregir, no he alterado el texto. Un libro tiene una lógica interna propia que puede destruirse fácilmente si se hacen chapuzas con los detalles para incorporar la investigación o las controversias posteriores. Y, lo que es más importante, cuando un libro ha suscitado controversia, y ha sido conocido en gran medida a través de otras obras que lo ensalzan o lo condenan, hay que presentar a los lectores el texto real que dio lugar a las críticas de autores tan diversos como Noam Chomsky y los hermanos Salas Larrazábal.

Voy a mencionar en primer lugar unos cuantos matices de interpretación, y luego pasaré a las cuestiones sustanciales. Duran-

te la década que pasé investigando y escribiendo (1955-1964), yo estaba muy influido por una serie de personalidades a las que admiraba mucho: el difunto Manuel Lorenzo Pardo, ingeniero hidráulico y discípulo de Joaquín Costa; Jaume Vicens i Vives, el principal historiador profesional de España en lo que llevamos de siglo; Manuel Giménez Fernández, dirigente del ala liberal de la CEDA; Indalecio Prieto, de los socialistas parlamentarios; Manuel de Irujo, el ministro vasco de Justicia; Dionisio Ridruejo, de la Falange; y el general Vicente Rojo, del ejército republicano. Todos estos hombres, con la excepción parcial de Vicens, estaban apasionadamente convencidos de que sólo con que ciertos individuos, o pequeños grupos de dirigentes, hubieran actuado de forma diferente en varios momentos clave, toda la historia de la República y la guerra civil podría haber sido completamente distinta. Además, yo había escrito mi tesis doctoral sobre Joaquín Costa, un hombre que siempre ponía de relieve, aunque involuntariamente, el papel de los individuos históricos; y era un admirador del ideal krausista de la creación de hombres como la clave para el progreso de la civilización. Al escribir sobre momentos clave como el verano de 1934, los levantamientos catalán y asturiano, la primavera de 1936, y los problemas internos de los gobiernos de Largo Caballero y Negrín, puede que pusiera un poco más de énfasis en las personalidades que el que pondría si escribiera hoy. No repudio lo que dije sobre las emociones y los motivos de los individuos concretos, pero creo que ahora insistiría más en los factores objetivos, económicos y diplomáticos, y menos en los individuales. En particular, ahora creo que las probabilidades de derrota de la República fueron enormes desde el principio debido a la hostilidad del mundo financiero. En mayo de 1931, los banqueros holandeses y americanos cancelaron ostentosamente los préstamos que acababan de hacer unos meses antes al gobierno real. Entre 1932 y 1936 ni siquiera una reforma agraria radical habría podido solucionar los problemas

de los campesinos sin tierra. Sólo un desarrollo industrial rápido habría podido absorber a los parados rurales, y en los años treinta no había programas de ayuda extranjera del tipo de los habituales a partir de 1945. Después del alzamiento militar de julio de 1936, la hostilidad de todas las grandes potencias excepto la Unión Soviética (con la excepción parcial de una Francia tímida y dividida) colocó a la República en una situación de inferioridad abrumadora. A partir del momento que se montó la farsa del Comité de No-intervención, ya no importaría quién fuera el jefe de gobierno, ni si los dirigentes más destacados utilizaban un lenguaje marxista o capitalista liberal. Los factores económicos y diplomáticos antes mencionados contribuyeron, sin duda, al profundo pesimismo de Julián Besteiro e Indalecio Prieto, y probablemente al de Azaña tras el estallido de la guerra.

Hablando de pesimismo, debo decir que mi último capítulo probablemente sería menos sombrío si lo escribiera hoy. En aquella época yo estaba impresionado por la derrota aplastante de todas las izquierdas, manifestada por la dictadura de Franco. Una vez más, no tengo razón alguna para repudiar aquellas páginas que responden a las fechas y las circunstancias en que fueron escritas, pero en los doce últimos años han surgido una serie de factores esperanzadores. La economía se ha ido industrializando y diversificando cada vez más, aunque siga dependiendo fuertemente del capital y la tecnología extranjeros. El analfabetismo se ha reducido probablemente a menos del 10 por ciento. La Iglesia ha manifestado una comprensión y una simpatía nuevas respecto a las necesidades de la clase obrera y de los pueblos no castellanos. Gradualmente, a partir de finales de los años sesenta, se ha reproducido una restauración del antiguo pluralismo de la vida intelectual española. El pensamiento de los krausistas, los demócrata-cristianos, los republicanos, los regionalistas, los marxistas y los anarquistas ha vuelto a expresarse ampliamente de palabra y en letra impresa. Y un elemento demagógico del pluralismo

anterior, a saber, el anticlericalismo, está virtualmente ausente del panorama actual. Por todas estas razones, y muy especialmente gracias al progreso económico y cultural, el futuro de España se presenta sustancialmente más esperanzador para un demócrata de izquierdas como yo, que en 1964.

Respecto a la obra de Noam Chomsky: en *American Power and the New Mandarins* (Pantheon, Nueva York, 1969, pp. 74-105 y 138-153) analiza mi libro como un ejemplo de las virtudes y los vicios de la historiografía «burguesa». Me reconoce una preparación cuidada y un espectro de simpatías razonablemente amplio, pero considera que la clase a la que pertenezco y mi carrera profesional me han impedido interpretar la guerra civil correctamente. Según él, yo consideraba equivocadamente que la Unión Soviética era una potencia revolucionaria a finales de la década de los 30, y minusvaloraba mucho los logros de los colectivos patrocinados por los anarquistas. Además, según él, pasé por alto las fuentes importantes. Creo que bastará un ejemplo para ver lo tendenciosas que son sus afirmaciones. En la página 138 de la obra citada, escribe que «Jackson sólo hace una referencia pasajera» a la historia anarquista en tres tomos de Peirats. De hecho, en una nota a pie de página, en la 252, me refiero a esa obra diciendo que es una de mis cuatro fuentes principales respecto a la revolución social en Cataluña. Además, él dice que yo, como supuesto «compañero de viaje», defendía la política exterior soviética y encubría la conducta represiva de los comunistas contra los socialistas de izquierda y los anarquistas. De hecho, yo expuse muy claramente los motivos pragmáticos de la política soviética, y los engaños y abusos de que fueron objeto los elementos de extrema izquierda y los republicanos de clase media del Frente Popular. En la página 249, cuando empezaba a tocar el tema de las colectivizaciones, decía de ellas que constituían la revolución social más profunda ocurrida en España desde el siglo XV. Utilizaba —haciéndolo constar en notas a pie de página— exacta-

mente las mismas fuentes que Chomsky me acusó de pasar por alto. Nadie que haya leído mi capítulo sobre «La caída de Largo Caballero» puede acusarme de encubrir la actuación de los comunistas respecto a sus compañeros del Frente Popular. Como que, en realidad, mi texto no confirma mucho la opinión que Chomsky tiene de mí, frecuentemente recurre a la afirmación de que Jackson «evidentemente» o «al parecer» cree esto o lo otro. No voy a entrar en más detalles en este prólogo; sólo pido a todos los lectores que tengan una actitud de suma cautela ante la utilización que hace Chomsky de palabras como «evidentemente» o «al parecer», y en general que comparen las opiniones que me atribuye con lo que de hecho digo y las referencias que incluyo en mi libro.

Hay dos áreas específicas —la intervención extranjera y el total de bajas— en las que, si escribiera hoy, mis cálculos cuantitativos serían algo diferentes de los de este libro. Empecemos por la intervención extranjera. Basando mis afirmaciones en las investigaciones de J. R. Hubbard (páginas 361-362), yo indicaba lo bien que le había ido a Franco en sus negociaciones para conseguir suministros militares de todo tipo no sólo de los alemanes e italianos, sino de firmas inglesas y norteamericanas. Entonces no pude dar cifras totales ni siquiera aproximadas. Las recientes investigaciones de Robert H. Whealey permiten hoy ser mucho más específico[1]. Los nacionalistas gastaron en el extranjero 645 millones de dólares aproximadamente para conseguir suministros; el 88 por ciento del total correspondió a Alemania e Italia, y el 12 por ciento al área del dólar y la libra esterlina. Hicieron más pagos al contado a Italia de los que yo suponía. De sus tratos con el área del dólar y la libra esterlina obtuvieron no sólo el petróleo y los camiones de los que yo hablaba en mi libro, sino también productos químicos, caucho, yute, algodón, estaño y máquinas-herramientas.

En la medida en que los gastos financieros sean indicativos, dado el estado actual de la investigación podríamos decir que Franco recibió más o menos la misma cantidad de ayuda que la República, considerando que la República exportó sus reservas de oro, por valor de 578 millones de dólares, a la Unión Soviética, y que el gobierno de ésta siempre ha afirmado que las reservas quedaron más que agotadas con la compra de suministros soviéticos. Pero las sumas de dinero gastadas, y los diferentes pedidos y recibos que figuran en los archivos militares no son en absoluto las únicas formas de evidencia, y ni siquiera las principales. Supongamos de momento que, sobre el papel, la República recibió tantos aviones y tanques como los nacionalistas. ¿Cómo se explica entonces que corresponsales militares profesionales como Carlos Gómez, Eddy Bauer y Georges Oudard, todos ellos pronacionalistas, consideraran que los nacionalistas disfrutaban de una superioridad aplastante en cuanto al armamento en todas partes salvo en la defensa de Madrid y en los primeros días de las ofensivas republicanas de Brunete, Teruel y el Ebro? La respuesta es muy compleja, y no puede reducirse a cantidades netas. Los nacionalistas, a partir de finales de julio de 1936, pudieron recibir suministros sin la más mínima interrupción. La República dependía de largas rutas marítimas desde la Unión Soviética, y los submarinos italianos hundieron una serie de cargueros que transportaban suministros soviéticos. Las fuerzas del general Franco siempre contaron con la zona costera que estaba en manos de los nacionalistas, y con la vía terrestre a través de Portugal. La frontera francesa se cerró para la República a mediados de agosto de 1936. Continuó un pequeño contrabando de armas, y los voluntarios internacionales siguieron cruzando los Pirineos, pero la frontera sólo se abrió en el período de marzo a mayo de 1938, para que pudieran atravesar los nuevos aviones y armamento soviéticos (gracias a los cuales la República pudo lanzar la ofensiva del Ebro tres meses más tarde). Los nacionalis-

tas podían contar con suministros regulares de gasolina, equipo de comunicaciones, y piezas de recambio para los vehículos y las armas alemanes e italianos. La República nunca sabía si las municiones compradas a precios exorbitantes en el mercado negro europeo encajarían en su amplia gama de fusiles y ametralladoras, y la extrema irregularidad de las importaciones de petróleo significaba que nunca sabían con seguridad con cuánto combustible contaban. Los nacionalistas disfrutaban de unas relaciones económicas basadas en la confianza y el mutuo respeto con sus suministradores de los países del Eje, Inglaterra y los Estados Unidos, y a veces incluso podían jugar con la competencia entre ellos. La República dependía casi por completo de un gobierno soviético suspicaz, que cobraba caro, y cuyo compromiso con la República nunca fue tan claro y firme como el de Alemania, Italia y Portugal con los nacionalistas. Por lo tanto, es perfectamente comprensible —aunque se admita la casi paridad, sobre el papel, de la ayuda extranjera a los dos bandos— que los nacionalistas disfrutaran de una superioridad material aplastante en casi todas las acciones militares de la guerra.

Para hablar sólo de un ejemplo concreto de la nueva investigación sobre la intervención extranjera desde el punto de vista cuantitativo, mencionaré la importante labor que ha hecho Jesús Salas Larrazábal en los archivos militares españoles. En *Intervención extranjera en la guerra civil de España* (Editora Nacional, Madrid, 1974) hace una lista de las siguientes cifras totales de aviones importados: 656 italianos, 593 alemanes y 750 rusos (más unos 250 aviones construidos bajo la dirección de técnicos rusos en Sabadell y Reus). Además, la República recibió unos 300 aviones variados, excedentes en su mayoría, la mitad franceses y la mitad de otros países europeos y de los Estados Unidos. Unos 100 de éstos nunca entraron en acción, y de todos modos no puedo tomarlos en serio desde un punto de vista militar porque no tenían la capacidad de cargamento ni de combate suficiente

para competir con los aviones alemanes, italianos y rusos. Respecto al número de aviones italianos también vale la pena señalar que el estudio sumamente cuidadoso de John F. Coverdale, *Italian intervention in the Spanish civil war* (Princeton University Press, 1975) afirma (p. 409) que Italia envió más de 750 aviones a la España nacionalista, es decir, 100 aviones más que los de Salas Larrazábal. Así, pues, todavía no tenemos cifras totales exactas en lo referente a los aviones, pero, suponiendo que las cifras de Salas sean aproximadamente correctas, por lo menos en cuanto a las proporciones, estas cifras indicarían que la cifra total de aviones alemanes y rusos fue sustancialmente mayor, y la cifra total de aviones italianos algo menor de lo que yo creía cuando escribí el libro hace doce años, después de que se me negara el acceso a los archivos militares españoles. Por ejemplo, al describir el total de las fuerzas nacionalistas en vísperas de la ofensiva de la primavera de 1938 (p. 354), yo decía que contaban con 700 aviones italianos y 250 alemanes. Las cifras de Salas Larrazabal para marzo de 1938 son de 400-500 aviones italianos y 400 alemanes. Del mismo modo, el aumento en el número de aviones rusos significa que, así como entonces (p. 393) yo hablaba de 100 aviones al comenzar la ofensiva del Ebro, ahora calcularía unos 300. En cuanto a la guerra vista en su conjunto, las cifras de Salas siguen dando a los nacionalistas una ventaja numérica sustancial en lo referente a aviones útiles (1.249 alemanes e italianos frente a 1000 rusos y diseñados por rusos), pero de hecho sus datos no son tan precisos como puede parecer a sus lectores. En la página 426 dice que, durante el segundo y el tercer trimestres de 1937, llegaron a España 95 Ratas, 31 Katiuskas y 62 Natachas (188 en total). Pero en la tabla acumulativa de la página 429 dice que los 95 Ratas y los 31 Katiuskas llegaron durante el segundo y el tercer trimestres de 1938, no de 1937. En la página 424 dice al lector que no hay información directa del número de aviones enviados desde Rusia durante el segundo y el tercer trimestres de

1937, pero que, además de la información obtenida por el agregado militar alemán en Ankara, hay datos sobre el número de aviones rusos de servicio en el verano de 1937. En la página siguiente da unas cuantas cifras, pero la única que se refiere de una forma clara y específica a aviones de servicio en julio de 1937 es una referencia a seis escuadrillas de Natachas, con un total de 72 aviones. De las demás cifras de la página puede deducirse que quizás había otros 80 o 100 aviones rusos de servicio durante el verano de 1937, pero desde luego las cifras y las fechas no dan al lector unos totales numéricos claros. Así, pues, la obra de Salas Larrazábal es muy importante porque indica que el número de aviones alemanes y rusos era mayor de lo que pensábamos antes, pero todavía queda por hacer mucho trabajo numérico cuidadoso.

La segunda área en la que mis cálculos cuantitativos serían diferentes si escribiera hoy es la del total de muertes atribuibles a la guerra civil. En el Apéndice D, yo calculaba que podían atribuirse unas 580.000 muertes directamente a la combinación de guerra, enfermedades y represión. Ahora creo que sobrevaloré el total de muertes. He dejado el apéndice tal como lo había escrito en un principio por dos razones: primero, porque la base de mis juicios cualitativos sigue siendo la misma, y segundo, para que los lectores puedan comparar plenamente mi exposición original con mi actual revisión. En la pasada década, los estudios demográficos han sido mucho más detallados y matizados que antes. Mi cálculo se basaba principalmente en mis lecturas de Jesús Villar Salinas y Elena de la Souchère. Después estudiar la obra de Jordi Nadal, *La población española* (Ariel, Barcelona, 3.ª edición, 1973), y de hablar de la cuestión con varios demógrafos españoles llegué a la conclusión de que el número total de muertes debió de ser del orden de las 300.000 o 400.000. Dejo un amplio margen de aproximación por varias razones además de las que ya daba en el apéndice original. En primer lugar, el censo de 1940

es muy poco fiable. Puede que sobrevalorara las dimensiones de la población en unos 200.000 o 300.000 habitantes simplemente porque muchas de las cifras se basan en el número de cartillas de racionamiento distribuidas después de la guerra, y este número frecuentemente se hinchaba para conseguir más raciones de comida para los miembros de una familia o los empleados de la cantina de una fábrica. Además son poco fiables puramente por la falta de personal preparado, y por lo incompleto que era el registro de defunciones. Muchos críticos de mi obra han insistido en que hay listas completas, «con nombres y apellidos», tanto de las bajas en el campo de batalla como de las ejecuciones en retaguardia, pero yo considero que esta afirmación es totalmente increíble. Ni siquiera los alemanes, con su famosa obsesión por el detalle y la eficacia, tenían registros completos de todos los enemigos que fusilaban ni de todas las personas que morían en sus campos de concentración. Aunque rechazo los cálculos mínimos basados en el uso del censo de 1940 junto con las listas gubernamentales, obviamente incompletas, he reducido en un 50 por ciento mi cálculo original del número de ejecutados en represalia por los nacionalistas, y lo he hecho por las siguientes razones: 1) porque los estudios demográficos calculan un máximo de unas 400.000 muertes en vez de las 580.000 que calculé en 1964; 2) porque tal vez la mitad o más de las sentencias de muerte firmadas entre 1936 y 1944 no se ejecutaron, sino que se conmutaron por condenas de veinte o treinta años de trabajos forzados. Todo esto no altera el carácter devastador que, desde un punto de vista cualitativo, tuvo la represión nacionalista. Está, por ejemplo, el estudio sumamente detallado de Ian Gibson, *La represión nacionalista de Granada en 1936 y la muerte de Federico García Lorca* (Ruedo Ibérico, París, 1971), en el que el autor llega a la conclusión (pp. 137-138) de que sólo en la ciudad de Granada (con 155.000 habitantes) los nacionalistas ejecutaron a unas 4500 personas durante los primeros meses de la guerra. A pesar de todo, teniendo

en cuenta principalmente la evidencia demográfica, estoy convencido de que las cifras que utilicé eran demasiado altas. Un comentario más sobre mis nuevos cálculos. Creo que tal vez di una cifra demasiado pequeña, 20.000 (p. 457), al hablar del número de muertes ocurridas en las campañas del norte, de Aragón, Extremadura y los «frentes tranquilos» en general.

Teniendo en cuenta todo lo anterior, ofrezco los siguientes cálculos revisados que el lector puede comparar con los de la página 466 del Apéndice D:

mínimo	*máximo*	
100.000	125.000	muertes en el campo de batalla
10.000	10.000	muertes por bombardeo aéreo
50.000	50.000	enfermedades y desnutrición
20.000	20.000	represalias políticas, zona republicana
150.000	200.000	total de represalias y ejecuciones nacionalistas, 1936-1944
330.000	405.000	

Al mismo tiempo, es importante que el lector sepa que, incluso mis cálculos revisados, son muy diferentes de los que ofrecen los historiadores nacionalistas. A este respecto, lo mejor que se me ocurre es transcribir un párrafo del *Boletín de Orientación Bibliográfica* (n.º 100, Madrid, diciembre de 1974, p. 26): «Si se habla de la posguerra, la postura del señor Jackson raya en el delirio. Aquí se apoya en testimonios tan fiables como el de Elena de la Souchère que basa sus estimaciones en las estadísticas oficiales de las muertes violentas en los años inmediatamente posteriores al final de nuestra guerra, con lo que nuevamente nos demuestra el señor Jackson que no ha leído a Villar, pues de haberlo hecho sabría que este autor ya reconocía que su cifra de 173 731 muertos en la guerra, señalaba un mínimo, pues faltaban en ella todas las defunciones producidas y no registradas, entre las que se encontraban la mayoría de "los paseados", y muchos de los muer-

tos en campaña que militaban en fuerzas radicadas en territorios distintos del de su residencia habitual. Son todas estas defunciones las que van registrándose a partir del año 39, a medida que sus deudos obtienen el reconocimiento legal de defunción. Así se llega a ese promedio de 3283 defunciones violentas en el año 40, que decrece posteriormente de manera muy sensible, aunque sigue manteniéndose alta hasta el año 45. Añadidas todas estas defunciones a las indicadas por el señor Villar para el período 1936-39 llegaríamos a un total de 229 051 muertes ocasionadas por la guerra, entre 1936 y 1945, ambos inclusive. Remitimos al señor Jackson al anuario de 1951 del I. N. E. En esta cifra están incluidos, naturalmente, los muertos de la División Azul y muy probablemente los que cayeron luchando en las filas aliadas. Por tanto, puede tener la certeza el señor Jackson que la cifra total de muertos en nuestra guerra, incluida la posguerra, no pasó de la cifra de 250.000».

Me gustaría repetir aquí lo que escribí en el mismo número de dicho Boletín (pp. 8-9): «En 1951, treinta y siete años después del comienzo de la primera guerra mundial, por fin fue posible que un grupo de estudiosos franceses y alemanes redactara una declaración conjunta analizando las responsabilidades del comienzo de la guerra. Quizá llegue pronto el momento en que un grupo de historiadores nacionalistas y republicanos puedan analizar libre y plenamente toda la evidencia disponible y hacer un cálculo mutuamente aceptable del total de las ejecuciones políticas».

Por último, me gustaría agradecer los añadidos y las correcciones que debo a las cartas o conversaciones con los siguientes amigos y colegas: profesores Stanley Payne y Edward Malefakis, señor Antonio Ramos Oliveira, señor George Hills, señor Herbert Southworth; también quiero agradecer una beca del comité de investigación de la Universidad de California, que me permitió consultar documentos y personas en Madrid acerca de las

controvertidas cuestiones de la intervención extranjera y del número total de muertes.

G. J.
Universidad de California, San Diego.
La Jolla, California 92093.
Mayo de 1976

PRÓLOGO

EN la época en que tuvo lugar, la guerra civil española compendió para el mundo occidental el enfrentamiento de la democracia, el fascismo y el comunismo. Toda una generación de ingleses y americanos se sintió más profunda y emocionalmente envuelta en aquella guerra que en cualquier otro acontecimiento mundial de su vida, incluyendo la segunda guerra mundial. En Europa, sus «lecciones», tal como fueron interpretadas por los participantes de tantas nacionalidades, jugaron un papel muy importante en la política, tanto de Europa occidental como de las democracias populares. En todo el mundo occidental, los lectores de historia han notado el paralelismo entre la República española de 1931 y los gobiernos revolucionarios que existieron en Francia y Europa central durante el año 1848. La sublevación de Asturias en octubre de 1934 recordó a participantes y observadores la Comuna de París de 1871 y aun los observadores políticos menos sofisticados pudieron ver en la España de 1936 todos los conflictos ideológicos y de clases que caracterizaron la Francia revolucionaria de 1789 y la revolucionaria Rusia de 1917.

Por lo tanto, no es de sorprender que los mejores libros sobre la guerra civil española hayan recalcado sobre todo sus repercusiones internacionales y discutido sus crisis políticas de acuerdo con el vocabulario de las revoluciones francesa y rusa. Muy pocos de los participantes extranjeros se dieron cuenta de que la guerra civil debía su origen a circunstancias específicamente es-

pañolas. Pocos de ellos conocían la historia de la segunda República española, que en los cinco años anteriores a la guerra tuvo que vérselas con los problemas de lo que ahora se llama una «nación subdesarrollada». Un George Orwell, un Pietro Nenni, un Gustav Regler, un André Malraux, comprendieron los sucesos en términos de evidentes analogías con las situaciones contemporáneas en Inglaterra, Italia, Alemania y Francia. Como eran observadores inteligentes y de gran formación literaria, su interpretación de la guerra civil ha quedado fuertemente coloreada por sus impresiones y por las de otros escritores extranjeros.

En la presente obra he tratado de exponer la historia de la segunda República y de la guerra civil, en primer lugar tal como fue vista dentro de España. A este respecto me he basado en gran parte en memorias y en la prensa española libre y políticamente diversa de 1931 a 1936. Para los sucesos en provincias durante la época republicana, y para muchos aspectos de la guerra civil, he añadido a mis fuentes impresas el suplemento de las entrevistas. En España tuve la oportunidad de sostener serias y largas conversaciones con más de 120 personas que vivieron todo el período que yo estaba estudiando. Algunas de estas conversaciones lo fueron con destacadas figuras políticas; pero la mayoría de ellas, por mi propia elección, lo fueron con funcionarios civiles, militares y profesionales, así como con testigos escogidos al azar, muchos de los cuales no tenían compromisos políticos (pasados o presentes, ni prestigios públicos que defender). Traté que todas esas conversaciones fueran lo más escuetas posible. Si mi interlocutor era un médico, le hacía preguntas sobre el estado de los hospitales, suministro de medicamentos y problemas sanitarios públicos en las ciudades donde había vivido o en los frentes de batalla donde había servido. Si se trataba de un funcionario municipal, le preguntaba sobre huelgas, manifestaciones políticas y programas de obras públicas que él conociera por experiencia personal.

Había dos preguntas que yo formulaba siempre, porque forzosamente debían constituir una parte principal en los recuerdos de todos y porque eran cruciales para la comprensión de aquel período de ocho años. Siempre preguntaba hasta qué punto el mantenimiento del orden público había sido un problema y de qué manera había sido perseguida la Iglesia. Estas conversaciones modelaron en grado considerable mis preocupaciones al escribir. Casi siempre, me encontraba con que mi interlocutor me preguntaba por qué había fracasado la República y por qué los españoles no podían vivir en paz entre sí. Tales preguntas me las hizo con frecuencia gente que había luchado en bandos opuestos, y tanto personas que apoyan al régimen actual como otras que lo odian. Inquirí esto como cosa mía, especialmente puesto que la experiencia española puede arrojar mucha luz sobre las dificultades de las democracias de estilo occidental en la América latina y sobre las relaciones entre los poderes civil y militar en todo el mundo.

Deseo expresar mi agradecimiento a todos los que me ayudaron en mi trabajo. El Social Science Research Council y la Comisión para los intercambios culturales entre España y los Estados Unidos me otorgaron las becas que me permitieron dedicarme a la preparación de este libro durante los años académicos 1960-62. El profesor Jacques Godechot, de la Universidad de Toulouse, junto al cual trabajé como alumno graduado; el profesor Pierre Vilar, de la École des Hautes Études de París, y mi querido amigo y colega del Wellesley, el poeta Jorge Guillen, me ayudaron grandemente presentándome personalmente y haciéndome sugestiones bibliográficas; otro tanto hizo el profesor Jaume Vicens i Vives, de la Universidad de Barcelona. El doctor Howard Cline, director de la Hispanic Foundation de la Biblioteca del Congreso, y los profesores C. J. Bishko, de la Universidad de Virginia, y Lewis Hanke, de la de Columbia, tomaron la iniciativa de insistir ante los comités de becas que ya había llega-

do el momento de intentar un estudio erudito de la República española y la guerra civil. Mientras investigaba en Francia, me presentaron a mi consideración los más intrincados problemas mis amigos Tomás y Antonio Querol, Ricardo y Olga Hernández Alvariño y la hispanista francesa Marie Laftranque. También deseo agradecer la amabilidad de Mme. Elena de la Souchère, al permitirme consultar sus valiosas notas, aún no publicadas, sobre distintas fases de la historia de la República.

Las subvenciones que me concedieron el American Council of Learned Societies y el Knox College Faculty Research Fund me facilitaron grandemente que pudiera completar y revisar mi trabajo. Debo valiosas correcciones al profesor Juan Linz, de la Universidad de Columbia, y muchas sugestiones útiles en la preparación final del manuscrito a dos licenciados en Historia, de Knox, Mr. Thomas Schmidt y Miss Jo Ann Ooiman. Mi esposa Elizabeth compartió conmigo el entusiasmo que hace que esta obra sea tan espiritualmente suya como mía. En cuanto a la ayuda que me concedieron docenas de españoles, dedicándome su tiempo y otorgándome su confianza, aun con cierto riesgo para ellos, sólo puedo agradecerla con el propio libro, con la esperanza de que les parecerá una historia verídica de aquellos años, primero esperanzados, luego trágicos, que ellos vivieron.

Gabriel Jackson.
Knox College, Galesburg, Illinois.
Enero de 1964

ORGANIZACIONES Y TÉRMINOS POLÍTICOS

Acción Española: Organización de intelectuales monárquicos, tanto carlistas como alfonsinos, que publicaban un periódico de ese nombre.

Acción Popular: Organización política que defendía los derechos de la Iglesia contra la legislación laica.

Acción Republicana: Partido de Manuel Azaña, fusionado en 1934 con otros pequeños partidos y conocido desde entonces como Izquierda Republicana.

Agrupación al Servicio de la República: Grupo político creado por José Ortega y Gasset, Ramón Pérez de Ayala, Marañón y otros intelectuales.

CEDA: Confederación Española de Derechas Autónomas; federación de pequeños partidos derechistas agrupados en las Cortes bajo la dirección de José María Gil Robles, de signo católico y no comprometido respecto a la forma de régimen.

Checas: Tribunales irregulares formados por los diversos partidos de extrema izquierda en el verano de 1936.

CNT: Confederación Nacional del Trabajo; federación sindical de los anarquistas.

Carlistas: Partidarios de la rama carlista de la familia real, muy fuertes en Navarra y en ciertas comarcas de Levante y que aspiraban a una monarquía tradicionalista y católica contra la

monarquía liberal de 1875-1923. Su nombre oficial era Comunión Tradicionalista.

Casa del Pueblo: Centro de trabajadores con biblioteca pública y salas de reunión. Las más numerosas eran las del partido socialista, así como las más importantes como centros políticos y educativos.

CRI: Cruz Roja Internacional, enteramente de personal suizo.

CTV: Corpo Truppa Volontaria; tropas italianas que lucharon en España desde principios de 1937 hasta el final de la guerra.

Esquerra: Izquierda catalana, dirigida por Luis Companys y que por su carácter político correspondía a las fuerzas Azaña-Prieto en Madrid.

Euzkadi: Nombre medieval del País Vasco, que luego fue empleado por el movimiento nacionalista vasco.

FAI: Federación Anarquista Ibérica; organización de idealistas y hombres de acción de significación ácrata.

Falange Española: Pequeño partido político de inspiración fascista, fundado y dirigido por José Antonio Primo de Rivera de octubre de 1933 a julio de 1936.

Falange Española Tradicionalista y de las JONS: Fusión de la Falange y los carlistas en abril de 1937, para formar la única organización política autorizada en la España nacionalista, bajo la jefatura del general Franco.

Generalitat: Gobierno autónomo de Cataluña según el Estatuto otorgado en septiembre de 1932.

Izquierda Republicana: Originada en la fusión de las fuerzas de Azaña, Marcelino Domingo y Casares Quiroga a principios de 1934; dirigida por Manuel Azaña.

JAP: Juventud de Acción Popular; organización juvenil de la CEDA.

JONS: Juntas de Ofensiva Nacional-Sindicalista; pequeño partido de militantes fascistas con sede en Valladolid, fusionado con la Falange a principios de 1934.

JSU: Juventud Socialista Unificada; grupos juveniles socialistas y comunistas fusionados en abril de 1936.

Lliga Catalana: Partido conservador catalán dirigido por Francisco Cambó.

NKDV: Iniciales de la policía secreta soviética (también llamada GPU).

Partido Radical: Fundado y acaudillado por Alejandro Lerroux.

Paseo: Eufemismo: asesinato político cometido por terroristas incontrolados.

PC: Partido Comunista.

Pistolero: Se aplicaba a los terroristas a sueldo contra los huelguistas o en las luchas intersindicales de la UGT, la CNT y los comunistas.

POUM: Partido Obrero de Unificación Marxista; pequeño partido comunista antiestalinista importante en Lérida, dirigido por Andrés Nin y Joaquín Maurín.

PSOE: Partido Socialista Obrero Español.

PSUC: Partido Socialista Unificado de Cataluña, nacido de la fusión de los partidos socialista y comunista de Cataluña en la primavera de 1936.

Renovación Española: Partido monárquico alfonsino dirigido por Antonio Goicoechea y José Calvo Sotelo.

Requetés: Unidades de milicias carlistas.

UGT: Unión General de Trabajadores, confederación obrera de orientación socialista.

UHP: Unión de Hermanos Proletarios; slogan de los mineros asturianos en octubre de 1934 y símbolo de la esperanza en la unión de la clase obrera.

UME: Unión Militar Española; organización de militares opuestos a las reformas de Azaña, que conspiró durante la primavera de 1936.

UMRA: Unión Militar Republicana Antifascista; fundada a principios de 1936 para combatir a la UME.

Unión Republicana: Partido de Martínez Barrio tras su ruptura con Lerroux en el verano de 1934.

Capítulo 1

ANTECEDENTES DE LA REPÚBLICA ESPAÑOLA

La República española de 1931 nació de una serie de circunstancias especialísima: una larga crisis política, la conjunción de problemas económicos internos con la depresión mundial y un renacimiento intelectual de gran vigor y optimismo. Otro modo de explicar la situación es decir que España era en 1930, simultáneamente, una monarquía moribunda, un país de desarrollo económico muy desigual y un campo de batalla de ardientes corrientes políticas e intelectuales contrarias. Cada uno de estos elementos debe ser comprendido, tanto por separado como en su mutua relación. Sin embargo, al determinar la forma republicana del nuevo régimen, la crisis política fue el factor primario, y por lo tanto me referiré en primer lugar a los antecedentes políticos de la República.

Desde los tiempos de Fernando e Isabel hasta la época de Napoleón, la conciencia y la unidad nacional del pueblo español estuvieron indisolublemente unidas con la institución de la Monarquía. Esto fue un factor constante, a pesar del carácter débil de muchos reyes y de las luchas dinásticas involucradas en la guerra de Sucesión a la corona de España a principios del siglo XVIII. Pero tras la muerte de Fernando VII, en 1833, comenzó una guerra civil entre los partidarios de su hija menor de edad, la futura reina Isabel II, y los partidarios del hermano del fallecido

rey, don Carlos de Borbón. Pero subyacente a la pugna dinástica y a la insurrección carlista estaba la más profunda cuestión del papel que debía desempeñar la Monarquía española. ¿Había de saludar el desarrollo del capitalismo, centralizar y unificar sus métodos de gobierno, permitir una cierta libertad universitaria y de prensa y aprovecharse de las riquezas acumuladas por la Iglesia…, cosas todas ellas ocurridas en Francia? ¿O debería reafirmar la Monarquía el carácter exclusivamente católico, predominantemente agrario y la descentralización de la España tradicional? Los sucesivos gobiernos isabelinos lograron contener a las fuerzas carlistas; pero aún hubo chispazos de guerra civil después de que se lograra la paz general en 1840. Los problemas fundamentales jamás fueron resueltos. La reina, ya de mayor, resultó ser una mediocridad lasciva, y la coincidencia de su carácter con la siempre latente guerra civil produjo tres graves resultados: la persona del monarca dejó de inspirar respeto; la Monarquía como institución ya no era el símbolo de la unidad nacional, y, lo más importante, el Gobierno se vio obligado a depender enteramente de los generales que salvaron de los carlistas el trono de Isabel. Entre 1833, en que comenzó la guerra carlista, y 1875, en que se instauró la Monarquía constitucional, el ejército español dirigió los destinos políticos del país. El único medio de cambiar de Gobierno era el *pronunciamiento*[2] una repentina sublevación de un general, de común acuerdo, relativamente poco sangrienta y en torno al cual se agrupaban las fuerzas de la oposición como única esperanza de cambio.

En 1868, Isabel II fue destronada como consecuencia de uno de tales pronunciamientos. En los siete años siguientes, la nación experimentó una Monarquía liberal bajo un consciente aunque no muy fuerte príncipe italiano, Amadeo de Saboya, y una primera República de corta duración en la cual se sucedieron cuatro presidentes en menos de un año. Dadas las circunstancias existentes, ni una nueva dinastía ni una República estaban en condi-

ciones de establecer su autoridad, su «legitimidad». Al mismo tiempo, se hizo evidente que nadie volvería a aceptar el absolutismo irresponsable, señalado por pronunciamientos, que había sido característico de las décadas anteriores a 1868.

Un capacitado estadista conservador, Cánovas del Castillo, logró hallar una solución práctica al inmediato problema. Cánovas creía que sólo se podía considerar a la dinastía de Borbones como legítima fuente de autoridad en España. Pero al mismo tiempo estaba convencido de que la paz civil dependía de que hubiera al menos cierta libertad y de que el ejército dejara de tener un papel predominante en la escena política. Era un gran admirador de la Monarquía británica; pero, asimismo, creía que el período 1868-1874 había demostrado ampliamente que los españoles no estaban preparados para tal grado de autogobierno como el que existía en Inglaterra. Gozando de la total confianza de la familia real en el destierro, obtuvo asimismo el suficiente respaldo militar, de modo que un afortunado pronunciamiento en Sagunto, en diciembre de 1874, restauró la Monarquía de los Borbones en la persona de Alfonso XII.

La Constitución de 1876 fue obra personal de Cánovas. Bajo ésta, España poseía unas Cortes elegidas. En tales Cortes existía una auténtica libertad de palabra, se podían formar partidos políticos independientes y, en general, la prensa disfrutaba de la mayor libertad. Sin embargo, las Cortes no eran ni mucho menos un organismo gobernante responsable semejante al Parlamento británico. El presidente del Consejo de ministros era libremente nombrado y retirado por el rey y la iniciativa legisladora era casi enteramente una prerrogativa real. Las limitaciones al sufragio y el hábito de contar los votos de antemano, privaron a las elecciones de todo significado real hasta principios del siglo XX. Gobernadores y alcaldes eran nombrados más bien que elegidos y la política rural era controlada por jefes locales llamados caciques, según la palabra india que designaba a los jefes indígenas de

América a través de los cuales los españoles gobernaron sus colonias del Nuevo Mundo. La palabra es muy indicativa de la psicología política de la clase gobernante española. Habiendo perdido su imperio americano a principios del siglo XIX, seguían gobernando la España rural del mismo modo que otrora gobernaron a indios ingenuos e ignorantes.

Dos partidos bastante coherentes se desarrollaron bajo la Restauración: el Partido Conservador, dirigido por Cánovas, y el Partido Liberal, que se distinguió, principalmente, por su orientación más laica, bajo Sagasta. Un pacto informal, jocosamente conocido como *turno pacífico*[3], existía entre Cánovas y Sagasta.

Por su iniciativa, con el consentimiento del rey y con la necesaria cooperación del ministro de la Gobernación, los caciques y la guardia civil, las elecciones eran amañadas de tal manera que se fueran alternando los dos partidos en el poder. Probablemente Cánovas intentaba que el sistema fuera evolucionando hacia una verdadera Monarquía constitucional, lo mismo que los *burgos podridos* y las arbitrarias prerrogativas de la Inglaterra del siglo XVIII habían evolucionado hacia un Gobierno parlamentario responsable. Pero un sistema de dos partidos con elecciones amañadas acabó por minar más que desarrollar el sentido de la responsabilidad política en España. Cada cambio de Gobierno suponía un gran relevo de funcionarios gubernamentales. Además de interferirse con la ya mediocre eficacia de los servicios públicos, esta versión española del «sistema de despojos» creó toda una nueva clase de funcionarios públicos sin empleo, los *cesantes*[4] que vivían de humildes empleos y de las migajas de las recomendaciones, esperando que de nuevo girara la rueda política.

En 1897 Cánovas fue asesinado por un anarquista y en 1898 España perdió los últimos jirones de su imperio ultramarino en una breve guerra contra Estados Unidos, Desde entonces, hasta 1917, los partidos Conservador y Liberal se desintegraron rápidamente. La Monarquía pareció incapaz bien de imponer su au-

toridad bajo el sistema existente o de evolucionar hacia instituciones genuinamente representativas. De nuevo el ejército, recientemente humillado en Cuba y en las Filipinas, se convirtió en un protagonista de la política española. El único campo de acción militar que le quedaba era el Marruecos español. El joven Alfonso XIII salvó el orgullo herido de sus oficiales asegurándose de que las Cortes les votaran sustanciosos presupuestos y siguió con gran interés las interminables operaciones de limpieza de enemigos en las montañas del Atlas. Por tres veces durante su reinado, el rey y el ejército se vieron bajo un ataque simultáneo. En 1909 una combinación de agitación anarquista y de protestas populares contra los fuertes reveses en Marruecos condujo a la famosa «Semana Trágica» de Barcelona. Los terroristas anarquistas arrojaron bombas y provocaron incendios y, posteriormente, el intelectual y educador anarquista Francisco Ferrer fue ejecutado por su «responsabilidad moral». En 1917, a continuación del desplome de la autocracia zarista en Rusia, hubo una serie de huelgas revolucionarias, claramente dirigidas contra la Monarquía. El ejército, como apóstol del orden, acabó con las huelgas y salvó al trono. En 1921 una desastrosa derrota en Marruecos provocó una investigación parlamentaria y el rey quedó implicado personalmente en la catástrofe militar. A fines de 1923 los continuos cambios de gobiernos de coalición quedaron paralizados y la Monarquía pareció estar al borde del colapso. De nuevo otro golpe militar, esta vez por el general Miguel Primo de Rivera, libró temporalmente del peligro a la Monarquía, por última vez.

Primo de Rivera era un hombre dotado de gran inteligencia y de instintos generosos. Supo tratar con éxito los agudos problemas militares de Marruecos; estimuló las obras públicas y el desarrollo industrial, y, en contraste con Mussolini, respetó las organizaciones obreras socialistas. Pero, con su subida al poder, España perdió la gran libertad intelectual y las ligeras libertades

parlamentarias que había logrado desde 1875. La corrupción, la ineficacia y la influencia militar en la política se extendieron rápidamente. El régimen fuertemente personal de Primo de Rivera duró a través de los prósperos años veinte; pero cuando la depresión mundial alcanzó a España en 1929, el rey Alfonso, siempre hábil, aunque nunca generoso, se libró de Primo de Rivera. Durante quince meses poco gloriosos, el rey experimentó con otro dictador militar, el general Berenguer, y con varios «gobiernos de concentración». El 12 de abril de 1931, unas elecciones municipales en las ciudades importantes (las únicas elecciones que no fueron falseadas en la España de la época) mostraron una fuerte tendencia antimonárquica. Las discretas averiguaciones hechas por el rey le indicaron que el ejército no estaba dispuesto a tomar las armas para salvarle como en 1917. En uno de los episodios más dignos de su reinado, Alfonso XIII decidió abandonar rápidamente España. La República fue proclamada en las calles de Madrid durante las mismas horas en que él tomaba esa decisión.

Aun en un bosquejo tan rápido de la historia política que precedió a 1931, queda claro que la Monarquía de los Borbones había perdido su autoridad y una gran parte de su prestigio sentimental sobre el pueblo español. Cuando preguntamos por qué la Monarquía constitucional fue incapaz de conservar su autoridad, por qué temió verdaderamente convertirse en una Monarquía parlamentaria, por qué en 1917 pareció no haber un terreno intermedio entre una revolución social con todas las consecuencias y una dictadura militar, nos aproximamos a los más profundos problemas de la vida española a finales del siglo XIX y en el siglo XX.

Los críticos problemas de España proporcionaron la segunda serie de factores subyacentes a la revolución de los años treinta. La gran mayoría del pueblo dependía de la agricultura para vivir; pero sólo en la periferia norte y mediterránea de la península-

la existen condiciones geográficas y sociales favorables para la agricultura. En Galicia, la estrecha faja de las provincias al norte de la Cordillera Cantábrica, y en el País Vasco, las lluvias son abundantes y el suelo satisfactorio, si no rico. Los campesinos o bien poseen sus tierras o trabajan en ellas en arriendos a largo plazo con arrendamientos pequeños. La mayor parte del territorio es demasiado montañoso para el uso de maquinaria; pero los campos están ocupados por prósperas fincas con cultivos, prados y huertos, A lo largo de la costa mediterránea de Cataluña y las provincias de Levante, los huertos, viñedos, arrozales, olivares, naranjales y limonares florecen espléndidos. La lluvia es escasa. Sin embargo, Cataluña está regada por el Ebro y sus muchos afluentes que descienden de los Pirineos. Más hacia el sur, antiguos tribunales de aguas en los comunes de Levante regulan los intrincados sistemas de riego en las provincias de Valencia y Alicante. Aquí, como a lo largo de la costa norte, la tierra está bastante repartida. El clima soleado y el cuidadoso empleo del agua disponible hacen de esta costa mediterránea la zona agrícola más próspera de España.

Estas regiones favorecidas constituyen menos del 10 por ciento de la superficie del país. La España central está formada en gran parte por una gran *meseta*[5] que abarca León, Castilla la Vieja y Castilla la Nueva y grandes zonas de Aragón y Extremadura. Una áspera tierra de viento y sol, de sierras dramáticas, de fina capa de tierra cultivable y lluvias escasas. Dondequiera que haya agua, hay fincas bien cultivadas y frondosas fincas de álamos. Pero gran parte de estas tierras están desnudas y solitarias. La región más meridional, Andalucía, posee todos los requisitos naturales para una agricultura próspera: pero en esta zona, la historia, los prejuicios de raza, el absentismo de los terratenientes y los errores económicos del siglo XIX se combinaron para producir una ponzoñosa contextura social. Ésta fue la porción de España más largo tiempo dominada por los árabes, y hasta finales de la

Edad Media fue la parte más rica del país. Cuando la Reconquista avanzó rápidamente en los siglos XII y XIII, los reyes de Castilla distribuyeron enormes extensiones de tierra (junto con la población que las trabajaba) a las órdenes militares y a los principales jefes guerreros. Desde aquellos tiempos esas enormes fincas se han perpetuado y una clase dominante castellana de guerreros y descendientes de guerreros vivió gracias al trabajo de una despreciada masa de campesinos semibereberes, con frecuencia musulmanes.

Esta forma de propiedad de la tierra, el sistema de los *latifundia*, permaneció inmutable hasta el siglo XIX, en cuyo tiempo los principios del capitalismo y la influencia de la doctrina económica liberal alteraron la situación. Los liberales deseaban reducir el poder institucional de la Iglesia y también creían que los latifundios eran antieconómicos. En 1837 un ministro liberal decretó la desamortización de las propiedades pertenecientes a las órdenes religiosas. Las tierras fueron puestas en venta, esperando impulsar el desarrollo de una clase de pequeños agricultores independientes que constituyeran, como en Francia, el elemento principal de la sociedad. Pero las tierras fueron compradas por las únicas personas que tenían dinero para comprarlas: un grupo relativamente pequeño de negociantes y ricos terratenientes. Así, a finales del siglo XIX la propiedad de la tierra estaba quizá más concentrada que en los siglos anteriores.

El rápido aumento de la población durante los siglos XIX y XX tuvo varios importantes efectos sobre la agricultura española. El desarrollo de las zonas industriales en Cataluña y Bilbao y de la capital, Madrid, proveyó de mayores mercados a los agricultores de estas regiones. La elevación del nivel de vida europeo y las disponibilidades de transporte condujeran a un gran aumento en las exportaciones de vinos y frutos cítricos. Los agricultores de las ya prósperas provincias norteñas y mediterráneas, junto con

los nuevos propietarios-negociantes de Andalucía, fueron los principales beneficiarios de este desarrollo.

En Galicia, y en general a lo largo de la costa del Atlántico, donde las fincas ya eran pequeñas, el aumento de la población creó el problema de los minifundios, fincas tan subdivididas que no podían mantener a las familias que vivían en ellas. En cierto modo la presión demográfica fue aliviada por la emigración a las ciudades industriales y a América: pero la disponibilidad de tierras cultivables llegó a ser un problema muy grave en el Norte.

Otra respuesta al crecimiento de la población era el aumento de la producción de trigo comercial en la meseta central. Esto significaba la puesta en cultivo de nuevas tierras en una zona que ya sufría de escasez de agua. Los altos costos de producción trajeron la demanda de nuevos y pesados aranceles protectores, sin los cuales el trigo argentino o norteamericano habría sido más barato en Madrid que el de Castilla. En las décadas que precedieron a 1931, el Gobierno escogió proteger de modo creciente a los cultivadores de trigo a expensas del consumidor español. El alto precio del pan representaba un obstáculo permanente para elevar el nivel de vida y los aranceles trigueros animaban a la antieconómica utilización de miles de acres de tierras esteparias.

Sin embargo, para la conciencia de los españoles, más importante que el problema de los minifundios o de la antieconómica producción de trigo era el número cada vez mayor de braceros sin tierra en Andalucía. Hacia 1900, los gobiernos monárquicos, tanto liberales como conservadores, reconocieron la gravedad de la cuestión agraria. Se hicieron estadísticas de población y de tierras, presumiblemente con vistas a iniciar una reforma agraria gradual y compensada. Pero tras la confección de ese censo no se llevó a efecto ningún cambio. Mas el pueblo de la España central y septentrional llegó a darse cuenta de que en el Sur un creciente proletariado sin tierras arrastraba una miserable existencia, con apenas cuarenta días de pobre salario al año, y que enfermedades

debilitadoras minaban la salud de toda la población trabajadora, que los caciques eran los únicos que podían dar trabajo y que la guardia civil mantenía el orden como si fuera un territorio ocupado. En un país de clima ideal, tal situación no estaba justificada. En 1931, la cuestión de la reforma agraria en Andalucía era más importante que cualquier otra en la conciencia publica.

Sin embargo, la concentración exclusiva en las cuestiones agrarias ofrece un cuadro innecesariamente sombrío de la economía española. En las provincias periféricas de Cataluña y Vizcaya, el capitalismo comercial y la revolución industrial hicieron rápidos progresos. En Barcelona y sus suburbios se desarrolló una gran industria textil que abastecía España y los mercados hispanoamericanos. Las fábricas catalanas eran típicamente pequeñas empresas propiedad de una familia y utilizaban en general capital español. En Vizcaya, la industria siderúrgica y sus industrias afines, tales como la construcción naval y de locomotoras, se desarrollaron rápidamente a fines del siglo XIX. Aquí las industrias combinaban la gerencia y el capital locales con grandes inversiones extranjeras, principalmente británicas. Pero el capital y los técnicos propios estaban presentes en la suficiente medida en Bilbao, de modo que la industria vasca jamás estuvo subordinada de un modo colonial a los intereses del capital extranjero. La minería también se desarrolló rápidamente y el siglo XX vio el crecimiento de las industrias química y eléctrica, aunque éstas dependieron últimamente mucho más del capital y la tecnología extranjeros que las industrias que se desarrollaron primero.

Tanto la producción agrícola como la industrial se elevaron rápidamente de 1860 a 1914, con excepción de las crisis temporales que coincidían con las depresiones mundiales y de las secuelas de la guerra hispano-norteamericana. Las exportaciones de arroz, aceitunas y frutos cítricos también aumentaron rápidamente durante este período. La primera guerra mundial creó condiciones favorabilísimas para la neutral España. Pero la indus-

tria española no aprovechó sus beneficios de tiempo de guerra para modernizarse y renovar la maquinaria, y después de 1918, España fue incapaz de retener sus mercados adquiridos en el intervalo bélico ante la renovada competencia de potencias industriales mucho más adelantadas. Hacia 1920 ni la producción ni las exportaciones agrícolas o industriales mantuvieron su ritmo de crecimiento anterior a 1914. Además, casi desde el principio, las industrias españolas dependieron de los aranceles protectores más altos de Europa. Tales aranceles y la prosperidad mundial en los años veinte tendieron a oscurecer la ineficacia y los altos costos de producción de la industria española hasta la depresión de 1929.

Sin embargo, a pesar de su debilidad y de su concentración geográfica en dos provincias periféricas, la industria española daba oportunidades de empleo, producía artículos de consumo y elevaba lentamente el nivel de vida urbano en los setenta años que precedieron a 1931. En términos de desarrollo económico, la República advino en un momento en que España había alcanzado un considerable progreso industrial; pero también en un momento en que la marcha del progreso había estado declinando claramente desde hacía una década, aun antes de que ocurriera la peor depresión mundial de los tiempos modernos. Hay que añadir que la opinión pública española no estaba tan enterada de los problemas industriales como de la cuestión agraria.

Las décadas de desarrollo económico y demográfico fueron también testigos de un importantísimo renacimiento cultural en España, un período de logros en las artes y las ciencias comparable tan sólo en su esplendor al Siglo de Oro. Los novelistas Galdós y Pío Baroja; los filósofos Unamuno y Ortega y Gasset; los poetas Antonio Machado, Federico García Lorca, Vicente Aleixandre y Jorge Guillén; el compositor Manuel de Falla; los pintores Picasso, Miró y Dalí; los filólogos Menéndez Pidal y Américo Castro; los historiadores Menéndez y Pelayo y Claudio

Sánchez Albornoz; los médicos Ramón y Cajal y Gregorio Marañón, todos ellos figuras de primer rango en la civilización europea. Muchos críticos aseguran que ninguna nación puede vanagloriarse de haber tenido en el siglo XX una pléyade de poetas como España.

Las razones de tan extraordinario flujo de vitalidad cultural no pueden ser formuladas con exactitud; pero incluso una idea aproximada servirá para ilustrar los antecedentes de la revolución española. En la España de la Restauración se enfrentaron dos grandes corrientes intelectuales: el krausismo que era europeísta, liberal y de una orientación general laica, y un reavivado catolicismo, que obtenía su fuerza del pasado de España y de una reacción defensiva contra la rápida secularización de la civilización europea en el siglo XIX. La ideología de Krause, un filósofo alemán de principios del siglo XIX, influyó mucho en España a través de su discípulo, Julián Sanz del Río, que hacia 1850 expuso su versión libre de las doctrinas de Krause desde su cátedra de filosofía en Madrid. La fuerza del krausismo radica más en su perspectiva general filosófica y religiosa que en su coherencia técnica. Su principal doctrina, el «racionalismo armonioso», combinaba los elementos más optimistas de la Ilustración del siglo XVIII y del idealismo germano. Abrazaba a la vez la Razón y la Evolución. Los krausistas encomiaban las ciencias naturales como clave de la comprensión de la armonía intelectual del universo. Y se interesaban aún más por las nuevas ciencias sociales y la historia de las leyes. Si el universo era fundamentalmente armonioso, o al menos se desenvolvía en tal dirección, entonces la solución a las guerras carlistas y a la agitación revolucionaria de los campesinos sin tierra era buscar en el pasado humano las formas naturales de *convivencia* y revisar el sistema político-legal para conformarlo a tal convivencia. Los krausistas no eran teólogos pero muchos eran católicos practicantes y ninguno era ateo. Para ellos, el hombre era hasta ahora el más alto producto de la divina

inteligencia y el hombre, como el resto del universo, evolucionaba constantemente hacia la meta del racionalismo armonioso. Consideraban a la educación como el campo más importante de la actividad humana, y en 1876 Francisco Giner de los Ríos, profesor de leyes y discípulo de Sanz del Río, fundó lo que había de ser, hasta 1936, la escuela secundaria más influyente de España: la Institución Libre de Enseñanza. La escuela ideal debía animar la curiosidad intelectual a través del contacto informal de estudiantes con las mentes más brillantes y creadoras. Giner, un hombre de gran magnetismo y capacidad de organización, obtuvo la entusiasta colaboración de eminentes catedráticos universitarios. La educación debía inculcar el amor por la belleza y la naturaleza como manifestaciones de Dios. La Institución fomentaba las excursiones al campo y el estudio de la historia del arte. La educación debería formar al hombre y así se otorgaba la misma dignidad a las labores manuales y los oficios artísticos que a las realizaciones puramente intelectuales. La Institución publicaba un boletín en el cual eminentes científicos y literatos españoles discutían los progresos de sus trabajos y en el cual colaboraron figuras mundiales como Émile Durkheim, Bertrand Russell y John Dewey. Francisco Giner y sus colaboradores presionaron a los gobiernos monárquicos para que proveyeran abundantes becas para estudios de graduados en Europa y fueron así, en gran parte, los inspiradores de la creación de la Junta para Ampliación de Estudios, fundada en 1907 y que se mostró cada vez más activa hasta el estallido de la guerra civil en 1936. La influencia de la Institución fue preeminente en la formación de esa pléyade de científicos, filólogos, arqueólogos e historiadores de la España de este siglo.

La segunda gran corriente intelectual de la España de finales del siglo XIX fue el catolicismo. La Iglesia española extrajo fuerzas de su universalidad, de su larga lista de poetas y santos, de su magnífico ritual y de su identificación histórica con la Recon-

quista y la unificación de España. Pero el mismo poder de sus tradiciones le impedía ajustarse a las nuevas ideas. Los krausistas podían vanagloriarse de su eclecticismo, identificándose con lo mejor del pensamiento europeo, fuera cual fuera su origen o sus implicaciones teológicas. Los católicos tenían que asegurarse de que todo lo nuevo era compatible con los cánones establecidos. La preparación de historias y comentarios sobre un conjunto de escritos reverenciados no podía tener la audacia y el sabor del pensamiento original. El historiador católico Menéndez y Pelayo era un gigante intelectual; pero el renacimiento literario se produjo al margen de la Iglesia.

Los principales campos del resurgimiento católico fueron la acción social y la educación. Hasta la época de León XIII, la Iglesia había adoptado una posición puramente defensiva hacia las nuevas corrientes del siglo XIX. Pío IX condenó el liberalismo, el materialismo y el socialismo sin formular una respuesta positiva a los efectos de la revolución industrial. Estaba muy bien que se advirtiera a los fieles contra el error, pero ¿cómo iba a reaccionar la Iglesia ante tan brutal explotación del primitivo sistema fabril y las hacinadas e insalubres condiciones de vida en las zonas industriales? León XIII exaltó en 1890 el ideal de la justicia social como base de la acción política y social católica en la era industrial. Favoreció la creación de sindicatos católicos, de sociedades de seguros mutuos y de cooperativas de crédito rural. Las masas tenían derecho a una más equitativa distribución de la riqueza y no a la mera caridad y no se debía permitir que los socialistas monopolizaran tan justa demanda. La Iglesia debería asimismo desarrollar sus sistemas escolares y hospitalarios, para que estos campos propios de la actividad católica no cayeran totalmente en manos del estado secular.

El programa de León XIII obtuvo una importante y favorable respuesta en el norte de España y en Cataluña. Las leyes anticlericales francesas e italianas de esta época trajeron a España mu-

chas órdenes nuevas y como consecuencia, una expansión de los hospitales y colegios patrocinados por la Iglesia. Algunas de las órdenes dedicadas a la enseñanza, especialmente los maristas (de origen francés) y los salesianos (de origen italiano) introdujeron muchos métodos pedagógicos nuevos, más modernos que los empleados por sus congéneres españoles. Tanto la competencia de las escuelas krausistas como la incrementada rivalidad entre las órdenes tendió a mejorar la calidad de la educación católica.

La gran limitación de los esfuerzos culturales de los krausistas y de los católicos fue que benefició tan sólo a las clases acomodadas. Con muy pocas excepciones, los graduados de la Institución Libre y de los colegios con programa similar procedían de familias que ya poseían una considerable base económica y cultural. Muchas escuelas de la Iglesia concedían becas; pero la gran mayoría de sus estudiantes era originaria de la clase media tradicionalmente católica del norte de España y Cataluña.

Aunque el krausismo y el catolicismo eran las dos corrientes filosóficas más importantes entre la clase media española en su conjunto, había además varios movimientos regionales combinados de la clase media y el campesinado: el nacionalismo catalán, el nacionalismo vasco y el carlismo. Los movimientos catalán y vasco tenían mucho en común, porque ambos surgieron en zonas que disfrutaban de un nivel de prosperidad más alto del que era típico de la Península. Ambas regiones tenían lazos históricos con Francia y poseían una tradición lingüística propia, siendo las únicas zonas de España donde se había desarrollado la industria moderna.

En el siglo XIX los catalanes, como muchas otras de las pequeñas nacionalidades de Europa, redescubrieron su pasado. La lengua catalana, que durante siglos había sido tenida como un dialecto de campesinos, se convirtió en el vehículo de expresión de una notable literatura. Con el resurgimiento de la lengua vino el estudio de las glorias medievales del imperio catalán mediterrá-

neo y el énfasis sobre las diferencias históricas y culturales que les separaban del resto de la Península. El catalanismo creó un nuevo lazo entre los campesinos, que habían continuado hablando catalán a través de los siglos desde los tiempos de una Cataluña independiente, y la burguesía, creadora de ese resurgimiento filológico, literario y artístico. En materia política y económica, el catalanismo fue un movimiento predominantemente conservador hasta 1917. Bajo la presidencia de Francisco Cambó, la Lliga Catalana estaba en general satisfecha con la Restauración monárquica. Los líderes de sus negociantes presionaban a Madrid para que concediera aranceles más altos en favor de la industria catalana, aranceles que les fueron concedidos. También forcejearon para obtener una cierta medida de Gobierno autónomo, lo que lograron en 1914 con la Mancomunidad.

El catalanismo de esas décadas fue predominantemente católico. La Iglesia contribuyó al resurgimiento literario y, al igual que en otros países europeos, de buena gana predicó en la lengua de la población local. Los coros, sociedades de danzas folklóricas y las sociedades mutualistas cimentaron las conexiones entre el nacionalismo catalán, el catolicismo y el campesinado.

Siempre hubo, no obstante, un elemento de duda en si la última meta del catalanismo era la autonomía regional dentro de la Monarquía española o la completa separación del Estado español. En la pugna por los aranceles y el Gobierno autónomo, los dirigentes catalanes no vacilaron en amenazar a Madrid con el espectro del separatismo. Durante y después de la primera guerra mundial, su propio control de la política catalana se vio amenazado cada vez más por grupos campesinos radicales y los sindicatos anarcosindicalistas. El tono de la vida política se volvió menos católico y cada vez más conscientemente clasista. Luego, el pronunciamiento de Primo de Rivera en 1923 destruyó la Mancomunidad y con ella la jefatura de los moderados. El nacionalismo catalán se vio forzado a pasar a la clandestinidad y en 1931

nadie sabía si en condiciones de libertad política sin restricciones, los catalanes se inclinarían hacia un moderado regionalismo, el separatismo o el anarcosindicalismo.

El nacionalismo vasco, al igual que el catalán, estuvo basado en el sentimiento de una lengua y una cultura distintas y en una conciencia cada vez más desarrollada de estos elementos, bajo el impacto del romanticismo y la industrialización. Los vascos se ufanaban de lo misteriosamente remoto de sus orígenes, porque mientras que el catalán no es sino una más de las muchas lenguas romances, el vascuence no se relaciona con ningún idioma europeo, excepto el magiar y el finés, y aún ciertos filólogos dudan de esa relación. El movimiento vasco fue más político y religioso que literario. Hasta 1837 las provincias vascongadas gozaron de bastante autonomía, con unos fueros que databan de principios de la Edad Media. Cuando las provincias norteñas se sublevaron contra el Gobierno liberal en nombre de la Monarquía católica tradicional, iniciando así la primera guerra carlista, Madrid abolió los antiguos fueros de las provincias vascongadas. La restauración de esos fueros fue una de las principales reivindicaciones políticas del partido nacionalista vasco en el siglo XX. En 1912, un grupo de sacerdotes vascos fundó la Jaungoika-Zale Bazkuna, una organización dedicada a la enseñanza católica en lengua vascuence, y en Vizcaya hubo generalmente un número cada vez mayor de sociedades mutuas de seguros y celebraciones folklóricas de fuerte carácter católico durante las últimas décadas de la Monarquía.

El desarrollo del nacionalismo vasco produjo una fuerte contracorriente en la renovada fuerza del carlismo. Desde el punto de vista histórico, Navarra y Vizcaya habían gozado de los mismos fueros y en 1837 toda la región apoyó a los carlistas. Pero en el siglo XX, el nacionalismo vasco se desarrolló en el industrializado Bilbao, capital de la provincia de Vizcaya, y en la provincia de Guipúzcoa, inmediatamente contigua a aquel centro indus-

trial; en ambas era donde una sustancial mayoría de los campesinos hablaba vascuence. En Navarra, que siguió siendo agrícola, y donde la mayoría de los campesinos hablaban castellano, el carlismo tradicional se reafirmó contra los dirigentes urbanos y burgueses del nacionalismo vasco. Tras la caída de la Monarquía, los nacionalistas vascos se dispusieron a pedir la autonomía, e incluso la separación si fuere necesario, mientras que los carlistas prepararon sus unidades paramilitares, llamadas requetés, que se sublevaron contra la República en el año 1936. Ambos grupos se caracterizaban, sin embargo, por ser igualmente católicos muy fanáticos.

Los historiadores discutirán largo tiempo hasta qué punto el krausismo y los movimientos regionalistas minaron la Monarquía española; pero la amenaza más grave vino sin duda de dos movimientos de masas de la clase trabajadora: el anarcosindicalismo y el socialismo. Fue una significativa coincidencia, aunque a veces se ha exagerado, que la revolución de 1868 ocurriera precisamente cuando se debatía la importante discusión entre Marx y Bakunin dentro de la Primera Internacional. Ya existían sindicatos juveniles y militantes en la industria textil de Barcelona y en ciertos oficios importantes en Madrid cuando los representantes de las tendencias en pugna llegaron a España. Pero mientras que en Europa la tendencia marxista era en general la más fuerte hacia 1900, en España los anarcosindicalistas fueron más potentes que los socialistas hasta el advenimiento de la segunda República en 1931.

El anarcosindicalismo y el socialismo tenían un mismo propósito: la creación de una sociedad colectivista, y compartían una fe mesiánica en la clase obrera industrial como vehículo de la transformación revolucionaria. Los socialistas creían en una organización sindical bien planeada y centralizada y en la acción política. Las huelgas deberían estar encaminadas a obtener ventajas económicas específicas. El sufragio y el sistema parlamentario

eran medios importantes para conseguir la revolución política. Los anarcosindicalistas, sin embargo, consideraban que la actividad parlamentaria era una pérdida de tiempo, se oponían a la dirección centralizada del movimiento sindical y esperaban lograr la revolución más bien gracias a la huelga general, un cese total y general del trabajo por motivos políticos que demostraría el poder del proletariado y paralizaría a la clase capitalista y su gobierno.

El ingenuo carácter milenario del anarcosindicalismo resultaba no sólo de la doctrina de la huelga general, sino de los ya antiguos antecedentes anarquistas de la mayoría de los trabajadores de la industria catalana. Verdaderamente, para comprender a la clase trabajadora española es necesario primero comprender el anarquismo rural de Andalucía y Levante.

El anarquismo, por su misma naturaleza, era una doctrina menos sistemática que el socialismo; pero en el pensamiento anarquista era fundamental la destrucción del moderno Estado centralizado. Los anarquistas propusieron la descentralización del gobierno, insistiendo en que el Estado fuera el servidor de la comunidad y no su amo. La futura nación estaría compuesta de comunas federadas libremente y el orden mundial consistiría en naciones libremente federadas también. La autoridad debía emanar de las entidades locales y no provenir del centro. Semejante idea era muy apropiada para regiones resentidas contra la autoridad del Gobierno central de Madrid y para un país con fuertes tradiciones comunales.

En la España de los siglos XIX y XX aún había aldeas en las montañas que se gobernaban según antiguos fueros, con costumbres que incluían una redistribución anual de la tierra cultivable y derechos colectivos a la leña del bosque y a los prados comunales. Algunas de las aldeas más aisladas acuñaban su propia moneda para uso local. Muchos de los pueblos de pescadores de Cataluña y Levante practicaban la propiedad colectiva de botes y re-

des y la venta colectiva de la pesca obtenida. Los huertanos levantinos estaban acostumbrados a la regulación comunal de los recursos de agua.

El anarquismo rural tenía un atractivo basado en raíces casi religiosas, así como históricas. A finales del siglo XIX aún se recordaba vivamente en Andalucía la tradición del cultivo comunal de las tierras monásticas. Muchos de los primeros dirigentes anarquistas se parecían muchísimo a los frailes mendicantes de siglos anteriores. Vagabundos abstemios, orgullosos de poseer pocos efectos personales de valor avezados a una vida dura, movidos por un firme convencimiento que se manifestaba en ellos tanto en su legendaria amabilidad como en sus utópicos ideales. Psicológicamente, el anarquismo rural español fue muy parecido a la cristiandad primitiva, a las comunidades de gnósticos y montañistas y a las sectas utópicas del siglo XVII, tales como los allanadores, cavadores y anabaptistas.

Personas que en gran parte poseían estos antecedentes acudieron a las fábricas de Barcelona a finales del siglo XIX y comienzos del XX y fueron los que formaron la masa de los afiliados a la Confederación Nacional del Trabajo (CNT), fundada en 1911. Una vez que les fueron expuestas las doctrinas del sindicalismo, concibieron la huelga general como una especie de Día del Juicio en el cual los perversos capitalistas serían castigados y se iniciaría la sociedad colectivista. Los sindicatos anarcosindicalistas se caracterizaban por la sencillez de organización y el espíritu de sacrificio. Agrupaban a todos los trabajadores de una industria determinada en un sindicato, sin tener en cuenta la pericia; no cobraban cuotas regulares ni contribución para huelgas, no pagaban salarios a sus funcionarios ni llevaban archivos o registros escritos. Su negativa a hacer distinciones por la pericia en el oficio y su sistema de dirección no retribuida testificaba su creencia en la igualdad humana y en una sociedad sin clases. Pero su indefinida organización y su carencia de fondos la hacían muy propensa a la

corrupción. Además, había un ala del movimiento anarquista que, al igual que en Rusia y en Italia en las mismas décadas, creía en la eficacia del terrorismo individual. Tres presidentes del Consejo de ministros español fueron víctimas del terrorismo anarquista: Cánovas en 1897, Canalejas en 1912 y Dato en 1921. Aunque estos asesinatos fueron actos individuales, lo cierto es que el movimiento anarcosindicalista en su conjunto toleró tales acciones como una posible contribución a la revolución. De aquí que fuera muy fácil a la policía y a las organizaciones patronales infiltrarse en la CNT. Nadie sabe cuántas bombas anarquistas fueron realmente obra de agentes provocadores, aunque nadie duda de que ellos fueron responsables en gran medida de las tropelías cometidas en Barcelona durante la guerra. Algo muy indicativo de la desesperación de los gobiernos monárquicos posteriores a 1917 es que llegaran a creer que podrían lograr el respeto del pueblo español prestándose a manejos con asesinos pagados.

Los años 1919-1923 presenciaron un gran incremento del terrorismo en Cataluña. Dentro de los sindicatos se desarrolló una lucha crucial por la jefatura entre los partidarios de la violencia sistemática y los del estricto sindicalismo industrial. Estos últimos proponían una extensión de las huelgas pacíficas y disciplinadas con objetivos específicos tales como mejores salarios y la jornada de ocho horas. Sus conceptos de la organización y sus objetivos eran muy similares a los que luego tuvieron los sindicatos de la CIO en Estados Unidos. Pero este grupo fue derrotado por los partidarios de la huelga revolucionaria y el terrorismo. La victoria de los extremistas fue remachada en 1923 cuando la Dictadura suprimió a la vez la Mancomunidad y los sindicatos catalanes. La CNT pasó a la clandestinidad y hacia 1927 quedó bajo el dominio de la nueva sociedad secreta, recientemente fundada, la Federación Anarquista Ibérica, conocida por sus iniciales como la FAI Una de las más trágicas coincidencias

en la historia de la revolución española es la dominación de la clase obrera catalana por una minoría extremista durante la década de 1930.



Mapa 1. Geografía política regional

El socialismo español se desarrolló en cierto modo más lentamente que el anarcosindicalismo. Sus zonas de mayor fuerza eran Madrid, las ciudades industriales vascas y las comarcas mineras de Asturias y Huelva. Fundado en 1879 por el tipógrafo gallego Pablo Iglesias, que lo dirigió durante muchos años, el Partido Socialista estuvo dedicado en los primeros tiempos a la organización de su federación sindical, la Unión General de Trabajadores (UGT), y a la educación de los obreros. Característico de la organización socialista eran las Casas del Pueblo, con sus bibliotecas con libros de ediciones populares sobre ciencia, mecánica y salud y sus reimpresiones de grandes novelistas como Tolstoi y Dickens. El trabajador socialista consciente de su clase podía asimismo seguir a través de la biblioteca de la casa el gran

debate dentro del partido francés entre Jules Guesde y Jean Jaurès, el primero abogado de la combatividad revolucionaria y el segundo del gradualismo.

El socialismo español creía en la acción política y en el uso de los métodos parlamentarios. Pero también tenía que lograr beneficios inmediatos para los trabajadores, especialmente desde que se halló compitiendo con los sindicatos anarcosindicalistas, mucho más numerosos y revolucionarios. Fue un gran día para el partido cuando en 1910 Pablo Iglesias ocupó su escaño como primer diputado socialista elegido para las Cortes. Los socialistas españoles estaban orgullosos del número creciente de intelectuales universitarios que se afiliaban al partido en el siglo XX. Pero la UGT tenía que demostrar su combatividad y efectividad en la pugna diaria. Los militantes de Bilbao, de las minas de Asturias y de los sindicatos ferroviarios demostraron en numerosas huelgas que eran tan duros, tan conscientes de su clase y tan combativos como los anarcosindicalistas de Barcelona.

El quebrantamiento de las huelgas revolucionarías por el ejército en 1917 seguido por la revolución bolchevique en Rusia, condujo a una renovada discusión sobre los métodos a seguir entre la UGT y el partido. En 1921 el partido votó por una pequeña mayoría no unirse a la III Internacional y la minoría derrotada fundó el Partido Comunista, abocando al Partido Socialista a una tendencia más reformista. Cuando Primo de Rivera, en los primeros años de su dictadura, solicitó la cooperación de Largo Caballero en el Consejo de Estado, su oferta fue aceptada, y cuando en 1926 un cierto número de intelectuales republicanos se unieron en la conspiración llamada de la Noche de San Juan contra el dictador, los socialistas se mantuvieron al margen. No es que apoyaran la dictadura; pero los dirigentes de la UGT opinaban que cuestiones tales como la Monarquía parlamentaria, la dictadura benévola o la República burguesa eran puramente académicas y no tenían gran importancia para la clase trabajado-

ra. Por otra parte, un gran número de jóvenes profesionales se unieron al Partido Socialista en los años veinte y para ellos las cuestiones de libertad política e instituciones sí que eran importantes. Hacia 1930 los intelectuales socialistas constituían un lazo entre las masas de la UGT y los partidos republicanos de la clase media, un lazo que hizo posible la coalición republicano-socialista en las Cortes Constituyentes. Pero las diferencias de perspectivas entre los universitarios socialistas y las masas sindicales impidieron que el partido tuviera una verdadera unidad y fueron de crítica importancia en 1936.

Para exponerlo con más claridad, he tratado hasta ahora de definir los diversos movimientos intelectuales, regionales y políticos en términos de sus diversos contenidos por separado. Sin embargo, aunque para empezar es necesario definir a los diversos movimientos, es esencial comprender de qué modo tan poderoso actuaban unos sobre otros en el cuadro general de España.

Hablando primero de las corrientes intelectuales contrarias, hay que señalar, por ejemplo, que el gran poeta Antonio Machado se sentía a la vez atraído por la tradición católica castellana y la Europa de la democracia política y la filosofía secular, y la tensión entre ambas polaridades impregna sus versos. Los ensayistas de la llamada Generación del 98 oscilan entre la orgullosa nostalgia del estoico y militante pasado castellano y un complejo de inferioridad ante la industria, la educación y el nivel de vida europeos. Filósofos como Unamuno y Ortega, aunque elogiaban la variedad regional de la cultura española, concluían por insistir altivamente en la primacía de Castilla. El historiador católico Menéndez y Pelayo reafirmó su ortodoxia mientras que escribía, a menudo con marcada simpatía y admiración, la historia de los heterodoxos españoles. El joven poeta comunista Miguel Hernández adquirió mucho de su vocabulario y de su profundo tono espiritual en sus antecedentes católicos. Subyacente a la más fructífera investigación sobre el pasado español está la polé-

mica sobre el significado de la historia de España; los de puntos de vista conservadores daban énfasis a la importancia de la Iglesia, de la Monarquía castellana, del hidalguismo, de los Reyes Católicos y de la Contrarreforma en la formación de la civilización española: los de puntos de vista liberales ponían énfasis en la variedad de tradiciones comunes, la contribución de árabes y judíos, el catolicismo más humano de los erasmistas contra el de Isabel o el del cardenal Cisneros y el despotismo ilustrado de Carlos III en el siglo XVIII.

Trasladándonos de las corrientes intelectuales a los movimientos de masas, vemos que el nacionalismo catalán y el anarcosindicalismo se influyeron mutuamente, el primero evolucionando marcadamente hacia la izquierda a partir de 1917, el segundo pensando en sí mismo con frecuencia como un fenómeno específicamente catalán más que español. El Partido Socialista, que siempre fue débil en Cataluña, pudo cooperar con Primo de Rivera sin inquietarse demasiado por la supresión de los sindicatos y las libertades civiles en la región. La UGT, aunque predominantemente reformista, pudo adoptar a veces la táctica de la huelga general y las militantes manifestaciones callejeras, y los intelectuales socialistas, aunque marxistas en sus análisis teóricos, se vieron profundamente influidos por los krausistas. Los anarquistas y anarcosindicalistas, si bien apolíticos por principio, decidieron votar en ciertas elecciones no permitiendo así que los socialistas y los comunistas fueran los únicos en hablar en nombre de los trabajadores. En 1917 y nuevamente a partir de 1930, la UGT y la CNT compitieron duramente por la organización del campesinado sin tierras de Andalucía.

El fermento intelectual y político, junto con la descomposición intelectual de la Monarquía tras la muerte de Cánovas en 1897, condujo a la formación de muchos partidos minúsculos, a veces reunidos más en torno a la figura de un dirigente político que por un programa claro o una fuerte organización. Antes de

1917 apenas si había más que un puñado de republicanos convencidos; pero los acontecimientos revolucionarios de aquel año revelaron de repente que sólo el ejército podía salvar a la Monarquía. Entonces fue cuando intervino el rey, con fatales resultados, en la dirección de la guerra de Marruecos, y cuando en 1923 él mismo acabó con lo que quedaba de Constitución aceptando el pronunciamiento de Primo de Rivera, su reputación personal, si no la de la dinastía, estaba acabada. La segunda República fue inevitable más por la bancarrota de la Monarquía que por la fuerza del movimiento republicano. Entre 1927 y 1931 muchos liberales que antes abogaron por la restauración de la Monarquía constitucional se convirtieron en republicanos. Cuando la depresión afectó a España a finales de 1929, el rey despidió a Primo de Rivera e intentó sin éxito hallar un dictador sustituto. El 17 de agosto de 1930 un cierto número de personalidades políticas firmaron en San Sebastián (ciudad en donde muchos de ellos estaban veraneando) el pacto político que había de conducir a la segunda República. Acordaron establecer una República, por la fuerza si era necesario; garantizar la libertad religiosa y política, proceder a la elección de unas Cortes Constituyentes y permitir a las regiones que así lo desearan redactar estatutos autonómicos y someterlos a las Cortes. Entre los firmantes estaban una media docena de importantes dirigentes republicanos, tres republicanos catalanes y el socialista moderado Indalecio Prieto.

En diciembre, una corta sublevación militar no logró derrocar la Monarquía, pero la causa republicana obtuvo dos mártires en las personas de los capitanes Galán y García Hernández, fusilados por rebelión militar. El 12 de abril de 1931 las elecciones municipales fueron abrumadoramente antimonárquicas en las principales ciudades, y el rey decidió abandonar España antes de arriesgarse a una guerra civil. Aunque no abdicó la corona, la hora de los republicanos liberales había llegado.

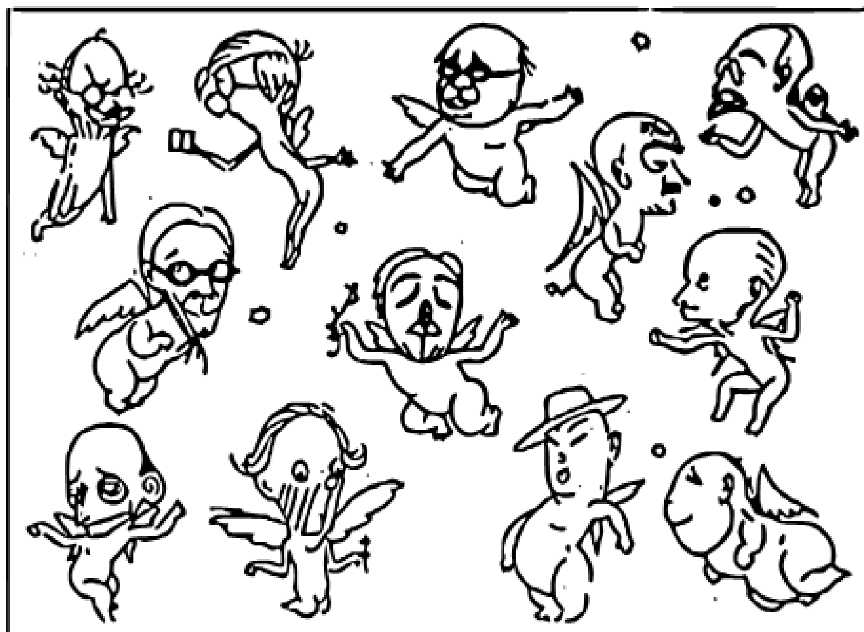
Capítulo 2

LOS PRIMEROS DÍAS DE LA REPÚBLICA

EL 14 de abril fue un día de gozosa celebración y de expectación en las principales ciudades de España. Inmediatamente después de las elecciones municipales del día 12 el conde de Romanones, fiel amigo y consejero del rey, y el doctor Gregorio Marañón su médico personal, hombre liberal y de gran cultura, aconsejaron al monarca que reconociera el fuerte carácter republicano de la votación[6]. Alfonso XIII, reacio a abandonar el trono, pidió asimismo su opinión a los militares, que le hicieron ver que sólo podría mantener su posición a costa de una guerra civil[7]. Mientras tanto, Romanones y Marañón negociaron la transmisión de poderes con el primer ministro del nuevo Gobierno, Niceto Alcalá-Zamora. En los meses que siguieron al Pacto de San Sebastián, los republicanos habían formado en la sombra un Gabinete completo. El 14 de abril estos caballeros salieron de la cárcel Modelo de Madrid, o regresaron de su exilio en Francia, mientras que el rey hacía las maletas y el pueblo vitoreaba a la República y a los nuevos ministros cuyos nombres eran repetidos en voz alta en la Puerta del Sol. En las plazas y en los campamentos militares de maniobras los sones de la Marsellesa se mezclaban con los del himno republicano tradicional, el Himno de Riego. En todas las mentes había el recuerdo de la Revolución Francesa y como contraste, los republicanos españo-

les señalaban orgullosos el hecho de que al rey lo hubieran dejado marchar en paz y que los revolucionarios se hubiesen puesto de acuerdo de antemano en la colaboración ministerial y en el nombramiento de los ministros.

EL PRIMER GOBIERNO DE LA REPÚBLICA, por Bagaría



Como puede comprobarse, de aquí salieron «estrellas» y estrellados.

Lerroux Domingo Azaña Maura De los Ríos
D'Olwer Alcalá-Zamora Largo
Casares Quiroga Albornoz Martínez Barrio Prieto

(*El Sol*, 14 de abril de 1936)

Sin embargo, surgieron muchas situaciones peligrosas y sólo una serie de afortunadas coincidencias logró que la transmisión fuera pacífica. La actitud de las masas abarcó desde la destrucción de símbolos monárquicos, con buen humor, hasta una actitud amenazadora y revolucionaria. En Madrid, una turbulenta multitud derribó la estatua de Isabel II de su pedestal y la arrastró hasta el convento de las Arrepentidas. Aquella misma tarde del 14 de abril, una muchedumbre menos amistosa se congregó

frente al palacio de Oriente, donde la reina y sus hijos pasaron una noche llena de ansiedad. Alcalá-Zamora especificó que el rey debía abandonar la ciudad «antes de la puesta del sol», precisamente porque temía la violencia si no se marchaba rápidamente. En el propio palacio, docenas de jóvenes con brazaletes rojos, la mayoría de ellos obreros socialistas de la Casa del Pueblo de Madrid, unieron sus brazos para impedir que la muchedumbre se aproximara y estuvieron de guardia toda la noche[8].

En muchos pueblos la guardia civil disolvió manifestaciones republicanas horas antes de que el cambio de régimen fuera oficialmente anunciado. En la ciudad portuaria de Huelva, el dirigente socialista Ramón González Peña estaba en la cárcel esperando lo juzgaran por la parte que había tomado en la abortada sublevación de Jaca. Una muchedumbre de estibadores vino a libertarlo aquella tarde y se halló en medio de una masa revolucionaria que pedía la cabeza del gobernador civil pues un muchacho había sido muerto en un choque entre la policía y los manifestantes. González Peña logró persuadir a la muchedumbre que no hiciera un linchamiento que inmediatamente desacreditaría a la nueva República[9]. En Barcelona el Gobierno provisional tuvo que enfrentarse con el desafío del nacionalismo catalán. El coronel Macià, apenas pasada la sorpresa de su victoria en las elecciones de Barcelona, proclamó por una emisora de radio (en idioma catalán) el Estado catalán y la República catalana, tras lo cual invitó cordialmente a los otros pueblos ibéricos a asociarse con Cataluña para la formación de una federación ibérica. Tres ministros del Gobierno provisional (Marcelino Domingo, antiguo republicano catalán; Nicolau d'Olwer, otro republicano catalán que era ministro de Economía, y Fernando de los Ríos, socialista, que era ministro de Justicia), se apresuraron a trasladarse a Barcelona para recordar al exaltado y anciano Macià que la nueva Constitución todavía no había sido redactada. Rogándole que tuviera paciencia y reconociera la necesaria autoridad cen-

tral, lograron que diera su aprobación a una fórmula por la cual los catalanes someterían el proyectado Estatuto de autonomía a las Cortes. A cambio prometieron que las Cortes actuarían con el mínimo retraso posible. Para lograr este acuerdo temporal, los ministros de Madrid contaron en gran medida con los buenos oficios de Luis Companys, el jefe de más categoría después de Macià en la victoriosa Esquerra. Companys, abogado de los sindicatos y antiguo asociado de Marcelino Domingo, era un autonomista más que un separatista. Nombrado rápidamente gobernador civil de Barcelona, cooperó lealmente con las autoridades de Madrid durante las primeras y delicadas semanas del nuevo régimen[10].

Hablando en general, aunque el 14 de abril fue verdaderamente un día de celebración, lo cierto es que los españoles de todas las tendencias políticas dejaron escapar un suspiro de alivio cuando el día transcurrió sin que hubiera violencias. La atmósfera de las semanas siguientes fue una mezcla de euforia, incredulidad y ansiedad. Desde el extranjero, el rey aconsejaba a sus seguidores que aceptaran la nueva República, que reconoció había advenido por la voluntad del pueblo. La Iglesia recomendó respeto por las autoridades constituidas. Los anarquistas declararon que una República burguesa no era asunto suyo; pero no la atacaron.

En el Pacto de San Sebastián se había tratado tan sólo sobre la organización política y de la necesidad de convocar unas Corles Constituyentes. Pero muchos republicanos y todos los socialistas sabían que la República debía emprender una rápida acción en beneficio de las masas rurales si se quería que el nuevo régimen echara raíces fuera de la clase media urbana y la aristocracia del trabajo organizado. Francisco Largo Caballero, jefe de la UGT, se incorporó al comité revolucionario a fines de 1930, a pesar de la oposición de otros altos dirigentes, especialmente Julián Besteiro y Andrés Saborit. En Barcelona el coronel Macià permane-

ció en vela toda la noche del 14 de abril en un inútil esfuerzo para conseguir que Ángel Pestaña, el más moderado de los dirigentes de la CNT, aceptara un puesto en el Gobierno catalán[11]. Era evidente que la CNT en su conjunto, y una buena proporción de la UGT, no consideraban oportuno que los obreros participaran en el nuevo Gobierno republicano. Largo Caballero, presionado por el Comité revolucionario, que le recordó que la República no podría afirmarse sin la cooperación activa de la federación sindical socialista, convino por fin en aceptar la cartera de ministro de Trabajo, y se apresuró a mejorar la suerte de los campesinos. El 29 de abril, un decreto protegía a los pequeños propietarios rurales contra los juicios hipotecarios y el 8 de mayo se autorizó a las autoridades municipales a obligar a los terratenientes a cultivar sus tierras baldías. El 28 de abril Largo Caballero anunció un decreto destinado a combatir el paro agrícola: no se podrían contratar trabajadores de otros municipios hasta que todos los obreros agrícolas de una localidad tuvieran trabajo. El 12 de junio el Gobierno extendió a los trabajadores agrícolas los beneficios de la legislación de accidentes del trabajo ya existente en la industria.

Estas leyes desafiaron un orden rural establecido que no había sido afectado directamente por el mero cambio de régimen. En las zonas rurales las elecciones estuvieron dominadas, como siempre, por los caciques; fuera de las grandes ciudades, España había votado en monárquico. Resultaron elegidos unos 22.000 concejales monárquicos contra 5800 republicanos; pero el 14 de abril todo el mundo, del rey para abajo, reconoció que sólo el voto de las grandes ciudades era lo suficientemente libre como para reflejar la opinión pública. Sin embargo, el nuevo Gobierno de Madrid tenía que tratar con ayuntamientos monárquicos en casi toda la España rural. Para poder llevar a la práctica sus decretos revolucionarios, Largo Caballero confiaba en los funcionarios de la Federación de Trabajadores de la Tierra. Él ya había ac-

tuado como consejero laboral durante la dictadura de Primo de Rivera. En 1926 el dictador estableció comités paritarios, comisiones mixtas que representaban por igual a los terratenientes y a los trabajadores agrícolas españoles, y la UGT utilizó esos comités para ampliar la organización del proletariado campesino. En abril de 1931 la Federación de Trabajadores de la Tierra contaba con unos 100.000 miembros. Su principal organizador, Lucio Martínez Gil, era un seguidor de Besteiro. Nadie conocía mejor que él la psicología primitiva de estos peones campesinos, en su mayoría analfabetos. Él y Besteiro se opusieron a la participación socialista en el comité revolucionario, precisamente porque temían una República prematura en la cual tendrían que compartir las responsabilidades del Gobierno antes de que la organización laboral hubiera adquirido la suficiente madurez. Los decretos de Largo Caballero en favor de los trabajadores campesinos enfrentaron a las fuerzas sociales rivales de pueblos y aldeas. Por un lado estaban los ayuntamientos monárquicos, que representaban a los terratenientes y contaban con el apoyo de la guardia civil y la mayoría de los abogados, farmacéuticos y sacerdotes; por el otro, las casas del pueblo, cuarteles generales de los obreros sindicados de las distintas localidades y una minoría de profesionales y sacerdotes que simpatizaban con las izquierdas. En los pueblos y aldeas, inevitablemente, las primeras semanas de la República provocaron un cierto ambiente de guerra de clases. La clase media liberal, que había votado por la República en las ciudades, estaba casi por completo ausente. Las fuerzas del antiguo régimen se enfrentaban a los inexpertos pero ahora militantes trabajadores.

La proclamación de la República también produjo una inmediata prueba de la buena o mala voluntad entre el nuevo régimen y la Iglesia católica romana. Los republicanos anunciaron su determinación de crear un sistema de escuelas laicas, introducir el divorcio, secularizar los cementerios y los hospitales y reducir en

gran medida, si no eliminar, el número de órdenes religiosas establecidas en España. Por su parte, el Vaticano no imitó el ejemplo de la gran mayoría de los gobiernos del mundo reconociendo rápidamente a la República. Los obispos aconsejaron la obediencia a las autoridades establecidas, sí, pero asimismo justificaron el que no se las reconociera, basándose en que el Gobierno se llamaba a sí mismo «provisional» y que el rey se había limitado a ausentarse de España, sin abdicar[12]. En la primera semana de mayo, la prensa católica madrileña sostuvo un acre debate entre aquéllos que deseaban aceptar la República y los que insistían en identificar el catolicismo con la Monarquía. *El Debate* expuso el punto de vista de que los principios fundamentales católicos de familia, propiedad y orden social podían ser garantizados por las diferentes formas de gobierno. La Iglesia era eterna; las formas políticas, «accidentales». (*El Debate* era el órgano de la Acción Católica, y tras recobrarse de la primera sorpresa de la revolución, sus dirigentes se afanaron por defender los intereses materiales y espirituales de la Iglesia dentro del nuevo sistema político). El diario monárquico *ABC*, por otra parte, acusó a *El Debate* de cobardía y de contemporización, y afirmó sin rodeos que, al menos en España, sólo la Monarquía podía garantizar un orden social católico.

Mientras tanto, el Gobierno dio a conocer sus planes para la construcción de miles de nuevas escuelas primarias. El ministro de Instrucción Pública, Marcelino Domingo, era el jefe de un pequeño partido radical-socialista cuyo programa se inspiraba francamente en el de los radicales Jules Ferry y Clemenceau, prohombres de la tercera República francesa. El director de enseñanza primaria era Rodolfo Llopis, socialista, profesor de una de las escuelas normales del Estado. Según las normas existentes en abril de 1931, la enseñanza religiosa era obligatoria en las escuelas públicas. El 6 de mayo el Gobierno decretó que tal enseñanza dejaba de ser obligatoria, pero que sería ofrecida a aquellos

niños cuyos padres lo solicitaran. Finalmente, durante la misma semana en que este decreto fue promulgado y en la que *ABC* y *El Debate* sostuvieron su polémica, el *ABC* vino publicando diariamente anuncios informando de la apertura de un Círculo Monárquico que tendría lugar en la mañana del domingo 10 de mayo.

El 7 de mayo los periódicos publicaron una carta pastoral del cardenal Segura, arzobispo de Toledo, primado de la jerarquía eclesiástica en España. Fue la primera declaración pública del cardenal desde la proclamación de la República. En ella se refería repetidamente a las graves conmociones y amenazas de anarquía a que España se veía expuesta. Aunque la Iglesia no se preocupaba de formas de régimen, deseaba expresar la gratitud de la Iglesia a S. M., por haber consagrado España al Sagrado Corazón de Jesús y por haber preservado las tradiciones y piedad de sus antepasados. Apeló a las mujeres de España para que organizaran una cruzada de oraciones y sacrificios para defender la Iglesia contra los muchos ataques a sus derechos. Recordó el ejemplo de Baviera en 1919, cuando la población católica salvó al país de una breve ocupación bolchevique, sugiriendo, por tanto, por su analogía, que el Gobierno provisional de la segunda República era de la misma categoría que el régimen comunista de la breve revolución bávara. Por ataques a los derechos de la Iglesia, el cardenal entendía la bien conocida determinación del nuevo régimen de separar la Iglesia del Estado, organizar un sistema de escuela laica e introducir el matrimonio civil y el divorcio. La publicación de esta pastoral coincidió con una oleada de oradores callejeros que pedían la expulsión de las órdenes religiosas, y protestaban contra la publicidad dada al recién organizado Círculo Monárquico.

En la mañana del 10 de mayo tuvo lugar una breve refriega frente a los locales del Círculo y por la ciudad corrió el rumor de que un taxista había sido muerto por un señorito monárquico.

En la Puerta del Sol un orador pidió, entre otras cosas, la expulsión de las órdenes religiosas, la disolución de la guardia civil y la destitución del ministro de la Gobernación, don Miguel Maura. Maura ya había supuesto que habría desórdenes si se inauguraba el Círculo Monárquico y recibió informes que amenazaban con una huelga general para el lunes 11 de mayo. Por la tarde se reunió el Gobierno, que siguió reunido hasta horas avanzadas de la noche, Maura pidió permiso a sus colegas para llamar a la guardia civil. El Gabinete se negó; pero decidió reunirse a primeras horas del lunes para seguir de cerca los acontecimientos en todo instante. Antes de mediodía se recibió la noticia de que estaba ardiendo la iglesia de los jesuitas en la calle de la Flor. Maura amenazó con dimitir si no se le daba inmediatamente permiso para utilizar la guardia civil. El Gobierno se negó a ello y no quiso aceptar la dimisión de Maura[13].

Mientras tanto, 6 de los 170 conventos de Madrid fueron incendiados por pequeñas bandas compuestas en su mayoría de jovenzuelos. La policía, los bomberos y la multitud contemplaron esos hechos pasivamente y la única actividad organizada fue la de ayudar a la evacuación de las asustadas monjas al abandonar éstas los edificios. En las ciudades meridionales de Málaga, Sevilla, Cádiz y Alicante fueron atacados unos 15 conventos de la misma manera. Allí, como en Madrid, se prepararon taxis para la evacuación de las monjas, algunas de las cuales, al salir de sus conventos, se montaban en automóviles por primera vez en su vida. En Barcelona el coronel Macià durmió en la Generalitat para estar preparado por si se intentaba algo contra las iglesias y conventos de la ciudad. En Zaragoza y Valencia las organizaciones republicanas apostaron guardias ante la puerta de las iglesias cuando llegaron de Madrid las noticias de los incendios. Como fueron muy pocas las personas que atacaron los templos, con muy pocas también podían ser defendidos, como ocurrió en estas últimas ciudades[14].

En Madrid, el Gobierno cambió de postura el día 12. No sólo recibió Maura permiso para utilizar la guardia civil, sino que Alcalá-Zamora proclamó el estado de guerra en toda España y dio a Maura autorización para recurrir al ejército en la restauración del orden. España estuvo tranquila durante 48 horas. En conjunto habían sido atacadas unas dos docenas de iglesias. No se dio muerte a ningún sacerdote o monja; pero resultaron destruidos los laboratorios de la Escuela Industrial y Técnica de los jesuitas en Madrid y muchas obras de arte de diverso valor fueron pasto de las llamas.

Estos acontecimientos significaron un choque tremendo para la clase media española. Menos de un mes después de la instauración de la República, el país se vio forzado a meditar sobre los complejos principios del orden público y las actitudes religiosas que formaban la trama de su historia moderna. El populacho había quemado iglesias en Madrid en 1835 y en Barcelona en 1909. ¿Es que nada había cambiado en España? ¿Quiénes eran los incendiarios? Maura y la prensa gubernamental en 1931, como sus antepasados en las anteriores ocasiones, insistieron en que provocadores reaccionarios habían instigado odios elementales y pagados a los verdaderos incendiarios[15]. Las pruebas fueron siempre circunstanciales, nunca concluyentes. Durante los días que siguieron al 12 de mayo, la policía de Madrid y Barcelona recibió llamadas telefónicas anónimas advirtiéndoles que se iban a producir más incidentes, llamadas que en casi todos los casos resultaron ser falsas alarmas[16]. ¿Era una provocación de los monárquicos, de los anarquistas o de una insignificante minoría de lunáticos sin etiqueta política? Es difícil responder con seguridad. Más importante es la cuestión de por qué la población católica de España permitió que tales incidentes ocurrieran. El cardenal Segura se había referido a España como un país en que virtualmente toda la población profesaba la religión católica. Sin embargo, todos sabían que la asistencia a misa alcanzaba cifras muy

bajas, especialmente en las grandes ciudades. Pero la mayoría de los españoles bautizaban a sus hijos, se casaban por la Iglesia y morían en el seno de la religión católica. Si un puñado de republicanos, sabiendo lo fácil que era desacreditar a la República, disuadieron o avergonzaron a los posibles incendiarios, ¿dónde estaban los millones de católicos que pudieron evitar todos los ataques, excepto los primeros que se produjeron por sorpresa? Ciertamente, entre la población urbana española había en gran medida tolerancia, aún más, secreta complacencia, por ver cómo se atacaba a la Iglesia.

¿Y cómo puede explicar uno la pasividad del Gobierno durante casi 48 horas? El ministro de Justicia calificó la carta del cardenal con la frase de «velada belicosidad». El Gobierno sabía muy bien que la apertura del Círculo Monárquico provocaría algaradas. Y también sabía que la República de 1873, así como los gobiernos liberales de 1812 y 1820, se desacreditaron por su incapacidad para mantener el orden público. Los padres españoles, incluso los republicanos, que habían sorprendido a sus hijos más de una vez peleándose o pegándose con otros chiquillos, tenían la costumbre de decir al ver aquello: «Esto es una República». ¿Por qué entonces se opusieron a la petición de Maura de llamar a la guardia civil, especialmente cuando el problema resultó no ser el simple mantenimiento del orden público, sino un ataque contra la Iglesia?

No cabe duda de que un factor importante fue la determinación de la mayoría de los ministros de que el nuevo régimen no comenzara su existencia disparando contra españoles. Mejor sería que algunos lunáticos quemaran algunas iglesias que no que la República ordenara a la guardia civil que entrara en acción. Los socialistas, especialmente, consideraban a la guardia civil como enemiga de la clase trabajadora, un enemigo peor, bien considerado, que la propia Monarquía. Los liberales opinaban que el pueblo español, aun en sus actos más deplorables, había sido más

víctima que verdugo. La República debía dirigir al pueblo tan sólo por la persuasión. Y contra la idea de que los antiguos gobiernos liberales se desacreditaron por su fracaso en mantener el orden público, colocaron la certidumbre de que las masas odiarían a un Gobierno que recurriera a la guardia civil ante las primeras señales de un motín. Así que durante un par de días esperaron en vano que no fuera necesario tomar medidas represivas. Cuando estas esperanzas resultaron infundadas, concedieran a Maura los plenos poderes que había demandado.

Muchos españoles han exagerado la importancia de la quema de iglesias del 11 de mayo, viendo en estos sucesos nada menos que el origen de la guerra civil. Lo cierto es que el Partido Socialista, la UGT y los partidos republicanos de clase media, por anticlericales que fuesen, se unieron en su inequívoca condena de aquellos incendios. La pasividad de la población, católica o no católica, no puede ser atribuida a ningún Gobierno o ideología, y si en los años siguientes los principales problemas sociales y económicos de España hubieran sido mejor tratados, de los incendios del 11 de mayo sólo habría quedado un breve recuerdo en la historia.

En el tiempo en que ocurrieron, los sucesos endurecieron tanto a la Iglesia como a los anticlericales en las posiciones que ya habían adoptado. El Gobierno reprochó al cardenal Segura el haber provocado la violencia anticlerical y lo declaró *persona non grata*. El cardenal abandonó España el 13 de mayo, dirigiéndose a Roma y declarando que el Gobierno no quiso garantizar su seguridad personal. El 22 de mayo el Gobierno proclamó la completa libertad religiosa; también prohibió la exposición en las aulas de imágenes de santos, basándose en que besar dichas imágenes era antihigiénico. El mismo día dictó un decreto autorizando al ministro de Instrucción Pública a retirar los objetos de arte de los edificios religiosos si juzgaba que corrían riesgo de ser deteriorados. El 30 de mayo el Vaticano negó su *placet* al recién nom-

brado embajador republicano, Luis de Zulueta. Al día siguiente, en Madrid, el Gobierno suspendió temporalmente *El Debate* y *ABC* por sus violentas diatribas contra las recientes medidas gubernamentales.

El 3 de junio los obispos españoles enviaron una carta colectiva de protesta al presidente del Consejo de ministros. Entre otras cosas protestaban contra los planes de secularizar los cementerios y de separar la Iglesia y el Estado. Afirmaban que la libertad de cultos que acababa de decretar era una violación del Concordato existente y de las leyes fundamentales de España. Protestaban por la supresión de la enseñanza religiosa obligatoria y por los decretos que prohibían a los altos funcionarios civiles y militares participar en las ceremonias religiosas públicas. Una semana más tarde el cardenal Segura entró en España de incógnito. Su automóvil fue detenido por la policía en Guadalajara y fue escoltado hasta la frontera. El 14 de junio, católicos de las provincias del norte de España se reunieron en la plaza de toros de Pamplona para protestar contra la expulsión del cardenal[17]. Durante el mes de junio hubo incidentes aislados durante los cuales los ayuntamientos republicanos amenazaron con confiscar las escuelas católicas. Antes de la reunión de las Cortes Constituyentes la cuestión religiosa era el problema más amargamente debatido en la política española.

El Gobierno provisional inició también reformas militares antes de la reunión de las Cortes. El ministro de la Guerra, Manuel Azaña, era tenido sobre todo por un intelectual. En 1930 había sido elegido presidente del Ateneo, el club literario de Madrid. Pero Azaña, siendo periodista, había tenido ocasión de observar al ejército francés durante la primera guerra mundial y por aquel tiempo se interesó por la historia militar. Había llegado a creer, observando a la Monarquía española y la dictadura, que España necesitaba, sobre todo, un Gobierno de técnicos, hombres íntegros cuidadosamente entrenados. En 1931 el ejército español

consistía en el esqueleto de 16 divisiones, a las que normalmente les habría bastado con ochenta generales; pero lo cierto es que había cerca de 800 y más comandantes y capitanes que sargentos. El primer problema era reducir el ejército a unas proporciones razonables sin ofender a un cuerpo de oficiales con espíritu de casta, que había sufrido repetidas humillaciones y que tenía una larga tradición de conspiraciones políticas y de pronunciamientos.

El 26 de mayo Azaña anunció la primera de sus reformas. Rebajó el número de divisiones de 16 a 8 y redujo a un año el tiempo del servicio militar obligatorio, eliminando el rango de capitán general. Esto último era una reforma tanto militar como política, ya que las capitanías generales eran una institución que databa de los tiempos coloniales y que permitía la subordinación de la autoridad civil en momentos de tensión o desórdenes. El rango más alto en tiempos de paz sería ahora el de general de división, uno para cada una de las ocho regiones militares en que se dividía el país, y sus funciones serían estrictamente castrenses. En 1930 había en el escalafón unos 26.000 oficiales. El nuevo ejército había de consistir en 7600 oficiales con 105.000 soldados en la península, y el contingente de África estaría formado por 1700 oficiales y 42.000 soldados[18]. Azaña ofreció a los oficiales sobrantes el retiro con toda la paga (el decreto aseguraba a todos aquéllos que aceptasen el retiro que serían promovidos a los sueldos que habrían recibido en el curso de la promoción normal en filas). En suma, el oficial profesional podía retirarse sin el menor sacrificio económico, presente o futuro.

Los círculos militares reaccionaron ante el decreto de Azaña con una mezcla de emociones. Casi todos reconocían que en el ejército había demasiados galones; pero muchos oficiales de carrera, orgullosos, opinaron que Azaña sólo quería destruir el cuerpo de oficiales por medio del soborno. Por otra parte, miles de oficiales hicieron inmediatamente toda clase de gestiones para

asegurarse de que sus nombres figurarían en las listas de retirados. El 3 de junio el ministro anunció que todos los ascensos por méritos hechos durante la dictadura serían revisados y el 14 de julio, el mismo día en que habían de reunirse las Cortes, el Gobierno clausuró la Academia General Militar de Zaragoza. Estos dos hechos despertaron las sospechas de los oficiales más conservadores que eran antirrepublicanos. El primer decreto implicaba que los ascensos obtenidos en los últimos años de la guerra de Marruecos se debieron en gran medida a un criterio más político que profesional, e interpretaron la clausura de la Academia General como un golpe al espíritu de cuerpo del ejército, puesto que ésta era la única institución en la que los oficiales de las distintas armas se formaban juntos.

El cambio de régimen fue acompañado asimismo por una especie de pánico financiero. La peseta no había sido nunca una moneda muy fuerte y se fue depreciando lentamente bajo el mandato de Primo de Rivera. Sin embargo, el último Gobierno de la Monarquía logró obtener un préstamo de sesenta millones de dólares de una combinación de Morgan e intereses bancarios holandeses. El gobierno Aznar se había comprometido a restaurar la Monarquía constitucional y el banquero conservador catalán Juan Ventosa inspiraba confianza como ministro de Hacienda. Entre febrero y abril de 1931 la peseta comenzó a recobrarse.

En el Gobierno provisional no figuraba ningún experto en finanzas e Indalecio Prieto aceptó su nombramiento como ministro de Hacienda más bien por solidaridad que por verdadero entusiasmo por la tarea. Prieto era un periodista que se había formado a sí mismo y era propietario del importante diario *El Liberal*, de Bilbao. Era hombre muy inteligente y pragmático y tenía muchos amigos entre los principales negociantes vascos y catalanes. Pero Prieto era además un socialista, comprometido, como estaban todos los socialistas, a unas reformas que indudablemente resultarían caras. En todo caso, la combinación de un repen-

tino cambio de régimen con el nombramiento de un socialista para ministro de Hacienda condujo a la inmediata cancelación del préstamo Morgan, a una fuga de capitales y a una baja del 20 por ciento, en el primer mes, de la cotización internacional de la peseta[19].

Prieto no era un hombre dispuesto a aplacar a los reaccionarios españoles o al mundo internacional de las finanzas, y requirió licencias gubernamentales para la compra de equipo extranjero y para la posesión de cuentas bancarias en monedas extranjeras. Amenazó con multas y confiscaciones a todos aquellos comprometidos en las fugas masivas de capitales. Negoció con la Unión Soviética la compra de gasolina a precios un 18 por ciento más baratos que los ofrecidos en el mismo período por las compañías petroleras británicas y norteamericanas. Insistió en el derecho a comerciar libremente con todos los países, y a principios de mayo reanudó las negociaciones con los mismos banqueros que habían preparado el crédito cancelado al gobierno Aznar[20]. Pero la quema de iglesias del 11 de mayo hizo que los bancos rompieran las negociaciones. Entonces él se dirigió al Banco de Francia, en el que depositó 257.000.000 de pesetas oro (unos veinte millones de dólares), como garantía de un préstamo destinado a respaldar la peseta contra una ulterior depreciación. En términos generales, en estas primeras semanas, los círculos financieros internacionales indicaron su falta de confianza y el mundo español de la riqueza, en una gran proporción, declaró la guerra a la República, con lo que el nuevo régimen se vio obligado a responder al desafío.

De acuerdo con el Pacto de San Sebastián, el Gobierno provisional pensó en celebrar elecciones lo antes posible para elegir unas Cortes Constituyentes. Para que estas elecciones fueran completamente libres y representativas, decretaron el 8 de mayo que podrían votar todas las personas mayores de veintitrés años, incluyendo a las mujeres y los clérigos. Para evitar que los caci-

ques municipales dominaran la campaña, prescribieron que los diputados serían elegidos por provincias y no por municipios, asignando un diputado por cada 50.000 personas. Al mismo tiempo los dirigentes responsables temían que saliera elegida una cámara sin una mayoría trabajadora. En Italia, la falta de una tal mayoría había paralizado a menudo, y al final acabó por desacreditar, a la Monarquía parlamentaria, y el mismo problema se había presentado repetidamente en la experiencia de la tercera República francesa y en la joven República alemana. En España, sólo los socialistas poseían una organización de partido coherente. De aquí que el decreto del 8 de mayo pidiera la preparación de listas de coalición y estipuló que en cada provincia la lista mayoritaria recibiría el 80 por ciento de los escaños y la minoritaria el 20 por ciento. El procedimiento no era obligatorio y se hicieron complicados arreglos para distribuir los escaños allá donde varios partidos presentaban a los candidatos; pero el decreto evidentemente animaba a la formación de coaliciones y hacía teóricamente posible que una pequeña mayoría retuviera los cuatro quintos de los escaños.

Las elecciones fueron dispuestas para el 28 de junio y la campaña electoral despertó más interés y apasionamiento que ninguna otra de las celebradas hasta entonces en España. Los jefes conservadores estaban asustados por el aumento del radicalismo en una opinión pública largo tiempo reprimida. En Oviedo, el dirigente del Partido Reformista, Melquíades Álvarez, una figura prestigiosa de la oposición parlamentaria anterior a 1923, amenazó con retirar su candidatura si los «rojos» se interferían en la campaña de su partido. Amigos de Alcalá-Zamora le insistieron que aceptara un puesto en la lista de Valencia, porque era muy posible que las izquierdas lo derrotaran en la provincia de Córdoba, de donde era oriundo. En Levante muchos anarquistas estuvieron tentados de votar, a pesar de la abstención oficial de sus organizaciones. Sabiendo esto, los radicales de Alejandro Le-

rroux y los radicalsocialistas de Marcelino Domingo trataron de atraerse los votos anarquistas, con promesas demagógicas muchas de ellas de naturaleza marcadamente anticlerical, encaminada a esos fines electorales.

La campaña fue simultáneamente un estallido de pasiones largamente contenidas y una muestra de civismo, dependiendo de la personalidad de los candidatos y de la madurez de sus auditorios. En Cataluña, el País Vasco y Galicia, los candidatos pidieron la autonomía de sus respectivas regiones, a veces razonándola en bases económicas e históricas, a veces con demagogia chauvinista. Apenas si hubo candidatos confesadamente monárquicos; pero los candidatos agrupados en torno de la bandera de los agrarios eran considerados como tales, tanto por amigos como enemigos. Los oradores socialistas hablaron en favor de todo, desde un régimen liberal parlamentario hasta una dictadura del proletariado. En las zonas mineras y en las ciudades portuarias, los obreros militantes se hicieron oír en una campaña política casi por primera vez en la historia de España. Se opusieron muchas pegas y hubo algunas luchas callejeras. En las votaciones las izquierdas se beneficiaron indudablemente de la confusión que reinaba no sólo entre los monárquicos, sino incluso entre los moderados, que vieron a figuras como la de Alcalá-Zamora a punto de ser derrotadas.

Al analizar el resultado de las elecciones, se pueden dar tan sólo números aproximados. La mayoría de los partidos estaban muy poco organizados, y en el caso de las coaliciones, los dirigentes decidieron sobre la distribución de los escaños, y muchos personajes importantes representaban tendencias, pero no estaban afiliados formalmente a ningún partido. La expectación del cambio, la atmósfera de la campaña y las disposiciones de la ley electoral produjeron una fuerte victoria para la coalición de los republicanos de izquierda y los socialistas, que consiguió casi 250 escaños, de los cuales 120 eran socialistas y ochenta fueron

atribuidos a los partidos de Manuel Azaña, Marcelino Domingo y Álvaro de Albornoz. Ésta mayoría izquierdista contaba asimismo con los votos de unos treinta republicanos catalanes de la Esquerra y de 20 republicanos federales de Galicia. Formando el centro de la nueva cámara había unos 100 radicales, seguidores del «republicano histórico» de Alejandro Lerroux. Los radicales eran a la vez antisocialitas y anticlericales y representaban en gran medida los elementos de la clase media que estaban resentidos con el orden antiguo, pero que carecían de programa propio. Unos ochenta diputados podían ser clasificados como de derechas: un grupo de treinta republicanos conservadores divididos entre los seguidores de Alcalá-Zamora, Miguel Maura y Melquíades Álvarez; otro de 25 agrarios, que representaban a los terratenientes de las zonas trigueras y Andalucía y considerados antirrepublicanos; unos diez diputados conservadores de la Lliga Catalana y 14 nacionalistas vascos, conservadores y fervorosos católicos[21].

Las nuevas Cortes estaban, pues, muy inclinadas hacia la izquierda e incluían muchos hombres sin experiencia política y bastantes que eran casi desconocidos de los dirigentes de sus respectivos partidos; pero hallábanse presentes todos los jefes conocidos de los partidos políticos organizados y tanto las opiniones conservadoras como izquierdistas regionalistas estaban representadas. La asamblea incluía también un grupo selecto de intelectuales sin partido que estaban ansiosos por contribuir a la construcción de una nueva España: el filósofo Ortega y Gasset, los distinguidos escritores Unamuno y Pérez de Ayala, el doctor Gregorio Marañón, los famosos juristas Felipe Sánchez Román y Ángel Ossorio y Gallardo. La representación del Partido Socialista incluía también algunos de los universitarios más prestigiosos de la nación: Jiménez de Ansúa, especialista de derecho penal en la Universidad de Madrid; Julián Besteiro, profesor de lógica en Madrid; Juan Negrín profesor de fisiología de renom-

bre internacional y secretario de la Junta de la ciudad Universitaria que acababa de ser construida al noroeste de la capital. Aun reconociendo que la España conservadora se hallaba mal representada proporcionalmente, se puede decir con toda sinceridad que las nuevas Cortes incluían portavoces muy capacitados de todas las tendencias políticas y los más distinguidos representantes de las corrientes encontradas de la *élite* intelectual de la nación.

Capítulo 3

LA REDACCIÓN DE UNA CONSTITUCIÓN

CON el colapso de la Monarquía y la proclamación pacífica de la República, todo el mundo comprendió que ésta era una oportunidad única para transformar España. Al mismo tiempo los incendios de iglesias y la violencia esporádica de la campaña electoral creó a la vez un sentimiento de urgencia y de inquietud. A principios de julio, antes de que se reunieran las Cortes, el país experimentó su mayor pugna laboral desde el 14 de abril. La huelga de los empleados de la Telefónica del 4 de julio fue declarada por los anarquistas y estaba dirigida claramente a poner en una situación embarazosa a los ministros socialistas del Gobierno provisional. La Compañía Telefónica Nacional de España era una subsidiaria de la American Telephone and Telegraph Company. Pocos años antes había sido negociado un contrato a largo plazo con el Gobierno de Primo de Rivera y, en el momento de la firma, los socialistas acusaron al rey de venderse al capitalismo americano y de haber recibido en el trato un paquete gratuito de acciones. En Julio de 1931, el ministro socialista de Hacienda, Indalecio Prieto, estaba haciendo todo lo posible para tranquilizar a los acreedores de España, cortar las fugas de capitales y detener la baja de la peseta.

Los obreros y empleados de la Telefónica, afiliados a la CNT, escogieron este momento para desafiar a la compañía controlada

por los norteamericanos. La huelga paralizó la mayoría de los servicios en Barcelona y Sevilla, pero sólo obtuvo un éxito parcial en las otras provincias. Los socialistas apoyaron la determinación del Gobierno de mantener el servicio y los trabajadores de la UGT sustituyeron a los huelguistas de la CNT en Madrid y Córdoba. La prensa socialista calificó las tácticas anarquistas de infantiles y provocadoras y acusó a la CNT de estar dominada por pistoleros[22]. En sus esfuerzos para llegar a un arreglo, el coronel Macià alego su jurisdicción en Cataluña, mientras que Largo Caballero insistía en que el Ministerio de Trabajo era la única autoridad competente en toda España.

Habiendo fallado en lograr un paro general en la nación, los anarquistas convocaron huelgas generales en apoyo de los huelguistas de la Telefónica, logrando conseguirlo el 20 de julio en Sevilla. Con la doble justificación de que la huelga era organizada por pistoleros y que los teléfonos eran un servicio público esencial, el Gobierno declaró el estado de guerra en Sevilla el día 22. La artillería redujo el cuartel general de la CNT y patrullas fuertemente armadas de la policía recorrieron las calles; hacia el día 29 la huelga estaba quebrantada y el orden restablecido, al costo de treinta muertos y 200 heridos. Mientras tanto, en Barcelona, la huelga fue disminuyendo en intensidad poco a poco. El coronel Macià declaró que él jamás habría tratado a los huelguistas con tal severidad como la empleada por el Gobierno central, y Luis Companys, jefe de la delegación de la Esquerra en las Cortes, negóse a unirse al voto de confianza al Gobierno después de que el orden fuera restablecido en Sevilla[23].

La huelga de la Telefónica tuvo su origen en la rivalidad entre los sindicatos socialistas y anarquistas, en la impaciencia de obreros ingenuos que durante años habían estado escuchando que la compañía era un perverso monopolio extranjero, y en el igualmente ingenuo deseo de los anarquistas de poner a prueba al nuevo Gobierno. Los anarquistas descubrieron que una Repúbli-

ca los podía tratar con la misma severidad que un Gobierno monárquico. Al mismo tiempo y, puesto que los funcionarios catalanes criticaron acerbamente a Maura, se vieron tentados a enfrentar Madrid contra Barcelona. Los socialistas se hallaron en la incómoda posición de tener que defender una compañía extranjera, cuyo contrato habían criticado duramente y actuando de quebrantadores de huelga contra sus hermanos de la clase obrera.

Las Cortes recién elegidas comenzaron sus trabajos con el fondo dramático de la huelga de la Telefónica. También honraron la memoria de la Revolución Francesa, celebrando su primera sesión el 14 de julio, día de la toma de la Bastilla. La redacción de una Constitución fue confiada a una comisión cuyos dirigentes eran Jiménez de Asúa y Ossorio y Gallardo. Jiménez de Asúa pertenecía al ala moderada del Partido Socialista. Como catedrático de derecho en la Universidad de Madrid, era muy conocido por sus estudios sobre jurisprudencia constitucional y criminal. Ossorio había sido abogado en ejercicio y una importante figura política durante casi treinta años. En las Cortes de la Monarquía constitucional fue uno de los seguidores del gran presidente del Consejo de ministros conservador, Antonio Maura, y fue gobernador civil de Barcelona de 1903 a 1909. Había sido ministro de Obras Públicas y también presidente del Colegio de Abogados de Madrid. Como el presidente del Gobierno provisional, Alcalá-Zamora, fue monárquico hasta que se convenció de que Alfonso XIII no restauraría jamás las normas constitucionales que habían prevalecido de 1876 a 1923. En 1930 fue el abogado defensor de Alcalá-Zamora y de otros dirigentes republicanos encarcelados. A la tarea de preparar una Constitución aportó su larga experiencia política y unos puntos de vista moderadamente conservadores.

El comité constitucional presentó su proyecto a las Cortes el 18 de agosto, y entre esa fecha y el 9 de diciembre, los diputados debatieron y forjaron la Carta de una República decididamente

democrática y laica y potencialmente descentralizada. España fue declarada una «República democrática de trabajadores de toda clase», afirmación que reflejaba el ardor igualitario de los socialistas. Los poderes legislativos y ejecutivos se concentraban en un Parlamento unicameral. Todas las elecciones para las Cortes, diputaciones y municipios deberían efectuarse por el procedimiento del sufragio universal, directo y secreto. El artículo 29 garantizaba el derecho del *habeas corpus* y el 94 prometía la justicia gratuita para los necesitados y un poder judicial independiente. Las Cortes prefirieron el sistema unicameral debido a la fuerte tendencia de las cámaras altas al conservadurismo. Proveyeron un freno contra los abusos del poder legislativo creando el Tribunal de Garantías Constitucionales, encargado de determinar la constitucionalidad de las leyes y con jurisdicción para mediar en los conflictos entre el Gobierno central y las regiones autónomas. La Constitución protegía los derechos individuales y la propiedad, pero, al mismo tiempo, afirmaba en el artículo 44 que las riquezas de la nación podrían ser expropiadas mediante indemnización si convenía a los intereses sociales comunes, haciendo así posible una evolución hacia el socialismo.

Las Cortes dieron fácilmente su aceptación a los principios de la supremacía legislativa y de la independencia del poder judicial. La definición de lo que era poder ejecutivo fue, sin embargo, más difícil. Los diputados temían los abusos de un fuerte poder ejecutivo. Todos sabían de qué modo Alfonso XIII había hecho y deshecho gabinetes de acuerdo con sus sentimientos personales hacia los principales dirigentes políticos y cómo había cuidado de que sus favoritos ascendieran rápidamente en el ejército y la Iglesia. La mayoría de los diputados lo consideraban responsable del golpe de estado de 1923, por el cual quedó suspendida la Constitución y se estableció una dictadura militar. Así que era esencial limitar los poderes del presidente; pero, por otra parte, no debía ser una mera figura decorativa. Los legisla-

dores constitucionales, muchos de los cuales habían estudiado en Alemania, copiaron de la Constitución de Weimar la noción de un poder presidencial moderador, mucho más necesario en España debido a la falta de Senado.

Según el artículo 71 el presidente sería elegido por un colegio electoral por un período de seis años y no podría ser inmediatamente reelegido. El artículo 75 le permitía nombrar y retirar libremente al presidente del Consejo de ministros. El artículo 76 afirmaba que, de acuerdo con el Gabinete, podría proponer a las Cortes que reconsideraran proyectos de leyes que a su juicio podrían contravenir la Constitución. El artículo 81 le autorizaba a disolver dos veces las Cortes y el 83 le daba un poder de veto equivalente al de un presidente de Estados Unidos. Cada uno de estos amplios poderes estaba cuidadosamente limitado por otras causas. Su función positiva más fuerte era el poder para nombrar al primer ministro, y en un país con muchos partidos políticos pequeños era una tarea difícil que podía afectar grandemente la estabilidad del régimen. Para evitar cualquier posible abuso de la iniciativa, la Constitución dejaba bien en claro que sólo un presidente del Consejo de ministros que gozara del apoyo de la mayoría de los diputados podía ocupar el cargo. El artículo 84 declaraba también que «los actos y mandatos del presidente» no serían válidos a menos que llevaran la firma de un ministro del Gobierno. El poder para disolver las Cortes incluía un freno poderoso: en el caso de una segunda disolución, el primer acto de las nuevas Cortes sería el determinar la necesidad de tal disolución. Si la nueva Cámara se mostraba desfavorable a la acción del presidente, sería automáticamente separado del cargo. Los diputados insertaron esta cláusula en el artículo 81 para asegurarse contra un presidente obstinado que pudiera contrariar la voluntad de los votantes convocando repetidamente nuevas elecciones. Finalmente, el poder de veto permitía al presidente suspender la promulgación de leyes que él hallara incompatibles. Pero

entre 1876 y 1923 los reyes constitucionales de España no habían ejercido jamás aquel poder, y este precedente haría que el presidente se abstuviera también de ejercerlo.

Así que el presidente español tenía responsabilidades muy importantes, aunque cuidadosamente limitadas. Tenía que escoger la persona mejor calificada para gobernar con unas Cortes determinadas; tenía el poder de aconsejar en el terreno de la constitucionalidad de las leyes propuestas. Si quería romper un precedente, podía vetar las leyes y podía disolver las Cortes una vez en su mandato de seis años bajo su personal responsabilidad. Delimitando tan cuidadosamente la iniciativa del presidente, los redactores de la Constitución pensaron enteramente en términos de los precedentes europeos, principalmente en los de la tercera República francesa, con la cual se identificaban emocionalmente los liberales republicanos y en la República alemana de Weimar, admirada particularmente por sus legisladores constitucionales. No consideraron las posibles analogías entre su situación y la de las repúblicas de Hispanoamericana de habla española. Las revoluciones mexicanas de 1858 y de 1911-1920, las experiencias de Irigoyen en la Argentina a partir de 1916 y de Alessandri en Chile desde 1920, habían indicado todas ellas que en el mundo hispánico el avance de la democracia política y económica requería un fuerte y afirmativo poder presidencial[24].

El conflicto más importante en la elaboración de la Constitución fue el relativo a las relaciones entre la Iglesia y el Estado. Bajo el Concordato de 1851, el catolicismo romano era reconocido como la religión oficial de España. El Gobierno provisional había proclamado la libertad religiosa por decreto, y el artículo 3 de la Constitución declaraba que el Estado no tenía religión oficial. El Vaticano protestó contra estas medidas, considerándolas violaciones unilaterales del Concordato. Sin embargo, la separación de la Iglesia y el Estado habría sido negociable y una gran proporción de católicos la favorecía. La disensión crítica se debió

a las numerosas restricciones futuras que se iban a imponer sobre las actividades de la Iglesia. El artículo 26 declaraba que el presupuesto para el sostenimiento del clero secular debería ser eliminado al cabo de dos años. Las numerosas órdenes, que en 1931 contaban con unos 45.000 frailes y monjas, tenían que registrar sus bienes, así como declarar las cifras de sus ingresos e inversiones. Se les permitiría retener tales propiedades tan sólo si eran directamente necesarias para sus funciones, y tendrían que someterse a las leyes vigentes sobre impuestos.

A decir verdad, estas cláusulas no eran más radicales que aquéllas que condujeron a la separación de la Iglesia y el Estado en Francia en 1905, y el intento de controlar las actividades del clero regular era una simple repetición de los esfuerzos hechos por varios gobiernos monárquicos desde 1887 para registrar las órdenes a través de una ley de Asociaciones. El artículo 26 proclamaba también, sin embargo, que las órdenes no se dedicarían a actividades comerciales, industriales o a la enseñanza no confesional. Si esta cláusula hubiera sido puesta en práctica, el clero regular se habría visto reducido a ejercer funciones médicas o caritativas, a la enseñanza de sacerdotes y a los trabajos agrícolas para su subsistencia.

El debate sobre el artículo 26 fue el primer conflicto revolucionario en la historia de la joven República. Durante más de mil años la Iglesia había sido, aparte de la Monarquía, la institución más poderosa de España. Su derecho a la enseñanza apenas si había sido puesto en duda hasta finales del siglo XIX, y siempre había intervenido en grandes empresas económicas. En 1837 un Gobierno liberal la había desposeído de sus fincas rusticas, pero la Iglesia seguía dedicándose a actividades comerciales e industriales. Sus escuelas, particularmente las de segunda enseñanza, eran en 1931 una tremenda fuente de ingresos. Realmente nadie podía medir con precisión la importancia de las escuelas de la Iglesia o la extensión de su riqueza, y nadie parecía fijarse en el

hecho de que el número de frailes y monjas llevaba varias décadas declinando. En los apasionados pero cuidadosamente meditados discursos de Fernando de los Ríos (socialista) y Álvaro de Albornoz (radical socialista) por un lado y de Gil Robles (católico) y Antonio de Pildaín (canónigo lectoral de Vitoria y diputado vasco) por el otro, se ocuparon de la historia de la Iglesia española desde los tiempos de los visigodos hasta el presente. La República era identificada con la lucha contra la Inquisición, con los erasmistas del siglo XVI, los afrancesados del siglo XVIII y los krausistas de los siglos XIX y XX. La defensa de la Iglesia era identificada con la misión nacional de España en la Reconquista y con la defensa de la España contemporánea contra los pecados del liberalismo y el materialismo. En cuanto se abrieron las compuertas para la riada, ya nadie pudo reflexionar en calma sobre la necesidad de unas nuevas relaciones entre la Iglesia y el Estado.

Mientras tanto, la Iglesia supuso que iba a ser despojada por la República. El cardenal Segura, que todavía era primado de España, dio instrucciones desde Francia de que fueran vendidas propiedades de la Iglesia, instrucciones que fueron descubiertas cuando el emisario pasó la frontera. El Gobierno respondió el 20 de agosto con un decreto prohibiendo la venta, transferencia o hipoteca de las propiedades eclesiásticas, y al decreto siguió una demanda formal de que el cardenal fuera depuesto del arzobispado de Toledo[25]. Pío XI, que había sido nuncio en Polonia inmediatamente después de la revolución rusa y que llevaba forcejeando casi una década con los dirigentes revolucionarios de México, estaba ansioso por minimizar los daños que podía sufrir la Iglesia en España. También fue aconsejado por su nuncio en Madrid, monseñor Tedeschini, quien le indicó que el cardenal Segura era demasiado intransigente y monárquico para tratar razonablemente con las autoridades republicanas. El papa pidió entonces al cardenal que resignara el cargo; pero este último contestó que en conciencia no podía dimitir voluntariamente; aun-

que los deseos del papa eran órdenes para él. Su renuncia fue anunciada a finales de septiembre[26].

En la primera semana de octubre el debate en las Cortes sobre el artículo 26 llegó a su punto culminante. El socialista Fernando de los Ríos, ministro de Justicia, conmovido por la violencia de la oratoria clerical en la Cámara, se levantó para recordar a los diputados con frases emotivas la desinteresada labor caritativa y medica realizada por muchas órdenes. Ante tales comunidades, dijo, uno olvidaba las diferencias de dogma y veía tan sólo la grandeza de unas almas encendidas de amor. Unos días después, Manuel Azaña tratando del problema religioso en su conjunto, preguntó con cierta ironía a De los Ríos sobre el cuadro ideal que había trazado y diciéndole si no recordaba la función proselitista de aquellas hijas de la caridad. Y lo que era verdad en los hospitales lo era mucho más en el caso de las escuelas. La República, dijo Azaña, no podía permitir que la Iglesia continuara interviniendo en la enseñanza no religiosa. E insistió en que no era una cuestión de libertad, sino de salud pública.

Azaña, sin embargo, insistía en que el artículo 26 era necesario en un campo mucho más amplio. Al defender el derecho de la Iglesia a controlar la educación, los clericales siempre habían pretendido que España era una nación predominantemente católica. Pero replicó Azaña: «Lo que constituye la situación religiosa de un país… no es la suma numérica de creencias y creyentes, sino el esfuerzo creativo de su espíritu, la dirección seguida por su cultura. En este sentido España había sido católica en el siglo XVI, aunque con muchas e importantes excepciones, y España había dejado ya de ser católica aunque hubiera millones de creyentes. La tarea de las Cortes era organizar instituciones correspondientes a esta verdad. En las presentes circunstancias la Iglesia no tenía derecho a utilizar al Estado como su brazo secular, que le pagara los gastos del culto, impusiera sus puntos de vista espirituales a la juventud y controlara tales funciones como el

matrimonio y el entierro. El artículo 26 no estaba pensado para despojar a la Iglesia, sino para privarla de los privilegios especiales de que había disfrutado. Sería ridículo —dijo Azaña— expulsar a las muchas órdenes pequeñas; pero la inmensa influencia educativa de la Iglesia tenía que ser quebrantada si se había de construir una República laica y democrática[27]».

Los diputados, en general, reconocieron la naturaleza revolucionaria del artículo 26 y casi la mitad de ellos evitaron participar en la votación final. Mientras que habían aprobado el artículo 3, que separaba la Iglesia del Estado, por 278 votos contra 41, en el caso del artículo 26 la votación fue de 178 contra 59[28]. Muchos de los que habían votado por el artículo 26 opinaban como el catalán moderado Nicolau d'Olwer, que era ministro de Economía y que dijo a los periodistas que había votado a favor de una ley imperfecta porque temía que si no aceptaba el artículo 26, unas Cortes cada vez más anticlericales podrían haber votado luego una ley mucho más intransigente.

La aprobación del artículo 26 dio lugar a la primera crisis gubernamental del nuevo régimen. Los dos católicos practicantes del Gobierno provisional, el presidente del Consejo de ministros Alcalá-Zamora y el ministro de la Gobernación Miguel Maura, presentaron la dimisión. Hubo manifestaciones proclericales en las ciudades vascas y navarras y desfiles anticlericales en Madrid y muchas ciudades meridionales. El Vaticano comentó que en su opinión la República era un «régimen transitorio». En las Cortes, el joven diputado católico por Salamanca, José María Gil Robles, consideró el artículo 26 como un ataque frontal contra las mejores tradiciones españolas y pidió una completa revisión de la Constitución. Maura, entrevistado por los periodistas, pudo a duras penas aclarar su posición. Dijo que no había dimitido con la intención de atacar la obra del Gobierno provisional en su conjunto, pero que su conciencia no le permitía aprobar el artículo 26 y que en un régimen parlamentario era importante que

el Gabinete estuviera unificado en los principios fundamentales. Había dimitido para facilitar tal unidad. Consideraba el artículo 26 inaplicable y estaba seguro de que las mismas Cortes se darían cuenta de ello andando el tiempo. En su opinión, la fraseología de Gil Robles era un llamamiento a la guerra de religión, lo cual podría causar un daño incalculable al país. La crisis sobre el artículo 26 cristalizó dos formas diferentes de oposición a la mayoría anticlerical. Una era la «leal oposición» de Maura, aceptando las instituciones y la buena fe de la República; la otra era un ataque generalizado contra la República laica y reformista como tal[29].

Mientras tanto, Manuel Azaña se convirtió en el dirigente natural de la coalición mayoritaria de republicanos liberales, socialistas y anticlericales. Había alcanzado una gran reputación por su claridad y su competencia técnica como ministro de la Guerra. Sus ideas y su gran elocuencia habían causado una tremenda impresión durante el debate sobre el artículo 26. Abogaba por la democracia política y la supremacía civil en el Gobierno. Para él los problemas económicos eran importantes, pero secundarios, y los consideraba de un modo pragmático, lo que le permitía colaborar muy bien con los partidarios del liberalismo económico y los socialistas moderados. Se convirtió en jefe del Gobierno el 16 de octubre y las dos primeras leyes promulgadas por su Gabinete fueron muy características de él. El 29 de octubre las Cortes aprobaron una ley para la defensa de la República, ley destinada a castigar la violencia en las disensiones políticas, sociales y religiosas y la difamación contra el nuevo régimen. La República, con su Constitución todavía incompleta, estaba siendo violentamente atacada por carlistas y clericales en el Norte, y por los anarquistas en el Éste y el Sur. Aun cuando los alborotadores eran detenidos, hubo muchos casos de complicidad entre ellos y los policías y jueces antirrepublicanos. Debemos admitir que era una contradicción que un régimen democrático tratara de procu-

rarse poderes policíacos excepcionales; pero Azaña replicaba que lo contrario sería dejar un Gobierno escrupulosamente pacifista a merced de sus oponentes reaccionarios y revolucionarios. La ley que él requería debería tener una aplicación limitada a la vida de las Cortes Constituyentes, y daba al Gobierno poder para imponer multas de hasta 10.000 pesetas y deportar individuos dentro de la Península o a las provincias africanas. A la semana siguiente el Gobierno decretó una reducción del 50 por ciento de los funcionarios civiles y un aumento del 20 por ciento en los sueldos de las fuerzas reducidas. Con estos dos actos, Azaña indicaba su determinación de gobernar con firmeza, cortar el despilfarro administrativo y ofrecer mejores pagas por un mejor trabajo.

Durante las últimas semanas de la redacción de la Constitución, las Cortes también juzgaron al exrey *in absentia*. La Comisión que preparó los cargos acusó a Alfonso XIII de lesa majestad sobre las siguientes bases: descuido de sus deberes como soberano constitucional, complicidad en la inmoralidad administrativa y complicidad en el golpe de Estado que estableció la dictadura de Primo de Rivera. El conde de Romanones habló en defensa del rey. La mayoría de las Cortes alteró la expresión lesa majestad por alta traición. Como a la vez habían abolido la pena de muerte en la nueva Constitución, sentenciaron al rey ausente, no a muerte, sino a destierro perpetuo. El 9 de diciembre el texto completo de la nueva Constitución fue aprobado por una votación de 368 contra 38, con unas cuantas abstenciones. A la semana siguiente don Niceto Alcalá-Zamora, que había dimitido a la presidencia del Gobierno en octubre, aceptó su nombramiento como presidente de la República española, y tras consultar con los dirigentes de los partidos en la Cámara, pidió a Manuel Azaña que continuara como primer ministro.

La nueva Carta reflejaba con bastante exactitud los deseos de la mayoría de las Cortes. Era democrática y laica. Consagraba la supremacía del poder legislativo. Sería compatible con una eco-

nomía mixta que contendría a la vez elementos capitalistas y socialistas. Sin embargo, los debates habían demostrado que la Constitución, tal como había sido redactada, sería inaceptable para la opinión católica, no sólo por las cláusulas relativas a las órdenes religiosas en el artículo 26, sino también por el artículo 48, que declaraba que la educación en todos los grados sería laica. Algunos de los intelectuales preeminentes que habían dado la bienvenida a la República estaban igualmente desilusionados. El 6 de diciembre, justo unos días antes de la votación final, Ortega y Gasset pronunció una sonada conferencia pública titulada «Rectificación de la República»; en ella daba buena acogida a las cláusulas sociales de la Constitución, sobre todo dado que la clase trabajadora estaba insuficientemente representada en el nuevo régimen. Pero se hallaba preocupado al ver a la República minada por el espíritu de facción. El exacerbado regionalismo, el exagerado anticlericalismo y la miope defensa de los privilegios por los reaccionarios amenazaban con ahogar al nuevo régimen en su infancia. Pidió un «Estado integral, superior a todo partidismo» y «un partido de amplitud nacional», que dirigiría desde arriba la necesaria revolución. Su fraseología indicaba claramente su desengaño ante los resultados del sufragio universal y la necesidad de una autoridad inteligente y paternalista en manos de una *élite*[30]. Ortega ya había publicado su famosa obra *La rebelión de las masas*, en la cual hablaba con aprensión de la irrupción de las masas incultas en la vida política europea durante el siglo XX. Como miembro de las Cortes Constituyentes había sido testigo presencial de algunas de las manifestaciones de tal irrupción. Él y otros escritores, especialmente Unamuno se hallaban profundamente conturbados. Ellos habían sido destacados oponentes intelectuales de Primo de Rivera. Unamuno había visitado con frecuencia la Casa del Pueblo de Salamanca y marchado del brazo con Largo Caballero en el desfile del Primero de Mayo. Conscientemente o no, estos hombres habían esperado ser escuchados

como pensadores veteranos por la nueva generación de republicanos. En vez de eso se encontraron desbordados en las Cortes por la demagogia anticlerical; por las frases incorrectas, por los ofensivos acentos de los catalanes, gallegos y andaluces; por todas las envidias, mezquindades y pasiones irracionales de los parías sociales. Como intelectuales universitarios, no estaban preparados para las crudas exigencias o los malos modales. Habían conocido a Azaña como un escritor de éxito, un hombre moderado que era presidente del Ateneo de Madrid; pero no dejaba de ser una figura menor en el firmamento intelectual. Y ahora había pasado a ser el dirigente de la mayoría parlamentaria, colocando sus dones literarios y oratorios al servicio de las fuerzas anticlericales y antinacionales. Pero no lo atacaron ni se retiraron de las Cortes. Sin embargo, en diciembre de 1931 habían perdido su entusiasmo inicial por la República. En sus discursos Ortega expresaba su opinión de que Miguel Maura era el hombre que podría formar y dirigir con éxito el «partido de amplitud nacional». Pero Maura era un anatema para los monárquicos, quienes creían que el hijo de Antonio Maura se había vuelto republicano meramente por resentimiento, ante el modo como el rey trató a su padre. Don Miguel era un «resentido» y un traidor a su clase; en vez de aceptar su jefatura, boicotearon su carrera de abogado, pues en el bufete que había heredado del padre se habían manejado los asuntos de muchos de los más importantes aristócratas de España[31]. Para los católicos, Maura era el ministro de la Gobernación que fue incapaz de prevenir los incendios de iglesias el 11 de mayo. Su futuro político era, por lo tanto, poco prometedor.

A finales de 1931 el Gobierno Azaña podía contar con el apoyo de los republicanos liberales y los socialistas, la oposición de monárquicos y católicos, la hostilidad de los anarquistas y la desilusión de destacados intelectuales. Los principales conflictos parlamentarios habían girado sobre las relaciones entre la Iglesia y el Estado. El nuevo presidente era un católico y su jefe de Go-

bierno un anticlerical. El problema del futuro sería consolidar la República en estas circunstancias.

Capítulo 4

LA POLÍTICA DEL GOBIERNO AZAÑA

MANUEL Azaña actuó como jefe del Gobierno desde octubre de 1931 a septiembre de 1933. Durante 1933, una creciente oleada de oposición obstruyó el programa del Gobierno; pero en los últimos meses de 1931 y en el año siguiente, el Gobierno Azaña mantuvo la iniciativa. Azaña se había convertido en presidente del Consejo de ministros en buena parte como resultado de su papel en la aprobación del artículo 26. En enero de 1932 las Cortes aprobaron nuevas leyes laicas: la primera ley del divorcio en España y la de secularización de cementerios. Hubo algunos casos de divorcio a los que se dio mucha publicidad, como el de Constancia de la Mora, nieta de Antonio Maura, que acabó con un desgraciado matrimonio de conveniencia volviéndose a casar (esta vez en una ceremonia civil) con el joven oficial de aviación Hidalgo de Cisneros. Pero el hecho asombroso fue la escasez de casos de divorcio. Los españoles de todas clases eran intensamente conservadores en esta materia. La clase media de Madrid y Barcelona aprovechó la nueva ley muy pocas veces y en muchas provincias no se dio un solo caso. Los cementerios pasaron a control secular sin grandes ceremonias en la mayoría de los lugares, aunque hubo algunas ciudades en las que el alcalde republicano, acompañado por la banda municipal tocando La Marsellesa, presidió la ceremonia pública del cambio. En

muchas ciudades había pequeñas porciones de terreno valladas, reservadas para los pocos ciudadanos obstinados que habían preferido un entierro civil. La ceremonia de la secularización a menudo incluía un ostentoso derribo de la tapia y se dijo que hubo casos en que las autoridades municipales aconsejaron a los ciudadanos que demandaran el matrimonio y el entierro civiles ahora que España había conseguido la libertad religiosa[32].

Desde el punto de vista de la Iglesia, tales actos eran a la vez ofensivos e ilegales, ya que, en teoría al menos, las relaciones entre la Iglesia y el Estado en España estaban todavía regidas por el Concordato de 1851, según el cual la religión católica debía ser mantenida como religión oficial en España. De conformidad con los preceptos de la Iglesia, el matrimonio debía ser un sacramento y no meramente una ceremonia civil, y toda la educación pública y privada debería conformarse a la doctrina de la Iglesia.

¿Cómo reacciona usted cuando se le posa una mosca en la oreja?



LERROUX: (el «republicano histórico» en espera de que la mayoría de Azaña se desintegre): «Cuando eso suceda me esconderé en mi capuchón y guardaré quince o veinte años de silencio».

AZAÑA: (ministro de la Guerra y presidente del gobierno): «No tiene salvación. En el momento en que sienta la mosca empezaré a golpear las mesas».

PRIETO: (ministro de Obras Públicas y dirigente socialista): «He pronunciado una serie de blasfemias, razón por la cual los socialistas estamos perdiendo votos».



GALARZA: (director general de Seguridad): «Instintivamente cubro mis gordas mejillas porque algunos bromistas piensan que fueron hechas para jugar a cachetadas».

LARGO CABALLERO: (ministro de Trabajo y dirigente sindical socialista): «Yo decreto la guerra civil, y eso es todo».

MACIÀ: (presidente de la Generalitat): «Si la mosca es mediterránea, no me muevo; pero si viene de Castilla, declaro la guerra a los españoles».

(Tomado de la revista satírica derechista *Gracia y Justicia*, 21 de mayo de 1932)

EL GOBIERNO AZAÑA VISTO DESDE LA DERECHA

Sin embargo, ya en el siglo XIX el Estado se había sentido coartado por la rigidez del Concordato. En las grandes ciudades aparecieron algunas escuelas privadas no religiosas y el matrimonio y entierro civiles eran posibles para aquéllos que los requirieran específicamente. En 1913 el Gobierno decretó que la instruc-

ción religiosa en las escuelas públicas no sería obligatoria para los niños cuyos padres profesaran otra religión. La dictadura de Primo de Rivera, por su parte, restableció la enseñanza religiosa obligatoria y un real decreto de 1924 amenazó con suspender a los maestros que expresaran ideas ofensivas para la religión católica[33].

En cuanto los gobiernos de la Monarquía constitucional trataban de reducir el monopolio de la Iglesia, la jerarquía ponía el grito en el ciclo alegando persecución. La secularización de cualquiera de las funciones bajo discusión constituía a la vez una violación del Concordato y un ataque contra la libertad religiosa, entiéndase por ello la libertad de la Iglesia para monopolizar esas funciones con la ayuda del Estado. Cuando la República acabó con la instrucción religiosa obligatoria y anunció su intención de introducir la legislación laica, la Iglesia respondió como en el pasado: el Gobierno estaba violando el Concordato y atacando la libertad religiosa[34].

Las leyes de enero de 1932 eran por lo tanto muy importantes en principio, aunque pocas personas solicitaron el divorcio o deseaban un entierro civil. Para los diputados, estas leyes continuaban la tradición liberal de la Monarquía constitucional y ponían fin a la orientación clerical de la reciente dictadura. Los republicanos identificaban el principio del control de un Estado neutral con la libertad individual mucho mayor disfrutada por los pueblos de Europa septentrional y occidental, Estados Unidos y los dominios británicos. También lo identificaban con los escritos de la Ilustración francesa y la tradición jacobina. De aquí las ceremonias de derribo de tapias, las bandas tocando La Marsellesa y la propaganda de que el matrimonio y el entierro civiles eran signos de «cultura», mientras que las ceremonias religiosas eran signos de superstición.

El artículo 26 pedía la disolución de todas las órdenes religiosas que constituyeran un peligro para el Estado, así como aqué-

llas que requirieran un voto especial además de los tres votos canónicos normales. La primera de estas disposiciones se aplicaba principalmente, y la segunda exclusivamente, a los jesuitas. En enero de 1932 el Gobierno Azaña decretó la disolución de la Compañía de Jesús y la confiscación de sus propiedades. Los jesuitas habían sido expulsados repetidamente por los gobiernos franceses, españoles e italianos de los siglos XVIII y XIX. Como orden particularmente disciplinada y como principales defensores del papado durante la Contrarreforma, los jesuitas habían sido tradicionalmente el «chivo expiatorio» en toda acción anticlerical en los países católicos. Y ahora esta disolución no hacía más que reflejar este extraordinario ánimo histórico. En la España de 1931 el famoso voto especial significaba tan sólo que los jesuitas se ponían incondicionalmente a las órdenes del papa para servir como misioneros en el extranjero[35]. En cuanto a la cuestión de peligro para el Estado, las referencias del Vaticano a la naturaleza transitoria de la República y el hecho de que fueran monárquicas la mayoría de sus altas dignidades, podía muy bien ser considerado un peligro potencial para el Estado; pero estos factores no podían referirse más a los jesuitas que a cualquier otra orden de la Iglesia. De hecho, los discípulos de los jesuitas que editaban *El Debate* eran los primeros católicos españoles eminentes en argüir que una sociedad católica era compatible con la República, y en recordar el ejemplo de León XIII al urgir el *ralliement* de los católicos franceses a la tercera República en la década de 1890.

Las causas más racionales de la disolución de los jesuitas eran su influencia educativa, su tremenda riqueza oculta y el poder económico que les daba tal riqueza. Regentaban dos escuelas de ingenieros que tenían fama de ser más eficaces y estar mejor equipadas que las del Estado, y muchos daban por supuesto que los alumnos graduados en estas escuelas ocupaban luego los mejores puestos en las industrias en expansión desde principios del siglo XX, aunque fuera debido a que los gobiernos monárquicos

no reconocían aquellos títulos de los jesuitas como válidos para ocupar puestos de funcionarios civiles[36]. Se sabía que la compañía era propietaria de extensas fincas y tenía intereses en la industria, incluyendo un paquete de acciones preferentes de la Compañía Telefónica, muchos títulos de la deuda pública y controlaba las compañías de electricidad y de tranvías de las grandes ciudades. Pero éstas, como otras numerosas formas de propiedad corporativa, no podían ser averiguadas porque no figuraban a nombre de los jesuitas. El ministro liberal Canalejas había propuesto en 1910 que se impusieran gravámenes a las propiedades de las órdenes religiosas, y los anticlericales más extremistas habían pedido su disolución. Ante esa amenaza, los jesuitas comenzaron a transferir ordenadamente sus propiedades a hombres de paja o a sociedades que eran legalmente los propietarios, pero que de hecho no hacían más que administrar las propiedades de la orden. La amenaza no se materializó en 1910, pero los jesuitas siguieron actuando con el supuesto de que un Gobierno más fuertemente anticlerical pudiera algún día hacerse cargo del poder, y cuando en 1932 fue disuelta la Compañía de Jesús, nadie, excepto sus abogados, uno de los cuales era el eminente y joven diputado católico Gil Robles, sabía qué es lo que exactamente poseían los jesuitas en acciones o fincas[37].

Cuando el Gobierno intentó confiscar las propiedades jesuíticas, se vio metido en un laberinto de detalles. La cuestión de los hombres de paja no era más que un aspecto del problema. Resultó imposible separar donaciones, emolumentos sacramentales, colectas de caridad e ingresos escolares de las rentas de las propiedades e inversiones. Era igualmente imposible determinar el verdadero coste del mantenimiento normal de los edificios, gastos del culto y las cantidades de dinero destinadas a las misiones en el extranjero. Sin embargo, el Gobierno pudo identificar unas 33 escuelas, además de las 47 residencias y los 79 edificios urbanos que esperaba utilizar como escuelas. En algunos casos, el Go-

bierno se vio frustrado por acciones legales que demostraron que los jesuitas no eran los propietarios, sino los inquilinos, de los citados edificios. En ciertos casos el Gobierno estableció escuelas públicas; en otros tuvo que enfrentarse con cierres de locales y huelgas de alumnos. A veces, los jesuitas se disolvían simplemente tal como la ley les ordenaba, pero continuaban rigiendo sus escuelas como corporaciones educativas privadas en las mismas condiciones de cualquier otra escuela particular. Ya que tanto se ha hablado de «expulsión» y de «persecución», es preciso recalcar que en la inmensa mayoría de casos el Gobierno fue muy puntilloso con los procedimientos legales, y los jesuitas tuvieron todas las oportunidades de burlar el decreto disolviéndose sólo de nombre. El principal resultado concreto de la orden de disolución fue que el Gobierno adquirió unas docenas de edificios, la legalidad de cuya ocupación estaba pendiente de la decisión de los tribunales y la eventual compensación que tendría que ser pagada. Los jesuitas decidieron por propio acuerdo retirar a muchos de sus sacerdotes y maestros más jóvenes de España; pero la marcha de estos hombres fue dada a conocer en la prensa mundial como la expulsión de los jesuitas[38].

Para los republicanos, tanto como para los clericales, aunque por motivos diferentes, las implicaciones del artículo 26 y la suerte de las órdenes religiosas estaban íntimamente relacionadas con la lucha para crear un sistema de escuelas laicas. Desde el 14 de abril, el Gobierno provisional había considerado que una de sus tareas más urgentes era la rápida expansión de las escuelas primarias del Estado. En 1931 las estimaciones sobre el índice de analfabetismo en España variaban del 30 al 50 por ciento de la población total. No había cifras en las que uno pudiera confiar sobre el número de niños que iban a la escuela o los grados que habían completado. La calidad del material escolar y de la instrucción variaba mucho. El único dato fijo del cual podemos partir es que existían unas 35.000 escuelas del Estado servidas

por una plantilla de 36 680 maestros y maestras. Como España era un país predominantemente rural, la mayoría de estas escuelas sólo tenían un aula, y si se quiere estimar su capacidad, los planificadores contaban 50 alumnos por escuela con maestro. Calculando entonces que las 35.000 escuelas existentes atendían de millón y medio a dos millones de niños, el ministerio de Instrucción Pública estimaba que en España eran necesarias otras 27.000 escuelas para atender de un millón a millón y medio de niños que en general no iban a la escuela.

El primer año de la República fue un año de fiebre de construcciones escolares. Mientras que Prieto luchaba contra la baja de la peseta y Maura con los problemas de orden público, Marcelino Domingo y Rodolfo Llopis se arremangaban los brazos en el ministerio de Instrucción Pública; Domingo como ministro, y Llopis, un socialista profesor de escuela normal, como director de Enseñanza Primaria. Sabiendo que la República estaba decidida a construir escuelas, siguieron adelante con la confianza que les daba la seguridad de que sus colegas del Gobierno y luego las Cortes Constituyentes aprobarían sus iniciativas. Los municipios debían proporcionar los solares y ayudar financieramente a la construcción de los edificios. El Gobierno central contribuiría con el 50 o el 75 por ciento de los gastos de construcción y pagaría el sueldo al maestro una vez que la escuela comenzara a funcionar. Cuando los funcionarios municipales, siguiendo la vieja costumbre, venían a Madrid a pedir al Gobierno que les ayudara a construir un nuevo puente, en el ministerio de Obras Públicas les contestaban que desgraciadamente no tenían dinero para atender tal petición, pero que si querían construir una escuela, en el ministerio de Instrucción Pública estarían encantados de poder ayudarles. Marcelino Domingo pasó los días más felices de su vida poniendo en marcha el plan de construcciones escolares y lloró amargamente cuando en octubre de 1931 le pidieron que cediera el ministerio a Fernando de los Ríos, el catedrático de

derecho socialista que se hallaba técnicamente mejor calificado, que no estaba en lo más mínimo celoso por la fama adquirida por Domingo, y que sin duda estaba ansioso por dejar el ministerio de Justicia tras el agotador debate sobre el artículo 26.

En marzo de 1932, De los Ríos comparó en las Cortes el progreso en las construcciones escolares bajo la Monarquía y bajo la República. De 1909 a 1931, el Estado había construido 11 128 escuelas, es decir, unas 500 anuales. En sus primeros diez meses la República había edificado 7000 escuelas, o sea un promedio diez veces más rápido que el de la Monarquía. Pero a finales de año pudo anunciar la terminación de unas 9600 escuelas primarias y la elaboración de un plan quinquenal para proveer las restantes necesarias hasta alcanzar las 27.000. Como el costo promedio de construcción de una clase era de 25.000 pesetas, el Gobierno razonó que un préstamo de 400.000.000 de pesetas para ayudar a los municipios durante los cuatro años siguientes completaría la construcción del mínimo de edificios necesarios para que todos los niños de España fueran a escuelas primarias.

Para proporcionar los maestros necesarios, el ministerio organizó unos cursillos para los muchos adultos que estaban en posesión del título de maestro, pero que trabajaban como funcionarios en otros servicios gubernamentales. Unos 15.000 hombres y mujeres con títulos de enseñanza se inscribieron en esos cursillos el primer año; pero como sólo había que cubrir 7000 puestos, era posible seleccionar los mejores. El promedio de sueldos a los maestros se elevó en un 15 por ciento entre 1931 y 1933, en un tiempo en que el costo de la vida permaneció estable. Tanto por estas mejoras económicas como por el entusiasmo público, la enseñanza se convirtió en una carrera más atractiva, y parecía razonable creer que en los cuatro o cinco años de construcción intensiva que se avecinaban, las escuelas normales y las universidades proporcionarían otros 20.000 maestros.

Pero por cierto número de razones el ritmo intensivo de construcciones escolares no iba a extenderse más allá de finales de 1932. Uno de los mayores obstáculos fue el presupuesto. El Gobierno provisional había empezado por dar prioridad a las consideraciones humanas antes que a las financieras; pero conforme transcurrían los meses, fue pareciendo que era más importante que hubiera un presupuesto equilibrado, no sólo para establecer el crédito internacional del nuevo régimen, sino para atender a los ruegos de los economistas republicanos, que consideraban los déficit anuales de la dictadura un escándalo nacional. Además de las razones económicas, los críticos podían señalar ejemplos específicos de despilfarro, casos de planes arquitectónicos imperfectos o de corrupción en la concesión de las contratas, que habían doblado y triplicado el costo original estimado para ciertos edificios.

La disputa laico-religiosa también se fue convirtiendo cada vez más en un lastre para el programa de construcciones escolares. La misma cifra de 7000 dada por Fernando de los Ríos sobre el número de escuelas creadas en los primeros diez meses llegó a ser un grito de batalla. Uno de los primeros actos del ministerio de Instrucción Pública fue pedir a los municipios que informaran del número de niños que asistían a las escuelas primarias religiosas. El total para toda España era de unos 350.000, y una vez más sobre la base de 50 alumnos por escuela, esta cifra significaba que la República necesitaba 7000 nuevas escuelas para sustituir a las que eran regidas por las órdenes religiosas. El ministerio había planeado además su programa total sobre la base de un estudio provincia por provincia; pero la respuesta de los municipios varió grandemente. En Alicante, la provincia natal de Llopis, que era una zona donde los republicanos y los socialistas eran muy fuertes, según el estudio se necesitaban unas 130 escuelas nuevas. Las autoridades municipales proporcionaron 104 edificios amueblados aun sin la ayuda gubernamental. En Madrid, con un mu-

nicipio que tenía una composición muy similar a la de la mayoría de las Cortes, el Gobierno y el Ayuntamiento cooperaron en la construcción de 174 escuelas que a finales de 1932 albergaban a 12 500 alumnos. Pero en la próspera y fuertemente católica provincia de Vizcaya, los municipios sólo ofrecieron 106 edificios, mientras que el estudio indicaba 219, y en la vecina Guipúzcoa, donde el estudio recomendaba 355 escuelas nuevas, los municipios abrieron 56. En muchas zonas rurales y unas pocas ciudades, los padres pusieron objeciones a la coeducación, y cuando el Gobierno ordenó que fueran retirados los crucifijos que colgaban de las paredes de las clases, muchas familias respondieron haciendo que sus hijos llevaran grandes crucifijos pendientes del cuello. Y también trataron (intimidándolos) de forzar a los maestros y maestras a que asistieran a misa.

Finalmente se hicieron muchas críticas con referencia a la calificación de los maestros. La minoría de las Cortes, y muchos críticos fuera del Gobierno, no aceptaron las calificaciones de aquéllos que habían aprobado los cursillos. ¿Por qué aquellos individuos no se habían dedicado a la enseñanza en tantos años? Debían de ser los que aprobaron con dificultad o los que se hicieron maestros porque era el medio más sencillo de conseguir un «título» y por tanto un empleo mejor. Los partidarios del Gobierno replicaban que no habían sido maestros porque la Monarquía no creó las escuelas suficientes, y recalcaban que más de la mitad de los maestros de las escuelas primarias religiosas no tenían títulos académicos de ninguna clase. A principios de 1933, casi 10.000 nuevas escuelas primarias podían considerarse el logro mejor tras dos años de esfuerzos, pero los progresos ulteriores quedaron paralizados por la apasionada polémica religiosa, en la cual casi todo el mundo pareció perder de vista que el objetivo original era el de proporcionar un mínimo de educación a todos los niños de España[39].

Durante su primer año como presidente del Consejo de ministros, Azaña extendió considerablemente las reformas militares que había iniciado en mayo de 1931 como ministro de la Guerra. En diciembre creó un cuerpo de suboficiales, dándoles mayor responsabilidad de la que por su rango habían ejercido anteriormente. Esta medida estaba calculada para democratizar y republicanizar el ejército y también estrechó el vacío profesional que había entre los oficiales y los suboficiales. Y reclutando candidatos a oficiales entre los suboficiales, el Gobierno esperó ensanchar la base social de la oficialidad del ejército. Ciertamente que el cuerpo de oficiales español estaba tradicionalmente abierto a todas las clases sociales. Las filas superiores de los ejércitos franceses y alemán a principios del siglo XX estaban mucho más dominadas por las familias aristocráticas y por las influencias de clase que las del ejército español. La ley de diciembre de 1931 no alteraba lo que era habitual en España, sino que extendía una práctica democrática ya existente[40].

En marzo de 1932, el ministro de la Guerra recibió autorización para pasar a la reserva a todo general que no hubiera recibido ningún nombramiento en el plazo de seis meses. Tal medida era absolutamente necesaria dado que el ejército reformado sólo tendría puestos para un tercio de los oficiales en activo a principios de 1932. El Gobierno intentaba también por este medio forzar al retiro a generales hostiles a la República. Entre los que seguramente tendrían que retirarse según los términos de esta ley, en cuanto fuera aprobada, había una serie de generales que en 1936 fueron de los más activamente implicados en la sublevación militar: Mola, Saliquet, Orgaz, Millán Astray y González de Lara[41]. La misma ley disponía que los oficiales que hubieran aceptado el retiro de acuerdo con el decreto de mayo de 1931 perderían sus pensiones si eran hallados culpables de difamación según la ley para la defensa de la República. Esta medida produjo un vivo debate en las Cortes y el general Fanjul encabezó la opo-

sición. Miguel Maura y Ángel Ossorio y Gallardo se opusieron a la cláusula temiendo las injusticias de que podrían ser víctimas las personas y las familias de unos 5000 oficiales recientemente retirados que pudieran en un momento dado criticar al Gobierno. Azaña prometió que el Gobierno sería muy prudente en la aplicación de esta ley; pero insistió que sería intolerable para la República el tener que pagar a sus enemigos[42].

Prosiguiendo las mejoras técnicas del equipo militar, Azaña creó en mayo de 1932 un cuerpo auxiliar de técnicos, el llamado *Cuerpo Auxiliar Subalterno del Ejército* (CASE). Anteriormente no había habido cuadro orgánico ni salarios regulares para los empleados civiles. La nueva ley procuraba un salario regular y una seguridad de empleo para el personal administrativo: armeros, mecanógrafos, mecánicos y obreros de la construcción encargados del mantenimiento de los edificios. Otra ley de septiembre de 1932 afectaba a la vez a la organización y al entrenamiento. Creaba un Cuerpo de tren para la más rápida entrega de los suministros y aumentaba grandemente el presupuesto de la aviación. Todos los candidatos para el cuerpo profesional de oficiales tendrían que servir seis meses de período activo antes de ingresar en una academia especializada y deberían seguir un cierto número de cursillos de artes liberales en una Universidad regular. Al mismo tiempo, Azaña redujo de cinco a dos las academias para la enseñanza de las diferentes especialidades. Los tribunales militares, que anteriormente habían tenido jurisdicción propia, fueron subordinados a los tribunales civiles por la creación de un *Cuerpo jurídico* de abogados civiles que actuarían en los casos militares y convirtiendo al Tribunal Supremo en el más alto tribunal de apelación tanto para los casos civiles como los militares.

La opinión militar aceptó el servicio activo para los candidatos a oficial, el Cuerpo de tren y el presupuesto de aviación, como medios razonables de modernización; pero se mostró dividida en cuanto a la conveniencia de reducir el número de acade-

mias. Para muchos era un ahorro lógico cuando todo el ejército era reducido a menos de la mitad; para otros amenazaba la calidad de la enseñanza técnica especializada. A la mayoría de los oficiales profesionales les disgustó el resto de la ley. En su opinión, el requisito de estudios universitarios era una tentativa de diluir el espíritu militar de una nueva generación de oficiales, y el mismo efecto tendría la subordinación de los militares a los tribunales civiles. En realidad, el Gobierno se proponía quebrantar las antiguas barreras de casta y la mutua ignorancia, poniendo a los futuros oficiales en contacto, durante una parte de su educación, con los futuros miembros de las profesiones liberales[43].

Los cambios estructurales en el ejército (y las reformas menos importantes, pero similares, en la marina) no eran más que un aspecto, y probablemente el que produjo controversias, del papel que habían de jugar las fuerzas militares en la vida española. Lo mismo que las cuestiones de la Iglesia y las escuelas públicas estaban íntimamente unidas, lo estaban las cuestiones de la reforma del ejército y el orden público. En mucho mayor grado de lo que la mayoría de la gente se preocupaba de averiguar, el orden público en España dependía de la guardia civil, la fuerza de policía militarizada creada en 1840 para acabar con los salteadores de caminos. La guardia civil estaba armada con fusil y sus individuos siempre viajaban en parejas; sus compañías estaban mandadas por oficiales de carrera y el director nacional de la misma era siempre un general del ejército. Por su eficacia en limpiar los caminos de la España rural, llegó a ser conocida entre los terratenientes y la clase media como *la Benemérita*. Con la aparición del anarquismo en la segunda mitad del siglo XIX, la guardia civil fue utilizada cada vez más para acabar con manifestaciones de campesinos y para prevenir o quebrantar huelgas. Era práctica frecuente en la guardia civil disparar a quemarropa contra los huelguistas, y el ministerio de la Gobernación tenía la norma de proteger invariablemente el anonimato de los guardias que habían disparado y, si

le era posible, ocultar la noticia. Si para los terratenientes la guardia civil era realmente la Benemérita, para los campesinos sin tierra era un ejército de ocupación compuesto de 25.000 hombres bien armados.

En abril de 1931 el jefe de la guardia civil era asimismo uno de los generales más prestigiosos del ejército español: José Sanjurjo, nombrado marqués del Riff por su papel en la pacificación de Marruecos. El general Sanjurjo había sido una figura clave en el golpe de Estado triunfante en 1923. Como amigo íntimo de Primo de Rivera y como caballero, estaba resentido del trato que el rey había dado al dictador en 1930. Cuando tras las elecciones municipales el rey le preguntó si la guardia civil estaba dispuesta a defender su trono, el general Sanjurjo aconsejó a Su Majestad que abandonara España, jugando así un papel muy importante en la pacífica transición hacia el régimen republicano. Pero mientras el general animaba a Miguel Maura a tomar posesión del ministerio de la Gobernación el 14 de abril, la multitud en toda España gritaba: «¡Abajo la guardia civil!». Su declaración de lealtad al nuevo régimen, indudablemente sincera, no pudo borrar inmediatamente las décadas en que las masas habían ido acumulando su resentimiento. Y, claro está, tampoco cambiaron los sentimientos en gran parte monárquicos de no pocos guardias civiles.

El invierno era en la España rural una estación que traía consigo mucho paro obrero, y por supuesto una gran tensión social. El último día de 1931 fue testigo de un trágico choque entre los campesinos y la guardia civil en Castilblanco, un pueblo relativamente grande del valle del Guadiana, próximo a los límites provinciales entre Badajoz y Cáceres. El 20 de diciembre, bajo la dirección de la Federación de Trabajadores de la Tierra, los campesinos en paro concurrieron a una manifestación pacífica pidiendo trabajo. La guardia civil disolvió la manifestación tal como lo venía haciendo durante décadas. Su actuación en este caso

fue pacífica; pero negó a los campesinos todo efectivo derecho de reunión.

La Federación convocó entonces una huelga general de dos días, cuyo objetivo era obligar al traslado del jefe local de la guardia civil, al que consideraban como particularmente hostil. El alcalde se negó a dar permiso para la manifestación del día 30; pero ésta se verificó de todos modos, sin incidentes. El día 31 envió a la guardia civil a la Casa del Pueblo a fin de pedir a su presidente que cancelara la manifestación prevista para aquel día. Mientras las negociaciones se llevaban a cabo, un grupo de mujeres insultó a los cuatro guardias e intentó penetrar en la casa. Al tratar de impedírselo, uno de los guardias disparó un tiro, y una muchedumbre de irritados campesinos cayó sobre los cuatro, que fueron linchados allí mismo con ensañamiento.

El país se estremeció de horror. El general Sanjurjo comentó que ni siquiera en las cabilas más primitivas de Marruecos había visto cadáveres tan salvajemente mutilados. El ministro de la Gobernación, Casares Quiroga, asistió al entierro de los cuatro guardias y declaró públicamente que su conducta había sido intachable. El doctor Marañón escribió en *El Sol* que este hecho podía ser comparado con el narrado por Lope de Vega en su famoso drama Fuenteovejuna, en el cual un grupo de aldeanos asesinan a un odiado comendador particularmente cruel. Cuando los jueces reales les preguntaron quién mató al comendador, los aldeanos contestaron unánimemente: «Fuenteovejuna, señor». Para el doctor Marañón, toda España, todo terrateniente, todo comerciante, todo maestro, todo sacerdote, que conociendo la miseria en que vivían las masas rurales no hubiera actuado para aliviar tal miseria, era culpable del horrible crimen de Castilblanco. El asesinato era el resultado de unas condiciones sociales inhumanas, y sólo el cambio de tales condiciones podía expiar la culpa colectiva de la nación española. Cuando más tarde los dirigentes locales fueron juzgados, uno de sus abogados de-

fensores, el socialista Jiménez de Asúa, apeló a razonamientos de ese tipo. Alegando las deplorables condiciones sociales del pueblo y la naturaleza explosiva y multitudinaria del acto, pidió al tribunal que castigara a sus defendidos tan sólo por la posesión ilegal de armas. Finalmente el tribunal pronunció seis sentencias de muerte, luego conmutadas por cadena perpetua[44].

Otro choque entre el pueblo y la guardia civil tuvo lugar el 5 de enero de 1932, esta vez en la ciudad riojana de Arnedo. Una muchedumbre de trabajadores iba acompañando una delegación huelguística que iba a reunirse con los patronos. Al ver a la guardia civil, prorrumpieron en gritos hostiles pidiendo su disolución y refiriéndose a ellos como lacayos de los capitalistas. Los guardias, muy nerviosos después de lo ocurrido en Castilblanco, dispararon contra la muchedumbre, matando seis personas, de ellas cuatro mujeres y un niño, e hiriendo a dieciséis.

La opinión pública, que había reaccionado con simpatía hacia la Benemérita cuando lo de Castilblanco, se mostró ahora indignada. Éste era otro caso, como tantos del pasado, en que la guardia civil disparaba a quemarropa contra campesinos hostiles, pero desarmados. Las Cortes pidieron la destitución del general Sanjurjo. El Gobierno se negó a doblegarse a esa exigencia, sabiendo que de todos modos Sanjurjo no era personalmente responsable de un problema histórico. Pero un mes después el general Cabanellas lo sustituyó en la jefatura de la guardia civil.

El disgusto de los militares contra las leyes de Azaña y las críticas públicas contra el ejército y la guardia civil produjeron una serie de incidentes en la primavera de 1932, los más serios de los cuales tuvieron lugar con motivo de una revista militar de la guarnición de Madrid en Carabanchel. Un coronel de infantería, Julio Mangada, se sintió ofendido por ciertas observaciones del general Villegas, que estaba al mando de la primera división, y del general Goded, jefe del Estado Mayor. Cuando este último concluyó su breve discurso con el grito tradicional de «¡Viva Es-

paña!», e invitó a los oficiales presentes a unirse a él en el brindis, el coronel Mangada expresó su resentimiento por los apenas velados sentimientos antirrepublicanos del general Villegas, e insistió en gritar «¡Viva la República!». Dadas las circunstancias, su acción era a la vez ruda e insubordinada. El Gobierno lo arrestó y llevó el caso a los tribunales. Pero también destituyó al general Villegas del mando de la primera división y aceptó la dimisión del general Goded, que no había cometido ninguna falta, pero cuyos conocidos sentimientos personales eran de tal naturaleza que apenas si podía reinar la confianza entre él y el Gobierno Azaña. En todo el incidente no hubo más que palabras, pero el «¡Viva España!», ya simbolizaba una clase de lealtades y el «¡Viva la República!», otra. Aunque Mangada hubiera sido legalmente la parte equivocada, es indudable que fue provocado. Los generales Goded y Villegas figuraban entre los que se sublevaron en julio de 1936 y el coronel Mangada luchó por la República, al igual que el general Masquelet, que fue nombrado por Azaña en aquella ocasión para suceder a Goded como jefe del Estado Mayor Central.

Durante aquellos mismos meses, las Cortes estuvieron debatiendo activamente la cuestión del Estatuto de autonomía de los catalanes. Cataluña presentaba problemas particulares y ofrecía oportunidades para la República. Era una región de pequeñas fincas y de propiedad relativamente bien distribuida. Era también la zona más industrializada y urbanizada de España; sus negocios típicos eran generalmente propiedad de una familia, lo mismo que en Francia en la misma época. Había pocos grandes bancos y corporaciones, aunque sí bastante capital extranjero invertido en Cataluña, si bien la industria catalana no dependía de gerentes y técnicos extranjeros.

Cataluña poseía también una fuerte vida cultural propia. En el siglo XIX había producido una serie de eminentes escritores y filósofos y ni el krausismo ni el marxismo, que eran las corrientes

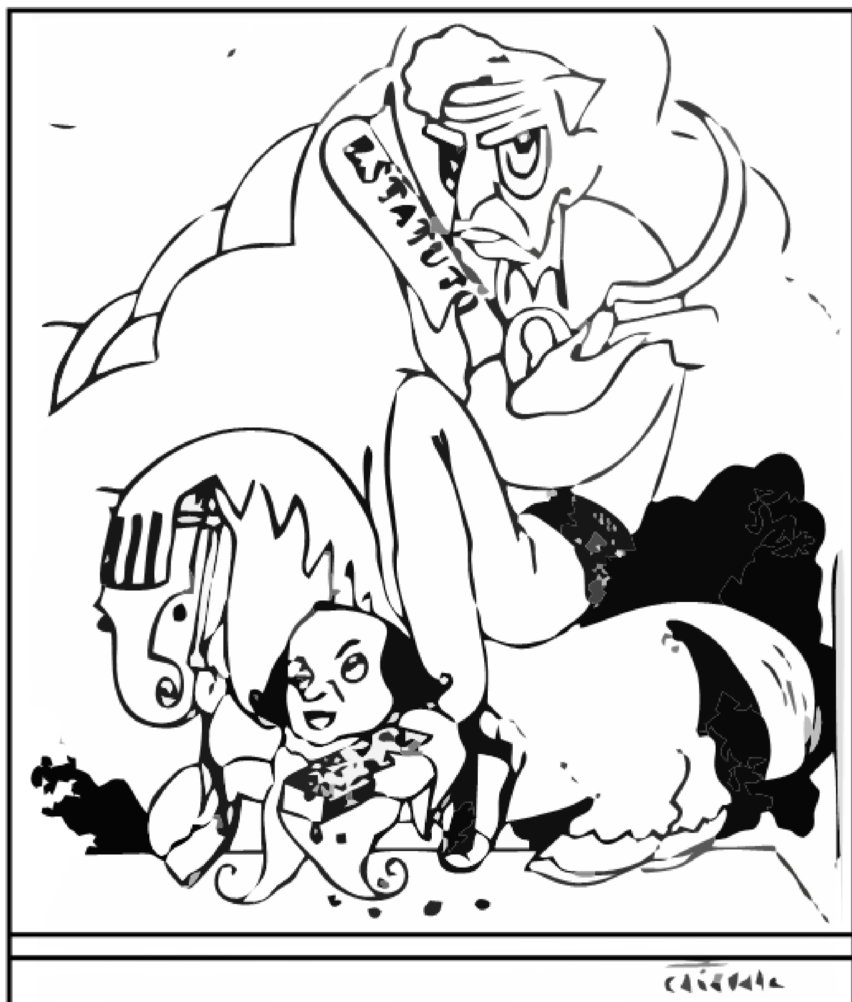
intelectuales cruciales en Castilla, ejercían gran influencia en Cataluña. Los catalanes eran industriosos y culturalmente despiertos; tenían mejores carreteras, mejor alumbrado público, tiendas atractivas, más teatros y salas de música que en el resto de España. Estos contrastes habían existido en 1830 lo mismo que en 1930, pero los medios modernos de transporte y comunicaciones hicieron que la gente se diera más cuenta de estas diferencias en el siglo XX. Las muchas nacionalidades pequeñas de la Europa central habían logrado la libertad nacional gracias a las cláusulas del tratado de Versalles. Los nacionalistas catalanes más ardientes se consideraban víctimas del «imperialismo» castellano y comparaban su situación a la de los polacos luchando por liberarse de Rusia y la de los checos sacudiendo el yugo de Austria.

La literatura catalana, la prosperidad y la estructura de la clase media representaba una gran oportunidad para la República, puesto que era axiomático que la democracia florece más rápidamente donde la propiedad está bien distribuida y hay una clase media fuerte. La coyuntura política favorecía también a los republicanos. La conservadora Lliga Catalana había sufrido fuertes pérdidas en las elecciones de 1931. Su jefe, Francisco Cambó, había preferido en 1930 ayudar al rey a restablecer la Monarquía constitucional, y los profundos sentimientos republicanos de los catalanes habían dado como resultado la victoria de la Esquerra. El jefe de la Esquerra, el coronel Macià, había pedido al principio una República catalana. Sin embargo, republicanos catalanes más capaces, aunque menos relevantes, como Luis Companys, Nicolau d'Olwer y Jaime Carner, eran amigos íntimos de los dirigentes republicanos izquierdistas del resto de España y prestaron su colaboración entusiasta y su competencia técnica al Gobierno provisional primero, y luego al de Azaña. D'Olwer como ministro de Economía y Carner como ministro de Hacienda.

Durante junio y julio de 1931 los catalanes elaboraron su proyectado Estatuto de acuerdo con las restricciones principales

aceptadas por el coronel Macià, en su conferencia con los ministros de Madrid. El proyecto se refería a Cataluña como un Estado autónomo dentro de la República española y no decía nada de una federación ibérica. Establecía claramente que el Gobierno de Madrid controlaría de modo exclusivo los asuntos relativos a la defensa nacional, las relaciones exteriores, las tarifas y aduanas, así como las relaciones entre la Iglesia y el Estado. Sin embargo, también declaraba que el poder público en Cataluña emanaba del pueblo, presumiblemente el pueblo catalán, aunque no se empleaba ningún adjetivo. El catalán se convertía en el idioma oficial del Estado, y pedía el pleno control de las escuelas y de la Universidad de Barcelona. En el plebiscito celebrado el 3 de agosto, de 208.000 votantes inscritos en la provincia de Barcelona, 175.000 votaron en favor del proyectado Estatuto y 2127 en contra. Las mismas abrumadoras mayorías favorecieron el Estatuto en las otras tres provincias catalanas: Gerona, Lérida y Tarragona[45].

CAMBIOS, por Cañabate



EL CORONEL MACIA EN EL PAPEL DE REINA ISABEL LA CATÓLICA.

Monumento que deberá erigirse por suscripción popular para sustituir al de Isabel la Católica tan pronto como el Estatuto de autonomía sea aprobado (el coronel Macià con el poeta Ventura Gassol en primer plano).

(Gracia y Justicia, 14 de mayo de 1932).

En las Cortes, los republicanos unitarios, como el conservador Melquíades Álvarez y el catedrático de derecho Felipe Sánchez

Román, liberal, se opusieron al conjunto del proyecto, que, según ellos, conduciría a un régimen federal inmanejable. Los intelectuales castellanos Unamuno y Ortega y Gasset se sintieron muy preocupados por las cláusulas relativas a las escuelas y el idioma, aunque Ortega y Gasset votó finalmente por el Estatuto cuando fue revisado por las Cortes. Ángel Ossorio y Gallardo, el que a sí mismo se llamaba «monárquico sin rey» desde la dictadura, y uno de los principales arquitectos de la nueva Constitución, se declaró a favor de la autonomía catalana basándose en los fuertes sentimientos dominantes en aquella región y en el alto grado de cultura alcanzado por Cataluña. El doctor Marañón y Miguel Maura reconocieron los peligros del proyecto tal como había sido originalmente presentado, pero insistieron en que si las Cortes negaban la autonomía a Cataluña, que era la región económicamente más adelantada de España, inevitablemente aquélla se tornaría desafecta a la República.

Manuel Azaña arriesgó la vida de su Gobierno y su prestigio personal con la aprobación del Estatuto. Rechazó la fórmula federal, y todos los razonamientos que comparaban a los catalanes con las nacionalidades oprimidas de la Europa Central. Cataluña era geográfica, económica e históricamente una parte integrante de España. Para Azaña, como inteligente nacionalista español, el problema peculiar era consolidar la unidad española en torno a su núcleo central menos poblado y menos adelantado. El Estatuto de autonomía era un juego calculado en la construcción de una España unida por mutuos intereses y no por la fuerza militar. El general Primo de Rivera había intentado resolver el problema catalán aboliendo la Mancomunidad y prohibiendo el uso de la lengua catalana. Azaña trataba de resolverlo concediendo una amplia autonomía lingüística y administrativa a la región más avanzada de España, con la esperanza de que una Cataluña reconciliada ejercería una sana influencia en la economía y los servicios civiles de España en su conjunto[46].

La elaboración del Estatuto fue interrumpida por la primera sublevación militar contra la República. El general Sanjurjo se sintió muy ofendido cuando el Gobierno lo trasladó de la jefatura de la guardia civil a la mucho menos importante de los carabineros (guardias fronterizos). En varias declaraciones públicas había afirmado su lealtad a la República, aunque condenando los extremismos de las izquierdas y las derechas y advirtiendo que nadie se entremetiera con la organización de la guardia civil. Era un hombre sincero, agradable y sentimental, pero no de gran discreción ni de ideas claras. En el verano de 1932 dejó que algunos amigos íntimos y prominentes monárquicos le convencieran de que el país estaba al borde de la anarquía y que el pueblo se levantaría en cuanto él alzara el estandarte de la rebelión. Sanjurjo era oriundo del Norte y su padre había sido capitán en el ejército carlista. Entre los que le animaron a encabezar un pronunciamiento figuraban los dirigentes carlistas Fal Conde y el conde de Rodezno. Entre sus colaboradores militares figuraba un cierto número de oficiales antirrepublicanos que habían de jugar igualmente papeles importantes en el alzamiento de julio de 1936: los generales González Carrasco y Ponte; los coroneles Varela, Martín Alonso, Valentín Galarza y Heli Rolando de Tella. Los conspiradores habían contado igualmente con que el general Francisco Franco se sublevaría en La Coruña; pero éste decidió unos días antes no sumarse, pues no creía que el pronunciamiento tuviera éxito.

La sublevación de Sanjurjo no estuvo bien planeada. El Gobierno había sido bien advertido de antemano y no hubo reacción popular. En Madrid, la guarnición local derrotó fácilmente la intentona de apoderarse del ministerio de la Guerra. En su cuartel general de Sevilla el general Sanjurjo no supo actuar con decisión. Bien porque sus colaboradores le habían engañado haciéndole creer que el país estaba con él, o porque en su interior dudara de la respuesta del pueblo, mantuvo sus tropas acuartela-

das cuando en la mañana del 10 de agosto declaró el estado de guerra. En un manifiesto anunciaba que no se sublevaba contra la República como tal, sino contra las actuales Cortes «ilegítimas», convocadas por un «régimen de terror», y declaraba que la forma futura del régimen sería determinada por representantes libremente elegidos. Dio énfasis a los problemas del paro obrero, el desorden, la destrucción del ejército por reformas mal concebidas y los peligros del exagerado regionalismo. Aunque publicado por monárquicos, el manifiesto no hacía mención del rey y se refería tan sólo indirectamente a la cuestión religiosa, problema siempre candente en España.

Los trabajadores de Sevilla respondieron al estado de guerra declarando inmediatamente la huelga general. Sanjurjo huyó de la ciudad, pero fue detenido en Huelva cuando se dirigía hacia la frontera portuguesa y llevado a Madrid para enfrentarse con un consejo de guerra. Fue condenado a muerte por rebelión militar, pero el presidente, tras la inmediata recomendación del Gobierno, conmutó la sentencia por la de cadena perpetua. Un pequeño sector de la mayoría de las Cortes pensó que el Gobierno debía hacer una severa advertencia a los conspiradores militares fusilando a Sanjurjo; pero Alcalá-Zamora, Azaña y todos los socialistas, así como la mayoría de los republicanos, convinieron en que la indulgencia serviría mejor a la causa de la República. En Sevilla no hubo muertos y en Madrid sólo unos pocos; dada la falta de apoyo popular, la sublevación se había desmoronado por sí misma. Habría sido una locura en tales circunstancias convertir en mártir al hombre que era el general más antiguo del ejército español. El 10 de agosto Sanjurjo fue a la cárcel y unos 145 de sus colaboradores monárquicos fueron deportados a Villa Cisneros[47].

El fracaso de la sublevación de Sanjurjo redundó en prestigio del Gobierno de Azaña e hizo posible la rápida aprobación del tan debatido Estatuto de autonomía. La versión final eliminaba

todas las frases que implicaban soberanía para el Gobierno regional. También rechazaba la fórmula federal y la demanda de un completo control de las escuelas. Los idiomas castellano y catalán eran declarados igualmente oficiales; el control de las escuelas sería compartido y concedía un control específico del gobierno municipal, los tribunales locales y las leyes civiles, las obras públicas, el orden público, museos y minas. Cataluña tendría su propio Parlamento, denominado *Generalitat*, que había sido la denominación dada en la Edad Media al Parlamento de Cataluña dentro del reino de Aragón. También recibiría el control de las finanzas locales, de la radio, los ferrocarriles interiores, carreteras y puertos.

Ante la insistencia de Azaña, toda la mayoría republicano-socialista votó favorablemente y la mayoría de los diputados radicales de Alejandro Lerroux se unieron a la mayoría. El Estatuto era menos de lo que los nacionalistas catalanes habían esperado, pero cuando el presidente del Consejo de ministros fue a Barcelona para la ceremonia de la presentación, lo recibieron con una tremenda ovación. En septiembre de 1932 Azaña estaba en el punto más alto de su carrera política. Era el jefe de un Gobierno que estaba construyendo escuelas y remodelando al ejército. Había dominado una sublevación militar y logrado de las Cortes la azarosa aprobación de un Estatuto de autonomía que ligaría Cataluña a la República democrática.

Capítulo 5

PROBLEMAS ECONÓMICOS DURANTE LA ÉPOCA DE AZAÑA

LA proclamación de la República había causado por sí misma una grave crisis financiera en España. Los españoles ricos comenzaron inmediatamente a transferir sus capitales a los bancos extranjeros, y los círculos financieros internacionales acogieron con escepticismo al nuevo régimen. Tanto el primer ministro de Hacienda, Prieto, como su sucesor, el republicano catalán Jaime Carner, vieron que su primer y más importante objetivo era estabilizar la peseta como preludio a la restauración del crédito internacional de España. Para ello emplearon métodos deflacionarios conservadores, restringiendo las importaciones, reduciendo la burocracia y tendiendo hacia un presupuesto equilibrado. A mediados de 1932 la peseta había conseguido la estabilidad y los déficit de los presupuestos de 1932 y 1933 de Carner fueron mucho menores que los de la dictadura.

Al enfrentarse con la ya antigua cuestión de la reforma agraria y al encararse con los muchos problemas de la depresión mundial, el Gobierno siguió una política pragmática y a veces contradictoria, que en parte era debida a la novedad de los problemas y en parte al carácter indeciso de la mentalidad económica del Gobierno, así como al hecho de que la mayoría de las Cortes consistiera en republicanos y socialistas de clase media.

Dado que se venía arrastrando ya de tiempo y como el descontento entre los campesinos era muy grande, la reforma agraria era la más crucial de todas las cuestiones económicas. Al mismo tiempo, involucraba complejos problemas sociales y económicos que variaban de provincia a provincia y a menudo de pueblo a pueblo. No se podría hacer ninguna revisión seria si no se expropiaban extensas fincas, en otras palabras, sin atacar a algunos de los más poderosos intereses creados del país. El ministro socialista de Trabajo, Largo Caballero, había dispuesto rápidamente el establecimiento de jurados mixtos y ofreció alivios en el pago de los arrendamientos y seguros de accidentes a los aparceros y peones agrícolas sin tierras. El Gobierno provisional nombró asimismo una comisión de técnicos, bajo la presidencia de un profesor de derecho, liberal, Felipe Sánchez Román, para que preparara un plan de colonización para familias sin tierra en Extremadura, Andalucía, Ciudad Real y Toledo. A mediados de julio esta comisión presentó a las Cortes un plan para establecer entre 60 y 75.000 familias en el primer año de asentamiento. Pero las protestas a cuenta de los intereses de propiedades existentes fueron tan fuertes, que la comisión fue disuelta y se dejó toda acción a la futura decisión de las Cortes[48].

Largo Caballero siguió como ministro de Trabajo en los varios gobiernos de Azaña. En noviembre las Cortes aprobaron una ley de jurados mixtos, que eran encargados de tratar de las cuestiones de salarios y contratos de trabajo en todas las industrias y la agricultura. Los sindicatos y asociaciones patronales apropiados deberían elegir a sus propios jurados, y por el consentimiento unánime de éstos se nombraría a un presidente. Si no podían ponerse de acuerdo en la elección de presidente, como ocurría frecuentemente, el Ministerio de Trabajo lo nombraría. El ministerio nombraría asimismo al secretario de cada jurado y al delegado provincial de Trabajo, que representaría al Gobierno central, un poder que colocaba una inmensa autoridad en

manos de dicho ministerio. Con Largo Caballero en el cargo, los jurados mixtos trabajaron simultáneamente para reducir el poder de los caciques locales y aumentar el de los socialistas. Precisamente en esas zonas de mayor tensión social, el presidente y el secretario serían verosímilmente miembros de la Federación de Trabajadores de la Tierra. Bajo la dirección del socialista moderado Lucio Martínez Gil, la Federación contaba con unos 100.000 adheridos en 1931, como resultado de casi cinco años de organización. En el verano de 1932 se ufanaba de contar con 445.000 miembros, siendo la mayoría de los nuevos afiliados campesinos sin tierras, de ideas extremistas y que se sentían agradecidos a los socialistas porque éstos les habían dado su primera oportunidad de hacer oír su voz a la hora de tomar decisiones económicas. La nueva organización ahora constituida representaba numéricamente casi la mitad de la UGT, y cambió el tono de lo que había sido, bajo Pablo Iglesias y luego bajo Largo Caballero y Julián Besteiro, una organización disciplinada y gradualista que representaba la aristocracia de la clase obrera española[49].

Las Cortes también aprobaron, ante la insistencia de Largo Caballero, una ley de Términos municipales, dirigida a proteger a los peones agrícolas locales y acabar con la emigración masiva de las familias sin tierras, que arrastraban una existencia miserable por culpa del paro estacional. La ley requería que los trabajadores agrícolas se registrasen en el municipio en el que vivían y deseasen trabajar, y la confección de las listas se convirtió en una función de la Casa del Pueblo. Por efecto de las decisiones de los jurados mixtos, los salarios agrícolas casi aumentaron al doble entre los veranos de 1931 y 1932, y los varios decretos y leyes de 1931 prometieron a los trabajadores rurales las mismas clases de protección legal y seguros sociales de que ya disfrutaban los trabajadores industriales. Por primera vez en la historia de España, la clase más afligida por la pobreza de toda la población se sentía

protegida por el Gobierno. Sin embargo, estas leyes no atacaban la cuestión fundamental de la reforma agraria, y la ley de Términos municipales resultó ser, usando un expresivo adjetivo español, *contraproducente*[50]. Sin mejorar mucho el problema del paro estacional, interfirió grandemente en la recolección de las cosechas y privó a los trabajadores emigrantes de su trabajo habitual[51].

Los amargos conflictos que se desataron por causa de las decisiones de los jurados mixtos hicieron ver a los diputados lo grande que era el descontento entre los campesinos, y la reforma agraria fue el tema de frecuentes debates durante los primeros ocho meses de 1932. Y no era por falta de datos técnicos. Los gobiernos monárquicos habían hecho un censo cuidadoso de la propiedad rural en la primera década del siglo, a la vez con propósitos impositivos y pensando en una futura reforma agraria. Los planes de riego databan de 1902 y se desarrollaron mucho durante la década de los 20, gracias a un destacado ingeniero agrónomo español, Manuel Lorenzo Pardo, dando una detallada información sobre tipos de suelos, desniveles y recursos potenciales de agua. Las dificultades se presentaron al tratar de interpretar los datos y sobre las diferentes ideas acerca de lo que era socialmente conveniente. Los muchos puntos de vista pueden ser divididos en tres categorías:

Los agrarios, a menudo apoyados por los diputados de la Lliga Catalana, argüían que la mayoría de las tierras disponibles eran demasiado secas y poco fértiles para su utilización agrícola. Por disponibles entendían las tierras que de ordinario no habían sido labradas con provecho, y en el mapa indicaban a ciertas zonas de Extremadura y Castilla la Nueva, donde los suelos en cuestión eran realmente mediocres. En cuanto a la cuestión del agua, nadie dudaba de la integridad de Lorenzo Pardo, pero saldría muy caro construir pantanos y canales y el problema de la extrema irregularidad de las lluvias no sería resuelto, aunque fuera miti-

gado, por el desarrollo de las construcciones hidráulicas. Además, era dudoso si el medio millón de familias sin tierra de la España meridional verdaderamente querían convertirse en campesinos propietarios, y si querían, sólo podrían salir adelante provechosamente con sus nuevas fincas más que recibiendo fuertes subsidios para comprar equipo y la instrucción técnica necesaria para usar tal equipo.

Un segundo grupo de diputados, principalmente radicales y radical-socialistas, estaba ansioso por crear una clase de campesinos propietarios en las zonas dominadas por los latifundios. Sus argumentos eran más sociales que económicos. Los pequeños propietarios agrícolas franceses eran la espina dorsal de la prosperidad y la estabilidad social de la República francesa. Como defensores de los derechos de la propiedad, estos diputados republicanos se oponían a la confiscación de las grandes fincas; pero asimismo mostraban desgana a enfrentarse con los tremendos impuestos que habría que imponer para comprar las tierras de los terratenientes y entregárselas a sus arrendatarios y a los campesinos sin tierras. Por otra parte, aunque reconociendo los gastos iniciales de la reforma, declaraban que el pequeño propietario, con un incentivo personal que antes no tenía, cultivaría las tierras más intensamente que en el pasado, haciendo así posible que en unas pocas décadas se pagara un buen precio por las fincas expropiadas.

Un tercer grupo, que comprendía en su mayoría a socialistas, aunque no a todos éstos, creía en las soluciones colectivas. Argüían que las máquinas, los fertilizantes y los servicios técnicos de todas clases serían mucho más eficaces utilizados por grupos de campesinos que no por pequeños propietarios, y también que la inversión inicial por familia sería mucho menor si los servicios técnicos eran comunes. Había muchos precedentes existentes en la España levantina y pirenaica, que habían demostrado su efica-

cia, sobre el uso colectivo de los derechos sobre el agua y el uso común de herramientas y facilidades de almacenamiento[52].

Todos estos puntos de vista podían apoyarse en datos técnicos y tener sentido en ciertas zonas; pero como cada grupo escogía inevitablemente los datos que convenían a sus parcialidades políticas, no podían aceptar la verdad en labios de sus oponentes. Los agrarios, que daban énfasis a la poca fertilidad y la escasez de agua, eran claramente los representantes de los grandes terratenientes. Los que proponían pequeñas fincas atendidas por una familia eran los republicanos de clase media, y los que abogaban por soluciones colectivas eran los socialistas[53].

El debate se celebró con un fondo de creciente agitación en los campos. Debido a la mejora de los salarios y a las excelentes condiciones climáticas, Andalucía esperaba tener en 1932 la mejor cosecha de cereales en muchos años. Conforme se acercaba el tiempo de la siega, los trabajadores amenazaron con dejar el grano en los campos, a menos que les fueran concedidos nuevos aumentos de salarios. Justificando esta demanda por la necesidad nacional, el ministro de la Gobernación, Casares Quiroga, estableció en Sevilla un jurado técnico especial y ordenó a los representantes de los patronos y los obreros que hicieran inmediato acto de presencia ante tal jurado. Respondieron todos los grupos de los patronos y la mayoría de los grupos obreros; pero los sindicatos anarcosindicalistas se abstuvieron. El jurado especial estableció salarios y condiciones de trabajo para la cosecha de primavera; se eliminó la amenaza de huelga y la cosecha fue salvada.

Pero toda la agricultura española estaba afectada por la inseguridad respecto al futuro. Ya en 1931 muchos grandes terratenientes habían dejado sus fincas sin cultivar. Algunos de ellos temían una confiscación revolucionaria inmediata, acompañada del linchamiento de los ricos. Los de mayor presencia de ánimo consideraban que había que esperar el desarrollo de los acontecimientos y quizá disciplinar a los trabajadores por un saludable

aumento del paro. Algunos, anticipándose al nuevo período que se iniciaba y en el cual habría probablemente muchos reajustes, prefirieron vender sus tierras y colocar el dinero en bancos extranjeros. Así el cultivo decayó y muchas tierras se pusieron en venta, cosas ambas que contribuyeron a la inquietud de la población rural.

En el verano de 1932 un número cada vez mayor de arrendatarios abandonaron el campo. Constituían una clase intermedia muy importante entre los terratenientes y los proletarios y podían ser considerados *sharecroppers*, aunque este término inglés sugiere una clase más pobre que la de estos arrendatarios de las provincias occidentales y meridionales de España. Eran agricultores comerciales que empleaban peones y pagaban rentas, parte en dinero, parte en especie, a los terratenientes. Lo que ocurrió es que simplemente muchos arrendatarios hallaron que los salarios que les exigían los jurados mixtos no hacían rentables sus fincas, aun teniendo en cuenta la bonificación obtenida por el alivio de sus arrendamientos. Psicológicamente ellos se identificaban mucho más con la clase propietaria que con el proletariado rural. Entre cuestiones de posibilidad técnica, el incremento de los conflictos sociales, el decaimiento de los cultivos, la baja del valor de las tierras y el peligro de un ataque a los intereses creados, el proyecto de reforma agraria parecía atascado en el verano de 1932. Entonces, la sublevación de Sanjurjo renovó los impulsos jacobinos y revolucionarios dentro de las Cortes, y dio una justificación para la confiscación de los latifundios pertenecientes a los grandes de España, que era una clase social a la que se consideraba moralmente implicada en el fallido pronunciamiento. Pero aun en este momento de fervor revolucionario, el Gobierno declaró que la confiscación sólo se realizaría cuando estuviera justificada por razones de interés social, tal como establecía el artículo 14 de la Constitución. La determinación de interés social en los casos individuales aún llevaría un largo tiempo.

La ley agraria aprobada en septiembre de 1932 autorizaba la expropiación de millones de hectáreas pertenecientes a la nobleza y preveía en teoría las formas colectiva e individual de explotación de la tierra. Sin embargo, era una formulación excesivamente legal y esto puede demostrarse refiriéndonos tan sólo a una de sus disposiciones. Según el artículo 5, párrafo 12, las fincas explotadas por una renta fija estaban sujetas a expropiación. Sin embargo, se exceptuaban aquellas alquiladas en nombre de menores y las propiedades tenidas como partes de dotes no evaluadas. Asimismo, si el propietario no explotaba las tierras directamente por respeto a un anterior contrato, y podía demostrar que intentaba en el futuro cultivar esas tierras directamente, tal finca no estaría sujeta a la expropiación.

Además de las excepciones de esta clase, la ley preveía varias etapas de evaluación para determinar un justo precio por las tierras sujetas a expropiación. Anticipándose a numerosos pleitos, el artículo 9 proporcionaba los medios de una ocupación temporal de la tierra durante la tramitación de las formalidades legales. En tal caso, los colonos habrían de pagar una renta del 4 por ciento del valor estimado de las tierras, y su ocupación cesaría al cabo de 9 años en caso de que la tierra no fuera finalmente expropiada. Imagínese la posición de campesinos paupérrimos y semianalfabetos, de cara a una ley semejante, esperando la acción de los tribunales locales, provinciales y nacionales, pagando rentas y honorarios de abogados por un máximo de nueve años, sin estar seguros de si al final pasaría a adquirir o no la propiedad. Cualquiera hubiera dicho que la ley estaba pensada por una asociación de abogados sin empleo que deseaban asegurar no sólo a ellos, sino a sus futuros hijos abogados, un medio de ganarse bien la vida, en lugar de ser una ley escrita para los campesinos de España.

La ley no satisfizo a nadie. Durante los dos años de su vigencia, hasta finales de 1934, sólo 12 260 familias recibieron tierras,

según las cifras del Instituto de Reforma Agraria[54]. En el verano de 1933, las grandes fincas y las tierras de los arrendatarios eran subastadas casi al 20 por ciento de su valor en 1930. En Extremadura, los campesinos sin tierra quemaban cosechas, casas de campo y los casinos de los ricos de los pueblos. En Andalucía se produjeron formas menos violentas de sabotaje. Cuando hubo que distribuir algunos de los cortijos del duque de Medinaceli, los funcionarios locales colocaron en las listas de los que habían de recibir tierras nombres de campesinos que habían fallecido ya hacía tiempo. Al mismo tiempo los anarquistas hacían pedazos los folletos explicativos del Instituto de Reforma Agraria, explicando a los periodistas que si el Gobierno daba tierras a los campesinos, éstos perderían su fervor revolucionario[55].

Mientras tanto, el Gobierno trató en vano de que las Cortes aprobaran una ley en beneficio de los pequeños arrendatarios. El proyecto disponía que tendrían derecho a comprar la tierra que hubieran tenido arrendada al menos durante quince años. En la versión original, tendrían que capitalizar la finca al 5 por ciento, es decir, pagar 20 veces el arrendamiento anual para adquirir la propiedad. Los propietarios se quejaron diciendo que esto sería muy injusto, y que las rentas tradicionales no eran nada parecido al 5 por ciento del valor real de las fincas. Otra fórmula que se propuso entonces fue la de que el valor de venta fuera determinado por un jurado mixto, un método al que igualmente pusieron objeciones los terratenientes. Los jurados mixtos se basarían, naturalmente, sobre el valor atribuido para el pago de impuestos, que, claro está, se había declarado siempre muy bajo por los terratenientes para defender sus intereses bajo la Monarquía. El Gobierno Azaña cayó en septiembre de 1933 sin haber completado una ley de arrendamiento[56].

Aparte del asunto de la reforma agraria, el Gobierno tuvo que enfrentarse con una serie de serios problemas económicos, agravados por la depresión mundial y todos ellos requiriendo solu-

ciones experimentales en el contexto del tiempo. Tres problemas de particular gravedad concernían a la producción y mercados del trigo, carbón y frutos cítricos. Los cereales se cultivaban en casi todas las regiones, pero su producción estaba concentrada en Castilla y Aragón, el corazón de la meseta ibérica. Como ya he dicho antes, los costos de producción eran altos, y sin la protección de tarifas el trigo español jamás habría podido competir con los trigos norteamericanos y argentinos en los mercados nacionales. Las fincas cerealísticas eran de todos los tamaños y tipos: latifundios, fincas arrendadas de tamaño mediano y pequeñas fincas familiares. La población en su conjunto era tradicionalmente conservadora y católica, y los arrendatarios y los pequeños propietarios individuales identificaban sus intereses en gran medida con los de los terratenientes.

A principios de 1932 se vio que la cosecha de cereales de aquel otoño en Castilla sería mala. El precio del trigo estaba subiendo. La cosecha de 1931 se había reducido algo por las inseguridades que acompañaron al primer año de vida del régimen republicano. Los salarios habían subido y era de esperar que los anarquistas exigieran más subidas de salarios todavía al llegar la época de la cosecha. Desde el momento en que Marcelino Domingo se convirtió en ministro de Agricultura, Comercio e Industria en octubre de 1931, los cultivadores de cereales comenzaron a presionarle para que elevara los precios mínimos del mercado, *la tasa*[57], que iba de 46 a 49 pesetas por quintal métrico. El ministro había pedido a todas las delegaciones agronómicas provinciales que le enviaran informes sobre los costos locales de producción. Gracias a este estudio pudo enterarse de que los costos variaban entre 33 y 42 pesetas, y decidió que la tasa de 46 era suficiente.

En marzo los periódicos comenzaron a hablar de escasez de trigo y de que probablemente habría que recurrir a las importaciones. En el pasado se había importado trigo con frecuencia, pero desde que había bajado la cotización de la peseta en el merca-

do de divisas internacional y dado que la República se había comprometido a una política de presupuesto equilibrado, sería una torpeza política el tener que importar grano en 1932. Marcelino Domingo apeló entonces a los cultivadores de trigo, a través de la prensa y de la radio, pidiéndoles que voluntariamente hicieran un cálculo de la cosecha esperada. Los informes que le enviaron indicaban escasez. Al mismo tiempo, el precio continuó subiendo, y el Gobierno recibió angustiados telegramas de los gobernadores civiles, rogándole que procediera a una inmediata importación para evitar subidas en el precio del pan.

En tales circunstancias, y aun teniendo en cuenta que habría un poco de exageración en aquellos telegramas, el ministro decretó la importación de unas 250.000 toneladas de trigo durante los últimos días de abril y en mayo. El precio del trigo alcanzó su punto máximo en junio, en cuyo momento la llegada de grano extranjero aportó al mercado unas 250.000 toneladas de trigo español que no había figurado en los informes de aquel estudio. Luego la suerte se puso de cara, el tiempo fue bueno, hubo pocas huelgas y la cosecha fue la mayor en muchas décadas. Durante el otoño el precio del trigo fue bajando sin cesar y una tormenta se desató sobre la cabeza del ministro. Los mismos diputados y gobernadores que habían pedido las importaciones en marzo ahora le acusaban de estar arruinando a los cultivadores de trigo de España. Las Cortes querían saber por qué se habían hecho unas estimaciones tan pobres de la cosecha. Las izquierdas acusaron a los grandes tratantes de grano de ocultar sus reservas para especular con el alza de precios y las derechas se rieron del antiguo periodista y masón que era desde luego incapaz de adivinar la verdadera situación de un país cerealista.

Ahora todo el mundo prestó atención al hecho de que el trigo importado estaba siendo pagado a un precio más alto que la tarifa mundial. En este punto el ministro, al consultar con el Tesoro, tuvo que hacer una difícil elección. Si pagaba el trigo al contado,

la peseta, que había alcanzado su punto más bajo en marzo de 1932, bajaría aún más, y eso que en abril y mayo comenzó a mostrar signos de recuperación. Si pagaba a plazos, para no alterar la situación del cambio internacional, tendría que pagar intereses. Los dos ministros decidieron conjuntamente que era preferible pagar intereses, exponiéndose así a que luego les acusaran de pagar precios más altos que los del mercado mundial por el trigo importado[58].

Dificultades de otra especie surgieron en relación con la industria minera fiel carbón. La industria carbonífera estaba decayendo en todo el mundo, debido al agotamiento de los mejores filones y a la competencia de las nuevas fuentes de energía: petróleo, gas y electricidad. Los mineros asturianos, la mayoría de los cuales eran miembros de la UGT, figuraban entre los trabajadores españoles más militantes. Estos hombres trabajaban en los pozos sólo cuatro días a la semana en 1932, y el carbón se estaba acumulando en las bocaminas. El mineral español era de pobre calidad y no tenía empleo económico en la industria del acero, ni servía para las locomotoras de los ferrocarriles, los dos usos que representaban el 75 por ciento del consumo español. El carbón de buena calidad tenía que ser importado de Inglaterra y estas importaciones a cambio ayudaban a la venta de un buen porcentaje de la producción española de frutos cítricos al Reino Unido.

En octubre de 1932 se habían acumulado en las bocaminas unas 350.000 toneladas de mineral que no se había podido vender. El Gobierno estaba formado por una coalición republicano-socialista y el ministro de Industria era un republicano cuyo partido dependía en gran medida de los votos de los trabajadores. Los mineros de la UGT, dirigidos por Ramón González Peña, pidieron que el Gobierno comprase el sobrante de carbón y que los ferrocarriles y buques españoles utilizaran carbón español. También amenazaron con una huelga minera, que sería acompañada, si era necesario, por una huelga de solidaridad de los esti-

badores de los puertos de la costa norteña. En el curso de penosas negociaciones, puntuadas por una huelga súbita de cuatro días, el Gobierno contrató la compra inmediata de 100.000 toneladas de carbón asturiano. El carbón sería utilizado por los ministerios de la Guerra, Marina y Obras públicas; el Gobierno importaría asimismo alquitrán para fabricar briquetas, que harían que el carbón asturiano fuera utilizable en las locomotoras españolas. En esta ocasión la prensa y la oposición criticaron la «complacencia» de los socialistas, la perspectiva de nuevas importaciones y el hecho de que los ministerios implicados no supieran en realidad en qué emplear tanto carbón como el que había sido comprado ahora y se compraría en el futuro[59].

El problema del carbón estaba sólo incidentalmente relacionado con el de la exportación de frutos cítricos; pero políticamente iban a estar ligados el uno al otro. Los frutos cítricos eran uno de los principales intereses comerciales de la España oriental, particularmente en la región de Valencia. Aquí el sentimiento regionalista era muy fuerte. No adoptaba la forma nacionalista de Cataluña; pero al igual que esta región, Valencia también tenía su lengua propia, el recuerdo de su independencia medieval, un resentimiento contra el espíritu militarista y centralizador de Castilla y un sentimiento de superioridad basado en una rica economía agrícola y en una mejor distribución de la renta que en Castilla y Andalucía. En el siglo XIX los sentimientos regionalistas y anticastellanos habían tomado la forma del carlismo. En las últimas décadas los campesinos se habían afiliado en gran número al partido republicano del famoso novelista y periodista Vicente Blasco Ibáñez. En 1932, la mayoría de los campesinos valencianos pertenecían a un partido conservador regional, dirigido por Luis Lucía, y la minoría, al partido radical-socialista de Marcelino Domingo.

Durante la década de los 1920, el mercado mundial de frutos cítricos estaba en expansión y los labradores valencianos habían

extendido mucho sus cultivos. El comercio de exportación estaba controlado más bien por los navieros que por los cultivadores, aunque muchos de los cultivadores más ricos eran también parcialmente dueños de buques. La cosecha era vendida a los expedidores fletadores cuando todavía estaba en el árbol, a los precios señalados por éstos. La mayoría de los embarques se dirigían a la Europa septentrional y a Inglaterra y los cultivadores de cítricos pagaban a la vez las travesías de ida y vuelta, aun en los casos en que los buques retornaran con un cargamento parcial con destino o procedente de puertos británicos y alemanes. La depresión coincidió con el advenimiento de la República y los años peores fueron 1932 y 1933. En aquella época todos los países reaccionaron a la contracción de los mercados extranjeros adoptando la política del nacionalismo económico. Hasta Inglaterra abandonó el comercio libre, y, en particular, los acuerdos imperiales de Ottawa de 1932 la obligaron a dar preferencia a las compras en sus dominios y colonias. En aquellas circunstancias, Palestina, que se había convertido en un mandato británico bajo la Sociedad de Naciones, sustituyó en gran parte a España en el mercado naranjero británico.

Aunque la principal razón de la pérdida del mercado británico estaba perfectamente clara, la escena política se complicó por la coincidencia de la crisis carbonera asturiana con el problema de los cítricos. Cuando los mineros demandaron que se comprara carbón asturiano con preferencia al carbón británico, la Cámara de Comercio de Valencia se opuso inmediatamente a tal demanda, temiendo que los británicos replicarían reduciendo aún más sus importaciones de frutos cítricos españoles. El Gobierno reconoció la gravedad de la cuestión de la exportación de cítricos y al mismo tiempo negó toda relación de causa a efecto entre ella y el problema del carbón. Los compradores extranjeros ya habían indicado que los frutos españoles tenían una calidad muy desigual. A finales de la década de los 20 la calidad había sido sacrificada a

la cantidad y la verdad es que la primera reacción de los cultivadores ante la caída de precios en 1931 fue el extender aún más los cultivos. Los exportadores alteraron también las marcas en una tentativa para evitar que compañías menos conocidas se beneficiaran de la reputación de que gozaban las ya acreditadas.

El Ministerio de Agricultura hizo dos proposiciones muy importantes: un comité técnico separaría las diferentes clases de fruta, para evitar abusos en la calidad, y el Gobierno construiría una flota que acabaría con el monopolio naviero y la dependencia de los pequeños cultivadores a los precios ofrecidos por los grandes intereses privados. Ninguna de estas dos propuestas hechas en la primavera de 1933 se llevó a efecto, y sólo sirvieron para añadir más dificultades políticas al Gobierno. Los grandes cultivadores y los navieros se resintieron de la publicidad dada a sus defectos. Los pequeños cultivadores no recibieron ninguna ayuda inmediata. El Gobierno fue de nuevo criticado por su inclinación a desequilibrar el presupuesto, así como por el aspecto socialista de su proposición de construir una flota de carga nacional[60].

Durante toda la época republicana, la industria vasca del acero sufrió una grave crisis, en parte debida a las condiciones mundiales y en parte a la política del Gobierno. La industria se había expansionado y gozado de buenos precios y tarifas protectoras durante la década de los 20. Los armamentos para la guerra de Marruecos habían sido durante largo tiempo una buena fuente de ingresos, y cuando la guerra se acabó, Primo de Rivera comenzó la modernización y extensión de la red ferroviaria, que continuó ofreciendo un gran mercado para el acero vasco. La República, sin embargo, no siguió la política ferroviaria del dictador. En gran parte por consejo de Indalecio Prieto, el Gobierno se decidió por continuar la construcción de carreteras, haciendo así que la construcción de ferrocarriles quedara virtualmente suspendida. El cambio estaba motivado especialmente por la convicción

de Prieto de que en el futuro los camiones proporcionarían un transporte más eficaz y económico; pero esta nueva tendencia tuvo también grandes implicaciones políticas. Muchos industriales vascos se inclinaban por la República por la promesa de ésta de conceder estatutos de autonomía. Prieto, aunque nacido en Oviedo, había vivido casi toda su vida en Bilbao, donde era propietario del influyente diario *El Liberal*, y contaba con la cooperación de la clase media catalana y vasca para desarrollar la economía de la España republicana. No hace falta decir que los industriales vascos echaron la culpa a la República por la crisis de la industria metalúrgica, cuando fueron cortados drásticamente los pedidos de equipo para los ferrocarriles. Sus esperanzas de obtener el Estatuto los mantenía en el campo republicano, pero sin gran entusiasmo.

La República tuvo también dificultades con los ferroviarios, tradicionalmente organizados por la UGT, pero influidos ahora por la CNT. Con el advenimiento de la República, esperaron grandes aumentos de salarios además de la jornada de ocho horas, y en el verano de 1931 estaban preparados para ir a la huelga. Prieto, como ministro de Hacienda del Gobierno provisional, arriesgó su prestigio entre los trabajadores oponiéndose a las subidas de salarios. Haciendo números les demostró que los ferrocarriles habían estado funcionando con déficit desde hacía años, que la jornada de ocho horas aumentaría los costos, y que sería imposible financiar simultáneamente un aumento general de salarios aunque el Gobierno autorizara el aumento de las tarifas ferroviarias, una decisión que afectaría a los usuarios. Los ferroviarios se conformaron con la jornada de ocho horas y varias mejoras de sus condiciones de trabajo, pero desde entonces empezaron a creer que Prieto se había vendido a los capitalistas[61].

En el otoño de 1931 Prieto pasó del Ministerio de Hacienda al de Obras Públicas, donde dirigió durante dos años los mayores esfuerzos económicos constructivos de la República. Prosiguió

la política hidráulica de la dictadura. Primo de Rivera había llamado a Manuel Lorenzo Pardo para dirigir un programa nacional de construcción de pantanos y de regadíos. Entre 1926 y 1930 se construyeron una serie de pantanos en el valle del Ebro y se hicieron planes detallados para Levante y el valle del Guadalquivir. Prieto confirmó el nombramiento de Lorenzo Pardo, prosiguió adelante con los proyectos existentes para la cuenca del Ebro, construyó dos pantanos en el Guadalquivir e inauguró un nuevo proyecto en Extremadura (las Obras del Cíjara), que fue interrumpido por la guerra civil y completado en 1957 con el nuevo nombre de Plan Badajoz. Prieto creía que los regadíos serían una solución más efectiva del problema agrario español que la mera expropiación de las grandes fincas, porque se podía hacer sin añadir nuevos conflictos sociales y porque muchas de las tierras pertenecientes a los latifundios eran demasiado secas para ser cultivadas con éxito por los pequeños agricultores. Los regadíos aumentarían mucho la superficie cultivable de España y además proporcionarían beneficios subsidiarios tales como energía eléctrica y repoblación forestal. En el valle del Ebro, donde los principales pantanos y canales habían sido construidos al final de la década de los 20, Prieto se concentró en la construcción de centrales eléctricas. Dondequiera que se comenzaban las excavaciones o se terminaba un pantano, Prieto pronunciaba un discurso ante la población local ensalzando la importancia del agua, los árboles y la electricidad. En el verano de 1932 acompañó al presidente de la República en un viaje por las obras emprendidas en la cuenca del Guadalquivir, y don Niceto Alcalá-Zamora representó la dignidad de una República con preocupaciones sociales, mientras que su ministro regordete predicaba las doctrinas de Joaquín Costa y dedicaba elogios al cuerpo de ingenieros agrónomos de la República española[62].

Seguían en importancia a las obras hidráulicas los proyectos sobre ferrocarriles y carreteras. Aquí Prieto siguió adelante con

algunos planes de la dictadura y alteró radicalmente otros. Primo de Rivera había comenzado el túnel del Guadarrama que acortaría notablemente la distancia por ferrocarril entre Madrid e Irún. Prieto completó este proyecto en 1933. Pero mientras que Primo de Rivera había comenzado extendiendo el kilometraje en raíles en varias provincias, Prieto prefirió concentrarse en la electrificación de las líneas existentes y en la creación de termínales subterráneas en Madrid y Barcelona. Gran parte de la electrificación del trayecto Madrid-Segovia data de este período. En Barcelona, el Gobierno central, la Generalitat y el municipio cooperaron en la financiación de la construcción de la terminal subterránea de la plaza de Cataluña. En Madrid, el Gobierno comenzó la construcción (aún no terminada) de la terminal central bajo la principal avenida de la capital: el paseo de la Castellana.

Al igual que en el caso de la construcción de escuelas, el coro de críticas fue aumentando en intensidad en la prensa y en unas Cortes muy preocupadas por la estabilidad del presupuesto. Primo de Rivera había gastado un promedio de 50 a 60 millones de pesetas anuales en obras hidráulicas. El presupuesto de 1932 pedía 80 millones y 175 el de 1933. Sobre esto había la construcción de carreteras secundarias, la prolongación de la Castellana, la construcción de un bloque de edificios para nuevos ministerios y una terminal subterránea del «metro». La oposición protestaba diciendo que los proyectos se habían hecho tan sólo pensando en dar trabajo a los obreros socialistas parados, que los nuevos ministerios y las estaciones de término eran innecesarios, que los salarios pagados eran demasiado altos. Los partidarios del Gobierno replicaban diciendo que el ensanche de Madrid y la mejora de su red de transportes eran, al igual que los regadíos, inversiones para el futuro económico de España[63].

En 1933 el Gobierno se daba plenamente cuenta de la contradicción existente entre sus esfuerzos para nivelar el presupuesto y los grandes proyectos de construcción financiados por el Esta-

do. Jaime Carner dimitió como ministro de Hacienda (víctima de un cáncer de garganta del que habría de morir al año siguiente). Fue sucedido por otro catalán, Viñuales, que en colaboración con Prieto propuso un nuevo método para la financiación de las obras hidráulicas. Hablando en una reunión de los directores de las principales cajas de ahorros de España, sugirieron que los bancos se encargaran juntos de la formación de la sociedad anónima para financiar la construcción de pantanos. Los bancos, a cambio, arrendarían las tierras regadas y venderían la energía eléctrica producida como resultado de su inversión. El Gobierno supervisaría los arrendamientos y las tarifas de la electricidad en nombre del interés público. Esta propuesta, tan similar al tipo actual de inversiones de muchas de las grandes compañías americanas de seguros, pareció demasiado audaz a los banqueros allí reunidos. En todo caso, el Gobierno Azaña cayó al cabo de los dos meses, y ya no hubo posibilidad de llevar a la práctica la idea[64].

Hay varios importantes elementos comunes a los diversos problemas económicos de que se ha tratado más arriba. En los años transcurridos de 1932 a 1935, el total del comercio exterior de España fue tan sólo un promedio del 30 por ciento de su valor en 1928. Las zonas que dependían más del comercio internacional eran las que simultáneamente estaban haciendo las demandas más precisas al nuevo régimen: el País Vasco, con su fuerte movimiento de autonomía, y Andalucía con su proletariado rural recientemente organizado. Bajo el nuevo régimen España gozaba de un grado sin precedentes de libertad de prensa, y por lo tanto los problemas eran bien ventilados en los periódicos. Los resultados tenían importantes implicaciones políticas, que eran explotadas al máximo en las Cortes. Para los políticos conservadores de la católica Castilla resultaba estupendo poder echar la culpa del problema triguero a un republicano catalán. Con el Partido Socialista en el Gobierno, los agrarios y los radicales se convirtieron de repente en los adalides de los oprimidos mineros

de la UGT y de los ferroviarios. La verdadera causa de la crisis en la exportación de cítricos podía ser la crisis mundial y los acuerdos de Ottawa; pero no había que desaprovechar la ocasión para echar la culpa de todo a un ministro republicano que podía ser acusado, aunque fuera faltando a la verdad, de mimar a los mineros a costa de los intereses de los hombres de negocios valencianos. La desvalorización de la peseta habría ocurrido igualmente en circunstancias económicas similares bajo cualquier otro nuevo Gobierno; pero era una ocasión única para culpar a un Gobierno revolucionario de intelectuales, krausistas, masones y socialistas de llevar a la ruina a la economía española por su ineptitud.

Si el observador tomaba todo aquel nerviosismo y publicidad por su valor aparente, tenía que dar una importancia exagerada a aquellas críticas. En 1931 ningún gobierno había empleado todavía los métodos de Keynes para el fomento de la industria mediante subvenciones gubernamentales. Ningún gobierno, excepto los de la Italia fascista y la Rusia comunista, había utilizado aún el poder político del Estado para controlar la moneda. Hasta finales de la década de los 30, y mucho más especialmente a partir de la segunda guerra mundial, los gobiernos de todas clases han establecido controles sobre moneda, precios, exportaciones, importaciones e inversiones hasta un grado que en el tiempo de la segunda República española habrían provocado automáticamente la acusación de «comunismo». El programa de obras públicas de Prieto fue muy similar en contenido al del New Deal norteamericano puesto en marcha dos años más tarde; también se parecía a muchos programas luego etiquetados como de «desarrollo económico» a mediados del siglo XX. Pero en la Europa de 1931 el déficit financiero y las inversiones públicas en aras del futuro bienestar público no eran doctrinas fácilmente aceptadas. También es cierto que, fuera lo que fuese lo que Prieto, Carner y Domingo hubiesen hecho, habrían sido atacados por sus filiacio-

nes políticas, independientemente de la política que hubieran seguido. En España, en las décadas de los 40 y los 50, se plantearon problemas idénticos con la misma gravedad; pero con una prensa censurada y una poderosa policía, los hechos no fueron aireados en público. Hoy, en que las naciones ricas ayudan económicamente a los gobiernos de los países amigos más pobres, hay apoyos económicos de que nunca pudo disponer la República.

Y, sin embargo, en muchos de los aspectos más importantes para el ciudadano corriente, la economía española prosperó a pesar de la depresión mundial. En parte, esta prosperidad resultaba del relativo aislamiento, así como de la política adoptada. Durante los años que van de 1931 a 1935, los salarios aumentaron en general mientras que el costo de la vida permanecía estable. La alimentación era uno de los capítulos más baratos en el presupuesto familiar, y la producción *per capita* de cereales, verduras y pescado fue superior a cualquier otra época. La industria textil, que entre todas las de España era la que empleaba mayor número de trabajadores, mantuvo su nivel de 1920-30 de producción y volumen de ventas. Las industrias eléctricas, el comercio de pescado y las industrias de la alimentación se expandieron. Hubo un alto nivel continuo de actividad en el ramo de la construcción, debido en primer lugar a la construcción de escuelas y a los trabajos de obras públicas, y luego a un *boom* en la edificación de viviendas. Contrariamente a la impresión que uno puede recibir ante tantas críticas acerca del déficit financiero, los déficit presupuestarios fueron menores que durante la dictadura de Primo de Rivera. Los ingresos del Gobierno aumentaron con los nuevos impuestos industriales y sobre los bienes raíces, así como con el aumento de los del alcohol, la gasolina y el tabaco[65].

En los peores momentos de la depresión llegó a haber medio millón de parados, proporcionalmente una cuarta parte del paro sufrido por los Estados Unidos y Alemania en 1932. Los primeros años de la República fueron testigos de un tremendo aumen-

to en el número de huelgas. En 1933 el número total de jornadas perdidas se había triplicado en relación a 1931 y diez veces en comparación a 1928. También es cierto que 1933, el año de la máxima actividad huelguística, fue el año de la más profunda depresión de la economía española en su conjunto[66]. Pero un detenido análisis de las cifras, industria por industria y provincia por provincia, muestra, sin embargo, que los motivos políticos jugaron un papel mucho más grande que las demandas económicas. El porcentaje de días perdidos en huelgas económicamente motivadas fue bajando continuamente en el período de 1930 a 1933, años en que precisamente los períodos de huelgas aumentaron muchísimo. Además, las variaciones en la conducta de los huelguistas en distintas localidades no se ajustaron a ninguna norma económica discernible. Así, por ejemplo, las huelgas agrícolas en la provincia de Málaga costaron 81 600 días de trabajo en 1932 y sólo 13.000 en 1933, mientras que en Jaén se perdieron sólo 27.000 en 1932 contra 485.000 en 1933. Las industrias metalúrgicas de Vizcaya perdieron 162 839 días de trabajo en 1930, 4149 en 1931 y 91 942 en 1932. Ninguna norma sobre precios, salarios o cifra de ventas tuvo la más remota relación con la norma de las huelgas. El año 1932 fue el de mayor número de huelgas en la industria de la construcción de Valencia, mientras que en Barcelona lo fue el año 1933, y las pérdidas debidas a huelgas en este ramo de la industria fueron cuatro veces mayores que en Madrid en el mismo período[67].

Todas las pruebas de que disponemos tienden a demostrar que la agitación social de la época republicana tuvo más bien motivos políticos que económicos. En los años en que Azaña gobernó, la joven República no logró resolver el problema agrario; pero si se tienen en cuenta los varios problemas resultantes de la depresión mundial, la actuación del gobierno español puede ser comparada muy favorablemente con los muchos estados democráticos más firmes y experimentados.

Capítulo 6

LA DERROTA DE LAS IZQUIERDAS

EN el otoño de 1932 el Gobierno de Azaña alcanzó su máximo prestigio. El presidente del Consejo de ministros había logrado moldear una mayoría segura con las varias fracciones republicanas y el Partido Socialista. El Gobierno había contenido la oposición anarquista y derrotada, sin dificultades, la sublevación militar monárquica de agosto. La UGT apoyaba al Gobierno a pesar de la impaciencia de millares de sus afiliados más exaltados y de la creciente influencia sobre las masas de la CNT, dominada por los anarquistas. La República había iniciado la reforma del ejército, la construcción de escuelas públicas, y un programa de grandes obras públicas. Finalmente, había logrado la aprobación de una ley de reforma agraria y concedido un Estatuto de autonomía a Cataluña.

Sin embargo, a lo largo del año la República había estado sujeta a los fuegos cruzados de la violenta oposición de las derechas y las izquierdas. El 10 de enero, poco después de los sucesos de Castilblanco y Arnedo, las juventudes tradicionalistas y socialistas chocaron en Bilbao. Con motivo de la celebración de un mitin carlista, donde se oyeron a la vez los gritos de ¡Gora Euzkadi!, (el *slogan* nacionalista vasco) y ¡Viva España!, los jóvenes socialistas desfilaron ante el local cantando La Internacional. Al salir los carlistas del mitin, dispararon contra la muchedumbre, matando a tres personas e hiriendo a varias, incluyendo a un guardia civil. Tras una investigación, el Ministerio de la Gober-

nación ordenó la clausura del convento de las Madres Reparadoras, porque se demostró que algunos de los disparos habían procedido de aquel edificio, y multaron al colegio del Sagrado Corazón (un centro aristocrático de enseñanza para señoritas), pues en su interior fueron hallados rifles y cartuchos[68].

En la tercera semana de enero, un pequeño levantamiento anarquista en los suburbios de Barcelona costó varias vidas. Los revolucionarios hicieron descarrilar varios trenes en Manresa y Berga, las tropas ocuparon Barcelona y el Gobierno clausuró los locales del Partido Comunista y de los anarquistas en la ciudad. Las Cortes otorgaron un voto de confianza al ministro de la Gobernación tanto por los sucesos de Bilbao como por los de Barcelona; en Cataluña se hizo un llamamiento a la huelga general, que fracasó, y los revolucionarios se guardaron de chocar contra el ejército[69].

A mediados de abril, en Pamplona, la capital de la Navarra carlista, una discusión callejera entre jóvenes socialistas y tradicionalistas degeneró en una pelea general, resultando muerto uno de cada bando y ocho heridos por disparos de armas de fuego. Durante el mismo mes, en Madrid, fue detenido en un bar un tal Manuel Lahoz, que llevaba consigo una pistola y mil pesetas. El juez Luis Amado lo tuvo detenido durante 72 horas y luego lo dejó en libertad provisional sin fianza, tras acusarle de posesión ilegal de armas. Casares Quiroga, invocando la ley de Defensa de la República, suspendió por dos meses al juez por negligencia al no exigir fianza a un casi seguro pistolero. El Colegio de Abogados consideró el hecho de modo muy distinto y protestó formalmente por la interferencia del ministro en la independencia del poder judicial[70].

La violencia esporádica no constituía una amenaza para la estabilidad del Gobierno; pero los dirigentes republicanos, hombres de temperamento pacífico y humano, estaban deseosos de adoptar métodos más suaves para mantener el orden público que

los empleados por la guardia civil. Y decidieron crear una nueva fuerza urbana de seguridad, la *guardia de asalto*, los candidatos a la cual serían elegidos por su destreza atlética y su lealtad a la República. En principio, no tendrían que ir armados y fueron entrenados para disolver manifestaciones sin derramamiento de sangre; pero eran tan nerviosos como los demás policías españoles, especialmente en la recién autónoma Cataluña. Así en noviembre de 1932, cuando los estudiantes de medicina de Barcelona organizaron una improvisada manifestación de despedida de algunos de sus profesores que marchaban a una conferencia en Francia, los guardias de asalto les pegaron alegando que les habían sorprendido en una manifestación separatista ilegal[71].

El 30 de noviembre, Prieto, hablando en las Cortes sobre varios problemas del presupuesto de obras públicas, denunció el que numerosos anarquistas figuraran en la nómina de la Junta de Obras del Puerto de Huelva sin hacer ningún trabajo visible. Aquellos nombres habían sido incluidos por altos funcionarios que eran miembros prominentes de los partidos conservadores. Prieto no dejó de señalar la colaboración entre reaccionarios y anarquistas. También podría haberse dado cuenta de la necesidad de protección física sentida por muchos empleados y funcionarios, especialmente en Barcelona, Zaragoza y las poblaciones de Andalucía donde los pistoleros anarquistas eran más fuertes. Los pistoleros que fueron detenidos a finales de 1932 llevaban encima las modernas pistolas ametralladoras y a veces hasta dos mil pesetas en efectivo (unos doscientos dólares al cambio de la época, o sea el salario de seis meses de un obrero). El dinero procedía de las cotizaciones sindicales, «sablazos» a los pequeños tenderos y subsidios del tipo de los pagados a los agentes provocadores. Muchos de estos pistoleros iban de ciudad en ciudad, explotando la tensión laboral, hoy en Barcelona, mañana en Sevilla. A menudo eran bien conocidos de la policía, pero raramente se les tenía detenidos más de unas cuantas horas[72]. En el caso de Ama-

do, por ejemplo, a muchos liberales les pareció que el Gobierno había escogido como «chivo expiatorio» a uno de los pocos jueces que eran capaces de tener encerrado en un calabozo a un pistolero durante 72 horas. En Huelva las autoridades habían esperado quizá reducir la violencia incluyendo en la nómina oficial a algunos de los más duros de estos tipos. Esta práctica no es desconocida en otros puertos de mar.

A principios de enero de 1933, el ministro de la Gobernación dio la alarma a las fuerzas nacionales de seguridad, pues parecía inminente un levantamiento anarquista en nombre del *comunismo libertario*, es decir, la completa colectivización de la economía y la abolición del Gobierno central. El 8 de enero varias aldeas aragonesas y andaluzas quemaron sus propios ayuntamientos y rompieron los hilos del teléfono. En los suburbios industriales de Barcelona hubo serios choques entre la policía y los obreros. Las noticias de los periódicos hablaban de 37 muertos y 300 heridos en tres días, tras de lo cual el orden fue restablecido.

En las semanas siguientes fueron siendo publicados horrorosos informes de los sucesos ocurridos en el pueblecito andaluz de Casas Viejas, donde los aldeanos declararon el comunismo libertario y trataron de sitiar sin éxito el cuartel de la guardia civil. Ésta, reforzada por un grupo de guardias de asalto, rodeó entonces a un grupo de anarquistas en la casa de su jefe, «*Seisdedos*». Como los anarquistas se negaron a obedecer la orden de rendición, los guardias hicieron fuego, matando a todos los defensores. Luego quemaron la casa y, según informes posteriores, dejaron deliberadamente abandonados los seis cadáveres a medio quemar para que los vieran los aldeanos y les sirviera de escarmiento[73]. Los diarios liberales e izquierdistas, así como el periódico monárquico *ABC*, enviaron corresponsales que compitieron entre sí para dar detalles sensacionales. En los últimos reportajes se decía que los guardias no sólo mataron a «*Seisdedos*» y sus

compañeros, sino que rodearon a otros aldeanos y los obligaron a meterse en la casa para que compartieran la suerte de sus jefes.

También se descubrió que catorce prisioneros habían sido matados a sangre fría por un pelotón de la guardia de asalto a las órdenes de un tal capitán Rojas. Luego vino la noticia más sensacional: el capitán Rojas dijo a los periodistas que había recibido órdenes de que no hubiera «ni heridos ni prisioneros» y que el jefe del Gobierno, Azaña, había dicho sin rodeos: «Los tiros, a la barriga». Azaña ordenó inmediatamente una investigación gubernativa y negó de plano que hubiera dado tales órdenes o que hubiera dicho tal frase. Mientras tanto escribió en su diario que diputados de tres partidos diferentes le propusieron una dictadura como única solución a los continuos levantamientos anarquistas, y que tanto los amigos como los enemigos de la República decían que las cosas no podían seguir así indefinidamente.

En el debate de las Cortes el prominente diputado radical Diego Martínez Barrio denominó al régimen de Azaña como un gobierno de «barro, sangre y lágrimas». Lo que horrorizó más a la opinión pública fue el duro trato de que habían sido objeto unos miserables e ignorantes campesinos. Cuando las juventudes carlistas y socialistas chocaban, se trataba de personas conscientes políticamente, que sabían muy bien lo que estaban haciendo y que se desafiaban entre sí o desafiaban al Gobierno abiertamente. En tales casos era inevitable, aunque lamentable, que el Gobierno respondiera con la fuerza. Del mismo modo la mayoría de la opinión habría respaldado al Gobierno si éste hubiera tratado con dureza a los pistoleros profesionales que explotaban los sindicatos anarquistas. Pero la conciencia pública reaccionó enérgicamente contra la matanza de campesinos primitivos, que vivían en la más abyecta pobreza, y en este caso el peor de los crímenes había sido cometido por la nueva guardia de asalto republicana.

Los resultados de la investigación parlamentaria no fueron convincentes. El general Cabanellas, de la guardia civil, y otros oficiales de la policía declararon que no había nada extraordinario en las órdenes que habían recibido. Su testimonio implicaba que el capitán Rojas era un embustero, o que las órdenes del Gobierno de Madrid habían sido «interpretadas» en el curso de su transmisión, para dar al capitán la impresión de que realmente se le decía que matara a los prisioneros. A principios de marzo los radicales, dirigidos por Alejandro Lerroux, retiraron su moción de censura contra el Gobierno, y una semana después el informe oficial de las Cortes concluía diciendo que «no hay pruebas que permitan la insinuación de que la policía actuó en la represión de acuerdo con órdenes dadas por los miembros del Gobierno». Sin embargo, la opinión pública creyó al Gobierno moralmente responsable, y los sucesos de Casas Viejas llegarían a convertirse en la piedra angular de una «leyenda negra» contra la República[74].

Aun sin la tragedia de Casas Viejas que dramatizara la situación, a principios de 1933 había varios signos de que el país se inclinaba ahora hacia el conservadurismo. A finales de enero la Confederación Patronal Española, que era una importante asociación de hombres de negocios, dirigió una carta abierta a Azaña, en la que señalaba la «vertiginosa rapidez» con que iba siendo aprobada la nueva legislación social, y se quejaba de que los jurados mixtos, a través del voto del presidente nombrado por el ministro de Trabajo, prácticamente siempre daban la razón a los obreros. Al mismo tiempo los trabajadores, especialmente aquéllos de la CNT, no se sentían obligados a cumplir un acuerdo por el período del calendario del mismo. Pedían al Gobierno que obligara a los trabajadores a que cumplieran los acuerdos del jurado por todo el período de tiempo acordado y demandaban también que los presidentes y los vocales de los jurados mixtos fueran elegidos por oposición y no por nombramiento gubernativo: en otras palabras, que estos puestos fueran considerados co-

mo empleos civiles de carácter técnico, competitivo y apolítico[75].

A finales de marzo, la Unión Económica, que representaba una combinación de hombres de negocios y de economistas académicos, se quejó de que las tendencias «socialistas» del Gobierno habían creado una atmósfera de inseguridad en la industria. Indicaban que las listas de coalición presentadas en las elecciones de 1931 no habían permitido a los votantes elegir entre republicanos y socialistas, y pedían nuevas elecciones antes de que el Gobierno prosiguiera tomando medidas de naturaleza socialista[76]. En julio, más de cien organizaciones de hombres de negocios de diversas localidades se unieron al Círculo de la Unión Mercantil e Industrial de Madrid en sus ataques a la actuación de los jurados mixtos en la industria[77].

El disgusto reinante en el mundo de los negocios era una importante indicación de la creciente oposición al Gobierno de Azaña. La clase media española había sido siempre en gran parte apolítica, y su falta de colaboración fue una de las mayores debilidades de la primera República y de los gobiernos liberales de la Restauración. En general había acogido bien el advenimiento de la segunda República, y la minoría liberal de ella era la que sostenía económicamente la Acción Republicana de Azaña y el Partido Radical-Socialista. Pero la mayoría de los que apoyaban activamente a la República eran más amigos de Lerroux que de Azaña, no por su programa político, sino por su personalidad. Azaña representaba al Ateneo y a los intelectuales; Lerroux, al tipo de políticos más corriente, menos intelectuales, hombres que se habían «hecho» a sí mismos.

Otra indicación vino de las elecciones municipales de abril de 1933. La Constitución requería que los consejos municipales se renovaran cada dos años, y éstas eran las primeras elecciones en que los candidatos republicanos se presentaban en los centenares de pueblos que habían estado dominados por los caciques en las

elecciones del 12 de abril de 1931. De unos 16.000 concejales elegidos, 9802 se declaraban republicanos y 4954 se confesaban monárquicos o de la extrema derecha cuya actitud hacia la República era equívoca. Los resultados desde luego indicaban una sólida mayoría republicana en el país, pero el número de victorias monárquicas era una sorpresa desagradable para el Gobierno. Además, dentro del campo republicano, los radicales de Alejandro Lerroux avanzaron a costa de los socialistas. Mientras que en las elecciones de junio de 1931 para las Cortes Constituyentes los socialistas habían sobrepasado a los radicales en una proporción de cuatro a tres más o menos, este promedio fue al revés en las elecciones municipales de 1933.

La oposición pidió la dimisión de Azaña, y el jefe del Gobierno replicó con su lengua cáustica calificando de «*burgos podridos*» los pueblos que habían elegido monárquicos. El presidente de la República consideró, sin embargo, que las elecciones municipales eran una inclinación del cuerpo electoral hacia la derecha y esperó que Azaña, que había mostrado una gran habilidad dirigiendo la mayoría, iría ahora más despacio con sus reformas legislativas mientras continuaba como jefe del Gobierno. Las Cortes se ocupaban de nuevo de la cuestión religiosa. El artículo 26 de la Constitución era una declaración de principios que requería ahora «leyes complementarias» que lo completaran. La primera de estas leyes fue la disolución de la Compañía de Jesús en enero de 1932. El Gobierno presionaba ahora por una ley de Congregaciones que completara las cláusulas constitucionales prohibiendo a las órdenes religiosas dedicarse al comercio, la industria y la enseñanza. Mucho más que en los primeros debates, la cuestión crucial era ahora la de la enseñanza.

En los últimos cincuenta años, las escuelas secundarias habían llegado a ser una de las principales actividades de las órdenes, tanto por su prosperidad material como por su sentido de misión social. En 1933 dirigían 259 escuelas secundarias atendidas por

2050 maestros, 1150 de los cuales tenían grados universitarios. Sus principales instituciones de este tipo eran los *Exeters* y *Andovers* de España, colegios considerados socialmente de buen tono, que servían de puntos de reunión para los hijos e hijas de las familias ricas, lo que daba ocasión de entablar relaciones luego provechosas en los mundos profesional y de los negocios, y que inculcaban una disciplina de trabajo ausente de las escuelas públicas. También proporcionaban un cierto número de becas, y aunque la mayoría de los estudiantes procedían de la clase adinerada, la Iglesia daba énfasis así a su labor caritativa y educativa. Muchos comerciantes, abogados, ingenieros y funcionarios públicos que jamás iban a misa y a los que no importaba que el clero secular se muriera de hambre, ambicionaban llevar a sus hijos a alguna afamada escuela secundaria de la Iglesia[78].

Los términos del problema eran diferentes a los del caso de la educación primaria, ya que el Estado no estaba en situación inmediata de sustituir las escuelas religiosas existentes. Había en abundancia maestros potenciales de escuelas primarias con los títulos necesarios para dedicarse a la educación; pero no existía la misma abundancia de personal universitario bien entrenado. Uno de los primeros actos del Gobierno Azaña en octubre de 1931 (poco después de la pugna sobre el artículo 26) fue ordenar a las escuelas religiosas que siguieran abiertas. Lo que el Gobierno temía en aquella época era una huelga escolar de la Iglesia, del mismo tipo de aquélla que provocó una guerra civil esporádica en México a finales de los años 1920. Asimismo en los dos años de experiencia republicana el Gobierno tuvo amplia evidencia de todos los grados de resistencia a la total laicización del sistema escolar.

En la primavera de 1933 las Cortes recibieron numerosas peticiones de grupos de padres insistiendo en que el Gobierno no cerrara las escuelas religiosas. Sin embargo, las presiones de esta clase parecieron reforzar los sentimientos anticlericales de las

Cortes, y una mayoría que ya se iba desuniendo por causa de la legislación económica, volvió a unir sus filas para aprobar en mayo la ley de Congregaciones por 278 votos contra 50. Se ordenó a las escuelas secundarias religiosas que cerraran el 1.º de octubre y a las escuelas primarias a principios de 1934. Conforme se acercaba el momento de la votación, muchos obispos hablaron de excomunión para todos aquéllos que votaran la ley; pero el nuncio papal, monseñor Tedeschini, aconsejó paciencia. Estaba en estrecho contacto con el Gobierno y sabía que Alcalá-Zamora deseaba ardientemente un nuevo Concordato, y que Azaña se inclinaba también por dicha solución[79].

En general la opinión dentro de la Iglesia se polarizó en dos criterios distintos desde la proclamación de la República. La mayoría de los obispos sentían en su fuero interno, y hablaban en privado. Lo mismo que el cardenal Segura. Para ellos, en España el catolicismo era consustancial con la Monarquía. Una República era por definición hija de la impía Revolución Francesa, impuesta subrepticiamente a la católica España por los masones. Además, todos ellos debían su nombramiento al favor de Alfonso XIII y consideraban desagradecidos oportunistas a los eclesiásticos que se inclinaban por reconocer a la República. Una minoría de católicos favorecía una política de contemporización. Según su punto de vista, las leyes anticlericales eran fruto de la pasión momentánea. Al igual que en Francia y en Italia estas pasiones acabarían por enfriarse y entonces se podría llegar a un nuevo arreglo para defender los intereses esenciales de la Iglesia. Estos hombres también podían dar fe de que la Iglesia había fracasado en su misión social entre el proletariado, y que una bien definida separación entre la Iglesia y el Estado podría beneficiar a ambas partes. Los principales exponentes de esta posición eran Ángel Herrera, editor de *El Debate*; el cardenal Vidal y Barraquer, de Tarragona, y el nuncio, monseñor Tedeschini.

El papa Pío XI se inclinaba personalmente hacia una postura moderada. Desgraciadamente, en el curso de los numerosos cabildeos para el nombramiento de un nuevo primado no tuvo más remedio que darse cuenta de que la mayoría de los prelados españoles esbozaban una risita ante Ángel Herrera, con sus razonamientos sobre el «mal menor» y el «bien posible»; que consideraban al cardenal Vidal y Barraquer un separatista catalán con una escandalosa afición por el jazz, y pensaban que monseñor Tedeschini no tenía por qué meterse en los asuntos internos de la Iglesia española, y que sus razonamientos eran debidos, simplemente, a su bien conocida animosidad hacia el cardenal Segura. Mientras tanto, los amigos del nuncio en el Gobierno le repetían que la postura oficial de la República, a diferencia de la sostenida por la Monarquía, era la de no intervenir en el nombramiento de las jerarquías eclesiásticas, una posición que indicaba al papa una de las ventajas potenciales, desde el punto de vista de Roma, de la separación de la Iglesia y el Estado.

Tratando de hallar una vía intermedia, el papa nombró en abril de 1932 al obispo de Tarazona, Gomá y Tomás, nuevo cardenal arzobispo de Toledo. Gomá era un prelado muy culto, de gran inteligencia y carácter enérgico. No estaba estrechamente asociado ni con los intransigentes monárquicos ni con los social-católicos. Políticamente era ambicioso, dispuesto a adoptar una posición firme en defensa de los derechos históricos de la Iglesia, pero no dado a exabruptos impolíticos de carácter personalista como el cardenal Segura. Esperó hasta julio de 1933 para publicar su primera carta pastoral, una mesurada réplica a la ley de Congregaciones, con la cual contenía a los militantes, mientras mantenía obstinadamente todas las reclamaciones de la Iglesia. Así, recordó a los fieles que era su deber aceptar los poderes civiles constituidos, aunque fuera en una Roma pagana; pero repetía firmemente que era deber de los padres católicos enviar a sus hijos a escuelas católicas y afirmaba que la Iglesia continuaría sus

funciones educativas. La inequívoca determinación del cardenal fue un factor importante en la decisión del presidente Alcalá-Zamora de disolver las Cortes y convocar nuevas elecciones antes del 1.º de octubre, fecha en la cual el Gobierno de Azaña, de seguir en el poder, presumiblemente habría obligado a cerrar las escuelas secundarias católicas[80].

La insistencia de republicanos y socialistas en el cierre de las escuelas de la Iglesia fue una política sectaria que redundó en su propia derrota. La mayoría había tratado de guiarse por el ejemplo de Francia, en donde habían sido separados la Iglesia y el Estado; pero el Gobierno francés no había privado al final a la Iglesia del derecho de tener escuelas privadas. La República no podía sustituir las escuelas secundarias existentes, de modo que el Gobierno que, de hecho, hizo más por la instrucción primaria que cualquier otro de la historia de España, se colocó a sí mismo en la posición de tratar de destruir las facilidades para la instrucción secundaria. Finalmente, al prohibir a las órdenes religiosas el ejercicio de la enseñanza hizo imposible una separación del Estado y de la Iglesia al modo como la mayoría de los católicos españoles, y el Vaticano, habrían probablemente aceptado. Otras cláusulas de la ley se referían al nombramiento de sacerdotes, su nacionalidad, la nacionalización de los edificios de la Iglesia, los impuestos sobre sus ingresos, la inspección de sus hospitales, orfanatos y seminarios. La firme determinación del Gobierno de llevar a cabo su programa de laicización máxima impidió que todas esas otras cuestiones fueran arregladas pacíficamente.

En el verano de 1933 la República inició el más notable de sus experimentos. Ya desde 1882, el gran crítico de arte y biógrafo de El Greco, Manuel B. Cossío, había soñado con poner los atrasados y aislados pueblos de España en contacto con la vida cultural de la nación. Cossío era colega de Giner de los Ríos en la Institución Libre de Enseñanza. Como Francisco Giner, era un gran caminante, un amante del campo y un pedagogo para quien la

educación estética de sus discípulos era tan importante como su educación intelectual y técnica. La Institución daba gran importancia a la apreciación de la herencia artística nacional, y Cossío concibió la idea de que hasta las aldeas más apartadas y analfabetas pudieran disfrutar plenamente de este aspecto de la cultura moderna. En 1922, en un momento en que pareció que el rey iba a facilitar una mayor participación de los intelectuales liberales en la gobernación del país, Cossío propuso que el Gobierno enviara misiones ambulantes a pueblos y aldeas. La República hizo suya esta idea. En 1931 Cossío, que entonces era ya un hombre muy anciano, estaba demasiado enfermo para encargarse personalmente de tales actividades; pero bajo la dirección de Luis Santullano, y con la cooperación de profesores y estudiantes, la mayoría de ellos de la Universidad de Madrid, en el verano de 1933 se organizaron las primeras misiones pedagógicas.

Imbuidos de la misma fe de Cossío, que creía que la belleza podía ser apreciada aun por las almas más primitivas, los estudiantes fueron a las aldeas con reproducciones de pinturas célebres, y con películas. Sobre escenarios improvisados representaban las obras teatrales de Lope de Vega y Calderón. Llevaban medicamentos y libros, y con la cooperación de los aldeanos construían escuelas. La reacción popular era desigual. En muchos pueblos los campesinos jamás habían visto un automóvil, y mucho menos oído un fonógrafo o visto una película, y reaccionaban igual que los individuos de las tribus del interior de África y América del Sur en su primer contacto con los exploradores del siglo XX. Todo era maravilla, temor, curiosidad, como si se hallaran ante magia. En los pueblos un poco más sofisticados, la reacción era amistosa si la actitud del cura era amable u hostil si no lo era. En algunas aldeas las mujeres, vestidas de negro, soltaban risitas y corrían a esconderse en sus casas, igual que en Oriente. En otros, la sensación de maravilla tomaba una forma más escéptica y contemporánea. Los campesinos se quedaban

mirando con la boca abierta, sin fiarse de aquellos jóvenes venidos de Madrid. ¿No serían recaudadores de impuestos? ¿O agentes para averiguar la verdad de los contratos sobre fincas? ¿No habrían venido a reclutar soldados? Poco a poco, se daban cuenta de que los forasteros habían venido a dar algo al pueblo: libros, medicinas y pinturas.

En unos pocos días el contacto entre la Edad de Piedra y el siglo XX, entre campesinos analfabetos y estudiantes universitarios de la clase media, daba pocos resultados concretos. Pero se establecía un contacto vivido y sentimental de tremenda importancia potencial. Estos estudiantes habrían sido la futura generación gobernante de España si la guerra civil no se hubiera interpuesto, con su ingenuo y generoso deseo de enfrentarse cara a cara con la pobreza, la ignorancia, el temor y la dignidad del pueblo español. Éste era el pueblo que había conquistado América y se había alzado contra Napoleón. Éste era también el pueblo de Fuenteovejuna y de Castilblanco. Aquí estaban las ocultas, las no dirigidas energías de España, un grupo humano que jamás había sido asimilado por la vida de la nación en los tiempos modernos. Por medio del teatro, de los apretones de manos, los abrazos y las caballerescas cortesías comunes a todas las clases de españoles, se estableció un contacto por encima de un abismo cultural de miles de años. Las misiones, producto del renacimiento krausista del siglo XIX, pudieron haber significado el comienzo de un mucho más profundo despertar del pueblo español en su conjunto[81].

En el verano de 1933, el descontento de los trabajadores y las rivalidades entre las confederaciones sindicales minaron aún más la estabilidad de la coalición de Azaña. Los socialistas siempre habían estado divididos en la cuestión de la participación en el Gobierno republicano. Tras la aprobación de una tímida ley agraria, y especialmente tras el asunto de Casas Viejas, un número cada vez mayor de sus diputados creyeron que ya era hora de

retirarse del Gobierno; pero al mismo tiempo no era posible ninguna mayoría parlamentaria sin ellos, hecho que quedó rápidamente demostrado tras la aprobación de la ley de Congregaciones. El presidente de la República, Alcalá-Zamora, convencido de que la opinión pública se iba inclinando hacia la derecha, destituyó a Azaña y llamó a Lerroux. Este último no podía formar un Gobierno ante la oposición de los socialistas, así que al cabo de unos días el presidente tuvo que volver a llamar a Azaña. Los socialistas entonces tuvieron que decidir si seguían apoyando a Azaña o forzaban la disolución de las Cortes. Enfrentados con la posibilidad de unas elecciones en condiciones desfavorables para ellos, decidieron mantener la coalición.

Una importante razón para la inquietud de los socialistas era el descontento de la UGT. La federación laboral socialista había sido una organización muy disciplinada y en conjunto gradualista, durante la mayor parte de su historia. Tradicionalmente era muy fuerte en Madrid y Bilbao, y sus sindicatos más antiguos estaban formados por obreros especializados. Pero durante los dos primeros años de la República, la Federación de Trabajadores de la Tierra llegó a tener casi la mitad del total de miembros de la UGT. Estos trabajadores, que en su mayoría eran analfabetos, constituían lo más primitivo del proletariado español y su psicología política era mucho más parecida a la de los anarquistas que al marxismo. En 1932 los socialistas habían apoyado, aunque de mala gana, la decidida actuación de Casares Quiroga para asegurar la cosecha de trigo en Andalucía. En 1933, tras la desilusión de la ley agraria, no estaban de humor para sacrificar la lealtad de sus militantes trabajadores agrícolas para mantener el orden público en favor del Gobierno republicano. Como precio de su participación en el último Gobierno Azaña, insistieron en la inmediata derogación de la ley de Defensa de la República.

La otra gran federación obrera, la CNT, dominada por los anarquistas, se había opuesto al Gobierno republicano desde el

principio. La huelga de la Telefónica, la huelga general de Sevilla, los motines de enero de 1932 y 1933 fueron obra de la CNT. Al cabo de tres meses los anarquistas ya habían proclamado que la República no era mejor que la Monarquía y obligaron a los socialistas a hacer el papel de rompehuelgas. El debate sobre el Estatuto de Cataluña les dio la oportunidad de ganar un trato de favor en dicha región. La tensión entre catalanes y castellanos era reforzada por la rivalidad entre la UGT y la CNT. La libertad de prensa les daba unas posibilidades de propaganda sin precedentes. Tanto su postura de oposición como su filosofía hallaban mucha más resonancia entre los hasta ahora desorganizados trabajadores que las ideas socialistas. Cuando los dirigentes de la UGT observaron el crecimiento más rápido de sus rivales, atribuyeron el éxito anarquista al hecho de que éstos no se habían comprometido colaborando con un Gobierno burgués.

En general, la expansión de la UGT se concentraba en las provincias occidentales, mientras que la CNT dominaba Cataluña y Levante. Ambas federaciones obreras tenían más o menos la misma fuerza en Andalucía, y Sevilla era el punto focal de su rivalidad. La capital andaluza era también una zona significativa de actividad comunista. A la proclamación de la República, el Partido Comunista español contaba con unos mil miembros[82]. Este grupo minúsculo quedó bastante dividido en 1932 por la defección de sus principales dirigentes intelectuales, Andrés Nin y Joaquín Maurín, que habían colaborado con Lenin en la fundación de la Tercera Internacional. Sin estar de acuerdo con todas las teorías de Trotski, se sintieron muy inquietos por su expulsión de la Unión Soviética en 1928 y se fueron volviendo cada vez más antiestalinistas, a medida que Stalin consolidaba su dictadura. En 1933, el partido se reorganizó en la zona de Sevilla y se llamó a sí mismo «Comité de Reconstrucción». Era dirigido por José Díaz, un enérgico y joven trabajador panadero que esta-

ba destinado a ser el secretario general del Partido Comunista durante la guerra civil.

En total, pues, había tres grupos militantes de trabajadores que luchaban por el poder en la capital de Andalucía: la CNT, la UGT y el «Comité de Reconstrucción». La mayoría de los trabajadores urbanos pertenecían a los sindicatos de la CNT. Los comunistas eran más fuertes entre los trabajadores portuarios. La Federación de Trabajadores de la Tierra de la UGT había ido desarrollándose en los pueblos y la UGT desafiaba a los comunistas para ganar el control de los estibadores. Cada uno de estos grupos, así como la organización patronal, la Federación Económica de Andalucía, contrataban pistoleros cuando la ocasión lo requería. Cada año venían ocurriendo una docena de choques con muertos y heridos graves. Las víctimas más conocidas de aquellos asesinos fueron el secretario de la Federación Económica y un joven e inteligente doctor comunista. Los pistoleros eran alquilados por una tarifa de diez pesetas diarias, en una época en que el salario promedio diario de un obrero de fábrica era de doce pesetas. Cada organización reducía los riesgos de sus guardaespaldas manteniendo escondites, proporcionándoles documentación falsa y formando comités de ayuda a los presos, para aquéllos que tenían la mala suerte de ver un calabozo desde dentro. La violencia ocasional estaba localizada en la zona del puerto, y si los casos eran llevados a los tribunales, generalmente acababan en una absolución, ya que los testigos citados no se acordaban de nada[83].

Los diarios dieron una tremenda publicidad a estos hechos. La Junta de Obras del Puerto estaba en gran parte controlada por la familia de Luca de Tena, los propietarios y editores del diario monárquico *ABC*. Si un obrero de la CNT daba un puñetazo a un comunista en un bar de la zona portuaria, la edición Sevillana del *ABC* informaba que había habido un motín. Si uno de los sindicatos convocaba a una huelga general, y algunos tenderos

prudentes bajaban los cierres de sus tiendas para que no pudieran arrojar una piedra a su escaparate, el *ABC* decía que la ciudad estaba paralizada. La verdad es que la vida era normal fuera de la zona portuaria, y todas las ciudades portuarias del mundo en la década de los 1930 eran testigos de escenas de rivalidad sindical y de violencia esporádica.

La violencia en Sevilla era significativa sobre todo por sus implicaciones políticas. Aunque la clase media española había dado buena acogida a la República, asociaba esta forma de régimen históricamente con el desorden y estaba obsesionada indudablemente con la cuestión del orden público. La policía puede ser incapaz de resolver el problema criminal del mundo clandestino en Francia o los Estados Unidos; pero en esos países la estabilidad de los gobiernos no está tan estrechamente ligada a la violencia laboral. Por otra parte, ellos estaban decididos a probar la autoridad de la República; sabían que esta violencia era una reacción contra la violencia gubernamental a la que había estado siempre expuesta la clase obrera española. Durante la mayor parte de los dos años del mandato de Azaña, el liberal gallego (y amigo íntimo de Azaña) Santiago Casares Quiroga, fue ministro de la Gobernación. Una y otra vez declaró que el Gobierno no estaba dispuesto a convertir en mártires a los anarquistas, y una y otra vez tuvo que recurrir a la guardia civil y a la guardia de asalto, cerrar temporalmente los locales de la CNT y suspender diarios anarquistas.

En 1933 los socialistas se sentían particularmente sensibles respecto a los acontecimientos que estaban ocurriendo en los campos de Extremadura y parte de Andalucía. En julio y agosto hubo una serie de incendios provocados y continuaron las fatales bombas contra los casinos y las fincas aisladas. El gobernador civil de Badajoz, que era miembro del partido de Azaña, dimitió porque docenas de alcaldes socialistas se negaron a colaborar con él. Cuando los diputados moderados y conservadores acusaron a

los socialistas de fomentar la violencia en los campos, estos últimos negaron indignados que ellos apoyaran a los incendiarios. Por desgracia, la cuestión no era si los socialistas creían en el método del incendio de cosechas, sino si tenían el suficiente control sobre aquellos campesinos terriblemente pobres y carentes de cultura que se habían afiliado a la Federación de Trabajadores de la Tierra, esperando para 1932 una reforma agraria que pondría inmediatamente la tierra en sus manos[84].

Durante la primera mitad de 1933, el presidente de las Cortes, Julián Besteiro, trató de moderar el exagerado apasionamiento de las izquierdas, no sólo en las Cortes, sino ante los obreros cada vez más levantiscos. Por aquel entonces dirigió la palabra en la Casa del Pueblo de uno de los suburbios más densos de Sevilla, y dijo a los trabajadores que un radical responsable no procedía a hacer innovaciones por su cuenta. También advirtió contra los excesos anticlericales, añadió que si algunas personas insistían en decir que la voz del pueblo es la voz de Dios, no tenía nada de sorprendente que otros fabricaran otra definición igual de falsa de la democracia. En julio, hablando ante el congreso nacional de los sindicatos de ferroviarios, dijo a sus oyentes que el proletariado español conservaba demasiado del espíritu destructivo de los primeros tiempos de la era industrial; que una economía moderna era demasiado compleja para que los trabajadores lograsen sus fines con medios como la ocupación de fábricas en Italia, que había conducido al fascismo; que el Partido Socialista apoyaría todos los esfuerzos para crear un programa constructivo y pacífico para los desorientados campesinos que ahora se estaban convirtiendo en trabajadores industriales. Como Besteiro tenía el valor de decir las verdades, aun sabiendo que no serían populares entre sus auditorios, y debido a sus años de actuación como dirigente de la UGT fue aplaudido; pero su posición era inaceptable para los trabajadores ugetistas, confiados en su número cada día mayor y desilusionados con la lentitud de las reformas de la Re-

pública, sintiendo a su izquierda la fuerte presión de los anarquistas[85].

La ruptura de la mayoría de las Cortes Constituyentes fue completada por el pase de los radicales a la oposición. Aunque habían criticado y puesto obstáculos en los debates de 1932, habían votado, sin embargo, con el Gobierno, la aprobación de las leyes más importantes: el Estatuto catalán y la ley de Reforma agraria. Sus sentimientos anticlericales hicieron que también colaboraran en la aprobación de la ley de Congregaciones, en mayo; pero se oponían cada vez más a la participación de los socialistas en el Gobierno y creían, tras su victoria en las elecciones municipales, que había llegado el momento de que Alejandro Lerroux fuera jefe del Gobierno. Cuando el debate sobre los incendios de cosechas agrió totalmente las relaciones entre los republicanos de Azaña y los socialistas, el presidente de la República encargó a Lerroux la formación de Gobierno.

En septiembre, las primeras elecciones para el Tribunal de Garantías Constitucionales confirmaron la tendencia conservadora de la opinión. El Tribunal, destinado a ser una especie de Tribunal Supremo en los conflictos constitucionales, era escogido principalmente por los concejales municipales, con dos escaños reservados al Colegio de Abogados y varios para los graduados universitarios de leyes. Los municipios, que habían sido elegidos en abril de 1933 por la votación más libre hasta entonces en la historia de España, escogieron personalidades antigubernamentales en una proporción de dos y media a una. Eligieron, entre otros, al financiero Juan March, que entonces estaba en la cárcel por haber sido recientemente declarado convicto de la acusación de contrabando. Los abogados eligieron a José Calvo Sotelo, monárquico y exministro de Hacienda de Primo de Rivera, que en aquel tiempo se encontraba desterrado. Los municipios y los abogados mostraron así su disgusto contra el Gobierno, e incidentalmente privaron al Tribunal desde el principio de su carác-

ter digno y no partidista que era absolutamente esencial para el desempeño de sus funciones. Como la oposición socialista impedía que Lerroux pudiera gobernar, el presidente de la República decidió disolver las Cortes Constituyentes y convocar nuevas elecciones generales.

La campaña electoral reveló la importancia de varias fuerzas políticas nuevas, la más importante de las cuales era la Confederación Española de Derechas Autónomas, coalición de partidos derechistas conocida por sus iniciales de CEDA. Al menos desde 1917, si no antes, los conservadores católicos de gran elocuencia parlamentaria habían tratado en vano de hacerse con la jefatura. Se sintieron asustados ante las huelgas revolucionarias de 1917 y desilusionados por la corta vida del Gobierno de unión nacional de Antonio Maura en 1918. En la primavera de 1923 habían formado el Partido Social Popular, una imitación del malaventurado partido de Don Sturzo en Italia. En septiembre de 1923 el golpe de Estado de Primo de Rivera acabó con la actividad política normal, lo mismo que la acabó la subida de Mussolini al poder en Italia un año antes. Algunos se adhirieron a la Unión Patriótica de Primo de Rivera en los últimos años de la década de los 20, pero otros se negaron a colaborar con un régimen dictatorial. En mayo de 1931 las elecciones para las Cortes Constituyentes tuvieron lugar antes de que ellos hubieran tenido tiempo de reorganizarse políticamente.

En el año 1931, el diario *El Debate* se convirtió en el principal órgano de expresión de aquellos católicos que deseaban aceptar provisionalmente el nuevo régimen republicano y defender los intereses católicos dentro del marco de la legalidad republicana. Su fundador y editor, Ángel Herrera, también encabezaba la acción social y caritativa de la Iglesia con su organización llamada Acción Católica. Herrera trataba de no mezclarse personalmente en actividades políticas, pero a través de las columnas de *El Debate* y de las reuniones locales de la Acción Católica pudo ayudar

a organizar un nuevo partido, llamado Acción Popular, bajo la dirección del joven diputado por Salamanca José María Gil Robles. Acción Popular era más fuerte en el norte de España. Al aproximarse la campaña electoral de 1933, el partido procuró ensanchar su base incluyendo a todas las pequeñas fuerzas políticas católicas que quisieran unirse a él, especialmente el partido regional católico valenciano dirigido por Luis Lucía.

El denominador común de los partidos que formaban la CEDA era la defensa de los sentimientos e intereses católicos contra las actitudes y leyes anticlericales de las Cortes Constituyentes. No tenía un programa económico coherente, representando, como representaba a la vez, a los grandes terratenientes de Castilla, los pequeños agricultores del norte de España y las organizaciones y cooperativas obreras católicas. Se inspiraba en el catolicismo social del papa León XIII y abogaba por los principios de *Religión, Patria, Familia, Orden, Trabajo y Propiedad*. Propugnaba una organización corporativa de la sociedad en los mismos términos empleados por el papa Pío XI en su encíclica de 1931, *Quadragesimo Anno*. Evitó la cuestión de República contra Monarquía en el cuadro general español, predicando que las formas de régimen eran accidentales.

Combinándose con la CEDA con propósitos electorales, había dos pequeños partidos monárquicos militantes: los tradicionalistas, muy fuertes en el Norte, defensores de los principios carlistas, y Renovación Española, fundada por Antonio Goicoechea en marzo de 1933, que representaba principalmente a los monárquicos alfonsinos. Ambos partidos recalcaban que lo que trataban de conseguir no era una *restauración*, sino una *instauración*. En su opinión, la Monarquía había fracasado, no porque el pueblo español ya no tuviera sentimientos monárquicos, sino porque desde 1875 la monarquía patrocinó ideas liberales que eran incompatibles con la tradición española. Los carlistas consideraban que la rama principal de los Borbones se había comprometi-

do en vano con el liberalismo. Renovación prefería dejar para más adelante la cuestión dinástica, ya que en todo caso España no estaba todavía preparada para aceptar de nuevo la Monarquía; pero defendían la persona de Alfonso XIII. Ambos grupos deseaban una Monarquía autoritaria, que descansaría sobre la religión y las instituciones tradicionales antes que sobre las pistolas de un partido fascista. Ambos grupos compensaban con su riqueza y sus relaciones sociales aristocráticas lo que les faltaba en número de seguidores. En la alianza electoral, la CEDA representaba a las masas católicas y al ala de la Iglesia que provisionalmente estaba dispuesta a aceptar la República. Los partidos monárquicos representaban a los católicos adinerados, a la aristocracia y a los elementos intransigentes de la Iglesia[86].

El año 1933 fue asimismo testigo de las primeras actividades significativas de pequeños partidos de tipo fascista. Ya en octubre de 1931, Ramiro Ledesma Ramos y Onésimo Redondo Ortega fundaron las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista (JONS). Ledesma era un estudiante de filosofía, hijo de un maestro de escuela de Zamora; anticlerical y admirador de Hitler y Mussolini. Onésimo, de origen campesino, era un fervoroso católico y organizador de los pequeños cultivadores remolacheros de la provincia de Valladolid. Aunque difiriendo en sus posiciones religiosas, ambos dirigentes sentían una fuerte nostalgia por la grandeza de España bajo los Reyes Católicos, odio hacia el marxismo y creían en una cierta forma de «dictadura popular[87]». A finales de 1933 afirmaban haber organizado unos 400 estudiantes de la Universidad de Madrid en un nuevo sindicato antimarxista y tener otros 500 miembros organizados en pequeños sindicatos en otras ciudades españolas. La CEDA no los tomaba en serio, ni tampoco los dirigentes monárquicos; pero recibieron pequeñas subvenciones de figuras como Juan March y Antonio Goicoechea, y de varios banqueros vascos[88]. No presentaron candidatos para las elecciones a las Cortes.

Otro partido derechista marginal que entró en la campaña de 1933 fue la Falange Española, fundada el 29 de octubre por tres hombres: José Antonio Primo de Rivera, hijo del dictador; Julio Ruiz de Alda, famoso as del aire, uno de los aviadores que habían tomado parte en el primer vuelo trasatlántico de España a América del Sur, y Alfonso García Valdecasas, diputado asociado en las Cortes con el grupo Al Servicio de la República. La Falange no presentó una lista de candidatos. Sin embargo, era significativa la aparición en el escenario político español de un Primo de Rivera joven, quien, a pesar de carecer de un programa específico o probada habilidad, fue capaz de despertar sentimientos de intensa lealtad personal entre la juventud, universitaria o no.

Con una mayor participación de unas derechas reorganizadas, las elecciones de 1933 fueron mucho más acaloradamente disputadas que las de 1931. Diego Martínez Barrio, escogido por el presidente para dirigir las elecciones, era un masón que había adoptado el sobrenombre de «*Vergniaud*», por el diputado girondino que fue autor de la célebre frase: «Antes la muerte que el crimen». Martínez Barrio resultó una buena elección, porque representaba casi el centro absoluto en el espectro político.

Hubo algunos actos esporádicos de violencia y mucha crisis oratoria en las seis semanas de la campaña electoral. José Antonio Primo de Rivera, candidato de las derechas en la provincia de Cádiz, se mofó de las elecciones generales y de los parlamentos que tenían olor de tabernas baratas. Intentaron asesinarlo en una ocasión que pronunciaba uno de los discursos de la campaña[89]. José Calvo Sotelo, hablando por Radio París, declaró: «Considero evidente que este Parlamento será el último elegido por sufragio universal por muchos años. Estoy persuadido de que la República se ha puesto más en peligro por ser parlamentaria que por ser una República». Un conductor de tranvías comunista, que era candidato a las Cortes, fue asesinado en su vehículo, y un orador conservador fue golpeado hasta dejarlo inconsciente, en

una aldea vasca normalmente pacífica. Los socialistas acusaron al Gobierno de permitir que los pistoleros anarquistas pasearan impunemente por las calles.

Pero el primer ministro se negó a responder a la agitación provocadora con intervenciones de la policía. Él ya había dirigido las denuncias contra las brutalidades de Casas Viejas, y creía que el ministro de la Gobernación había abusado de sus poderes de intervención en la política municipal. Los mítines electorales eran la forma principal de educación política al alcance de las masas. La democracia debía aprenderse en la acción, aun a costa de cometer numerosos errores. Y corrió el riesgo calculado de que la violencia esporádica no falsificara los resultados de la votación hasta el punto que lo habría hecho la intervención gubernamental.

El 19 de noviembre, y con unos ocho millones de votantes acudiendo a las urnas, las derechas consiguieron una victoria sustancial. Como resultado del pacto electoral, los tradicionalistas y Renovación recibieron un total de 40 escaños. La CEDA ganó 110 escaños y se convirtió en el mayor partido minoritario de la cámara, beneficiándose a la vez de las cláusulas de la ley electoral y de su potente y bien financiada campaña. La clase media católica, hasta ahora apolítica, se había volcado hacia un partido que predicaba la accidentalidad de las formas de régimen, y que garantizaba la protección de la propiedad y la religión. Los cultivadores de trigo de Castilla votaron en masa por la CEDA, espoleados a la vez por sus puntos de vista católico-conservadores y la campaña de injurias contra Marcelino Domingo, así como por el programa de importación de trigo de 1932. En las ciudades las monjas iban en taxi hasta las urnas para votar por la CEDA.

El Partido Radical, con unos 100 diputados, logró el segundo puesto, atrayéndose millares de votos de la clase media urbana que era a la vez antisocialista y anticlerical. Los partidos de Manuel Azaña y Marcelino Domingo quedaron virtualmente barri-

dos, y la representación socialista reducida a la mitad. Una gran parte de las pérdidas republicanas fue atribuida a la abstención en masa de los anarquistas, muchos de los cuales habían votado por los republicanos de izquierda en 1931. Pero el factor principal fue la ruptura de la coalición republicano-socialista en la cual los republicanos de izquierda estuvieron excesivamente representados en virtud de sus acuerdos con los socialistas. En las segundas Cortes su debilidad numérica era patente, y los mismos socialistas, sin haber perdido votos, perdieron la mitad de sus escaños. Igualmente, como resultado de la ley electoral, la CEDA estuvo excesivamente representada en comparación con la importancia numérica de los votos que había obtenido.

La representación de los partidos que no habían formado parte de las coaliciones de 1931 o 1933 no varió mucho. Los grupos conservadores moderados de Miguel Maura y Alcalá-Zamora tuvieron 28 diputados en las primeras Cortes y 21 en las segundas. Al mismo tiempo, los liberal-demócratas de Melquíades Álvarez aumentaron de 2 a 8 diputados y los radicales incrementaron su representación en un 10 por ciento. Los nacionalistas vascos tuvieron 14 diputados en ambas Cortes. Si la opinión pública hubiese cambiado radicalmente, es razonable suponer que las cifras de estos partidos no coaligados habrían cambiado más de lo que cambiaron. Los resultados de las elecciones indicaban en su conjunto una tendencia moderada hacia la derecha, caracterizada particularmente por la abstención anarquista y la fuerte participación católica[90].

Capítulo 7

EL GOBIERNO DE CENTRO-DERECHA

DESDE que se conocieron los resultados del escrutinio, estuvo claro que en las nuevas Cortes sería otra vez necesario un Gobierno de coalición. Aunque todas las derechas votaran de acuerdo con la CEDA, seguirían constituyendo menos de la mitad de la Cámara. Si la CEDA se combinaba con el centro y no con la extrema derecha, una disciplinada alianza de la CEDA y los radicales también se quedaría corta para formar mayoría. La cuestión se complicaba además por las actitudes personales. El presidente Alcalá-Zamora había respetado siempre a Manuel Azaña, aunque se hubiera opuesto a él políticamente. Los dirigentes de las dos minorías principales en la nueva Cámara eran Alejandro Lerroux, del Partido Radical, y José María Gil Robles, de la CEDA. El presidente de la República, al igual que muchos conservadores y las izquierdas en bloque, no se fiaban de Lerroux a causa del pasado de éste. Lerroux empezó su carrera política como un demagogo anticatalanista; en los primeros años del siglo era conocido como el «emperador del Paralelo», la calle principal de los distritos obreros de Barcelona. En su repliegue hacia el republicanismo, su partido ganó las elecciones municipales en Barcelona; sin embargo, entonces se demostró que era culpable de muchos actos de corrupción, al estilo familiar en la política de las grandes ciudades americanas. Lerroux *era un gran se-*

ñor[91], sin tener educación universitaria ni ingresos regulares. Era famoso por el modo como ablandaba a sus acreedores, que si entraban hechos una furia en su casa exigiendo el pago inmediato, se pasaban media hora con el gran hombre, y salían (después de haberle hecho un nuevo préstamo) diciendo que acababan de hablar con el hombre que iba a salvar a España. En el transcurso de sus actividades políticas, se hizo muy amigo de Juan March, un enriquecido contrabandista de tabaco, y cuando tenía ya más de sesenta años de edad obtuvo el título de abogado, para poder cobrar decorosamente los honorarios que le abonaba su paniaguado, como consejero que era de los varios negocios controlados por March. Sin embargo, Lerroux había ganado cierto prestigio en los años 1920 como «republicano histórico», años en los que Alcalá-Zamora era todavía un funcionario monárquico y Azaña pertenecía al Partido Reformista de Melquíades Álvarez.

El presidente de la República era un hombre de gran cultura, algo tímido y extremado en sus escrúpulos morales. Jamás se sentía a gusto ante el vulgar y desahogado Lerroux, y como la mayoría de los intelectuales republicanos, a la vez temía y se burlaba de aquel rápido sentido de las realidades que había dado a Lerroux tanto éxito en política. Por otra parte, no podía confiar en Gil Robles, el jefe de la CEDA, que había actuado de abogado defensor de los militares complicados en la revuelta de Sanjurjo y que era asimismo uno de los principales abogados de los jesuitas. Claro que ninguno de estos hechos le descalificaba para dirigir un partido conservador bajo la República; pero era comprensible que el presidente lo lamentara, si se tenía en cuenta que en ningún momento, durante o después de la campaña electoral, Gil Robles afirmó su lealtad a la República como tal. Él insistía en su parlamentarismo, en su respeto hacia las autoridades constituidas; reconocía que la República había advenido por voluntad del pueblo español, pero continuaba hablando de que las formas de régimen eran accidentales. Como la República sólo tenía

dos años de vida, y mucha de su legislación social y muchos de los artículos de su Constitución eran objeto de violentos ataques, el presidente, aunque personalmente era un conservador y un católico devoto, no quiso entregar el poder a Gil Robles. Encarado con tan desagradable dilema, prefirió a Alejandro Lerroux.

Lerroux concebía su misión como una de rectificación y pacificación. Creía que las Cortes Constituyentes se habían inclinado demasiado hacia la izquierda, particularmente en lo referente a la legislación laboral y las leyes anticlericales. Como «republicano histórico», sabía mejor que nadie cuán pocos republicanos de verdad había en España. Le parecía que los socialistas habían manejado las Cortes Constituyentes, a través de la docilidad de Azaña, en todos los momentos de su cooperación. Y propuso ganarse a las masas de católicos y monárquicos mostrando que la República podía proteger a la Iglesia y el derecho a la propiedad. Razonaba que la CEDA y sus votantes aceptarían de buen grado a la República en pocos años cuando dejaran de identificarla automáticamente con las amenazas de una revolución social y religiosa.

El primer Gobierno de Lerroux (que actuó de noviembre de 1933 a abril de 1934), aunque estaba compuesto totalmente de radicales, dependía de los votos de la CEDA y de los monárquicos. No era, pues, un Gobierno de coalición como lo había sido el de Azaña. Pero lo mismo que Azaña había dependido de los votos de los socialistas, Lerroux dependía de las derechas. Las leyes más discutidas de las primeras Cortes no fueron rechazadas, pero fueron suspendidas: la ley de Congregaciones fue ignorada, y las escuelas de la Iglesia funcionaron normalmente. La reforma agraria, siempre lenta, se paró. Largo Caballero había aprovechado su puesto como ministro de Trabajo para nombrar presidentes favorables a los obreros en los jurados mixtos, y ahora el nuevo ministro, José Estadella, usaba del mismo poder para nombrar presidentes favorables a los patronos[92]. Los salarios agrícolas,

que habían subido a un promedio de diez a doce pesetas diarias con Largo Caballero como ministro, ahora bajaron de cuatro a seis pesetas, que era el promedio de 1930. Estos cambios, naturalmente, acrecentaron la tensión en los campos. En marzo las Cortes votaron un aumento de los efectivos de la guardia civil en mil hombres. Martínez Barrio dimitió como ministro de la Gobernación, y su sucesor, Rafael Salazar Alonso, declaró que los socialistas estaban subvirtiendo la República y que cada huelga importante constituía un problema de orden público tanto como un problema laboral. El Gabinete aprobó también, en abril, un proyecto de ley para el restablecimiento de la pena de muerte, ostensiblemente como un disuasivo de los crímenes sociales; pero también evidentemente, dentro del cuadro político, para fortalecer la fuerza represiva con que contaba el Gobierno. Pero las Cortes, incluyendo un gran número de los diputados radicales, así como las izquierdas, se negaron a votar la pena de muerte.

Las Cortes Constituyentes habían dispuesto que el presupuesto estatal para el pago de los sueldos a los sacerdotes cesaría al cabo de dos años, y que como parte de la separación de la Iglesia y el Estado establecida por el artículo 26, los gastos del clero serían sufragados por los fieles. Esto había causado consternación a la jerarquía eclesiástica, que sabía muy bien que con excepción de Navarra y el País Vasco, el clero se moriría probablemente de hambre si era obligado a depender de las contribuciones voluntarias de los fieles. En 1934, las Cortes votaron que se pagaran aproximadamente los dos tercios de los emolumentos del clero secular. También aprobaron, tras tener que dar por terminado un agrio debate, una ley por la que se devolvía a las órdenes religiosas las propiedades que ya les habían sido confiscadas.

Mientras que los radicales gobernaban en favor de las derechas, hubo una serie de importantes cambios de alineación en los partidos. Desde el momento de las elecciones, Azaña y Prieto

comenzaron a predicar la necesidad de una renovada coalición republicano-socialista. Al mismo tiempo, el partido de Azaña, Acción Republicana, se fusionó con los radical-socialistas de Marcelino Domingo para formar Izquierda Republicana. El Partido Agrario de Martínez de Velasco, socialmente conservador y aliado de la CEDA, hizo, sin embargo, una declaración de lealtad a la República, mientras que Gil Robles mantenía su posición ambigua. Martínez Barrio, el principal lugarteniente de Lerroux en el Partido Radical, rompió con su jefe, en buena parte debido a la devolución de las propiedades de la Iglesia y al endurecimiento de la política de orden público[93]. Todos estos cambios eran muy sintomáticos de la inquietud de los republicanos moderados e incluso de los conservadores, al ver que el Gobierno Lerroux se inclinaba rápidamente hacia la derecha.

Cambios igualmente importantes estaban teniendo lugar entre las fuerzas políticas de la clase trabajadora. Inmediatamente después de la victoria electoral de las derechas, Largo Caballero empezó a hablar en términos revolucionarios, quejándose de que los obreros no estaban mejor bajo la República que bajo la Monarquía. Largo Caballero había sido un dirigente sindical y un socialista reformista durante décadas, pero varias influencias coincidentes determinaron su evolución hacia la izquierda. Consideró el nombramiento de Estadella como ministro de Trabajo, seguido por la rápida revisión de las decisiones de los jurados mixtos, como una traición a la clase obrera. La subida de Hitler al poder en Alemania, con el claro apoyo de la derecha tradicional, mostró lo rápidamente que podían los conservadores colaborar en la destrucción de una República cuya Constitución estaba inspirada principalmente en la de la Alemania republicana. Además, Largo Caballero estaba celoso por los muchos elogios dirigidos a Julián Besteiro por su actuación como presidente de las Cortes, y a Prieto, como ministro de Obras Públicas, por muchas de las mismas personas que se habían opuesto a él por su

labor como ministro de Trabajo. Ya a principios de 1934, jóvenes radicales de su partido, como Carlos Baráibar y Luis Araquistáin, animaron a Largo Caballero a «romper» con las tendencias reformistas y a remodelar el Partido Socialista como un partido revolucionario.

Largo Caballero había estado mucho tiempo inquieto por la rivalidad de los sindicatos anarquistas y marxistas y estaba ansioso por tomar la dirección de un frente unido de la clase obrera, que evitaría conflictos tales como la huelga de la Telefónica en 1931 o las violentas rivalidades del puerto de Sevilla. Con el nombre de Alianza Obrera, inició una cooperación entre la UGT y el grupo minoritario moderado de la CNT dirigido por Ángel Pestaña. También negoció con Joaquín Maurín, el dirigente del pequeño partido comunista antiestalinista de Cataluña. Pestaña tenía muy escasa influencia dentro de la CNT y las teorías políticas de ambos, así como la tendencia autonómica catalanista, separaban a Caballero de Maurín, así que sus esfuerzos por entonces dieron poco fruto[94].

Los primeros meses de las nuevas Cortes estuvieron señalados por la actividad militante sin dirección unificada. En 1933 los anarquistas se levantaron contra Lerroux, como habían hecho un año antes contra Azaña. De nuevo hubo declaraciones de *comunismo libertario*, incendios aislados de iglesias y sabotaje industrial. El Gobierno, en el cual Martínez Barrio era ministro de la Gobernación, restableció el orden en cuatro días, usando el mínimo de fuerza y sin que afortunadamente se repitiera otra Casas Viejas[95]. En marzo, los recién elegidos directivos radicales del sindicato de impresores madrileños de la UGT declararon la huelga, y el nuevo ministro de la Gobernación, Salazar Alonso, declaró inmediatamente el estado de alarma. La huelga fue un fracaso, pero sirvió para ilustrar el mal humor de los nuevos dirigentes de la UGT y la rapidez con que Salazar Alonso aplicaba su teoría de que las huelgas eran problemas de orden público.

A finales de marzo, la CNT convocó en Zaragoza una huelga general que paralizó a la ciudad casi seis semanas. Zaragoza, mucho más que Barcelona, era el centro espiritual del anarcosindicalismo, que no estaba adulterado por el nacionalismo catalán. Era el centro más poderoso de la Federación Anarquista Ibérica (FAI), la *élite militante* y férreamente organizada que desde 1927 había dominado a las masas de la CNT. De allí eran originarios los principales dirigentes de la FAI: los hermanos Ascaso, Buenaventura Durruti y algunos otros. La FAI combinaba el idealismo anarquista con el gangsterismo, a menudo en las mismas personas. Recaudaban las cuotas de los sindicatos de la CNT, creaban fondos de ayuda a los presos, compraban armas, «protegían» a los trabajadores de la policía. En 1923 los hermanos Ascaso dieron un rudo golpe a su concepto de la libertad asesinando al cardenal Soldevila en Zaragoza, considerado por ellos como el pilar del clericalismo y la reacción política. Sentenciados a treinta años de cárcel capitalista, fueron amnistiados, sin embargo, en 1931 por la República burguesa. Como eran albañiles de oficio, a menudo habían hecho trabajos de restauración en la Basílica de la Virgen del Pilar, en el curso de los cuales pasaban diariamente ante la tumba de su distinguida víctima.

Los anarquistas de Zaragoza podían ser divididos más o menos en tres categorías. Había un puñado de idealistas autodidactas, lectores de Bakunin y Tolstoi, a veces místicos pacifistas, a veces vegetarianos o desnudistas. Vivían como ascetas, orgullosamente, con sus pobres ingresos de trabajos mal pagados, y creían a pies juntillas que proclamando el comunismo libertario en toda la Península, inmediatamente sobrevendría una sociedad pacífica, próspera e igualitaria. Luego venía la masa de peones y trabajadores semiespecializados, orgullosos de su resistencia física al hambre y a las palizas de la policía, convencidos de la superioridad moral inherente a ser proletarios y no burgueses, e identificando la liberación espiritual con el ateísmo. Antes de

que existiera la FAI, a estos individuos era fácil disuadirles para que no se declararan en huelga. La mayoría de las tiendas y talleres en que trabajaban eran pequeños, y las relaciones entre jefe y empleado eran íntimas. Pero la conciencia de clase y la mística revolucionaria que les había inculcado la FAI les decidió a mostrar a los patronos que la sociedad dependía de ellos, los trabajadores. Les gustaba demostrar ese poder paralizando la ciudad y consideraban sus huelgas generales como ensayos para el logro revolucionario final del comunismo libertario.

Finalmente había un grupo pequeño, pero importante, de pistoleros profesionales, no todos españoles. Cuando los habitantes de Zaragoza veían a veinte o treinta forasteros con acento extranjero vendiendo corbatas por las calles, sabían que estaba próxima otra huelga general. Las peticiones que despertaban el entusiasmo de las masas anarquistas solían ser más políticas que económicas. En 1933 convocaron huelgas de un día, que fueron efectivas, pidiendo la liberación de Thaelmann, el jefe del Partido Comunista alemán que estaba encarcelado, y terminaban sus mítines con el grito de «¡vivan Sacco y Vanzetti!». No importaba que los comunistas fueran en realidad sus mortales enemigos, que a Hitler le importara un comino lo que los obreros de Zaragoza pensaran, y que ya hiciera seis años que Sacco y Vanzetti habían sido llevados a la silla eléctrica, aparte de que muy pocos de ellos se podían permitir el lujo de perder un día de salario[96].

El principal motivo de la huelga general de marzo de 1934 fue pedir la liberación de los apresados en el fracasado levantamiento de diciembre. También protestaban de la conducta del gobernador civil al privar a algunos conductores locales de autobuses de sus licencias. El Gobierno central no negoció con los huelguistas con respecto a los presos y el gobernador devolvió la mayoría de las licencias en cuestión, pero la huelga prosiguió durante casi seis semanas, creando a Durruti una fama nacional y legendaria. Hacia el final, cuando las familias de los huelguistas se enfrenta-

ban con el fantasma del hambre, Durruti organizó una espectacular caravana de autobuses para evacuar a los hijos de los huelguistas, llevándolos a las casas de camaradas anarquistas de Cataluña[97].

En el curso de estos meses, las derechas, al igual que las izquierdas, se mostraron más activas y militantes. La JAP, organización católica juvenil asociada con la CEDA, quería saber por qué su ídolo, Gil Robles, no se había hecho cargo del poder tras las elecciones de noviembre de 1933. La postura de Gil Robles era realmente difícil. No podía esperar convertirse en presidente del Consejo de ministros sin declarar su lealtad a la República; pero el respaldo financiero de su partido era abrumadoramente monárquico, así que no podía permitirse el lujo de declararse republicano. Él insistía en su parlamentarismo[98]. Pero el partido católico del centro en Alemania había votado la concesión de plenos poderes a Hitler, y el Vaticano había firmado un Concordato con Hitler en julio de 1933. Esto ocurría en una época en la que muchos gobiernos estaban intentando ejercer al menos presión moral contra los primeros ultrajes antisemitas y protestaban contra el encarcelamiento en masa de los miembros de la oposición. En febrero de 1934, un primer ministro católico, el canciller Dollfuss, se convirtió en el dictador de Austria y ahogó en sangre la protesta socialista por la disolución del Parlamento. Bajo tales circunstancias, ¿cuántos liberales y socialistas españoles iban a creer en las declaraciones de parlamentarismo de Gil Robles? ¿Y cuántos de sus seguidores militantes, que coreaban los *slogans* antisemitas, y en general imitaban a los movimientos juveniles nazi y fascista, iban a considerarse satisfechos con la «correcta» actitud de su jefe?

El 22 de abril de 1934, el movimiento católico juvenil celebró una reunión de masas en El Escorial, en la cual se combinaron cuidadosamente las actitudes militantes y precavidas. La elección del lugar no podía por menos que recordar a la opinión pública a

su fundador, Felipe II, que había dedicado este monasterio a San Lorenzo como muestra de gratitud por la victoria de San Quintín y le añadió la inmensa cripta en la cual estaban enterrados los reyes de España. Treinta mil jóvenes, muchos de los cuales habían ido andando desde Madrid, se reunieron para escuchar a Gil Robles, quien les dijo que a su debido tiempo se harían cargo del poder, que eran los defensores de la legalidad frente a la revolución y que si la revolución «descendía a las calles», estarían allí para enfrentarse con ella heroicamente. La multitud aclamó entusiásticamente cuando el orador se negó a refugiarse bajo un paraguas contra la fría lluvia que barría la plaza.

Las posturas heroicas y las frases fascistas no eran la especialidad de Gil Robles, pero en abril de 1934 él sabía que sus seguidores no sólo volvían sus ojos hacia Austria y Alemania, sino que el extremismo derechista aumentaba en España. En febrero se habían fusionado la Falange y las JONS. Entre ambas contaban por aquel entonces menos de 3000 miembros pero José Antonio Primo de Rivera era un joven de personalidad magnética, que podía muy bien hacer incursiones en la JAP. En los primeros meses de su existencia, la Falange había predicado contra la violencia callejera; pero la prensa monárquica se rió de ellos, por no haber vengado los tiroteos sufridos por varios estudiantes falangistas, y durante un breve pero significativo período el terrorista monárquico Juan Antonio Ansaldo se unió a la Falange con la tarea precisa de entrenar sus pelotones de represalia[99].

Gil Robles, hablando en El Escorial, se las vio y se las deseó para distinguir su movimiento del fascismo y el nazismo: «*No temo que en España este movimiento nacional tome el camino de la violencia; no creo que, al igual que en otras naciones, el sentimiento nacional reclame que se reavive nuevamente la Roma pagana o emprenda una morbosa exaltación de la raza… Somos un ejército de ciudadanos, no un ejército que necesite uniformes y desfiles marciales*».

Mientras él hablaba, la ciudad de Madrid estaba paralizada por una huelga general. No circulaban tranvías, autobuses ni taxis. Aquel domingo había abiertos pocos bares y cafés[100]. La clase obrera de Madrid demostró con virtual unanimidad su disgusto hacia el jefe de la CEDA. Una crisis parlamentaria se estaba forjando y los trabajadores notificaban al Gobierno que jamás aceptarían la participación de la CEDA en el Gabinete. La causa principal de aquella crisis iba a provocar la hostilidad de las izquierdas; las Cortes habían aprobado un proyecto de ley concediendo la amnistía al general Sanjurjo y a sus compañeros de la revuelta militar de agosto de 1932; al mismo tiempo el Gobierno proponía el restablecimiento de la pena de muerte.

La crisis del Gabinete en abril fue tanto un conflicto entre el presidente y el Gobierno como un conflicto entre las derechas y las izquierdas. El artículo 83 de la Constitución daba al presidente el poder, por medio de un «mensaje razonado», de pedir a las Cortes que reconsideraran una ley en el término de quince días después de su aprobación. Éste era el equivalente del poder de veto del presidente norteamericano, dado que las Cortes tendrían que reunir una mayoría de los dos tercios en la segunda votación, para que la ley pasara por encima de las objeciones del presidente. Alcalá-Zamora estaba convencido de que la amnistía crearía un peligroso precedente; pero también sentía grandes escrúpulos contra el empleo de su autoridad presidencial. El artículo 84 de la misma Constitución declaraba que todos los «actos y mandatos» del presidente serían nulos a menos que fueran refrendados por un ministro. El artículo 83 no decía nada acerca de un refrendo. ¿Era entonces libre el presidente de vetar una ley por sí mismo, o la Constitución incluía el veto entre sus «actos y mandatos» que requerían tal firma? La vaguedad constitucional ilustraba los deseos mixtos de sus autores. Por una parte deseaban dar al presidente un poder moderador; por otro, querían

que el Gabinete, que representaba la supremacía legislativa, pudiera controlar las iniciativas del presidente.

Alcalá-Zamora, durante el período de quince días de que disponía, expuso al Gabinete sus objeciones tanto sobre la amnistía como sus escrúpulos sobre el veto. Esperaba evitar tener que tomar una decisión legal consiguiendo un refrendo; pero el Gobierno apoyó unánimemente a Lerroux, no hizo caso de sus preocupaciones sobre el artículo 84 y le dijo que o firmaba la ley o la vetaba de acuerdo con el artículo 83[101]. Mientras tanto, la prensa conservadora repetía que los monarcas constitucionales también disfrutaban del poder del veto, pero que jamás lo habían ejercido. Las Cortes bajo la Monarquía jamás habían sido representativas de la verdadera opinión pública ni tampoco jamás habrían puesto inconvenientes al monarca, aprobando una ley que él tendría que vetar. Pero Alcalá-Zamora era muy sensible a toda sugestión de que podría salirse de los límites de sus justos poderes.

Trató, en efecto, de hacerlo de ambas maneras: firmando la ley, mientras escribía sus objeciones a la misma. En un memorándum de 34 páginas, arguyó que toda reincorporación al ejército de los oficiales que se habían sublevado animaría inevitablemente a los futuros conspiradores a actuar con la virtual seguridad de quedar impunes y poder reintegrarse en caso de fracaso. También argüía que mientras técnicamente estaba pidiendo una segunda consideración, en realidad pedía una primera consideración, dado que las cláusulas que él objetaba no habían formado parte de la ley original y habían sido añadidas sin debate. Pero deseaba también satisfacer a las familias que habían contado con la amnistía, y firmó el proyecto de ley como un mal menor[102].

Ésta fue una de las varias crisis políticas en las cuales el infortunado presidente no satisfizo a nadie. Lerroux se puso furioso y dimitió, pensando que Alcalá-Zamora le había retirado su confianza en el Gobierno sin atreverse a decirlo. Las izquierdas, aun-

que aplaudían sus razonamientos respecto a la amnistía, se sentían irritadas por sus excesivos escrúpulos, burlándose de ellos. Debería tener el valor de vetar la ley, en vez de andarse con remilgos de lo que constituía una «primera» o una «segunda» consideración. La opinión pública por lo general hallaba su conducta impropia de un jefe de Estado. Mientras tanto, la amnistía se promulgó y aplicó, y el nuevo Gobierno, presidido por Ricardo Samper, aunque muy similar por su composición al anterior, se hizo cargo del poder; «los mismos perros con diferentes collares», como se solía decir de los numerosos cambios de Gobierno en el siglo XIX.

Durante marzo y abril la atención nacional se ocupó principalmente del debate sobre la amnistía y las huelgas desafiantes que se desarrollaron en Madrid y Zaragoza. El Gobierno Samper estaba destinado a enfrentarse con la primera crisis grave entre el Gobierno central y la Cataluña autónoma. En noviembre de 1933 los conservadores habían ganado la mayoría de los escaños de las Cortes en Cataluña, al igual que en el resto de España. La Lliga Catalana de Francisco Cambó (que colaboraba en la Cámara con la CEDA) tenía 25 escaños contra 19 de la Esquerra. Sin embargo, en las elecciones para la Generalitat de enero de 1934, la Esquerra obtuvo una gran mayoría, probablemente la diferencia habida entre la abstención de los anarquistas en las primeras elecciones y su participación en las segundas.

El coronel Macià, héroe de la lucha para la obtención del Estatuto de autonomía, murió repentinamente en diciembre. El nuevo dirigente de la Esquerra, Luis Companys, a diferencia de Macià, era más bien un republicano de izquierda que un nacionalista catalán. Companys había estado asociado con Marcelino Domingo en la dirección de las huelgas revolucionarias de 1917. Había sido el abogado defensor de los anarcosindicalistas durante la década de los 20, y en el curso de su labor había defendido a la vez a los santos y a los pistoleros de la clase obrera de Barcelona.

En 1931 proclamó una República federal dentro de la cual Cataluña gozaría de autonomía, mientras que la fórmula del coronel Macià había sido virtualmente separatista, si bien no en su inmediata enunciación. La victoria de la Esquerra en enero, y la jefatura de Companys, significaban que Cataluña iba a ser gobernada por un Parlamento y un Gabinete de la misma composición que la coalición de Azaña, pero disfrutando de mayor unidad que la citada coalición, puesto que en la misma Esquerra estaban incluidas la mayoría de las tendencias representadas en el Gobierno de Azaña. Mientras que Madrid tenía un Gobierno radical que dependía en gran medida de las derechas, Cataluña tenía un Gobierno izquierdista.

Uno de los principales propósitos de Companys era realizar una reforma agraria cortada a la medida de las necesidades específicas de Cataluña, donde había miles de pequeños agricultores cuya principal cosecha era la de uva. La mayoría de ellos no eran propietarios de las tierras, sino que cultivaban sus viñas bajo contratos a largo plazo que dependían de la vida de los viñedos. Durante el siglo XIX, el promedio de vida de las viñas era de unos cincuenta años. El propietario y el arrendatario se dividían los beneficios a medias y el arrendamiento duraba hasta que morían las tres cuartas partes de las viñas; por este tipo de contrato, llamado de *rabassa morta*, los campesinos eran conocidos como *rabassaires*. Hacia 1890 una plaga de filoxera acabó con las especies predominantes de viñas y el nuevo tipo duraba sólo unos veinticinco años. Después de la primera guerra mundial, el breve pino de arrendamiento, combinado con una baja en los precios del vino, ocasionó muchas dificultades[103]. Luis Companys, entre sus otras muchas actividades, fue el fundador y jefe de la Unió de Rabassaires, cuyo programa era el de alcanzar la propiedad de los viñedos para los campesinos que ahora los labraban como arrendatarios.

El 11 de abril de 1934, la Generalitat aprobó una ley permitiendo a los arrendatarios adquirir la propiedad de las tierras que hubieran estado cultivando al menos durante quince años, y estableciendo tribunales para la determinación de los límites y precios. Esta *ley de cultivos* era el equivalente catalán de la proyectada *ley de arrendamientos*, que no logró ser aprobada por las Cortes en el verano de 1933. Los terratenientes replicaron inmediatamente diciendo que esta ley era inconstitucional y pidieron al Gobierno Samper que llevara el caso ante el Tribunal de Garantías Constitucionales. Protestaban diciendo que la ley violaba el artículo 15, que reservaba a Madrid todas las leyes que afectaran las bases de obligaciones contractuales. La Generalitat contestaba diciendo que, de acuerdo con el artículo 12 del Estatuto de autonomía, tenía derecho a legislar en materias de política social agraria[104].

La ley ciertamente concernía a materias de política social agraria y sus efectos se limitaban al territorio de Cataluña; pero igualmente afectaba las bases de las obligaciones contractuales. Así que la decisión del tribunal habría de ser más política que legal. El 8 de junio, por 13 votos contra 10, sin que una mayoría absoluta de los miembros del tribunal hubiera oído el caso, este dio la razón a las objeciones de los terratenientes. Fue un voto en favor del centralismo y los intereses creados conservadores, contra el regionalismo y la reforma agraria. La Generalitat se negó a aceptarlo, y procedió a aprobar una ley virtualmente idéntica[105]. Pero ni Luis Companys era un separatista, ni Ricardo Samper un fascista, a pesar de todo lo que una prensa excitada pudiera decir de ellos. Ambos hombres negociaron tranquilamente durante el verano en busca de una fórmula que permitiera la reforma agraria sin contravenir la Constitución.

El problema de los rabassaires coincidió con una creciente agitación entre el proletariado campesino en la España occidental y meridional. Lo mismo que el Partido Socialista se inclinaba hacia la izquierda tras haber salido perdiendo en las elecciones de no-

viembre, los moderados fundadores de la Federación de Trabajadores de la Tierra fueron reemplazados por una generación más joven de dirigentes, que se orientaban por la nueva senda revolucionaria indicada por Largo Caballero. En la primavera de 1934 el nivel de los salarios iba descendiendo, y por haber sido rechazada la ley de Términos municipales las Casas del Pueblo se habían visto privadas de controlar el exceso de mano de obra local. Los terratenientes, aguijoneados por dos años de lucha de clases y de elevación de salarios, habían empezado a introducir maquinaria agrícola en las tierras cerealísticas. Los nuevos dirigentes de la Federación establecieron un frente unido con la jefatura anarquista de Andalucía, y un comité combinado de la UGT-CNT anunció el 25 de mayo que los trabajadores agrícolas declararían la huelga el 5 de junio si sus demandas no eran atendidas. Al mismo tiempo dieron publicidad al hecho, ya sabido, de que se esperaba la más abundante cosecha de trigo de la historia de España.

La Federación pidió salarios de 12 y 13 pesetas diarias, similares a los pagados en el período de Azaña. Como compensación por el rechazo de la ley de Términos municipales, solicitaron garantías de que todos los trabajadores disponibles serían empleados, y de que a nadie se le negaría trabajo por su afiliación política. Hacia el 2 de junio ya habían obtenido estas concesiones en un regateo supervisado por el Gobierno; pero algunos de los dirigentes exigieron ahora que los salarios acordados para la cosecha se aplicaran a todo el año. Esta demanda habría duplicado por sí el pago anual de salarios, ya que los peones agrícolas eran empleados tan sólo un promedio de 150 días cada año en las épocas de la siembra y la cosecha. Los moderados, en efecto, se retiraron del aparentemente unido frente militante, de modo que cuando llegó el 5 de junio, sólo algunos pueblos aislados y no más del 20 por ciento de los obreros fueron a la huelga en todas las zonas. Hacia el 10 de junio ya estaba visto que la huelga

había sido un total fracaso, aunque no se informó de incidentes aislados hasta el día 18[106].

El ministro de la Gobernación creía firmemente que tenía entre manos una huelga revolucionaria. Recurrió a la guardia civil y a la guardia de asalto, impuso la censura en las provincias afectadas, deportó a centenares de campesinos encerrándolos en cárceles de provincias distantes, y detuvo a varios maestros, médicos, abogados y diputados socialistas a quienes acusó de fomentar la revolución. Ante las Cortes leyó párrafos incendiarios en los que se pedía que se atacara a la guardia civil, elogiando la quema de cosechas y el asesinato (en anteriores ocasiones) de media docena de terratenientes particularmente odiados de la provincia de Jaén. Declaró que informes confidenciales indicaban que los jefes socialistas habían perdido el control de los comunistas y la FAI. Justificó la rigurosa censura diciendo que sin ella, los trabajadores que ya habían vuelto a los campos volverían a la huelga al enterarse de falsos rumores de éxito en otras provincias. Justificaba la detención de personalidades profesionales y políticas basándose en que eran culpables de propaganda revolucionaria y de que España se había convertido en un país propicio a la revolución marxista[107].

Los debates en las Cortes fueron muy violentos. Los socialistas se mostraban siempre particularmente sensibles a las acusaciones de que los comunistas o los anarquistas los estaban empujando a adoptar posiciones extremas, y Largo Caballero se levantó furioso para rechazar toda responsabilidad, directa o indirecta, por las frases incendiarias de los «provocadores». Los socialistas odiaban intensamente a Salazar Alonso. En la década de 1920-1930 había sido un periodista liberal, un concejal del municipio de Madrid, y amigo (a veces íntimo) de muchos de sus actuales oponentes. La autoridad parecía habérsele subido a la cabeza. En el menor incidente veía un complot revolucionario, y el contraste entre su inhibición durante la huelga general de Za-

ragoza y la mano fuerte que había mostrado frente a los trabajadores agrícolas en junio, parecía indicar una particular animosidad contra los socialistas[108].

Durante la semana de la huelga de trabajadores campesinos ocurrió un dramático incidente en Madrid entre trabajadores socialistas y falangistas. Ambos grupos estaban dedicando las tardes de los domingos en 1934 a hacer ejercicios paramilitares en la Casa de Campo, parque al oeste de la ciudad. Entre ambos partidos a menudo se intercambiaban gritos hostiles y eran frecuentes las peleas a puñetazos, disparándose de vez en cuando algún tiro. El 10 de junio, en uno de tales choques, un joven falangista fue golpeado hasta morir. La dramática noticia se propagó rápidamente por la ciudad y un pelotón de jóvenes de Falange, utilizando el automóvil de Alfonsito Merry del Val, se dirigió a una barriada obrera donde dispararon al azar contra un grupo de trabajadores que volvían de la Casa de Campo. Sus balas hirieron mortalmente a una muchacha — Juana Rico — y causaron graves heridas en las piernas a los dos jóvenes que la acompañaban. Merry del Val fue sometido a juicio aquel verano, pero fue puesto en libertad por falta de pruebas[109].

La represión de la huelga de campesinos continuó, y sus más graves aspectos fueron la deportación de trabajadores y las detenciones de diputados, y todo eso con el cuadro de fondo del paso por Madrid de trenes cargados de campesinos, que volvían a sus hogares de Extremadura procedentes de la cárcel de Burgos. La prensa izquierdista publicaba patéticos relatos de las malas condiciones sanitarias en que fueron llevados los campesinos amontonados, sin darles víveres, y en las estaciones terminales comités socialistas sirvieron comidas y distribuyeron tabaco a aquellos campesinos analfabetos, que saludaban con el puño en alto y que parecían haber salido de los lienzos que pintó Goya en 1808 o de los heroicos Episodios nacionales de Galdós.

Indalecio Prieto encabezó el debate en las Cortes. Hombre de mucha memoria y de estilo oratorio fluido y claro, había actuado en tiempos de la Monarquía en el comité parlamentario que se encargó de investigar todas las acusaciones criminales contra diputados. Los artículos 55 y 56 de la Constitución de 1931, copiados casi palabra por palabra del texto de la Constitución monárquica, se referían a los derechos de los diputados. Según el artículo 55, disfrutaban de inmunidad para dedicarse a la propaganda política. El artículo 56 declaraba que un diputado sólo podría ser detenido en el caso de ser sorprendido in fraganti cometiendo un delito común, y aun entonces, sólo en el caso de que el delito en cuestión estuviera castigado con una pena aflictiva, es decir, una multa o una sentencia de cárcel. Era tradición en el Parlamento no perseguir jamás a los diputados por delitos políticos.

En los primeros días de la huelga de campesinos al diputado socialista por Badajoz, Rubio Heredia, le ordenó el gobernador civil de la provincia que saliera de su distrito electoral, siendo escoltado en su salida de la ciudad por la guardia civil. Interpelado en las Cortes, Salazar Alonso indicó que Rubio no había sido detenido, y prosiguió diciendo que el Gobierno habría respaldado a la guardia civil aunque lo hubiera detenido. En las siguientes dos semanas tres diputados fueron detenidos y encerrados por una noche en un calabozo. El único diputado comunista de las Cortes, el doctor Cayetano Bolívar, fue detenido mientras visitaba a unos campesinos encerrados en un calabozo de Jaén. Ideológicamente, el doctor Bolívar se parecía mucho más a los cristianos primitivos que a los funcionarios de la Tercera Internacional. Era un hombre consumido por su sentido de la injusticia social, idealizando al pueblo entre el que vivía, no cobrando nada a la mayoría de sus pacientes. De su sala de visitas colgaba un crucifijo. Unos días después, un diputado socialista, Carlos Hernández Zancajo, fue detenido por la guardia civil en Pozuelo, osten-

siblemente por llevar armas. Prácticamente todos los funcionarios del Gobierno llevaban armas y Hernández había dicho a los guardias que iba armado. Sin embargo, le registraron, le quitaron su pistola y lo tuvieron encerrado toda la noche. Fue libertado a petición de dos colegas socialistas, uno de ellos el futuro primer ministro en tiempos de la guerra, Juan Negrín. En las Cortes los socialistas afirmaron que dichas detenciones habían tenido lugar como consecuencia de las observaciones de Salazar Alonso con motivo de la discusión del caso Rubio. El ministro de la Gobernación declaró que haría una investigación para averiguar si Hernández había sido maltratado, pero se negó a hacer ninguna declaración política.

El caso del diputado socialista Juan Lozano fue más grave. La policía halló en su casa un paquete del que él dijo que contenía octavillas, pero que resultó contener pistolas. El Gobierno no sólo lo detuvo, sino que llevó las pruebas ante la Comisión de Suplicatorios, que presentó contra Lozano una acusación por poseer un «depósito de armas» ilegal. Junto con la acusación contra Lozano, la Comisión presentó otra contra José Antonio Primo de Rivera. El 3 de junio, unos 500 falangistas se reunieron en un aeropuerto sin permiso del Gobierno. La guardia civil disolvió la reunión y el joven José Antonio asumió caballeresca y personalmente toda la responsabilidad por esta manifestación ilegal. Los guardias no detuvieron a nadie, ni registraron a los falangistas por si iban armados. José Antonio, sin embargo, confesó que en su casa tenía un depósito de armas. El Gobierno le multó con 10.000 pesetas, que no eran difíciles de pagar para un joven de sus medios.

Prieto anunció en el debate su propósito de defender a la vez a Juan Lozano y a José Antonio contra las acusaciones gubernativas. Desde su punto de vista, ambos hombres habían cometido delitos políticos, y el Parlamento español jamás había perseguido a los diputados por tales delitos. Su propósito real era poner de

relieve el trato dado a los socialistas y el que habían dado al hijo de Primo de Rivera. Tres diputados habían sido detenidos mientras visitaban a sus electores, y un cuarto estaba acusado de un delito común por haber recibido un paquete con armas. En todos estos casos la policía había registrado a los individuos como habría hecho con cualquier sospechoso de ser delincuente. Cuando Lozano fue puesto en libertad bajo fianza, el ministro de la Gobernación telegrafió a los puestos fronterizos para evitar que huyera de la justicia. Por otra parte, Primo de Rivera fue hallado al frente de una concentración ilegal de hombres que pertenecían a una organización paramilitar. No hubo registros, ni esposas, ni detenciones; y la Comisión de las Cortes, con toda corrección, al decir de Prieto, había tratado el caso de Primo de Rivera como un delito puramente político.

El debate no condujo a ningún resultado definitivo. Dos días después las Cortes suspendieron sus sesiones por todo el verano, y cuando volvieron a reunirse a principios de octubre, problemas mucho más graves ocuparon su atención. Pero el debate fue sintomático. Los socialistas veían al fascismo en la mano dura de Salazar Alonso contra los campesinos sin tierras y el puñado de diputados que los representaban. Los portavoces de la CEDA y de los partidos monárquicos argüían que la inmunidad parlamentaria otorgada por el artículo 55 no incluía el derecho a hacer propaganda revolucionaria. Samper, presidente del Consejo de ministros, era más conciliador que su ministro de la Gobernación; pero el Gobierno no quiso hacer ninguna declaración política definida sobre cómo trataría casos similares en el futuro. Los socialistas reiteraron que no se dejarían intimidar como los socialdemócratas alemanes en 1933, o permitir que los acorralaran y los cañonearan como les sucedió a los socialistas de Viena en 1934. En un momento dramático, Prieto, creyendo ver que un diputado derechista sacaba una pistola, se adelantó corriendo entre escaños esgrimiendo a su vez otra (sin duda sin amartillar),

para ser rápidamente rodeado por los amigos y sacado afuera, a los pasillos, para que se calmara. Palabras y gestos melodramáticos, pero tras ellos, la sombría convicción de las derechas de que se estaba tramando una revolución comunista y de las izquierdas de que España se estaba volviendo fascista. Un detalle incidental del debate, que pudo haber llegado a ser muy significativo en años posteriores de no haber sido por la tragedia de la guerra, fue una corriente de mutuo afecto entre Prieto y José Antonio Primo de Rivera[110].

Durante las vacaciones parlamentarias del verano de 1934, la cuestión de la autonomía vasca pasó de repente a primer plano. Las cuatro provincias de Navarra, Vizcaya, Álava y Guipúzcoa tenían una larga historia de privilegios económicos y administrativos especiales. Hasta 1876 habían poseído unos fueros que les daban derecho a poseer Parlamento, tribunales y *cecas* propios. Como castigo por su participación en el levantamiento carlista, el Gobierno central abolió sus fueros; pero los sustituyó por un *concierto económico*, bajo el cual conservaban el derecho a fijar los impuestos que debían pagar a través de sus municipios y a abonar una suma fija a Madrid. A finales del siglo XIX y a principios del XX, las provincias de Vizcaya y Guipúzcoa, en particular, se convirtieron en centros de la industria y de la banca. Los vascos, siempre de cara al mar, con sus industrias del hierro y del acero, y sus relaciones comerciales con Inglaterra, eran el único pueblo de España que había desarrollado la moderna empresa corporativa. En Cataluña las fábricas textiles eran negocios familiares. Pero los bancos y las industrias metalúrgicas de Bilbao eran corporaciones con accionistas, consejos de dirección, capital reunido procedente de diferentes orígenes y manejado de forma impersonal. Por otra parte, mientras que la organización corporativa era fuerte, sólo se elegía cuidadosamente como directores a vascos, aun cuando los bancos con centrales en Bilbao se habían convertido, por sus actividades, en bancos nacionales.

Los vascos estaban orgullosos de su alto nivel de vida, su eficiencia capitalista, sus mejores carreteras, escuelas y hospitales. Su sociedad era una amalgama única de catolicismo social con influencias inglesas. La tierra estaba bien distribuida, las cooperativas católicas y las asociaciones de crédito florecían en las ciudades; la Iglesia era de hecho, tanto como en teoría, el centro social de la vida aldeana; el nivel cultural del clero vasco, y como consecuencia de sus escuelas, era alto. La influencia inglesa era bien visible en la organización de los negocios, la afición a los deportes al aire libre y el modo poco retórico como llevaban sus asuntos. Muchos comerciantes e industriales vascos enviaban sus hijos a colegios ingleses.

La orientación atlántica de los vascos hacía que tuvieran en realidad una psicología muy diferente de la característica de los agricultores y montañeses navarros. Este hecho se hizo aparente en el planeamiento del Estatuto de autonomía. Originalmente fue pensado para las cuatro provincias; pero en junio de 1932 los delegados navarros se retiraron de la conferencia en la cual los delegados de las otras tres provincias redactaron el proyecto de Estatuto por gran mayoría. El 5 de noviembre de 1933, los electores de Vizcaya, Álava y Guipúzcoa aprobaron la ley propuesta, por la misma abrumadora mayoría con que los votantes catalanes aprobaron su proyecto de Estatuto en 1931.

En las nuevas Cortes de noviembre de 1933, los nacionalistas vascos se habían unido al bloque de la CEDA. Como conservadores sociales y económicos, y fervorosos católicos, era lógico que colaboraran con la CEDA. Sin embargo, pronto se sintieron desilusionados cuando comprendieron sin lugar a dudas que ni Lerroux ni Gil Robles apoyarían la presentación de un Estatuto de autonomía para los vascos. En la primavera de 1934 habían apoyado a las izquierdas catalanas en su lucha por la aprobación de la ley sobre la rabassa. En el verano decidieron forzar la concesión de su propia autonomía. Sabían que unas Cortes domina-

das por Gil Robles jamás les darían satisfacción. Pero el primer ministro, Samper, había demostrado su deseo de llegar a un compromiso con los catalanes. Quizás también se decidiría a ponerse a su favor.

De acuerdo con el artículo 10 de la Constitución, se habría de redactar una nueva ley municipal para regular la recaudación de impuestos en toda España. Ésta era una de tantas leyes complementarias que no estaban aprobadas cuando se disolvieron las Cortes Constituyentes. Los vascos anunciaron que fundamentándose en el tradicional concierto económico y en el enunciado del artículo 10, era imperativo que el Gobierno otorgara la nueva ley. Proponían celebrar elecciones en las ciudades de las tres provincias el 12 de agosto, elecciones en las que se elegirían delegados municipales que negociarían con el Gobierno de Madrid sobre toda la cuestión de los impuestos.

El 3 de agosto los gobernadores civiles les prohibieron celebrar las elecciones y Madrid envió tropas a Bilbao, Vitoria y San Sebastián. Cincuenta de unas 180 ciudades desafiaron al Gobierno y celebraron las elecciones en campos cercanos, mientras que la policía ocupó los ayuntamientos. No hubo violencias; pero fueron detenidos unos 50 concejales, y más de la mitad de los funcionarios municipales de las provincias vascongadas dimitieron como protesta contra la acción del Gobierno, Samper previno una crisis más grave reconociendo que la ley municipal debió haber sido promulgada hacía tiempo y prometiendo presentar a las Cortes un proyecto de ley permitiendo a los vascos elegir delegados para negociar con el Gobierno las modalidades del sistema de impuestos. Al mismo tiempo indicó que la nueva ley la estaban esperando no sólo las municipalidades vascas, sino las de toda España[111].

La acción de los vascos en agosto de 1934 fue un audaz movimiento político, no espoleado por ningún tipo de mar de fondo de sufrimientos populares, como era el caso de la huelga de los

campesinos, o una necesidad económica largo tiempo sentida, como la de los rabassaires. Los nacionalistas estaban irritados por lo que consideraban la traición de la CEDA, y les parecía políticamente apropiado presentar sus demandas al mismo tiempo que se debatía públicamente el problema catalán. Los banqueros y negociantes de Bilbao y San Sebastián invitaban generalmente a la aristocracia titulada a bordo de sus yates. Pero el 4 de septiembre celebraron una excursión a la que se dio mucha publicidad, con diputados socialistas, de la Esquerra y de la Izquierda Republicana. Los monárquicos, la CEDA y el núcleo elegante de la colonia veraneante en San Sebastián se encolerizaron porque los católicos vascos cortejaban a la «canalla roja».

Para la gran mayoría de los españoles, la vida prosiguió normalmente en el verano de 1934. Los campesinos de todo el país obtuvieron la mejor cosecha del siglo. La industria y el comercio se sintieron aliviados al empezar a recobrarse de la profunda depresión de los años 1932 y 1933. Los lugares de vacaciones estaban llenos. Este verano fue asimismo testigo del máximo de actividad de las misiones pedagógicas.

Pero la tensión política de la primavera no disminuyó. El 11 de julio, apenas una semana después de que se hubiera celebrado en las Cortes el debate sobre el depósito ilegal de armas de José Antonio, el joven fundador de la Falange fue sorprendido por la policía en otra reunión de carácter paramilitar. La policía confiscó cierto número de armas, materias inflamables y porras. Una semana más tarde, Rafael Salazar Alonso anunció que el Gobierno consideraría ilegal cualquier reunión en donde se hiciera el saludo fascista o el del puño en alto.

En una entrevista periodística, Julián Besteiro manifestó su esperanza de que el Gobierno no pondría a la Generalitat entre la espada y la pared. En su opinión, la ley sobre la *rabassa* era un asunto interno que los catalanes estaban en su legítimo derecho de resolver, y que jamás debió ser llevado ante el Tribunal de

Garantías. Y fue más allá, manifestando que si el Gobierno de Madrid coaccionaba a los catalanes, el resto de España tendría derecho a lanzarse a la revuelta. Además, en su opinión, la CEDA no estaba calificada para gobernar la República, pues se había negado a declarar su inequívoca lealtad al régimen[112].

A finales de agosto, con ocasión de una breve visita de Gil Robles a una fundición de acero en Bilbao, los trabajadores, de modo espontáneo, soltaron sus herramientas mientras él estuvo presente. Tal era el odio casi general del proletariado industrial hacia el hombre al que consideraban jefe del fascismo español. Al mismo tiempo, uno de los más antiguos y respetados dirigentes de la UGT, Andrés Saborit, correligionario y amigo de Pablo Iglesias, expresó sus temores de una radicalización del socialismo español. En una entrevista declaró que ni siquiera la disciplina del Partido Socialista podría obligarle a alzar el puño a guisa de saludo, y protestó vehementemente contra su uso en los campamentos infantiles de verano de la UGT[113].

Cuando las Cortes declararon terminadas sus sesiones en julio se daba por supuesto en general que habría una crisis parlamentaria cuando volvieran a reunirse el 1.° de octubre. Gil Robles, presionado por sus ricos amigos monárquicos durante sus vacaciones veraniegas en San Sebastián, anunció sus intenciones en una arenga pública en Covadonga el 9 de septiembre. Lo mismo que en abril había escogido El Escorial, en septiembre escogió la cuna de la Reconquista, el diminuto valle en el cual los cristianos de Asturias lograron impedir que los musulmanes conquistaran el extremo noroeste de España. Con la victoria de Covadonga, la España cristiana señaló el principio de su lucha de ocho siglos para liberar España del yugo del Islam.

Los trabajadores de Oviedo y Gijón protestaron con huelgas efectivas de un día. La carretera de Covadonga fue sembrada de tachuelas y la caravana de la CEDA tuvo que marchar lentamente, llevando escobillas atadas a los guardabarros o defensas delan-

teras en los coches. En su discurso, el jefe calificó a los socialistas de traidores y les advirtió que jamás aceptaría la desmembración del territorio nacional que implicaba las concesiones hechas por Samper a los catalanes y a los vascos. Explicó una vez más que el grupo de la CEDA en las Cortes había sido demasiado pequeño para gobernar y demasiado grande para actuar meramente como oposición. Se habían sacrificado por el bien de España; pero en el mañana gobernarían. Evitando cuidadosamente toda incitación a la violencia, declaró, sin embargo, que ellos irían tomando una a una todas las «trincheras» hasta alcanzar el poder[114].

Mientras tanto, Indalecio Prieto intentó demostrar su militancia proletaria, introduciendo armas de contrabando en Asturias. Este hecho sólo fue posible por el conocimiento sin rival que tenía del mundillo político bajo cuerda de España y por la casi jocosa ineficacia de los archivos gubernamentales. En 1931, poco después del establecimiento de la República española, un grupo de revolucionarios portugueses trató de comprar armas cortas de los arsenales españoles, en un intento para derribar la dictadura de Salazar. Se habían entendido con un rico industrial vasco que era amigo de Prieto; pero, finalmente, no pudieron comprar las armas y éstas fueron embargadas en 1932 en Cádiz por el Gobierno, del cual Azaña era presidente del Consejo y ministro de la Guerra y su amigo Casares Quiroga ministro de la Gobernación. En 1934, Prieto, que conocía la existencia de esta partida, se las arregló para comprarla, ostensiblemente para ser embarcada con destino a Etiopía, que en aquel tiempo ya esperaba la invasión italiana. Para poder embarcar las armas sus agentes compraron un yate de altura, el Turquesa, nada menos que al almirante retirado y diputado monárquico Ramón Carranza.

Las armas fueron embarcadas en Cádiz en presencia de un oficial del Estado Mayor que llevaba una orden de despacho urgente en Aduana del primer ministro Samper[115]. El Turquesa zarpó entonces para Asturias, donde hizo una breve visita nocturna al

pequeño puerto pesquero de Pravia. En presencia de Prieto fueron descargadas varias cajas de cartuchos, ocho pistolas, tres revólveres y dos fusiles[116]. Luego, sospechando la presencia cercana de la policía, el yate levó anclas hacia Burdeos, donde el cónsul español embargó el barco y la mayor parte de su cargamento. Mientras tanto el jefe socialista fue a tropezar con un par de carabineros que sentían sospechas, pero a los que pudo convencer de que nada le gustaba más que pasear de noche a lo largo de la costa. Varios días después huyó a Francia, donde había de permanecer hasta finales de 1935.

Todo el mes de septiembre de 1934 estuvo puntuado por palabras y hechos violentos. En varios pueblos de Asturias, los mineros que protestaban de la concentración política en Covadonga cantando La Internacional chocaron con la policía. En San Sebastián, corazón del moderado País Vasco, ocurrieron dos asesinatos políticos. Revolucionarios desconocidos asesinaron a Manuel Carrión, un rico industrial que simpatizaba con los falangistas, y en el día de sus funerales, pistoleros sin identificar mataron a tiros a Manuel Andrés Casaus, miembro de la Izquierda Republicana de Azaña y exdirector general de Seguridad[117]. En Cataluña, los rabassaires, contra el consejo de sus dirigentes, empezaron a apoderarse de las cosechas y algunos más acalorados de entre ellos prendieron fuego al Instituto Agrícola de San Isidro, cuartel general en Barcelona de los odiados terratenientes. Dos días después, en Madrid, Gil Robles y Martínez de Velasco se dirigieron a una asamblea de terratenientes catalanes mientras que la UGT convocaba una huelga general y el ministro de la Gobernación cerraba la Casa del Pueblo.

En la provincia de León, los guardias de asalto mataron por error a un hombre e hirieron gravemente a otros dos. Iban patrullando por la carretera Madrid-León en la noche del 16 de septiembre, vigilando para impedir el contrabando de armas. A intervalos de pocos minutos dieron el alto a un camión y luego a

un automóvil; sin embargo, lo hicieron sin aparecer en la carretera. En ambos casos los conductores apresuraron la velocidad, suponiendo que eran atacados por bandidos, y en cada caso los guardias se mantuvieron fuera de la vista, suponiendo que estaban tratando con hombres dispuestos a todo, disparando contra ambos vehículos. Fatalmente el muerto era un católico, y en sus funerales en León, los espectadores cantaron La Internacional y gritaron: «¡Muera el fascismo!»[118].

A finales de mes, Salazar Alonso, dirigiéndose al Círculo Mercantil de Madrid, repitió sus anteriores advertencias referentes a la inminencia de una revolución y pidió a sus oyentes que consideraran si no sería ventajoso provocarla, para luego aplastarla[119]. El exrey Alfonso intervino por primera vez abiertamente en la política española con una carta a Antonio Goicoechea (publicada más tarde en el *ABC*), ofreciendo sus servicios para preservar a España de complots revolucionarios. El dirigente monárquico Calvo Sotelo escogió este momento para visitar en Portugal al exilado general Sanjurjo.

Con todo este fondo de violencia y amenazas, las Cortes se reunieron el 1.º de octubre. La CEDA retiró su confianza al presidente del Consejo de ministros, y el Gobierno cayó. Durante diez meses los radicales habían gobernado con el apoyo de la CEDA; pero ahora Gil Robles demandó la participación de la CEDA en el Gabinete. El presidente Alcalá-Zamora seguía sospechando profundamente del «accidentalismo» predicado por Gil Robles. También sentía celos del hombre joven que había tenido tanto éxito organizando a las masas conservadoras de la República, un papel que Alcalá-Zamora había imaginado que sería el suyo. También se daba cuenta de la amenaza socialista de levantarse contra el régimen legalmente constituido si el poder era entregado a la CEDA. «¡Antes Viena que Berlín!», gritaban los socialistas, queriendo significar que por pocas esperanzas que tuvieran de salir triunfantes, lucharían contra el fascismo como los

trabajadores vieneses habían luchado, antes que dejarse destruir sin luchar como en la Alemania de Hitler.

Pero la CEDA representaba el grupo más numeroso de votos de la cámara y había ganado sus escaños en unas elecciones libres. Su dirigente insistía en su lealtad al sistema parlamentario, ya que no a la República. Aunque los miembros de su partido eran admiradores de Dollfuss, el canciller austriaco, y sus grupos juveniles gritaban con frecuencia *slogans* fascistas, no había pruebas de que Gil Robles estuviera preparando personalmente un régimen fascista. El presidente decidió que, a pesar de sus temores y desconfianzas, no podría excluir para siempre a la CEDA. Y pidió a Alejandro Lerroux que formara un Gobierno de coalición en el que la CEDA recibiría tres carteras.

La reacción de los otros jefes republicanos fue inmediata. En notas casi idénticas, Manuel Azaña, Diego Martínez Barrio, Felipe Sánchez Román y Miguel Maura escribieron al presidente diciéndole que estaba rompiendo todas las relaciones con las «instituciones existentes» y que era culpable de entregar la República a sus enemigos. Los socialistas habían esperado que al final Alcalá-Zamora se negaría a entregar el poder a la CEDA. Y ahora, cumpliendo la amenaza que en la propia cámara habían formulado (contra la opinión de los seguidores de Julián Besteiro y Andrés Saborit), el partido y la UGT desencadenaron la huelga en toda España. En Valencia, el 1.° de octubre, *El Pueblo*, órgano del saliente presidente del Consejo de ministros radical, Samper, defendió la legalidad de la nueva ley de Cultivos y proseguía diciendo: «Encarados con un período de opresión y de vergüenza, no queda más salida que un alzamiento revolucionario. Si las fuerzas derechistas de Gil Robles no son comprensivas (en su actitud), desaparecerá el camino de la legalidad».

Capítulo 8

LA REVOLUCIÓN DE OCTUBRE DE 1934

LA revolución de octubre estuvo dirigida a impedir que la CEDA participara en el Gobierno, una participación que parecía, tanto a los liberales de la clase media como a la izquierda revolucionaria, como un equivalente a la implantación del fascismo en España. La sublevación tuvo tres fases principales. El 5 de octubre hubo una serie de huelgas generales no coordinadas, en las grandes ciudades, que fracasaron. El día 6 Luis Companys proclamó la «República de Cataluña dentro de la República Federal española» e invitó a un «Gobierno democrático en el exilio» a establecerse en Barcelona. Mientras tanto, en la zona minera de la provincia de Asturias, las fuerzas unidas del proletariado iniciaron la lucha armada contra el Gobierno, el ejército y el régimen capitalista existente[120].

Las huelgas generales fallaron por un cierto número de razones. En primer lugar, los anarquistas se abstuvieron casi por completo. En Aragón se hallaban agotados por los extraordinarios esfuerzos de la huelga general de Zaragoza de marzo-abril. En Cataluña consideraban al Gobierno Companys como un asunto puramente «burgués», que no les interesaba. Además, los trabajadores políticamente conscientes, tanto anarquistas como marxistas, estaban confundidos por las divisiones entre sus dirigentes. Los moderados de la CNT, como Ángel Pestaña, iban in-

clinándose cada vez más a la idea de una participación política en los gobiernos democráticos. Los jefes antiestalinistas Andrés Nin y Joaquín Maurín, que eran particularmente influyentes en la provincia de Lérida, predicaban una revolución comunista que fuera menos ingenua y más organizada que el comunismo libertario de los anarquistas y que evitara a la vez el burocratismo y el centralismo característicos de los partidos socialista y comunista españoles. Al mismo tiempo, Francisco Largo Caballero, desilusionado con la República, estaba organizando una Alianza Obrera, que habría de agrupar a todos los elementos no anarquistas del proletariado en la parte oriental de España. Tal multiplicidad de consignas tendía a neutralizar la fuerza de la clase obrera en Aragón y Cataluña.

En Andalucía y Extremadura los campesinos estaban exhaustos y confusos tras el fracaso de la huelga de junio. Los más activos, políticamente, sabían que los socialistas estaban divididos acerca de si era o no oportuna la huelga, y todos ellos comprendían que ésta había sido un costoso fracaso. En octubre, de nuevo, los socialistas se hallaban divididos sobre el mejor modo de impedir la entrada de la CEDA en el Gobierno. La mayoría de los intelectuales y los antiguos dirigentes sindicales se oponían a la verborrea revolucionaria de Largo Caballero y a la aventura del desembarco de armas en Asturias. El día 5, Largo Caballero declaró por su parte una huelga general en Madrid, pero la dirigió de un modo indeciso, la primera de un sinnúmero de ocasiones en que había de demostrar que ladraba más que mordía. Una importante razón final del fracaso del llamamiento a la huelga fue la inmediata reacción del Gobierno proclamando el estado de guerra en toda España.

Los primeros acontecimientos importantes tuvieron lugar en Cataluña. El problema más importante entre la Generalitat y el Gobierno central seguía siendo la ley de Cultivos; pero otras circunstancias diversas se añadieron a la tensión. La transferencia de

poderes bajo el Estatuto de autonomía se iba desarrollando demasiado lentamente para gusto de los catalanes, y el retraso, naturalmente, causó confusión acerca de quién era el responsable de la dirección de los asuntos públicos, la administración, los sueldos y los gastos presupuestarios en los servicios provinciales existentes. La prensa de Barcelona atribuyó el aumento de la delincuencia en 1933 a la deliberada negligencia de la política controlada por Madrid[121]. Cuando en abril de 1934 se hizo la transferencia de la autoridad, casi todas las fuerzas de policía dimitieron como gesto ostentoso de protesta. La guardia civil, por su parte, ofreció su inmediata cooperación a las nuevas autoridades catalanas. Éstas, sin embargo, estaban decididas a crear una fuerza propia de policía rural y establecieron los *mossos d'esquadra*, para que patrullaran por los pueblos con sandalias y blusas con galones dorados[122].

A pesar del Estatuto y de la gran popularidad personal de Companys, Cataluña fue sacudida por una oleada de nacionalismo incontrolado. En la Universidad, los profesores castellanos veían cómo sus discípulos y sus colegas catalanes se mostraban deliberadamente hostiles al uso continuado de la lengua castellana en las aulas. Aparecieron octavillas exhortando a los catalanes a no contaminar su sangre casándose con castellanas. Más grave que tales síntomas era el crecimiento de un movimiento casi fascista dentro de las filas juveniles de la Esquerra. Llevando camisas verdes, llamándose a sí mismos *escamots* (pelotones), y denominando a su movimiento Estat Català, hacían la instrucción en formación militar, con fusiles anticuados o inservibles, reconociendo como jefe a José Dencás, consejero de Orden Público de la Generalitat.

Cuando la UGT convocó la huelga general contra la entrada de la CEDA en el Gobierno, Dencás pensó que había llegado la ocasión esperada para proclamar una Cataluña independiente bajo su propia jefatura. En la mañana del 5 de octubre los obreros

anarquistas, así como la mayoría de los empleados socialistas de ferrocarriles, se dirigieron al trabajo. Los *escamots*, a veces amenazando con sus pistolas, detuvieron tranvías y autobuses, dijeron a los expendedores de billetes en las taquillas del Metro que se fueran a sus casas, y amenazaron con destrozar los escaparates de las tiendas que no cerraran. También se informó que estaban levantando los raíles del ferrocarril al este de Lérida para separar «Cataluña» de «España[123]».

El presidente Companys se vio metido en medio de una tormenta en formación. A su izquierda, los impacientes rabassaires amenazaban con apropiarse de las tierras, ahora que los mismos hombres que habían anulado la ley de Cultivos ocupaban el poder en Madrid. A su derecha, los escamots preparaban un golpe fascista en suelo catalán. Mientras tanto, en toda España los liberales y las izquierdas presionaban para lograr la unidad de acción a fin de anticiparse a lo que consideraban como un fascismo incipiente bajo Lerroux. Si ocurría un choque, en Cataluña había nada menos que ocho fuerzas capaces de la violencia armada: eran, la IV División del ejército español, la guardia municipal de Barcelona, la guardia civil y la guardia de asalto, los *mossos d'esquadra*, los *escamots*, los *rabassaires* y la FAI.

Durante todo el 5 de octubre y hasta últimas horas de la tarde del 6, Companys ordenó repetidamente al insubordinado Dencás que no lanzara sus *escamots* a la calle. Dado que Miguel Badía, jefe de la guardia municipal, era un leal lugarteniente de Dencás, Companys no pudo lograr que obedeciera sus órdenes. Mientras tanto, trató de ponerse en contacto telefónico con Alcalá-Zamora en Madrid, para advertir al presidente que le era imposible contener las reacciones izquierdistas o nacionalistas contra el nuevo Gobierno central. El secretario del presidente le leyó un mensaje en tono tranquilizador, pero Companys no pudo ponerse en contacto directo con el presidente en persona[124]. En la mañana del día 6 se recibió el anuncio del presidente del Consejo de

ministros proclamando el estado de guerra. Aquella tarde Companys telefoneó al general Batet, catalán de ideas moderadas, que era el jefe del distrito militar de Barcelona. Invitó a Batet a ponerse al servicio de la «República federal», y el general trató de calmar los temores de su interlocutor, indicando que la proclamación de la ley marcial se aplicaba a toda España y no estaba dirigida contra Cataluña.

En toda Barcelona se anticipaba el clímax de la tarde del día 6. Los consejeros de la Generalitat aparecieron en el balcón del palacio del Gobierno a las 7,30, preparados para dirigirse a la enorme multitud congregada en la plaza de San Jaime, por debajo de ellos, así como a todos los radioyentes de Cataluña. Los nacionalistas exaltados esperaban la proclamación de la plena independencia de Cataluña. Los liberales aguardaban una declaración de resistencia al fascismo de Madrid. Dencás planeaba por su cuenta la proclamación del Estat Català. Companys, en medio de tantos fuegos cruzados, tomó el micrófono de manos de Dencás y proclamó el «Estado catalán dentro de la República federal española». Luego él y su Gobierno se atrincheraron en la Generalitat, en el centro de la parte antigua de Barcelona, dependiendo para su defensa de unos 100 mozos, y esperando desesperadamente que el general Batet permaneciera neutral.

La prudencia del general Batet evitó una tragedia de mayores proporciones. Desde luego, se negó a ponerse al servicio de la Generalitat; pero cuando el ministro de la Guerra, impaciente, llamó por teléfono a las dos de la madrugada para preguntarle por qué no había aplastado la resistencia, replicó que prefería esperar al amanecer para ahorrar vidas[125]. Dencás, olfateando el fracaso, huyó de Barcelona aquella noche. A las cinco de la mañana, Companys acordó por teléfono los términos de la rendición. El general Batet ordenó que se abrieran las puertas y que los mozos salieran con los brazos en alto. Companys replicó que esto sería muy peligroso, ya que fuera había aguardando una ex-

citada multitud y dado que un muchacho fue herido cuando estaba enarbolando la bandera blanca sobre la Generalitat. El general dio entonces otras órdenes. Las puertas serían abiertas y él enviaría un representante para que aceptara la rendición. De esta manera, se permitió a la Generalitat rendirse de un modo digno y sin que hubiera más derramamiento de sangre. La revolución catalana de octubre costó algunos muertos en las escaramuzas habidas en la noche del 6 al 7 de octubre, y al amanecer el Gobierno de Companys fue a la cárcel para aguardar el proceso bajo el cargo de rebelión contra la autoridad debidamente constituida[126].



Mapa 2.— La provincia de Oviedo con los nombres de los lugares que jugaron un papel importante en la Revolución de Octubre de 1934.

En Asturias, el curso de los acontecimientos estuvo determinado en gran parte por el aislamiento geográfico y psicológico de las ciudades mineras. Situadas en los valles de los ríos Aller y Nalón, al sur y sudeste de Oviedo, hay una serie de poblaciones mineras, la mayoría de ellas con menos de 10.000 habitantes. Sus condiciones de vida se caracterizaban por lo peligroso de su trabajo, la constante vigilancia policíaca, una casi total ausencia de periódicos nacionales, autos, radios y comodidades hogareñas, así como una sed por un mínimo de dignidad y educación que sólo podían saciar a través de sus sindicatos mineros. La UGT te-

nía el mayor número de afiliados, especialmente en la capital de la provincia, aunque la CNT, los comunistas y los trotskistas estaban también representados con más o menos fuerza en la región[127].

Los años de propaganda anarquista y marxista habían creado un espíritu de misión entre los mineros. Lo mismo que la Reconquista cristiana de España había comenzado en Covadonga, en lo más abrupto de la cordillera cantábrica, así la revolución proletaria se originaría en Asturias. Las disputas sectarias habían impedido con frecuencia la unidad de acción en el pasado; pero en 1934, pensando en el triunfo de Hitler en Alemania y de Dollfuss en Austria, lograron un grado bastante elevado de unidad. Adoptando el slogan de Unión de hermanos proletarios (UHP), como denominador de sus grupos, las diferentes organizaciones de la clase obrera se unieron en comités revolucionarios locales[128].

En la noche del 4 de octubre, cuando llegó la noticia de la formación del nuevo Gobierno, los comités decidieron inmediatamente declarar una huelga general. En Mieres, donde predominaban los mineros comunistas, 200 militantes, armados con unos 30 rifles, sitiaron el ayuntamiento y los cuarteles. Gracias a una combinación de sorpresa, terror y exageración de su número (disparando con los mismos rifles desde diferentes posiciones), lograron la rendición de los guardias civiles y de asalto. Al día siguiente ocuparon con facilidad otras ciudades mineras entre Mieres y Oviedo, a veces utilizando la bandera de la Cruz Roja como insignia, y el día 6 atacaron la propia capital de la provincia. Oviedo tenía unos 80.000 habitantes, y, en contraste con los centros mineros, en la ciudad había una considerable clase media, una Universidad, varios centros gubernamentales y una guarnición de mil hombres. Unos 8000 militantes marcharon sobre la ciudad, con unas pocas armas cortas y sin artillería, pero con grandes cantidades de dinamita. Como la mayoría de la po-

blación se escondió tras las persianas corridas, los mineros tomaron la mayor parte de la ciudad, ocupando los pisos bajos de los edificios oficiales y arrimándose a los muros para resguardarse de los disparos desde los pisos altos.

Al día siguiente llegaron noticias de los fracasos de Madrid y Barcelona, y el presidente del Consejo de ministros organizó una campaña a base de radio y octavillas, para convencer a los mineros de que el Gobierno controlaba la situación en todo el país. Pero los mineros no tenían por costumbre creer a Alejandro Lerroux, y la exaltación que les había producido su rápido éxito, a más del gran apoyo popular que pudieron percibir en las ciudades mineras y fabriles, aumentó su ardor. Ocuparon las fábricas de armas de Trubia y La Vega, confiscaron numerosos edificios y establecieron el racionamiento de los alimentos y las materias primas. Para los mejores elementos de entre los sublevados, el régimen revolucionario tenía que ser una demostración de moralidad proletaria. Los burgueses recibían las mismas raciones alimenticias que los trabajadores. En el hospital, se dio a los médicos instrucciones de tratar equitativamente a los heridos del Gobierno o revolucionarios. La milicia revolucionaria tenía que proteger a la clase media y a los profesionales apolíticos, aun al riesgo de la vida[129].

En Oviedo, los socialistas y los comunistas se repartieron la autoridad. La UGT era numéricamente el elemento más fuerte, y en Ramón González Peña y Belarmino Tomás disponía de dirigentes moderados que disfrutaban de considerable prestigio entre los liberales de la clase media, así como entre el proletariado. El prestigio comunista se basaba en la captura de Mieres. Ambos partidos se enorgullecían de su disciplina y estaban ansiosos por prevenir el pillaje. El comité de Oviedo miraba con sospecha a aquéllos que insistían en pedir servicios de guardia nocturnos. Acogieron bien la oportunidad de colocar los prisioneros políticos en casas particulares y contaron para este propósito con

los buenos oficios de Teodomiro Menéndez, un exdiputado socialista que se negó a tomar parte en el levantamiento y estuvo brevemente detenido por los militantes.

Sin embargo, para muchos de los trabajadores revolucionarios, el saqueo de las tiendas burguesas no constituía robo. Estaban tan acostumbrados a pensar en los guardias civiles y de asalto como sus enemigos naturales, que la desaparición temporal de estas fuerzas pareció una gloriosa oportunidad para apropiarse de mercancías de toda clase. También para una pequeña minoría primitiva, que había aprendido el odio de clases, sin aprender la «disciplina revolucionaria», la liquidación física del enemigo estaba a la orden del día. En Mieres, en la mañana del 5 de octubre, cuando la guardia de Asalto se rindió, la multitud pidió la muerte de dos guardias particularmente odiados. El comité se negó a ello, formando un círculo con sus propios cuerpos para proteger a los prisioneros. Uno de los guardias, enloquecido por el miedo, escapó del círculo y fue muerto a tiros.

En las dos semanas que siguieron al 5 de octubre fueron asesinadas unas 40 personas. Algunas de ellas eran ingenieros u hombres de negocios, matados por venganzas personales a las que se dio el pretexto de odio de clases. Sin embargo, las principales víctimas fueron sacerdotes. Algunos conventos fueron registrados inútilmente en busca de armas, y los sacerdotes que trataban de huir por las ventanas fueron matados como conejos. En Turón, media docena de frailes fueron detenidos en la mañana del día 5, sin que recibieran malos tratos. Durante los dos días siguientes, sus guardianes, que los habían separado de los otros prisioneros, les preguntaron repetidamente si querían unirse a las fuerzas revolucionarias. Los frailes replicaron que no podían ir al frente, excepto en el cumplimiento de sus deberes religiosos. El día 8, un grupo de soldados que no pertenecían a su guardia entraron y les obligaron a marchar con el pretexto de que los llevaban al frente. Los condujeron al cementerio y allí los fusilaron.

En el pueblo de Sama, el cadáver de un guardia de asalto fue pisoteado de un modo que recordaba a Castilblanco. También es cierto que más de un soldado y sacerdote superviviente testificó de los esfuerzos de los dirigentes del comité para evitar los asesinatos de sacerdotes y prisioneros, intervenciones que salvaron docenas de vidas[130].

El Gobierno quedó desconcertado ante la toma de Oviedo por los revolucionarios. Temió enviar al ejército regular, ante la muy verosímil posibilidad de que los reclutas españoles se negaran a disparar contra los revolucionarios, o incluso desertaran para irse con ellos. El ministro de la Guerra, Diego Hidalgo, siguiendo el consejo de los generales Franco y Goded, envió contingentes de los Regulares, moros y de la Legión Extranjera[131]. Al llegar a los puertos de Avilés y Gijón el 8 de octubre, estas tropas pudieron reducir fácilmente la resistencia de los estibadores y pescadores locales[132]. Los comités revolucionarios estaban aquí dominados por los anarquistas. Aunque se habían unido al levantamiento y habían aceptado el slogan UHP, los socialistas y comunistas de Oviedo no se fiaban de ellos y negaron armas a su delegado el día anterior.

A partir del 8 de octubre los revolucionarios supieron que estaban aislados, completamente a la defensiva, y que la Legión Extranjera había desembarcado. En Oviedo, González Peña tuvo dificultades para impedir que los mineros, desesperados, volaran la catedral, desde donde aseguraban que les habían disparado. Entre el 10 y el 12, él y otros dirigentes que aconsejaban la rendición fueron acusados de cobardía y se amenazó con darles muerte. Al anochecer del 12 de octubre, el general López Ochoa había reconquistado casi toda la ciudad, exceptuando la estación del ferrocarril. Como resultado del cañoneo de la artillería del ejército y de las voladuras de los mineros, Oviedo carecía de agua y luz. La biblioteca de la Universidad y centenares de casas resultaron destruidas.

González Peña, agotado por los esfuerzos para evitar las destrucciones innecesarias e incapaz de convencer a los mineros de lo inútil de continuar la resistencia, dimitió. Los comunistas (como habían de hacer en marzo de 1939) se adelantaron como los portavoces de la continuación de la resistencia, a pesar de que todas las probabilidades estaban en contra. Se formó un nuevo comité, dominado por los comunistas, y todos los partidos se comprometieron a continuar la resistencia. El nuevo comité podía hacer muchos gestos, pero no ejercer la autoridad, y detuvo a Teodomiro Menéndez por unas horas. A la mañana siguiente, 13 de octubre, envió un tren blindado de seis vagones con unos doscientos hombres al pueblo de Campomanes. Los obreros ferroviarios cooperaron de mala gana. A unos pocos kilómetros de la ciudad fue necesario hacer un alto de tres horas para reparar la caldera, pues tras toparse con una patrulla enemiga, aquélla había sido agujereada por los disparos de armas de fuego. Al jefe de la expedición le costó mucho trabajo impedir que sus hombres mataran al maquinista, del que sospechaban que había cometido sabotaje.

Mientras tanto, del 10 al 18 de octubre, los moros y legionarios fueron tomando las poblaciones mineras casa por casa. El general López Ochoa, que era un oficial culto, y masón, hizo lo que pudo para evitar los asesinatos y violaciones, incluyendo el fusilamiento de cuatro moros culpables de atrocidades. El coronel Yagüe, de la Legión, prefirió emplear un saludable terror como arma y no contuvo a sus tropas. Los últimos días se caracterizaron por actos de desesperado valor, con mineros desarmados ofreciendo sus pechos desnudos en desafío a las tropas que avanzaban.

Mieres, de donde habían partido los revolucionarios el 5 de octubre, era su último baluarte hacia el día 18. Belarmino Tomás, delegado socialista en el comité, negoció los términos de la rendición con el general López Ochoa. Los revolucionarios pi-

dieron que no se permitiera a los moros entrar en los pueblos. Tomás explicó que el 13 de octubre recorrió las afueras de Oviedo acompañado de unos cuantos mineros. En el cementerio vieron 18 cadáveres que habían sido atados juntos y mutilados, y en casa de un minero hallaron el cuerpo de una joven que había sido violada y a la que le habían cortado ambos brazos. El general estaba ansioso por evitar más derramamientos de sangre y comprendió que si los mineros habían de luchar forzados por una desesperación suicida, harían falta semanas y meses para pacificar Asturias. Se mostró de acuerdo en que los moros y legionarios no entraran en los pueblos, a menos que no fueran tiroteados por francotiradores, en cuyo caso los pondría en la vanguardia[133].

Esto de los francotiradores fue la razón verdadera o supuesta de los frecuentes fusilamientos de prisioneros durante los días de la «limpieza» militar. Por ejemplo, si un pequeño contingente de soldados cruzando un territorio montañoso y hostil oía un disparo o una imprecación procedente de una ladera boscosa, creyendo que este disparo podía ser el preludio de un ataque general en un esfuerzo para liberar los prisioneros, éstos eran matados por los guardianes. Es imposible saber cuántos hombres fueron muertos de este modo, porque el método no se supo inmediatamente.

Durante las dos semanas de lucha, el público español supo muy poco acerca de los métodos empleados por las fuerzas del Gobierno. Muchos habían admirado la dignidad con que el jefe del Gobierno, Lerroux, se dirigió por radio en la noche del 5 de octubre, anunciando simultáneamente el estado de guerra y prometiendo un retorno justo y rápido a la normalidad. El colapso de las huelgas generales y de la revuelta catalana aumentó mucho el prestigio del Gobierno. Incluso para muchos de los elementos de izquierdas, la revolución de Asturias constituía un desastroso error político, y admitían que cualquier Gobierno habría tenido que reprimir la comuna de los mineros. Pero en las semanas si-

guientes el Gobierno, que dependía de los militares y de la extrema derecha, perdió el control sobre la situación en Asturias. Los guardias civiles y de asalto rivalizaron entre sí en arrancar fantásticas confesiones a los prisioneros. La prensa derechista publicó cuentos de monjas violadas y de niños a los que habían arrancado los ojos. Las Cortes, que se habían negado a restablecer la pena de muerte cuando la huelga general de Zaragoza, la votaron ahora rápidamente.

En Oviedo un periodista liberal, Luis Sirval, fue muerto a tiros en plena calle por un oficial del Tercio que se sintió ofendido por sus artículos. El asesinato de Sirval no fue más brutal que otros muchos cometidos por las fuerzas de la represión; pero Sirval era persona muy conocida y respetada. El Gobierno impuso la censura sobre todas las noticias procedentes de Asturias; pero un grupo parlamentario investigador fue a Oviedo: Álvarez del Vayo y Fernando de los Ríos por los socialistas; Félix Gordón Ordás y Clara Campoamor por los republicanos, estos dos últimos partidarios hasta entonces de Lerroux. Los investigadores establecieron la falsedad de las historias referentes a monjas y niños. Al mismo tiempo, reunieron la evidencia más perjudicial sobre la tortura en las prisiones, y muchos testigos de la clase media de Oviedo elogiaron la nobleza de los mineros, la mayoría de los cuales habían respetado estrictamente a los no combatientes durante el sitio de la ciudad. A la delegación de las Cortes se unió un grupo parlamentario británico. Este último no pudo hacer más que confirmar la evidencia de sus colegas españoles; pero las derechas consideraron un insulto su presencia en España, mientras que en el extranjero su informe creó una oleada internacional de simpatía hacia los mineros.

El principal instigador de las torturas sádicas fue el comandante Doval, de la guardia civil, que empleó, entre otras técnicas, presiones sobre los órganos sexuales o el clavar alfileres o astillas bajo las uñas. También tenía un ingenioso método para atar las

muñecas y las piernas de la víctima al cañón y mango de un fusil y levantarla del suelo por medio de una polea. Por tales medios sus hombres consiguieron varias confesiones del mismo delito. Félix Gordón Ordás, profesor de veterinaria, que era masón y diputado del Partido Radical, tras reunir evidencia de las actividades de Doval, escribió una carta de denuncia al jefe del Gobierno, Lerroux. Éste se hallaba bajo intensa presión de las derechas para que «aplastara» la revolución, y de las izquierdas para que amnistiara a los miles de prisioneros tomados durante las operaciones de limpieza. Telefoneó al general Velarde, superior de Doval, ordenándole que moderara y contuviera las actividades del comandante. Doval, como fuera, se enteró del texto de dicha conferencia telefónica y envió copias de ella a los dirigentes monárquicos Antonio Goicoechea y Luca de Tena. Goicoechea se la mostró a sus amigos en los pasillos de las Cortes, y cuando Lerroux se enteró de esto, ordenó el inmediato traslado de Doval por insubordinación[134]. El *ABC*, diario de Luca de Tena, preparó entonces un editorial atacando a Lerroux; su publicación fue prohibida por la censura. La actitud de Lerroux fue característica, pues deseaba actuar con humanidad; más para evitar una confrontación con los reaccionarios que le apoyaban, buscó el pretexto de la insubordinación de Doval, para no tener que encararse con el problema de la tortura policíaca. Las derechas gritaron que el Gobierno estaba traicionando a España, retirándose ante el marxismo masónico internacional, y las izquierdas compararon la revolución asturiana con la sublevación de Espartaco, la Comuna de París, la resistencia de los obreros vieneses a Dollfuss y otros heroicos episodios en la lucha del proletariado internacional.

La «liquidación» de la sublevación de octubre tuvo ocupado al Gobierno hasta bien entrado el año 1935. Centenares de jurados mixtos y de ayuntamientos, como los de Madrid, Barcelona y Valencia, fueron suspendidos; el estado de alarma y la censura de

prensa se prolongaron mes tras mes. En toda España, de 30 a 40.000 presos políticos esperaban su proceso. La mayoría de estos presos, así como de los concejales suspendidos, podían a lo más ser acusados de pertenecer a los mismos partidos políticos o de ser colegas o amigos de algunos de los dirigentes implicados en las sublevaciones catalana y asturiana.

Un cierto número de procesos militares y políticos revelaron la inseguridad del Gobierno y la amargura de la opinión pública. El comandante Pérez Farrás, militar de carrera que había mandado a los mozos de escuadra catalanes en su resistencia a las tropas del general Batet, durante la noche del 6 de octubre, fue sometido a consejo de guerra y condenado a muerte por rebelión militar. Según el artículo 102 de la Constitución, el presidente tenía poderes para conmutar las sentencias de muerte «previo informe del Tribunal Supremo y a propuesta del Gobierno responsable». El presidente Alcalá-Zamora era reacio a crear mártires de la causa de la autonomía catalana y estaba convencido de que una prolongada campaña de represión destruiría a la República. Los ministros no deseaban recomendar una conmutación, pero convinieron en una revisión por el Tribunal Supremo. Éste confirmó el fatal veredicto y Alcalá-Zamora lanzó todo el peso de su prestigio en un nuevo esfuerzo, ahora con éxito, para que el Gobierno le permitiera la conmutación de la sentencia de muerte. La posición de Lerroux era que el comandante Pérez Farrás, un oficial de carrera y un ingeniero de educación universitaria, era culpable de flagrante rebelión militar. El presidente recordó a sus ministros que la sentencia de muerte del general Sanjurjo fue inmediatamente conmutada para general satisfacción de los mismos que ahora pedían la muerte del comandante Pérez Farrás. El presidente salió triunfante en su empeño, a costa de empeorar sus relaciones personales con el Gobierno Lerroux[135].

El primero de febrero de 1935 fueron fusilados en Oviedo dos hombres tras un consejo de guerra: el sargento Vázquez, que de-

sertó, con las armas en la mano, para pasarse a la milicia revolucionaria, y un minero que mandó el pelotón de ejecución de ocho guardias civiles. Alcalá-Zamora se negó a conmutar en estos casos, aunque las izquierdas le presionaron para que lo hiciera. Pero Vázquez y Argüelles tenían verdaderamente las manos manchadas de sangre; aunque muchas personas pensaron que era injusto que se conmutara la sentencia de un hombre instruido, que sabía muy bien lo que hacía, y se ejecutara a dos hombres humildes que se dejaron arrastrar por las emociones y sólo comprendían vagamente las ideologías. El presidente fue acusado de aplacar al nacionalismo catalán, y no actuar por humanidad desinteresada.

A mediados de febrero se celebraron los Consejos de guerra contra dos diputados socialistas implicados en la revolución: Teodomiro Menéndez y Ramón González Peña. Menéndez formó parte del pequeño grupo de diputados socialistas durante la Monarquía y perteneció siempre al sector moderado del partido. El levantamiento le sorprendió en su domicilio de Oviedo y al entrar allí el ejército lo detuvo. Puesto en fila junto con varios centenares de prisioneros, contó veintisiete hombres fusilados antes de que le llegara su turno y atribuyó su salvación al hecho de ser amigo del general López Ochoa. En las primeras semanas de su encarcelamiento mostró síntomas de desequilibrio nervioso. Los ruidos de las torturas podían ser oídos claramente y las noticias de ejecuciones irregulares llegaban constantemente. Al parecer, a finales de diciembre intentó suicidarse saltando desde un balcón al suelo de cemento de la prisión. (Es necesario emplear las palabras «al parecer» ya que la censura hizo imposible que nadie pudiera enterarse de toda la historia). En todo caso, sufrió varias heridas en la cabeza y la espalda. El 20 de diciembre, durante la investigación parlamentaria sobre las torturas en las prisiones, su viejo amigo Fernando de los Ríos fue a visitarle,

y éste informó que Menéndez lo reconoció, pero habló de modo incoherente, con evidente delirio[136].

En febrero, cuando llegó el momento de su proceso, estaba a la vez física y mentalmente incapacitado. Testigos locales indicaron que no se había movido de su casa en toda la semana, y que su única actividad fue la de tratar de que varios prisioneros fueran puestos en libertad, rechazando una invitación para dirigir la palabra a la muchedumbre que se aprestaba a dirigirse a la fábrica de armas de La Vega. La acusación contra él se basaba en haber «sido visto» con varios dirigentes revolucionarios y que su firma aparecía en un documento que resultó ser la transferencia de prisioneros a domicilios particulares. Las personas que fueron libertadas gracias a sus esfuerzos presentaron declaraciones juradas, y hubo una carta de Julián Besteiro afirmando que en las juntas del Partido Socialista, Menéndez votó contra la sublevación. Al final fue llevado ante el tribunal en una camilla y le preguntaron si quería hablar en defensa propia, a lo que contestó negativamente[137].

Unos días después, sin que se hubiera dictado todavía la sentencia contra Menéndez, comenzó la vista contra González Peña. Éste había sido miembro del comité revolucionario y manejó fondos robados del Banco de España. Muchos testigos manifestaron que le vieron «dar órdenes», aunque significativamente nadie pudo acusarle de cometer violencias o de crueldad con los prisioneros. González Peña declaró en su defensa que, efectivamente, había recibido 15.000 pesetas para huir. (Logró permanecer escondido hasta el 4 de diciembre). Pero tras su captura devolvió 15 500 pesetas. Dijo que había salvado a cien guardias de morir fusilados en los cuarteles de Pelayo, y que había varios testigos de sus esfuerzos para impedir los incendios y el terrorismo. Peligrando su vida dos semanas después de las ejecuciones de Vázquez y Argüelles, entregó al tribunal una justificación autobiográfica de su solidaridad con los revolucionarios. Entre otras co-

sas, y puesto que era acusado de robar al Banco de España, hizo una descripción de sus ingresos personales. Por ejercer varios cargos había ganado sesenta mil pesetas en año y medio bajo la República. De estos ingresos, vivía con 5000, gastaba 4000 en libros, prestaba 9000 a sus amigos y daba el resto a los parados[138].

En el intervalo entre los procesos de Menéndez y González Peña, el Partido Socialista francés reunió miles de firmas en peticiones de amnistía, y el diputado socialista francés Vincent Auriol visitó a Lerroux en nombre de la Liga de los Derechos del Hombre. Simultáneamente, un grupo de intelectuales españoles escribió al presidente Alcalá-Zamora protestando contra las torturas en las prisiones de Oviedo, como se revelaban en un documento firmado por 564 presos a fines de enero. Entre los que firmaron la carta al presidente estaban los famosos escritores Unamuno y Valle Inclán, así como Francisco Bergamín, el abogado que defendió al general Sanjurjo en 1932[139].

El 16 de febrero el tribunal militar anunció las sentencias de pena de muerte para Menéndez y González Peña, seguidas a los pocos días por la condena de otros 17 miembros de los comités revolucionarios. Esta sucesión de penas de muerte provocó una crisis dentro del Gobierno de centro-derecha. El jefe del Gobierno, Lerroux, aunque había creído justa la pena de muerte para Pérez Farrás, no era un hombre vengativo. Su reputación no se basaba en ningún programa, sino en su habilidad para calmar extremistas. Era conocido en broma como «el contratista de la tranquilidad pública». En parte por humanidad y en parte por su deseo de no permitir que Alcalá-Zamora se llevara toda la fama, Lerroux recomendó una conmutación de la sentencia contra los jefes políticos revolucionarios. Inmediatamente, Gil Robles en nombre de la CEDA y Melquíades Álvarez por el Partido Reformista anunciaron que dejaban de colaborar, como reacción, con el Gobierno[140].

Las derechas habían esperado utilizar la crisis asturiana no sólo para ejecutar a los jefes socialistas, sino también para desacreditar a los republicanos de izquierda. En los tribunales y el Parlamento intentaron repetidamente convertir a Manuel Azaña en uno de los responsables de las sublevaciones catalana y asturiana. Azaña había llegado a Barcelona a finales de septiembre de 1934, para asistir al entierro de Jaime Carner, que había sido ministro de Hacienda en su Gobierno. Los últimos tributos a Carner congregaron, naturalmente, a muchas personalidades del bienio 1931-33, y hubo varias conversaciones en las que participaron republicanos de izquierda, socialistas y miembros de la Generalitat. Azaña pensaba regresar a Madrid el 4 de octubre, pero varios amigos le rogaron por teléfono que no saliera de Barcelona. Todos esperaban un golpe militar y temían que su vida peligrara si regresaba. Al día siguiente, la huelga general se extendía virtualmente por toda Cataluña, así que se vio obligado a quedarse donde estaba.

El día 6, mientras la Esquerra debatía si declarar o no el Estat Català, un miembro del Gobierno de Companys, Juan Lluhí, fue a ver a Azaña, al hotel Colón. En un estado mental de evidente agitación, dijo al expresidente del Consejo que la Generalitat no podría contener a las masas, y que tendrían que canalizar el movimiento nacionalista o disparar contra sus propios seguidores. Azaña le recordó que él había votado contra una República federal, y que fueran los que fuesen los motivos actuales de la Generalitat, cualquier declaración contra el Gobierno central aparecería como separatista. Azaña estaba además seguro de que el movimiento fracasaría. Lluhí lo tachó de pesimista y sugirió, esperanzado, una analogía con los acontecimientos de 1931. El coronel Macià había ido demasiado lejos proclamando la República catalana. Madrid se había apresurado a negociar con él. En el compromiso resultante los catalanes habían renunciado a su República separada a cambio del compromiso firmado de un Esta-

tuto de autonomía. Lluhí sugirió que lo que la Generalitat esperaba realmente era un regateo semejante. Tras proclamar la República federal negociarían con Madrid, concediendo el Estat Català contra un arreglo satisfactorio del problema de la ley de Cultivos.

Comprendiendo la puerilidad de tales esperanzas, y sabiendo que por su mera presencia en Barcelona sería implicado en lo que ocurriera, Azaña convocó inmediatamente en su hotel al comité catalán de Izquierda Republicana, y contó a sus miembros la conversación, recibiendo de ellos una unánime aprobación de su expresión de oposición a todo levantamiento tal como Lluhí había insinuado. Hacia las ocho de aquella noche abandonó el hotel, acompañado de varios amigos y del policía secreto que le había asignado el Gobierno de Madrid como guardián. Pasó la noche en casa de un amigo, el doctor Rafael Gubern.

Aproximadamente a la misma hora que Azaña dejaba el hotel Colón, Alejandro Lerroux estaba hablando por teléfono con el general Batet. Entre otras cosas dijo al general que Azaña estaba en esos momentos redactando un manifiesto para Companys «presumiblemente con carácter sedicioso». En la mañana del 7, cuando todo hubo acabado, el director general de Seguridad anunció a los periodistas en Madrid que «Azaña y su banda» habían huido a través de una alcantarilla que había en los sótanos de la Generalitat. Si el director hubiera comprobado con el policía que él mismo había designado para vigilar a Azaña, se habría enterado de que éste no había ido a la Generalitat, y de haber consultado con la policía de Barcelona, se habría enterado de que tal alcantarilla no existía. De haber preguntado a su agente sobre las actividades de Azaña, habría sabido que Azaña trató de disuadir a Lluhí y que su partido se había manifestado contra toda tentativa de levantamiento.

Azaña fue detenido el día 7 e internado en un barco-prisión en el puerto de Barcelona. Tras tres días de encuesta, el investi-

gador militar encargado del caso, general Pozas, quedó completamente convencido de la inocencia de Azaña y no hizo de ello un secreto para nadie. Pero el Gobierno se negó a libertarle. El 14 de noviembre un grupo de eminentes intelectuales se dirigieron con una carta abierta al Gobierno protestando contra la insensata persecución de que era objeto el ex primer ministro. La censura impidió que la carta apareciera en los periódicos[141]. Azaña fue puesto en libertad provisional a últimos de diciembre, mientras que el caso era llevado al Tribunal Supremo. Durante enero y febrero, la atención pública se concentró en las revelaciones sobre las torturas en Oviedo, y sobre los procesos de Menéndez y González Peña. Entonces, el 21 de marzo, cuando parecía verosímil que las sentencias de muerte fueran conmutadas, los monárquicos iniciaron en las Cortes un debate de gran envergadura. Antonio Goicoechea acusó a Azaña de ser responsable de las discordias civiles reinantes en España, y repitió todas aquellas acusaciones no probadas y refutadas hechas cuando lo de Casas Viejas, y prosiguió acusando a Azaña de haber iniciado la revuelta catalana, y luego le atribuyó los desembarcos de armas en Asturias.

En su tentativa para destruir a Azaña, las derechas crearon virtualmente el Frente Popular. La opinión pública habría apoyado probablemente al Gobierno de centro-derecha si tras la revolución hubiera castigado tan sólo a los culpables de atrocidades tanto entre los revolucionarios como entre los militares. Pero la prensa monárquica y los diputados estaban decididos a identificar a toda la República liberal con los mineros militantes más revolucionarios. La CEDA y el Gobierno Lerroux, aunque estaban mejor enterados, siguieron humildemente la senda trazada por Antonio Goicoechea.

Lo cierto es que todas las formas de fanatismo y crueldad que habían de caracterizar la guerra civil se dieron ya en la revolución de Octubre y sus secuelas: una revolución utópica desfigu-

rada por el esporádico terror rojo; sistemática represión sangrienta de las «fuerzas del orden»; confusión y desmoralización de la izquierda moderada; fanática venganza por parte de las derechas. Tras el restablecimiento del orden, el presidente y el primer ministro trataron torpe, pero sinceramente, de limitar la represión; más la censura de prensa impidió que el pueblo español supiera siquiera lo que había ocurrido en Asturias, y por tanto aprender de las lecciones de tan trágico prólogo de la guerra civil.

Cuando en marzo de 1935 las derechas intentaron, de nuevo contra el abrumador peso de la evidencia, igualar a Azaña con el sargento Vázquez, forjaron la unidad de la izquierda extrema y moderada. Disgustaron a los conservadores honrados y llegaron hasta el extremo de convertir a Azaña en el ídolo de las masas. Durante el día del debate, se congregaron muchedumbres entusiastas de partidarios, para aclamar a Azaña al entrar y salir éste de las Cortes. Cuando se procedió a la votación a última hora de la tarde, los carlistas, Renovación y la CEDA votaron contra Azaña. Los republicanos conservadores, los nacionalistas vascos, la Esquerra y toda la Izquierda votaron por él[142]. La alineación era muy parecida a la de la España del 18 de julio de 1936. Y hubo casi un anticlímax cuando el 6 de abril el Tribunal Supremo absolvió a Azaña de todos los cargos en relación con la revolución de Octubre. Pero aun entonces, las derechas no aceptaron el veredicto, y en julio, en las Cortes, se habría de oír de nuevo la repetición de las viejas acusaciones.

Capítulo 9

POLÍTICA E IDEOLOGÍAS EN 1935

CON la revolución de Asturias liquidada y el Gobierno Lerroux firmemente en el poder, la coalición de centroderecha tuvo una oportunidad más para gobernar a España. El ministro de Agricultura, Manuel Giménez Fernández, estaba decidido a transformar la España de los latifundios de acuerdo con los principios sociales católicos. Abogado, historiador, enérgico portavoz y lugarteniente de Gil Robles en la CEDA, patrocinó tres leyes destinadas a fomentar el desarrollo de las fincas individuales familiares en Andalucía y Extremadura. La ley aprobada en marzo estaba destinada a mejorar las condiciones de vida de aquéllos que tenían arrendadas pequeñas parcelas de tierra. Éstos habían de recibir arrendamientos a largo plazo y serían compensados por las mejoras que hicieran en las tierras y edificaciones. Las tierras que trabajaran no podrían ser vendidas sin que ellos dieran su acuerdo al precio de venta. La ley de agosto estaba destinada a dar a los arrendatarios la oportunidad de comprar una parcela de tierra. Y la ley de noviembre obligaba específicamente a los terratenientes de Extremadura a arrendar sus tierras incultivadas durante el año siguiente.

Sin embargo, el partido al que pertenecía el ministro insistió en que estas leyes contuvieran cláusulas que efectivamente impidieran que hubiera ningún cambio fundamental en las relaciones de la propiedad rural. La ley de marzo daba al propietario la posibilidad de elegir entre las nuevas condiciones de arrendamiento

o de cultivar la tierra por sí mismo. Su aprobación fue seguida por una oleada de desahucios por parte de los terratenientes, que se limitaron a anunciar a sus indefensos arrendatarios que ahora pensaban labrar las tierras por su cuenta[143]. La ley de agosto declaraba que los campesinos tendrían la oportunidad de comprar algunas tierras, pero no necesariamente las tierras sobre las que estaban viviendo. Las propiedades disponibles serían aquéllas que los propietarios deseasen vender. Eran necesarios numerosos pasos legales antes de que se adquiriera el título de propiedad, y el campesino, establecido en una determinada parcela, tendría que pagar una renta del 4 por ciento del valor señalado durante los años que durasen las transacciones legales[144]. Como bajo la ley de 1932, el campesino se enfrentaba con un período indefinido de litigios, tiempo durante el cual habría de pagar rentas sin saber si al final acabaría siendo el propietario. En 1932 al menos el Gobierno había sometido grandes extensiones de tierras a la expropiación, pero en 1935 las hectáreas disponibles serían aquéllas de las cuales los propietarios quisieran desprenderse.

El problema del exceso de trigo se presentó en 1935, lo mismo que se había presentado en los años anteriores. En junio las Cortes autorizaron al Gobierno a comprar el excedente, pero declarando que se debía dar la preferencia a los cultivadores que hubieran recibido préstamos de los bancos de crédito agrícola. Así que la prosperidad de los bancos fue el primer criterio que se tuvo en cuenta al decidir qué agricultores necesitaban un más rápido alivio de sus necesidades. Como esta medida resultara ser totalmente inadecuada, el Ministerio de la Guerra compró grandes cantidades y concedió un crédito de 200 millones de pesetas a fin de que las fábricas harineras continuaran trabajando, a pesar de las desfavorables condiciones del mercado[145].

La cuestión escolar siguió ocupando a las Cortes, de modo frecuente y apasionado, al igual que en el período de Azaña. Desde abril a diciembre de 1934 el ministro de Instrucción Pú-

blica había sido Filiberto Villalobos, miembro del partido de Melquíades Álvarez. Villalobos, aunque disponía de presupuestos reducidos, en comparación con los de los años 1931-33, continuó edificando escuelas primarias en los pueblos y atacó el problema del alojamiento de los maestros, ofreciendo un subsidio de 3000 pesetas a cada pueblo que construyera una vivienda para el maestro. La CEDA le acusó de promover la educación laica, y fue sustituido a finales de aquel año. Durante 1935, con el pretexto de hacer economías, la construcción de escuelas quedó virtualmente suspendida. El Gobierno redujo drásticamente los presupuestos para becas en el extranjero, el centro de estudios arábigos, la escuela de verano de la Universidad de Madrid en Santander, las misiones pedagógicas y la facultad de Medicina de Madrid[146]. En algunos de estos casos podría hallarse una excusa plausible para hacer economías; pero el motivo real era entorpecer el trabajo de aquellas instituciones en donde era más fuerte la influencia de la Institución Libre de Enseñanza. En noviembre vino un decreto acabando con la independencia de los inspectores de enseñanza primaria. Desde 1913 habían disfrutado durante largo tiempo de su empleo, pero ahora podrían ser trasladados o destituidos a petición de las autoridades locales[147].

Junto con la reducción del presupuesto para enseñanza pública, vino la devolución de las propiedades confiscadas a los jesuitas. El Gobierno les devolvió unos 25 edificios que habían sido dedicados a escuelas por los municipios de Barcelona y Valencia, y se preparó a pagar una indemnización adicional a la Compañía de Jesús. Lerroux no hizo ningún secreto de que su Gobierno intentaba aplacar a la Iglesia, y la CEDA insistió en que todas las escuelas, públicas y privadas, deberían ser católicas[148].

Gil Robles hizo caer al Gobierno en marzo por su negativa a aceptar la conmutación de las sentencias de muerte contra los dirigentes asturianos. La prensa monárquica lo alabó por su intransigencia. A principios de mayo la CEDA volvió a formar parte

del Gobierno, esta vez con el propio Gil Robles como ministro de la Guerra, mientras los monárquicos le acusaban de traición por haber «aceptado» la República. Como ministro de la Guerra, Gil Robles conservó la mayoría de las reformas estructurales hechas por Azaña. Consideró que la reducción de efectivos, y mucho de la reorganización, habían sido necesarias, pero que los nombramientos personales de Azaña habían ofendido a la mayoría de los miembros del cuerpo de oficiales; que Azaña había escogido a sus amigos antes que a los oficiales profesionales más prestigiosos, para llevar adelante sus reformas. Sin embargo, en 1935, nombrar a los oficiales de mayor prestigio en cada cuerpo significaba nombrar a los oficiales que o bien odiaban a la República, como los generales Fanjul y Goded, o que eran indiferentes a las formas políticas, como el general Francisco Franco, el capaz y ambicioso oficial de carrera que había entrenado la Legión Extranjera haciéndola alcanzar su más alto grado de eficiencia y disciplina.

Aun antes de la revolución de Asturias, los liberales españoles habían temido a la Legión. Después de Octubre, vieron que era un instrumento perfecto para un golpe de estado: disciplinada, bien armada, tan cruel como hiciera falta en cualquier situación dada, y sin lazos inhibitorios que la ligaran a la población española. El 14 de abril de 1935, en la ceremonia conmemorativa del cuarto aniversario de la República, el presidente Alcalá-Zamora condecoró a los generales Batet y López Ochoa, destacando así a los militares que habían demostrado humanidad durante la sublevación de Octubre. La prensa derechista prefirió elogiar a Franco y a la obra de la Legión en Asturias, y a principios de mayo Gil Robles lo nombró jefe del Estado Mayor. Durante el verano tomó otra decisión que parecía presagiar un golpe de estado. Intentó que la guardia civil fuera transferida del Ministerio de la Gobernación al Ministerio de la Guerra, para eliminar de ella toda influencia «izquierdista». Como el ministro de la Go-

bernación era el muy respetable conservador Manuel Portela Valladares, los propios colegas de Gil Robles en el Gabinete empezaron a temerle.

En varias ocasiones durante 1935 Gil Robles repitió públicamente que se oponía a los golpes militares. La desconfianza popular hacia él fue hábilmente satirizada por una comedia que resultó premiada, escrita por Juan Ignacio Luca de Tena, hijo del fundador del *ABC*. El protagonista de ¿Quién soy yo?, Mario Colomer, es un joven ministro cuya brillante carrera ha provocado los celos del primer ministro y del presidente, pero cuya eficacia y apoyo de partido son tales que todo el mundo espera que pronto se apodere totalmente del poder. Un cierto general se puso enteramente a disposición del ministro. Sin embargo, Mario Colomer decía que jamás consentiría un golpe de Estado. Lo cierto es que tiene un doble, al que se le ha oído hablar de tal movimiento. En el último acto, el general, comprensiblemente confundido, toma el poder en sus manos y se lo entrega a Mario Colomer. Como el general de la obra teatral, el público español se sentía confuso acerca de las verdaderas intenciones de Gil Robles[149].

Alejandro Lerroux todavía deseaba incluir hombres moderados y capaces en su Gabinete. Su mejor nombramiento, en este sentido, fue sin duda el de Joaquín Chapaprieta, un rico abogado de gran reputación que pasó a ser ministro de Hacienda. Antes de la dictadura de Primo de Rivera había actuado como subsecretario de Hacienda con Santiago Alba, presidente de las Cortes en 1933-36. Era un técnico experto, sin ambiciones políticas, y entre los colaboradores de Lerroux se le tenía por ajeno a las tentaciones. Chapaprieta deseaba equilibrar el presupuesto por medio de la honestidad, la economía y nuevos impuestos. Planeaba reducir la burocracia de los departamentos gubernamentales y pidió una reducción del 10 al 15 por ciento en los sueldos de los servicios civiles. Al mismo tiempo pensó elevar los tributos so-

bre la herencia y aumentar varias cargas en la transferencia de grandes propiedades. La CEDA informó a Chapaprieta que no apoyaría su presupuesto si incluía las nuevas leyes de impuestos sobre la herencia y transferencia. Como en el caso de las reformas agrarias de Giménez Fernández, Gil Robles colocaba los intereses de sus ricos sostenedores por encima de los de la justicia social, tanto concebida en términos católicos como laicos.

Exceptuando ciertos matices, el Gobierno en 1935 era descaradamente reaccionario. Se negó a la reforma agraria y dotaba miserablemente la educación pública. Devolvió sus propiedades a los jesuitas, favoreció al sector antirrepublicano del ejército, y se negó a aprobar impuestos que de alguna manera perjudicaran a los ricos. Su impopularidad y su carencia de programa le forzó a depender constantemente de poderes de excepción. En el verano de 1933 había sido derogada la ley de Defensa de la República, y en su lugar las Cortes aprobaron otra de Orden público más detallada y graduada. La nueva ley definía los estados de prevención, alarma y guerra. En el primer caso, la policía sería alertada y se harían detenciones preventivas. En el segundo, el Gobierno podría aplicar amplias medidas de censura y cerrar los locales de las organizaciones que amenazaran el orden público. En el tercer caso el Gobierno podría declarar la ley marcial. El 5 de octubre de 1934, el jefe del Gobierno, Lerroux, había declarado el estado de guerra. Dos meses después el Gobierno se sintió lo suficientemente confiado como para volver al estado civil normal de cosas, sustituyendo el estado de guerra por el estado de alarma; pero no se hicieron más progresos. Durante todo 1935 el estado de alarma se prolongó mes tras mes, y los ayuntamientos, los jurados mixtos, la Generalitat, todos quedaron suspendidos. Los treinta o cuarenta mil prisioneros políticos hechos en Octubre seguían presos.

Sin embargo, la prensa, a pesar de la frecuente censura, no se recataba valientemente de criticar con amargura al Gobierno.

Como la existencia de este dependía de su mayoría en las Cortes, sería una gran exageración etiquetar al Gobierno de Lerroux con el apelativo de «fascista». Por el contrario, las derechas sentían que les habían birlado la victoria dos veces: una tras ganar las elecciones de noviembre de 1933 y la otra tras el fracaso de las sublevaciones catalana y asturiana. Tras la victoria electoral, Gil Robles habló en las Cortes de cooperación entre su partido y el Gobierno republicano. *ABC* gritó inmediatamente traición, puesto que desde su punto de vista la mayoría de los votos de la CEDA eran votos monárquicos. *El Debate* replicó citando textos de León XIII sobre la compatibilidad de todas las formas de gobierno con la Iglesia. Tras rebuscar un poco, *ABC* fue rápido en indicar que las declaraciones del papa se habían referido específicamente a la Francia de la década de 1890, donde la Tercera República llevaba ya establecida veinte años y no había candidatos monárquicos que se presentaran a las elecciones. Así, mientras que las izquierdas consideraban a Gil Robles jefe de un movimiento fascista-clerical según el modelo del de Dollfuss en Austria, los monárquicos le acusaban de venderse a la República.

Después de que el general Sanjurjo fuera amnistiado en abril de 1934, se permitió a la organización reaccionaria monárquica Acción Española que reanudara sus actividades. Sus propósitos confesados eran revitalizar los valores tradicionales de España que habían sido minados por los republicanos y los krausistas. Entre sus cursos de conferencias había uno de Antiparlamentarismo, por Ramón Serrano Súñer, cuñado del general Franco y jefe de la juventud de la CEDA[150]. Los exilados monárquicos comenzaron a regresar a España. José Calvo Sotelo, que se había convertido en un ardiente admirador de Charles Maurras mientras vivió en Francia, fundó el Bloque Nacional, con un programa en el que se pedía un Estado corporativo y totalitario. En sus discursos en público, preguntaba repetidamente, refiriéndose con ironía a la CEDA: ¿Para qué consolidar una República sin

republicanos? A finales de año los monárquicos estaban disgustados por lo que ellos consideraban relativamente suave represión en Asturias. En una polémica periodística entre ambos dirigentes, Calvo Sotelo se quejó de que los resultados conseguidos por la CEDA eran totalmente desproporcionados con el gran triunfo electoral de 1933 y declaró que los monárquicos no podían comprender qué «misteriosa fórmula» permitía a la católica CEDA mantener una alianza con el «positivismo incrédulo» representado por los radicales de Lerroux. En su réplica, Gil Robles evitó las discusiones; pero expresó su sentimiento porque la prensa monárquica comenzara a atacarle en el momento en que las elecciones se ganaron, y recordó a su respetado colega que éste se sentaba en las Cortes y publicaba un periódico gracias a la amnistía de Sanjurjo obtenida por la CEDA[151].

Durante todo 1935 Gil Robles laboró para mantener unida su dispar coalición. Pidió la pena de muerte para González Peña en febrero y en marzo para aplacar a los monárquicos. En mayo entró a formar parte de un nuevo Gobierno de centro-derecha, y en junio selló esa alianza en un banquete celebrado en Salamanca en honor de Alejandro Lerroux. Habló del honrado trabajador y del pequeño agricultor; pero su partido castró la reforma agraria y extendió la suspensión de los ayuntamientos en los cuales las izquierdas obtuvieron la mayoría en 1933.

La prensa de Acción Católica a menudo publicaba violentos ataques contra los masones y los judíos. Gil Robles desautorizó estas frases; pero el 9 de noviembre de 1935, hablando ante un público católico juvenil en Salamanca, atacó el «espíritu revolucionario» que había sido «el fruto de muchas generaciones de maestros» y «la obra de una Universidad descristianizada» y del programa de becas en el extranjero. Sus oyentes se mostraron encantados; pero el periódico moderado republicano *El Sol* le atacó en un editorial por tal demagogia. Gil Robles sabía muy bien —escribió *El Sol*— que la mayoría de los catedráticos de Salamanca

eran católicos y que muchos de los más prestigiosos profesores del Centro Católico de Estudios Universitarios habían recibido becas para ir al extranjero.

Las querellas internas de las derechas gastaron el prestigio de Gil Robles y fueron en gran parte responsables de la esterilidad legislativa de los años 1934-35. Pero la alianza en funciones entre radicales y la CEDA pudo muy bien haber sobrevivido a las críticas de los monárquicos y los *filofascistas* en las Cortes. Fue destruida por dos grandes escándalos políticos que se produjeron en el otoño de 1935. El primero estaba relacionado con una variante de la ruleta conocida como *straperlo*. Se suponía que el nuevo juego introduciría un elemento de habilidad en la operación de la ruleta. Para instalar el estraperlo en los casinos de España era necesaria una licencia gubernativa, y su promotor holandés buscó la influencia de los personajes del Gobierno para obtener tal licencia. A las pocas horas de iniciarse la primera jugada en San Sebastián, la policía retiró el permiso[152]. El inventor exigió entonces ser compensado económicamente por la pérdida de su inversión, y no consiguiendo lo que él creía se merecía, inició pura y simplemente un chantaje. Entre sus «amigos» estaban el sobrino de Lerroux, el exministro de la Gobernación Salazar Alonso y el gobernador que Lerroux había nombrado para Cataluña, Pich y Pon. En una carta dirigida al presidente de la República, declaró confidencialmente que estos hombres le habían aceptado dinero cuando solicitó la licencia. El presidente, que siempre había sospechado de la moralidad de Lerroux, le obligó a dimitir y entregó las pruebas acusatorias al nuevo jefe del Gobierno, Chapaprieta. La Constitución exigía que los cargos criminales contra un jefe de Gobierno fueran oídos en las Cortes; pero el debate que siguió fue más político que judicial, y no se pudo probar nada. Pero dado que Lerroux personalmente, y los radicales como partido, gozaban de una turbia reputación, el voto formal exonerándolo no pudo restablecer su prestigio.

Además, el debate de las Cortes concernía sólo a los ministros radicales y se hizo un discreto silencio sobre la cuestión de si el sobrino de Lerroux y un cierto número de personalidades menores habían aceptado sobornos. La opinión pública estaba segura de que sí[153].

El escándalo del estraperlo ocurrió en octubre y añadió al vocabulario español un nuevo término con frecuencia utilizado en el mercado negro. Luego, en diciembre, vino el asunto Nombela, en el cual aparecía que varios amigos de Lerroux habían tomado un interés impropio por los contratos de suministros al ejército de Marruecos[154]. Para entonces el prestigio de aquel «republicano histórico» y de su partido estaba tirado por el suelo. Bajo Azaña los radicales habían combinado el anticlericalismo y el temor a las reformas sociales. Bajo Lerroux habían aplacado a la Iglesia y gobernado a favor de las derechas. Los admiradores y clientes del capitalista Juan March se habían puesto ahora en ridículo por pequeños escándalos de soborno.

La vida política efectiva en España tomó ahora nuevas y ominosas formas fuera de las Cortes. Cada uno de los partidos de masas, la CEDA y los socialistas, tenía una organización juvenil, y el chocante denominador común de estas organizaciones era su desdén hacia los dirigentes moderados de la anterior generación. La Juventud de Acción Popular (JAP) utilizaba el vocabulario antisemítico de los nazis y soñaba con una noche de San Bartolomé de masones y marxistas. La Juventud Socialista adoptó el análisis comunista de los socialdemócratas, llamándolos «social fascistas», y aplicaba esa frase a los Prietos y Besteiros. En las principales universidades la Federación Universitaria Escolar (FUE), fundada en 1920 para combatir la dictadura, estaba dominada en 1935 por funcionarios marxistas militantes, y los estudiantes católicos hallaban igualmente organizaciones militantes en su campo. Además de todo esto, existían la pequeña pero combativa Falange Española, cuyo jefe principal era José Anto-

nio Primo de Rivera, y las Juntas de Ofensiva Nacional-Sindicalista (JONS) de Ramiro Ledesma Ramos.

José Antonio, hijo del fallecido dictador, era típico de los ideales y confusionismo de toda una generación juvenil. Como estudiante de derecho se hizo de muchos amigos entre los liberales y se había considerado discípulo de Ortega y Gasset. La caballerosidad y lealtad que siempre fueron características de él le habían llevado a defender la memoria de su padre; pero cuando en octubre de 1933 tomó parte en la fundación de la Falange no defendió ni a la monarquía ni a la dictadura. España necesitaba una revolución, una revolución mucho más profunda que la que había sido intentada por la República. Se refería al socialismo como justo en sus orígenes y aspiraciones, y era partidario de la separación de la Iglesia y el Estado. Lo malo del socialismo, decía, era su dependencia de modelos extranjeros y su ateísmo. En sus discursos y escritos José Antonio no proponía un programa específico, pero hacía llamamientos al espíritu de sacrificio y a la unidad nacional. Rendía homenaje a la energía de Mussolini y a sus dotes de orador, sin sentirse particularmente impresionado por el estado corporativo. Admiraba a la Inglaterra imperial, y le gustaba citar el «*If*» de Kipling, aunque estaba convencido de la decadencia de Occidente. Tenía muchos amigos íntimos y relaciones entre los monárquicos; pero no los creía capaces de dirigir la España regenerada con la que soñaba. A él y a sus colaboradores les gustaba trabajar con las mangas de la camisa arremangadas, una postura que simbolizaba su energía, su exhibición de músculo, su impaciencia ante las rutinas remilgadas y las inhibiciones burguesas. José Antonio no podía sentir ninguna admiración por Gil Robles, con su cara fofa, regordeta y poco heroica y sus sutilezas verbales. En principio se oponía a la violencia; pero de hecho reunía armas para la Falange y más de una vez defendió a los pistoleros falangistas ante los tribunales. Admiraba el principio de jefatura, y como la mayoría de los dirigentes con afición

al estilo autoritario, no podía cooperar con iguales. Riñó con Ruiz de Alda, su compañero fundador. En febrero de 1934 fusionó la Falange con las JONS de Ramiro Ledesma; pero en enero de 1935 Ledesma fue expulsado y José Antonio quedó como jefe indiscutido. La literatura falangista, al explicar estas querellas, dio énfasis a las diferencias teóricas y políticas; pero fundamentalmente fueron el resultado de las ambiciones personales de ambas partes que compitieron.

La personalidad de José Antonio tenía varias facetas, todas ellas dramáticas, personalmente atractivas e ingenuamente egoístas. Había el José Antonio de los ropajes legales que defendió antes las Cortes a uno de los ministros de su padre, en el proceso por las responsabilidades de la dictadura. Había el José Antonio travieso que remedaba a los viejos políticos y gritó «¡*viva el estraperlo*!», durante un debate sobre la corrupción política. Había el José Antonio que rendía culto al héroe y que reverenciaba la memoria de su padre y el intelecto de Ortega. Había un José Antonio que admiraba a Prieto, y que pensaba de un modo parecido a éste en la necesidad de la industrialización y los riegos en España. Y había un José Antonio que despreciaba el materialismo del Occidente moderno y de los marxistas, y que compartía los mitos fascistas de *élite*, jerarquía y tradición[155].

Con todas estas cualidades era típico de su generación en España. Los sentimientos de clase y las lealtades religiosas determinaban a cuál de las organizaciones se adheriría un estudiante o un obrero joven. Si su catolicismo era fundamental y no tenía fuertes inclinaciones monárquicas, se unía a la JAP. Si los ideales de jerarquía y legitimidad eran tan fuertes como el catolicismo, se uniría a los carlistas o a Renovación. Si admiraba a Mussolini y a Hitler, odiaba a los marxistas y también a las antiguas clases privilegiadas, se afiliaba a las JONS o a la Falange. Si se sentía atraído por la dialéctica del marxismo, y había rechazado al cristianismo, se incorporaba a la Juventud Socialista o al Partido Co-

munista. Pero en todos los casos rechazaba la República burguesa y se burlaba o inconscientemente subestimaba las virtudes de la democracia parlamentaria. De estas organizaciones, sólo la JAP y la Juventud Socialista representaban un número sustancial; pero todas ellas se preparaban para la violencia heroica, concebida no como una brutal prueba de fuerza, sino como un ingrediente necesario de la actividad política. En la Casa de Campo, al oeste de Madrid, la JAP, la Falange, y la Juventud Socialista se ocupaban los domingos de su entrenamiento paramilitar. En Valladolid, las patrullas de las JONS imitaban a los fascistas italianos con incursiones terroristas relámpago sobre las barriadas obreras y ruidosas reyertas callejeras con los estudiantes izquierdistas. En Valencia los jóvenes carlistas o de la JAP guardaban los conventos en los momentos de tensión política, por si acaso.

La mentalidad de los grupos juveniles tanto de las derechas como de las izquierdas estaba dominada por el recuerdo de la revolución de Asturias y sus secuelas. Con la implacable censura pesando sobre la prensa, no les quedaba más remedio que creer en sus propios mitos. Las juventudes de la JAP y de Falange, creyendo que los mineros habían violado monjas y hecho una matanza entre la clase media de Oviedo, se sentían ultrajadas por la conmutación de las sentencias de muerte. También les parecía muy significativo a ellos, para vergüenza y ludibrio del Gobierno democrático, que los dirigentes escaparan a la pena de muerte, mientras que el glorioso ejército soportara el oprobio de la necesaria limpieza de los revolucionarios. La juventud socialista, por su parte, miraba a Asturias como una gloriosa derrota. Creyendo que las atrocidades habían sido cometidas tan sólo por las fuerzas de la represión, y convencidas de que la clase obrera industrial estaba destinada a conducir a la humanidad hacia un futuro mejor, dejaban de lado la responsabilidad de las izquierdas en el origen de la tragedia. La sublevación había sido un error

táctico, no un crimen político, y había fracasado por la mala organización y el armamento insuficiente. Para ambos bandos la revolución de Octubre indicaba, no la necesidad de un Gobierno moderado y democrático, sino la inevitabilidad de una prueba de fuerza mejor preparada entre las derechas y las izquierdas.

En julio de 1935 los jóvenes intelectuales seguidores de Largo Caballero se rebelaron contra el «reformismo» del órgano del partido, *El Socialista*, y fundaron un nuevo semanario (luego diario), llamado *Claridad*. Su propósito era convencer a las masas socialistas de que Besteiro y Prieto habían deformado la tradición revolucionaria del Partido Socialista español. Cada semana publicaban citas de Pablo Iglesias, indicando la eventual necesidad de una toma revolucionaria del poder. Iglesias había sido siempre un hombre de acción moderada y en 1921 luchó contra la tendencia mayoritaria a ingresar el partido en la Tercera Internacional. Pero Iglesias, como Marx, podía ser citado diciendo cosas muy diferentes. *Claridad* citaba también varios textos de Lenin sobre táctica, todos ellos indicando la ingenuidad, si no la traición, de aquellos camaradas que esperaban alcanzar el socialismo por medios puramente parlamentarios. Margarita Nelken, diputada socialista por Badajoz y campeona de la Federación de Trabajadores de la Tierra, visitó la Unión Soviética y regresó para escribir una serie de artículos laudatorios acerca del segundo plan quinquenal, poniendo énfasis particularmente en el supuesto éxito de las granjas colectivas.

Durante esos mismos meses, treinta mil presos izquierdistas seguían estando encarcelados, con mucho tiempo para leer y muchos amigos que les llevaran libros. Los últimos años de la dictadura y los primeros años de la República habían sido testigos de una aparición en masa de nuevas editoriales. Hubo una serie de primeras ediciones populares y baratas, de tipo político, cuyos títulos empezaban todos con el Al servicio de… y que subrayaban los programas de los diferentes partidos políticos desde

la derecha moderada a la extrema izquierda. Estaba, por ejemplo, la editorial Maucci de Barcelona, que vendía ediciones baratas de Kropotkin, Bakunin, Tolstoi, Nietzsche, y ofrecía manuales y guías de la salud y la felicidad, que combinaban útiles conocimientos médicos, recetas de cocina vegetariana o de régimen y pornografía. En Madrid, Ignacio Bauer, profesor de enseñanza secundaria que era amigo de Azaña, y pariente lejano de Rothschild, compró una serie de pequeñas editoriales y pagó sueldos fabulosos por la preparación de una serie de obras maestras españolas poco conocidas, y que fueron excelentemente editadas: «Los Clásicos Olvidados». A través de las editoriales Zeus y Cenit publicó magníficas traducciones de las mejores obras de las literaturas rusa y alemana, así como de Marx, Engels, Lenin y sus principales comentaristas. Debido a la depresión, la mayoría de estas editoriales fueron a la bancarrota. Una generación de obreros y estudiantes compró libros a montones, de carros de mano alineados en torno a la Puerta del Sol y a lo largo de la Carrera de San Jerónimo. Muchos de estos libros constituyeron a su vez el alimento literario de los presos políticos.

A tales lectores les parecía que los libros escritos por los republicanos moderados antes de la depresión y de la sublevación de Asturias tenían poco que ver con la realidad. Las novelas de Zola, Dreiser y Upton Sinclair les hacían más efecto; pero las obras más leídas de todas eran las de Marx y Lenin, quienes habían analizado científicamente y predicho las crisis económicas y las brutales luchas de clases en que los lectores se hallaban envueltos. Entre los presos de Madrid, Francisco Largo Caballero ocupaba un puesto de honor. Habiendo sido en su origen estuquista, con un largo historial sindical, era un hombre de verdadera procedencia proletaria, que había dedicado toda su vida a la mejora de su clase. En octubre el profesor Besteiro se había opuesto al levantamiento, el burgués Prieto había huido a Francia y el bur-

gués Azaña había tenido buen cuidado de poner en claro que no había tenido nada que ver con los revolucionarios.

Pero Largo Caballero había ido a la cárcel y se negó a declarar nada que pudiera ayudar a la policía en la persecución de sus camaradas. Caballero se había inclinado cada vez más hacia la izquierda desde 1933, y ahora leyó a fondo a Marx por primera vez, en compañía de ardientes y jóvenes intelectuales que lamentaban su propio origen burgués, y que lo idolatraban doblemente, como un auténtico proletario, y como sucesor espiritual del «Abuelo», el igualmente proletario, austero y honrado Pablo Iglesias.

El año 1935 no estuvo dominado, ni mucho menos, por los fracasos políticos de las Cortes o las emociones políticas de la juventud. Fue un año culminante en el renacimiento cultural de España. De hecho, apenas si hubo en el medio siglo anterior un contraste tan grande entre el estancamiento de la política española y la vitalidad de la cultura española. Nada menos que tres nuevas obras teatrales de Federico García Lorca fueron estrenadas en los primeros meses del año. Vicente Aleixandre publicó *La destrucción o el amor* y Rafael Alberti su *Verte y no verte*. Jorge Guillen, el poeta de los poetas, fue por primera vez ampliamente conocido con su segunda edición de Cántico. El pastor murciano autodidacta y poeta Miguel Hernández se estableció en Madrid y colaboró con sus poemas en la revista de Alberti, Octubre. Luis Buñuel produjo su obra maestra documental Tierra sin pan, referente a Las Hurdes, la comarca de la provincia de Cáceres afligida por la miseria, y que fue puesta por primera vez a la atención del público español por el entonces obispo de Coria y luego cardenal-arzobispo Segura.

Ramón Menéndez Pidal se lanzó a la publicación de una erudita historia de España en varios volúmenes, y en septiembre el entomólogo de fama mundial Ignacio Bolívar presidió el Congreso Internacional de Entomología en Madrid. Las Misiones

Pedagógicas prosiguieron sus actividades, y el entusiasmo de los particulares llenó el hueco de las drásticas reducciones del Gobierno en su presupuesto. Miguel de Unamuno, oponente liberal de la dictadura de Primo de Rivera, y ahora portavoz de la crítica de mucho de lo que la República había hecho, fue nombrado ciudadano honorario en 1935. En Barcelona, Pablo Casals, violonchelista de fama internacional y decidido patriota catalán, pagó con los ingresos que le proporcionaban sus conciertos a los miembros de una orquesta sinfónica y una sociedad coral, y el doctor Juan Negrín, hijo de un rico comerciante de las Islas Canarias, continuó gastando sus ingresos particulares en la construcción de la magnífica biblioteca médica que puso a disposición de los estudiantes de medicina de Madrid. Las pasiones políticas, el genio literario, la vitalidad cultural, el idealismo individual y la generosidad de todas las clases españolas estaban en pleno apogeo en el año 1935.

Capítulo 10

LAS ELECCIONES DEL FRENTE POPULAR

DURANTE todo 1935 el presidente de la República estuvo pensando en la oportunidad de celebrar nuevas elecciones. Si las Cortes Constituyentes habían tratado de llevar al país demasiado hacia la izquierda, las presentes Cortes eran sencillamente estériles. Como a la mayoría de los españoles, le parecía que la revolución de Octubre había sido «mal liquidada»; pero mientras las derechas daban a entender con esta frase que el Gobierno había sido indulgente hasta un punto criminal, el presidente pensaba que la represión había sido innecesariamente dura. Temía debilitar a la República y hacer que cayeran sobre su cabeza las más duras críticas, disolviendo las Cortes en menos de dos años; pero temía igualmente que la República democrática tuviera que mantenerse por la constante prolongación del estado de alarma.

Tras los escándalos del estraperlo y de Nombela, decidió que se imponía la celebración de nuevas elecciones, y esperó que tuvieran lugar en condiciones que dieran como resultado una mayoría moderada o intermedia antes que una mayoría de izquierdas o de derechas. En el año pasado las disputas entre los monárquicos y la CEDA habían minado la unidad de las derechas, y la creciente fuerza de la facción de Largo Caballero dentro del Partido Socialista hacía muy improbable una renovación de la coali-

ción republicano-socialista como la que había existido en las Cortes Constituyentes. Contra una derecha y una izquierda desunidas, podría surgir un centro fuerte. Por lo menos así razonaba el presidente. Todo dependía de hallar el jefe de Gobierno más apropiado para el período electoral. Pensando en esto, ofreció primero los poderes de disolución a Chapaprieta, quien los rechazó, y luego a Manuel Portela Valladares, que fue el primer gobernador de Barcelona después del 6 de octubre, y que en mayo de 1935 entró a formar parte del Gabinete Lerroux como ministro de la Gobernación. En su desempeño de ambos cargos fue muy elogiado por su firmeza y moderación. Dentro del Gabinete se había opuesto con éxito a los esfuerzos de Gil Robles para que la guardia civil fuera transferida al Ministerio de la Guerra. Nombrado el 14 de diciembre, Portela levantó lo que quedaba de censura de prensa durante las siguientes tres semanas. El 7 de enero, el presidente disolvió las Cortes y Portela anunció elecciones para el 16 de febrero.

Pero de aquella campaña electoral no había de surgir ningún centro fuerte, en gran parte debido a los dos mayores desarrollos políticos de 1935, que dieron por resultado la formación del Frente Popular. En las Cortes, el proceso de Azaña había hecho más cálidas las relaciones entre los dirigentes liberales e izquierdistas y les puso sobre aviso de que la derecha monárquica no se detendría ante nada a fin de destruirles. Los partidos de Azaña y Marcelino Domingo ya se habían fusionado para formar Izquierda Republicana y los liberales gallegos de Casares Quiroga se unieron luego a ellos. Martínez Barrio formó un partido propio, Unión Republicana, y muchos radicales que estaban en desacuerdo con Lerroux por su política proclerical y se sentían horrorizados por la represión en Asturias, siguieron a Martínez Barrio. El profesor Felipe Sánchez Román también fundó su Partido Nacional Republicano, pequeño en número, pero con gran influencia en los círculos académicos. En abril de 1935, Azaña,

Martínez Barrio y Felipe Sánchez Román convinieron en un programa general de cooperación de sus tres partidos. Azaña pronunció en público una serie de grandes discursos, ante auditorios cada vez más numerosos, proponiendo un retorno al programa del primer bienio, junto con una reforma agraria más rápida; una unión de las fuerzas políticas liberales e izquierdistas, y el final de la corrupción y represión que habían sido las principales características de la época de Lerroux.

El segundo nuevo desarrollo afectó a toda la Europa occidental. En el verano de 1935, la Internacional Comunista revisó su política de lucha constante contra los socialdemócratas, y con gran energía y alarde de publicidad lanzó el *slogan* del Frente Popular de todas las fuerzas liberales e izquierdistas contra la amenaza del fascismo. En los años precedentes a 1933, el Partido Comunista alemán había estigmatizado a los socialdemócratas como «social fascistas», y había sostenido luchas callejeras con ellos, e incluso en ocasiones se unió a los nazis y otros partidos reaccionarios para votar contra ellos en el Reichstag. Hitler había sido siempre fanáticamente anticomunista; pero los comunistas subestimaron su fuerza hasta que casi consiguió destruirlos. Con sus principales dirigentes muertos o en campos de concentración, y sus miembros diezmados, el Kremlin decidió que el fascismo era un enemigo más inmediato y virulento que el capitalismo, y que serviría tanto a los intereses de la política exterior de Rusia como al bienestar del proletariado internacional, el buscar la alianza de todas las fuerzas democráticas, socialistas y comunistas contra el fascismo. La campaña para un Frente Popular de todos los elementos antifascistas fue oficialmente iniciada por la Internacional Comunista en el verano de 1935.

Así sucedió que tanto los republicanos de Azaña como el Partido Comunista andaban a la búsqueda de un acuerdo político entre todas las fuerzas liberal-izquierdistas. El Partido Comunista había recibido menos del 5 por ciento de los votos y sólo pudo

lograr que le saliera un diputado elegido en 1933; pero era una fuerza muy importante en Francia, donde el Frente Popular se formó rápidamente, y el ejemplo de Francia siempre tenía un gran peso en las izquierdas españolas. En octubre, Prieto, que había estado viviendo en Francia desde el fracaso de la sublevación de Asturias, regresó a Madrid clandestinamente. Haciendo uso de su gran influencia dentro del Partido Socialista, convenció al comité ejecutivo el 20 de diciembre para que votara una renovada coalición con los republicanos de izquierda. Mientras tanto, el ala revolucionaria del partido, cada vez más impresionada por las realizaciones del plan quinquenal soviético y de la colectivización de la agricultura, se acercó cada vez más espiritualmente a sus anteriores enemigos, y muchos de los dirigentes juveniles de los partidos Socialista y Comunista comenzaron a hablar de fusión. Aquel año, en sus finales, presenció un acercamiento general entre las fuerzas de Azaña y Prieto por un lado, y de los socialistas revolucionarios y de los comunistas por el otro. Cuando, disueltas las Cortes, el 7 de enero anunció Portela las nuevas elecciones, sólo se necesitaba una semana más de negociaciones para dar lugar al pacto de Frente Popular del 15 de enero. Izquierda Republicana (Azaña), Unión Republicana (Martínez Barrio), la Esquerra catalana y los partidos Socialista y Comunista formaron una alianza electoral con un programa mínimo pidiendo el retorno a la política religiosa, educativa y regional del primer bienio, una más rápida reforma agraria y una amnistía para los 30.000 presos políticos. Establecieron una lista de coalición para las elecciones a las Cortes, distribuyendo por adelantado la proporción de escaños que ocuparía cada partido. También convinieron en que el Gobierno estuviera compuesto sólo de republicanos, mientras que los socialistas y comunistas se comprometían a apoyar tal Gobierno con el propósito de alcanzar el anunciado programa «democrático burgués».

La decisión de los socialistas de no entrar a formar parte del Gabinete fue una concesión al ala revolucionaria. Largo Caballero había dimitido de su puesto en el Comité ejecutivo cuando éste votó por una renovada coalición con Azaña[156]. Largo Caballero se negó a comprometerse de nuevo a participar en un Gobierno burgués. El ala del partido que él dirigía (como los comunistas en los frentes populares francés y español) propuso apoyar al Gobierno en el cumplimiento de un programa mínimo, pero se negó a compartir las responsabilidades ejecutivas con partidos burgueses. Verdaderamente, en aquella época los socialistas jóvenes se consideraban más «*avanzados*» que los comunistas. Con estos últimos haciendo todo lo posible para tranquilizar a sus aliados de la clase media, los «*caballeristas*» idearon el extraño slogan: «Para salvar a España del marxismo, vote comunista». En cuanto al propio Largo Caballero, el orgulloso y antiguo luchador no había olvidado una década de política comunista contra él y los partidos socialistas hermanos; pero contaba con el número de los socialistas, y con la lealtad de los jóvenes revolucionarios hacia su persona, lo que mantendría a sus nuevos aliados bajo control.

Las principales personalidades en la campaña de las izquierdas fueron Azaña y Largo Caballero. El primero hablaba de democracia representativa y de reformas no revolucionarias. El segundo hacía profecías vagas, pero intoxicantes, de una revolución socialista que estaba más allá del futuro inmediato. Los dos hombres apenas si se hablaban y a nadie se le escapaba lo diferentes que eran sus propósitos. Pero el Frente Popular, durante el mes de intensa campaña electoral, permaneció unido por el temor al fascismo y por la perspectiva de la amnistía.

Las derechas también entraron en la campaña con gran confianza y energía. Recogieron enormes fondos de entre los hombres de negocios y en campañas de puerta a puerta por los grupos locales de Acción Popular. Por las calles principales circula-

ban automóviles con altavoces. Retratos de Gil Robles mayores del tamaño natural miraban fijamente a los transeúntes en la Puerta del Sol, y por todas partes, en sus reuniones de masas, se gritaba: «Todo el poder para el jefe». Sin embargo, él no pudo salvar el abismo que había entre los socialcatólicos como Giménez Fernández y Luis Lucía por una parte, y los carlistas y los monárquicos de Goicoechea por otra. En la mayoría de los casos los dirigentes de la CEDA y los monárquicos a nivel local estaban de acuerdo en apoyar a un único candidato para no cometer un suicidio político. Había por tanto una considerable medida de unidad electoral entre la mayoría de los partidarios de la CEDA y los dirigentes monárquicos nacionales; pero no había unidad en las esferas superiores. Aprisionado entre la mayoría de los partidarios de la CEDA y los dirigentes nacionales monárquicos, Gil Robles decidió basar su campaña en el programa social católico de la CEDA, que estaba preparado a aceptar, y se mostraba muy confiado en que pronto gobernaría a la República.

Las derechas sufrieron además el handicap de las muchas divisiones dentro del campo católico. Hablando en términos generales, desde abril de 1931 los católicos se habían visto divididos entre monárquicos y «accidentalistas». Bajo la coalición del centro-derecha, la Iglesia conservó sus escuelas, y los jesuitas recuperaron la mayor parte de sus propiedades. Un representante del Gobierno, el señor Pita Romero, republicano gallego, había comenzado a negociar en Roma un nuevo Concordato. En diciembre de 1935 el nuncio, monseñor Tedeschini, fue nombrado cardenal, y recibió el birrete de manos del presidente de la República. En la ceremonia de investidura, ni el primado, cardenal Gomá, ni ninguno de los principales dirigentes de la CEDA o de un partido monárquico estuvieron presentes. Los huéspedes fueron el cardenal Vidal y Barraquer, de Tarragona; el cardenal Ilundain, de Sevilla, y media docena de obispos, incluyendo a los de Madrid y Barcelona, dos diputados nacionalistas vascos, y varios

católicos liberales amigos del presidente y del nuevo cardenal[157]. A finales de 1935 en la Iglesia se contaban al menos cinco facciones, ninguna de las cuales era muy cordial con las otras: carlistas, monárquicos alfonsinos, accidentalistas, partidarios de Alcalá-Zamora y Miguel Maura y nacionalistas vascos.

El presidente y el jefe del Gobierno trataron sin éxito de formar una coalición centrista; pero hasta los diputados más moderados de la CEDA no podían olvidar el trato que Alcalá-Zamora había dado a Gil Robles, y eran enemigos de Portela como notorio masón. Entre la izquierda moderada, el recuerdo de octubre creó la unidad en torno a Azaña y contra el presidente. Incapaz de formar un centro fuerte, Portela presidió, sin embargo, la campaña electoral con justicia y dignidad.

Levantó toda censura de prensa y prefirió el riesgo de la violencia esporádica a tener que emplear a la policía en gran escala. Advirtió a las izquierdas contra la «acción directa» y criticó amargamente a los conservadores ricos, que por supuesto no se mezclaban personalmente en las peleas callejeras, pero que no vacilaban en subvencionar a los pistoleros fascistas para que irrumpieran violentamente en las reuniones de los partidarios del Frente Popular. La campaña se caracterizó por ser menos violenta que la de 1933, en gran parte porque la unidad de las izquierdas había dado lugar a una tregua entre los socialistas, comunistas y anarquistas rivales por cuestiones locales. Estos últimos casi no participaron en la campaña, pero mientras que en 1933 habían considerado a Azaña el carnicero del proletariado, en 1936 se mostraban todo lo amistosos que sus puntos de vista apolíticos les permitían hacia una coalición que prometía la amnistía para los presos de Asturias.

Todos los temas más importantes de la vida política española fueron vigorosamente debatidos y los sucesos locales tenían particular importancia. En Andalucía y Extremadura, los candidatos del Frente Popular prometieron una rápida reforma agraria sin

complicaciones. En Cataluña, el Gobierno Companys (que seguía en la cárcel) sería reintegrado al poder y se aceleraría la transferencia de funciones a la Generalitat. En el País Vasco, asimismo, la campaña se concentró sobre la cuestión de la autonomía. Aunque presionados por la jerarquía para que se aliaran con la CEDA, los nacionalistas vascos prefirieron actuar independientemente y mantener de modo provisional una actitud amistosa hacia el Frente Popular que les prometía un estatuto de autonomía. En Guipúzcoa, los terratenientes carlistas amenazaron con desahuciar a sus antiguos arrendatarios católicos y conservadores, pero a la vez nacionalistas vascos.

¿QUÉ LES GUSTARÍA A LOS POLÍTICOS QUE LES TRAJERAN LOS REYES?, por Bagaria



LERROUX: En lugar de un regalo, desearía que acabaran con esta República que ha ocasionado mi ruina.
PORTELA: Para mi, té medicinal para distribuir entre los cedistas.
GOICOECHEA: Más poder para mis ojos caídos.
CAMBO: ¡Déjenlos quitarme a la Esquerra de la espalda!
GIL ROBLES: Un traje blindado para prevenir tanto golpe.



SAMPER: Una sonrisa de Portela.
BARCIA: (presunto ministro de Estado en el próximo Gabinete Azaña): Un retrato de lord Brummel con su firma y autógrafo.
MELQUÍADES: (cabeza del minúsculo Partido Reformista y distinguido dirigente de la oposición durante los últimos años de la Monarquía): El acta de diputado por Asturias.
MARTÍNEZ DE VELASCO: (dirigente agrario unido a la República): Déjenlos mandarme lo que quieran, siempre que no me hagan pensar demasiado.
EL PUEBLO: Yo soy más modesto; todo lo que pido es que no me quiten los zapatos.

(*El Sol*, 5 de enero de 1936)

EL SOL ANTICIPA LA ELECCIÓN DEL FRENTE POPULAR

Más, sin ninguna duda, el recuerdo de lo ocurrido en Asturias fue fundamental. *El Socialista* publicó una serie de artículos sobre

los horrores de la represión militar, y *La Nación* (órgano de Calvo Sotelo) publicó otra serie sobre las atrocidades de los rojos, en la que se afirmaba que los revolucionarios habían asesinado a 1355 personas. Esta cifra era superior al número total de muertes por todas las causas dado por el Ministerio de la Gobernación. Pero entonces, en ambos campos, ya nadie creía lo que el Gobierno dijo tratando vanamente de quitar importancia al episodio. Los que creían que el Tercio de extranjeros había salvado a España de una sangrienta insurrección comunista se prepararon para votar a las derechas. Los que creían que un Gobierno fascista-clerical había arrastrado a las izquierdas a la desesperación, para luego reprimirlas sádicamente, se prepararon para votar al Frente Popular.

Las condiciones específicas bajo las cuales tuvo lugar la votación son de gran importancia, tanto más cuanto que las versiones oficiales de la historia de España desde 1939 han pretendido que la victoria del Frente Popular fue fraudulenta. El jefe del Gobierno centrista, Portela Valladares, era asimismo ministro de la Gobernación. Los gobernadores civiles de la mayoría de las provincias habían ocupado el cargo con ocasión de la victoria de las derechas en 1933 o habían sido nombrados para reemplazar a gobernadores izquierdistas tras la sublevación de Asturias. En 52 de los 70 distritos electorales, los votantes pudieron elegir claramente entre dos listas: una del centro-derecha y otra del Frente Popular. Las juntas que contaban los votos en todos estos distritos estaban constituidas por representantes de todos los partidos.

El domingo 16 de febrero, el ambiente general estaba más en calma que lo que la mayoría de la gente había anticipado. La votación fue muy nutrida desde primeras horas de la mañana y las urnas fueron cerradas a las cuatro de la tarde. Los resultados de las ciudades, que fueron rápidamente contados, indicaban la probabilidad de una victoria de las izquierdas. El jefe del Gobierno, quizá desilusionado, quizá deseando retardar un poco la noticia

para prevenir prematuras manifestaciones de victoria, se dirigió por radio al país a las seis de la tarde, para decir que la jornada electoral había sido normal, y que parecía verosímil una victoria del centro-derecha. A las diez de la noche se acercó al micrófono, diciendo que el cuadro general aún no estaba claro, aunque reconocía la victoria izquierdista en Cataluña[158]. El lunes por la tarde y durante el martes, los periódicos de todas las tendencias políticas publicaron resultados que otorgaban al Frente Popular de 220 a 270 diputados, de un total potencial de 473. Al mismo tiempo, los gobernadores civiles comenzaron a felicitar al Gobierno por la ordenada naturaleza de las elecciones[159]. Cuando las juntas electorales dieron a conocer las cifras oficiales el 20 de febrero, el Frente Popular había sacado elegidos 257 diputados, las derechas 139, y el centro 57. Esto sumaba un total de 453, quedando todavía unos 20 escaños a decidir en una segunda vuelta. Pero sin preocuparse de lo que pudiera resultar de las segundas vueltas, el Frente Popular había obtenido más de los 237 escaños que constituían una mayoría absoluta en los 473. En estas circunstancias todos los partidos reconocieron la victoria de las izquierdas, y entre el 18 y el 22 de febrero, los principales dirigentes de la CEDA y los monárquicos hicieron declaraciones públicas interpretando el significado de su derrota.

Si redondeamos las cifras dadas a conocer por las juntas el 20 de febrero, las izquierdas habían obtenido 4700.000 votos, las derechas 3997.000, el centro 449.000 y los nacionalistas vascos (concentrados en cuatro distritos electorales)130.000. Como hubo una mayor proporción de votantes que en 1931 y 1933, las izquierdas y las derechas habían aumentado el total absoluto de sus votos, las derechas por unos 600.000 (la mitad de los cuales quizá debidos a electores que votaron por los radicales en 1933), y las izquierdas poco más de 700.000. (La mayoría de ellos probablemente de anarquistas que se abstuvieron en 1933). Como muchos comentaristas han indicado, las cifras muestran un au-

mento de la fuerza absoluta de las derechas, así como un total de 4576.000 votos no pertenecientes al Frente Popular. Partiendo de estos hechos hubo muchas argumentaciones alegando la injusticia de la sólida mayoría de escaños otorgados al Frente Popular[160].

Pero las elecciones del Frente Popular, como aquéllas de 1931 y 1933, se celebraron bajo una ley electoral escrita especialmente para estimular la formación de coaliciones y evitar un Parlamento fragmentado. En cada distrito electoral, el 80 por 100 de los escaños iba a cualquier lista que obtuviera más del 50 por 100 de los votos. Muchos de los escaños que fueron ganados en 1933 por las derechas contra la dividida oposición de republicanos y socialistas fueron ahora al candidato de la coalición del Frente Popular, sin que hubiera ningún cambio notable en las ideas de los votantes. Y, por supuesto, el Frente Popular se llevó el 80 por ciento de los escaños dondequiera que recibió más del 50 por ciento de los votos.

En febrero de 1936 todas estas cosas estaban claras para los españoles políticamente conscientes. Sin embargo, el mismo hecho de una indudable victoria de las izquierdas sembró el pánico tanto en el Gobierno como entre las derrotadas derechas. Según las personalidades de la CEDA de aquel tiempo, emisarios de las derechas invitaron al general Franco a dar un golpe de estado para anular las elecciones (técnica que había sido empleada varias veces en la historia de Argentina, Chile, México y Perú). Se dice que el general rehusó, por varias razones[161]. Fuentes cercanas al Gobierno de Portela se han mostrado igualmente enfáticas en afirmar que (a través de emisarios confidenciales) el general Franco ofreció sus servicios a Portela a fin de anular las elecciones, pero que Portela y el presidente Alcalá-Zamora estaban decididos a respetar la voluntad popular, a pesar de su ansiedad respecto al futuro. Sea cual sea la verdad con respecto a Franco y Portela, el 17 de febrero corrían rumores por Madrid de que era in-

minente un pronunciamiento. Oficiales leales como el general Pozas, de la guardia civil, y el general Núñez de Prado, de las fuerzas aéreas, advirtieron a Portela de la creciente inquietud que reinaba en los cuarteles. En los cafés, los oficiales reaccionarios pedían la simple anulación de las elecciones.

En la mañana del 18 de febrero, Portela rogó a Azaña que asumiera inmediatamente el poder en nombre del Frente Popular. Azaña deseaba aguardar a la apertura de las Cortes, prevista para el 16 de marzo, a fin de preparar su programa legislativo. El presidente creía que Portela debía permanecer en el cargo, al menos durante la semana necesaria para completar el recuento de los votos y para estar seguros, dada la escasa diferencia de éstos, sobre la exacta distribución de los escaños en las Cortes. Sin embargo, Portela estaba aterrorizado, y en vista de su negativa a seguir ocupando el cargo un día más, Alcalá-Zamora llamó a Azaña para que asumiera el poder inmediatamente como única alternativa posible al caos[162].

Capítulo 11

DE FEBRERO A JUNIO DE 1936

EL primer acto del nuevo jefe del Gobierno, Manuel Azaña, fue nombrar un Gabinete compuesto enteramente de republicanos de izquierda y de hombres que gozaban de su confianza personal: como ministro de la Guerra, al general Masquelet, que le había ayudado mucho cuando las reformas del ejército del primer bienio; como ministro de la Gobernación, a su amigo el arquitecto Amos Salvador; como ministro de Instrucción Pública, a Marcelino Domingo; como ministro de Agricultura, al liberal murciano y respetado amigo personal Mariano Ruiz Funes. El 22 de febrero, los 30.000 presos políticos fueron amnistiados, y el 23 se suspendió el pago de las rentas en Andalucía y Extremadura como primer paso hacia una renovada y más rápida distribución de tierras. Al mismo tiempo los ayuntamientos vascos que fueron suspendidos en el verano de 1934 fueron restablecidos en sus funciones, y del mismo modo el Gobierno Companys en Cataluña y los muchos ayuntamientos socialistas que fueron suspendidos desde octubre de 1934. Azaña trasladó también de Madrid a los dos generales cuyos nombres sonaron con más persistencia en relación con conspiraciones militares. El general Franco fue destinado a las islas Canarias y el general Goded a las Baleares.

Estas primeras disposiciones no sólo parecieron satisfactorias a la masa de votantes urbanos liberales, que eran seguidores de Azaña, sino que fueron elogiadas sin reservas por el republicano

conservador Miguel Maura y los dirigentes secundarios de la CEDA, Giménez Fernández y Luis Lucía. Sin embargo, también pudo verse que la victoria había intoxicado al ala izquierdista del Frente Popular, y que el Gobierno de Azaña estaba desbordado por sus propias masas. En docenas de ciudades, los desfiles celebrando la victoria fueron acompañados de choques con la policía, marchas contra las cárceles, y ataques, o amenazas de ataques, contra las iglesias. Hubo que asignar retenes extra de la policía para guardar las iglesias en las principales ciudades, así como los edificios de *El Debate* y *ABC* en Madrid. Azaña mantuvo el estado de alarma que fue proclamado por Portela el 17 de febrero. La prensa censurada no llevaba palabras violentas fuera de la capital; pero en el Ministerio de la Gobernación se recibían constantes informes de confiscaciones de tierras acompañadas de choques con la guardia civil o de asalto.

En Madrid y en las grandes ciudades industriales, cada semana tenían lugar grandes desfiles exigiendo el dominio del proletariado, y los socialistas de izquierda hablaban del paralelo entre la Rusia de 1917 y la España de 1936, con Azaña haciendo el papel de Kerenski y Largo Caballero el de Lenin. Azaña esperaba que la fiebre disminuyera en el mes siguiente a las elecciones, y como las Cortes habrían de reunirse el 16 de marzo, convocó a Largo Caballero el día 11 para pedirle que cesaran los desfiles de victoria. El 13 de marzo un grupo de estudiantes falangistas intentó asesinar al diputado socialista Jiménez de Asúa, matando a un policía que lo acompañaba. Al día siguiente, el pueblo quemó parcialmente dos iglesias y los talleres de *La Nación*, órgano de Calvo Sotelo. El 15 de marzo Azaña prohibió nuevas demostraciones de victoria e hizo detener a José Antonio Primo de Rivera y otros ocho dirigentes de la Falange. Unos días antes, en Logroño, tuvo lugar un choque entre campesinos y el ejército, del que resultaron cuatro muertos; un grupo de oficiales envió entonces un verdadero ultimátum a Azaña, con referencia a las

provocaciones izquierdistas contra las fuerzas armadas. Mientras tanto, en la sesión de apertura de las Cortes, las izquierdas desafiaron al almirante Carranza, diputado monárquico conocido por su franqueza, a que gritara ¡viva la República!, cosa que el anciano caballero se negó a hacer, ante lo cual los diputados izquierdistas comenzaron a cantar La Internacional.

Aunque en los meses de primavera hubo docenas de tiroteos y lanzamientos de bombas, sólo muy pocos de ellos pueden ser fechados con certeza. El 19 de marzo dispararon contra el domicilio de Largo Caballero. El día 24 fue asesinado en Oviedo el diputado derechista Alfredo Martínez. A principios de abril fue descubierta una bomba en el domicilio del diputado republicano Eduardo Ortega y Gasset, y varios alcaldes y gobernadores civiles escaparon casi milagrosamente de ser asesinados. Sólo se conocen los casos más destacados, ya que la censura de prensa y la extrema incapacidad de la policía para comprobar todos los casos de violencia hace imposible saber con detalle qué es lo que estaba sucediendo en el país[163].

Los ejercicios paramilitares de los dos últimos años, degeneraron ahora en constantes violencias callejeras. La Falange estaba harta de los dicterios de la prensa monárquica, que se refería a ellos como más «franciscanos que fascistas». Reclutando rápidamente miembros entre la juventud católica y los trabajadores antimarxistas, formaron patrullas motorizadas que hacían incursiones en las barriadas obreras, disparando al azar contra los «rojos». La violencia no obedecía a ninguna lógica. Podía empezar si a alguien se le gritaba un insulto, con un tropezón al doblar una esquina en la calle, o con el arranque de un cartel pegado a un muro. Con una casi total libertad de prensa, a continuación de dos años de censura, la competencia resultante entre los periódicos provocaba choques diarios. Los vendedores de *Claridad* y Mundo Obrero (el órgano comunista que había estado prohibido desde octubre de 1934 hasta el 2 de enero de 1936) sostenían ba-

tallas campales con los muchachos que pregonaban el *ABC* y *La Nación*. Los entierros de los muertos en aquellos choques se convertían en ocasión de enormes manifestaciones políticas para los distintos partidos y a veces la lucha se reanudaba en el propio cementerio. Desde el punto de vista ideológico, la violencia heroica era más propia del espíritu fascista que de las izquierdas; pero la juventud socialista, meditando sobre la suerte de los socialistas alemanes en 1933 y de los austriacos en 1934, decidió responder al fuego con el fuego. Ninguno de los bandos esperaba alcanzar ninguna solución política específica con la lucha callejera, pero la atmósfera de violencia acabaría por destruir las últimas posibilidades de la República democrática[164].

Hacia finales de marzo las Cortes aún no habían podido iniciar sus tareas legislativas. El día 31 la comisión parlamentaria encargada de la revisión de las elecciones se negó a conceder escaños a una docena de diputados derechistas basándose en que habían obtenido la mayoría por medio del terrorismo y depositando papeletas falsas en las urnas. Los diputados monárquicos y de la CEDA se retiraron inmediatamente de la Cámara como protesta. Por lo tanto, los debates sobre los temas de orden público y la legitimidad de las elecciones tuvieron que ser dejados para más adelante.

El 4 de abril, el jefe del Gobierno, Azaña, presentó a las Cortes su programa legislativo. El programa preelectoral del Frente Popular habría de cumplirse al pie de la letra; una renovada reforma agraria y construcción de escuelas, mayor autonomía para los ayuntamientos, un estatuto de autonomía para las provincias vascongadas, y la readmisión de todos los trabajadores despedidos por sus actividades políticas y sindicales desde finales de 1933. Asimismo, tal como se indicaba en el pacto preelectoral, no se procedería a la socialización de la tierra, la banca o la industria. Miembros de la derecha moderada, tales como Miguel Maura y Giménez Fernández, expresaron inmediatamente su

apoyo a tal programa. Calvo Sotelo no opuso fuertes objeciones, pero preguntó si las masas socialistas y anarquistas permitirían a los republicanos gobernar[165]. Simultáneamente al anuncio de sus planes, Azaña hizo un llamamiento a las derechas para que aceptaran los resultados de unas elecciones democráticas y otro a las izquierdas para que cooperaran con el programa moderado que constituía la base del Frente Popular. Pidió a las derechas que condenaran el terrorismo de la Falange tan vigorosamente como censuraban los ataques de las iglesias. A petición de las derechas, aplazó las elecciones municipales que estaban convocadas para la segunda semana de abril, reconociendo así explícitamente que, en el presente estado de turbulencia pública, unas elecciones libres serían imposibles.

Tres días después las Cortes complicaron una situación ya tensa, deponiendo al presidente Alcalá-Zamora. El infortunado presidente había enfurecido a casi todo el mundo en los dos años anteriores. La izquierda liberal rompió con él cuando permitió que la CEDA entrara en el Gobierno; la CEDA en cambio jamás pudo perdonarle el que no ofreciera a Gil Robles la presidencia del Consejo de ministros cuando fue designado jefe de la minoría más importante de las Cortes. A Lerroux le parecía que la desconfianza que el presidente sentía hacia él acabó con su oportunidad de gobernar a España. Todo el mundo estaba cansado de sus constantes escrúpulos legales, de la atención que prestaba a detalles insignificantes, de sus consultas a docenas de diputados con motivo de cada crisis. Todos sabían que aspiraba a dirigir el sector moderado de la opinión, que no era ni marxista ni monárquica, y sospechaban que el trato que dio a Gil Robles estuvo motivado en gran parte por los celos. Fue acusado de tratar de dividir a los partidos, de modo que no pudieran surgir dirigentes poderosos, de apoyar a Samper contra Lerroux, de ofrecer el poder a Giménez Fernández y no a Gil Robles, y así sucesivamente. Las derechas y las izquierdas se rieron de su desconcierto

cuando el centro falló de modo tan estrepitoso en las elecciones de febrero.

La verdad es que tuvo buenas razones para muchos de sus actos; pero su posición le impedía decirlas en público. España carecía de hombres con experiencia de gobernantes, y el presidente de la República, al ofrecer la presidencia del Consejo de ministros a tantas personas diferentes, trataba en parte de proporcionar con rapidez a la República una selección de gobernantes experimentados[166]. Su instinto de lealtad hacia el régimen era muy agudo. Lerroux se quejó con acritud de las objeciones de Alcalá-Zamora a muchos de sus ascensos militares en 1935, pero los hombres contra los que el presidente opuso objeciones fueron precisamente los que con más avidez atacaron a la República en 1936. Los hombres del centroderecha que prefirió a Lerroux y Gil Robles (Martínez Barrio, Ricardo Samper, Manuel Giménez Fernández y Miguel Maura) permanecieron leales a la República cuando el estallido de la guerra civil.

La Constitución disponía que el presidente podía disolver dos veces las Cortes; pero, como ya he dicho antes, los redactores de la misma añadieron la cláusula de que después de la segunda disolución sería inmediato deber de las nuevas Cortes examinar las razones del presidente. Si hallaban estas poco satisfactorias, el presidente sería automáticamente destituido del cargo. Al modo como lo interpretaba Alcalá-Zamora, la disolución de enero de 1936 era la primera disolución de unas Cortes regulares, pues las Cortes Constituyentes fueron convocadas sólo para aquella tarea. Pero las izquierdas insistieron en debatir lo que ellas llamaban la segunda disolución. Como habían ganado las elecciones resultantes, le atacaron por disolver las Cortes «demasiado tarde», y cuando Prieto despellejó el bienio estéril y la represión en Asturias, levantó un entusiasmo vengativo. El debate pilló desprevenidas a las derechas, quienes antes que defender a un presidente del que pensaban que había aplacado constantemente a las

izquierdas, se abstuvieron, y Alcalá-Zamora fue depuesto por 238 votos contra 5. En los pasillos, el anciano conde de Romanones, que fue el único monárquico confesado en las Cortes Constituyentes, soltó una risita para sí mismo. El jefe del Gobierno provisional que había exigido que el rey Alfonso saliera de Madrid «antes del anochecer», había sido arrojado del poder sin ceremonias, menos de cinco años después. Martínez Barrio, presidente de las Cortes, se convirtió temporalmente en presidente de la República, de acuerdo con la Constitución.

El 13 de abril fue asesinado el juez Manuel Pedregal, que había sentenciado a treinta años de cárcel a un falangista por el asesinato de un muchacho que vendía periódicos izquierdistas. El día 14, aniversario de la República, un guardia de asalto asesinó a un guardia civil, y bajo la tribuna presidencial estalló una bomba de fabricación casera, sin hacer grandes daños. En las Cortes se celebró el día 15 el primero de los dos grandes debates sobre orden público. Calvo Sotelo, hablando en nombre de los monárquicos, acusó al Gobierno de que cualquiera que fueran sus propósitos, estaba avasallado por las izquierdas. Y leyó textos socialistas sobre la nacionalización de las tierras y los bancos; citó artículos de Álvarez del Vayo, en los que se decía que el Frente Popular estaba procediendo demasiado lentamente, y acusó a Largo Caballero de amenazar con nombrar generales a algunos cabos. Declaró que el Partido Socialista se proponía nada menos que implantar el comunismo en España. Gil Robles habló más moderadamente y de modo más específico. Recordó a las izquierdas que su partido había organizado a la clase media, y que las masas de ésta sumaban un número de votos igual al de las izquierdas; que él se había propuesto siempre canalizar esas masas hacia la aceptación de la legalidad republicana, y que las izquierdas les habían cortado el camino legal hacia el poder con la revolución de octubre de 1934. Advirtió a las Cortes que, dada la atmósfera de violencia reinante, estaba perdiendo seguidores que se mar-

chaban hacia organizaciones que prometían responder a la violencia con la violencia, un anuncio, en efecto, de que la organización juvenil de la CEDA estaba perdiendo miembros rápidamente en favor de la Falange[167].

Ninguno de ambos oradores causó impresión a la mayoría. Calvo Sotelo estaba ya señalado como el principal dirigente civil de los ataques contra la República, tanto abiertos como solapados. Desde su regreso de Francia en 1934, jamás ocultó su desprecio hacia el Gobierno parlamentario. Durante la campaña se refirió al ejército como «*columna vertebral de la nación*», y desde el 16 de febrero había sondeado en privado a numerosos diputados sobre la actitud que adoptarían ante un golpe militar. También trató de ponerse en contacto con Alcalá-Zamora, a través de amigos del presidente, con una proposición para una dictadura presidencial. En cuanto a Gil Robles, las izquierdas le consideraban un Dollfuss que perdió su oportunidad de apoderarse del poder, y ahora no creían sus repetidas profesiones de fe en el Gobierno parlamentario.

Durante la segunda semana de abril, el Frente Popular tuvo que proporcionar a la República un nuevo presidente. Inmediatamente después de la destitución de Alcalá-Zamora, la elección más idónea parecía ser Martínez Barrio. Sin embargo, el papel de este como presidente de las Cortes no era, ni mucho menos, insignificante. Azaña pareció favorecer la candidatura de Felipe Sánchez Román, profesor de derecho íntimamente asociado con la redacción de la Constitución y la reforma agraria, liberal moderado e intelectual de gran prestigio. Pero Sánchez Román se negó en el último instante a firmar el manifiesto del Frente Popular, aunque en todos los otros aspectos era aliado político de Azaña y Martínez Barrio. Las izquierdas, por lo tanto, no lo aceptaron. A finales de abril se consideraba que Azaña sería el nuevo presidente.

En la primavera de 1936, al igual que en los años 1931-1933, Azaña era el único dirigente republicano con capacidad para dirigir un Gobierno liberal-izquierdista. Pero el Frente Popular, que en fin de cuentas era una frágil coalición, amenazó con romperse por la cuestión de la elección presidencial. Desde el momento en que se vio claro que sólo Azaña recibiría el voto unánime de los diputados del Frente Popular, se convirtió en el único candidato posible. Pero también hubo entonces otras consideraciones que decidieron su elección. Muchos diputados hablaron de revisar la Constitución. En su desconfianza hacia el poder ejecutivo, las Cortes Constituyentes habían limitado estrictamente las funciones del presidente. Con un hombre de la estatura y la integridad de Azaña en el cargo, su autoridad podría ser ampliada. También hubo comentarios sobre un «trato» entre Azaña y Prieto, los dos «hombres fuertes» de la ya vieja coalición republicano-socialista. Azaña, como presidente, sería para las derechas y el centro la garantía de un régimen moderado. Una renovada participación socialista acabaría con la inestable situación en la que sólo gobernaban los republicanos, aunque todo el mundo sabía que detrás de ellos estaban los votos socialistas y anarquistas. También, después de tres años de *New Deal* en los Estados Unidos, la atmósfera internacional sería más favorable que en 1931[168].

La compleja personalidad de Azaña fue un factor importante de la situación. Él fue un jefe de Gobierno fuerte en el primer bienio, y en materias de orden público y de cumplimiento del programa del Frente Popular había comenzado a seguir una vez más una línea firme. Pero en el fondo de su corazón Azaña no gozaba con el ejercicio del poder; él era por temperamento más un literato que un hombre de acción. Siempre consideró que podría gobernar con éxito sólo si pudiera contar con el pleno apoyo de los socialistas, si no con una participación real de éstos en el Gobierno. En la primavera de 1936 la mayoría de los socialis-

tas se había orientado con exceso a la izquierda en relación con su posición de 1933. Las tormentosas entrevistas de Azaña con Largo Caballero en las dos primeras semanas de marzo fueron pruebas fundamentales. ¿Podría Largo Caballero contener a las masas de modo que el Gobierno pudiera afirmar su autoridad y desarrollara su programa de modo ordenado, u hostigaría al Gobierno, esperando hacer el papel de Lenin con un Azaña haciendo el de Kerenski? Largo Caballero quería las dos cosas. Prometió contener a sus seguidores e insistió en su lealtad hacia el programa del Frente Popular. Al mismo tiempo pidió velocidad y se negó a comprometerse a decir por cuánto tiempo apoyarían los socialistas a Azaña y qué quería significar con sus repetidos llamamientos en *Claridad* para un Gobierno proletario. En lo que quedaba de marzo y en abril, Azaña tuvo que suponer, aparte del valor que diera a las promesas de Largo Caballero, que éste no quería o no podía contener a las masas, ya que las huelgas y los desórdenes continuaron sin cesar.

Pero la falta de un seguro apoyo socialista significaba, en cambio, que Azaña no podría gobernar. A finales de abril, la situación reinante y el temperamento de Azaña indujeron a éste a aceptar la presidencia. Desde ella podría servir a la República, esperando estar «por encima de los partidismos», como presidente. Era la única figura en torno a la cual podía unirse el Frente Popular. Con sus dotes literarias, podría prestar gran dignidad a los actos y ceremonias de la presidencia. Como presidente, estaría en mejores condiciones que como jefe del Gobierno para comunicar su fe republicana y democrática a las masas, que seguían siendo políticamente analfabetas. Claro está, tampoco era inmune al halago de que lo buscaran tan insistentemente como la figura más representativa de los republicanos y de las izquierdas.

El primero de mayo, Prieto pronunció en Cuenca uno de los discursos más importantes de su carrera política. Tanto la fecha como el lugar eran muy significativos. El primero de mayo era la

fiesta internacional del Trabajo, una ocasión para recordar la conciencia de clase y la fraternidad proletaria, por parte de los sindicatos y partidos políticos de izquierdas en todo el mundo. Cuenca era una de las pocas provincias en las cuales se celebró una tercera vuelta electoral en febrero. Todos los candidatos informaron haber sido amenazados de muerte y el uso de patrullas de esbirros para irrumpir violentamente en sus reuniones. Ninguna de las listas obtuvo el mínimo del 40 por ciento, necesario para elegir un diputado. Las elecciones especiales necesarias habían sido aplazadas varias veces. Las derechas, presentando nuevos candidatos en un supremo esfuerzo para ganar la provincia, nombraron a José Antonio Primo de Rivera para figurar en su lista, y habrían nombrado a Francisco Franco si el general hubiera aceptado. En las elecciones especiales celebradas en abril, las izquierdas ganaron la mayoría; pero las derechas no aceptaron la legitimidad de estas nuevas elecciones, y la atención nacional se concentró entonces en la tensa prueba electoral de Cuenca[169].

Prieto no había desempeñado públicamente ningún papel en la política española desde octubre de 1934 hasta poco después de la victoria electoral del Frente Popular. Cuando el 5 de octubre fallaron las huelgas generales, huyó a Francia. En octubre de 1935 regresó a España clandestinamente y tomó parte en las deliberaciones ejecutivas del Partido Socialista; pero no pudo aparecer en público hasta después de la amnistía del 22 de febrero. La tragedia asturiana le había causado una profunda impresión. Aunque siempre en el ala moderada del partido, él había dirigido sin embargo el desembarco de armas del Turquesa y votado por una huelga de carácter general, motivado en gran parte por su deseo de no quedar aislado dentro del movimiento general hacia la izquierda de los trabajadores de la UGT. Después de lo de Asturias, juró a sus amigos íntimos que jamás se dejaría arrastrar otra vez a una nueva aventura destinada al fracaso. A principios de 1936 los partidarios de Largo Caballero lo tachaban de cobar-

de y de reformista. Había estado viviendo en París mientras los mineros morían y había 30.000 presos en las cárceles. En abril trató de recobrar su prestigio entre los trabajadores dirigiendo el ataque contra Alcalá-Zamora. Hacia el primero de mayo veía la guerra civil a las puertas, y el mitin de Cuenca no fue una exhibición en una tribuna a favor de los revolucionarios, sino la presentación de un programa sobrio de un candidato al puesto de jefe de Gobierno. Dijo a sus oyentes que la violencia no consolidaría nada: ni la democracia, ni el socialismo ni el comunismo; que las quemas de iglesias y los choques callejeros sólo conducirían al fascismo, y que el joven y profesionalmente competente general Franco sería el candidato natural de las fuerzas que trataban de implantar una dictadura militar en España. También habló de las crecientes necesidades económicas de España: reforma agraria, obras hidráulicas e industrialización. E insistió en que el capitalismo tenía un papel esencial que jugar en este programa económico.

El 8 de mayo tuvo lugar la elección del nuevo presidente. Los monárquicos y la CEDA decidieron boicotearla oficialmente. Sin embargo, Azaña recibió no sólo el apoyo unánime de los partidos del Frente Popular, sino los votos de los nacionalistas vascos, de la Lliga Catalana y el puñado de lerrouxistas y mauristas[170]. El nuevo presidente ofreció en primer lugar la jefatura del Gobierno a Indalecio Prieto; pero éste, en vista de la decidida oposición de la mayoría de los diputados socialistas, declinó el encargo de formar Gabinete. La decisión de Prieto era la expresión de una crisis que ya hacía tiempo se venía fraguando dentro del Partido Socialista entre los elementos moderados y los revolucionarios.

Durante los años 1934 y 1935, Largo Caballero no cesó de hablar de una revolución socialista, mientras que Prieto hablaba de la renovación de la coalición republicano-socialista. A finales de 1935 la gran mayoría de los trabajadores de la UGT y la ju-

ventud socialista preferían a Largo Caballero antes que a Prieto. Elecciones locales del partido celebradas en Madrid, Murcia y Badajoz dieron abrumadoras, victorias a los «caballeristas[171]». El 21 de diciembre *Claridad* publicó un análisis de la situación existente, así como un programa de acción. El programa mínimo pedía la nacionalización de las tierras y de la banca; los pequeños agricultores debían ser protegidos; pero la preferencia en la distribución se daría a los colectivistas. El programa máximo pedía la dictadura del proletariado. Largo Caballero vertió sarcasmos acerca de los que se llamaban a sí mismos «socialistas», y que temían a una dictadura sobre todo lo demás en un mundo en que las dictaduras iban siendo tan frecuentes y tenían tanto éxito. Los editores de *Claridad* declararon que la tarea del momento era consolidar la República burguesa, pero que inevitablemente la lucha de clases se endurecería bajo tal régimen y que el partido debía prepararse para el avance hacia el socialismo.

En marzo, tras la victoria electoral del Frente Popular, *Claridad* publicó un nuevo programa. Ahora pedían la unificación de los partidos Socialista y Comunista, así como de la CNT y la UGT. España se convertiría en una «confederación» de pueblos ibéricos, incluyendo a Marruecos, teniendo cada pueblo el derecho a la autodeterminación. Al final, su fraseología fue imposible de distinguir de la de Mundo Obrero, órgano del Partido Comunista. Este último, que tenía menos de 50.000 miembros, y una organización juvenil en expansión (pero que alcanzaba menos de los 50.000 afiliados, en comparación con los 200.000 de la juventud socialista), había de salir más ganancioso que los socialistas con cualquier programa de unificación[172]. Largo Caballero se negó a acceder a los llamamientos comunistas para la fusión de ambos partidos y de la UGT y la CNT. Prefirió mantener la cooperación más libre que había dentro del Frente Popular. Pero su más cercano consejero, Julio Álvarez del Vayo, y los dirigentes juveniles más activos como Santiago Carrillo, Carlos

de Baráibar y el italiano naturalizado Fernando de Rosa, favorecían la fusión. El primero de abril anunciaron la creación de la Juventud Socialista Unificada (JSU), y durante el curso de la primavera, el dirigente caballerista Rafael Vidiella trabajó para la creación del Partido Socialista Unificado de Cataluña (PSUC). El primero de mayo, mientras Prieto proponía en su discurso de Cuenca un Gobierno de Frente Popular con participación socialista, en Madrid la JSU llevaba letreros pidiendo un Gobierno proletario y la formación de un ejército rojo.

Los jóvenes dirigentes caballeristas estaban intoxicados por la seguridad de que ellos representaban «la ola del futuro[173]». Esperaban que en la propuesta fusión dominarían a los comunistas y educarían a las masas de la CNT amoldándolas a su modo de pensar. Propusieron la expulsión de Besteiro del partido, basándose en que no era marxista. Prieto era a lo sumo un «reformista», que en el peor de los casos podría ser un posible nuevo Mussolini planeando un «golpe Azaña-Prieto», para detener la marcha incontenible de la revolución. Para ellos, la clase media y el campesinado que había votado por las derechas no eran la mitad de los votantes de España, sino tan sólo los restos de una burguesía condenada a la desaparición. Se mostraban muy confiados en el apoyo de las masas, y así, junto con el programa para la socialización de la industria, la colectivización de la agricultura y un ejército rojo, había puntos en su programa que garantizaban la libertad de prensa y el sufragio secreto. Francisco Largo Caballero sería el predestinado dirigente de la próxima revolución, siendo, como era, el digno, experimentado y verdaderamente proletario jefe de la UGT. En cuanto al propio Largo Caballero, con sus antecedentes de precavido político sindical, y sus recuerdos de la época que colaboró con el Gobierno Azaña, se sentía a la vez confundido y halagado por la exaltada terminología de *Claridad*. Y para mayor azoramiento suyo y del Partido Comunista (que en aquellos tiempos trataba de tranquilizar a la bur-

guesía), los jóvenes socialistas comenzaron a llamar a Largo Caballero «el Lenin español».

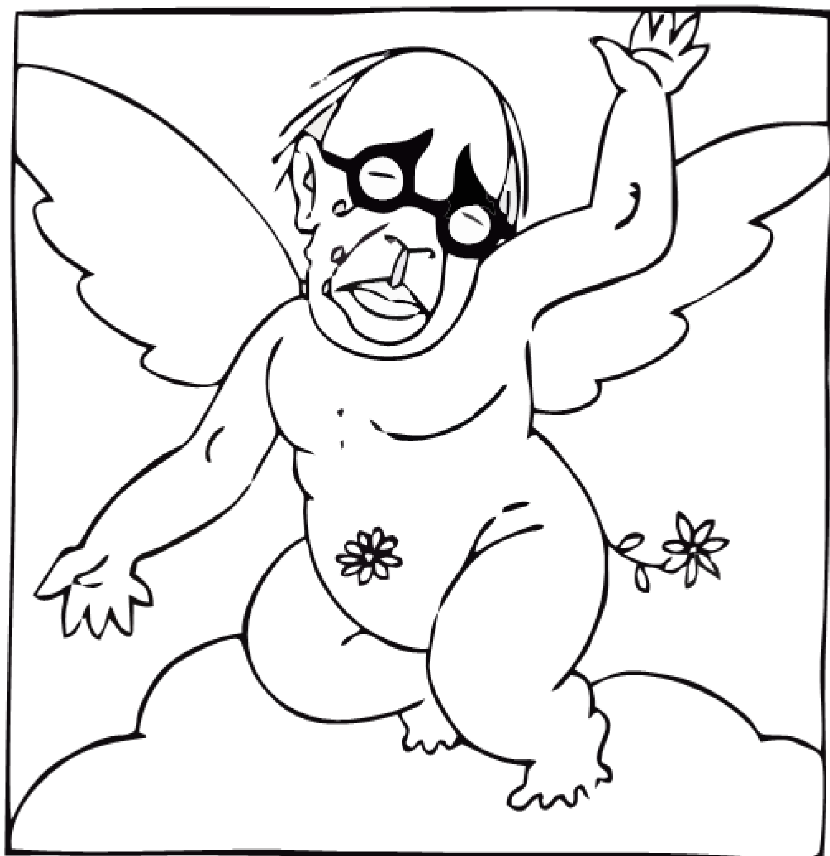
Durante los meses cruciales de finales de 1935 a la primavera de 1936, la masa de votantes socialistas consideró a Largo Caballero como su jefe. Al mismo tiempo, el comité ejecutivo del Partido Socialista seguía dominado por Prieto. En esta lucha interna del partido, Prieto fue apoyado calurosamente por los veteranos de la revolución de octubre. En el Norte, miles de jóvenes socialistas se dieron de baja cuando se fundó en Madrid la JSU[174]. En general, los que habían visto personalmente los sufrimientos de los mineros y de los aldeanos asturianos apoyaban a Prieto, y los que sólo los habían leído apoyaban a Largo Caballero. Prieto gozaba también del sólido apoyo de los principales intelectuales socialistas tales como Jiménez de Asúa y Juan Negrín, y de Julián Zugazagoitia, director de *El Socialista*, órgano oficial del partido[175].

Para mantener la frágil unidad del Frente Popular, Prieto presionó a Azaña para que aceptara la presidencia. Y ahora, en nombre de esa misma unidad, se negó a convertirse en jefe del Gobierno. Continuó denunciando en sus discursos y desde las páginas de su periódico *El Liberal* de Bilbao, el izquierdismo infantil de las masas de la UGT y la CNT, y la irresponsabilidad de los dirigentes caballeristas, que se dejaban arrastrar por la corriente. A aquéllos que insistían en interpretar la revolución de Asturias como el primer paso hacia una dictadura proletaria, replicaba que el documento firmado por la Ejecutiva del Partido Socialista y la UGT antes del levantamiento de octubre había pedido un programa muy similar al del presente Frente Popular. En octubre los trabajadores habían sacrificado sus vidas para impedir el fascismo. Con la victoria electoral de febrero habían ganado una oportunidad para llevar a cabo de un modo pacífico y legal el mismo programa social que habían formulado en 1934. Sería

una locura arriesgarse a una guerra civil en aras de una revolución prematura.

En Cuenca, lo mismo que en todas partes, Prieto fue recibido con gritos hostiles por parte de algunos elementos de su auditorio. Los estudiantes socialistas, a veces acompañados por el doctor Negrín, le servían de guardaespaldas durante sus giras políticas. El 13 de mayo en Écija (provincia de Sevilla) dispararon contra él al descender de la tribuna acompañado de los dirigentes de los mineros asturianos González Peña y Belarmino Tomás. Jamás se puso en claro quién disparó. Algunos falangistas andaluces se atribuyeron el hecho; pero hay que mostrarse escépticos ante su jactancia. La verdad es que en la primavera de 1936 tanto los socialistas revolucionarios y los anarquistas como los falangistas habrían sido muy capaces de asesinar a Prieto. Poco después del incidente de Écija hubo que aplazar el Congreso nacional del Partido Socialista, de junio (en que estaba programado) hasta septiembre. La pugna Prieto-Largo Caballero había dividido virtualmente al mayor partido político de España, y cuando el partido rechazó la oferta de Azaña a Prieto para formar Gobierno, paralizó virtualmente al Gobierno del Frente Popular. Al pedir que los republicanos gobernaran solos, respetaban al pie de la letra el pacto del Frente Popular; pero todo el mundo sabía que sin los socialistas, la Izquierda Republicana de Azaña era, usando la cáustica frase socialista, «cosa de cuatro gatos». Por las páginas de *Claridad* y por las charlas de café, se veía claro que los socialistas revolucionarios daban por supuesto que bloqueando al Gobierno Azaña-Prieto allanaban su propio camino.

NOTICIAS DE ÚLTIMA HORA, por Bagaría



AZAÑA QUIERE LA PRESIDENCIA

Parece que sólo hay dos caminos, como en el Tenorio: « Arráncame el corazón — o ámame, porque te adoro»,o bien «Manuel Azaña o Azaña (don Manuel)»

(*El Sol*, 30 de abril de 1936)

El nuevo presidente confió la jefatura del Gobierno a su fiel amigo y aliado político Santiago Casares Quiroga. Casares había demostrado su habilidad y su buena voluntad para ocupar cargos difíciles, como ministro de la Gobernación durante el primer bienio. Los terratenientes, los anarquistas, los funcionarios públicos, y las diversas fuerzas policíacas que estuvieron bajo su

mando, hicieron todo lo posible por amargarle la vida en aquel período. Nadie sabía mejor por experiencia cuántos elementos de la sociedad española se alegrarían de hacer naufragar a la República. Además, estaba tuberculoso y a menudo participaba en los debates de las Cortes sufriendo fiebre. Sólo por su lealtad hacia Azaña consintió en aceptar el nombramiento como presidente del Consejo de ministros el 10 de mayo de 1936.

A pesar de la febril agitación política de la primavera, el Gobierno republicano hizo grandes esfuerzos para llevar a cabo el programa del Frente Popular. El 29 de febrero el Gobierno suspendió los desahucios de arrendatarios agrícolas, proceso que había llegado a su momento culminante a finales de 1935. El 16 de marzo Azaña anunció una vez más la confiscación de las fincas de los aristócratas complicados en la sublevación de Sanjurjo, fincas que ya fueron confiscadas en septiembre de 1932 y luego devueltas a sus propietarios en abril de 1934 como parte de la ley de amnistía de Sanjurjo. Mariano Ruiz Funes, ministro de Agricultura, viajaba constantemente por las provincias del Sur y el Oeste, interviniendo donde podía para evitar choques entre los campesinos y la guardia civil y formalizando, con su presencia, la posición de los miles de colonos intrusos[176]. Los terratenientes protestaron diciendo que el Gobierno estaba sencillamente legalizando el robo; pero el ministro estaba haciendo la única cosa que podía mantener la paz en los campos, mientras que comprometía al Gobierno a repartir las tierras tan rápidamente como fuera posible, dando a estos repartos una apariencia ordenada, pues hubiera sido imposible retrasarlos los meses que eran necesarios para crear la legislación pertinente.

AL REVÉS, por Bagaría



EL DILEMA DE CASARES QUIROGA

TORERO: O usted resuelve nuestro problema o nos lanzamos a la lucha.
MINISTRO (Casares Quiroga): No, nombre, no. Al revés. Ustedes me dan el problema resuelto o se lanzan a la lucha, quieran o no.

(*El Sol*, 22 de mayo de 1936)

En materia de autonomía regional, la Generalitat catalana fue restablecida inmediatamente en el poder que había ejercido antes del 6 de octubre, y en el transcurso de la primavera el Gobierno de Madrid transfirió a su autoridad el orden público, las obras hidráulicas y los puertos. En el País Vasco fueron restablecidos los ayuntamientos suspendidos, y comenzó la discusión del esta-

tuto de autonomía vasco. Las principales dificultades con que se tropezaba eran de índole financiera. Según el concierto económico que databa de 1878, el Gobierno central cobraba a las provincias vascongadas una suma previamente fijada en concepto de impuestos, que permitía a los vascos distribuir la carga financiera como más les convenía. Los artículos 40 y 41 del proyectado estatuto garantizaban la continuación de este sistema. Pero en opinión de los expertos en economía del Gobierno, la cuota vasca era proporcionalmente mucho más baja de lo que debería ser, y los vascos, por supuesto, no estaban dispuestos a permitir que el Gobierno de Madrid les aumentara los impuestos. Lo cierto es que los vascos pagaban menos impuestos que el resto de los españoles, y esto, junto con su superior eficiencia económica, tendía a arrastrar las nuevas industrias hacia una zona ya muy industrializada. Ni siquiera los liberales castellanos deseaban otorgar un estatuto de autonomía que a la vez confirmaría una posición privilegiada con respecto a la carga tributaria[177].

El compromiso del Frente Popular para devolver sus empleos a todos los trabajadores que fueron despedidos por razones políticas desde 1934 creó serios problemas. No era asunto sencillo determinar quién había sido despedido y por qué razones. El volver a emplear a los trabajadores que habían sido despedidos ya hacía más de un año suponía inevitablemente un aumento en los sueldos a pagar por los patronos. Los pistoleros anarquistas habían obligado algunas veces a los patronos a dar trabajo a hombres que jamás habían sido empleados suyos, y la atmósfera general de tensión política no facilitaba las relaciones entre los expresos y los parados y aquéllos que los habían reemplazado desde hacía por lo menos dieciocho meses. La situación se complicó aún más por la rivalidad entre los sindicatos de la UGT y la CNT, que deseaban tener mejor fama los unos que los otros en el asunto de obtener trabajo para sus respectivos afiliados.

En Cataluña, los obreros metalúrgicos habían conseguido una jornada laboral de 44 horas semanales poco antes de la revolución de octubre. Durante 1935 tuvieron que trabajar 48 horas a la semana, sin que obtuvieran una subida de salarios como compensación. Tras las elecciones de febrero demandaron que les pagaran todas las horas que no les habían sido pagadas durante los pasados 15 meses y rechazaron una oferta de la Generalitat para que fueran compensados con una semana laboral de 40 horas con un promedio de salarios de 44 horas[178]. Los ferroviarios de toda España volvieron a presentar sus demandas de más altos salarios de los años 1931-33. Los ingresos de los ferrocarriles seguían siendo en 1936 tan bajos como en 1933. Las compañías ofrecieron mostrar sus libros para demostrar la imposibilidad de atender a tales demandas. Muchas redujeron sus servicios y se alegraron de que el Gobierno se hiciera cargo de ellos. En España, al igual que en otros países, el mundo de los negocios toleraba un cierto grado de socialización, con tal de que las industrias intervenidas fueran aquéllas que estuvieran a punto de ir a la bancarrota. En la primavera de 1936 los gobiernos de Azaña y Casares Quiroga hicieron todo lo que pudieron para mantener a los ferrocarriles en funcionamiento, a pesar de las dificultades presupuestarias con que más tarde tendrían que encararse[179].

Marcelino Domingo era ahora de nuevo ministro de Instrucción Pública, como lo había sido en el Gobierno provisional de 1931. Restableció la coeducación, que había sido repudiada durante el segundo bienio, y reanudó el programa de construcción de escuelas que había sido detenido virtualmente en 1935. En aquellos tiempos el mundo de la enseñanza estaba grandemente perturbado por el problema de los libros de texto. En 1932, con la primera oleada de entusiasmo, el ministerio había suprimido el uso de libros de texto exigidos en las escuelas secundarias. Los estudiantes podrían elegir entre varios, y en vez de ser sometidos a unos exámenes igualitarios, tendrían que someter sus cuader-

nos de notas a los maestros. Esto reflejaba la influencia de los métodos más progresivos de educación suizos y americanos en el modo de pensar de los republicanos, y también fue dispuesto con vistas a establecer clases limitadas a unos 30 alumnos. Pero, de hecho, el promedio era de más de 60. Los maestros pidieron clamorosamente el restablecimiento de los libros de texto, y la tendencia conservadora del segundo bienio había favorecido de todos modos los otros métodos. Mientras tanto, la supresión de los textos exigidos había llevado a la publicación de otros muchos nuevos. Se insistió a los maestros para que emplearan las nuevas facilidades y los editores acosaron en los pasillos a los diputados radicales conocidos por su buena disposición hacia los negocios. Como resultado, los estudiantes de las escuelas superiores urbanas se vieron obligados a comprar muchos libros, en busca de los nuevos capítulos que aparecían en cada uno de ellos, y a principios de 1936 hubo muchas quejas bien justificadas por el negocio que se estaba haciendo con los libros de texto[180].

El problema clerical inevitablemente se presentó en relación con el de las escuelas. Los diputados conservadores se oponían a la coeducación y aceptaron de mala gana la renovación del programa de construcción de escuelas. Sin embargo, tanto la Iglesia como el Gobierno estaban ansiosos por evitar la reavivación de las pasiones anticlericales de 1931. En Sevilla, las procesiones de Semana Santa se pudieron celebrar tranquilamente, vigiladas por numerosos policías destacados para asegurar el orden[181]. Cuando el presidente provisional, Martínez Barrio, marchó para Madrid, el cardenal Ilundain figuraba entre los dignatarios que fueron a despedirlo al tren. Usando la escasa información y las fuerzas limitadas bajo su mando, el Gobierno envió policías durante toda la primavera para proteger iglesias que los anticlericales amenazaron con quemar. Por su parte, la Iglesia evitó escrupulosamente hacer declaraciones políticas del tipo de las hechas por el cardenal Segura en 1931, y el Vaticano, que se negó a recibir a

Luis Zulueta como embajador en 1931, se apresuró a aceptarlo en 1936 cuando fue nombrado de nuevo por Azaña. Las escuelas de la Iglesia actuaron normalmente durante la primavera sin interferencias, exceptuando ocasionales atracos; pero el 20 de mayo se les ordenó que cerraran. El Gobierno declaró que hacía esto para evitar que fueran incendiadas, explicación que reconocía, en efecto, la creciente oleada de los sentimientos anticlericales y la incapacidad del Gobierno para controlar la situación. Los exámenes finales fueron suspendidos por la orden, y los padres católicos se apresuraron a enviar al Gobierno numerosas cartas de protesta[182].

Personalidades eminentes ajenas al Gobierno usaron su influencia para mantener la paz civil y las formas legales de la acción política. En marzo, Gil Robles, explicando su derrota electoral, condenó a los patronos que durante el segundo bienio habían reducido los salarios por espíritu vengativo. En abril, Manuel Giménez Fernández pidió en una junta de la minoría de la CEDA que los diputados se manifestaran en favor o en contra de la leal cooperación con el gobierno republicano. De los 115 diputados, 101 manifestaron su lealtad republicana, y en ese número había algunos que eran seguidores de Gil Robles[183].

El 2 de junio el doctor Marañón publicó un largo artículo en la primera página de *El Sol*, en el que deploraba los informes exagerados de la prensa extranjera sobre los desórdenes en España y atribuía dichos informes a reaccionarios asustados que huyeron al extranjero después del 16 de febrero y ahora debían justificar su precipitación. Condenó a las derechas por haber identificado el conservadurismo con la defensa de todos los intereses creados durante los dos años que ocuparon el poder. Amonestó a las izquierdas por el «tono antinacional» de su propaganda, e indirectamente se refirió a la glorificación de la Unión Soviética. Advirtió a los españoles en general que las reformas del Gobierno Azaña eran absolutamente necesarias para la modernización de Espa-

ña. Predijo meses de «severa fricción, a veces violenta», mientras esta modernización se llevara a cabo, y previno que si el Gobierno Azaña era derrotado, toda España quedaría dividida entre reacción y marxismo.

Miguel Maura también se adelantó con sus críticas y propuestas. En el número del 18 de junio de *El Sol*, comenzó una serie de artículos, el primero de los cuales, referente a los gobiernos Lerroux-Gil Robles, se titulaba sin ambigüedad «Una política de suicidas». Atacó duramente a las derechas por su política completamente negativa al deshacer la obra de las Cortes Constituyentes. Elogió a sus oponentes políticos, Azaña y su Izquierda Republicana, de quienes dijo que habían salvado a España de la anarquía a finales de 1935, haciendo que los trabajadores aceptaran el programa de reformas moderadas del Frente Popular. Pero ahora, cinco meses después, España sufría un grado sin precedentes de anarquía interna. Los «comités jacobinos» de los pueblos estaban contrarrestando los mejores esfuerzos de las Cortes y de los gobernadores civiles. La burguesía, asustada, comenzó a desertar de sus propios partidos políticos (los de Gil Robles, Martínez de Velasco, Lerroux y la Lliga Catalana), y a apoyar a un grupo juvenil (la Falange), cuyos miembros eran valientes e idealistas, pero que carecían de un ideal preciso, que derrochaban sus energías en choques callejeros, y que no podían esperar triunfar, excepto como resultado de una guerra civil. En vista de la gravedad de la situación, Maura pidió una «dictadura republicana». El presidente debería nombrar un Gobierno representando a todas las tendencias, desde el socialismo reformista al republicanismo conservador. Ese Gobierno restablecería el orden utilizando la guardia civil, permitiendo los mayores salarios compatibles con los costos de producción y las condiciones del mercado, proseguiría rápidamente con la reforma agraria, modernizaría las fuerzas militares, y finalmente, procedería a una reforma constitucional.

Tanto el noble doctor Marañón como el enérgico Miguel Maura no iban a ser profetas en su tierra en la primavera de 1936. Sus propuestas específicas dependían de un fortalecimiento de los poderes presidenciales que ni las derrotadas derechas ni la izquierda revolucionaria iban a conceder a Azaña. Muchos moderados, aun aprobando el programa del Frente Popular y temiendo el «infantilismo izquierdista» de los socialistas jóvenes, no podían concebir un Gobierno de unión nacional. Así, cuando preguntaron a Julián Besteiro si apoyaría a Azaña si éste requería los votos de la CEDA en una lucha contra la revolución comunista, replicó que jamás aceptaría una alianza con Gil Robles[184]. Ni las derechas ni las izquierdas estaban de humor para las críticas que se hacían sobre su conducta. Las derechas estaban lejos de creer que se habían equivocado al limitarse a deshacer la obra de las Cortes Constituyentes, y opinaban, por el contrario, que deberían haber redactado una nueva Constitución, y que si hubieran fusilado a los dirigentes de la revolución de Asturias, el Frente Popular jamás habría tenido la oportunidad de organizarse. Y en cuanto a las izquierdas, se hallaban intoxicadas por la creencia de que la historia estaba de su parte. Se aprovecharían del Gobierno republicano en tanto este llevara a cabo las reformas que deseaban y luego se harían cargo del poder en nombre del proletariado, cuando a su juicio hubiera llegado la hora. Habían elevado a Azaña a la presidencia, no para fortalecer su cargo, sino para apartar de la política activa al más capacitado dirigente «burgués». El Gobierno de Casares, y cualquier otro Gobierno republicano que le sucediera, existirían tan sólo gracias al apoyo de comunistas y socialistas en las Cortes. Mientras los Marañón y los Maura, los Besteiro y los Prieto hablaban de acabar con huelgas inútiles, suspendiendo los ataques contra las iglesias y de restablecer el orden público, los exaltados tanto de la derecha como de la izquierda se arremangaban las camisas. Cuando el débil Go-

bierno parlamentario burgués hubiera quedado desacreditado, el futuro sería de ellos.

Capítulo 12

SE AVECINA LA GUERRA CIVIL

CUANDO el doctor Marañón criticó públicamente a los emigrados que exageraban los desórdenes ocurridos en España, tenía razón en lo referente a aquéllos que con calenturientas imaginaciones hablaban de violación de monjas, de paralización del comercio, y del saqueo de las casas de los ricos; pero el presidente Azaña se cuidó de que fueran asignados policías de escolta a las principales figuras políticas, y muchos diputados conservadores se encontraban con que, al ir y venir de la capital, los dueños de los hoteles se mostraban temerosos de alojarlos. Diariamente ocurrían choques entre los trabajadores de la CNT y la UGT, entre falangistas e izquierdistas, entre la guardia civil y los campesinos. Las figuras responsables negaban los hechos en un sincero esfuerzo para tranquilizar la opinión pública y proteger el prestigio internacional de España. Ciertas regiones, especialmente Cataluña, gozaban de mayor orden público en la primavera de 1936 que otras veces en los pasados cinco años. Pero en toda la España central y meridional la atmósfera de odio de clases era casi palpable.

El 16 de junio las Cortes oyeron una segunda serie de acusaciones y contraacusaciones con referencia al estado del orden público. Gil Robles presentó un resumen estadístico de los desórdenes ocurridos en los cuatro meses transcurridos desde el 16 de febrero. Relacionó, entre otras cosas, 170 iglesias destruidas por incendios y 251 intentos fallidos de quema; 269 muertos y

1287 heridos por asesinato y choques callejeros; 133 huelgas generales y 218 huelgas parciales; varias otras agresiones, asaltos, incendios y tentativas en las que entraban toda categoría de delitos. El orador no estuvo muy acertado en la exposición de los hechos, y enfureció a los diputados del Frente Popular a quienes se dirigía por citar cifras en una situación en donde nada ni nadie podía garantizar la exactitud. La cifra de huelgas generales era increíble, aun teniendo en cuenta las rivalidades intersindicales, la indisciplina general de la masa laboral y los catastróficos resultados que tal número de huelgas generales (de haber sido efectivas) habrían producido en la economía. Casi igual de difíciles de aceptar eran las cifras sobre las iglesias destruidas total o parcialmente. Destruir una iglesia de piedra es una tarea formidable, y en el pasado había habido demasiados ejemplos de iglesias que se dieron como incendiadas sólo porque algún desalmado había pegado fuego a un montón de periódicos en los escalones. Basándose en estos argumentos, y en otros que eran menos razonables, las izquierdas rechazaron por completo el alegato con acusaciones de fascismo. Pretendieron que todos los muertos eran trabajadores indefensos o pistoleros contratados, y le acusaron de iniciar tal debate para denigrar a la República.

Poniendo en claro sus motivos, Gil Robles se refirió a sus visitas diarias al Ministerio de la Gobernación, a fin de obtener la liberación de los afiliados a la CEDA y a la JAP injustamente detenidos, y a la censura de prensa con la cual el Gobierno trataba de impedir que la opinión pública conociera el constante estado de desorden en el que vivía el país. Y replicando a los constantes epítetos de «fascista» de las izquierdas, advirtió a la mayoría del Frente Popular que jamás habría paz en España si ellos cortaban toda discusión razonable calificando a sus oponentes de fascistas.

Al final habló también Calvo Sotelo, dando énfasis a las provocaciones anarquistas al Gobierno, las caóticas confiscaciones de tierras, y lo que él pretendía que era una subida de salarios del

cien por ciento en la agricultura. Criticó el espíritu antimilitarista del Gobierno, en particular el decreto que permitía al ministro de la Guerra trasladar oficiales y cubrir las vacantes a voluntad. Aseguró a las Cortes que no conocía a un solo oficial que estuviera dispuesto a sublevarse contra el régimen republicano, pero que no quería negar la posibilidad de que algunos oficiales patriotas trataran de salvar a España de la anarquía. En un pasaje de su discurso se refirió al gobernador republicano de Oviedo, llamándolo «anarquista de fajín» y a Asturias, calificándola de provincia rusa. Tras dirigir varios insultos a funcionarios republicanos, el presidente de las Cortes tuvo que interrumpirle para recordarle el decoro apropiado a un Parlamento. Al replicar a Calvo Sotelo en nombre del Gobierno, Casares Quiroga le acusó de exagerar muchísimo las cosas y de incitar a la rebelión, y luego añadió que, en vista de las palabras que acababa de pronunciar el diputado, «si algo ocurría (que no ocurriría), haría a su señoría responsable de todo». A lo cual replicó Calvo Sotelo diciendo que era un hombre de anchas espaldas, y dispuesto a aceptar la responsabilidad que se le atribuyera[185]. Calvo Sotelo sería asesinado un mes más tarde. Los historiadores oficiales de la guerra civil han interpretado generalmente esta declaración de Casares Quiroga como una amenaza de asesinato, y la réplica de Calvo Sotelo como una heroica anticipación del martirio.

Los meses de junio y julio fueron testigos de acontecimientos verdaderamente revolucionarios tanto en las ciudades como en los campos. El primero de junio fueron a la huelga en Madrid unos 40.000 obreros del ramo de la construcción, así como 30.000 electricistas y reparadores de ascensores[186]. En dicha huelga, estaban implicados tanto los sindicatos de la CNT como los de la UGT, y la huelga se consideró en gran medida una prueba de fuerza entre ambos grupos sindicales. Madrid había sido históricamente territorio de la UGT, pero en el año pasado la CNT le había arrebatado muchos afiliados entre los trabajadores

madrileños. Como la huelga continuaba y no había salarios, los dirigentes de la CNT incitaron a sus partidarios a que actuaran según los principios del comunismo libertario. Los trabajadores comían en los restaurantes y se llevaban víveres sin pagar, mientras que los dirigentes de la UGT guardaban un embarazoso silencio y los tenderos se preguntaban si la revolución había llegado efectivamente ya[187]. El Gobierno había nombrado un jurado mixto especial para que arbitrara las demandas específicas. Hacia el 20 de junio, la mayoría de los patronos habían aceptado ya el jurado, y en la Casa del Pueblo los trabajadores de la UGT acordaron votar que se hiciera lo mismo, por la aplastante mayoría de 17 164 contra 510[188].

Pero la CNT decidió continuar la huelga, y los dirigentes de la UGT, a pesar del voto de los obreros que representaban, siguieron los dictados de la CNT. La lucha continuó entre bastidores. Edmundo Domínguez (en nombre de la UGT) arguyó que la continuación de la huelga ponía en peligro al régimen, mientras que los jefes cenetistas David Antona y Cipriano Mera (este último habría de convertirse más adelante en el jefe militar más importante producido por los anarquistas) apelaron a la unidad revolucionaria y recordaron la presión que se debía mantener contra los empresarios y el Gobierno. El 4 de julio, cuando la huelga llevaba ya seis semanas de duración, la UGT y *Claridad* aceptaron públicamente el arbitraje del jurado mixto. Los anarquistas se mantuvieron en sus trece, y los obreros socialistas, para evitar choques con sus camaradas proletarios, se presentaron en sus puestos de trabajo, pero no trabajaron[189]. Aun así, en la semana siguiente hubo algunas muertes en choques entre obreros de la CNT y de la UGT, y los conserjes de los edificios de oficinas de Madrid se negaron a manejar los ascensores, alegando que habían sido amenazados de muerte si hacían tal cosa.

La huelga del ramo de la construcción y de los ascensoristas fue un rudo golpe para el prestigio de Largo Caballero. Él había

tratado de convertirse en el portavoz de la unidad de la UGT y la CNT, y había estado hablando durante toda la primavera de Gobierno proletario. Las tácticas de la CNT en la huelga del ramo de la construcción asustaron a los socialistas de izquierda. Sus vacilaciones sobre la oferta de arbitraje mostró a los anarquistas su temor a perder influencia, y su decisión final de aceptar el arbitraje fue un reconocimiento de la ruptura del frente revolucionario. Para los anarquistas, Largo Caballero se había retirado ante una prueba revolucionaria de poder. Para los republicanos y socialistas se había mostrado incapaz de controlar a sus partidarios y temeroso a la vez de colaborar con el Gobierno o de atacarle de frente. El 30 de junio el Partido Socialista celebró elecciones para cubrir varios cargos del partido. Las afirmaciones de los grupos de Prieto y Largo Caballero sobre los resultados de la votación fueron muy diferentes; pero si uno suma los totales de todos los votos que ambas facciones daban como válidos, aparece claro que la marea se había vuelto contra Largo Caballero y empezado a regresar hacia los moderados de Prieto[190]. La clase media española había estado muy asustada por los comentarios de una posible dictadura de Largo Caballero. Una de las muchas trágicas ironías del estallido de la guerra civil es que ocurrió pocas semanas después de la primera tangible evidencia de que la oleada revolucionaria dentro del Partido Socialista comenzaba su reflujo.

La huelga del ramo de la construcción, por haber ocurrido en la capital, atrajo, naturalmente, la atención nacional. En el mismo período estaban ocurriendo acontecimientos revolucionarios en los campos de Salamanca, Extremadura y Andalucía a los que se dio menos publicidad. Uno de los principales puntos del programa del Frente Popular había sido una renovada y más rápida reforma agraria. Tras la victoria del 16 de febrero, los dirigentes socialistas de la Federación de Trabajadores de la Tierra anima-

ron a los campesinos a apoderarse de las tierras, anticipándose a una reforma legal.

Los retrasos del primer bienio y la total ausencia de progreso en el segundo bienio habían provocado una tremenda presión para una acción rápida. En todas las provincias latifundistas, los colonos intrusos iban ocupando tierras, casi sin llevar semillas, herramientas, o saber qué es lo que aquellas tierras podrían producir. La cría de ganado estaba desorganizada; los terratenientes y arrendatarios, recordando los incendios y muertes de 1933, se trasladaron a las ciudades; las federaciones locales prometieron trabajo a los parados. Hacia mediados de junio miles de familias campesinas iban vagando por las carreteras. Gitanos y limpiabotas se apuntaron para trabajar en la siega, sabiendo que la jornada laboral era de siete horas y media y habría unos salarios superiores en un 30 por ciento a los del año anterior. En Badajoz el censo de segadoras disponibles pasó de 200 en 1935 a 1800 en julio de 1936. Como el uso de máquinas estaba prohibido mientras hubiera trabajadores parados, los propietarios se vieron obligados a aceptar un mayor número de los que necesitaban y a dar albergue a millares de personas errantes. Los campesinos que habían decidido trabajar un campo por su cuenta no oponían resistencia cuando la guardia civil les expulsaba de aquellas tierras, volviendo a instalarse en ellas al día siguiente. Los lindes de propiedad y la autoridad se esfumaron. Una elemental hambre de tierra y una fe patética en el advenimiento del reparto de ella agitó como un huracán al campesinado español en la primavera de 1936, al igual que había ocurrido con los zapatistas en México en 1917, los campesinos ucranianos en el mismo año, o los campesinos cubanos en 1959. En vísperas de la guerra civil no había tal complot comunista como han pretendido la mayoría de los historiadores oficiales de España; pero en los campos de la España occidental y meridional, una profunda revolución agraria había comenzado verdaderamente en junio[191].

Desde el momento de la victoria electoral del Frente Popular, los oficiales reaccionarios y monárquicos comenzaron a planear una sublevación militar. Sabían muy bien que el ejército no estaba preparado para apoderarse del poder, pero estaban absolutamente convencidos de que España sería comunista en cuestión de pocos meses. Como los militares de todos los países, pensaban que, en tiempos de agitación, sobre ellos caía la última responsabilidad de salvación de la nación como tal. En su modo simplista de ver los acontecimientos, el ejército había salvado a España del comunismo en 1917, y era su deber patriótico el volver a salvarla. Muchos de ellos eran miembros de la Unión Militar Española (UME), fundada por el comandante Bartolomé Barba Hernández a finales de 1933. Eran hombres que se habían sentido ofendidos por las reformas de Azaña y que quedaron muy confusos por el fracaso de la sublevación de Sanjurjo. La UME no era exclusivamente una organización reaccionaria, pues hubo un tiempo en que incluyó a cierto número de oficiales que más tarde lucharon a favor de la República durante la guerra civil, como el general José Miaja y el comandante Vicente Rojo. Pero sus dirigentes principales eran monárquicos como Goded, Fanjul, Valentín Galarza, Orgaz y Barrera, todos comprometidos en el caso Sanjurjo y todos ellos confabulados para un futuro ataque mejor organizado contra la República. En cuanto al comandante Barba, estaba obsesionado por su odio contra Azaña, contra el que había fraguado la calumniosa historia de que no se hicieran prisioneros y «que los tiros se dispararan a la barriga», en el asunto de Casas Viejas.

Los preparativos activos para un levantamiento comenzaron con varias reuniones celebradas en marzo en Madrid, dispuestas especialmente por oficiales que habían sido colaboradores íntimos del general Sanjurjo en la sublevación de 1932[192]. Sanjurjo vivía entonces en Portugal; su prestigio personal y su antigüedad lo convertían de nuevo en el jefe natural, y al igual que en

1932, los planes detallados fueron hechos en su nombre por el coronel Valentín Galarza. Los generales Franco y Mola estuvieron presentes en las reuniones de Madrid, pero Franco no quiso comprometerse, mientras que Mola se convirtió rápidamente en la cabeza activa de la conspiración[193].

El general Emilio Mola Vidal fue el último director general de Seguridad de la Monarquía. Era uno de los que aconsejaron al rey que abandonara España, y los monárquicos no habían olvidado los muchos detalles poco halagadores que había revelado al publicar sus memorias. A principios de 1932 pareció que el Gobierno le iba a pasar a la reserva. Sin embargo, dada su reputación de brillante inteligencia y de relativo liberalismo, y como no estuvo mezclado en la sublevación de Sanjurjo, pareció ser uno de los generales antiguos más leales.

En la primavera de 1936 fue trasladado del mando del ejército de Marruecos al Gobierno militar de Pamplona. Con Sanjurjo todavía en Portugal, Goded en las Baleares y Franco sin querer comprometerse, el nuevo nombramiento de Mola fue un golpe de suerte para los conspiradores. Porque aunque el general no era monárquico, había llegado a sentir un odio violento contra Azaña a causa de las reformas militares de este último. Y ahora era el jefe militar en el corazón del territorio carlista, la única región de España en donde los conspiradores podían contar con un cierto grado de apoyo popular. Durante los meses de primavera, Mola tuvo los hilos entre sus manos. Valentín Galarza era su enlace con los oficiales monárquicos y con Sanjurjo. El teniente coronel Yagüe, de la Legión Extranjera, era su enlace con los oficiales de mentalidad falangista, y potencialmente con el general Franco, que había sido para Yagüe el idolatrado superior de las campañas africanas de la década de los 1920. Don Raimundo García (editor de *El Diario de Navarra*) y don Agustín Lizarza eran sus emisarios civiles entre los carlistas. La Unión Militar Española se mostró deseosa de ayudar, y se puso en contacto con el

general Sanjurjo por su cuenta. Santiago Martín Báguenas, jefe de la policía de Madrid, mantenía a Mola bien informado de las actitudes dentro del Gobierno y entre los oficiales del Estado Mayor.

Mola disfrutaba con la atmósfera de conspiración; pero se veía asediado por numerosos problemas. El general Gonzalo Queipo de Llano, antiguo republicano y pariente político de Alcalá-Zamora, se unió a la conspiración después de que el presidente fuera destituido de modo tan poco ceremonioso. Pero Queipo de Llano era un bocazas, que invitaba a adherirse a la conspiración a las personas más inverosímiles, como Miguel Maura. Los oficiales de carrera, especialmente los de la UME, querían que el levantamiento fuera dirigido tan sólo por los militares. Pero Calvo Sotelo, el destacado diputado monárquico, y los varios dirigentes carlistas que proporcionaban buena parte del dinero, tenían que ser consultados. Ciertos generales que figuraban en la conspiración desde el principio, y que eran viejos camaradas de Sanjurjo, demostraron en cambio ser muy pesimistas respecto a las posibilidades de éxito. Los generales Villegas y Fanjul, designados para preparar la sublevación en Madrid, se daban cuenta del aislamiento en que se encontraban, no sólo con respecto a las tropas bajo su mando, sino de muchos de sus compañeros de profesión. El hermano de Mola envió pesimistas informes desde Barcelona durante la primavera. Según las memorias de sus enlaces carlistas, durante buena parte del mes de junio el propio Mola se sintió deprimido ante la perspectiva de una terrible guerra civil, si por alguna razón el golpe no tenía un éxito inmediato. José Antonio, que estaba en contacto con Mola desde su celda de la prisión de Alicante, aprobó una sublevación militar si había de ser apoyada por el pueblo[194]. Nadie sabía mejor que Mola cuán utópica era esta condición para que él la aprobara. Los carlistas se mostraban difíciles porque exigían que sus tropas fueran organizadas por separado y que se ondeara la bandera monárquica.

Eran el apoyo civil más fuerte con que contaba Mola, y éste no se podía permitir el lujo de romper con ellos. Pero sabía que fuera de Navarra sería fatal alzarse contra la República en nombre de la Monarquía.

A pesar de estas dificultades, la conspiración estaba bien organizada hacia finales de junio, y habían sido asignados generales jefes para cada región militar. Sanjurjo aprobó los planes de Mola. La UME y la Falange presentaron sus propias demandas, más no había duda de que participarían.

El general Franco seguía siendo inseguro; pero, aun deseando mucho su colaboración, los conspiradores estaban decididos a actuar con él o sin él. La sublevación habría de tener lugar entre el 10 y el 20 de julio. Calvo Sotelo ratificó los planes y tenía una cita para almorzar con Gil Robles el día 14, para ver si en el último momento se podía convencer a éste de que se alineara junto con los carlistas y monárquicos comprometidos.

Durante los dos primeros meses en el cargo, el Gobierno Azaña procedió cautamente a redistribuir un cierto número de mandos militares clave. Tras enviar a los generales Goded y Franco a las Baleares y Canarias, respectivamente, Azaña decretó que el ministro de la Guerra podría modificar los mandos por su propia iniciativa, sin seguir las reglas usuales de antigüedad. Azaña nombró ministro de la Guerra al general Masquelet, fiel republicano que ya había servido tanto a él como a Lerroux en el cargo de jefe del Estado Mayor. El general Sebastián Pozas, el investigador militar que reconoció la inocencia de Azaña tras los acontecimientos del 6 de octubre en Barcelona, se convirtió en inspector general de la guardia civil. El general José Miaja (destinado a Madrid), los generales Molero y Batet (destinados, respectivamente, a Valladolid y Burgos) y el general Núñez de Prado (jefe de las pequeñas fuerzas aéreas) eran todos ellos adictos a la República. Nombrando poco a poco a conocidos republicanos para los puestos clave, el Gobierno esperaba contrarrestar posi-

bles conspiraciones sin tener que recurrir a una purga general del cuerpo de oficiales. Con la fatal excepción de Mola, todos los nombramientos fueron hechos con gran sagacidad.

Desde principios de abril en adelante, el Gobierno recibió numerosas advertencias de procedencia tanto civil como militar. Como réplica a las actividades de la UME, los oficiales republicanos formaron la Unión Militar Republicana Antifascista (UMRA). Los hombres más prominentes de esta organización eran el general Núñez de Prado, el coronel José Asensio Torrado, uno de los oficiales más brillantes del Estado Mayor, y el comandante Pérez Farras, militar catalán que dirigió la breve resistencia de la Generalitat en octubre de 1934. Muchos oficiales jóvenes del Estado Mayor, del cuerpo de artillería y de la guardia de asalto pertenecían a la UMRA. A finales de la primavera todo el mundo sabía en Madrid que la UME había emprendido una campaña de asesinatos contra la UMRA y que los miembros de esta última habían jurado replicar de la misma manera.

Los oficiales de Estado Mayor de la UMRA mantenían al Gobierno informado de los esfuerzos del general Fanjul, y sus actividades eran las principales razones del pesimismo del general con respecto a la posibilidad de un rápido éxito en Madrid. Alonso Mallol, director general de Seguridad, comunicó las fuertes sospechas que sentía de Mola, y Prieto advirtió públicamente al Gobierno en su discurso de Cuenca. Algunos de los diputados conservadores a los que Calvo Sotelo hizo proposiciones informaron al Gobierno de los esfuerzos de aquél para atraérselos. El alcalde de Estella, que era un nacionalista vasco, advirtió a Casares Quiroga específicamente de la reunión celebrada por Mola con los dirigentes carlistas en el cercano monasterio de Irache el 16 de junio[195]. El 23 de junio el general Franco escribió al jefe del Gobierno para advertirle que los frecuentes traslados de los altos oficiales constituía una amenaza para la buena disciplina del ejército.

Pero en junio Casares Quiroga era un hombre enfermo, preocupado por la huelga de la construcción y patéticamente ansioso por ganarse la amistad del ejército. No hizo caso de las advertencias de Prieto, que calificó de «fantasías de la menopausia masculina», y proclamó públicamente su confianza en el general Mola. Al enterarse de que un grupo de oficiales de caballería que habían esperado participar en la Olimpiada de Berlín no podían ir por falta de fondos, hizo que el Ministerio de la Guerra pagara sus gastos hasta Alemania, de donde regresaron a la zona insurgente a finales de julio, tras el estallido de la guerra civil. Los socialistas de izquierda hablaban de armar al pueblo para proteger al Gobierno contra un golpe militar; pero ésta era la última cosa en que pensaría un Gobierno republicano, cuando los obreros madrileños de la construcción estaban poniendo en práctica el comunismo libertario a expensas de los tenderos locales, y la Juventud Socialista Unificada pedía la formación de un ejército rojo.

En el palacio de Oriente, el presidente Manuel Azaña aseguraba tanto a políticos como a periodistas que la presente efervescencia pasaría rápidamente y de vez en cuando se dejaba ver en conciertos y exposiciones de arte, imperturbable y digno. En cuanto a la clase media urbana, y la masa de republicanos y socialistas, ciertamente no actuaban como si anticiparan una guerra o la revolución. A primeros de julio miles de esposas se llevaron a sus niños a sus casas de veraneo, mientras que sus esposos se quedaban en Madrid, Barcelona y Bilbao. Miles de niños partieron para los campamentos de vacaciones, algunos bajo auspicios privados, otros bajo los de los sindicatos o de la Iglesia. Estas familias habrían de verse separadas inmediatamente por los accidentes geográficos de la guerra civil. Si los padres, los obreros socialcatólicos o los dirigentes de los campamentos de la UGT hubieran anticipado la guerra, estos campamentos jamás se hubieran abierto en la primera semana de julio; ni los oficiales de caba-

llería habrían ido a Berlín, ni Largo Caballero habría asistido a una conferencia laboral de la Segunda Internacional en Londres. Muy probablemente, la mayoría de los españoles no estaban preocupados en julio acerca de la posibilidad de un pronunciamiento, porque no había ocurrido ninguno en febrero, cuando todo el mundo esperaba un alzamiento militar tras las elecciones[196].

Sin embargo, entre los militares jóvenes la tensión era muy aguda. El domingo 12 de julio, por la tarde, el teniente José Castillo, de la guardia de asalto, fue asesinado a tiros por un pelotón de cuatro falangistas. La víctima era un miembro preeminente de la UMRA e instructor de la milicia de la juventud socialista. Sus camaradas decidieron en cuestión de horas hacer una venganza espectacular. Sin tener en cuenta ningún partido político o programa, y sin reflexionar en las grandes repercusiones de su acto, decidieron asesinar a un jefe derechista importante.

El Gobierno, durante la primavera, había empezado a proporcionar escolta armada a los diputados prominentes de todos los partidos. José Calvo Sotelo era de los que sospechaban, a principios de julio, que algunos de los hombres de su escolta no eran de fiar. Había manifestado sus sospechas a Gil Robles, quien le aconsejó que hablara con Juan Moles, ministro de la Gobernación. Este último inmediatamente cambió los dos guardias de quienes Calvo Sotelo sentía sospechas, y el cambio tuvo lugar el mismo 12 de julio. Aquella noche, cuando los guardias de asalto amigos de Castillo partieron para matar a un prominente político derechista, buscaron primero a Antonio Goicoechea, jefe de Renovación Española, y al no encontrarlo, fueron en busca de Gil Robles, que estaba en Biarritz pasando el fin de semana. Entonces se trasladaron al departamento de Calvo Sotelo en la calle de Velázquez.

Los policías que estaban de guardia en la puerta no querían dejarles pasar; pero como habían venido en un vehículo oficial y

mostraron documentación de la guardia civil demandando el arresto de Calvo Sotelo, les permitieron entrar. Calvo Sotelo, aunque inmediatamente sintió sospechas, consintió en partir con ellos al ver los papeles, no sin decir a su esposa que telefonearía inmediatamente si no le volaban los sesos. Era un hombre valiente y fuerte que sospechaba la traición, y que psicológicamente estaba preparado para aceptar el martirio. Salió entre dos amigos del teniente Castillo, para quienes él representaba el fascismo español que había asesinado a su camarada. Lo mataron a tiros, y antes del amanecer arrojaron su cuerpo, con señales de lucha violenta, en el depósito de cadáveres de Madrid; no fue identificado hasta última hora de la mañana siguiente.

El Gobierno condenó inmediatamente este brutal asesinato de uno de los principales dirigentes de la oposición. Martínez Barrio, presidente de las Cortes, declaró que aquel mismo día había firmado una orden para la puesta en libertad de Calvo Sotelo, en el caso de que hubiera sido detenido, tal como se rumoreaba. El ministro de la Gobernación anunció el arresto de quince oficiales de la guardia de asalto de la compañía de Castillo y prometió que serían inmediatamente juzgados por tribunales civiles. Así no habría en absoluto ninguna clase de «tapadera» por parte del Gobierno, ni protección a sus propios miembros por una fuerza militar. Pero las derechas no se iban a apaciguar por eso. Recordando el cambio de frases violentas entre Calvo Sotelo y Casares Quiroga durante el debate sobre orden público, muchos acusaron al Gobierno de estar complicado en el crimen[197]. Los oponentes menos violentos consideraban que el Gobierno debía haber fusilado a los guardias de asalto culpables sin alharacas sobre procedimientos legales. Para todo aquél que no fuera un ciego partidario de las izquierdas era intolerable que un jefe de la oposición fuera asesinado por oficiales uniformados conduciendo un vehículo del Gobierno. Para los creyentes en un gobierno democrático y civil, era igualmente intolerable que la Falange y la

UME llevaran con impunidad una campaña de terror contra los oficiales izquierdistas. Los asesinatos del 12 de julio del teniente Castillo y de José Calvo Sotelo horrorizaron a la opinión pública mucho más que cualesquiera de los numerosos desórdenes y muertes ocasionales habidos desde febrero.

Capítulo 13

EL PRONUNCIAMIENTO DEL 17-20 DE JULIO

LOS asesinatos del teniente Castillo y de José Calvo Sotelo coincidieron con las últimas etapas de los planes del general Mola. Los generales y coroneles que habían de apoderarse del mando en cada región, gobierno o comandancia militar ya habían recibido sus designaciones, y todos sabían que el alzamiento habría de ocurrir entre el 10 y el 20 de julio[198]. Los carlistas aún insistían en que se ondeara la bandera monárquica, se disolvieran todos los partidos políticos y se creara un Estado corporativo. El general Mola, en Irache, les sometió un plan, el cual, bajo un directorio completamente militar, incluía la conservación del régimen republicano y la separación de la Iglesia y el Estado, con libertad para todas las religiones. El enconado debate fue sometido al arbitraje del general Sanjurjo el 9 de julio. Sanjurjo, que era hijo de un general carlista, se mostraba mucho más inclinado hacia la Comunión Tradicionalista que Mola. Sin embargo, en su carta de arbitraje insistía en un directorio completamente militar, habló de acabar con las actividades (no con la existencia) de los partidos políticos, y evitó toda referencia a una Monarquía o un Estado corporativo[199].

En las islas Canarias, el general Franco se estaba preparando para hacerse cargo del mando que le habían asignado en Marruecos. El 11 de julio salió de Londres un avión particular inglés que

habría de llevarle a Casablanca, y que estuvo a su disposición en Tenerife el 14 de julio. El avión, así como su piloto, el capitán Bebb, habían sido contratados por Luis Bolín, corresponsal del *ABC* en Londres[200]. El general Franco se aseguró de este modo el transporte sin tener que depender de las fuerzas aéreas españolas, que en su mayoría eran opuestas al alzamiento. En la extremidad oriental de España era necesario un cambio de mando en el último instante. Al general Goded se le destinó para que fuera de las islas Baleares a Valencia, pero le pidieron que cambiara Valencia por Barcelona.

El asesinato de Calvo Sotelo precipitó la fijación del momento preciso del alzamiento: las cinco de la tarde del viernes en Marruecos, para ser seguido dentro de las 24 horas por todas las guarniciones más importantes de la península. Marruecos era verdaderamente el talón de Aquiles de la República española. Los socialistas de izquierda habían pedido de vez en cuando el fin del régimen colonial. Azaña, tanto en 1931 como en 1936, había nombrado jefes civiles y militares de gran integridad y conocidos por su lealtad a la República; pero virtualmente no se había hecho nada para mejorar las condiciones de vida de las masas o para acabar con el dominio de los oficiales de carrera, los administradores coloniales y los contrabandistas de armas y de tabaco, que habían florecido en Marruecos durante décadas. La mayoría de los oficiales de rango intermedio, capitanes y comandantes, o eran partidarios del levantamiento o habían sido efectivamente intimidados por los que lo eran. La guarnición de Melilla se apoderó de los edificios públicos, incluyendo la emisora de radio, e inmediatamente proclamó el estado de guerra. La Legión Extranjera se apoderó de las Casas del Pueblo de Melilla y Tetuán, fusilando a todos los jefes sindicales y todas las personas encontradas con armas encima o sospechosas de pensar en resistir. En la base aérea, los aviadores resistieron al alzamiento du-

rante varias horas, tras lo cual muchos fueron fusilados y el resto encarcelados.

El alzamiento cogió de sorpresa a los oficiales republicanos, así como al Gobierno de Madrid. En respuesta a sus llamadas telefónicas, Casares Quiroga les animó a resistir, les prometió refuerzos de tropas leales, e insistió en que la revuelta era un asunto puramente local. Los generales Gómez Morato y Romerales, así como el alto comisario, Plácido Álvarez Buylla, leales al Gobierno, eran individuos valientes, pero se encontraban completamente aislados de las verdaderas palancas del poder. Fueron detenidos el primer día, y luego fusilados. El día 18, los obreros de Tetuán y Melilla intentaron una huelga general, que fue fácilmente quebrantada por las guarniciones insurgentes y la población indígena[201].

Mientras tanto, el general Franco declaraba el estado de guerra en Tenerife y se dirigió por radio para explicar los motivos del alzamiento militar. Declaró que la anarquía y las huelgas revolucionarias estaban destruyendo a la nación; que la Constitución estaba prácticamente suspendida; que ni la libertad ni la igualdad sobrevivirían en tales circunstancias; que el regionalismo estaba destruyendo la unidad nacional, y que los enemigos del orden público habían calumniado sistemáticamente a las fuerzas armadas. El ejército no podía seguir contemplando impasible estos vergonzosos acontecimientos, y se sublevaba para llevar la justicia, la igualdad y la paz a todos los españoles. El ejército no anularía las mejoras sociales recientemente ganadas por el pueblo, ni actuaría con espíritu vengativo. Garantizaría a España «por primera vez, y en este orden, la trilogía de fraternidad, libertad e igualdad [202]». El general emprendió el vuelo en dirección a Casablanca, en el Marruecos francés, cargó combustible y recibió noticias del completo y rápido éxito en la zona española de protectorado, y el 19 de julio reemprendió el vuelo

para hacerse cargo del mando supremo del ejército de Marruecos.

El sábado 18 tuvieron lugar una serie de rápidos y afortunados levantamientos en Navarra, Aragón, Castilla la Vieja y Andalucía. En Pamplona, los requetés se echaron en masa a la calle, despertando enorme entusiasmo entre los elementos católicos y carlistas y ahogando en sangre la breve resistencia de la Casa del Pueblo. El jefe local de la guardia civil, Rodríguez Medel, se negó a sublevarse y fue muerto a tiros. En Zaragoza, el general Miguel Cabanellas proclamó el estado de guerra en nombre de la República. Aunque estuvo en contacto con los conspiradores durante meses, Cabanellas era un antiguo republicano, masón, y con cierto matiz liberal; así que los oficiales jóvenes más ardientemente comprometidos con el alzamiento irrumpieron en su despacho armados, para asegurarse de que él seguiría adelante con la sublevación tal como estaba planeado. En las calles, guardias de asalto dirigidos por oficiales falangistas dispersaron la escasa resistencia de los obreros en el centro de la ciudad. El gobernador civil, que era un republicano de Azaña, y que se había ganado una excelente reputación por minimizar los desórdenes falangistas e izquierdistas, fue detenido [203]. Madrid envió inmediatamente al general Núñez de Prado, de las fuerzas aéreas, amigo íntimo de Cabanellas, para conferenciar con éste. Fue detenido nada más descender del avión en Zaragoza y más tarde fue fusilado.

El comandante general de la región militar de Burgos era Batet, leal al régimen republicano. El 16 de julio y por su propia iniciativa, Batet se entrevistó con Mola y le preguntó bruscamente si estaba complicado en los planes para un pronunciamiento. La entrevista fue muy desagradable y no produjo resultados tangibles [204]. El general Batet hizo detener al general González de Lara y lo envió a Madrid para una acción disciplinaria. Sin embargo, la mayoría de los altos oficiales de Burgos for-

maban parte de la conspiración. A las dos de la madrugada del domingo 19 de julio, el general Dávila declaró el estado de guerra, en presencia de los funcionarios civiles convocados a este propósito. Declaró que el ejército se sublevaba para salvar a la República, y la mayoría de los presentes, pensaran lo que pensasen interiormente, parecieron creer en su palabra. El general Batet ya estaba detenido y más tarde sería ejecutado [205]. El mismo trágico destino aguardaba al general González de Lara en el otro lado, en donde fue sacado del tren en Guadalajara por la milicia del Frente Popular.

En Valladolid, en la tarde del día 18, los generales Saliquet y Ponte, miembros de la conspiración, detuvieron y más tarde fusilaron a su superior en el mando, el general Molero. Valladolid contaba con unos importantes depósitos y talleres de reparación de los ferrocarriles, cuyo personal lo constituían obreros socialistas. Una combinación de la guardia de asalto y de falangistas se apoderó de los principales dirigentes socialistas al ocupar la Casa del Pueblo aquel atardecer. Hubo algunos tiroteos durante la noche, pero el domingo 19 la ciudad estaba firmemente en manos de los militares insurgentes[206]. En Salamanca, en la mañana del domingo, los militares instalaron ametralladoras en el centro de la Plaza Mayor y proclamaron el estado de guerra en presencia de los centenares de salmantinos que estaban paseando bajo las arcadas. Alguien gritó «¡*Viva la República*!», ante lo cual se ordenó a los soldados que hicieran fuego; resultaron una media docena de personas muertas y un número no precisado de heridos. La plaza fue desalojada inmediatamente y la ciudad cayó rápidamente bajo el control militar. En otras capitales de provincia de Castilla, Palencia, Zamora y Ávila, el estado de guerra cogió a la población completamente por sorpresa, y en cada caso, la rápida ocupación de la Casa del Pueblo y el fusilamiento de las personalidades izquierdistas conocidas puso a las ciudades bajo control.

En Castilla la Vieja la población rural era generalmente conservadora o apolítica. El poco desarrollo industrial hacía fácil apoderarse de la Casa del Pueblo y de los suburbios «rojos» en donde era probable hallar resistencia. En Andalucía, sin embargo, aunque los insurgentes ganaron igualmente rápidas victorias gracias a la sorpresa y a su audacia, la pacificación fue más difícil, porque la población era en gran medida anarquista, antimilitarista y anticlerical [207]. En Algeciras y Córdoba los trabajadores pidieron el reparto de armas tan pronto como se recibieron noticias de la sublevación de Marruecos. Los gobernadores civiles se las negaron, dando como razones las declaraciones de lealtad recibidas de los comandantes militares locales, así como su falta de atribuciones para disponer tal cosa sin recibir órdenes de Madrid. Horas más tarde, los militares se sublevaron, estableciendo su control rápidamente gracias al fuego de las ametralladoras. Sin embargo, se vieron obligados a matar a centenares de individuos de la canalla, que insistieron en resistir a las armas modernas con navajas y pechos desnudos.

En Cádiz se proclamó el día 19 la huelga general, y elementos de la guardia de asalto distribuyeron armas. El gobernador garantizó la lealtad de los oficiales locales para impedir que fueran linchados. Al día siguiente la guarnición se sublevó y en unas pocas horas sangrientas acabó por controlar la ciudad. En Málaga sucedió lo contrario. En la noche del 17, mucho antes de que hubiera ocurrido ningún otro levantamiento en la península, el general Patxot hizo que sus tropas ocuparan el centro de la ciudad sin hacer mucho ruido. A la mañana siguiente, sin embargo, las hizo regresar a sus cuarteles. Durante la tarde y la noche del 18 atendió los ruegos que el Gobierno de Madrid estaba haciendo por teléfono, desesperadamente, para que los generales apartaran a España del borde de la guerra civil. El día 19 los trabajadores rodearon los cuarteles. Valiéndose de dinamita y de ame-

nazas de prender fuego a los edificios, lograron la rendición de la guarnición a un destacamento leal de guardias de asalto.

En Huelva y Granada el alzamiento tuvo éxito, a costa de una gran matanza entre el proletariado; Jaén permaneció en manos republicanas. Pero la clave del control de Andalucía era Sevilla, cuya captura habían asignado los conspiradores al general Queipo de Llano. Queipo era entonces jefe de los carabineros (policía fronteriza), y apareció en Sevilla a última hora de la tarde del día 17, en apariencia en visita de inspección. En la tarde del sábado, de un modo rápido y poco ruidoso detuvo al comandante jefe de la división, general Villa-Abrille, al gobernador civil y al jefe de la policía. Se esperaba que los guardias de asalto fueran leales al Gobierno, así que el primer movimiento militar de Queipo fue neutralizarlos utilizando a unos 200 soldados, cuyos jefes eran miembros de la conspiración. Hizo desarmar a los guardias de asalto y ocupar el Ayuntamiento antes de que en la ciudad se supiera lo que estaba pasando.

A primeras horas de la noche los trabajadores convocaron una huelga general. Durante aquélla y los días que siguieron, Queipo estableció su dominio de la ciudad por una combinación de audacia, terror y propaganda. Sus soldados, vestidos con pantalones bombachos y con la cara embadurnada con agua de castañas, para que parecieran moros, hicieron incursiones armados con ametralladoras y disparando desde camiones que recorrían rápidamente las barriadas obreras. Mientras tanto, el general hablaba por radio con frecuencia, para decir a los sevillanos que el alzamiento había triunfado en todas partes, que él estaba por completo a favor de las reformas sociales de la República, y que no vacilaría en fusilar a cualquiera que fuera lo bastante loco como para no aceptar al nuevo régimen inmediatamente[208]. Periodistas de la época, admiradores suyos, y los historiadores nacionalistas desde entonces, han escrito elocuentemente sobre la extraordinaria victoria de Queipo de Llano en una de las ciudades más

«rojas» de España. Dado que contó con la ventaja de las detenciones por sorpresa y de poseer los únicos camiones y armas modernas disponibles, esta hazaña militar no parece particularmente muy destacada. Pero en la logística de la guerra, tal como se desarrolló en las semanas siguientes, la rápida captura de Sevilla fue una de las ventajas más grandes de que gozaron las armas insurgentes.

Los acontecimientos más cruciales de los dos primeros días tuvieron lugar en las dos ciudades más importantes del país: Madrid y Barcelona. En Madrid, los conspiradores habían planeado que el general García de la Herrán se apoderara del campamento del ejército en Carabanchel y que el general Fanjul tomara la ciudad desde dentro, partiendo del cuartel de la Montaña, situado muy cerca de la plaza de España y de un extremo de la Gran Vía. Cuando en la tarde del viernes llegaron las noticias del alzamiento de Marruecos, la UGT y la CNT pidieron inmediatamente la distribución de armas. Durante todo el sábado el Gobierno no supo qué decisión tomar; pero en la tarde del sábado, un grupo de jóvenes oficiales, dirigidos por el teniente coronel Rodrigo Gil, del arma de artillería, distribuyeron unos 5000 fusiles. Mientras tanto, por razones aún no del todo claras, los conspiradores vacilaron; aunque sin duda alguna tenían una razón: la evidente hostilidad de una gran proporción de sus propios soldados y de los oficiales que eran sus compañeros de armas. A primeras horas del domingo, el general García intentó apoderarse del campamento, fracasó y fue muerto antes de que pudiera huir con los pocos oficiales que estaban dispuestos a seguirle a Madrid. En Getafe y en Cuatro Vientos la artillería leal y los oficiales del arma de aviación derrotaron a los rebeldes. Dentro del cuartel de la Montaña, el general Fanjul fue incapaz de tomar una actitud decidida. Ordenó que las ametralladoras dispararan contra los obreros que empezaban a rodear el edificio, pero no trató de romper el asedio. Sospechaba que muchos de

sus oficiales no eran favorables a su declaración del estado de guerra. Y siguió esperando que le llegaran refuerzos de Carabanchel, de Getafe y de Cuatro Vientos, lugares todos ellos en donde la rebelión había sido sofocada[209].

A las 5 de la mañana del domingo 19 de julio, el general Fernández Burriel sacó varios batallones de la cuarta división a las calles de Barcelona, colocándose a favor del alzamiento. Los insurgentes dominaron rápidamente las plazas principales (de Cataluña, España y de la Universidad), apoderándose de la Telefónica y de varios locales universitarios al grito de ¡Viva la República, compañeros! Pero los generales Llano de la Encomienda y Aranguren, junto con la mayor parte de los componentes de las guardias civil y de asalto, así como las fuerzas aéreas, permanecieron leales al Gobierno[210]. A las 8,45 el general Burriel telefoneó a su superior, el general Goded, que había logrado triunfar rápidamente en Palma de Mallorca, y del que se esperaba que emprendiera el vuelo en dirección a Barcelona, para hacerse cargo del mando. Burriel habló con gran entusiasmo, despertando así las sospechas de Goded, que acababa de oír a Radio Barcelona proclamar el fracaso del levantamiento y relacionando las unidades militares leales de la ciudad.

El general Goded, sin embargo, se dirigió hacia la capital catalana en el hidroavión Savoia que le estaba esperando en el puerto de Palma. Volando ya sobre Barcelona no recibió los esperados saludos debidos a un general que llegaba; pero amaró apresuradamente en el puerto y se dirigió inmediatamente al cuartel general de la IV División. Durante la tarde, los mossos catalanes y los guardias civiles leales sitiaron el hotel Colón (en la plaza de Cataluña) con las pocas piezas de artillería de que disponían. Los obreros anarquistas penetraron en tromba en el edificio, con un costo tremendo en vidas, mientras las tropas leales destruían los nidos de ametralladoras en varios puntos a lo largo de las encrucijadas principales. Desde la reconquistada plaza de Cataluña, los

cañones fueron llevados frente al cuartel general de Goded. A las cinco de la tarde, la lucha había terminado. El teniente coronel Pérez Farras, que mandó las tropas en la noche del 6 de octubre de 1934, dirigía ahora las tropas a las que se rindieron el general Goded y su Estado Mayor. Los oficiales insurgentes fueron rápidamente escoltados, para evitar que fueran linchados. A petición de Companys, y para evitar un inútil derramamiento de sangre, el general Goded habló por radio a las siete de la tarde, diciendo: «El destino me ha sido adverso, y yo he caído prisionero; por esta razón libero de sus obligaciones hacia mí a todos los que me han seguido[211]».

En Madrid, durante la tarde y la noche del domingo, los trabajadores se prepararon para lanzarse al asalto del cuartel de la Montaña. A la mañana siguiente, avanzando con sus 5000 fusiles y dos cañones de campaña, sufrieron tremendas pérdidas ante el intenso y preciso fuego de ametralladoras que se les hacía desde el interior. Los altavoces propagaban las noticias de la victoria de Barcelona, culminando en la lectura repetida de las palabras pronunciadas por el general Goded tras su rendición. Las diferencias de opinión entre los sitiados les llevaron a enarbolar la bandera blanca y luego a reanudar el fuego contra los asaltantes conforme éstos se acercaban, con la intención de recibir la rendición. Hacia mediodía, la multitud, enloquecida por los incidentes de la bandera blanca, irrumpió a través de la puerta principal. En el interior, un grupo de jóvenes oficiales rebeldes estaban sentados frente a una mesa celebrando consejo, se despidieron unos de otros, amartillaron sus pistolas y se suicidaron. El teniente Moreno, de la guardia de asalto, que precedía a la enfurecida muchedumbre, logró llevarse al general Fanjul a la prisión. Docenas de otros oficiales fueron muertos en el acto. La multitud se llevó las armas capturadas durante el asalto, y los soldados leales trasladaron al Ministerio de la Guerra unos 50.000 fusiles y grandes

cantidades de municiones que habían sido almacenadas en el cuartel de la Montaña.

También en las provincias norteñas los acontecimientos de aquellos primeros días tomaron un curso diferente. En Bilbao, en cuanto llegaron las noticias de la sublevación en Marruecos, el Gobierno tomó la precaución de derivar todas las llamadas telefónicas hacia el despacho del gobernador civil. Por lo tanto, cuando el general Mola telefoneó desde Pamplona al Gobierno militar de Bilbao, con la orden de sublevarse, la llamada fue recibida por el gobernador civil y no hubo alzamiento militar. En los cuarteles de Loyola, de San Sebastián, los oficiales estaban dispuestos a sublevarse, y el ala izquierda del Frente Popular quiso asaltar los cuarteles, pero los nacionalistas vascos lograron una rendición pacífica [212].

En Oviedo, capital de Asturias, el comandante militar era el coronel Aranda, a quien se tenía por republicano y masón, hombre que estaba en buenas relaciones con los funcionarios civiles de la izquierda republicana y del que no se fiaba la Falange. Cuando el 18 de julio los trabajadores pidieron la distribución de armas, el coronel contemporizó con ellos, dando la impresión de que favorecía la idea, pero que no podía actuar sin una orden firmada del ministro de la Guerra. Asimismo cooperó con las autoridades del Frente Popular, organizando trenes llenos de mineros que habían de marchar para la defensa de Madrid. Simultáneamente, ordenó a varias unidades de la guardia civil de la provincia que acudieran a Oviedo, y éstas, al salir de los cuarteles, hicieron el saludo del puño en alto.

A primeras horas de la mañana del 20 de julio, tanto el gobernador civil como los jefes sindicales comenzaron a sospechar que el coronel les había engañado, y sus refunfuños le obligaron a declarar el estado de guerra antes de lo que él hubiera deseado. Pero como los mineros más activos habían partido para Madrid, llevándose los fusiles y la dinamita que habían estado ocultando

desde octubre de 1934, y puesto que toda la guardia civil y la mayor parte de la de asalto estaban bajo sus órdenes, el coronel estuvo en condiciones de hacerse rápidamente con el control del centro de la ciudad, mientras que los mineros revolucionarios se apoderaban de los pueblos de los alrededores. Mientras tanto, los militares triunfantes en Valladolid, avisados por Aranda, salieron al encuentro de los trenes de los mineros y liquidaron, sin vacilar, a estos «rebeldes» cogidos con las armas en la mano[213].

En la tarde del viernes 17 llegaron a la Galicia intensamente republicana las noticias de Marruecos, lo que condujo a la inmediata convocatoria de mítines de masas en apoyo del Gobierno y a la distribución de armas. Durante los días 18 y 19 la región esperó con ansiedad. Los generales Salcedo y Caridad Pita y el almirante Azarola aseguraron al gobernador civil, Pérez Carballo, su lealtad a la República. Durante el día 19, los dirigentes del Frente Popular de Vigo obtuvieron similares promesas de los oficiales de las guardias civil y de asalto, y en vista de tales promesas decidieron, tras una reunión que duró buena parte de la noche, no insistir en la distribución de armas. En la mañana del lunes se unieron a las huelgas generales que presumiblemente estaban teniendo lugar en el resto de España, como un medio de contrarrestar la rebelión. Aquella misma mañana, oficiales insurgentes detuvieron a los generales Salcedo y Caridad Pita. El coronel Cánovas de la Cruz ocupó con sus tropas el centro de La Coruña gritando «viva la República» conforme marchaban. Mientras disponía la artillería para bombardear el Gobierno civil, si era necesario, las guardias civil y de asalto vacilaron y al final se sumaron a la rebelión.

En Vigo, el capitán Carreró Vergés sacó a la calle su compañía de infantería. La muchedumbre comenzó a sentir sospechas, y los soldados estaban nerviosos, intercambiando gritos de «viva la República» y saludos de «U. H. P.». En la Puerta del Sol el capitán comenzó a leer la proclamación del estado de guerra.

«*¡Muerte a los traidores!*», gritaron algunos. Los soldados apuntaron con sus fusiles, la multitud se acercó y el capitán dio orden de hacer fuego. La muchedumbre desarmada huyó, dejando unos cuantos muertos y heridos en la calle. En los suburbios se levantaron barricadas, pero los militantes controlaban Vigo el 20 de julio y sus suburbios un par de días después [214].

Durante estos mismos días, los altos oficiales de la Armada trataron de sumar sus navíos al alzamiento. En el dique seco de El Ferrol, marinos leales y rebeldes lucharon sobre la cubierta del crucero Almirante Cervera. Los insurgentes se habían apoderado el lunes de la cercana ciudad de La Coruña, por lo que los marinos leales, que casi habían agotado sus municiones, enviaron un mensaje por radio a Madrid pidiendo instrucciones. La emisora de radio de El Ferrol, de la que se habían apoderado los rebeldes, captó el mensaje y emitiendo en la longitud de onda de Madrid y simulando el poder menor de un transmisor lejano, contestó al llamamiento aconsejando la rendición para evitar el inútil derramamiento de sangre. En la base naval, pues, al igual que en la mayor parte de Galicia, el alzamiento triunfó el lunes. Por otra parte, en Cartagena, la gran base naval de la España sudoriental, los marineros se sublevaron en el fin de semana, asesinaron a sus oficiales y capturaron el buque de guerra Jaime I, unos tres cruceros, una docena de destructores y diez submarinos en malas condiciones de navegación. Los marineros eligieron consejos y se prepararon para levar anclas y dirigirse al estrecho de Gibraltar, con el propósito de impedir al ejército de Marruecos que pasara a España.

El pronunciamiento del 17 de julio cogió al Gobierno completamente por sorpresa, puesto que ni el presidente Azaña ni el jefe del Gobierno, Casares Quiroga, habían hecho caso a las numerosas advertencias que recibieron de personalidades del Frente Popular y de los militares leales. El primer impulso de Casares fue creer que la sublevación era un asunto puramente local del

ejército de Marruecos, que podía ser suprimido y lo sería por las unidades leales del ejército. Se opuso a que se publicaran las noticias, pues temía que la opinión pública se excitara indebidamente. Pero en las horas que precedieron al amanecer del 18 de julio, el Gobierno comenzó a recibir llamadas telefónicas angustiosas de los oficiales de las provincias de Castilla y de todo el Norte. A todos los que le llamaban, Casares les insistía en que resistieran; les prometía ayuda armada si era necesario; pero no quería que comprometieran sus esfuerzos desesperados para conseguir la paz distribuyendo armas al pueblo. Durante todo el día 18, en Madrid, los sindicatos clamaron pidiendo armas, y los fusiles que fueron distribuidos por la tarde por oficiales jóvenes, lo fueron desobedeciendo deliberadamente las consignas del Gobierno de Casares Quiroga.

En la mañana del 18 de julio, el presidente Azaña propuso un Gobierno de concentración nacional en el que estarían incluidos todos los elementos y llevarían a efecto el programa propuesto por Miguel Maura en sus artículos de junio en *El Sol*[215]. Largo Caballero, la CNT y la UGT en bloque y los dirigentes de la juventud socialista vetaron firmemente el plan. Aquella noche Casares Quiroga presentó la dimisión y Azaña pidió a Martínez Barrio que formara un nuevo Gobierno. Este último representaba a los elementos más conservadores del Frente Popular y logró convencer a algunos oficiales insurgentes, especialmente al general Patxot, en Málaga, de que se contuvieran con la esperanza de alcanzar un compromiso satisfactorio para los militares sin llegar a la guerra civil y de que se formara el Gobierno propuesto, en el que figurarían Felipe Sánchez Román y el general José Miaja; pero el solo anuncio de este Gobierno provocó manifestaciones antes del amanecer en las calles de Madrid, que iban pasando rápidamente al control de los obreros recién armados. El día 19, el profesor de Química José Giral, amigo íntimo de Azaña, formó un Gobierno completamente republicano que aceptó explícita-

mente el *fait accompli* de la distribución de armas y propuso contrarrestar la rebelión militar en cooperación con las masas armadas. Pero, sin embargo, incluso este Gobierno no ordenó a los gobernadores de las provincias que distribuyeran armas.

Durante la tarde del 19, Luis Companys envió a Azaña un mensaje por teletipo, diciendo que los oficiales insurgentes de Barcelona estaban dispuestos a negociar con el Gobierno. Unos días antes, el general Goded había enviado a su amigo, el marqués de Carvajal, para que fuera a ver a Azaña. Goded, que era monárquico, se sintió muy inquieto cuando se enteró de los planes para recibir ayuda de Italia y Alemania. El marqués tenía que pedir a Azaña que telegrafiara a Goded a Palma de Mallorca, ordenándole que fuera a Madrid. En una primera entrevista, se limitó a insinuar lo que sentía Goded, porque planeaba sugerir lo del telegrama en una segunda conversación; pero, mientras tanto, la policía de Madrid registró la habitación de su hotel y él se marchó de la ciudad. En la tarde del domingo 19, después de que los obreros armados se hubieran negado a aceptar un Gobierno de Martínez Barrio, y antes de que nadie pudiera estar seguro de si Giral iba a tener más suerte, Azaña decidió que ya sería inútil que tanto él como Companys trataran con los generales sublevados [216].

Tampoco en el bando de los insurgentes todo fue de acuerdo con los planes establecidos. El general José Sanjurjo, jefe titular del levantamiento, se mató al estrellarse el avión en que volaba desde Portugal para hacerse cargo del mando en España. En Badajoz, el general leal Castelló impidió que hubiera sublevación. En consecuencia, a pesar del rápido éxito en Navarra-Castilla y en la baja Andalucía, las dos zonas principales de la rebelión estaban aisladas entre sí. La sublevación de la marinería significaba que en vez de disponer de buques de guerra rápidamente dispuestos a escoltar al ejército de África en su travesía del estrecho de Gibraltar, lo más probable es que estos buques la impidieran.

Además, los pequeños efectivos de la aviación española habían permanecido leales al Gobierno republicano.

Pero la limitación más seria de todas era el fracaso del intento de apoderarse de las grandes ciudades. En Madrid y en Barcelona el pueblo armado derrotó a la rebelión. En Bilbao no hubo levantamiento. En Valencia, la confusión ante las múltiples órdenes de mando, los propósitos y las lealtades, impidió que ocurriera ninguna sublevación en los primeros días. Cataluña, Castilla la Nueva y toda la costa mediterránea, desde la frontera francesa hasta casi Gibraltar, seguían en manos de los republicanos. Mientras que los insurgentes se habían apoderado de toda Galicia y de gran parte de Andalucía, la hostilidad de la población en dichas regiones era evidente.

El balance del pronunciamiento de cuatro días era mixto. Los sublevados controlaban un tercio del territorio nacional, incluyendo las principales zonas trigueras de Castilla. Por lo tanto, estaban en buenas condiciones de alimentar a sus tropas y a la población civil; pero las principales ciudades industriales y las zonas económicamente más adelantadas de la nación estaban en manos republicanas. Los generales se verían así, pues, obligados a importar armas y géneros manufacturados de todas clases. Los planes cuidadosos, la sorpresa y la audacia les hicieron ganar una serie de asombrosas victorias a un costo relativamente pequeño; pero por todas partes había habido oficiales de alta graduación que se opusieron al alzamiento, y en muchos casos fue evidente que las unidades de la guardia civil, de la guardia de asalto y del ejército sólo esperaban a ver quién ganaba antes de comprometerse. En Navarra, los requetés gritaban «¡*Viva Cristo Rey*!»; pero en Galicia los soldados gritaban «¡*Viva la República*!». La débil reacción del Gobierno de Madrid fue verdadero regalo para los sublevados. Muchos gobernadores civiles y muchos jefes de regimientos habrían distribuido armas el sábado y el domingo si el Gobierno de Madrid les hubiera ordenado hacerlo.

En los análisis finales, muchas de las victorias fueron resultado tan sólo de la confusión y el terror. Si los obreros izquierdistas de Sevilla, Cádiz y otros puertos gallegos hubieran sido ayudados por oficiales de carrera enérgicos, la rebelión no habría triunfado en dichas zonas. Igualmente, si oficiales de ideas republicanas no hubieran ayudado a las masas izquierdistas en Madrid y Barcelona, la sublevación pudo haber triunfado de la forma que se pensó, como un pronunciamiento. En muchas zonas rurales, la población no supo lo que había ocurrido en el fin de semana hasta que refugiados o soldados procedentes de las capitales de provincia aparecieron en los pueblos. Así, muchos pueblos «rojos» de Andalucía se perdieron para la República porque Sevilla se perdió, y muchos pueblos reaccionarios de Levante y Cataluña permanecieron con la República porque Valencia y Barcelona permanecieron republicanas.

Al cabo de los cuatro días estaba claro para los generales Franco y Mola que el pronunciamiento, que había tenido éxito en zonas limitadas de España, sólo podría ser extendido al resto del país por medio de una guerra de conquista.

Capítulo 14

EL COMIENZO DE LA INTERVENCIÓN INTERNACIONAL

CON un tercio de España en poder de los insurgentes, y sin ninguna perspectiva de compromiso, ambos bandos recurrieron inmediatamente a la ayuda extranjera, porque ninguno de ellos tenía el equipo y las armas necesarias para llevar a cabo ni siquiera una guerra civil breve. Desde el principio, los conspiradores militares contaron con la ayuda armada de Italia, la asistencia de Portugal y la amistosa neutralidad de los intereses ingleses y americanos en la Península. En particular, Mussolini se había encargado de armar y entrenar a los monárquicos. En marzo de 1934 una delegación de cuatro personas, representando tanto a los alfonsinos como a los carlistas, obtuvo del dictador italiano en persona una promesa de suministro de 20.000 fusiles y 200 ametralladoras. Aún no había fijada ninguna fecha para un alzamiento antirrepublicano, y a Mussolini pareció divertirle el que ambos partidos monárquicos no pudieran ponerse de acuerdo en un candidato para el trono. Durante los meses siguientes dispuso el entrenamiento de jóvenes carlistas, que fueron a Italia disfrazados como «oficiales peruanos[217]». Sin embargo, no parece que Mussolini suministrara armas antes del real estallido de la guerra civil. Los carlistas estuvieron muy ocupados comprando armas en la primavera de 1936, muchas de las cuales fueron confiscadas en el puerto de Amberes; pero las 150 ametralladoras

que lograron introducir en España de contrabando antes de julio habían sido compradas en Alemania de modo particular[218].

El general Sanjurjo vivió en Portugal durante todo el período de preparación. Los emisarios de Mola pudieron en todo momento comunicarse libremente con él, y la policía de fronteras portuguesa, desde el primer momento, ayudó proporcionando armas y entregando todos los fugitivos republicanos a los insurgentes. En los días que precedieron a la sublevación, el coronel norteamericano que dirigía la Telefónica madrileña puso líneas privadas a disposición de los conspiradores de Madrid, para que pudieran celebrar conversaciones con los generales Mola y Franco. El general Kindelán, que estaba encargado de la sublevación en Algeciras, preguntó a los oficiales británicos del cercano Gibraltar si le podían proporcionar barcos. Los ingleses lamentaron no poder ayudarle directamente; pero se ofrecieron para buscarle algunos buques no registrados que había en puertos portugueses. También pusieron a su disposición las líneas telefónicas de Gibraltar, lo que hizo posible para Kindelán hablar con Marruecos, sin que las llamadas pasaran por ningún centro telefónico español[219].

El 19 de julio los buques de guerra republicanos ya estaban patrullando efectivamente las aguas entre la península y Marruecos, impidiendo así que el general Franco pudiera hacer cruzar el estrecho a sus tropas. En tan difíciles circunstancias, un hombre de negocios nazi que llevaba establecido varios años en Tetuán, un tal Johannes Bernhardt, ofreció sus servicios al general Franco. Era muy conocido entre los oficiales españoles, habiendo vendido suministros de todas clases al ejército de Marruecos. En junio ofreció aviones Junker de transporte a crédito al general Sanjurjo, pero el entonces jefe titular del alzamiento no consideró necesarios los aviones alemanes[220].

El 21 de julio el general Franco aceptó la oferta de Bernhardt. Este último se entrevistó con Hitler en Bayreuth, donde el can-

ciller asistía al festival wagneriano. Tras consultar con Hermann Goering, jefe de las fuerzas aéreas alemanas, Hitler autorizó el inmediato envío de unos veinte JU 52 de transporte pesado, que tendrían que ir desarmados y tripulados por alemanes. Hacia el 28 de julio estos aviones habían establecido un puente aéreo entre Tetuán y Sevilla, cruzando cada aparato cuatro veces al día el estrecho, llevando en cada viaje 30 soldados completamente armados. Hacia el 5 de agosto los insurgentes pudieron colocar así 15.000 soldados en Sevilla, a pesar del bloqueo naval republicano[221].

Italia también actuó con prontitud, enviando unos doce bombarderos, tres de los cuales se vieron obligados, el 30 de julio, a aterrizar en el Marruecos francés por falta de combustible. Sus diarios de navegación indicaban que se les indicó su destino el 15 de julio, o sea dos días antes de la sublevación de Melilla, un hecho que no podía por menos que sugerir que Benito Mussolini conocía los planes para el pronunciamiento entre el 10 y el 20 de julio[222]. A finales de mes, el puente aéreo alemán empezó a encontrar un fuerte fuego antiaéreo por parte del crucero Jaime I. El JU 52 había sido diseñado como un avión de transporte, que podía ser convertido fácilmente en bombardero. Durante la primera semana de agosto, un Junker convertido puso al Jaime I fuera de combate, alcanzándole directamente con sus bombas de 500 libras, y los italianos emplearon hábiles tácticas para hostigar a los buques de guerra de menor envergadura lo suficiente como para que ya no pudieran impedir el paso de barcos cargados de tropas. El 6 de agosto dichos barcos comenzaron a cruzar el estrecho bajo la protección de unos nueve bombarderos trimotores italianos[223].

La flota republicana perdió el control de las aguas del estrecho entre Europa y África, en parte debido a los ataques aéreos y en parte por la ineficiencia en el manejo de los buques por tripulaciones que habían dado muerte a la mayoría de sus oficiales y

que no se fiaban de los que quedaban, así como por la hostilidad de las autoridades políticas y los hombres de negocios de Gibraltar y Tánger. Las compañías petroleras británicas de Gibraltar, y la *Vacuum Oil Company* de Tánger, de propiedad norteamericana, se negaron a vender combustible a los buques republicanos[224]. Tánger era una ciudad portuaria internacionalizada, que constituía un enclave en el Marruecos español. El 17 de julio había en su puerto algunos buques de guerra y mercantes españoles. La Comisión Internacional que regía la ciudad creyó que el uso continuado del puerto por la marina de guerra republicana contravenía la neutralidad garantizada en el Estatuto de Tánger. Sin embargo, al mismo tiempo, no puso ninguna restricción al paso de mercancías y personas entre Tánger y el Marruecos español. Los aviones alemanes que transportaban moros a Sevilla compraban sin dificultad alguna gasolina de aviación a una firma portuguesa de la ciudad internacional[225].

Los insurgentes estuvieron bien abastecidos de productos petrolíferos desde el principio. En julio de 1935 la *Texas Oil Company* firmó un contrato a largo plazo para abastecer a la CAMPSA, monopolio del Estado español para la gasolina. El 18 de julio de 1936 unos cinco petroleros estaban en alta mar. El presidente del Consejo de administración de *la Texaco*, Thorkild Rieber, decidió inmediatamente enviar dicha gasolina a los puertos controlados por Franco, y la *Texas Company* continuó suministrando gasolina a crédito hasta el término de la guerra[226].

Hablando en general, los insurgentes podían contar desde el principio con la buena voluntad del mundo financiero internacional. Durante generaciones, Inglaterra había sido el mercado más importante de los vinos españoles de calidad. Capitales ingleses y españoles compartían el control de muchas empresas mineras y siderúrgicas en el País Vasco. Los españoles adinerados se codeaban con los residentes veraniegos ingleses en San Sebastián y Biarritz. Luca de Tena y otros monárquicos dispusieron lo

conveniente y pagaron el avión inglés que llevó a Franco a Marruecos y luego transportó los emisarios de Franco a Roma. Hacia el 25 de julio, Juan March y Gil Robles establecieron sus cuarteles generales en Lisboa. El primero era propietario de intereses que controlaban el *Claiworth Bank* de Londres, a través del cual financió las compras de material de guerra para el ejército insurgente. Gil Robles y Nicolás Franco, hermano mayor del general, coordinaron los esfuerzos de otros ricos banqueros españoles que apoyaban la rebelión. El Gobierno portugués trataba con ellos más que con el embajador republicano (el historiador medievalista Claudio Sánchez Albornoz), como si fueran los representantes efectivos de España.

Mientras tanto, el Gobierno republicano apeló a Francia. Uno de los primeros actos del nuevo jefe del Gobierno, José Giral, fue telegrafiar el 20 de julio a Léon Blum, el socialista francés que era jefe del Gobierno. Blum representaba en Francia los mismos ideales democráticos de centro-izquierda que representaban Giral y su Gobierno en España. Además, España había negociado durante 1935 y a principios de 1936 un tratado comercial que incluía cláusulas referentes a la venta de equipo militar a España y el Gobierno contaba con su derecho legal a buscar la ayuda de otros gobiernos para suprimir la rebelión interna.

La reacción inicial de Blum fue completamente positiva. Sin embargo, un viaje que hizo a Londres el 22 de julio le hizo darse cuenta de que el Gobierno inglés simpatizaba con el levantamiento. El 25 de julio la prensa derechista de París publicó la noticia de la petición española y varios miembros del Partido Radical, preocupados, pidieron a Blum que desistiera de prestar ayuda. Estaba claro que ayudar abiertamente a la República española enojaría a Inglaterra, con la que las relaciones ya eran tensas y acabarían por dividir al Frente Popular en Francia. El Gobierno francés, además, estaba dividido. El ministro del Aire, Pierre Cot, era decidido partidario de prestar ayuda al Gobierno Giral,

mientras que el ministro de Defensa se negó terminantemente a permitir a los pilotos militares franceses tripular los aviones que Cot se disponía a entregar. Cot se apresuró a disponer una venta fingida de 50 aparatos al Hechaz, Finlandia y el Brasil; aparatos que pasarían por España «en ruta» hacia sus fingidos destinos. En total, para la primera semana de agosto, Cot había despachado unos treinta aviones de reconocimiento y bombardeo, 15 cazas y unos 10 aviones de transporte y entrenamiento, todos ellos de modelos ya anticuados en 1936[227]. Durante el mismo período, centenares de voluntarios cruzaron la frontera, principalmente por Cataluña, sin que la policía francesa les hiciera muchas preguntas o les hiciera alguna.

El aterrizaje forzoso de los italianos en el Marruecos francés fortaleció la posición diplomática de Blum; pero estaba sometido a creciente presión no sólo de Inglaterra, sino de los gobiernos polaco y belga. Sobre todo, cuatro meses después de que Hitler hubiera ocupado Renania sin encontrar oposición, Blum no se podía permitir el lujo de enfrentarse con un aislamiento de Francia frente a una Alemania rearmada. Ni tampoco podía permitir que surgiera un aliado de Francia y Alemania en la frontera meridional. Por lo tanto, propuso la fórmula de la «no intervención», a la cual esperaba se adhirieran todas las potencias, y que acabaría rápidamente con la guerra por falta de armamentos. El 8 de agosto cerró la frontera francesa al tráfico militar, sin esperar a conocer las verdaderas intenciones de las potencias que respaldaban a los insurgentes.

La transformación de un pronunciamiento en una guerra civil cogió a las potencias europeas por sorpresa. Todas ellas tenían intereses estratégicos en el Mediterráneo occidental. La conquista por los insurgentes de Algeciras, La Línea y el Marruecos español había tenido lugar a la vista de Gibraltar, y la marina republicana estaba operando en aguas que habían estado sometidas al control británico desde que Inglaterra se apoderó de Gibraltar en

la Guerra de Sucesión española (1701-1713). A fines del siglo XIX, Inglaterra, Francia y España desarrollaron intereses imperialistas en el turbulento imperio de Marruecos. En 1904, un acuerdo anglo-francés reconocía la primacía de los intereses políticos y militares franceses en Marruecos, pero el káiser amenazó con una guerra el año siguiente desembarcando en Tánger y afirmando públicamente la independencia del sultán. Los españoles estaban igualmente descontentos por los acuerdos anglo-franceses, dado que España había enviado varias expediciones militares contra Marruecos desde 1859, y especialmente después de la guerra entre España y los Estados Unidos en 1898, España consideraba a Marruecos como su zona natural de expansión.

La conferencia internacional de Algeciras en 1906 se comprometió a una política de puerta abierta en Marruecos para los hombres de negocios de todas las naciones y dio amplios poderes policiacos a Francia y España, aunque vagamente definidos. En 1912, en efecto, Francia y España se repartieron Marruecos, y España, que era la más débil de ambas potencias, se reservó la zona limítrofe al estrecho de Gibraltar. La «pacificación» de Marruecos requirió muchos años, y los marroquíes supieron explotar hábilmente los muchos equívocos entre los oficiales franceses y españoles. La rebelión de Abd-el-Krim obligó a ambas potencias a colaborar para lograr la derrota de éste, que era el más poderoso de los dirigentes nacionalistas en 1926. Pero todavía en 1934 tuvieron lugar «operaciones de policía» tanto en la zona francesa como en la española. Durante las décadas de acciones militares esporádicas, los intereses financieros privados de Inglaterra, Francia, Alemania y España invirtieron capitales en el desarrollo de las minas de hierro del Riff.

El Estatuto de Tánger fue también objeto de largas negociaciones entre las potencias. En general, a principios de siglo predominaban los intereses comerciales franceses. En 1906 fue reconocido en la Conferencia de Algeciras el carácter internacional

de la ciudad, en parte como concesión a los intereses alemanes y españoles, y en parte para asegurarse de que la ciudad no se convertiría en una base naval francesa rival de Gibraltar. En 1912 se celebraron negociaciones para dar a Tánger un Estatuto internacional; pero no llegaron a ninguna conclusión, y hasta 1923 no se logró un acuerdo, por el cual Inglaterra, Francia y España compartirían la administración del puerto neutral. En 1927 el dictador italiano, Mussolini, envió a Tánger tres buques de guerra en unos momentos en que el Estatuto de Tánger estaba siendo revisado. Los comisionados reunidos comprendieron a qué se debía tan delicado gesto e invitaron a Italia a compartir en adelante la administración.

Así que tanto los intereses estratégicos en el Mediterráneo occidental como los complejos intereses militares, económicos e imperialistas involucraron a todas las grandes potencias europeas tan pronto como el *statu quo* se vio amenazado. Las razones económicas y las relaciones fraternales con los oficiales del ejército español explican de por sí con suficiente claridad por qué, en general, las autoridades de Gibraltar y de Tánger reaccionaron de modo favorable, aunque discreto, en favor de los insurgentes. Pero la perspectiva de una guerra civil enconada y quizá prolongada despertó intensas emociones en todos los países europeos y en todo el mundo occidental.

De todas las naciones europeas, Francia era la más profundamente afectada, y se halló profundamente dividida por el estallido de la guerra civil. Todos los sindicatos, tanto socialistas como comunistas, pidieron el inmediato envío de armas al Gobierno Giral. La clase media liberal, aquéllos que habían luchado por la vindicación de Dreyfus y que ahora estaban alarmados por el antisemitismo vocinglero de los nazis, aquéllos que favorecieron la separación de la Iglesia y el Estado, los que habían luchado contra el militarismo alemán en el Marne y en Verdún, todos ellos favorecían instintivamente la causa de la República. Al mis-

mo tiempo los monárquicos y clericales, aquéllos que apoyaban la *Action Française* o la *Croix de Feu* del coronel De la Rocque, aquéllos que aplaudieron los motivos profascistas de febrero de 1934, tales personas se inclinaban instintivamente hacia la causa de los insurgentes. Este último grupo era minoritario; pero incluía una gran proporción de las familias más ricas, así como muchos oficiales del Ejército y funcionarios civiles que servían al imperio francés en el norte de África.

Consideraciones tanto técnicas como políticas contrarrestaron el impulso de prestar ayuda militar. Desde un punto de vista estrictamente objetivo, todos los oficiales reconocían el peligro potencial que suponía para Francia un Gobierno agresivo y autoritario al otro lado de los Pirineos. Pero el estado de las defensas francesas apenas si permitía suministrar armas a España mientras Hitler, que acababa de remilitarizar Renania en marzo de 1936, continuaba el curso febril del rearme de Alemania. Mientras que la Francia del Frente Popular manifestaba su sincera simpatía por la lucha del Frente Popular de España, el Gobierno estaba virtualmente paralizado por la amenaza de guerra civil en su propio país, la amenaza alemana en las fronteras y la debilidad de sus propias defensas. Además, la seguridad francesa dependía de la actitud de los británicos, y éstos advirtieron inmediatamente que no se considerarían obligados a acudir en defensa de Francia si ésta se comprometiera al sur de los Pirineos hasta el punto de que ello condujera a acciones militares por parte de Alemania.

La reacción de los ingleses ante la guerra civil fue menos emocional que la de los franceses; pero dado que Inglaterra era más fuerte que Francia militarmente, y estaba más interesada en la economía española, su actitud pesaba mucho más en la balanza internacional. Los laboristas eran partidarios de los republicanos, aunque se sentían inquietos por el «izquierdismo infantil» de los socialistas de Caballero y de los anarquistas. Una delegación parlamentaria visitó España en 1935 para investigar la represión de

la sublevación de los mineros. Los mismos hombres que habían llevado a Oviedo los moros y la Legión Extranjera eran ahora las principales figuras de la zona insurgente; aquéllos que abogaban por las reformas sociales y pidieron la amnistía para los mineros eran los personajes prominentes en Madrid.

Pero el primer ministro, Stanley Baldwin, y la mayoría de los oficiales navales y funcionarios consulares de quienes recibió los primeros informes, eran instintivamente favorables a los insurgentes. Los conservadores británicos tendían a asumir que los volubles españoles necesitaban una mano firme que los gobernara. El ala profascista, comúnmente conocida como el *Cliveden set*, era partidaria de que se tratara con los generales españoles al igual que con Hitler y Mussolini. Los círculos financieros de Londres tenían grandes inversiones en ambas zonas. Las minas de Río Tinto y del Riff fueron ocupadas rápidamente por los insurgentes, quienes también dominaban la zona de Andalucía desde donde se exportaban los vinos más importantes desde el punto de vista comercial. Pero las minas y los altos hornos vascos, así como las instalaciones eléctricas de Cataluña que eran propiedad de ingleses, estaban en la zona del Frente Popular. Los ingleses de todas las ideologías estaban horrorizados ante los informes de las atrocidades cometidas, aunque daban más crédito a las historias sobre el terror «blanco» o «rojo» según sus opiniones políticas. El Gobierno de Baldwin, en contraste con el de Léon Blum, gozaba del apoyo de las clases adineradas y por eso estaba en libertad de tomar decisiones sin la amenaza de disturbios en el país. Durante las primeras semanas la política oficial fue la de no comprometerse, junto con un disimulado deseo de una victoria rápida y no demasiado cruel de los generales.

Al otro lado del Atlántico la actitud de los Estados Unidos estaba dominada por los deseos gemelos de aislamiento y neutralidad. El presidente Roosevelt, por sus simpatías personales y por su política interna, se inclinaba más por Giral, Azaña y Prieto

que por los generales insurgentes. Su embajador, Claude Bowers, siguió siendo un buen amigo del Gobierno republicano. Pero el 7 de agosto el Departamento de Estado envió una circular a todos los cónsules recomendándoles la más estricta imparcialidad. El acta de neutralidad de 1935 no se aplicaba a las guerras civiles, y ni se planteó la cuestión de retirar el reconocimiento al Gobierno republicano; pero cuando la Glenn L. Martin Company pidió que la aconsejaran si debería vender aviones al Gobierno español, el Departamento de Estado replicó el 10 de agosto que tal venta sería contraria al espíritu de la política americana.

Roosevelt y Bowers, así como el secretario de Estado Cordell Hull, eran totalmente partidarios de mantenerse al margen del asunto, tanto que Bowers recomendó en la segunda mitad de agosto que los Estados Unidos no se adhirieran a las propuestas de mediación de las embajadas de la Argentina o el Uruguay. En el verano de 1936, la atención que le dedicaban los periódicos mostró que los norteamericanos reconocían la importancia potencial de la guerra civil en España; pero relativamente pocos americanos, liberales, católicos o protestantes, pensaban que los Estados Unidos debían hacer un esfuerzo para influir en el resultado de la lucha[228]. Al mismo tiempo, y puesto que el acta de neutralidad no consideraba a la gasolina como material de guerra (lo mismo que en las sanciones que aplicó la Sociedad de Naciones contra Italia durante la guerra de Etiopía), el Gobierno no hizo ningún esfuerzo para interrumpir los envíos de productos de la *Texaco* a la España insurgente.

Así, de las tres potencias democráticas occidentales, Francia era la única preparada (aunque parcialmente) para ayudar a la República española a derrotar la rebelión militar, y cuando para Blum estuvo claro, casi desde el día en que recibió el angustiado telegrama de Giral, que el Gobierno británico y las derechas francesas se oponían enérgicamente a tal ayuda, trató (propo-

niendo el 2 de agosto la No-intervención y cerrando el 8 de agosto la frontera pirenaica al tráfico militar) de presionar de algún modo a las potencias fascistas para que no incrementaran su intervención en favor de los insurgentes.

En Italia y Alemania la opinión pública siguió de buena gana las indicaciones de sus gobernantes. En ninguno de ambos países había una prensa libre ni sus respectivos pueblos eran conscientes, como en Francia, de los complejos problemas históricos y sociales implicados. Italia estaba intoxicada por su travesura militar en Etiopía, y los alemanes se sentían orgullosos de que el *Diktat de Versalles* hubiera sido arrojado por la borda con la vuelta al servicio militar obligatorio, el principio del rearme, y la remilitarización de Renania. En las primeras semanas de la guerra los insurgentes necesitaron tan sólo algunos aviones, tanques y equipos de comunicaciones. Los especialistas italianos y alemanes que habían sido destinados a España fueron de buena gana, con alta moral y una ingenua sensación de aventura, para servir a su Duce y a su Führer en la lucha contra el bolchevismo[229]. En Portugal, bajo la dictadura de Antonio Oliveira Salazar, las masas silenciadas se habrían alegrado de la victoria del Frente Popular, como un paso hacia su propia liberación; pero el Gobierno y los militares dieron toda clase de facilidades a los insurgentes durante la preparación de la sublevación, y desde el primer día de la guerra civil fue Portugal una base apenas disfrazada de suministros para los insurgentes.

Entre las grandes potencias, la Unión Soviética era la única en donde los sentimientos populares y la política del Gobierno coincidían en favorecer la causa de la República. La prensa controlada podía presentar una versión verdadera en esencia, aunque muy simplificada, del levantamiento como un ataque internacional fascista contra un Gobierno democrático legítimo y amante de la paz. En centenares de fábricas y granjas colectivas se celebraron reuniones de masas, y hacia el 6 de agosto habían sido re-

caudados más de dos millones para enviar víveres y medicamentos a España[230]. El Gobierno se complació en permitir la expresión de una emoción genuina entre el pueblo ruso, especialmente en unos tiempos en que el rearme de Hitler estaba forzando a los rusos a anteponer los cañones a la mantequilla, y cuando la detención de viejos bolcheviques como Zinoviev y Kamenev había sorprendido desagradablemente a muchos ciudadanos leales.

En cuanto al Gobierno soviético, actuó con gran precaución. Desde 1931, la España republicana y la Unión Soviética ni siquiera habían intercambiado embajadores, aunque habían estado a punto de hacerlo poco antes de la victoria electoral de las derechas en noviembre de 1933. Tras la victoria del Frente Popular en febrero de 1936, la maquinaria diplomática se puso de nuevo en movimiento; pero no fue sino a finales de agosto cuando Marcel Rosenberg llegó a Madrid como primer embajador soviético en la República española. Los soviéticos no tenían intereses económicos o estratégicos directos en España. Rusia no había tomado parte en la ocupación de Marruecos o en la internacionalización de Tánger, ni la armada rusa había operado jamás en el Mediterráneo occidental.

Pero el estallido de la guerra en España, bajo las presentes condiciones, tenía una enorme importancia como prueba de las políticas gemelas de Frente Popular y de seguridad colectiva lanzadas por la Unión Soviética y los partidos comunistas de todo el mundo en 1935. España era el primer país en que un Gobierno de Frente Popular había alcanzado el poder. Si las naciones occidentales, viéndose a su vez amenazadas por la extensión del poder fascista, pudieran ser llevadas a cooperar con los soviéticos en la defensa de un Gobierno democrático libremente elegido, tal acción colectiva podría detener la ininterrumpida serie de triunfos fascistas desde la subida al poder de Hitler. Con esta idea en la mente, la literatura de todo el mundo soviético y co-

munista dio énfasis a la composición enteramente burguesa del Gobierno republicano y de la pequeña representación de los comunistas en las Cortes (16 entre los 473 diputados en febrero de 1936). Asimismo, los soviéticos se refrenaron ostentosamente de enviar armas durante los meses de agosto y septiembre, cuando pareció haber una ligera posibilidad de que el plan de No-intervención contuviera la ayuda de las potencias fascistas a los insurgentes. Sin embargo, el 30 de agosto, el jefe de su servicio de inteligencia en la Europa occidental, general Krivitski, recibió órdenes de crear empresas fingidas, que pudieran comprar armas en Alemania y en varios pequeños países europeos, y luego embarcarlas hacia España en barcos escandinavos con documentación falsa en la que se indicase que el destino era Hispanoamérica o el Lejano Oriente[231].

Tras todos estos cálculos tan sofisticados había sentimientos intangibles, pero importantes. Lenin observó una vez que España era el país europeo cuyas condiciones se parecían más a las de Rusia, y que podía muy bien ser el próximo país que siguiera la línea soviética. La revolución de Asturias hizo evocar el recuerdo de 1905 en Rusia, y de la Commune de París en 1871. Varios centenares de mineros fueron a la Unión Soviética en 1935 y volvieron tras las elecciones del Frente Popular refiriéndose de modo admirativo al metro de Moscú, las granjas colectivas, y el excelente servicio médico gratuito. Las victorias populares de los días 19 y 20 de julio en Barcelona y Madrid recordaban el asalto a la Bastilla en 1789.

Pero los recuerdos gloriosos de 1917 podían evocar también los amargos recuerdos de los años siguientes: de la derrota en Hungría y Alemania en 1919, de la derrota en China en 1927, del triunfo del fascismo en Alemania y de la destrucción del Partido Comunista Alemán en 1933. El movimiento hacia la revolución mundial, ahora interrumpido, así como la seguridad de la Unión Soviética, podrían avanzar mucho con una victoria repu-

blicana en España. Por el momento era esencial no asustar a la clase media o a los gobiernos occidentales. Ningún estadista soviético esperaba que España adoptara el comunismo en un próximo futuro; pero la causa de España era, en una amplia perspectiva, la causa mundial de la «*revolución del pueblo*», con la cual esperaban identificarse los dirigentes soviéticos.

Sólo un país reaccionó sin temor y con gran generosidad al dar su palabra de ayudar a la República española. México apoyó plena y públicamente las pretensiones del Gobierno de Madrid de ser el Gobierno legítimo de España, elegido libremente. Desde los primeros días de agosto envió fusiles y víveres y aceptó también las pesetas españolas en pago. Nada de mercado negro, de intermediarios, ni de oro del Banco de España fue necesario en lo relativo a las compras mexicanas. México se negó a aceptar las propuestas francobritánicas de No-intervención, dándose cuenta inmediatamente de la gran ventaja que ofrecían a los insurgentes[232]. Contrariamente a los Estados Unidos, a México no le parecía que fuera una política apropiada el mostrarse neutral entre un Gobierno elegido y una junta militar. Al mismo tiempo, la embajada mexicana en Madrid, como todas las de los otros países hispanoamericanos, dio refugio a sacerdotes y españoles conservadores que estaban en peligro por la anarquía revolucionaria de las primeras semanas de la guerra.

Había varias razones para esta política única. La revolución mexicana había estado luchando durante un cuarto de siglo para elevar los niveles de sanidad y educación, para distribuir tierras a los campesinos que carecían de ellas, y para reducir el control clerical de la educación. Los obreros, estudiantes e intelectuales mexicanos comprendían las influencias marxistas y anarquistas que actuaban en España. Asimismo eran capaces de admirar a los soviéticos sin tratar de imitarlos servilmente. El presidente Lázaro Cárdenas estaba ocupado en una rápida reforma agraria, una economía mixta, y la plena utilización de los recursos naturales

de la nación por medio del riego y la electrificación. Al mismo tiempo, acabó con la guerra civil esporádica entre la Iglesia y el Estado en México. Era por tanto muy natural que un hombre así apoyara a la República española diplomática y materialmente, y al mismo tiempo diera asilo a las víctimas de la persecución política y religiosa.

La actitud de México supuso un inmenso alivio moral para la República, especialmente dado que los principales gobiernos sudamericanos (los de la Argentina, Brasil, Chile y Perú) simpatizaban más o menos abiertamente con los insurgentes; pero la ayuda mexicana significaba poco en la práctica si la frontera francesa iba a seguir cerrada y los dictadores iban a quedar en libertad de enviar a los insurgentes armas en cantidad y calidad tales que no estaban al alcance de México.

Al cabo de pocas semanas del pronunciamiento, todas las potencias de Europa y del Nuevo Mundo ya habían indicado cuál iba a ser de hecho (ya que no en la prosa legal) su política hacia la guerra civil que ya se había iniciado. Italia, Alemania y Portugal ayudaban a los insurgentes; Inglaterra esperaba que los insurgentes ganaran con un mínimo de lucha. Los Estados Unidos ponían el aislacionismo y la neutralidad por encima de sus simpatías democráticas, mientras que Rusia actuaba con precaución en su intento de contrarrestar la intervención del Eje. Francia refrenaba deliberadamente su ayuda a la República después de los primeros días, y México apoyaba a la República lo mejor que podía dentro de su limitada capacidad. Las pequeñas potencias europeas y la mayoría de los gobiernos sudamericanos no jugaron ningún papel activo, pero tendieron a preferir una victoria de los insurgentes.

Capítulo 15

DESARROLLO MILITAR: AGOSTO-OCTUBRE DE 1936

DENTRO de España, durante los primeros meses de la guerra, los generales Mola y Franco aún esperaban una rápida victoria, que sería lograda por el avance simultáneo contra Madrid: por una parte desde los territorios de Navarra y Castilla controlados por Mola, y por otra desde Andalucía, en donde el ejército de África había sido transportado desde el otro lado del estrecho. Las fuerzas de Mola se dirigieron rápidamente hacia los pasos de Somosierra y de la sierra del Guadarrama, puntos clave de un ataque contra Madrid procedente del Norte. Contaba con unos 10.000 requetés y varios miles de falangistas y tropas diversas, así como con abundantes camiones y gasolina, y acabó con una huelga parcial de los ferroviarios con la amenaza de la pena de muerte; pero tenía pocas municiones. Los nacionalistas vascos, que apoyaban a la República, amenazaban su retaguardia; Galicia y León estaban llenas de guerrillas, aunque se hallaran nominalmente en manos de los insurgentes. Gran parte de las provincias de Asturias y Santander estaban controladas por fuerzas del Frente Popular. Las fuerzas de Mola, en su avance, alcanzaron los pasos montañosos a finales de julio; pero este avance fue contenido durante la mayor parte de agosto hasta que empezó a recibir armas y municiones en cantidad gracias a los aviones alemanes que venían en vuelo desde Portugal y Marruecos[233].

Los republicanos también se apresuraron hacia los pasos de montaña situados al norte de Madrid. Todos los partidos del Frente Popular, así como la Juventud Socialista Unificada (JSU), formaron milicias. Los oficiales de carrera que eran leales al Gobierno distribuyeron las armas de las diversas bases militares de los alrededores de Madrid y enseñaron una instrucción elemental, como el manejo de fusiles, excavación de trincheras y saber resguardarse. En la sierra la guerra consistió en choques aislados entre pequeñas unidades: las patrullas tanteaban las líneas del enemigo o excavaban a lo largo de las cimas montañosas. Los grupos de milicias políticamente más conscientes establecieron sistemas de trincheras y puestos de mando y comunicaciones; pero durante el mes de agosto, la mayoría venía diariamente en camión desde la ciudad. El tiempo era bueno, los aires de las montañas tonificantes, y los árboles daban una sensación de seguridad contra las observaciones hostiles. La guerra suponía aventura y rudo valor, no ciencia. Por un lado estaban los requetés y falangistas de Mola, con base en Segovia y Ávila; por el otro, las milicias izquierdistas de Madrid. Cuando chocaban entre sí, luchaban con la misma bravura temeraria. Cuando por casualidad les atacaba un bombardero, respondían disparando con sus fusiles y morían gustosos de heridas que pudieron haber evitado de haberse puesto a cubierto. Cuando quedaban cortados de sus líneas, eran capaces de luchar durante días sin víveres ni agua, hasta disparar el último cartucho. Las tropas de Mola eran las más diestras y disciplinadas; pero su escaso número y su falta de armamento les impedía hacer poco más que defender las alturas de que se habían apoderado en los primeros días. Las milicias madrileñas, valientes en los choques frontales, eran presa del pánico ante lo inesperado y perdieron muchas posiciones ante un ataque de flanco por sorpresa. Los pocos militares de carrera, como el teniente coronel Moriones y el coronel José Asensio Torrado, se apresuraban a ir de un sitio de peligro a otro para acor-

tar el pánico y devolver la confianza gracias a su conocimiento de las tácticas militares[234].

Mientras tanto, en Cataluña, los anarquistas triunfantes partieron a la conquista de Zaragoza, su hogar espiritual. Animosos, intoxicados por su éxito en Barcelona, avezados a las durezas físicas, y despreocupados ante la muerte, lograron abrirse camino, pueblo por pueblo, por las abruptas comarcas del Aragón oriental. Era una guerra sin artillería, sin planes, sin reconocimiento, sin frentes definidos. En cada bando los prisioneros eran fusilados, y los desertores, para evitar la misma suerte, tenían que identificarse por su sindicato o partido político. En Huesca, que estaba en poder de los insurgentes y sitiada por los catalanes, los falangistas y los anarquistas se gritaban insultos antes de luchar con granadas y a la bayoneta en el cementerio de la ciudad. Y, sin embargo, todo el mundo observaba la siesta del mediodía. Al igual que en Madrid, las milicias estaban organizadas en columnas de tamaño variable, según los diferentes partidos del Frente Popular. Los anarquistas eran numéricamente los más importantes; pero asimismo había columnas del antiestalinista Partido Obrero de Unificación Marxista (POUM), de la Esquerra y de los recientemente unificados partidos socialista y comunista (PSUC). La falta de armas y de disciplina les obligó a detenerse a las puertas de Zaragoza; pero para los partidos revolucionarios catalanes era muy importante el que todos ellos pudieran participar en la esperada conquista de la capital aragonesa.

En Valencia, capital del Levante español, la situación permaneció tensa y ambigua durante algunas semanas. Valencia tenía un puerto muy importante y era el centro de una zona agrícola muy productiva. Por sentimiento, era fuertemente republicana; pero asimismo los comerciantes y agricultores eran intensamente conservadores. La provincia dividió sus votos entre las derechas y el Frente Popular. El 18 de julio, el gobernador, de Izquierda Republicana, se negó a atender la petición de armas de los sindi-

catos de la CNT y la UGT. La actitud del comandante militar local, general Martínez Monje, era dudosa. Manifestó su lealtad, pero acuarteló a las tropas. Los obreros, que sospechaban profundamente tanto del gobernador como del general, convocaron una huelga general el día 19 y formaron un comité CNT-UGT que pidió que el Gobierno tomara los cuarteles, distribuyera armas y formara milicias mixtas de obreros y soldados leales.

El Gobierno Giral, esperando evitar el derramamiento de sangre e imponer su autoridad, envió a Valencia una junta delegada compuesta por Martínez Barrio y varios republicanos de izquierda. Durante una semana la CNT recogió armas, las tropas siguieron acuarteladas, el general Martínez Monje reiteraba su lealtad republicana mientras se negaba a reconocer al comité revolucionario, y la junta de Madrid trató de calmar los ánimos de ambos bandos. En las calles de la ciudad, virtualmente abandonadas por los soldados y la policía, los falangistas mataban obreros y los obreros atacaban conventos. Habiéndose enterado de que los anarquistas pensaban incendiar la iglesia de la Virgen de los Desamparados, patrona de Valencia, el alcalde de la ciudad, republicano de izquierdas, se apresuró a acudir al templo y se llevó la imagen de la Virgen a un escondite seguro en los archivos municipales, donde pasó toda la guerra[235]. El día 25 una columna mixta de obreros y de guardias civiles al parecer leales partieron hacia Teruel, que estaba en manos de los insurgentes. En Puebla de Val verde los guardias civiles volvieron sus fusiles contra la milicia, mataron a todos los milicianos que pudieron y se pasaron a las líneas rebeldes.

Al día siguiente el sargento Fabra, del cuerpo de Ingenieros, encabezó una revuelta contra los oficiales dentro de los cuarteles, y un cierto número de soldados huyeron hacia la ciudad llevando sus armas. El comité CNT-UGT se decidió por fin a tomar los cuarteles. Dirigidos por el teniente Benedito y guardias civiles leales, los obreros asaltaron los cuarteles el 31 de julio. Los

oficiales de varios regimientos intentaron sumar sus tropas a la causa insurgente; pero la victoria de los soldados revolucionarios y de las milicias fue completa. Madrid aceptó el *fait accompli*, reconociendo al comité CNT-UGT como Gobierno efectivo de Valencia[236].

En el norte de España los insurgentes estuvieron preocupados durante los primeros días en asegurarse sus victorias iniciales. Hasta mediados de agosto continuaron las huelgas parciales en las ciudades gallegas. Oviedo, aunque capturado por el coronel Aranda el 20 de julio, estaba sitiado por los mineros revolucionarios. En el puerto de Gijón los insurgentes hicieron coincidir su levantamiento con el del coronel Aranda, pero obreros armados con pistolas y dinamita sitiaron los cuarteles y el 17 de agosto les obligaron a rendirse. El puerto pesquero de Avilés y la ciudad portuaria de Santander permanecieron en manos republicanas. Mientras tanto, los obreros portuarios que habían huido de El Ferrol y Vigo formaron guerrillas, así como los mineros asturianos, y los ferroviarios que habían logrado escapar de Valladolid, Alsasua y Miranda de Ebro[237]. Los trenes insurgentes de aprovisionamiento debían circular a marcha lenta por las zonas montañosas de Galicia y León. El maquinista vigilaba la vía por si había minas y en cada vagón de pasajeros o de carga iban dos guardianes armados. En la frontera portuguesa, sin embargo, las autoridades insurgentes podían contar con la policía fronteriza, que les entregaba los guerrilleros y los refugiados civiles.

Durante los meses de agosto y septiembre, las luchas más importantes tuvieron lugar en Andalucía y Extremadura, donde el ejército de África, sin dejar de tener la iniciativa un solo momento, inició la marcha al norte de Sevilla hacia Mérida y Badajoz, y luego por el valle del Tajo arriba hacia Toledo y Madrid. A partir del 5 de agosto, el general Franco controlaba el estrecho de Gibraltar gracias a sus aviones italianos, la amistosa neutralidad de los ingleses, y la incompetencia y antigüedad de la armada re-

publicana. A finales del verano habían sido transportados casi 20.000 moros y legionarios, que fueron organizados en «columnas» de 500 a 1000 hombres bajo el mando de oficiales españoles: el general Varela; los coroneles Yagüe y Carlos Asensio; los tenientes coroneles Barrón, Delgado y de Telia; los comandantes Castejón y Mizzian. Dichos oficiales se sentían muy orgullosos de servir en el magnífico Tercio de extranjeros, creado por el general Francisco Franco. En sus carteras llevaban retratos de sus camaradas muertos en el cuartel de la Montaña o en Barcelona el 19 de julio. Estaban en excelentes relaciones con sus soldados. Oficiales españoles que regresaban en avión a Melilla desde el frente, escribían y llevaban cartas para los soldados, y entregaban a sus familias los anillos, dientes de oro y relojes tomados de los cadáveres de los «rojos». Cada soldado llevaba un fardo de unas 60 libras, 200 cartuchos y los largos cuchillos curvados con los cuales los moros remataban a los heridos o asesinaban en silencio a los centinelas adversarios durante la noche. Las columnas viajaban en camiones, disfrutando de la camaradería de las pequeñas unidades escogidas y viviendo a costa de un país mucho más rico que el Riff, en donde habían librado sus batallas anteriores.

Los camiones solían detenerse a unas cien yardas antes de cada pueblo, y los hombres avanzaban con precaución a pie. Si había señales de resistencia, la artillería ligera bombardeaba los muros o los edificios de piedra que verosímilmente podían ser reductos. Luego el pueblo era tomado en una carga a la bayoneta, y por medio de altavoces se ordenaba que se abrieran todas las puertas y se desplegaran banderas blancas. Todo aquél que fuera sorprendido con armas en la mano o con el hombro magullado por el retroceso de un fusil al disparar era fusilado. Según los conceptos legales de los oficiales insurgentes, los hombres de las milicias del Frente Popular que no llevaban uniforme eran los «rebeldes» y por lo tanto no tenían derecho a la vida. Los milicianos luchaban desesperadamente mientras les duraban las municiones o goza-

ban de la protección de edificios o árboles, y a menudo el ejército de África tuvo que pagar con fuertes bajas su menosprecio del enemigo. Cuando se veían amenazados por un movimiento de flanco, o eran desalojados por el fuego de la artillería, los milicianos huían a lo largo de las carreteras, sin tener la menor idea de las ventajas de desplegarse por el campo. Las ametralladoras insurgentes, colocadas en las carreteras, mataban a los fugitivos como conejos; los cadáveres eran amontonados, rociados con gasolina y quemados. Un pelotón se quedaba atrás para asegurar las comunicaciones… y la tranquilidad del pueblo. La columna proseguía su camino para el Norte hacia el próximo objetivo.

En Guareña, donde el comité revolucionario había establecido una «República» anarquista, el periodista inglés Cecil Gerahty tuvo la rara oportunidad de entrevistarse con uno de los diez campesinos que iban a ser fusilados. El sistema de altavoces locales, al que este hombre se refería como la «radio», y al que consideraba como una especie de oráculo sobrenatural, le había convencido de que matando a los terratenientes automáticamente se produciría una España más feliz. Ahora se daba cuenta de que había «apostado por un caballo equivocado», y así, sin recibir los sacramentos y sin rechistar, se encaminaba hacia la muerte[238].

Unos kilómetros más al Norte, en Almendralejo, unos cien milicianos se retiraron a la torre de la iglesia cuando los insurgentes entraron en el pueblo. En junio los terratenientes habían anunciado que no darían ni un día de trabajo a los peones anarquistas y amenazaron con matar a cualquier terrateniente que lo hiciera. Los hombres que se hicieron fuertes en la torre resistieron durante una semana al cañoneo, aunque carecieron de agua todo este tiempo; al octavo día se rindieron los 41 supervivientes, que fueron formados en fila y fusilados.

El incidente más conocido de esta salvaje campaña ocurrió cuando Badajoz fue tomado el 14 de agosto. La ciudad tenía unos 40.000 habitantes y estaba próxima a la frontera portugue-

sa. Su caída fue especialmente significativa para los insurgentes porque les permitió unir sus ejércitos del Norte y del Sur sin tener que utilizar las carreteras portuguesas. Badajoz era también la capital de la provincia en donde estaba ocurriendo la revolución campesina en vísperas de la guerra civil, y en donde la República había comenzado su mayor proyecto de regadíos. La ciudad fue tenazmente defendida por unos 4000 milicianos equipados con algunos morteros y más municiones para fusiles y ametralladoras que lo que las columnas de África habían encontrado hasta ahora. Los defensores instalaron ametralladoras en las murallas de la ciudad y taponaron con sacos de arena las puertas de acceso. El corresponsal inglés Harold Cardozo vio a los ingenieros insurgentes volar con dinamita una de las puertas, a través de la cual los legionarios se lanzaron al asalto atacando a los defensores por la retaguardia. En la primera oleada perdieron a 127 hombres en 20 segundos de fuego de ametralladora; pero los supervivientes, en un asalto desesperado, tomaron la barricada a punta de bayoneta. Dentro de la ciudad el coronel Yagüe puso en libertad a unos 380 prisioneros derechistas y oyó historias de los fusilamientos de curas y terratenientes.

Algunos corresponsales franceses y portugueses, y el periodista americano Jay Allen, fueron testigos de la toma de la ciudad y de la represión que siguió. Los portugueses fueron indiscretos al hablar de las ejecuciones, quizá porque no se daban cuenta, al igual que los oficiales insurgentes, de la impresión que tales procedimientos iban a causar en la opinión pública fuera de la zona de batalla. Jay Allen quedó horrorizado al ver un modo de hacer la guerra que ningún americano había visto en el siglo XX, y su reportaje sobre los fusilamientos en masa en la plaza de toros electrizaron a la opinión mundial. Sin lugar a dudas exageró al emplear la cifra de 4000. El coronel Yagüe dijo a un corresponsal portugués que quizás 2000 era una cifra ligeramente elevada. Nadie puede decir con seguridad si el coronel sabía exactamente

cuántos eran los fusilados, o si se contentó con dejar suponer al periodista que él podía haber mandado fusilar todos esos hombres como si tal cosa. Pero no hubo ninguna duda de la ceremonia nocturna, que ocurrió en otras ciudades además de Badajoz, sin que estuvieran presentes corresponsales extranjeros. Y tampoco había duda de que oficiales españoles cruzaban la frontera hasta Elvas, deteniendo refugiados de las milicias, así como civiles, sacando a sus enemigos de las camas de los hospitales, y fusilando a todos los apresados con las ya citadas magulladuras en el hombro[239].

Durante agosto y septiembre las milicias republicanas se fueron retirando rápidamente. De vez en cuando, un gesto heroico de resistencia retrasaba a los conquistadores durante un par de días y les costaba unas cuantas vidas más. En ocasiones, un bombardero Breguet, pilotado por un aviador republicano o un aviador francés voluntario, hostigaría a los convoyes de camiones y permitiría así al Gobierno de Madrid seguir el rápido progreso de las fuerzas insurgentes. Pero virtualmente no había oficiales de carrera de Estado Mayor, ni alambre espinoso, ni artillería, ni palas y muy pocas municiones. Los oficiales leales eran necesarios para preparar la eventual defensa de Madrid. La falta de pilotos calificados y la escasez de piezas de repuesto y de gasolina hacían que la mayoría de los aviones permanecieran inactivos en el suelo; además, los Breguets con quince años de antigüedad, que carecían de armamento en el morro y volaban lentamente, eran un objetivo fácil para los aviones italianos de caza.

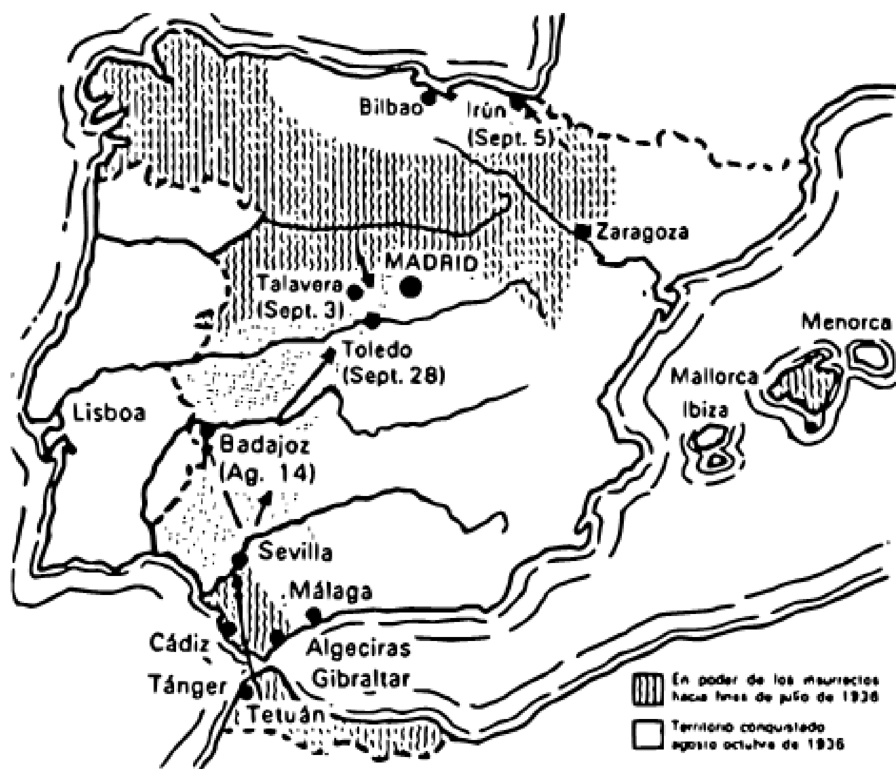
En la ciudad de Toledo se estaba desarrollando una situación única. Se habían dado muchos casos de cuarteles que quedaron aislados o de ciertas zonas de una ciudad sitiados durante varias semanas después del 18 de julio. En Toledo, luego de tres días de luchas indecisas en las estrechas calles de la ciudad medieval, unos 1000 guardias civiles y de asalto, falangistas y un puñado de cadetes de infantería se retiraron al Alcázar. Se llevaron con

ellos a unos centenares de mujeres y niños, muchos de ellos familiares de conocidos izquierdistas[240]. Bajo la dirección del coronel Moscardó, se prepararon para resistir un sitio en toda regla mientras esperaban el triunfo del alzamiento militar.

El Alcázar era una fortaleza de piedra que se levantaba sobre una colina que dominaba el valle del Tajo. Los republicanos ocupaban los edificios próximos. Sitiadores y sitiados se podían gritar unos a otros sin necesidad de altavoces. Cuando estuvo claro que el alzamiento había fracasado, los republicanos esperaron que la fortaleza se rindiera. Al saber que el ejército de África inició su rápido avance desde Andalucía, los defensores cobraron ánimos y los atacantes empezaron a preguntarse si la escasez de alimentos y agua serían suficientes para forzar a una capitulación antes de que les llegara ayuda de fuera. Nadie estaba seguro de cuántas personas había en la fortaleza y de qué provisiones disponía el coronel Moscardó para alimentarles. El Gobierno carecía virtualmente de cañones pesados capaces de perforar los muros de piedra que en muchos puntos tenían varios pies de grosor. Hasta el 24 de agosto no cañonearon la fortaleza, en parte por falta de proyectiles y espoletas, en parte porque los hombres de las milicias eran conscientes del hecho de que dentro había familiares suyos. A finales de mes, dispararon un obús del calibre 155 y varios del 15 y comenzaron a excavar túneles con la intención de volar los sótanos en donde se refugiaban la guarnición sitiada y sus rehenes.

El 9 de septiembre, el teniente coronel Vicente Rojo, que había sido instructor de la Academia Militar del Alcázar, que procedía de una familia derechista y que tenía algunos amigos entre los defensores, entró en la fortaleza con bandera blanca, tratando de conseguir su rendición, o al menos la liberación de los rehenes. El día 11, un sacerdote madrileño, el padre Vázquez Camarasa, trató de persuadir al coronel Moscardó de que soltara a las mujeres y a los niños. El coronel hizo venir a una mujer, quien a

su presencia aseguró al padre que las mujeres del Alcázar deseaban compartir la misma suerte que sus hombres. Dos días después el embajador chileno, decano del cuerpo diplomático, vino a Toledo con el mismo propósito. El coronel Moscardó envió a su ayuda de campo para saludar al embajador por un altavoz y para decirle que los defensores escucharían respetuosamente cualquier mensaje que él deseara enviarles a través del «Gobierno nacional de Burgos». Ante la frase «Gobierno nacional», los milicianos empezaron a insultarlos, y el diálogo no pudo proseguir[241]. El 18 de septiembre los atacantes hicieron estallar tres minas subterráneas, que causaron algún daño al edificio, pero no a sus ocupantes. El día 26 el general Varela acampó al otro lado del río, frente al Alcázar. La mayoría de los desmoralizados milicianos ya se estaban retirando hacia Madrid. Algunos centenares resistieron desesperadamente en el cementerio a la mañana siguiente; pero fueron intensamente cañoneados y el cementerio fue tomado, piedra a piedra. Los insurgentes avanzaron entonces hacia los cuarteles y el hospital, donde mataron a los heridos en sus camas. A última hora de la tarde, los famélicos ocupantes de la fortaleza salieron a las calles ahora dominadas por los moros y los legionarios. Un coronel Moscardó muy delgado y barbudo informó al general Varela al día siguiente: «Sin novedad en el Alcázar». Los defensores habían sufrido unas 80 bajas en las 10 semanas que duró el asedio. El ejército insurgente y los defensores del Alcázar asistieron enfervorizados a una misa, y los insurgentes se dispusieron, tras un breve descanso, a proseguir su marcha hacia Madrid.



Mapa 3. Avances de los insurgentes de agosto a octubre de 1936.

En las semanas siguientes el coronel Moscardó se convirtió en el símbolo de la causa insurgente. Se dio mucha publicidad a la historia referente al jefe de las milicias que telefoneó al Alcázar el 23 de julio. Entre sus rehenes tenía a un hijo de Moscardó, al que acercó al teléfono para que explicara a su padre que sería fusilado si la fortaleza no se rendía. El coronel contestó a su hijo que encomendara su alma a Dios y que muriera valientemente. El hijo fue ejecutado un mes más tarde[242]. El texto de la conversación ha sido inscrito en muchos idiomas en los muros del sótano del Alcázar, que ahora es uno de los principales monumentos de la victoria nacionalista. En España, la gente aún discute apasionadamente sobre si esta conversación tuvo o no tuvo lugar[243]. Pero la verdad en este caso es menos importante que su significado simbólico. En la guerra civil española hubo padres en ambos

bandos que habrían hecho lo mismo que el coronel Moscardó afirmó que había hecho; y hubo hijos que habrían muerto de buena gana después de tal mandamiento de sus padres.

La victoria de Badajoz permitió a los insurgentes recuperar la iniciativa en el Norte. A finales de julio controlaban la frontera pirenaica desde casi los límites de la provincia de Lérida hasta unas 20 millas del golfo de Vizcaya. Ahora estaban ansiosos por cerrar la frontera en Hendaya y eliminar la molesta amenaza vasca a su retaguardia. Tras Badajoz, el general Franco pudo desprenderse de unos 700 legionarios y enviar una batería de cañones de 6 pulgadas para reforzar al jefe carlista coronel Beorlegui, en su campaña para capturar Irún. Hacia el 26 de agosto, los bombarderos de transporte Junker llevaron estas nuevas unidades al cuartel general de Beorlegui. La lucha por Irún duró una semana e involucró a unos 2000 hombres por cada bando, estando los atacantes mucho mejor entrenados y armados. En las tropas de Beorlegui había más o menos la misma proporción de legionarios, carlistas, falangistas y guardias civiles. Por la noche tomó las colinas que dominaban la ciudad, comunicándose sus tropas por medio de cuernos de caza. Con las primeras luces del día los atacantes que avanzaban hacia la ciudad habían sufrido fuertes pérdidas, debidas a su exagerada confianza en sí mismos y a un fuego de ametralladoras más intenso de lo que habían esperado.

Los milicianos que defendían la ciudad fueron reforzados por varios centenares de catalanes que habían venido a través del sur de Francia y que luego entraron de nuevo en España por Hendaya. El jefe del Gobierno, Léon Blum, había ordenado el cierre de la frontera el 8 de agosto, como un primer paso para el establecimiento de la política de No-intervención.

Como resultado, los defensores de Irún no pudieron recibir media docena de camiones cargados de municiones que estaban en la aduana de Hendaya; pero la política nacional no impidió a

la población civil que ayudara a los republicanos, con los que simpatizaban la mayoría. Los campesinos franceses apostados en las colinas cercanas a las tropas de Beorlegui señalaban a los defensores de Irún la posición de sus cañones y los preparativos generales para sus movimientos diarios. La policía fronteriza no hizo virtualmente ningún esfuerzo para impedir que los catalanes armados fueran a Irún, o que los milicianos cruzaran la frontera diariamente para comer y dormir a salvo, y luego regresar a la mañana siguiente con toda la munición para fusiles y ametralladoras que se podían llevar[244].

Entre el 26 de agosto y el 4 de septiembre, la superior organización, habilidad y armamento, dio como resultado la completa victoria del coronel Beorlegui. En los últimos momentos, los anarquistas que huían incendiaron la ciudad que ya no podían defender. Algunos centenares de milicianos pasaron a Francia; pero la mayoría se retiraron bajo la dirección de los vascos hacia San Sebastián. En esta ciudad, los nacionalistas vascos, decididos a no verla inútilmente destruida, dispusieron una retirada ordenada hacia posiciones más defendibles, y llegaron a un acuerdo con los insurgentes que avanzaban para dejar un esqueleto de Gobierno para que controlara la situación hasta la entrada de las fuerzas del general Mola el 12 de septiembre.

Hablando en términos militares, esta campaña del Norte no se caracterizó por la ferocidad que había marcado la guerra en Andalucía. Ni los carlistas ni los nacionalistas vascos fusilaban a sus prisioneros. Ambos se sentían orgullosos de lo correcto de la conducta de sus tropas. Los anarquistas y los legionarios eran elementos minoritarios en sus respectivos bandos y no estaban en condiciones de imponer normas de conducta. A los españoles les gusta declarar, y en ciertos aspectos tienen mucha razón, que ellos no sienten los prejuicios raciales tan característicos de los pueblos germánicos y anglosajones; pero el contraste entre la conducta militar en Andalucía y en el Norte reflejaba sentimien-

tos raciales muy profundos. En efecto, no es raro que españoles de las ideologías más diversas se refieran a los andaluces como gentes inferiores y consideren a los vascos y a los navarros como «lo mejor» de España. En Andalucía, los oficiales de carrera a menudo se comportaron como si estuvieran dedicados a una operación de exterminio químico. En el Norte miraban a sus enemigos como seres humanos, tan disciplinados, tan católicos y tan honorables como ellos, a pesar de las amargas diferencias en sus puntos de vista políticos.

Capítulo 16

REVOLUCIÓN Y TERROR EN LA ZONA DEL FRENTE POPULAR

LA agitación de los meses de primavera minó gravemente la autoridad del Gobierno republicano, y el pronunciamiento del 17-20 de julio destruyó temporalmente la autoridad que le quedaba al Estado. La policía desapareció virtualmente de las principales ciudades durante los primeros días del alzamiento. Los elementos más activos del ejército y de la guardia civil apoyaban a los insurgentes, y el Gobierno se mostraba vacilante, a menudo con buenas razones, en confiar en las muchas unidades y oficiales aparentemente leales. Tras la rendición del general Goded, Luis Companys convocó en su despacho a los principales dirigentes anarquistas. Les dijo que habían salvado a Cataluña de la rebelión militar; reconoció que eran los amos de Barcelona, y que podían disponer de su poder como mejor les conviniera. Al mismo tiempo, esperó que recordaran los servicios que él y la Esquerra habían prestado a la clase obrera, y que aprovecharían su experiencia en el Gobierno en la lucha contra el fascismo y en ulteriores avances sociales[245]. Companys, como abogado de los sindicatos, había defendido a muchos de los hombres a quienes hablaba. En Madrid, el presidente del Consejo de ministros, José Giral, profesor de química, no tuvo tales contactos con los dirigentes de la clase obrera; pero muy bien pudo haber hablado de un modo similar, porque la situación en ambas capitales era la

misma. Los obreros habían derrotado a la rebelión, y en sus manos estaba el poder político efectivo.

En la segunda mitad del año 1936, en el territorio que permanecía en manos del Frente Popular tuvo lugar la revolución social más profunda ocurrida desde el siglo XV[246]. Las principales características de tal revolución eran la pasión por la igualdad, y la afirmación de la autoridad local y colectiva. En Barcelona desaparecieron de las calles los sombreros de fieltro, símbolo del status de la burguesía. Los restaurantes de lujo y los hoteles fueron, o bien colectivizados o incautados por los empleados. Los salarios siguieron siendo los mismos. Los camareros usaban chaquetas blancas y servían con la misma cortesía y finura que antes, por los mismos precios; pero los clientes cenaban en mangas de camisa y la dirección obrera abolió las propinas. Todos los obreros llevaban armas, y en un país largo tiempo dominado por una policía brutal, estas armas, a menudo completamente inservibles, eran más importantes como símbolos de emancipación que como tales armas. La renta y los servicios públicos eran controlados por comités de vecinos que incluían un miembro de cada partido del Frente Popular, pero que, sin embargo, estuvieron completamente dominados los primeros días por los anarquistas. Las espaciosas mansiones particulares de los ricos que habían huido a Francia fueron convertidas en escuelas, orfanatos y hospitales. Pablo Casals donó 10.000 pesetas como socorro de guerra y organizó conciertos gratuitos (como había hecho antes de la guerra) en las barriadas industriales.

Los obreros se hicieron cargo de la mayoría de las fábricas. Algunos propietarios fueron fusilados, otros huyeron de la ciudad, y los hubo que siguieron trabajando en sus industrias incautadas, ganando el salario que se pagaba a los altos jefes administrativos e ingenieros. Los obreros no perdieron su sentido de las realidades prácticas. Los tranvías y autobuses, los servicios de agua y luz funcionaban normalmente. Los talleres de maquinaria y los gara-

jes proseguían sus negocios como siempre, algunos de ellos preparándose asimismo para fabricar granadas, espoletas de obuses y corazas para carros y camiones destinados al frente. Los sombrereros pidieron a la Generalitat que informara al pueblo de Barcelona de la crisis existente en su industria. El personal técnico de las fábricas textiles envió vendedores a Francia y esperó ganarse el mercado ruso igualmente. Los obreros de la fábrica de *champagne Codorniu* hicieron lo mismo. Los salarios se elevaron en un 15 por ciento y las rentas se disminuyeron en un 50 por ciento en los pisos baratos. A todo el mundo se le aplicó un impuesto del 10 por ciento de su salario para el esfuerzo de guerra. Hubo una demanda extraordinaria en la venta de boinas, corbatas rojas, otros recuerdos de guerra y literatura pornográfica; pero las cuentas bancarias de ahorros también aumentaron rápidamente durante el mes de agosto. Los obreros se sentían orgullosos del rápido restablecimiento de la actividad industrial tras la semana revolucionaria del 19 de julio. Miraban con simpatía a la Unión Soviética; pero al mismo tiempo insistían en el control local antes que central de las fábricas colectivizadas y ponían énfasis en la intimidad que reinaba en las empresas predominantemente pequeñas de la industria catalana. La mayoría de los negocios individuales al *detall* fueron respetados. Walter Duranty, corresponsal del New York Times, que había sido testigo de las diversas fases de la revolución rusa, comparaba el espíritu de Barcelona en el otoño de 1936 con el de la Nueva Política Económica en la historia soviética[247].

En Madrid, los ebanistas, zapateros y barberos sindicados colectivizaron sus talleres y establecimientos. El Palace Hotel fue convertido en un orfanato, y durante el mes de agosto estuvo lleno hasta rebosar de niños que habían perdido a sus padres en la retirada de Andalucía y Extremadura. Los negocios propiedad de extranjeros fueron confiscados al principio. Muchos de ellos estaban incorporados a firmas puramente españolas para evadir los

impuestos a los negocios que no eran propiedad de nacionales, y los propietarios los perdieron para siempre; muchos de los otros fueron devueltos a sus dueños en el transcurso del otoño. Aquí los sindicatos, al igual que en Barcelona y Valencia, abusaron de la repentina autoridad que tenían en sus manos, colocando el letrero de incautado en toda clase de edificios y vehículos; pero la insistencia en colectivizar toda la economía no era tan fuerte en Madrid como en Barcelona. Y por las calles podía verse a mujeres bien vestidas, de indudable origen burgués, así como dependientes de los comercios, que pedían donativos para ayuda médica, del mismo modo que antes habían pedido para ayudar a las misiones en el extranjero.

En todas las zonas rurales del territorio dominado por el Frente Popular tuvo lugar la correspondiente revolución, aunque sus características variaron mucho de pueblo a pueblo. Una vez más, la igualdad social y el control local fueron los impulsos por los que se guiaron más que por cualquier concepción organizada de la nueva sociedad que había de ser creada. Casi en todas partes las rentas fueron abolidas y los registros de la propiedad incendiados. En algunos casos, todas las tierras del pueblo fueron colectivizadas, mientras que en otros las tierras pertenecientes a propietarios que habían huido o sido fusilados fueron distribuidas entre la mayoría de los campesinos. A veces las tierras confiscadas eran colectivizadas, mientras que en otros lugares las relaciones de propiedad permanecieron intactas. Casi en todas partes los antiguos ayuntamientos fueron reemplazados por comités que incluían un miembro de cada partido del Frente Popular. En algunos casos esto supuso muy pocos cambios; si, por ejemplo, el anterior alcalde había sido un socialista o un republicano de izquierdas, se convertía simplemente en jefe del comité del pueblo y continuaba ejerciendo el mando como antes. Sin embargo, dondequiera que la CEDA o la Lliga Catalana habían ganado las elecciones de febrero, lo más probable es que el alcalde y los

guardias civiles hubieran huido, estuvieran presos o hubieran sido asesinados, y nuevos hombres dominaron los comités.

En general, los métodos de trabajo y los salarios tendieron a congelarse. Los campesinos deseaban tierras e igualdad social; pero no eran teóricos. En conjunto, en el verano de 1936 la producción no fue alterada por la revolución, pero no hubo muchas iniciativas con respecto a un cambio en las prácticas económicas existentes. Los comités controlaban los salarios, así como la venta de la cosecha. Convirtieron las iglesias, cuyos altares habían sido frecuentemente incendiados en los primeros días, en mercados, o, si estaban cerca del frente, en hospitales. Algunos comités abolieron el dinero y proclamaron una «República» dentro de sus propios términos municipales. Los campesinos anarquistas consideraban el dinero, después de a la Iglesia, como la principal fuente de corrupción. En Cataluña, la larga tradición comercial e industrial impidió muchos excesos; pero en Aragón, Levante, Castilla la Nueva, Murcia y Andalucía, docenas de pueblos procedieron orgullosamente a abolir el uso del dinero en sus términos. El comercio local se hacía a base de vales o pagando en especie. Los salarios fueron revisados teniendo más en cuenta el número de familiares de un trabajador que su destreza o productividad en el trabajo. El dinero, que seguía siendo un mal necesario para el trato con el mundo exterior, fue confiscado por el comité y dado a los habitantes de los pueblos para compras específicas o gastos de viaje. El desprecio que sentían los campesinos anarquistas hacia el dinero era análogo al de los abstemios hacia las bebidas alcohólicas. Era algo tentador y pecaminoso, pero necesario en ciertas circunstancias. Más su uso debía ser estrictamente controlado, y hablando en términos idealistas, algún día sería eliminado por completo[248].

En las provincias republicanas de Guipúzcoa y Vizcaya, los nacionalistas vascos eran el elemento más fuerte en la política de los pueblos. Las tradiciones de autonomía local y cooperativis-

mo en el uso de máquinas y en la recogida de la cosecha eran muy fuertes; pero no hubo oleada de colectivizaciones ni tal florecimiento de la propaganda anarquista como en el Éste y el Sur. En Asturias se renovaron las tradiciones de octubre de 1934. Los comités de los pueblos colectivizaron todo el comercio, servían comidas a cambio de vales en cocinas públicas y abolieron el dinero para todas las compras locales. Los pescadores de Avilés y Gijón colectivizaron su equipo, los muelles y las fábricas de enlatado[249]. Desde la Edad Media habían poseído sus botes de pesca de forma colectiva y estaban autorizados a disponer de parte del cupo de pescado para su trueque. Los pescadores de Cataluña, algunos de los campesinos montañeses de Aragón y del Maestrazgo, así como los agricultores de Valencia, tenían tradiciones colectivas similares; pero estos rasgos eran meras supervivencias de una economía medieval y a menudo iban acompañados de emociones políticas reaccionarias o izquierdistas[250].

En Asturias, sin embargo, la tradición política coincidía con la conciencia política contemporánea. Los mineros y los pescadores habían discutido durante años el desarrollo de la revolución soviética, las teorías de los escritores bolcheviques y trotskistas, así como de los anarquistas. Las formas revolucionarias del pensamiento marxista gozaban de mayor influencia en general entre el proletariado asturiano que en el de las otras provincias de España. Finalmente, en los secos distritos cerealísticos de la España central y meridional, la Federación de Trabajadores de la Tierra de la UGT dirigía unas 100 granjas colectivas calcadas de modelos soviéticos. Algunas de éstas ya fueron establecidas en 1934 y la mayoría de ellas funcionaron hasta el final de la guerra civil[251].

Las reacciones psicológicas del pueblo fueron tan variadas y originales como las formas de colectivismo. En un pueblo de Aragón, el terrateniente local era muy querido, y nadie le molestó tras la expropiación de sus fincas. El comité revolucionario es-

tablecido por la columna de Durruti abolió el dinero y se hizo cargo de todos los salarios y de la venta de la cosecha. Emplearon al terrateniente en su administración, y los campesinos iban a pedirle en secreto que llevara cuentas convencionales en pesetas, por si acaso la situación volvía a cambiar.

Los anarquistas predicaban la igualdad de los sexos; pero continuaron creyendo que la dignidad humana requería comedores separados para los hombres y mujeres trabajadores. A pesar de las apariencias exteriores, a menudo eran más conservadores en sus instintos sociales que la burguesía. Federica Montseny, la destacada dirigente anarquista catalana, confirmó a un visitante extranjero que los anarquistas se oponían verdaderamente al matrimonio convencional. Prosiguió explicando que ellos favorecían la unión libre. En vez de que los padres vendieran virtualmente a sus hijas a un esposo, al que las desposadas habían de prometer obedecer para siempre, los anarquistas eran partidarios de una unión libre basada en mutuo consentimiento y en la responsabilidad compartida. La señora Montseny no creía en el divorcio fácil; permitiría la práctica del control de nacimientos, pero no creía que las mujeres españolas quisieran evitar el tener hijos, y pensaba que los niños a menudo eran mejor educados en casa que en la escuela. Le preguntaron su opinión sobre los piropos, los cumplidos vigorosos y a menudo rudos que cualquier hombre desconocido dirigía a las chicas en la calle. Ella pensaba que a las mujeres siempre les gustarían los cumplidos, incluso en una sociedad igualitaria, y sonrió, incrédula, cuando su visitante le contestó que las mujeres de ciertos países se sentirían insultadas por el piropo[252].

Los resultados prácticos de la colectivización variaron grandemente para hacer un juicio general que abarque a todos ellos. Donde siguió habiendo disponibilidad de materias primas, donde los trabajadores eran hábiles y se mostraban orgullosos del mantenimiento de la maquinaria, donde una proporción razona-

ble de personal técnico simpatizó con la revolución, las fábricas siguieron funcionando con éxito. Donde había escasez de materias primas, no había manera de encontrar piezas de repuesto; donde la rivalidad entre la CNT y la UGT amargó a los trabajadores, colocando las consideraciones políticas por encima de la eficacia en el trabajo, las fábricas colectivizadas fueron un fracaso. Igualmente, en el campo, hubo colectividades donde las máquinas fueron empleadas de modo inteligente y los problemas humanos se resolvieron con tacto, y hubo colectividades donde la ausencia de dirección inteligente condujo a la desmoralización de los campesinos y a una gran reducción de la producción. En los pueblos donde el dinero fue abolido hubo comités que demostraron gran agudeza en la venta de la cosecha y distribuyeron el dinero para todas las compras exteriores razonables, y hubo comités que simplemente quemaron o robaron los recursos en efectivo de su pueblo. El denominador común de todas estas situaciones fue la energía con que las gentes sencillas formaron comités, sustituyeron alegremente una autoridad central que apenas si habían respetado y llevaron sus propios asuntos de forma colectivista e igualitaria. Era un fenómeno que ya había ocurrido antes en la historia española, especialmente durante la resistencia contra Napoleón, en las comunidades carlistas durante la década de los 1830, y en las revueltas «cantonalistas» y «federales» de 1873.

Estas variadas revoluciones urbanas y rurales estuvieron acompañadas en diversas zonas por grados variables de terror. En Madrid y Barcelona los obreros fusilaron a todos los oficiales insurgentes que pudieron encontrar. Los oficiales más importantes tuvieron que enfrentarse a juicios sumarísimos que dictaron numerosas sentencias de muerte por rebelión militar. Fue un desagradable deber del Gobierno enteramente republicano de Giral el confirmar o conmutar estas sentencias. Confirmó la de los generales Goded y Fanjul y conmutó la mayoría de las otras.

En las grandes ciudades la purga principal fue realizada por iniciativa de los elementos del ala izquierda del Frente Popular. En Madrid, la CNT, la UGT y el Partido Comunista tenían sus propias listas de sospechosos. *Claridad*, Mundo Obrero y la prensa anarquista «exponían» diariamente las maquinaciones de los «fascistas» locales y pedían vigilancia contra los «enemigos de clase». Era más peligroso ser un conocido partidario de Lerroux o de Gil Robles que ser monárquico. Estos últimos jamás habían pretendido aceptar la República. Los primeros eran mirados como traidores, cuyos jefes habían saboteado los avances sociales de la República durante el período de 1934-1936, y que ahora habían aparecido en Lisboa, ofreciendo sus servicios al general Franco.

El nivel de los autoconstituidos comités de purga era inevitablemente muy tosco. No figuraban en ellos abogados. El acusado que era considerado culpable, para probar su inocencia tenía que buscar testigos en cuestión de horas. Si alguien encendía una luz de noche, ¿quién determinaba si es que estaba buscando sus cigarrillos o estaba haciendo señales a un avión enemigo? Si escuchaba radio Sevilla con el volumen demasiado alto, ¿no estaría tratando de desmoralizar al vecindario con las noticias de las victorias de los insurgentes? ¿Trataba de eludir la ridícula censura de las noticias de la prensa de Madrid? ¿O es que simplemente era duro de oído? La vida de las personas dependía del modo como tales preguntas fueran contestadas. Los comités tomaban muy en serio su trabajo. La CNT, la UGT y los comunistas se consultaban a menudo y confrontaban sus listas. Si un nombre aparecía en las tres, había una gran presunción de culpabilidad. Si aparecía sólo en una, el acusado sería benévolamente escuchado, y si se declaraba inocente, sería invitado a una ronda de copas y se le daría una guardia de honor a su regreso a casa. Los comités eran capaces de fusilar a los informadores falsos[253].

Mientras que en Madrid las organizaciones revolucionarias en general cooperaban entre sí, en las otras ciudades populosas la mutua rivalidad era un importante elemento de terror. En Barcelona, unos cuantos dirigentes laborales prominentes murieron como consecuencia de las escaramuzas entre la UGT y la CNT en los muelles del puerto. El POUM trotskista y el PSUC dirigido por los comunistas se dispararon entre sí de paso que disparaban contra los capataces reaccionarios. En Valencia y Málaga la sanguinaria lucha entre las facciones de la UGT, la CNT y los comunistas produjo algunos muertos.

Los individuos prominentes fueron víctimas de venganzas por ofensas reales o imaginarias. Un grupo de asturianos fue al hospital militar de Madrid para matar al general López Ochoa, que mandó las fuerzas militares en Oviedo en octubre de 1934. La verdad es que hizo mucho para limitar la severidad de la represión, pero los asturianos lo hacían responsable de sus sufrimientos. El 23 de agosto, tras un misterioso incendio en la cárcel Modelo de Madrid, los guardianes decidieron fusilar a unos catorce prisioneros prominentes. Entre los escogidos figuraban Melquíades Álvarez, anterior diputado por Oviedo, que alabó al general Sanjurjo tras la fallida sublevación de éste en 1932, y que en sus discursos en público se refirió a los socialistas como «traidores». También fusilaron a Fernando Primo de Rivera, hermano del fundador de la Falange; a Julio Ruiz de Alda, uno de los fundadores de la Falange; a Rico Avello, que era ministro de la Gobernación en 1933 cuando las izquierdas perdieron en las elecciones; al general Villegas y al exjefe de la policía de Madrid, Santiago Martín Báguenas, que habían tomado parte en el alzamiento en la capital de España, pero a los que el Gobierno Giral no había juzgado aún. En cada uno de estos casos los guardianes pensaron que estaban cumpliendo con la justicia revolucionaria, una justicia que el Gobierno no había ejercido por demasiado débil e indeciso. A finales de otoño se produjo un incidente in-

ternacional cuando fue asesinado el barón Borchgrave, el encargado de negocios de Bélgica en Madrid. Los asesinos jamás fueron identificados, pero el barón Borchgrave era en 1934 el representante de la casa Mercedes en España, y el auto en que iban los falangistas que mataron a Juana Rico era un Mercedes que pertenecía al señor Merry del Val. En Madrid había decenas de miles de obreros que recordaban el incidente, y que por lo tanto muy fácilmente pudieron incluir el nombre del barón en su lista.

Muchas ejecuciones estuvieron motivadas por represalias contra las incursiones aéreas del enemigo. En Málaga fueron fusilados unos 50 prisioneros tras la incursión del 23 de agosto[254]. Cuando la marina insurgente amenazó con cañonear San Sebastián, los funcionarios de la ciudad anunciaron que fusilarían a dos prisioneros por cada víctima de tal cañoneo. El España y el Almirante Cervera efectuaron un ataque que costó cuatro muertos, y en consecuencia fueron fusilados ocho rehenes. Dos incursiones aéreas sobre Bilbao el 25 de septiembre y el 2 de octubre llevaron al fusilamiento de un centenar de prisioneros[255]. En ambos bandos, lo más corriente era que tras un ataque aéreo se tomara venganza con los encerrados en las prisiones, y los aviadores se exponían a ser linchados si se veían obligados a lanzarse en paracaídas sobre territorio enemigo.

Los primeros tres meses de la guerra fueron el período de máximo terror en la zona republicana. Las pasiones republicanas estaban en su cénit y la autoridad del Gobierno en su nadir. En las principales ciudades, bandas de delincuentes juveniles requisaban automóviles, y se daban a sí mismos títulos dramáticos, como los Linces, los Leones Rojos, el Batallón de la Muerte y los Sin Dios, y efectuaban cada noche un promedio de diez a quince «paseos». En su origen, los autos habían sido incautados como parte de la lucha para aplastar la rebelión. Las víctimas eran en teoría fascistas importantes, y los comités revolucionarios presumiblemente los habrían condenado a muerte como tales. Pero

muchas de las víctimas jamás fueron objeto de ni siquiera la forma más tosca de proceso revolucionario.

El 22 de febrero la amnistía puso en libertad a miles de delincuentes comunes confundidos con los presos políticos, y en los meses de primavera muchos de aquellos pistoleros hicieron acto de presencia ante jueces temerosos de condenarlos por mucha evidencia que tuvieran. Tras el 19 de julio podían añadir a su habitual criminalidad el lujo de «servir a la revolución», mientras que conducían autos y jugaban a hermanos mayores de los mozalbetes revolucionarios. Los sacerdotes eran los «*enemigos de clase*» más fácilmente identificables, y en las ciudades eran los más odiados. En las grandes ciudades fueron asesinados de 5 a 6000 sacerdotes y frailes, y, hablando en general, fueron las principales víctimas del gangsterismo puro[256]. La violencia revolucionaria en cambio dio una fácil oportunidad a la violencia contrarrevolucionaria. La Falange de Madrid y Valencia eliminó a un cierto número de personalidades republicanas y socialistas moderadas. Las grandes capitales como Madrid y Barcelona se prestaban para el anónimo que cubría todo tipo de delitos y que permitía asimismo a los asesinos el considerar su trabajo como algo impersonal. En ciudades meridionales como Málaga y Alicante, la ignorancia y miseria tradicionales de la población favoreció los más crudos instintos de los revolucionarios y los fascistas disfrazados.

El Gobierno sabía muy bien que el terrorismo desenfrenado destruiría todo aquello por lo que luchaba la República. Por la radio advertía repetidamente al pueblo que no abriera las puertas de noche, y que llamara a la policía inmediatamente si alguna banda visitaba un bloque de viviendas. En muchos casos, la llegada de un guardia de asalto, o simplemente la firmeza de un portero, bastaba para dispersar a un grupo desvergonzado de mozalbetes que de otro modo habrían cometido un asesinato. Miles de personas que se sentían amenazadas por sus relaciones

políticas con las derechas buscaron refugios en las embajadas, con el consentimiento del Gobierno, que permitió a un cierto número de legaciones el alquilar edificios cercanos para poder extender su status de extraterritorialidad. Juan Negrín, Manuel de Irujo y otros funcionarios visitaban las cárceles de noche para proteger a los internados de un asalto de la plebe. El 10 de agosto Prieto habló por radio para condenar enérgicamente los «paseos» y la criminalidad desatada, y tras el fusilamiento de los 14 destacados presos de la cárcel Modelo recalcó aún más sus palabras, condenatorias de lo que no fuera lucha frente a frente.

Las fuerzas revolucionarias establecieron tribunales populares en las principales ciudades tras el 19 de julio. El Gobierno ejercía cierta influencia restrictiva sobre estos tribunales, mediante el nombramiento de magistrados moderados y valientes para que los presidieran: hombres como Mariano Gómez en Madrid y Rafael Supervía en Valencia. Éstos no podían contrarrestar el odio de clase, ni imponer un procedimiento impecable sobre fiscales y jurados poco entrenados; pero podían impedir flagrantes errores al considerar las pruebas, proteger a los testigos, aumentar la proporción de las sentencias a cárcel, y disminuir la proporción de penas de muerte. Muchos radicales y cedistas se sentían más seguros en la cárcel que en sus casas porque había menos peligro de que los tribunales les condenaran a muerte que de que les dieran un «paseo[257]».

Sería imposible averiguar cuántas personas inocentes sufrieron prisión, violencia, robo o muerte y cuántas fueron salvadas por la valerosa intervención de ciudadanos, funcionarios del Gobierno, o por el sentido de justicia de los comités revolucionarios. Con autos mal conducidos yendo de cualquier modo por las calles, ametralladoras asomando por las ventanas y *slogans* revolucionarios pintados en las puertas; y con miles de madrileños oyendo de noche los disparos en las afueras de la ciudad y viendo los cadáveres en las carreteras a la mañana siguiente, todo el

mundo se daba cuenta del terror imperante. Por la lógica de los acontecimientos, a lo que se daba menos publicidad era a la resistencia que había contra él. A principios de agosto la CNT y la UGT amenazaron con fusilar a los informadores falsos. Empleados vengativos acusaron a sus patronos de ser «espías fascistas». Personas para las cuales el anticlericalismo era una religión acusaron a los sacerdotes de haber disparado desde las iglesias. Hay casos conocidos en que tras haber puesto en libertad al acusado, el comité se volvía entonces contra el informante y lo acusaba de falso testimonio[258].

A principios de agosto una patrulla anarquista penetró en uno de los colegios de los agustinos en Madrid. El Gobierno acababa de publicar un decreto prohibiendo los registros en los domicilios particulares. Una persona allí presente mostró una copia del decreto que aturdió un poco a los visitantes, mientras otro llamaba al Ministerio de la Gobernación. En pocos minutos llegaron unos guardias de asalto y obligaron a los anarquistas a retirarse. A petición propia, el hombre que habló con ellos en la puerta fue por varios días a la cárcel, como medida de precaución ante la posibilidad de un «paseo» por venganza. Los agustinos siguieron en su colegio sin ser molestados durante todo el resto de la guerra. En el colegio de los salesianos de la Ronda de Atocha, el Gobierno acuarteló un regimiento del Partido Comunista, *La Joven Guardia*. El regimiento y los frailes hicieron vida en común durante toda la guerra. Merece la pena decir que los salesianos tenían muy buena reputación entre el público, debido al gran número de becas que concedían y a su preocupación por la enseñanza de hijos de obreros. Algunos conventos de monjas fueron transformados en hospitales, y muchas de las monjas continuaron sirviendo como enfermeras, mientras que los funcionarios republicanos tomaban como puntillo de honor, haciendo en ello hincapié, el que se les diese buen trato.

En Barcelona, durante los tres primeros meses de la guerra la situación fue similar a la de Madrid. Los sindicatos tenían sus listas de purga; sus gángsteres, y sus delincuentes juveniles de vocabulario anarquista efectuaban «paseos», mientras que los tribunales revolucionarios dictaban frecuentes penas de muerte; estos tribunales libertaron asimismo a muchos inocentes que tuvieron la presencia de ánimo para defenderse en una lucha contra corriente de jurados que los habían dado por culpables, hasta que ellos demostraron su inocencia. La Generalitat no podía oponerse abiertamente a los anarquistas; pero concedía pasaportes gratuitos a los miles de familias de la clase media amenazada. Los anarquistas controlaban los trenes y los puertos fronterizos con Francia; pero en el puerto había varios buques extranjeros, y el Gobierno les ayudó sin hacer ruido a que consiguieran pasaje en ellos.

La furia anticlerical fue mayor en Barcelona que en Madrid. La iglesia de los carmelitas de la calle Lauria había sido uno de los baluartes de los insurgentes el 19 de julio. Cuando los soldados se rindieron y salieron, la multitud prendió fuego al edificio para desalojar a los frailes. Una ametralladora fue situada frente a la puerta principal de la iglesia, y conforme los aterrorizados frailes iban saliendo, eran ametrallados[259]. Se puede decir que todas las iglesias de la ciudad fueron incendiadas. A veces hubo escenas de danzas macabras en torno a los cadáveres y los ataúdes violentados de las monjas ya hacía tiempo fallecidas.

La feroz persecución contra la Iglesia tenía varias causas. Por lo general, tanto en las ciudades como en los pueblos, los sacerdotes tenían cuidado de adular a las «mejores familias» y de compartir las opiniones políticas de los muy unidos aunque pequeños círculos dirigentes. El pueblo español jamás había aceptado como normal la práctica del celibato, y en muchos pueblos no permitían que sus hijas fueran a confesarse con un cura, a menos que éste tuviera una «sobrina» o un «ama», que era en realidad,

con la aprobación de todo el pueblo, su mujer[260]. La Iglesia, al igual que el ejército español, había estado acostumbrada durante siglos a tratar a poblaciones coloniales, masas de indios o de individuos de las tribus de Filipinas, que podían ser embelesados o asustados con métodos muy simples. El pueblo español era en gran parte analfabeto; pero se mostraba resentido por los modales condescendientes de los sacerdotes, especialmente sabiendo, como sabía, que la Iglesia se había apresurado a oponerse a una extensión de la educación pública.

En el pueblo español germinaba un odio mortal contra una Iglesia tan condescendiente. En varias ocasiones ya fueron incendiadas las iglesias en el siglo XIX, al igual que en 1931 y la primavera de 1936. Todas las clases de la población creían fácilmente historias sobre la codicia, las orgías sexuales o las perversiones del clero. El 18 de julio por toda España corrió el rumor de que los curas disparaban contra el pueblo desde los campanarios de las iglesias. Con muy pocas excepciones, esto no fue nunca verdad, excepto en el territorio carlista. Los militares se habían mostrado tan poco dispuestos a confiar a la Iglesia sus planes como los partidos republicanos conservadores. Es probable que los militares ocuparan la iglesia de la calle Lauria considerándola una buena fortaleza de piedra, contando al mismo tiempo con la complacencia de los frailes hacia el alzamiento. Lo importante es el hecho de que la estimación pública por la Iglesia era tan baja, que el pueblo creía fácilmente que los curas estaban disparando contra los obreros. Desde luego, no había duda sobre el conservadurismo predominante de la Iglesia.

La Generalitat envió guardias civiles con vehículos para evacuar a los obispos de Tortosa y Gerona. Ofrecieron el mismo servicio al obispo de Barcelona; pero este último decidió permanecer en la ciudad de incógnito. El cardenal Vidal i Barraquer de Tarragona, que había sido un amigo discreto de la República, fue detenido por los anarquistas en Poblet. Mientras iba sentado

en el asiento de atrás del auto, preparándose para una muerte segura, oyó decir a sus dos aprehensores que iban delante que a ellos no les agradaba matar a un hombre de su carácter y edad. Afortunadamente, los jóvenes no tuvieron que seguir adelante con el encargo. La Generalitat ya había enviado un coche de la policía que rescató al cardenal de manos de los anarquistas; los agentes de la policía lo escondieron entonces en una oficina gubernamental en Barcelona. El cardenal quería afeitarse y ponerse un cuello limpio, y marcharse a través del consulado francés o británico, para no dar a la propaganda la oportunidad de decir que un príncipe de la Iglesia había huido hecho un andrajoso a través de un consulado fascista; pero dadas las circunstancias, el único consulado a esos efectos era el italiano.

En las primeras semanas de la guerra, cada autoridad competente discutió la validez de las otras, y hubo numerosos casos como el del profesor García Morente, decano de la Facultad de Filosofía de Madrid. Fue amenazado con un «paseo» en septiembre, y pidió ayuda a su amigo Bernardo Giner, ministro de Comunicaciones. Este último le proporcionó una cama en una oficina del Gobierno mientras obtenía para él un pasaporte para abandonar España por Barcelona. A su llegada a Barcelona, el profesor vio los letreros indicando que ningún documento librado en Madrid era válido. Entonces fue a ver a su amigo el profesor Bosch Gimpera, rector de la Universidad Autónoma, que le consiguió un pasaporte de la Generalitat, con el que pudo pasar a Francia. Tuvo que dejar a su familia en Madrid y entonces escribió a su antiguo colega, el profesor Juan Negrín, ministro de Hacienda, pidiéndole que facilitara la emigración de su familia. Negrín mandó una patrulla de carabineros (la policía fronteriza que estaba a las órdenes del Ministerio de Hacienda) para que acompañara a la familia de García Morente hasta la frontera francesa[261].

Las revoluciones de los pueblos estuvieron asimismo acompañadas de varios grados de terror. En el sur de España, especialmente, los sacerdotes y los guardias civiles eran prácticamente siempre fusilados si se habían puesto de parte de los insurgentes; a veces fueron fusilados aunque no hubieran hecho nada el 18 de julio. En toda la zona dominada por el Frente Popular, los comités de los pueblos actuaban por su propia iniciativa, y es imposible generalizar los resultados. Algunos pueblos decidieron orgullosos no matar a nadie por «enemigos de clase», sino «reeducarlos», con tal que no sabotearan la revolución. En otros pueblos se advertía al cura y a los terratenientes que se marcharan, al menos por algún tiempo, no fuera a ser que elementos incontrolados decidieran lincharlos. En algunos pueblos se fusiló al cura, a los guardias civiles, a los principales terratenientes y a profesionales tales como notarios y los farmacéuticos, conocidos por ser partidarios del antiguo orden o tenidos por tales. En pueblos con varios miles de habitantes, el promedio de asesinatos era de 4 a 5, o de 35 a 40, tendiendo a ser mayor en Andalucía y en el sudeste que en Levante o Cataluña. A veces las ejecuciones eran llevadas a cabo por los comités locales, y en otras ocasiones por patrullas anarquistas venidas de otros sitios. En Aragón, la columna Durruti, en su marcha hacia Zaragoza, se ganó muy mala reputación entre los campesinos generalmente conservadores. Por otra parte, sin embargo, hay muchos testimonios de la intervención personal de Durruti para impedir el asesinato de terratenientes que no habían ayudado al alzamiento, pero que fueron condenados simplemente por ser conocidos católicos, monárquicos o partidarios de Lerroux. Los anarquistas sentían un respeto casi supersticioso por los maestros y médicos, y salvaron a muchos de ellos, aun cuando era público y notorio que los individuos en cuestión profesaban ideas reaccionarias[262].

Capítulo 17

AUTORIDAD Y TERROR EN LA ZONA INSURGENTE

EN el territorio controlado por los insurgentes no tuvo lugar una revolución como en la España del Frente Popular. Los militares estaban acostumbrados por su profesión a respetar jerarquías y a obedecer directivas centrales. Contaron desde el primer momento con el apoyo de los conservadores en materia social y de los intereses de la propiedad, para quienes, asimismo, el orden y la jerarquía eran principios aceptados. Tras el fracaso del pronunciamiento, los generales y sus partidarios civiles se dieron cuenta de que sería precisa la más estricta movilización de recursos para la conquista de dos tercios del territorio español. En la zona del Frente Popular, el estado de guerra no fue declarado hasta casi prácticamente el fin de la guerra civil. En la España insurgente, el estado de guerra fue proclamado el 18 de julio y mantenido sin excepción a partir de entonces.

Los transportes, los servicios públicos y el suministro de víveres funcionaron con eficacia. Los hombres de negocios de las principales ciudades formaron comités, que asignaron contribuciones financieras a los profesionales, y el personal administrativo y del comercio, y que hicieron colectas de ropas, víveres y medicamentos para el frente. Los militares habían triunfado en las provincias agrícolas menos pobladas. Su zona era fácil de alimentar; pero sufría de una continua escasez de mano de obra,

agravada por la huida de miles de obreros y campesinos hacia las líneas republicanas o hacia montañas inaccesibles. Los precios y los salarios fueron congelados, a veces al nivel del 18 de julio (que era relativamente ventajoso para los obreros), a veces al nivel del 16 de febrero (que era ventajoso para los patronos). De ese modo se logró contener en parte la inflación, aunque, como es natural en tales situaciones, surgió el mercado negro, y muchas de las grandes fortunas de la España de la posguerra se fundaron entonces sobre fructíferas especulaciones de tiempo de guerra. Una gran proporción de los dirigentes sindicales fueron fusilados; se prohibieron las huelgas, y todas las tiendas y oficinas tuvieron que permanecer abiertas obligatoriamente, sin parar mientes en los deseos de sus propietarios.

En las comarcas de España que fueron dominadas inmediatamente por los insurgentes, el gobernador militar de tiempos de la Monarquía, o el capitán general, había ejercido siempre una autoridad superior a la del gobernador civil. Aunque se haya mencionado poco, una de las razones fundamentales por las cuales el cuerpo de oficiales odiaba a la República era el que los republicanos habían intentado establecer por primera vez la supremacía civil en el Gobierno español. El 18 de julio los generales se convirtieron en la primera autoridad civil así como militar, y las líneas tradicionales de la autoridad conservaron su fuerza. La mayoría de los jueces, notarios, guardias civiles y hombres de negocios se pusieron gustosos al servicio de los militares. Los funcionarios del Frente Popular fueron encarcelados, y los civiles partidarios de la rebelión ocuparon sus puestos. Virtualmente no fueron precisos otros cambios en la rutina administrativa.

Sin embargo, la organización de un Gobierno central presentó dificultades. Aunque los militares habían planeado y llevado a cabo la rebelión por su cuenta, estaban ansiosos por asociar a elementos civiles en las responsabilidades gubernativas lo antes posible. Pero Calvo Sotelo, que fue su principal colaborador civil,

había sido asesinado. Lerroux y Gil Robles sentían deseos de ponerse a su servicio; pero si alguno de ellos hubiera penetrado en la España insurgente a finales de julio o en agosto de 1936, habría sido fusilado por falangistas o carlistas fanáticos. En la Pamplona carlista, el general Mola halló que el gobernador civil se mostraba muy poco dispuesto a colaborar y le dio un salvoconducto para que abandonara la ciudad. Del obispo de Pamplona, Marcelino Olaechea, nombrado durante la República, se sabía que estaba preocupado por las condiciones tanto materiales como espirituales de la clase obrera. Cuando Mola hizo su primera aparición en Burgos, los funcionarios civiles acudieron a saludarle, pero prudentemente dejaron en casa las insignias de su cargo.

En estas circunstancias los generales decidieron el 24 de julio formar una junta provisional a base exclusivamente de militares, y que incluía las principales figuras que se habían sublevado en el norte de la Península: Mola, Saliquet, Ponte, Dávila y Miguel Cabanellas. Queipo de Llano ya estaba estableciendo un principado independiente con base en Sevilla, y Franco se unió a la Junta de Burgos a principios de agosto. El general Cabanellas fue elegido presidente. Bien conocido del público por su barba blanca, era un hombre de carácter indeciso al que los otros podrían manejar fácilmente. Durante mucho tiempo había sido masón y republicano declarado, y fue una elección muy conveniente para los insurgentes en un momento en que, en diversos rincones del país, los oficiales aún trataban de que sus soldados se pusieran de parte de los sublevados con el grito de «¡*Viva la República*!».

Sin embargo, en los meses de agosto y septiembre, el verdadero poder político estaba en manos de tres generales: Mola, Queipo de Llano y Franco. La única cuestión que se presentaba era quién se convertiría en el jefe supremo. Mola había dirigido la conspiración y gobernaba en las provincias donde la rebelión gozaba de cierta aprobación popular. Era un hombre astuto, de gran inteligencia y energía, pero su pasado lo condenaba. Los

monárquicos, aunque colaboraron con él en la preparación del alzamiento, recordaban resentidos su actitud hacia Alfonso XIII. Asimismo, había sido director general de Seguridad. Entre sus iguales tenía, por tanto, la reputación de ser «policía» más bien que «soldado», y en general, los autoritarios de la derecha o la izquierda jamás habrían querido entregar el poder supremo al jefe de la policía. El general Queipo de Llano había conspirado contra la Monarquía en 1930. Estaba emparentado con Alcalá-Zamora y fue asimismo jefe de su casa militar presidencial. Era una figura muy colorista, «el verdadero modelo de un general de división moderno» por sus maneras, atractivo para las masas, pero con rasgos ordinarios que lo hacían doblemente despreciable para la aristocracia: tanto por su pasado político como por sus modales.

El general Franco se destacaba muchísimo sobre sus rivales como militar nato, como el hombre que había entrenado a la fuerza militar más temible de España: el Tercio de extranjeros. Se contaban un sinfín de anécdotas referentes a su frialdad bajo el fuego enemigo y su crueldad al imponer la disciplina. Fueran verdad o no, formaron la base de un prestigio incomparable dentro del cuerpo de oficiales. Durante las etapas del planeamiento, Franco fue muy precavido, y no quiso comprometerse hasta el final, no aterrizando en el Marruecos español hasta asegurarse de que la sublevación había triunfado allí. Los románticos y los exaltados lo odiaban por sus cálculos; pero por estas mismas características el financiero Juan March, y los que representaban a los negociantes alemanes, portugueses y finalmente italianos, lo consideraban el más capaz de todos los jefes de la insurrección. Los compañeros del general Franco no olvidaban que éste se retiró de la sublevación de 1932 en el último momento, pero también tenían que admitir que su juicio sobre las realidades políticas había sido mucho más agudo que el de ellos. Franco no era monárquico ni republicano; pero cuando fue nombrado general

por un favor personal de Alfonso XIII llegó a ser el de este rango más joven del ejército español, y los monárquicos esperaban que se inclinara hacia ellos al organizar el nuevo Estado.

El rápido avance del ejército de África se sumó al prestigio militar de Franco. A finales de septiembre los insurgentes hablaban ya de entrar en Madrid el 12 de octubre, Día de la Raza, y se convirtió en necesidad urgente el constituir un Gobierno más sustancial que la Junta de Burgos. El 29 de septiembre, la junta promulgó un decreto nombrando al general Franco «jefe del Gobierno» y de las operaciones militares. El primero de octubre el general Franco promulgó su primera ley, en la cual se refería a sí mismo como «jefe del Estado». En tiempo de guerra, pocas personas se fijan en los cambios ligeros de fraseología. Los generales Mola y Cabanellas protestaron violentamente en privado[263]. Los más observadores se dieron cuenta en seguida de las ilimitadas ambiciones del general Franco, y éste, junto con su hermano Nicolás como principal ayudante, hizo que todos los documentos siguieran refiriéndose a él como jefe del Estado, ya que no elegido por sus iguales, por la gracia de Dios, como después habría de ser acuñado en las monedas españolas.

El establecimiento de la autoridad militar estuvo acompañado en todas partes por el ejercicio masivo del terror. En Andalucía, el general Queipo de Llano se creó una especie de principado semiindependiente para sí mismo, a la manera del Cid o de los *condottieri* italianos. Con sagaz instinto comercial, aseguró la continuidad de las exportaciones de jerez, aceitunas y frutos cítricos, ganándose así la admiración de los hombres de negocios ingleses y manteniendo la afluencia de divisas para el tesoro insurgente. Estableció relaciones comerciales con Lisboa y llegó a rápidos acuerdos para la importación de motores *Fiat* y de productos químicos alemanes. Sus partidarios más leales recibían las necesarias licencias de importación, y todo el mundo recordaba que tenía que ser generoso con el jefe. Mientras tanto, sonriente, acon-

sejaba a los obreros, sobre los que ejercía una innegable fascinación, que se pusieran un salvavidas, como él llamaba a la camisa azul de Falange.

El 23 de julio anunció la pena de muerte para todos los que se declararan en huelga. El 25 requisó nueve de cada diez automóviles de Sevilla de un modo simple y expeditivo, con la siguiente orden: «Me dirijo a los taxistas de Sevilla para informarles que esta tarde, a las cinco en punto, deberán sin excusa presentarse en el Paseo de la Palmera, con todo su equipo, para que se haga un recuento exacto… Tras el recuento procederemos a poner en libertad al presidente y al vicepresidente del sindicato de taxistas, que ahora están detenidos». Mientras tanto, el día 24 decretó la pena de muerte para los marxistas en todo pueblo donde se hubieran cometido crímenes. El día 28 fue la pena de muerte para todo aquél que ocultara armas, y el 19 de agosto para los que exportaran capitales.

En la ciudad, los moros arrancaban arbustos en el parque para hacer fuego con que cocinar sus raciones, y todo el mundo, moros incluidos, llevaba medallas religiosas como signo de conformidad con el nuevo orden. Metódicamente, noche tras noche, todas las personas que se habían relacionado con los republicanos o las izquierdas eran buscadas y detenidas. La cárcel estaba atiborrada, y numerosos prisioneros tuvieron que permanecer varios días, vigilados por sus guardianes, en el patio de una escuela de los jesuitas. Era más peligroso ser masón que socialista. Las listas de condenados a muerte se leían entre la una y las tres de la madrugada, y las ejecuciones tenían lugar en los alrededores de la ciudad, pudiendo todo el mundo oír las descargas en las cálidas noches el verano. Paralelamente a la más o menos ordenada purga de políticos profesionales de acuerdo con las listas, había una represión menos formal de los trabajadores, la mayoría de los cuales habían pertenecido a la CNT, la UGT o los sindicatos comunistas. El jefe inmediato de la represión era el coronel Díaz

Criado, que según todos los testimonios era un alcohólico y un sádico. Las jóvenes podían a veces aspirar a la salvación de las vidas de sus hermanos o novios acostándose con el coronel o sus ayudantes, y el coronel Díaz tenía compadres dignos de él en otras ciudades andaluzas: «*don Bruno*», el coronel de la guardia civil de Córdoba, y en Granada el capitán Rojas, el de Casas Viejas.

En los pueblos que rodeaban a Sevilla, las autoridades del Frente Popular respondieron a la toma de la ciudad por Queipo deteniendo a curas y terratenientes. En algunos de tales casos, después fueron fusilados todos los componentes del Ayuntamiento, aunque los prisioneros, al ser puestos en libertad, testimoniaran a los soldados, al entrar éstos, que no habían sido maltratados. Los oficiales, molestos porque algunos curas intercedían por las vidas de los «rojos», ordenaban que los dirigentes del pueblo fueran fusilados antes de que nadie pudiera interceder con súplicas. Durante toda la campaña de Andalucía y Extremadura, los insurgentes se enfrentaron con el problema de su pequeño número en un país hostil. Los razonamientos sobre un frente mal guarnecido proyectaban su sombra sobre los argumentos legalísticos de que las milicias eran guerrillas, que no tenían derecho a ser tratadas de acuerdo con las leyes de la guerra, y estos argumentos justificaban a su vez las ejecuciones sumarias del tipo que luego realizaron los alemanes en la Europa oriental y en Rusia, durante la segunda guerra mundial.

Mientras tanto, el retrato de Queipo de Llano apareció en todos los edificios públicos y el general comenzó la serie de sus asombrosas charlas por la radio, que le habían de hacer famoso en todo el mundo. Tras comentar las noticias de la guerra, invitaba a los cobardes «rojos» a enviar sus mujeres a Andalucía, donde los hombres eran hombres, y hacía alarde de detalles lascivos, sin duda producto de la imaginación, sobre las hazañas sexuales de los moros. En la zona nacionalista era considerado como un

«tío listo y gracioso», un hombre francote, un soldado animoso quizá con demasiadas trazas cuarteleras en su vocabulario. En la zona republicana era mirado como arquetipo de la degeneración militarista y fascista[264].

En Castilla las autoridades fueron más discretas que en Andalucía y en general la población se mostró más dócil; pero prevaleció un sistema de terror parecido. En los pueblos los militares establecieron comités, que consistían normalmente en el cura, el o los guardias civiles y un terrateniente principal. Si los tres condenaban a un sospechoso, eso significaba la muerte; en casos de desacuerdo, una pena menor; y si se les otorgaba una patente de sanidad, los republicanos o socialistas podían mostrar su gratitud alistándose, o persuadiendo a sus hijos para que se alistaran en el ejército nacionalista. Castilla había dirigido un imperio mundial durante tres siglos, y en ella estaban muy desarrolladas las tradiciones de burocracia, jerarquía y obediencia. En las ciudades importantes los jueces presidían los consejos de guerra masivos, en donde los cargos principales eran los de marxismo y complicidad con el Gobierno del Frente Popular. En la mayoría de los casos no se alegaban delitos o actos específicos de violencia. Desde el momento de la detención, la confiscación de bienes era casi automática.

La mayoría de los condenados lo fueron a penas de prisión; pero noche tras noche, patrullas de la Falange o de la guardia civil visitaban los calabozos, y leían una lista de diez, quince o a veces veinte presos, los metían en camiones, los llevaban a las afueras de la ciudad y los fusilaban, dejando los cadáveres en la carretera para que a la mañana siguiente los viera todo aquél que pasara. Los servicios de Sanidad pusieron anuncios en la prensa pidiendo la ayuda de todos los médicos y farmacéuticos para poder enterrar los cadáveres, y recordando al público que no se hicieran tumbas cerca de los pozos. El general Mola dirigió un telegrama perentorio a las autoridades de Valladolid ordenándoles

que escogieran lugares menos visibles para las ejecuciones y que enterraran a los muertos con más rapidez. Los problemas de identificación eran casi insolubles y, en muchos casos, los familiares tenían miedo de ir a identificar a los suyos. Un rasgo particular de la Falange en sus asesinatos era un tiro entre los ojos. Médicos que durante tiempo habían gozado de la confianza de las familias, ahora se encontraban con que éstas no les abrían de buen grado la puerta, temerosas de que hubieran venido por orden de la policía.

En Salamanca, Miguel de Unamuno, rector de la Universidad más famosa de España, aprobó al principio el levantamiento que pondría fin al desorden y a la fragmentación regional de la nación. Pero pronto vinieron amigos suyos de Granada con la noticia del asesinato del poeta García Lorca y de varios catedráticos universitarios; otros le contaron cómo habían huido de los pueblos de Andalucía en los cuales los revolucionarios habían matado a cuatro o cinco personas, para enterarse luego horrorizados de que el ejército de África había fusilado como represalia diez veces más. En los alrededores de Salamanca comenzaron a aparecer cadáveres arrojados en fosas, aunque no en tan gran número como en Zamora o Valladolid.

El 12 de octubre, Día de la Raza, en que se conmemoraba el descubrimiento de América por Colón y la expansión universal de la civilización hispánica que le siguió, se celebró una ceremonia en la Universidad. En el estrado se sentaron las autoridades universitarias, el obispo de Salamanca y doña Carmen Polo de Franco, esposa del recién nombrado generalísimo. En el curso de la ceremonia, uno de los oradores fue el general Millán Astray, primer jefe de la Legión, hombre que había perdido un ojo y un brazo en Marruecos. Mientras glorificaba el papel de Castilla y de sus ejércitos de conquistadores, sus partidarios situados en el fondo de la sala puntuaron sus frases con el slogan de la Legión: «¡*Viva la muerte*!». Unamuno, como rector, no pudo contenerse,

y aludiendo burlonamente a la frase «viva la muerte», se volvió hacia el general y le dijo con sus mejores modos que el movimiento militar necesitaba no sólo vencer, sino también convencer. Y no creía que estuvieran capacitados para esta última tarea. Sólo la intervención de la señora Franco impidió que el enfurecido Millán Astray, que gritó: «¡Muera la inteligencia!», pegara a Unamuno[265]. Al día siguiente, cuando Unamuno entró en el casino para tomar su café, como todas las mañanas, le informaron que había sido expulsado del mismo, y poco después fue destituido como rector de la Universidad. Yendo a sentarse a su café favorito en el centro de la ciudad, siguió durante algunos días gritando su desafío a los bárbaros; pero sus amigos ya no se atrevían a sentarse con él. Se retiró a su casa, donde falleció, víctima de la pesadumbre, en diciembre.

El caso de Unamuno fue doblemente trágico. Era un intelectual liberal que siempre protestó contra los ataques a los derechos individuales. Pero en varios de sus textos literarios había glorificado asimismo la autoridad, la militancia y el autoritarismo de la Castilla histórica. Odió la relativamente benigna dictadura de Primo de Rivera porque impuso la censura y por su falta de dignidad; luego se inclinó hacia las izquierdas, y durante los dos primeros años de la República habló con frecuencia en la Casa del Pueblo. Pero hacia la celebración de las elecciones de noviembre de 1933, ya estaba diciendo que sólo el fascismo podría salvar a España[266]. Bajo variadas formas de retórica, era un hombre que creía en élites, en héroes, y que se burlaba de los parlamentos con sus turbios compromisos y sus «tratos». El mejor escritor en prosa y uno de los más grandes poetas de la España moderna, había dado alas inadvertidamente al tipo de retórica impaciente y desdeñosa, y a la actitud de las camisas remangadas que era característica de los jóvenes falangistas. En sus intervenciones en las Cortes, así como en sus discursos en público, a menudo careció de la moderación y del espíritu de compromiso que

es absolutamente esencial para los políticos democráticos. Al final de su vida, este gran hombre era la víctima del maligno antiintelectualismo que él no supo reconocer inmediatamente como parte de la trama y urdimbre del movimiento insurgente.

En la intensamente republicana Galicia, la purga sangrienta empezó más lentamente que en las provincias vecinas. Durante varias semanas continuaron las huelgas parciales y las vacilantes negociaciones entre los funcionarios republicanos y los militares. El carlismo prácticamente no existía, y la Falange contaba con menos de 1000 adheridos durante la primavera. Los primeros «paseos» no tuvieron lugar hasta el 5 de agosto, y hasta mediados de septiembre no fue encarcelado un gran número de personas. Al principio, las esposas tenían la oportunidad de frustrar en parte a los ejecutores estableciendo una guardia de 24 horas ante las prisiones. Un rasgo particular de la purga en Galicia fue la ferocidad con respecto a los maestros y médicos. En toda España se tenía a dichos profesionales por izquierdistas, mientras que los abogados y profesores de humanidades eran tenidos en general por conservadores. Galicia era la más republicana de las regiones controlada inicialmente por los insurgentes, y esto quizás explica la persecución particular contra dichos profesionales, considerados «rojos» por definición. En las ciudades, las familias de las víctimas no se atrevían a llevar luto. En ciertos pueblos prácticamente mataron a todos los hombres que no pudieron huir a las montañas, y cuando se hicieron reclutamientos en Galicia, durante la guerra, se vieron aldeas en que rara era la familia que no estaba de duelo[267].

En Navarra, el triunfo de la sublevación fue un escape para el entusiasmo tanto tiempo reprimido de los carlistas. El carlismo había sido derrotado por tres veces en el siglo XIX, y en el siglo XX había llegado a ser una mera curiosidad histórica. El 18 de julio los carlistas montañeses descendieron de sus pueblos para empezar la Reconquista de España en nombre de la Monarquía ca-

tólica y tradicional. Al mismo tiempo, tanto los jefes carlistas como el general Mola se daban cuenta de la fuerza de los nacionalistas vascos en muchos pueblos de Navarra. Mola dijo a los alcaldes navarros reunidos en asamblea que no vacilaría en fusilar a quienquiera que fuera sorprendido dando refugio a «rojos», cualquiera que fuera la razón. La prensa de Vitoria recordaba a sus lectores que los rehenes que estaban en la cárcel provincial pagarían con sus vidas cualquier locura sentimental con respecto al enemigo.

El fervor carlista y el odio hacia los nacionalistas vascos imprimieron un carácter particular a la purga en Navarra. Cuando el coronel Beorlegui se aproximaba a la ciudad de Beasain, se enfureció por el hecho de que la única resistencia procediera de un grupo de catorce guardias civiles. Hizo fusilar a todos por «rebelión», y luego mandó detener a varias docenas de individuos «sospechosos». Noche tras noche, desaparecían algunos de éstos, y el cura del pueblo, azorado, aunque impotente, explicaba a sus familiares, lo mismo que uno se lo explicaría a unos niños, que habían partido para hacer un largo viaje.

La religión jugó un gran papel en el territorio dominado por los carlistas. El 15 de agosto se celebraba anualmente en Pamplona la fiesta de la Virgen del Sagrario. A última hora de la tarde desfilaba una procesión, en la que los asistentes llevaban la imagen y las reliquias de la Virgen a través de las calles de la ciudad en dirección a la catedral. A la misma hora, dos pelotones de ejecución, uno compuesto por falangistas y otro por requetés, sacaron a un grupo de 50 o 60 presos políticos de la cárcel de la ciudad. La mayoría de los cautivos eran católicos, y entre ellos figuraban varios sacerdotes. Las víctimas iban esposadas y atadas, aunque no ligadas a una sola cadena, de modo que podían hacer sus confesiones relativamente en privado. Las patrullas esperaron impacientes a que los condenados terminaran de hacer sus confesiones, más prolongadas que de ordinario. Al ser fusilados los

primeros de ellos, los restantes condenados fueron presas de un pánico histérico. Algunos hombres echaron a correr y fueron abatidos a tiros, como animales. Como empezara a oscurecer, los falangistas y los requetés tuvieron un violento altercado, y los primeros comenzaron a gritar que los «rojos» no se merecían que se les diera oportunidad de confesarse, mientras que los últimos insistían en que a los cristianos practicantes se les diera la posibilidad de hacer las paces con Dios. Para arreglar la situación, los sacerdotes dieron la absolución en masa a los restantes, las ejecuciones se llevaron a cabo, y los camiones volvieron a Pamplona, a tiempo para que los requetés se incorporaran a la procesión que estaba entrando en la catedral[268].

Una persecución igualmente macabra tuvo lugar en la isla de Mallorca, bajo los auspicios de un funcionario italiano fascista, que se llamaba a sí mismo el conde Rossi. Los acuerdos para la ayuda de Mussolini, que en el último instante provocaron los recelos del general Goded, incluían el control de las islas Baleares por los italianos mientras durase la guerra. Rossi llegó en avión pocos días después del alzamiento y destituyó al gobernador militar que había dejado Goded. Conducía su propio coche de carreras, llevaba una camisa negra adornada con una cruz blanca, decía a las damas de la alta sociedad de Palma que él necesitaba al menos una mujer cada día, y anunciaba la «cruzada» en los pueblos, rodeado del alcalde y el cura. En Mallorca ni el nacionalismo catalán ni el anarquismo eran muy fuertes; pero al igual que en Extremadura, fue necesario, al menos en una ocasión, quemar la enorme pila de cadáveres que quedaban después de una noche de trabajo.

En agosto los catalanes trataron de reconquistar Mallorca, y durante unas seis semanas sostuvieron una pequeña cabeza de puente cerca de Porto Cristo. Durante este período obligaron a un grupo de monjas que dirigían una escuela privada en el pueblo a ayudarles a construir un hospital y a actuar como enferme-

ras. Después de que los catalanes reembarcaran, los diarios de Palma publicaron una larga entrevista con la directora. Ésta, en tono humorístico, recordaba a un gigante sudamericano que apareció blandiendo una pistola y diciendo:

Hermanas, soy católico y comunista y volaré la tapa de los sesos al primer hombre que les falte al respeto.

Durante un par de días les ayudó a hacer las camas, a preparar vendas y a traer víveres, tiempo en el cual tuvo discusiones teológicas con la directora. Cuando llegaron las tropas nacionalistas, mataron a todos los heridos y, finalmente, al sudamericano. El novelista católico francés Georges Bernanos, que llevaba largo tiempo residiendo en Mallorca, discutió el artículo con su autor, que entonces publicó una nota explicativa en la que declaraba: «Algunas almas generosas creen en su deber de sentir repulsión por las necesidades de la guerra santa. Pero quienquiera que haga la guerra debe conformarse a sus leyes[269]».

Sin embargo, la virulencia de la purga en la España insurgente no puede ser explicada por las leyes de la guerra, aun cuando esas «leyes» omitan deliberadamente un trato humano para los heridos y prisioneros. Los insurgentes españoles luchaban para preservar los privilegios tradicionales del Ejército, la Iglesia y los terratenientes, grupos que habían vivido bajo una terrible tensión y miedo por los cinco años de dominación republicana. Tras la revolución de Asturias, se vio frustrado su deseo de una represión que acabara de una vez por todas con la izquierda liberal, marxista y anarquista. La sublevación militar del 18 de julio les parecía su última oportunidad de preservar una España en la que sus privilegios pudieran estar seguros. No hay clase de seres humanos más crueles que una clase dominante amenazada, que se cree una *élite* natural desde el punto de vista histórico, económico y cultural, y que se siente desafiada por una masa obstinada que ya no reconoce sus privilegios. La guerra no fue sólo una guerra civil, fue también una guerra colonial. Los jefes insurgen-

tes sentían lo mismo que la minoría europea dominante en Argelia antes de 1962, y que los dominadores blancos de África del Sur. La zona del Frente Popular era la zona colonial rebelde que había que reducir.

Las ejecuciones en la España nacionalista no fueron obra de una plebe revolucionaria que se aprovechó del derrumbamiento del Estado republicano. Fueron ordenadas y aprobadas por las más altas autoridades militares. En ciertas provincias, como Segovia, fueron fusiladas relativamente pocas personas, hecho que puede atribuirse en parte a la falta de resistencia al levantamiento, y en parte a la decencia del jefe militar local. En Alsasua, el cura párroco, que era un social católico nombrado precisamente por sus conocidas simpatías hacia la clase obrera, se dirigió al general Solchaga en un esfuerzo para mejorar las condiciones de los condenados que había en la cárcel local. Tras pretender que no sabía nada de lo que el cura le decía, el general acabó la entrevista afirmando bruscamente que no se había fusilado a ninguno de los presos de aquella cárcel, absolutamente a ninguno[270]. Hombres como éste, y no los mozalbetes falangistas y requetés, eran los responsables de las grandes matanzas que se desarrollaban tras las líneas nacionalistas. A principios de noviembre, su fracaso en tomar Madrid hizo enfurecer a las autoridades militares, y con este motivo muchos oficiales republicanos que estaban detenidos desde julio fueron fusilados.

En todas las provincias había muchas personas para quienes los fusilamientos eran un espectáculo emocionante y muy satisfactorio. Los requetés de Pamplona hacían chistes sobre las damas aristocráticas que se levantaban al amanecer para presenciar una ejecución. El 25 de septiembre de 1936, el gobernador civil de Valladolid publicó una carta en El Norte de Castilla. Refiriéndose a la triste necesidad de los órganos de justicia militar de ejecutar las sentencias de muerte, y concediendo que las ejecuciones podían ser legalmente presenciadas por el público, recordaba, sin

embargo, a sus lectores que su presencia en tales actos «decía poco en su favor y el considerar como espectáculo el tormento mortal de un ser humano, aunque estuviera justificado, daba una pobre impresión de la cultura de un pueblo». En esta carta, así como en noticias de prensa publicadas en Galicia en octubre, los funcionarios deploraban especialmente la presencia de mujeres jóvenes y de niños.

La situación de la Iglesia en la zona insurgente era completamente diferente de la que atravesaba en la zona del Frente Popular. En las primeras declaraciones públicas de las autoridades militares no había nada específicamente religioso. Sin embargo, las consignas de jerarquía y tradición indicaban que la Iglesia gozaría de una fuerte posición en el nuevo régimen, y los generales dieron por supuesta la colaboración de la Iglesia. El obispo de Salamanca se sintió aturdido cuando el general Franco requisó su palacio para establecer en él su cuartel general, no porque no simpatizara con el alzamiento, sino porque la Iglesia tenía que considerar que si los insurgentes eran derrotados, su situación en toda España empeoraría notablemente.

En conjunto, la Iglesia cooperó de buen grado. Los obispos y arzobispos aparecían en compañía de las autoridades militares en toda clase de ceremonias públicas. Daban su bendición a las tropas y proporcionaban confesores para las cárceles. En ocasiones, los curas párrocos intercedían por las vidas de ciertos individuos condenados a muerte; pero nadie ponía en duda los principios y el grado de extensión de la purga en sí misma. Se esperaba que los curas de los pueblos formaran parte de los comités locales de purga, y no eran ni más crueles ni más generosos que los otros miembros a la hora de votar castigos.

Cuando, a principios de noviembre, los habitantes de un pueblo de Navarra lincharon a 50 presos políticos, el obispo de Pamplona, Olaechea, dirigiéndose a una rama local de Acción Católica, suplicó a sus oyentes que no vertieran más sangre que la de-

cretada por los tribunales[271]. También es difícil imaginar que el cardenal Ilundain, de Sevilla, aprobara de veras el régimen de Queipo de Llano. Pero el obispo y el cardenal, así como las demás jerarquías eclesiásticas de la zona nacionalista, ratificaron todos los actos públicos del régimen insurgente con su presencia y jamás hicieron críticas en público.

Para los católicos sensibles, la suerte de la Iglesia casi era peor en la zona insurgente que en la zona del Frente Popular. En Madrid y Barcelona, los católicos vivían una experiencia parecida a la de las catacumbas. Pero el sacrificio, e incluso el martirio, tenía sus compensaciones espirituales. En la zona insurgente el poder y el prestigio estaban del lado de la Iglesia. Cuando una señora de la aristocracia de Salamanca decidió trabajar en los comedores para niños de la Falange, porque le parecía que así haría algo humanitario, el cardenal Gomá le preguntó sonriente por qué se mezclaba con la *canalla*. En algunas parroquias, católicos de toda la vida, dejaron de ir a misa porque no podían soportar las fulminaciones semanales que se hacían desde el púlpito contra los «rojos». Georges Bernanos, dándose cuenta de que el arzobispo de Palma estaba perfectamente enterado de todo lo que él mismo sabía acerca del régimen del «conde» Rossi, escribió vitriólicamente acerca del «personaje al que los convencionalismos me obligan a llamar el obispo de Mallorca».

Ciertos elementos fueron comunes al terror en ambas zonas. Tanto los anarquistas como los oficiales de carrera eran capaces de «*matar sin odio*», convencidos de que sus enemigos no eran seres humanos en el mismo sentido que ellos, dispuestos a sacrificar generosamente sus vidas, así como las de sus familiares. Entre los participantes menos exaltados, la envidia constituyó un poderoso motivo. Mucha gente se dio cuenta de que se aproximaba la guerra civil, no porque hubiera una crisis política o económica insoluble, sino porque se palpaba el odio con que los obreros conscientes de su clase miraban a las mujeres bien vestidas, o los

campesinos al notario de su pueblo. Los comités de purga revolucionarios e insurgentes, aunque escrupulosos en sus operaciones, estaban descubriendo constantemente las acusaciones más insensatas basadas en pura malquerencia. Entre los hombres de negocios y los profesionales de la clase media, algunos de los que habían tenido más éxito y ganaban más eran prominentes republicanos. Sólo porque eran inteligentes, hombres que se habían creado a sí mismos, y deseaban crear una sociedad más abierta a los cambios y con más igualdad de oportunidades de todas clases. Muchos de los que dirigieron las purgas en la zona insurgente eran los que en su vida habían cosechado menos éxito, los envidiosos de poca categoría que purgando a un «rojo» destruían de paso a un competidor.

Dadas las condiciones de la purga, la delincuencia juvenil floreció en ambas zonas. ¿Qué podía ser más embriagador que conducir autos requisados, usar armas de fuego, ver el terror mortal en los ojos de víctimas bien vestidas, y matar sin sentirse responsable personalmente, en nombre de una «operación quirúrgica», para limpiar a la sociedad de un «miembro gangrenado»? En la zona insurgente, los partidarios del levantamiento más conservadores se referían a la Falange como la «*FAIlange*» y «nuestros rojos». Entre los recién afiliados a Falange había sin duda un número considerable de elementos anarquistas y comunistas que «habían cambiado de camisa». En la zona del Frente Popular la Falange se infiltró fácilmente en las patrullas terroristas del ala izquierda[272]. Algunos de los chóferes de las patrullas de «paseos» en Levante resultaron ser falangistas y un cierto número de personalidades republicanas y socialistas fueron asesinadas en la zona del Frente Popular por los falangistas.

Parte del vocabulario de los «paseos», particularmente en la zona insurgente, donde fueron oficialmente dirigidos, indica un fanatismo rayano en la locura. Teólogos de ocasión ofrecían justificaciones doctrinales de los mismos. La revista Mundo Hispá-

nico habló de purgar las zonas de la retaguardia a «cristazo limpio», es decir, a golpes de crucifijo, como curas fanáticos remataron a veces a heridos liberales durante las guerras carlistas. La purga debía asimismo extirpar la semilla, las semillas del marxismo, el laicismo, y así sucesivamente. Cada vez que los rojoseparatistas recibían finalmente su trozo de tierra, se refería sarcásticamente a ello como la reforma agraria. Eurípides, el poeta trágico griego, podría haber visto bandas armadas como las de su Bacchae asolando España durante el verano y el otoño de 1936; fanáticos autointoxicados asesinando a sus presuntos enemigos con la ilusión de que estaban realizando una operación de limpieza, de pureza religiosa. Sin duda, estas patrullas de ejecutores contribuyeron en gran manera a establecer la incuestionable autoridad de los jefes insurgentes sobre una población en gran parte hostil.

Capítulo 18

EL ASALTO A MADRID

EL rápido avance del ejército de África y la continua desorganización de la zona del Frente Popular hicieron que los insurgentes, en septiembre y octubre, tuvieran la esperanza de una pronta victoria basada en la rápida conquista de la capital de la nación. Usando sus limitadas fuerzas aéreas, pero que no encontraban oposición, empezaron a bombardear Málaga y otros puertos republicanos, destruyendo así buena parte del equipo y las facilidades portuarias de la marina republicana. El 29 de septiembre el Canarias y el Almirante Cervera hundieron un destructor republicano y obligaron a otro a buscar refugio en Casablanca. A partir de entonces, los insurgentes dominaron sin disputa las aguas de la España meridional. A finales de agosto y durante septiembre, Mallorca se convirtió en una importante base aérea y naval, con equipo y bajo control italiano.

Mientras tanto, la Junta de Burgos reunía material para la marcha sobre Madrid. Durante el mes de agosto llegaron unos 50 aviones alemanes, y dos buques de carga, el Kamerun y el Wigbert, descargaron en Lisboa material de guerra de todas clases, siendo su transporte por tierra facilitado personalmente por el primer ministro Salazar[273]. El 5 de septiembre los pilotos republicanos informaron haber visto cazas Heinkel. A fines de septiembre Italia entregó dos pequeños submarinos a la flota insurgente y desembarcó en los puertos del Sur los primeros tanques, artillería y cañones antiaéreos[274]. En los primeros días de octu-

bre, los bombarderos Junker y Caproni comenzaron una serie de frecuentes ataques contra aeropuertos y centros de suministro a lo largo de las carreteras de Madrid[275].

En la zona del Frente Popular era imperativo instalar un Gobierno que gozara de más amplio apoyo popular que el del profesor Giral, y para que creara un ejército de las diversas milicias. Francisco Largo Caballero era la única figura que concebiblemente podía unir las numerosas facciones de las izquierdas. Era el jefe idolatrado tanto de los obreros de la UGT como de los jóvenes intelectuales del Partido Socialista. Los comunistas estaban preocupados por su «infantilismo izquierdista», pero también contribuían a crear su fama de «Lenin español». Los anarquistas eran en su mayoría opuestos a participar en el Gobierno, pero Largo Caballero era el único dirigente de talla nacional con el que verosímilmente querrían cooperar. Los republicanos de izquierda habían estado en la cárcel con él en 1917 y en 1930 y lo conocían como colega en el Gobierno de Azaña. A Largo Caballero le habría gustado formar un Gobierno completamente obrero, basado en la UGT y la CNT; no podía ignorar al ala moderada de su propio partido, sin dividirlo irrevocablemente, y, sobre todo, la República perdería toda esperanza de apoyo por parte de las potencias democráticas si era nombrado un Gobierno «proletario».

El primer Gobierno de Largo Caballero, formado el 4 de septiembre, incluía 6 socialistas, 4 republicanos, 2 comunistas, un representante de los republicanos catalanes y otro de los nacionalistas vascos. Los principales socialistas moderados, Prieto y Negrín, estaban presentes junto con los seguidores de Largo Caballero. El Gobierno era así mucho más representativo de las fuerzas combatientes que lo había sido el de Giral; pero durante sus dos primeros meses en el cargo, Largo Caballero no tuvo más éxito que Giral en sus esfuerzos para resolver los enormes problemas de organización y suministros. La ciudad de Madrid, co-

mo su frente de guerra, estaban controlados por las milicias de los partidos. Dado que la autoridad del Gobierno no estaba bien precisada, cada partido acumulaba armas para protegerse de un posible golpe de los contrarios. La fusión de las juventudes socialistas y comunistas en abril, y la camaradería en las batallas de la sierra, en las que lucharon juntos, ayudaron a producir un espíritu de unidad entre las izquierdas. Pero la JSU era una organización tan sólo de estudiantes y de los obreros jóvenes más avispados y políticamente conscientes.

La poderosa burocracia de la UGT y los combativos jefes de la CNT no podían olvidar en unos pocos meses una amarga rivalidad de años, y ambos se burlaban de los comunistas, considerándolos virtualmente como recién llegados al movimiento sindical. Largo Caballero se encontró con que antiguos amigos suyos en el sindicato de la construcción se negaban a pedir a sus miembros que fueran a cavar trincheras tras su jornada de trabajo. Los milicianos apostados cerca de Madrid consideraban que el permiso para pasar el final de semana en casa era uno de los derechos del soldado. Las unidades de la UGT fueron acusadas de esconder armas de las que se apoderaron cuando el asalto al cuartel de la Montaña, y los anarquistas ocultaron las pocas ametralladoras checas y francesas de buena calidad, de las que sus camaradas se habían apropiado en la frontera francesa[276].

El mismo Largo Caballero había sido un decidido partidario del sistema de las milicias. Muchos dirigentes laborales españoles miraban al ejército profesional como al enemigo natural de las masas, y verdaderamente, uno de los factores que habían retardado los preparativos para la defensa de Madrid fue la desgana del Gobierno en utilizar los servicios de muchos oficiales que se habían declarado leales. Durante septiembre, el jefe del Gobierno se convenció de la insuficiencia del sistema de milicias. Había admirado mucho el papel jugado por el coronel José Asensio Torrado en los combates de la sierra, y ahora lo nombró

comandante en jefe del frente central. En octubre promulgó una serie de decretos para la disolución de las milicias y la formación de brigadas mixtas. Las nuevas unidades incluirían las antiguas milicias de los partidos, soldados que estaban cumpliendo su servicio militar el 18 de julio y nuevos reclutas. Serían adiestrados por oficiales profesionales, y luego dirigidos por una combinación de dichos oficiales y los dirigentes más capacitados que hubieran surgido de las primeras escaramuzas en el frente de Madrid.

En aquel tiempo la unidad de partido más importante era el famoso Quinto Regimiento, organizado y dirigido por el Partido Comunista; pero a él se incorporaron muchos jóvenes apolíticos, que se sintieron atraídos por su espíritu superior, e incluso bastantes anarquistas, que habían acabado por reconocer la debilidad de sus propias unidades indisciplinadas. El Quinto Regimiento practicaba la disciplina militar. Le fue dado este nombre porque Madrid, antes de la guerra, había tenido en teoría sólo cuatro regimientos, y los comunistas fundaron por eso ahora el «quinto», como contribución suya a la defensa de la capital. Fue el componente más numeroso y eficaz en el frente de Madrid. A mediados de octubre ofreció disolverse en favor de las nuevas brigadas mixtas anunciadas, y Largo Caballero se halló en la extraña posición de recibir una más eficaz cooperación por parte de los comunistas que de los socialistas de izquierda y los anarquistas, sobre cuya lealtad había esperado basar su poder. Pero no se logró hacer casi ningún progreso en la reorganización de las milicias antes de que el ejército insurgente llegara a las puertas de Madrid.

Las propias limitaciones personales del jefe del Gobierno estorbaron la mejora de las condiciones en la zona del Frente Popular. Prieto era sin duda el ejecutivo más capaz del Partido Socialista; pero los ya antiguos celos y desconfianza de Largo Caballero fueron tales que destinó a Prieto a una marina y una avia-

ción prácticamente inexistentes, e insistió en tener en sus manos, no sólo la presidencia del Gobierno, sino además el Ministerio de la Guerra. Todos los dirigentes sabían que los «paseos» estaban desacreditando rápidamente a la República, tanto dentro del país como en el extranjero; pero Largo Caballero pareció no encontrar a nadie mejor que al mediocre Ángel Galarza para actuar como ministro de la Gobernación. Algunas de las peores bandas pretendían estar compuestas de partidarios de Largo Caballero, y él era incapaz de condenar sus crímenes o bien no quería condenarlos. Los intelectuales y profesionales, que habían manifestado su lealtad a la República el 18 de julio, seguían marchándose a Francia o refugiándose en las embajadas.

Durante estos mismos meses la oleada revolucionaria comenzó a menguar en Cataluña. En agosto los anarquistas habían impedido que el Partido Socialista Unificado de Cataluña (PSUC) entrara a formar parte del Gobierno de la Generalitat, y al principio rechazaron la invitación de Largo Caballero. Pero como los problemas de abastecimiento y suministro iban siendo cada vez más graves, y la experiencia adquirida en la administración de los pueblos, los puestos fronterizos y los servicios públicos había mostrado rápidamente a los anarquistas la insospechada complejidad de la sociedad moderna, su ingenuidad les permitió ser lo suficientemente flexibles para cambiar de opinión, y el 26 de septiembre se formó un nuevo Gobierno, en el que los anarquistas obtuvieron tres carteras y la Esquerra otras tres. El consejero de Orden Público pertenecía a la Esquerra, y *La Vanguardia*, órgano de la Generalitat, hizo un llamamiento para que se iniciara una campaña contra los confidentes y los terroristas. El consejero de Economía, Juan Comorera, del PSUC, procedió inmediatamente a tomar disposiciones contra las permutas y las requisas, y se convirtió en el defensor de los campesinos contra la revolución. El consejero de Justicia era Andrés Nin, jefe del POUM, quien a principios de septiembre anunció que la dictadura del

proletariado existía en Barcelona. El día 27 el órgano anarquista Solidaridad Obrera justificó el fin de la dualidad de poderes en Cataluña, y el órgano del POUM, La Batalla, habló de un necesario período de transición y de cooperación con la burguesía liberal.

Estos principios de cambios en el cuadro de la política interna se vieron ensombrecidos por la situación internacional. El 8 de agosto Francia cerró la frontera al paso de material de guerra, esperando con ese gesto apresurar la aceptación de los planes de No-intervención por parte de las potencias favorables a los insurgentes. El 24 de agosto aceptaron la No-intervención «en principio». El 9 de septiembre el comité de No-intervención celebró su primera reunión. Los países representados eran Inglaterra, Francia, Rusia, Alemania e Italia; pero Portugal no había nombrado todavía un delegado. El Gobierno español se dispuso inmediatamente a presentar pruebas de la intervención italiana, alemana y portuguesa. Sin embargo, ni el Gobierno de Madrid ni la Junta de Burgos habían sido invitados a unirse al comité, y una de las primeras reglas de procedimiento adoptadas fue el requisito de que las alegaciones sólo podrían ser oídas si eran presentadas al comité por uno de sus miembros. En el curso de varias reuniones celebradas durante septiembre, se decidió que todas las discusiones fueran consideradas confidenciales, hasta que se decidiera por mutuo acuerdo publicar un comunicado, que todos los cargos fueran presentados por escrito a los gobiernos acusados y que habría que esperar a sus respuestas por escrito antes de proseguir las discusiones.

Mientras tanto, el Gobierno republicano se dirigió, desesperado, a la Sociedad de Naciones, cuya asamblea general habría de celebrarse el 21 de septiembre en Ginebra. Sin embargo, la Sociedad se negó a incluir el caso español en su agenda en fecha tan tardía. Álvarez del Vayo, ministro español de Asuntos Exteriores, pronunció un discurso ante la asamblea el 25 de septiembre,

pero en vista de la simpatía, que sentía por los insurgentes el presidente de la asamblea, Carlos Saavedra Lamas, de la República Argentina, tuvo buen cuidado de no hacer acusaciones específicas contra las potencias que estaban interviniendo. El 30 de septiembre, España dio a conocer públicamente sus pruebas de la presencia de aviones italianos y alemanes en la zona insurgente, y de la descarga de material de guerra alemán en Lisboa durante el mes de agosto.

Finalmente llegó un delegado portugués a Londres el 28 de septiembre, y el comité eligió como presidente permanente al conservador británico lord Plymouth. El comité se sintió ofendido por la iniciativa del Gobierno español de apelar a la Sociedad de Naciones en lugar de esperar a los procedimientos ordenados y confidenciales que estaba elaborando. Durante el mes de octubre comenzó a examinar las acusaciones españolas. La mayoría de las pruebas se referían a incidentes ocurridos antes del 28 de agosto, fecha en que las potencias fascistas se habían comprometido, aunque con reservas que privaron a sus notas de todo sentido de compromiso efectivo, a no enviar material de guerra a España. El resto de las pruebas fue declarado poco convincente, ya que se basaba principalmente en informes de la prensa. Además, las tres potencias fascistas declararon que aquellas acusaciones carecían de fundamento, así que la aceptación de las pruebas habría significado declarar embusteros a los gobiernos acusados[277].

La Unión Soviética apoyó la postura del Gobierno republicano tanto en Ginebra como en Londres. Aunque se declaró de acuerdo en adherirse al comité de No-intervención, jamás ocultó su creencia de que sus reglas y procedimientos eran un simple intento para disimular la intervención fascista, y que la política conveniente sería el apoyo al Gobierno legítimo que se enfrentaba con una rebelión militar. Hasta el mes de octubre se limitó a enviar víveres y medicamentos; pero el 7 de octubre, y por dos

veces después de dicha fecha, los estadistas soviéticos advirtieron que la Unión Soviética dejaría de considerarse obligada por el acuerdo de No-intervención, como hacían los otros gobiernos signatarios. En el transcurso del mes, una docena de buques soviéticos llevaron a España aproximadamente 400 camiones, 50 aviones, 100 tanques y 400 aviadores y tanquistas[278].

Como tenían que pasar por el estrecho de los Dardanelos, y navegar a lo largo del Mare Nostrum italiano, era imposible ocultar el tráfico soviético. Hacia mediados de octubre llegaron al comité de Londres los informes del espionaje y los reportajes de los periódicos. Fue muy instructivo observar lo convincentes que los miembros hallaban estos reportajes, mientras que habían rechazado las pruebas similares presentadas junto a las acusaciones del Gobierno español el 30 de septiembre. Lord Plymouth y el ministro de Asuntos Exteriores británico, Anthony Eden, hablaron de que había un país más culpable que Alemania e Italia. En cuanto a Portugal, el comité lo exoneró el 28 de octubre, pocos días después de que hubiera hallado pruebas de una violación cometida por los italianos y de tres violaciones soviéticas.

La desigual apreciación de las pruebas no sorprendió a nadie. A finales de octubre, tanto Italia, Alemania y Portugal como Rusia burlaban abiertamente los acuerdos. Las potencias fascistas sabían que Inglaterra simpatizaba con ellas, tanto más cuanto que un diplomático alemán en España informó el 16 de octubre que los ingleses en Gibraltar estaban suministrando municiones a los insurgentes, y que a él le proporcionaban información sobre los embarques soviéticos[279]. Pero ni Francia ni Rusia se salieron del comité. La primera estaba paralizada por el temor de ofender a Inglaterra. Los soviéticos aún esperaban lograr la política de seguridad colectiva, y estaban decididos a evitar un rompimiento con las potencias occidentales. Así, el comité de No-intervención siguió reuniéndose, proporcionando una caja de resonancia y un artilugio para salvar la faz a todas las potencias, las cuales, a

excepción de Francia, no perseguían más que sus intereses nacionales tal como los entendían en relación con la guerra civil.

En la España del Frente Popular, el arribo de las primeras armas soviéticas produjo una tremenda impresión moral, y creó un sentimiento de gratitud que temporalmente barrió todas las sospechas de posibles motivos ulteriores. Pero en la acción de Stalin no había nada sentimental. El pago de las armas rusas quedó garantizado cuando el Gobierno de Largo Caballero, en la última semana de octubre, hizo embarcar más de la mitad de las reservas de oro del Banco de España en el puerto de Cartagena, en cuatro buques mercantes soviéticos sin escolta con destino a Odesa.

El jefe del Gobierno y su ministro de Hacienda, Juan Negrín, tuvieron varios motivos para realizar este acto. A mediados de septiembre el Gobierno daba por supuesto que perdería la ciudad de Madrid. Los círculos financieros internacionales respaldaban a los insurgentes. La República no tenía más poder financiero que sus reservas de oro, ni más aliado que México y la Unión Soviética. Habría sido posible depositar este tesoro (a $ 35 la onza el cargamento valía $ 578.000.000) en bancos franceses o suizos; pero eso supondría el riesgo de que en cualquier momento funcionarios de esos bancos pudieran reconocer al Gobierno de Franco o al menos lo congelaran hasta el final de la guerra. La insistencia de Stalin en que se le garantizara el pago coincidió así con la situación práctica de la República. Ni al presidente Azaña ni a la mayoría de los ministros les hizo mucha gracia el tener que enviar el oro español a Rusia; pero al menos se consolaban pensando que oficialmente sólo habían autorizado al jefe del Gobierno a hacer todo lo que él considerara necesario para proteger el control gubernamental sobre el oro. La responsabilidad de la decisión recaía, pues, en Largo Caballero y Negrín[280].

En septiembre Largo Caballero había rechazado la propuesta del republicano italiano Randolfo Pacciardi de formar una brigada de italianos antifascistas. En aquellos momentos el jefe del

Gobierno se oponía a la utilización de tropas extranjeras; pero a mediados de octubre se hallaba desesperado y deseoso de utilizar todos los hombres entrenados que pudiera hallar.

La segunda mitad del mes de octubre fue testigo de una actividad febril en ambos bandos. Desde el 19 de octubre habían cruzado la frontera francesa de 8 a 10.000 voluntarios extranjeros. El 17 de octubre Largo Caballero estableció para ellos una base de entrenamiento en Albacete, bajo la administración de Martínez Barrio. El dirigente comunista italiano Togliatti (conocido en España con el sobrenombre de Ercoli) y el comunista francés André Marty eran en realidad los organizadores de las nuevas brigadas internacionales. En los últimos diez días del mes, varias docenas de oficiales rusos de Estado Mayor de alta graduación llegaron para ayudar a organizar la defensa de la capital. El día 24 fueron vistos en acción los primeros tanques rusos en las cercanías de Aranjuez, y el día 29 tomaron parte en un breve contraataque, coronado por el éxito, contra el flanco de los insurgentes en Illescas. Como siempre, los rusos tenían la manía del secreto, tanto contra sus aliados como contra sus enemigos. Nadie debía conocer la verdadera identidad de los oficiales rusos, y cuando dos alemanes antinazis tomaron fotos jubilosamente de los tanques soviéticos en Aranjuez, sus tripulantes rusos no sólo confiscaron la película, sino que luego trataron, aunque sin éxito, de que ambos hombres fueran expulsados de España a través de los buenos oficios de la GPU[281].

Las columnas que se apresuraban hacia Madrid desde el Sudoeste hallaron cada vez más resistencia. Las milicias siguieron cometiendo los mismos errores que habían cometido en Andalucía; pero mientras tuvieran municiones y edificios que defender, luchaban hasta la muerte. Tras ellos, entorpeciendo las carreteras que llevaban a Madrid, marchaban miles de familias campesinas que huían de sus pueblos. En la capital los problemas del abastecimiento y los transportes se vieron agravados por la llegada de

los refugiados, que acampaban en los parques, en las estaciones del metro y en los confiscados palacios de los ricos. El día 20 de octubre el general Franco dio la orden general de que se tomara la ciudad. Al mismo tiempo el Gobierno estaba discutiendo cómo y cuándo debía marcharse sin provocar el pánico. El presidente Azaña se marchó el 22 de octubre, para lo que se dijo como una visita a los frentes. La mayoría era de la opinión de que sería más juicioso marcharse con relativa dignidad que no huir en el último momento, pero el jefe del Gobierno no pudo tomar una decisión. El 23 de octubre los Junkers bombardearon la ciudad, y el primero de noviembre un ejército de unos 25.000 hombres empezó a llegar a los suburbios occidentales y meridionales. Los aviones italianos dejaban caer octavillas pidiendo a los ciudadanos que ayudaran a la toma de la ciudad; «en caso contrario, la aviación nacional la borrará del mapa».

En realidad, los insurgentes no deseaban la destrucción de Madrid. Era la capital de España, y anhelaban establecer en ella su propio régimen lo antes posible; pero tampoco querían luchar por ella. Los milicianos habían demostrado siempre ser más diestros luchando entre edificios. Madrid estaba situado sobre unas alturas, y cualquier asalto procedente del Sudoeste o del Noroeste tendría que hacerse subiendo cuesta arriba hasta alcanzar la ciudad. De los 25.000 hombres que aproximadamente estaban bajo el mando del general Mola, unos 5000, organizados en cinco «columnas», como en la marcha a través de Andalucía y Extremadura, constituían la fuerza de ataque. El resto eran necesarios para el manejo del equipo y suministros, o para guardar los largos flancos que daban a territorio republicano. Mola sobreestimó el peligro para sus flancos, y este temor fue probablemente el resultado práctico más importante de los varios ataques lanzados con tanques rusos por el general Asensio, conforme los invasores se acercaban a la capital. Actuando según las teorías alemanas de guerra, Mola intentó aterrorizar a los habitantes de la ciu-

dad y obligarles a la rendición con un bombardeo indiscriminado. Pero no disponía de unas fuerzas aéreas comparables a aquéllas que arrasaron las ciudades inglesas y alemanas durante la segunda guerra mundial, y sus incursiones, hechas cada día por una docena de aeroplanos, mataron a menos de 50 personas en cada ocasión[282]. El 2 de noviembre aparecieron cazas rusos por primera vez, y el día 5, obligaron a los bombarderos Junker a retirarse, de modo que en realidad sirvieron para reforzar la moral de los defensores de Madrid.

A principios de otoño el general Mola había hablado de sus «cuatro columnas» que marcharían sobre Madrid y de su «quinta columna» de partidarios que aguardaban dentro de la ciudad. Como exdirector general de Seguridad, Mola poseía dossiers muy detallados del personal político, comercial, industrial y laboral de Madrid. Simplemente por los resultados de las elecciones de febrero de 1936, sabía que el 45 por ciento de los habitantes habían votado por las derechas; además, un gran número de aquéllos que habían votado por el Frente Popular estarían disgustados y atemorizados por los «paseos». Era razonable suponer que la mayoría de la población daría buena acogida al ejército insurgente y que una determinada minoría ayudaría activamente a la conquista de la capital.

Sin embargo, miles de refugiados de todas las clases de la población habían hecho correr por la ciudad relatos de la feroz represión realizada en cada pueblo o ciudad ocupada por las tropas que avanzaban. El general Queipo de Llano había dado mucha publicidad a los moros a través de Radio Sevilla, y en España, el país que había necesitado ocho siglos de Reconquista, el uso de tropas marroquíes constituía no sólo una confesión de la impopularidad del alzamiento, sino un desafío a los sentimientos más profundos de la población. Los informes enviados por los periodistas portugueses y Jay Alien sobre lo ocurrido en Badajoz estaban presentes en la memoria de todos.

Los generales esperaban, gracias a su reputación de imposición por el terror, paralizar la voluntad de defensa en Madrid. Pero cometieron el mismo error psicológico de los alemanes que propalaron su fama de partidarios del *Schrecklichkeit* en vísperas de la primera guerra mundial. Antes de que los alemanes invadieran Bélgica, nadie habría podido decir que la opinión pública belga era profrancesa. Por el contrario, la mayoría flamenca era progermana en sus puntos de vista. Pero la burla, el engaño y la brutalidad con que los alemanes pensaron que iban a atemorizar a un pueblo, y que luego habían de ser rápidamente olvidadas, provocaron una voluntad indomable de resistencia. Las mismas características por parte de los generales de Burgos despertaron un mismo deseo de resistir, entre la mayoría de la población madrileña.

En los extremos meridionales y occidentales de la ciudad, que eran en su mayoría barriadas obreras, el pueblo levantó los adoquines del pavimento para formar barricadas e instaló ametralladoras y reductos en las ventanas de las casas. Los obreros de las industrias metalúrgicas fabricaban ahora granadas de mano en lugar de morillos. Los trabajadores del ramo de la construcción que no atendieron en septiembre el llamamiento de Largo Caballero para excavar trincheras desafiaban ahora el esporádico fuego de la artillería para construir una línea de fortificaciones en los accesos a la ciudad por el Oeste. Las esposas de los obreros dirigían cocinas de campaña para los campesinos refugiados y puestos de primeros auxilios para las víctimas de los bombarderos y de las agresiones esporádicas de los miembros de la quinta columna. Los oficiales de artillería colocaron sus escasas baterías en posición, para bombardear los puentes sobre el río Manzanares, cuyo curso pasaba muy cerca de los límites occidentales de Madrid. Los obreros se entrenaban febrilmente a las órdenes de docenas de oficiales de carrera leales a los cuales les había sido antes negada la confianza. Mientras el ejército nacionalista se

preparaba para el asalto a la capital, esperando que la resistencia fuera mínima, la población se preparaba para defenderla calle por calle y casa por casa[283].

El Gobierno, sin embargo, no creía que la ciudad pudiera ser defendida. El 4 de noviembre, bajo la presión de este clima de crisis, los anarquistas consintieron finalmente en sumarse al Gobierno de Madrid. Cuando los cuatro nuevos ministros de la CNT asistieron al día siguiente a su primera reunión en el Gabinete, fue para oír la decisión de evacuar hacia Valencia. En la tarde del día 6, Largo Caballero entregó al general José Miaja el mando de la defensa de Madrid. El general Miaja había tenido una carrera militar normal, en ningún concepto distinguida. Su único valor en este momento era su probada lealtad republicana y la ausencia de cualidades que pudieran convertirlo en esencial para futuras operaciones del ejército republicano. Fue ascendido en agosto de 1932 como reconocimiento a su lealtad cuando la sublevación de Sanjurjo. Martínez Barrio lo nombró comandante de la región militar de Madrid en octubre de 1933, cuando la perspectiva de unas elecciones a las Cortes hizo imperativo designar a un oficial moderado, firme y leal. En la primavera de 1936 era de nuevo el general de la división de Madrid, y durante los meses en que la conspiración era evidente cooperó con los oficiales jóvenes de Estado Mayor leales a la República. El Gobierno lo envió al frente de Córdoba a finales de julio, y luego a Valencia, ambos ingratos nombramientos, en vista de la situación en ambas zonas; pero tales nombramientos sólo podían ser otorgados a un oficial absolutamente leal.

Cuando Largo Caballero lo nombró el 6 de noviembre, su primera reacción fue creer que el Gobierno quería que recayera sobre él el privilegio de rendir Madrid, y desde aquel momento no habría de haber buenas migas entre el jefe del Gobierno y el general. Los rumores de la salida del Gobierno casi provocaron el pánico en la ciudad. Pero en cuestión de horas la situación psi-

cológica cambió completamente. A las siete de la tarde, después de que el Gobierno hubiera abandonado la ciudad, el general Asensio, ahora subsecretario de Guerra, entregó a los generales Miaja y Pozas dos sobres sellados conteniendo órdenes, y que no deberían ser abiertos hasta el amanecer. Los dos generales decidieron abrir los sobres inmediatamente, descubriendo entonces que a cada uno le habían dado el nombramiento del otro. Reunidos toda la noche en su despacho, Miaja organizó lo que todo el mundo creía un intento desesperado y suicida de resistencia, para ganar tiempo a fin de que mientras tanto se organizara un verdadero ejército en Levante. El teniente coronel Vicente Rojo, uno de los jóvenes oficiales más brillantes del Estado Mayor, asistido por el comandante Manuel Matallana Gómez, que era abogado así como militar de carrera, tenía que organizar las comunicaciones, los aprovisionamientos y la cadena de mandos para la defensa. El general Miaja advirtió a las varias docenas de oficiales reunidos que la mayoría de ellos probablemente morirían, y los oficiales comunicaron luego esto a sus soldados. La única orden general era la de resistir en todo el frente, sin retroceder ni un paso[284].

Las columnas atacantes iban mandadas por el general Varela. En la mañana del 7 penetraron en la Casa de Campo y prosiguieron su avance hacia los diversos puentes sobre el río Manzanares. Unos cuantos legionarios alcanzaron el puente de los Franceses, al oeste de la Ciudad Universitaria, pero fueron rechazados por el fuego de la artillería que disparaba desde el parque del Retiro. Patrullas aisladas penetraron en el puente de Toledo y en la calle de Ferraz, cercana a la cárcel Modelo, pero el fuego de fusilería y de ametralladoras les cortó el paso[285]. Durante todo el día los oficiales telefoneaban a Miaja para informarle que sus líneas se mantenían, pero que estaban escasos de municiones. El general les contestaba asegurándoles que las reservas y las municiones ya estaban en camino. En realidad no tenía reservas; pero los oficia-

les jóvenes olvidaban pronto lo que sin duda sabían que era una mentira. El 7 de noviembre la alta moral y combatividad de los jefes republicanos podía compararse a la que animaba a los jefes en campaña del ejército de África. Pero en este caso la base de la camaradería era la lealtad a la República. La mayoría de estos oficiales eran universitarios además de militares. Habían aprobado en líneas generales, sí bien no en ciertos detalles, las reformas de Azaña. Muchos pertenecieron a la UMRA y habían luchado en el cuartel de la Montaña y en la sierra. Habían compartido la experiencia del entrenamiento de las milicias y el regocijo de ver que toda la población se volcaba para ayudarles con víveres, informaciones y medicinas[286]. El general Miaja impartía sus órdenes a la población civil por radio, y la rapidez con que eran obedecidas daba medida del interés popular por la defensa. Mientras tanto, los cazas rusos impedían que los aviones alemanes bombardearan la ciudad y soltaban octavillas en las que se decía:

> «*Emulad a Petrogrado. El 7 de noviembre debe ser tan glorioso en el Manzanares como lo fue en el Neva*».

Este mismo período crucial de 24 horas presenció la más terrible matanza de una sola vez cometida en la zona republicana durante la guerra. El Gobierno, al disponerse a marchar de Madrid, dejó órdenes de que los presos políticos de la cárcel Modelo fueran evacuados a Valencia. El ministro de la Gobernación, Ángel Galarza, que era miembro del ala caballerista del Partido Socialista, jamás pudo establecer un efectivo control sobre los guardianes de la prisión, la mayoría de los cuales se tenían por partidarios de Largo Caballero. Todos eran hombres con las ideas más elementales sobre la justicia, y algunos de ellos tenían largos antecedentes penales. Como parecía que la capital iba a caer en manos del enemigo, interpretaron las órdenes de evacuación a su modo. En dos noches sucesivas, el 6 y el 7 de noviembre, sacaron a unos 1000 internados de la cárcel Modelo[287]. En Paracuellos del Jarama y cerca de Torrejón (dos pueblos que estaban a unos

kilómetros al nordeste de Madrid) habían preparado amplias fosas. Allí llevaron a sus presos de la «quinta columna», y al borde de aquellas enormes fosas comunes los mataron.

Durante todo el día 7, las líneas republicanas de defensa se mantuvieron. La moral era alta; los aprovisionamientos y las reservas de combatientes eran escasos. A las nueve de la noche un tanque italiano fue volado en la carretera de Extremadura. En uno de los cadáveres se halló una copia de la orden de operaciones del general Varela para la conquista de Madrid. En principio había sido prevista para el 7 de noviembre; pero debido al endurecimiento de la resistencia fue retrasada para el día 8. El coronel Rojo supuso que la orden era demasiado compleja para poder ser cambiada en el último momento, y trasladó sus mejores tropas a la Casa de Campo y la Ciudad Universitaria, en las cuales, según la orden capturada, tendría lugar el ataque principal. En la mañana del día 8 llegaron telegramas al Ministerio de la Guerra felicitando al general Franco por su entrada victoriosa. Afuera empezó el supremo forcejeo entre los generales Varela y Miaja, entre el ejército de África y el pueblo en armas de Madrid. Oleada tras oleada de las tropas de Varela desafiaron el fuego de ametralladoras de los desesperados defensores, que estaban muy escasos de municiones, pero sabían muy bien lo que podían esperar de sus enemigos. Los alemanes bombardearon la Ciudad Universitaria, en preparación para el asalto de la infantería, mientras que los hombres de Varela se abrían camino hasta el cerro Garabitas, desde el cual podrían observar, y cañonear, a la ciudad. Una vez más las patrullas avanzadas alcanzaron los principales puentes, pero las ametralladoras les cerraron el paso. El coronel Rojo ordenó que las reservas desarmadas esperaran bajo cubierto, y mientras centenares de milicianos morían en sus puestos, los refuerzos se adelantaban para recoger sus fusiles. Cuando los marroquíes irrumpieron en dirección a la cárcel Modelo, el mismo

general Miaja se trasladó al sector amenazado, desenfundó su pistola y gritó a los soldados que se retiraban:

—¡Cobardes! ¡Morid en vuestras trincheras! ¡Morid con vuestro general!

La brecha fue taponada y los marroquíes de la vanguardia resultaron muertos, mientras el coronel Rojo obligaba al general Miaja a retroceder hacia la relativa seguridad de su automóvil.

Mientras tanto, en la tarde del domingo 8 de noviembre, las primeras unidades de las brigadas internacionales llegaban a Madrid. Unos 3000 hombres, en su mayoría italianos y alemanes, muchos de ellos veteranos de la primera guerra mundial y de los campos de concentración fascistas, marchando con toda marcialidad y entonando himnos revolucionarios, desfilaron por la capital en pie de guerra. Por el momento, la acometida más peligrosa de Varela había sido la conquista parcial del cerro Garabitas. A los primeros centenares de internacionales se les ordenó acudir a la Casa de Campo, donde fueron mezclados con los milicianos en una proporción aproximada de uno a cuatro, y estos inmediatamente siguieron sus ejemplos de excavar «pozos de lobo», de cubrirse, y de ahorrar municiones. Al día siguiente, la mayoría de ellos pagaron el precio del esfuerzo nacionalista por romper las defensas de la capital en dirección a la Ciudad Universitaria.

Durante diez días la batalla prosiguió sin pausa. Madrid se convirtió de repente en el centro del mundo. Los mejores periodistas de todos los países seguían la lucha en la Casa de Campo y en la Ciudad Universitaria y gracias a anteojos desde las habitaciones de sus hoteles próximos a la plaza de España. En las calles podían comprobar el buen humor, la gracia y la dignidad que habían de convertir a casi todos ellos en campeones inmortales del pueblo español. Para los nacionalistas, haciendo caso omiso de las fuertes pérdidas y del peligro para sus flancos, merecía la pena hacer un supremo esfuerzo, porque la conquista de Madrid

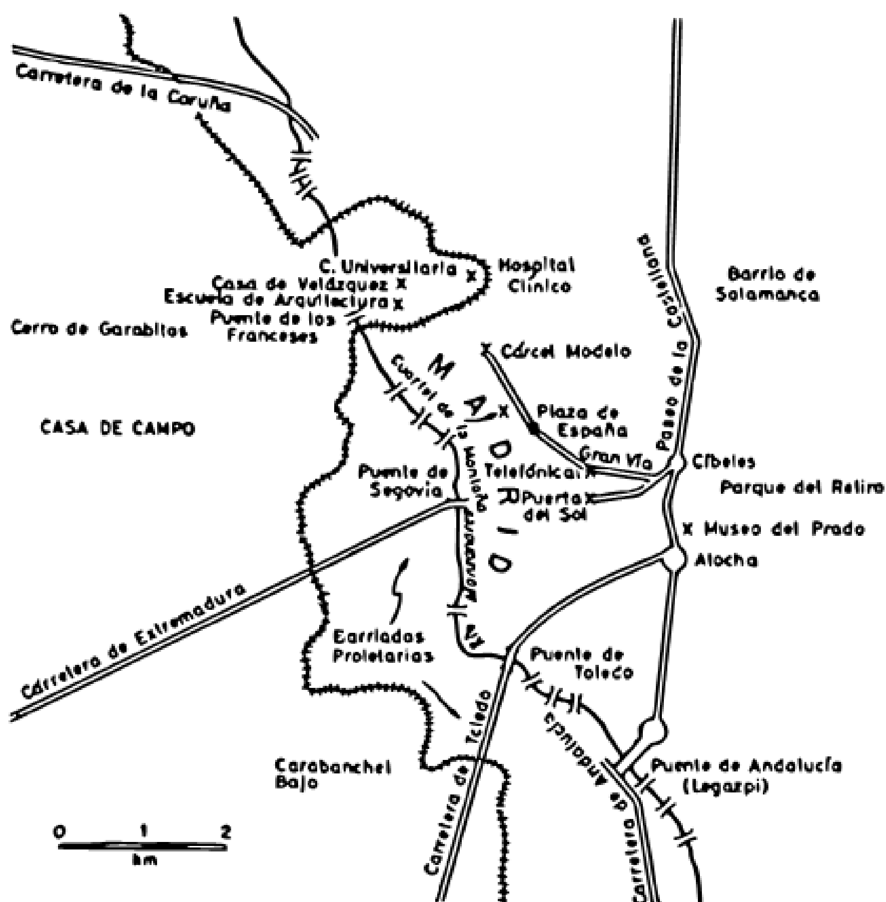
supondría el reconocimiento diplomático de las principales potencias y un éxito militar que supondría una rápida victoria en la guerra. Para los republicanos, el éxito de la defensa suponía las primeras buenas noticias, militarmente hablando, desde el 18 de julio. Para las oprimidas poblaciones de Galicia, Asturias y Andalucía significaba que la República no sería derrotada; y en todo el mundo, los antifascistas que habían visto a Hitler y a Mussolini ir de éxito en éxito sin que nadie les desafiara lanzaron la consigna: «*Madrid, tumba del fascismo*». De las trincheras, y por la radio, surgió la frase que se hizo famosa en 1916 en la defensa de Verdún: «*No pasarán*».

Los madrileños correspondieron del mismo modo a la admiración de los soldados y periodistas extranjeros. Los cafés eran una Babel de lenguas, y los españoles, al oír a alguien hablar en un idioma desconocido, se acercaban a él para abrazarle. «¡Vivan los rusos!», era el brindis que servía para las 20 nacionalidades representadas en las brigadas internacionales. Y si un checo o un polaco, no sabiendo ni una palabra de una lengua latina, se extraviaba en su camino, una docena de españoles lo acompañaban triunfalmente a su hotel o a su refugio subterráneo. En aquella semana, por primera vez, Cataluña envió un buen número de hombres (columnas de la Esquerra y de los anarquistas), que llevaban las armas automáticas francesas y checas que fueron pasadas libremente a través de la frontera hasta el 8 de agosto, y continuaron siendo introducidas de contrabando en cantidades variables desde entonces. En el Ministerio de la Guerra, los consejeros rusos, al darse cuenta rápidamente de la delgadez de las líneas nacionalistas y de que sus mejores tropas estaban a punto de agotarse, insistieron a Miaja y a Rojo para que lanzaran ataques de flanco. Pero los defensores de Madrid ya habían visto a demasiados milicianos muertos inútilmente al luchar en campo abierto, cosa para la que no estaban entrenados, y además tales milicias

habrían sido completamente incapaces de coordinar los avances de los tanques y de la infantería recomendados por los rusos.

El 14 de noviembre, el famoso dirigente anarquista Buenaventura Durruti llegó con su columna de 3000 hombres. Habían dejado el frente de Zaragoza y olvidaron temporalmente su regionalismo, y sus rencillas contra los socialistas y los comunistas. Pidieron al general Miaja que los enviara a primera línea y le solicitaron un sector que deseaban guarnecer solos, para que nadie pusiera en duda su capacidad y valor. Se les asignó una parte de la Ciudad Universitaria, donde dio la casualidad que el general Varela estaba preparando un ataque local concentrado para el día siguiente. Durante varias horas los anarquistas se mantuvieron sobre el terreno; pero cuando el enemigo irrumpió en la Facultad de Filosofía y en la Escuela de Arquitectura, la columna dio media vuelta y emprendió la huida[288]. Los internacionales y el Quinto Regimiento les cortaron el avance, aunque sin poder evitar que los hombres de Varela entraran el día 17 en el Hospital Clínico.

Durante varios días, en los casi destruidos edificios universitarios, las fuerzas oponentes conservaban diferentes pisos, gritándose insultos a través de los muros y arrojando granadas de mano por las ventanas y los huecos de las escaleras. Durruti, enfurecido por la mala actuación de sus hombres, les exigió que hicieran sacrificios y que borraran esta vergüenza. El día 21 de noviembre murió en circunstancias misteriosas, en las proximidades del frente, al parecer a causa de un disparo que le hicieron por la espalda. Sus amigos practicaron un registro domiciliario, casa por casa, en busca del quintacolumnista o del anarquista disgustado que pudo haberlo matado, aunque sin éxito. Su cadáver fue llevado a Barcelona, donde se le tributó un entierro de héroe, siendo el cortejo fúnebre presidido por el gobierno de la Generalitat en pleno[289].



Mapa 4. El frente de Madrid a finales de Noviembre de 1936

La conquista del Hospital Clínico representó el máximo avance del ejército atacante. Aquel mismo día 17, los marroquíes irrumpieron de nuevo en dirección a la plaza de España, y una vez más el general Miaja se adelantó para alentar a los defensores. Pero el día 17 el poder ofensivo de las columnas de Varela estaba exhausto. Los nacionalistas combinaron sus últimos avances con un supremo esfuerzo para quebrantar la resistencia de la ciudad por medio de bombardeos. Aquella tarde cayeron en una hora 2000 granadas en el centro de Madrid. Fueron alcanzados hospitales y bocas del Metro. La metralla regó los espacios abiertos, como la plaza de España. Granadas incendiarias provocaron fue-

gos esporádicos en los barrios obreros y en las zonas residenciales, y aquella noche los bombarderos, en oleadas de diez o doce cada vez, guiados por los incendios, soltaron carga tras carga de bombas. Madrid carecía de refugios y apenas si tenía cañones antiaéreos. Los cazas rusos no podían ser utilizados con la misma efectividad durante la noche como durante el día. Es posible que aquella noche sucumbieran unas quinientas personas; pero en una ciudad de un millón de habitantes, estas muertes no producían otro efecto que el de enardecer la voluntad de resistir, y fortalecieron más que debilitaron la heroica moral de los defensores.

El 18 de noviembre Italia y Alemania anunciaron que reconocían al régimen de Burgos como Gobierno legítimo de España. En un principio, habían pensado hacer este reconocimiento coincidiendo con la esperada entrada de los nacionalistas en Madrid. Pero haciéndolo el día 18, constituía simultáneamente una declaración de que estaban dispuestos a conceder toda la ayuda necesaria al general Franco y una confesión de que la guerra sería larga. Era, sobre todo, un tónico para la decaída moral nacionalista. A finales de julio los generales insurgentes habían recibido la amistosa ayuda de las empresas comerciales inglesas y americanas con intereses en España y de los funcionarios de Gibraltar. En agosto y septiembre sus tropas escogidas de las columnas de África marcharon desde Sevilla hasta el valle superior del Tajo. Sus aliados les habían proporcionado aviones, cañones y tanques; pero las fuerzas de tierra que habían llegado a las puertas de Madrid eran todas unidades del ejército español, o voluntarios carlistas y falangistas. (Para los oficiales nacionalistas, los moros no eran extranjeros).

En Madrid supieron que la opinión mundial se había vuelto contra ellos. Los periódicos extranjeros, tanto liberales como conservadores, les acusaban de *Schrecklichkeit*. Si los industriales y los oficiales de marina ingleses eran sus amigos, ¿cómo es que el

Gobierno inglés embargaba los envíos de material de guerra y que la opinión pública inglesa los condenaba? Como militares, no comprendían la complejidad de una sociedad industrial y democrática, y se enfurecían por lo que consideraban hipocresía y doblez. En Madrid se habían encontrado por primera vez frente a un enemigo pertrechado con equipo extranjero comparable al suyo. Chocaron con voluntarios de veinte naciones. Los moros, soberbios guerreros durante el avance pueblo a pueblo, estaban desorientados ante las calles y edificios de una ciudad moderna, y ante oponentes que no sólo eran tan valientes como ellos, sino adiestrados por las lecciones de la primera guerra mundial y la revolución rusa. Aunque dominaban Madrid gracias a su artillería y al cerro de Garabitas que a tan alto precio conquistaran, aunque habían logrado introducir una profunda cuña en la Ciudad Universitaria, aunque podían bombardear y cañonear la capital casi a su antojo, habían perdido sus mejores ímpetus y se sentían moralmente aislados.

El asalto a Madrid fue suspendido. Por razones de moral y de prestigio, el general Franco decidió mantener sus fuerzas en las posiciones más avanzadas que habían alcanzado, en vez de retirarlas a mejores líneas de asedio. Ambos ejércitos crearon un laberinto de trincheras y de alambradas. A unos cincuenta pies del perímetro occidental de la ciudad se gritaban insultos y se arrojaban granadas, hacían fuego esporádico con ametralladoras y morteros a las trincheras del adversario. Pero desde finales de noviembre de 1936 hasta el término de la guerra civil, las líneas en Madrid apenas si variaron más de cien metros en cualquier sector.

Capítulo 19

LA POLÍTICA Y LA GUERRA A PRINCIPIOS DE 1937

DESDE los primeros días de noviembre de 1936 hasta finales de marzo de 1937, Madrid constituyó el frente principal. Con raras excepciones, los nacionalistas conservaron la iniciativa militar en todas partes. En diciembre iniciaron pequeñas operaciones de tanteo, pero el 5 de enero lanzaron un fortísimo ataque al noroeste de la ciudad. Conocido a la vez por la batalla de la niebla o la batalla de la carretera de La Coruña, cortó dicha ruta y ganó para los nacionalistas algunas posiciones ventajosas desde el punto de vista táctico; pero acabó por agotamiento temporal, tras fuertes bajas por ambos bandos. La principal preocupación del general Franco en este período era el equipar una nueva fuerza ofensiva que reemplazara las unidades africanas y de requetés que habían sufrido más pérdidas en noviembre.

El 4 de diciembre, en el curso de una reunión del comité de No-intervención, Alemania e Italia rechazaron dos sugestiones franco-británicas: una con vistas a una mediación y la otra proponiendo que la No-intervención se refiriera a los voluntarios extranjeros así como a los envíos de armas. De esta manera reconocían francamente que pensaban ayudar tanto con armas como con hombres a la causa nacionalista. Un importante embarque de 3000 italianos abandonó su patria el 18 de diciembre. Entre esta fecha y finales de abril de 1937, la armada y la marina mer-

cante italianas transportaron unos 100.000 soldados a España, de los cuales 70.000 eran italianos y el resto norteafricanos reclutados principalmente en las zonas montañosas de Marruecos[290]. Durante el mes de noviembre, Alemania formó la llamada Legión Cóndor: 5 a 6000 hombres especializados destinados a actuar con autonomía bajo mando alemán. Las unidades básicas eran 4 escuadrillas de bombardeo (48 aviones), cuatro escuadrillas de caza, una escuadrilla de reconocimiento (12 aviones), una escuadrilla de hidroaviones, 4 baterías de 20 mm. (4 cañones por batería), 4 baterías de 88 mm., y cuatro compañías de tanquistas totalizando 48 tanques[291]. Los voluntarios eran reclutados abiertamente en las bases de entrenamiento; los diplomáticos y los periodistas sabían perfectamente, pero no así el comité de No-intervención, que habían zarpado de Hamburgo; hacia finales del mes de diciembre la Legión Cóndor había llegado en su totalidad a Sevilla. Otra unidad extranjera, más importante por razones de moral que por su fuerza militar, era el batallón de unos 600 o 700 voluntarios irlandeses que se formó a finales de 1936[292].

En la España nacionalista las autoridades contaban a principios de 1937 con 30.000 soldados carlistas, y habían llegado a reclutar hasta 120.000 milicianos falangistas[293]. Tras el fracaso en la conquista de Madrid y ante la perspectiva de una guerra larga, el general Franco prestó más atención al futuro. En un discurso pronunciado el 19 de enero, con motivo de la conmemoración del sexto mes del alzamiento, dijo a sus oyentes que España había sufrido por causa de un intelectualismo equivocado y la imitación de los modos extranjeros. No definió la futura forma del régimen; pero declaró que el sufragio universal y la autonomía regional habían de terminar. España necesitaba escuelas, sanatorios y relaciones más justas entre el capital y el trabajo. Sería un estado católico, y se respetarían las otras creencias religiosas. El general evocó los períodos más importantes de la historia de Es-

paña: la Reconquista y el reinado de Felipe II, de la casa de Austria; las guerras carlistas las veía como una lucha para mantener las tradiciones españolas contra las influencias liberales y europeizantes, y a la dictadura de Primo de Rivera como a la precursora de su propio régimen[294]. Se esforzó en indicar que se inspiraba en estos precedentes más que en el fascismo contemporáneo. Sus propuestas representaban una diestra combinación de los ideales de los dos grupos que le apoyaban más activamente: la Falange y los carlistas. Al mismo tiempo, no hizo concesiones demagógicas a las esperanzas de las masas izquierdistas. Por aquellos mismos meses la Falange lanzó una fuerte campaña de propaganda en favor de una eventual reforma agraria y de la separación de la Iglesia y el Estado. Sus impulsos idealistas se expresaron principalmente en la creación de comedores infantiles y orfanatos, y en el envío de enfermeras y medicamentos a los frentes[295].

Por aquel tiempo la principal tarea de los nacionalistas era la creación de unidades militares. Los alemanes pensaban que el ataque contra Madrid había sido mal dirigido y presionaron a Franco en enero para que aceptara un Estado Mayor combinado incluyendo a 5 oficiales alemanes y a otros 5 italianos[296]. Pero también entre los alemanes e italianos había diferencias. Franco y los alemanes eran partidarios de un plan para lanzar ataques envolventes contra la capital desde el Noroeste y el Sudoeste, impidiendo así que el ejército defensor pudiera trasladar sus mejores fuerzas a cualquiera de las zonas amenazadas. El ataque combinado, sin embargo, habría colocado a las recién llegadas tropas italianas bajo mando alemán, y los italianos pidieron un frente propio. Sin embargo, no se dejaba de reconocer que en noviembre los tanques rusos superaban a los Heinkel. Ambas potencias fascistas enviaron, pues, ahora su material de guerra más moderno, pensando en que ejercerían el control del mismo.

Después de la batalla de Madrid, la República procedió asimismo a reorganizar sus fuerzas militares. El Quinto Regimiento, que ahora contaba de 60 a 70.000 hombres, de los cuales casi una mitad eran comunistas, fue disuelto, así como las fuerzas de la CNT, que contaban con unos 30.000 hombres. Ambas unidades fueron la base para la formación de media docena de «brigadas mixtas», cuyos principales jefes eran los comunistas Líster, Modesto, Valentín González («El Campesino») y el anarquista Cipriano Mera. Las brigadas mixtas aceptaron el sistema centralizado de suministros y paga, y pasaron a depender del mando jerárquico de la Junta de Defensa del general Miaja. Sin embargo, los socialistas, comunistas y anarquistas prosiguieron con sus mutuas actitudes de recelo. Aunque aceptaron una reorganización formal de alto nivel, lograron resistir con éxito el intento de acabar con sus batallones y compañías. El ejército defensor de Madrid no se convirtió en realidad, ni mucho menos, en un crisol de sus diferentes componentes políticos.

En Albacete, bajo la dirección de Marty, se formaron dos brigadas internacionales más, con unos efectivos de unos 3000 hombres cada una[297]. Los voluntarios acudieron por centenares de todas las partes de la Europa central y occidental, de Inglaterra, Canadá y los Estados Unidos y, en menor número, de América latina. Muchos de ellos habían tenido que sacrificar buenas posiciones profesionales, a la tarea mucho más importante (para ellos) de derrotar al fascismo. La mayoría eran de origen burgués, aunque bastantes de ellos habían escogido el ser marineros o trabajadores industriales para poder escapar a las limitaciones de una existencia burguesa. Viniendo a España, la mayoría de ellos desafiaban los deseos, cuando no las leyes, de sus respectivos gobiernos, y por eso tuvieron que viajar con pasaportes falsos. La complejidad de sus motivos personales se refleja claramente en el siguiente pasaje de uno de los veteranos de las brigadas internacionales:

«Los hombres iban a España por diferentes razones; pero en casi todos los que encontré allí había una inquietud y una sensación de soledad común. En acción estos hombres luchaban como diablos, con la desesperación de unas convicciones aceradas; en sus conversaciones privadas siempre dejaban traslucir algo más. En cuanto a mí, sabía que los acontecimientos históricos de España habían coincidido con un impulso largo tiempo sentido para acabar con todas las enseñanzas que había recibido en mi juventud. Había dos razones importantes para que yo estuviera allí: lograr la autointegración y dirigir mis fuerzas individuales (tal como eran) hacia la lucha contra nuestro eterno enemigo: la opresión; y la validez de la segunda razón no quedaba menoscabada por el hecho de que sólo era ligeramente más débil que la primera, porque ambas formaban parte de una misma cosa. Para mí era necesario, a estas alturas de mi desarrollo como hombre, trabajar (por primera vez) en un cuerpo formado por otros muchos hombres; sumergirme en esa masa, no buscar ni la distinción ni la preferencia (el reverso de mis actividades en los últimos años), y de este modo lograr la autodisciplina, la paciencia y el desprendimiento generoso (lo opuesto a lo que se enseña a la clase media), y la construcción de un tipo de vida que engranara a la de los otros hombres y a los acontecimientos mundiales que los circunscribían. Hay mucha verdad en el viejo dicho: "Para una enfermedad desesperada, lo mejor es una cura desesperada"»[298].

Estos ardientes idealistas, que a menudo se habían sentido inadaptados tanto en sus vidas particulares como profesionales, vieron en la defensa de la democracia española una causa digna de sus energías. La mayoría de ellos no eran comunistas, aunque prácticamente todos admiraban el papel comunista en la organización de la ayuda internacional a la República. En París y Marsella se mostraron agradecidos al Partido Comunista francés, y a sus aliados socialistas y liberales, por la ayuda que les prestaron para cruzar de modo azaroso la frontera, a través de los pasos de montaña o los puertos pesqueros. En España compartieron con las juventudes socialistas y comunistas la convicción de que la era de la burguesía llegaba a su fin y de que el proletariado internacional estaba destinado a dirigir a la humanidad hacia un futuro mejor. Con tal fe y tal idealismo, no hacían preguntas cuando les quitaron sus pasaportes en Albacete, y aceptaron de buen grado el dominio de hierro del archiproletario André Marty, que como marinero había dirigido el amotinamiento de buques de guerra franceses enviados en 1919 a intervenir contra los bolche-

viques. Y cuando algunos camaradas desaparecían misteriosamente de la base de entrenamiento, la mayoría de ellos aceptaba, aunque con ciertos escrúpulos, la explicación de que los «espías fascistas» eran expurgados de entre sus filas[299].

Durante esos mismos meses, el ministro de Hacienda, Juan Negrín, reorganizó a los carabineros, formando con ellos un cuerpo escogido, conocido humorísticamente como «los cien mil hijos de Juan Negrín» (aunque en realidad eran unos 20.000), formado con voluntarios, milicias incorporadas al ejército regular y carabineros que habían permanecido leales a la República. La Generalitat tenía su propio ejército, que andaba muy mal de armamento, tanto por las combinaciones de la política rusa como por las necesidades del frente de Madrid[300]. Las milicias locales siguieron conservando el control en gran parte de Levante y el sudeste, y el Gobierno reconoció a finales de diciembre el Consejo de Aragón dominado por los anarquistas, y que regía la zona donde las columnas de la CNT establecieron el comunismo libertario en agosto de 1936.

Una víctima destacada de la desunión política de ambas zonas fue José Antonio Primo de Rivera. El Gobierno de Azaña lo había encarcelado, junto con otros importantes jefes falangistas, en marzo de 1936. Trasladado a Alicante, pudo sostener libremente correspondencia con el general Mola antes del alzamiento. Durante las primeras semanas de la guerra, el gobernador civil de Alicante hizo sus cálculos cuando personalidades de la clase media huyeron a la zona insurgente. Uno de tales refugiados estaba convencido de que él podría, si se le daban facilidades, lograr que José Antonio fuera puesto en libertad de modo extraoficial. El general Franco y sus consejeros alemanes se mostraron tibios ante tales proposiciones, por razones políticas y técnicas. Sin embargo, permitieron al refugiado alicantino que, acompañado por varios amigos íntimos de José Antonio, visitara el puerto viajando en un buque de guerra alemán. El gobernador civil fue invi-

tado a subir a bordo; pero en lugar de permitir que los españoles hablaran con él, el oficial alemán encargado los encerró en un camarote y habló él solo. El gobernador rechazó, desde luego, la idea de conducir su prisionero al buque alemán[301].

A principios de noviembre Alicante tenía un nuevo gobernador, también republicano, y el bombardeo de Madrid dio como resultado la demanda por la opinión de la ejecución del jefe de Falange, que ya llevaba tanto tiempo encarcelado. Juzgado el 13 de noviembre, se defendió él mismo, leyendo ante el tribunal editoriales de *Arriba*, órgano de su partido, en los que se diferenciaba claramente la Falange tanto de la extrema derecha como de los generales. También hizo notar que los insurgentes no habían hecho ningún esfuerzo para liberarlo, ni le habían nombrado para ocupar en el futuro ningún cargo en el Gobierno. Las pruebas concernientes a su papel en el alzamiento reflejaban las contradicciones de su espíritu. A veces ofreció milicias falangistas a Mola, como ofreció a Lerroux con ocasión de la revolución de Asturias. Pero había condenado la sublevación en la forma que había ocurrido, probablemente porque siempre había soñado con un verdadero «movimiento nacional», dirigido por los militares, pero con una amplia aprobación popular. El día 17 fue condenado a muerte, mientras que la prensa local elogiaba su conducta digna durante el proceso[302]. El gobernador hizo ejecutar la sentencia el día 20, sin esperar, como sabía que estaba legalmente obligado a hacerlo, a que el Gobierno la confirmara. La ejecución puso furioso a Largo Caballero, tanto por ser una estupidez política como una insubordinación. José Antonio dejó un testamento en el cual sugería un Gobierno ideal de unión nacional, incluyendo una mayoría de republicanos y un socialista moderado. Su muerte no fue anunciada oficialmente en la España nacionalista hasta finales de 1938, y para entonces ya había sido transformado en el santo patrón de una causa que jamás había aprobado en vida.

La reorganización de la zona republicana fue grandemente obstaculizada por factores ideológicos y personales. Largo Caballero había subido al poder como héroe de las masas, y deseaba basar su autoridad tanto en la UGT como la CNT, y cuando los anarquistas consintieron en participar en su segundo Gobierno, nombrado el 4 de noviembre, consideró esto como su mayor triunfo personal como educador del pueblo. Pero la CNT en su conjunto, así como buena parte de la UGT (precisamente aquéllos que eran más adictos a Largo Caballero), consideraban su propia participación en el Gobierno como una garantía de los cambios revolucionarios de descentralización y colectivismo de las primeras semanas de la guerra.

Largo Caballero, por otra parte, tan pronto como se convirtió en jefe del Gobierno, se dio cuenta de que era absolutamente necesario reconstruir la autoridad del Estado republicano y trabajar en estrecha cooperación con los liberales de la clase media. Las masas izquierdistas consideraban a Martínez Barrio virtualmente un traidor por sus esfuerzos para formar un Gobierno de compromiso el 18 de julio. Largo Caballero lo había puesto al frente de la nueva base de Albacete, para el entrenamiento de voluntarios extranjeros. Los obreros seguían creyendo, al igual que el jefe del Gobierno había una vez creído, que las milicias eran preferibles a un ejército regular. Largo Caballero nombró al general José Asensio Torrado como jefe del ejército del Centro. Cuando los anarquistas se quejaron de la disciplina, sobre la prohibición de hacer propaganda política y los castigos por ridiculizar las imágenes religiosas, Largo Caballero apoyó a Asensio. Mientras que algunos de sus presuntos partidarios continuaban dando «paseos», Largo Caballero aprobó los esfuerzos privados de sus ministros republicanos: Ruiz Funes, Giral, Irujo, Negrín y Bernardo Giner de los Ríos, para ayudar a las personas amenazadas a que abandonaran el país[303]. Pero o bien Largo Caballero no era lo suficientemente claro para explicar sus intenciones al público

o estaba demasiado preocupado con los problemas cotidianos para hacer ese esfuerzo.

Como parte de la reconstitución del Estado republicano, Largo Caballero insistió puntillosamente en el reconocimiento de su autoridad. Su autoridad y su orgullo habían sufrido un rudo golpe cuando el Gobierno huyó de Madrid el 6 de noviembre. Se sentía profundamente celoso del general poco distinguido a quien él había dejado detrás para defender lo mejor que pudiera la capital que ya parecía perdida, y que de la noche a la mañana se había convertido en el nombre que se citaba en los brindis de todos los antifascistas del mundo. A mediados de noviembre obligó a Miaja a hacer un viaje militarmente inútil a Valencia, para poder darse la satisfacción de que el jefe de la Junta de Madrid supiera que seguía siendo un subordinado de la personalidad civil que era jefe del Gobierno. Ni Felipe II o los virreyes que gobernaban en México o en Lima se preocupaban más que Francisco Largo Caballero de que se les informase detalladamente de todo. Más de uno de sus colegas burgueses lo describió como un fraile sindical. Quería recibos por todos los cartuchos entregados a los desesperados defensores de Madrid. Cuando los internacionales decidieron acabar con los expedienteos y buscarse ellos mismos mantas en Albacete, el jefe del Gobierno, a través de Martínez Barrio, hizo que dichas mantas fueran devueltas al almacén, tras de lo cual fueron de nuevo entregadas con todos los requisitos. Los camaradas Togliatti y Marty a veces se preguntaban si estaban tratando con el «*Lenin español*» o con un antiguo maestro de escuela. Para Largo Caballero era una cuestión de honestidad, decoro y autoridad gubernamental. Afortunadamente para los republicanos, sus oficiales más capacitados no permitieron que las disputas sobre jurisdicción se interfirieran en su actuación. El coronel Rojo, en la zona de Madrid, y el general Asensio para el Gobierno en Valencia, crearon en los meses de

diciembre y enero la primera infantería republicana capaz de luchar en campo abierto.

En la zona nacionalista, las dificultades para coordinar la cooperación italo-alemana obligaron al general Franco a acceder a la demanda italiana de un frente separado. Las nuevas tropas marroquíes y la Legión Cóndor estaban destinadas a una eventual reanudación de la ofensiva contra Madrid. Los primeros soldados italianos de infantería podrían entretanto participar en la toma de Málaga, en colaboración con las fuerzas españolas y marroquíes del general Queipo de Llano. La ciudad no era muy importante estratégicamente, ya que hacía tiempo que había sido considerada inútil como base naval; pero la campaña serviría de entrenamiento para los italianos y sería una victoria que compensaría del fracaso ante las puertas de Madrid.

La situación de Málaga era el prototipo de las peores condiciones existentes en la zona republicana. En la segunda semana de junio, la violencia laboral costó tres vidas humanas atribuibles a asesinatos: el de un concejal comunista del municipio, un delegado sindical socialista y el hijo de un jefe de la CNT, al que mataron accidentalmente en vez de a su padre. En las semanas posteriores al 18 de julio, las tiendas de la ciudad fueron saqueadas y se prendió fuego a los mejores barrios residenciales. En un buque prisión del puerto fueron retenidos unos 600 rehenes, siendo fusilados grupos de ellos cada vez que había una incursión aérea contra el puerto. Los comités de marineros de la flota y la administración de la ciudad estaban divididos por terribles rivalidades entre sus adheridos comunistas o de la CNT. Los camioneros de los sindicatos de Valencia o de Almería no se podían poner de acuerdo sobre la división del trabajo entre ellos para la entrega de los suministros que traían a Málaga, y uno de los puentes de la carretera costera principal estuvo sin que nadie lo reparara durante cinco meses antes de la caída de la ciudad. Como todas las ciudades republicanas, Málaga carecía de defensa antiaérea. Sus

milicianos, en su mayoría anarquistas, no cavaron trincheras ni construyeron blocaos en las carreteras. En enero, el Gobierno envió a un oficial de carrera de confianza, el coronel Villalba, para que organizara la defensa; pero sin cañones que colocar en las alturas, sin municiones que dar a sus soldados, y sin la menor posibilidad de controlar las enconadas rivalidades políticas dentro de la ciudad, virtualmente no podía hacer nada[304].

Las fuerzas invasoras consistían en unos 10.000 moros, 5000 requetés y 5000 italianos, y artillería, y con el máximo de tanques y aviones que podían ser utilizados con un máximo de eficacia ante la virtual ausencia de oposición[305]. Los milicianos resistían ante el fuego de fusilería o de granadas; pero se desbandaban al ver los tanques, a los que no estaban acostumbrados. El 6 de febrero unas 100.000 personas iniciaron un desorganizado éxodo en masa a lo largo de la carretera de la costa hacia Almería. Los invasores aguardaron en las colinas durante tres días y luego entraron en la ciudad prácticamente sin disparar un tiro. Con ellos traían una lista interminable de personas que habían de ser ejecutadas: por haber sido dirigentes del Frente Popular, por saqueo, por responsabilidad en lo ocurrido en los buques-prisión, por participar en huelgas en los pasados años.

Los prisioneros fueron amontonados en el patio del Ayuntamiento, y fueron juzgados sin testigos por tres jueces militares y condenados a muerte por rebelión militar. Con los brazos atados con cuerdas, fueron sacados a la calle, cargados en camiones y llevados a las afueras de la ciudad[306]. Pelotones de ejecución italianos y españoles compartieron el trabajo. Las autoridades militares italianas se sintieron horrorizadas ante el número de ejecuciones y por las mutilaciones practicadas en los cadáveres de los ejecutados y de los heridos. El cónsul Bianchi pudo salvar a algunas personas de ser fusiladas, dado que gozaba de la buena voluntad de las personas conservadoras por haber protegido a muchos individuos destacados durante la dominación anarco-co-

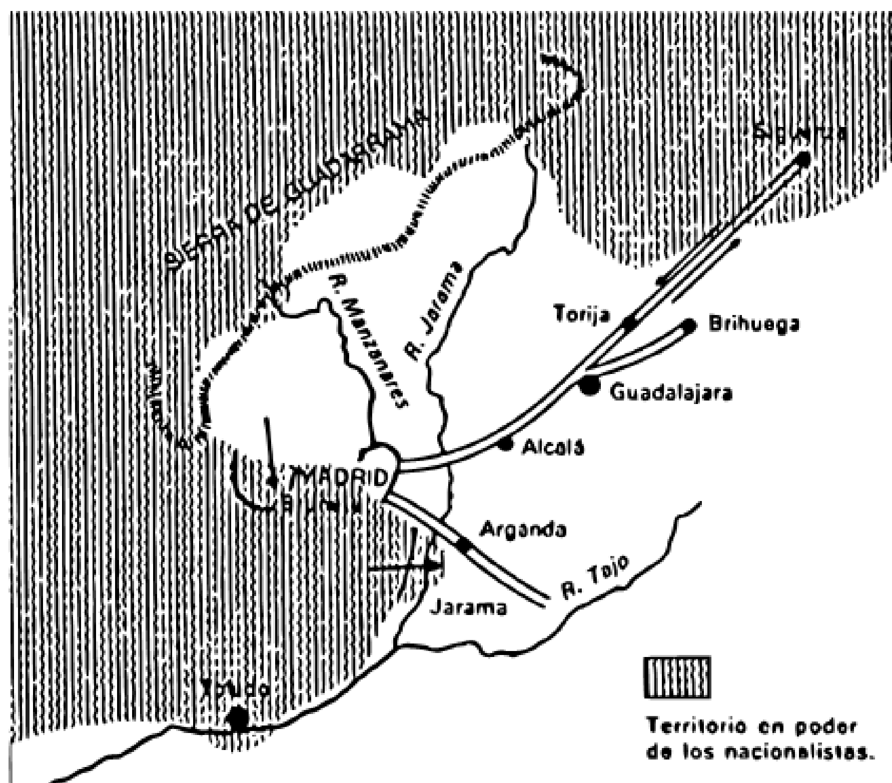
munista en la ciudad. El general Roatta escribió al embajador italiano, Roberto Cantalupo, diciéndole que los italianos tenían órdenes de tratar a sus prisioneros con humanidad y que temían entregárselos a los españoles. Mientras tanto, durante unas dos semanas, la flota y las fuerzas aéreas nacionalistas bombardearon a placer las columnas de refugiados que huían por la carretera costera. Los buques de guerra alemanes también tomaron parte en el cañoneo, a veces en presencia de buques de guerra ingleses que no hicieron nada para impedirlo. Veinte años después, los camioneros aún hallaban los esqueletos de los que huyeron de Málaga en febrero de 1937.

El 2 de marzo el embajador Cantalupo recibió instrucciones para discutir con el general Franco las ejecuciones de Málaga, como cuestión moral que afectaba a la reputación tanto de España como de Italia. En la conversación que siguió, el general reconoció que Málaga era una ciudad intensamente «roja» y que los tribunales habían sido rigurosos. Confesó que no estaba en posición de controlar fácilmente los tribunales locales y sugirió que sólo el clero podía moderar las vengativas pasiones que se ventilaban en Málaga[307].

La marcha triunfal sobre Málaga coincidió con una ofensiva estratégica mucho más importante al sur de Madrid. Ambos bandos habían estado concentrando tropas en el valle del Jarama durante el mes de enero. El Gobierno de Valencia había escogido tal zona para lanzar un contraataque contra el flanco derecho del ejército sitiador de Madrid. Los nacionalistas planeaban una acción para cortar la principal carretera Madrid-Valencia, como modo de cerrar más el asedio y preparar el cerco final de la capital desde el Norte. La Junta de Madrid conocía bien el plan nacionalista; pero la zona del Jarama caía más bajo la jurisdicción del mando del ejército del Centro que del de Madrid, y Largo Caballero opinaba que mientras el Gobierno republicano no pudiera tomar la iniciativa militar sería incapaz de resolver sus pro-

blemas políticos. Debido a la continua tensión entre Madrid y Valencia, no había ningún plan coordinado para la ofensiva ni la defensiva, y ni siquiera estaban claramente definidos los límites entre el ejército de Madrid (Miaja) y el del centro (Pozas).

El general Orgaz, al mando táctico de las fuerzas nacionalistas, había concentrado hacia finales de enero a unos 40.000 hombres (en su mayoría africanos), apoyados por artillería antitanque, dos batallones alemanes que operaban con ametralladoras pesadas y tanques y aviones de la Legión Cóndor. La zona del Jarama era bastante llana. Con tiempo seco permitiría las rápidas maniobras motorizadas; pero las lluvias obligaron a Orgaz a esperar del 23 de enero al 5 de febrero para lanzar su ataque. La nueva infantería republicana falló al no fortificar las alturas, y como estaban pensando en su próxima ofensiva, no minaron los puentes del Jarama hasta después de que comenzara el ataque nacionalista. Pronto perdieron las colinas; los dos puentes principales, aunque volados, fueron minados de tal modo que uno volvió a caer sobre su sitio y el otro fue ligeramente debilitado por la pérdida de parte del maderamen.



Mapa 5. La batallas cercanas a Madrid en 1937: Jarama, en febrero; Guadalajara, en marzo; Brunete, en julio

Los tanques rusos refrenaron el avance durante breves períodos, pero los nacionalistas concentraron rápidamente el fuego de su artillería pesada y les forzaron a retirarse. Durante cinco días pareció como si los nacionalistas fueran a conseguir plenamente su objetivo. Pero tras las primeras pérdidas debidas a la ignorancia de la técnica militar, el ejército republicano, fortalecido con las brigadas internacionales 14 y 15, despuntó la ofensiva de Orgaz. El suelo duro y llano no permitía cubrirse, y sólo abrir trincheras poco profundas. Pero en tres meses de intenso entrenamiento, los soldados habían aprendido a mantenerse agachados, a moverse rápidamente, a disparar ráfagas cortas, y a mantenerse en contacto con sus oficiales. Ahora manejaban fusiles, morteros y ametralladoras tan bien como sus oponentes marroquíes. Al

proverbial estoicismo español y su resistencia al hambre y al frío sumaban ahora el valor que anima a un ejército consciente de la causa por la que lucha.

El 12 de febrero unos 40 nuevos aviones rusos (15 cazabombarderos y 25 cazas) dieron a los republicanos la supremacía en el aire. Los cazabombarderos podían lanzarse en picado hasta una altura de 1000 pies para ametrallar a la infantería, y los «chatos», así llamados por la forma de su morro, demostraron ser superiores a los cazas *Fiat* italianos y como consecuencia obligaron a retirarse a los bombarderos de la Legión Cóndor[308]. Aquella noche (12 de febrero), el general Orgaz comprometió todas sus reservas, y varias compañías de británicos, polacos y españoles fueron despedazadas cuando intentaron conservar las posiciones clave que impedían que los nacionalistas cortaran la carretera de Valencia. Hacia el día 15 la ofensiva había perdido su fuerza. Al igual que en la batalla de la carretera de La Coruña, los nacionalistas habían ganado terreno, pero la victoria estratégica se les había escapado de las manos.

La lista de bajas del Jarama fue la más larga hasta entonces por diez días de lucha. Además, los moros últimamente reclutados trajeron con ellos la malaria. Durante semanas los hospitales de Madrid y Talavera estuvieron llenos de los heridos y de los enfermos de ambos bandos. Pero ahora, más que nunca, el tiempo era importante para el general Franco. Desde principios de noviembre hasta la batalla del Jarama, las pérdidas sufridas por el Tercio y los moros eran tales, que estas fuerzas de choque no podrían volver a constituir la vanguardia de una ofensiva nacionalista. También los republicanos habían perdido la flor y nata de las brigadas internacionales, pero el esfuerzo principal de la batalla del Jarama había sido soportado por tropas españolas que serían más fuertes cada semana que transcurriera.

Capítulo 20

GUADALAJARA Y LA UNIFICACIÓN EN LA ESPAÑA NACIONALISTA

DESPUÉS de que la batalla del Jarama quedara en tablas, el general Franco se vio presionado por sus aliados para que asestara rápidamente un nuevo golpe, y para que ganara la guerra, sin obligarles constantemente a hacer mayores inversiones y a tener que arriesgarse internacionalmente más. En marzo era tan cierto como en el anterior noviembre que sólo la toma de Madrid podría acabar la guerra rápidamente. En aquel mismo mes la mayor cantidad de tropas de refresco y de equipo disponible eran de procedencia italiana. En Italia, la prensa fascista celebró la conquista de Málaga como una victoria propia, y el 2 de marzo, el Gran Consejo Fascista envió un mensaje de aliento y solidaridad al *Corpo Truppe Volontarie* (CTV), en la España nacionalista. Unos 50.000 soldados fueron concentrados en Sigüenza, en la zona montañosa al nordeste de Madrid. Treinta mil eran italianos al mando de los generales Roatta y Mancini; el resto era una combinación de legionarios, moros y requetés mandados por el general Moscardó. El plan era avanzar sobre Madrid pasando por Brihuega y Guadalajara, moviéndose en general cuesta abajo por carreteras bastante buenas. Las fuerzas atacantes incluían 250 tanques, 180 piezas de artillería, 4 compañías motorizadas de ametralladoras, unos 70 aviones (en su mayoría cazas), y unos 20 camiones por batallón de 650 soldados. En conjunto era

la fuerza mejor armada y mejor equipada que hasta ahora había entrado en batalla[309].

La Junta de Madrid esperaba una ofensiva importante por el Norte, y los planes de defensa estaban mejor coordinados que en febrero, porque la autoridad del general Miaja había sido ampliada a los sectores del Jarama y de Guadalajara. El ataque, sin embargo, logró la sorpresa táctica. El 8 de marzo los italianos rompieron rápidamente las líneas del frente, y al terminar el día dominaban las alturas desde las cuales podían literalmente rodar cuesta abajo hacia Madrid. El exceso de confianza les llevó a avanzar demasiado rápidamente para que sus unidades pudieran conservar las líneas de comunicaciones y suministros. Un cambio repentino del tiempo sorprendió a los camiones italianos en medio de una tormenta de nieve y de aguanieve, precisamente cuando los republicanos comenzaban a mantenerse firmemente al sur de Brihuega y de Trijueque. Las condiciones meteorológicas obligaron asimismo a los aviones italianos a permanecer en sus bases al oeste de la sierra del Guadarrama, mientras que los aviones republicanos, aunque con considerable riesgo, podían operar desde los aeródromos al este de Madrid. El coronel Hidalgo de Cisneros comprometió todas sus fuerzas aéreas. Los cazas rusos, volando a baja altura, ametrallaron las atascadas columnas de camiones, mientras que los viejos Breguets del año 1918, que habían sobrevivido a las batallas aéreas del verano, volaban en misiones de bombardeo.

Mientras tanto, los jefes políticos del batallón Garibaldi, los comunistas Vittorio Vidali (Carlos Contreras) y Luigi Longo y el socialista Pietro Nenni, iniciaron una campaña de propaganda dirigida a destruir la moral del CTV. Llevando altavoces hasta las líneas, y dejando caer octavillas desde el aire, exhortaron a los soldados italianos a no disparar contra sus hermanos de la clase obrera, y les garantizaron la inmunidad si desertaban hacia las líneas republicanas llevando sus armas[310]. En el otro lado el gene-

ral Mancini recordó a sus hombres que la Italia del año XV (de la era fascista) sería juzgada por sus hechos. Los garibaldinos, decía, sólo eran hermanos de la *canalla* marxista que las patrullas fascistas habían aplastado en Italia.

Durante cinco días (marzo 12-17), los italianos prosiguieron lanzando ataques menores y conteniendo los contraataques republicanos, ocurriendo muy pocas deserciones. En varias ocasiones, cuando las posiciones fascistas eran rodeadas, los altavoces invitaban a sus «hermanos» a rendirse, y varias docenas de italianos se sintieron felices de convertirse en prisioneros dadas las circunstancias. Pero no hay nada que pruebe que la propaganda de los garibaldinos jugara un gran papel en la batalla[311]. Los soldados italianos no eran por supuesto voluntarios en el mismo sentido que los miembros de las brigadas internacionales. Tampoco eran intelectuales que habían sufrido en campos de concentración, ni demócratas, ni marxistas, que hubiesen sacrificado buenos empleos o situaciones para luchar por una noble causa. Eran soldados uniformados cumpliendo su servicio militar, aunque también les gustase ver mundo y correr aventuras. La mayoría de ellos se habían embarcado para España entusiasmados. Estaban bien alimentados y equipados, su Duce estaba orgulloso de ellos, y todos aquéllos que tenían una habilidad especial ganaban pagas extra.

Sin embargo, habían venido a España pensando en victorias fáciles. Como carecían de los motivos individuales que animaban a los italianos del batallón Garibaldi, se desmoralizaron fácilmente por la destrucción de sus columnas de camiones y por la ausencia de ayuda efectiva por parte de sus aliados. El desacuerdo entre alemanes e italianos había impedido al general Franco lanzar la ofensiva coordinada al Sur y al Norte que podría haberle llevado a la conquista de la capital. La ofensiva del Jarama se había agotado por sí misma, mientras los italianos ejercitaban sus músculos en la travesura de Málaga. A finales de febrero el gene-

ral Orgaz renovó los ataques en el Jarama; pero había sufrido enormes pérdidas, así que cuando los desesperados italianos pidieron de nuevo una presión que aliviara la que sufrían sus unidades cerca de Guadalajara, no obtuvieron respuesta. El 18 de marzo, el general Mancini estaba en Salamanca, en busca de refuerzos marroquíes, mientras que las tropas de Líster, «*El Campesino*» y Cipriano Mera, precedidas por 70 tanques rusos, persiguieron al CTV a lo largo de la carretera al norte de Brihuega.

En realidad, la desbandada se detuvo en seco a poca distancia de las bases de donde se había iniciado el avance. Una vez más los nacionalistas habían conseguido una neta ganancia de terreno. Pero la batalla de Guadalajara fue mucho más que otra victoria defensiva de los republicanos. Mussolini había comprometido abiertamente el prestigio de las fuerzas armadas italianas en una victoria en Madrid. Su ejército, totalmente motorizado y equipado con abundancia con las armas más modernas, había sido derrotado por un ejército republicano español que cuatro meses antes ni siquiera existía, y por sus miles de italianos antifascistas. Los lectores de los periódicos europeos y americanos, que ya estaban inquietos por la costumbre de no leer más que relatos de victorias fascistas, se alegraron al recibir los despachos de Herbert Matthews para el New York Times y los artículos de Ernest Hemingway. Ambos eran corresponsales de guerra experimentados, y de ninguna manera izquierdista; pero ambos celebraron la victoria de Guadalajara como un momento decisivo tanto militar como moral en la lucha contra un fascismo fanfarrón hasta entonces jamás derrotado. El general Franco tuvo luego que ocuparse durante varios meses de calmar a los oficiales italianos, que se daban perfecta cuenta de la satisfacción sentida por muchos españoles por su derrota. En las charlas de café de ambas zonas CTV era traducido jocosamente por «¿*Cuándo Te Vas*?».

Durante la retirada, los republicanos capturaron grandes cantidades de equipo, unos 300 prisioneros, y una masa de docu-

mentos que demostraban sin lugar a duda que decenas de miles de «voluntarios» italianos eran en realidad soldados alistados. El Gobierno esperó primero poder mostrar estas pruebas al comité de Londres; pero éste, adhiriéndose firmemente a sus reglas de procedimiento de septiembre de 1936, se declaró incompetente para recibir material de quien no estuviera representado en el comité de No-intervención. Por lo tanto, el ministro español de Asuntos Exteriores, Álvarez del Vayo, exhibió los documentos ante la asamblea de la Sociedad de Naciones[312]. Para asegurarse de que nadie se haría ilusiones sobre un posible cambio en la política italiana, el conde Grandi dijo el 23 de marzo al comité de No-intervención que no sería retirado ningún soldado italiano hasta que la victoria nacionalista estuviera asegurada. Los franceses mantuvieron su frontera firmemente cerrada. Los ingleses, como siempre, hallaron las pruebas poco concluyentes.

Sin embargo, la batalla de Guadalajara dramatizó el aspecto crecientemente internacional de la guerra civil. Lejos de negar las acusaciones de intervención, como había ordenado a sus delegados que hicieran en las primeras reuniones del comité de No-intervención, Mussolini rugía herido e indignado, jurando que los ejércitos italianos vengarían la humillación de Guadalajara. La balanza de los sentimientos británicos cambió también ligeramente desde el otoño de 1936. El ocaso del poder anarquista, el fin virtual de los asesinatos y la firme lealtad republicana de los vascos, impresionaron incluso a un amplio sector de la opinión conservadora. Al mismo tiempo, el ministro del Exterior andaba a la greña con algunos de sus colegas del Gabinete. El 17 de noviembre de 1936, justamente cuando Alemania e Italia estaban a punto de reconocer al Gobierno nacionalista, la marina británica recibió órdenes de no acompañar buques mercantes más allá del límite de las tres millas. Mientras Inglaterra había presionado a los propietarios de buques desde el principio para que no llevaran armas a ninguno de los dos bandos, la marina de guerra había

protegido sin embargo a los buques de carga en aguas internacionales, aunque no fuera más que para proteger el prestigio de Inglaterra como potencia marítima. Cuando Madrid parecía estar a punto de caer, Sir Samuel Hoare, primer lord del Almirantazgo, favoreció la idea de conceder derechos de beligerancia a los nacionalistas, y Eden tuvo dificultades al tratar de convencer a la mayoría de los ministros de que sería erróneo.

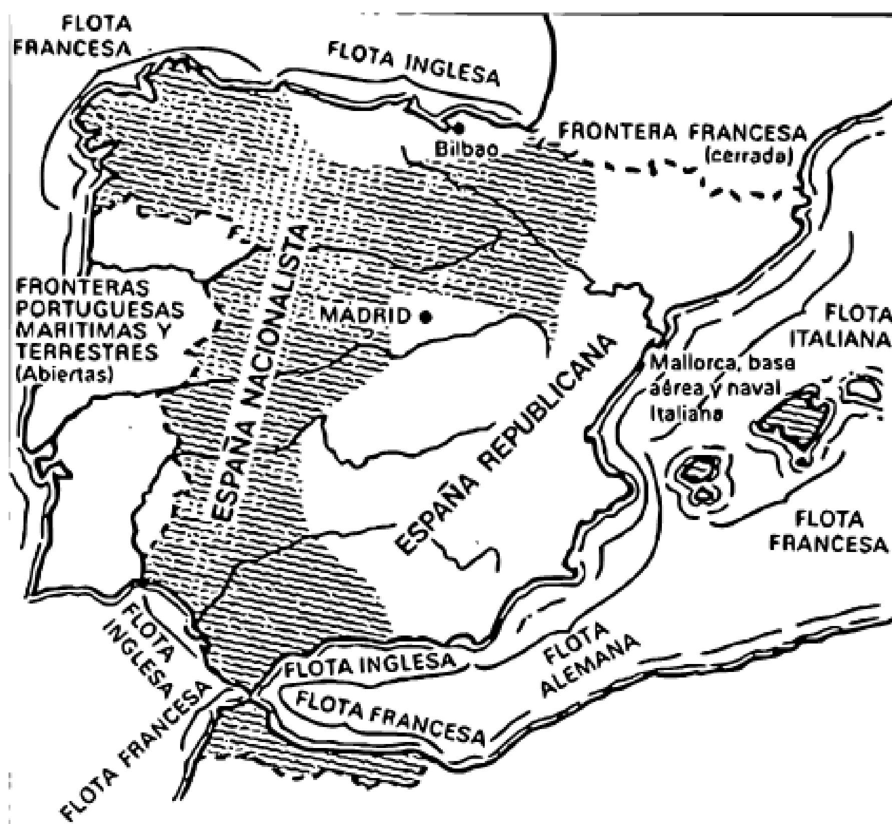
El 8 de enero de 1937 Eden propuso que la marina británica patrullara a lo largo de todas las costas españolas para impedir que llegaran armas a cualquiera de los dos bandos. Estaba exasperado por las informaciones recibidas de que unos 4000 soldados italianos habían desembarcado en España desde la firma, el 2 de enero, de un *Gentlemen's Agreement* (acuerdo entre caballeros) para preservar el statu quo anglo-italiano en el Mediterráneo. El Almirantazgo indicó las dificultades técnicas de tal operación y el primer ministro, Baldwin, no apoyó la propuesta de Edén[313].

Durante los meses de enero y febrero se habló mucho en el comité de No-intervención de establecer un sistema de observadores neutrales de tierra y mar, para que comprobaran la efectividad de los acuerdos. Los rusos propusieron que las patrullas navales incluyeran buques de todas las potencias firmantes. Esto era completamente inaceptable para las potencias fascistas, y tras varios meses de discusión se llegó a un acuerdo sobre un plan por el que las costas republicanas serían patrulladas por las marinas italiana y alemana y la costa nacionalista por las marinas francesas y británica[314]. El 19 de abril, que era cuando el acuerdo tenía que comenzar a surtir efecto, aún subsistía la excitación por lo de Guadalajara. Italia tenía en España todas las tropas que deseaba por el momento. La vigilancia de los puertos republicanos por la flota italo-alemana obstaculizaría grandemente la ayuda soviética, mientras que los navíos británicos y franceses no era probable que molestasen a los buques con destino a Portugal o la España nacionalista. Mientras que Francia aceptó la supervisión

de su frontera, Portugal permitió sólo algunos observadores británicos, de quienes se esperaba que actuasen de acuerdo con el espíritu de la histórica alianza anglo-portuguesa.

Ni la batalla de Madrid ni la de Guadalajara alteraron la política americana tal como fue establecida en los primeros días de la guerra civil. A finales de noviembre el ministro de Asuntos Exteriores francés, Yvon Delbos, sondeó al embajador Bullitt sobre la posibilidad de unirse a un llamamiento anglo-franco-norteamericano a las potencias que intervenían. El 30 de noviembre Bullitt y el departamento de Estado acordaron que tal acción no sería apropiada para los Estados Unidos. El acta de neutralidad de 1935 no decía nada sobre las guerras civiles, y a falta de una ley específica, el Gobierno había confiado con éxito en la persuasión para impedir la venta de armas a España. Pero el 28 de diciembre el departamento de Estado se sintió obligado, aunque de mala gana, a conceder una licencia de exportación para un cargamento, valorado en $ 2777.000, de motores de aviación destinado a Bilbao. El Congreso actuó ahora rápidamente, aprobando una resolución conjunta el 6 de enero de 1937 prohibiendo la exportación de armas a España. La resolución vino con un retraso de unas horas para impedir que zarpara el Mar Cantábrico, cuya travesía, a la que se dio mucha publicidad, acabó con la captura del buque por la marina nacionalista. El 11 de enero el Gobierno trató de impedir que los americanos se alistaran en las brigadas internacionales, declarando que los pasaportes norteamericanos no eran válidos para viajar a España. El primero de mayo, el acta de neutralidad de 1937 se convirtió en ley, la cual se aplicó específicamente a las guerras civiles tanto como a las guerras entre estados. Por otra parte, como la ley anterior, no se aplicaba al petróleo ni a los vehículos no militares. La regla sobre pasaportes fue también enmendada por permitir que fueran a España médicos, enfermeras y conductores de ambulancias[315]. Así que puede decirse que la participación americana en la guerra ci-

vil española que en 1937 contaba con la aprobación gubernamental se reducía a la ayuda médica voluntaria, la mayor parte de la cual fue para los republicanos, y para la venta de petróleo y camiones, la mayoría de los cuales fueron para los que tenían crédito y podían recibir buques mercantes en puertos no bombardeados ni bloqueados, es decir, los nacionalistas.



Mapa 6. Lugares patrullados por las tropas de No-Intervención en abril-junio de 1937.

Dentro de la España nacionalista la derrota italiana en Guadalajara aumentó de modo agudo la efervescencia política bajo la superficie. La Falange estaba sin jefe desde el encarcelamiento de José Antonio, y la mayor parte de sus miembros se habían afiliado después del 18 de julio. Los militares habían concebido siempre a la Falange como una organización manejable que les ayu-

daría a manejar a las masas «rojas». Pero entre los miembros antiguos más prestigiosos había un grupo importante de orientación izquierdista, que siempre se había sentido insatisfecho con el retraso indefinido en la aplicación de las reformas sociales, de las cuales de vez en cuando hablaban los generales sin hacer nada por ellas. Y se agitó en favor de una ideología nacional socialista, en el sentido literal de estas palabras. Odiaba al marxismo porque era ateo e internacionalista. Pero creía en la reforma agraria y emocionalmente estaba a favor de los obreros; miraba a las masas de la CNT y a la UGT como a descarriados que habían sido engañados por propagandistas extranjeros.

Estos radicales se agruparon en torno de la hermana del fundador, Pilar Primo de Rivera. Eran dirigidos por Manuel Hedilla, individuo impetuoso y valiente, aunque no muy inteligente, que anteriormente fue mecánico. El embajador alemán, Von Faupel, que había encabezado un cierto número de misiones militares en América del Sur durante la década de los 20, y que era un nazi del ala izquierda, dio ánimos al grupo de Hedilla, bien porque creyera que Hedilla era capaz de presidir un Gobierno, o porque pensara en la Falange simplemente como un medio de presionar al extraordinariamente obstinado generalísimo. La cosa no está clara.

Mientras tanto, a finales de marzo llegó a Salamanca el cuñado del general Franco, Ramón Serrano Súñer. En 1931, Serrano Súñer era un joven abogado de reconocida habilidad y de convicciones monárquicas. Se convirtió en el jefe de la sección juvenil de Acción Popular (JAP) y en uno de los jefes parlamentarios de la CEDA. También era amigo íntimo de José Antonio, pero no se afilió a la Falange. Admirador de Mussolini y Dollfuss y enemigo declarado de la democracia, pasó el mes de agosto de 1936 en la cárcel Modelo, donde fue testigo del asesinato de Ruiz de Alda y del hermano de José Antonio. Dos de sus hermanos habían sido víctimas de los «paseos». A principios de 1937

escapó de Madrid gracias a la ayuda del dirigente socialista asturiano Belarmino Tomás[316] y de diplomáticos extranjeros[317].

Su llegada a Salamanca coincidió con la creciente agitación de la Falange. Y logró convencer a su cuñado de su creencia largo tiempo sentida de que ni la Falange ni los carlistas tenían dirigentes de verdadera estatura. La experiencia del Frente Popular había hecho surgir en él una profunda reacción nacionalista y tradicionalista. Comparaba el presente caos, la inseguridad física y la amenaza a la unidad de la nación con la situación existente al principio del reinado de los Reyes Católicos. Ahora no había ninguna reina Isabel a mano, sin embargo, y el propio general Franco tendría que ser el instrumento de Dios para restaurar el poder y la unidad de España[318].

A principios de abril el general estaba planeando la fusión de los carlistas y de los diversos grupos juveniles católicos y de las JONS restantes con la Falange, a fin de formar un partido político único bajo su absoluto control. Intentaba nombrarlo Secretariado Político, concediendo una influencia mayoritaria a la fracción menos radical de la Falange. Hedilla intentó oponerse a esto nombrando por su cuenta una Junta Política, compuesta de miembros del ala izquierda como Pilar Primo de Rivera y el poeta y propagandista Dionisio Ridruejo. Las enemistades dentro de la Falange llevaron a que una noche hubiera una pelea de bandas en Salamanca, entre los adherentes de Hedilla y de su archirrival Agustín Aznar[319]. Franco se aprovechó de estos desórdenes para acabar con Hedilla. El jefe del ala izquierda fue sometido a consejo de guerra y condenado a muerte; sin embargo, le fue conmutada la sentencia y pasó los años 1937-41 en confinamiento solitario. El 19 de abril Franco anunció unilateralmente la unificación de los diferentes partidos para formar la Falange Española Tradicionalista y de las JONS. La facilidad y energía con que derrotó a la facción de Hedilla confirmó su absoluto

control político de la España nacionalista, y sirvió para notificar a Von Faupel quién era el amo en Salamanca.

En la primavera de 1937 había llegado a tener la plena seguridad en sí mismo como el dueño predestinado de la nueva España. El 18 de abril habló durante más de una hora con el embajador Cantalupo, que estaba a punto de regresar a Roma. Las relaciones entre ambos hombres se habían señalado por el respeto mutuo, aunque no por la cordialidad. Las dos últimas audiencias concedidas al embajador lo fueron para tratar de temas desagradables: las ejecuciones en masa en Málaga y el desastre italiano en Guadalajara. El general se daba cuenta de que todavía quedaba una larga guerra por delante, y de que sus aliados desaprobaban bajo cuerda tanto sus decisiones militares como políticas.

Hablando en parte en español, en parte en francés, explicó que la guerra civil era una de las muchas guerras internas de la historia española. Haría lo que pudiera para que no durase ni un día más de lo necesario. Pero no podía precipitar las cosas destruyendo las ciudades, los ferrocarriles, las granjas y la población de España. Ésta era una guerra de reconquista contra los extranjeros y las influencias extranjeras que habían envenenado la mentalidad española con ideas bolcheviques. Los nacionalistas debían no sólo «liberar» a los rojos de la zona del Frente Popular, sino que debían liberar también a los rojos que estaban bajo la autoridad de Salamanca. Este proceso requeriría largo tiempo, así como paciencia y firmeza. El general dijo que sabía que los italianos pensaban que estaba sólo restaurando la vieja España; pero insistió en que crearía una nueva España, y pidió al embajador que dijera esto claramente en Roma. Una y otra vez insistió: «Señor embajador, Franco no está haciendo la guerra contra España; está sólo liberando España[320]».

Para Cantalupo quedaron claros su voluntad de hierro, el idealismo y el modo absoluto como centraba la causa en su propia persona. Y cada día eso estuvo más claro para los españoles y

para muchos extranjeros en el curso sucesivo de la guerra civil. Ningún jefe falangista, ningún otro general, ni ninguna figura de las derechas tradicionales se comparaba ni remotamente con Franco en poder y determinación. La unificación de la Falange y de los carlistas en un solo partido, con él de jefe, simplemente no hizo más que confirmar el hecho de que en abril de 1937 la causa nacionalista estaba completamente personificada por el general Francisco Franco Bahamonde.

Capítulo 21

LA CAÍDA DE LARGO CABALLERO

EL éxito en la defensa de Madrid, la creación de un ejército disciplinado y la actuación de ese ejército en las batallas del Jarama y Guadalajara fueron factores que contribuyeron a fortalecer al Gobierno republicano. Pero entre diciembre de 1936 y mayo de 1937 estaba ocurriendo en segundo término una lucha mucho más enconada. El factor más importante de esa lucha fue el asombroso crecimiento del Partido Comunista. El 18 de julio contaba entre 20 y 30.000 miembros; hacia enero de 1937 había crecido hasta tener 200.000 y a mediados de 1937 pretendía tener un millón[321]. La gratitud por la ayuda rusa fue uno de los motivos más poderosos para este desarrollo del partido. En noviembre se veían por Madrid colgados los retratos de Marx, Lenin y Stalin. Miles de personas se habían apresurado a ver Chapayev y otras películas y documentales de la revolución rusa, y todo el mundo comparaba la defensa de Madrid con la de Petrogrado. El general Mola había dicho que entraría en Madrid el día 7 para celebrar el aniversario de la revolución rusa, y los madrileños aceptaron el reto en los mismos términos. Además, tal como había ocurrido en todos los países occidentales, muchos liberales y socialistas visitaron la Unión Soviética en los últimos años. Aparte de las reservas que pudieran sentir hacia las dictaduras como forma de gobierno, quedaron profundamente impresionados por la atmósfera de entusiasmo y construcción, y por la

ausencia de parados, en agudo contraste con el mundo capitalista.

Pero la gratitud por la ayuda militar era sólo uno de los múltiples factores. En la defensa de Madrid los comunistas habían dado los más notables ejemplos de eficiencia. Sus dirigentes de barriada habían organizado los mejores puestos de comunicaciones, de cocinas y de primeros auxilios, etc., y sus tropas habían mostrado ser las más disciplinadas bajo el fuego enemigo. Sus oradores explicaban incansablemente, sin retórica, el significado político y militar de la defensa de Madrid.

La diputada comunista Dolores Ibárruri hablaba repetidamente por radio, para negar los rumores derrotistas y evitar el pánico potencial. Casada con un minero asturiano, de oratoria cálida y sencilla, vestía austeramente de negro; miles de soldados y ciudadanos que la veían en las líneas del frente y la oían a través de las ondas la conocían como «La Pasionaria».

Desde el momento de la victoria electoral del Frente Popular, el Partido Comunista se presentó como el abogado de la cooperación leal entre los liberales de la clase media y la clase trabajadora. Cuando el estallido de la guerra civil se opusieron a las revoluciones locales y colectivistas, convirtiéndose en los campeones de la propiedad de los pequeños burgueses contra las confiscaciones de los anarquistas y los socialistas de izquierda. En Cataluña, donde el PSUC entró a formar parte del Gobierno a finales de septiembre, su consejero de Economía, Juan Comorera, acabó con las requisas, restauró los pagos en moneda y protegió a los campesinos catalanes contra la continuación de las colectivizaciones. En Valencia, el ministro comunista de Agricultura, Vicente Uribe, tuvo dificultades para explicar a los agradecidos campesinos, muchos de los cuales eran católicos, y no pocos carlistas, que uno debía estudiar y convertirse en un marxista convencido antes de adherirse al partido.

Los comunistas, en nombre de los principios marxistas, defendían los derechos de la pequeña clase media, que estaban amenazados por el «izquierdismo infantil», compuesto principalmente por anarquistas y socialistas de izquierda. En su mayoría sus nuevos afiliados no eran de origen proletario, así que su expansión no hizo mella en la lealtad de los obreros hacia la UGT y la CNT. Se convirtieron en un partido de funcionarios, oficiales del ejército, jóvenes intelectuales y pequeños burgueses. Con el tiempo, el Partido Comunista habría de contar entre sus miembros al general Miaja, jefe de la Junta de Defensa de Madrid; al general Pozas, del ejército del Centro, y al coronel Hidalgo de Cisneros, jefe de las fuerzas aéreas. Estos hombres, así como otros muchos oficiales republicanos, se afiliaron al partido no basándose en la doctrina marxista, sino en la eficacia de los comunistas en la defensa de Madrid.

La expansión comunista provocó muchos recelos del ala caballerista del Partido Socialista. Los intelectuales más destacados, como Luis Araquistáin, así como la mayoría de los más antiguos funcionarios de la UGT, temían que los comunistas fueran un caballo de Troya que acabara destruyendo el verdadero programa revolucionario español en favor de una burocracia estalinista y una política extranjera puesta al servicio de los intereses exclusivos de la Unión Soviética. Pero Santiago Carrillo, de la JSU, y otros jóvenes dirigentes que habían sido ardientes «caballeristas» hasta finales del verano de 1936 veían ahora al Partido Comunista como una organización más «avanzada» y menos sofisticada. Margarita Nelken, diputada socialista de izquierda, inquieta por la pasividad de los socialistas en comparación con la energía de los comunistas, se pasó a este último partido a principios de 1937.

La actitud de los comunistas y de los jefes de la JSU hacia Largo Caballero era una mezcla de admiración y condescendencia. El partido tenía la disciplina y la clara comprensión «dialéctica»

del significado de la guerra, y el prestigio de las armas rusas; pero no tenía ningún jefe nacional distinguido, ni una gran personalidad comparable a la de Largo Caballero. Esperaban que aquel hombre, ya viejo, «evolucionara» políticamente hasta un punto en donde pudiera ver lo correcto de las demandas de fusión de ambos partidos bajo su propia dirección.

Álvarez del Vayo, como ministro de Asuntos Exteriores, actuaba no sólo como intérprete del embajador Rosenberg en las visitas diarias que este hacía al jefe del Gobierno, sino que consultaba a aquél y a los consejeros militares rusos como si fueran aliados incondicionales que no pudieran tener motivos e intereses diferentes a los de la República española[322]. El comunista argentino Víctor Codovila (también conocido como Medina) fue a visitar varias veces a Largo Caballero para insistir en la unión de ambos partidos, y hubo un momento en que el embajador republicano en la Unión Soviética regresó a Valencia con una petición personal de Stalin, que quería saber si Largo Caballero se proponía o no seguir adelante con la fusión[323].

En esta pugna la misma importancia tenía la constitución de un cuerpo de comisarios políticos, calcado del creado por el ejército rojo durante la revolución rusa. Se suponía que los comisarios habían de servir a la vez para orientar la conciencia política de los soldados y fiscalizar la lealtad de los oficiales de carrera. De hecho, tenían además considerable influencia sobre los ascensos y la distribución de suministros. En manos de un único y disciplinado partido, constituirían una jerarquía propia paralela al mando militar a las órdenes del ministro de la Guerra. Largo Caballero nombró a Álvarez del Vayo jefe del comisariado de guerra, y este último nombró a su vez generalmente a comunistas para ocupar estos puestos clave, sin duda contando con la esperada evolución del jefe del Gobierno hacia una más estrecha colaboración con el partido[324].

Personalmente, Largo Caballero había mantenido una actitud rígida y distanciada con respecto a Rosenberg y los comunistas españoles. Sin desafiarlos abiertamente resistió, sin embargo, sus esfuerzos para dominar al Ministerio de la Guerra. El primer choque público ocurrió poco después de la caída de Málaga, cuando los comunistas pidieron la destitución del general José Asensio, al que estigmatizaron como el «organizador de la derrota». Los comunistas lo habían elogiado en septiembre, cuando Largo Caballero le dio el mando del frente central. Pero Asensio había ofendido a los comunistas y a los anarquistas por sus esfuerzos para eliminar toda propaganda partidista en el entrenamiento del ejército republicano. Los comunistas pidieron entonces su traslado del frente del Centro, y Largo Caballero les demostró que seguía teniendo su confianza nombrando a Asensio subsecretario de Guerra en un Gobierno en que él mismo era ministro de la Guerra además.

Como Asensio era responsable del entrenamiento de la infantería que actuó tan brillantemente en el Jarama, los comunistas no podían acusarle lógicamente de incompetencia. En cambio, insinuaron que había algo traicionero en su fracaso al no proporcionar armas a Málaga. Esto no impresionó al jefe del Gobierno, puesto que era evidente que la República no tenía recursos para defender Málaga y a la vez luchar en el Jarama. Finalmente le atacaron en el terreno personal, acusándole de que bebía mucho y que le gustaban demasiado las mujeres, lo que eran peligrosas características, a lo cual Largo Caballero respondió, según sus memorias, que tenía entendido que había homosexuales en el Partido Comunista, y se refirió también a los rumores de un complot masónico para asesinar a Asensio.

Pocos días después de la caída de Málaga, Rosenberg, acompañado por Álvarez del Vayo, visitó a Largo Caballero para pedirle lisa y llanamente la destitución de Asensio. El viejo echó a Rosenberg de su despacho, y luego, muy enfadado, preguntó a

Álvarez del Vayo por qué se estaba convirtiendo tan rápidamente en el portavoz de los deseos soviéticos. Álvarez del Vayo replicó que, desgraciadamente, la cuestión era de confianza pública. La prensa republicana y anarquista atacaba también a Asensio, y si tantos grupos lo consideraban un traidor, por éste solo hecho era preciso reemplazarlo. Ningún argumento podría haber herido más profundamente al anciano jefe del Gobierno, que ya tenía 69 años, tan escrupuloso en lo concerniente a su propia integridad, y tan seguro de la de Asensio. Se mantuvo terco durante una semana, hasta que tuvo que admitir que la utilidad de éste había quedado de hecho destruida por la campaña de prensa[325].

El 21 de febrero aceptó la dimisión del general. Al mismo tiempo lo sustituyó por el coronel Cerón, que anteriormente fue monárquico y secretario particular del conde de Jordana, que estaba sirviendo en el ejército nacionalista[326]. Como jefe de operaciones conservó al coronel Segismundo Casado, que había sido nombrado por Asensio. También trasladó a tres de los comunistas más importantes, enviándolos al frente, y nombrando a seis socialistas de confianza como inspectores de los comisarios políticos. Igualmente pidió a Moscú la retirada de Rosenberg.

Estas disposiciones indicaron la determinación de Largo Caballero de poner freno a la expansión comunista, pero no hicieron nada para unificar el esfuerzo de guerra. En Cataluña, los comités de fábrica de la CNT iban tirando en su producción de material bélico, afirmando que el Gobierno les privaba de materias primas y que favorecía a la burguesía. En el frente de Teruel la llamada «Columna de Hierro», compuesta en gran parte por anarquistas y algunos convictos soltados del penal de San Miguel de los Reyes, se negó a obedecer la ya antigua orden del Gobierno de que todas las unidades de milicias se incorporaran al ejército regular. En Valencia, que era la capital de la España republicana desde el 6 de noviembre, unidades de choque de la

guardia de asalto y parte de la brigada internacional núm. 13, fueron mantenidas durante todo el invierno presto para defender al Gobierno contra las amenazas de los anarquistas de apoderarse de la ciudad. Los puertos de Alicante y Cartagena (a los que atracaban muchos buques rusos) y las bases de aprovisionamiento de Murcia y Albacete eran administradas por los comunistas, que tenían prisiones no oficiales, en donde manejaban a los trabajadores anarquistas recalcitrantes o a los miembros de las brigadas internacionales que mostraban una marcada antipatía por el partido. En Madrid, la influencia comunista era preponderante en la Junta de Defensa, aunque no la dominaba por completo. La prensa anarquista se quejaba de que los comunistas controlaran las prisiones. Los periódicos socialistas y comunistas replicaban con listas de camaradas liquidados en las chekas anarquistas, y los socialistas, si bien en general apoyaban a la Junta de Defensa, se quejaban del favoritismo de esta hacia las unidades comunistas al distribuir los aprovisionamientos militares[327].

Largo Caballero había sido nombrado jefe del Gobierno con la esperanza de que su inmenso prestigio personal en todos los sectores de la clase obrera creara un esfuerzo de guerra más unificado. Pero esta esperanza disminuyó rápidamente ante la continuada persistencia de tensiones regionales e ideológicas. Entre diciembre y marzo las fuerzas se fueron gradualmente realineando. Los republicanos, en general, se aproximaron más a los comunistas. Los quince años de rivalidades entre los partidos socialista y comunista les importaban poco, y vieron en los comunistas a los defensores de la pequeña burguesía. Prieto y Negrín, que eran hombres mucho más capaces que el jefe del Gobierno, se sentían frustrados por su lentitud, sus puntos de vista burocráticos, sus celos patológicos de cualquier candidato potencial socialista a la presidencia del Consejo de ministros, su insistencia en seguir dirigiendo el aspecto militar de la guerra. Negrín descabezaba habitualmente un sueñecito en las reuniones del Gabi-

nete, con la cabeza apoyada sobre sus brazos plegados, y volviendo a animarse sólo cuando se mencionaban proyectos financieros, y entonces para decir siempre que no. Prieto no se atrevía a hacer sugestiones concretas, sabiendo que, por el simple hecho de ser suyas, Largo Caballero propondría otra cosa.

Así, una alianza de circunstancias hizo que se aproximaran los republicanos de clase media, los socialistas moderados y los comunistas. La alianza se basaba en una defensa a ultranza de Madrid, la contención de la revolución proletaria, la necesidad de un Gobierno de guerra fuertemente centralizado y la creciente convicción de que Largo Caballero debía al menos abandonar la cartera de Guerra. Por otro lado estaban los «caballeristas» y las masas de la UGT y la CNT, unidas por el temor a los comunistas y por la defensa de las autoridades regionales colectivas establecidas en los primeros días de la guerra. Y como los comunistas pedían la cooperación con la burguesía, ellos insistían en que la guerra no podría ser ganada a menos que se ganara a la vez la revolución proletaria. El primer ministro estaba en el centro de todas estas corrientes, ansioso de reconstruir la autoridad del Estado, pero incapaz de elegir entre las fuerzas oponentes o de dominarlas.

A finales de marzo, tras la batalla de Guadalajara, la pugna volvió a manifestarse en Madrid. El delegado de prisiones de la CNT, Melchor Rodríguez, publicó precisas acusaciones de tortura en las prisiones no oficiales comunistas, cuyas víctimas eran a menudo presos puestos en libertad que luego los comunistas secuestraron. Rodríguez era un autodidacta, un anarquista filosófico, una personalidad que no conocía el temor, opuesto totalmente al terrorismo. Los presos de todas las filiaciones políticas se beneficiaron de su humanidad, y el escándalo fue enorme cuando no sólo se refirió a dichas prácticas, sino que citó como responsable de ellas a José Cazorla, un comunista que era consejero de Orden Público[328]. El incidente permitió a Largo Caba-

llero asestar un golpe al terrorismo político y a la vez restablecer la autoridad del Gobierno de Valencia en Madrid. La Junta de Defensa aceptó la dimisión de Cazorla, y el 23 de abril la propia Junta se disolvió.

Largo Caballero propuso también por aquel tiempo acabar con el poder de los comisarios políticos, centenares de los cuales habían sido nombrados por Álvarez del Vayo sin que él firmara estos nombramientos[329]. El 17 de abril promulgó un decreto declarando que en lo sucesivo todos los nombramientos serían hechos directamente por el jefe del Gobierno, y que todos los comisarios existentes deberían convalidar sus nombramientos con la firma de él antes del 15 de mayo. A esto siguió un enconado debate de prensa. *Adelante*, el órgano de Largo Caballero, acusó a los comisarios de hacer presiones políticas, de favoritismo, y de ocasionales asesinatos. Frente Rojo, órgano comunista, consideró el decreto obra de «elementos fascistas» e insistió en que los comisarios conservaran sus puestos. *El Socialista*, órgano de la fracción de Prieto, que se había limitado hasta ahora a quejarse de vez en cuando del favoritismo, publicó una lista de militantes del partido que fueron torturados en Murcia en las prisiones privadas comunistas.

Los comunistas estaban decididos ahora, para defender sus posiciones adquiridas, a librarse de Largo Caballero. La ocasión se les presentó cuando pocos días después, a principios de mayo, hubo una virtual guerra civil en la ciudad de Barcelona, ocasión que era perfecta, pues en ella estaban implicadas muchas actitudes aparte de la enemistad del partido hacia el jefe del Gobierno. Desde el 18 de julio, Barcelona había sido la meca de todos los grupos revolucionarios heterodoxos. Proudhonianos franceses, socialistas utópicos ingleses, anarquistas italianos y balcánicos, intelectuales mencheviques rusos, todos ellos vieron en la revolución catalana los principios de una revolución «pura», no estalinista. Los comunistas no gozaban en Barcelona de tanto presti-

gio como en Madrid, y en todo caso el «frente» para la mayoría de los catalanes significaba el este de Aragón, donde el avance hacia Zaragoza y el sitio de Huesca habían perdido ya hacía tiempo su impulso.

Entre el proletariado, el ingenuo optimismo de las conquistas revolucionarias del agosto anterior dio paso al resentimiento, como si hubieran sido engañados en algo. El costo de la vida se había duplicado desde el 18 de julio, mientras que los salarios habían aumentado sólo un 15 por ciento. Las mujeres se pasaban horas y horas haciendo cola para comprar pan, y la policía era tan brutal con los que se quejaban como en los tiempos de la Monarquía. La prensa del POUM y de los anarquistas exaltaba simultáneamente las colectivizaciones y explicaba los fracasos de la producción, atribuyéndolos a la política del Gobierno de Valencia de boicotear la economía catalana y favorecer a la burguesía. También explicaban la pérdida de Málaga como debida en gran parte a la baja moral y la desorientación del proletariado andaluz, que veía que el Gobierno de Valencia evolucionaba rápidamente hacia la derecha. Evocando la importancia de los contingentes marroquíes en el ejército nacionalista, insistían al Gobierno para que ofreciera la independencia a Marruecos, gesto que habría sido muy apreciado en París y Londres.

Mientras tanto, el Gobierno proseguía lentamente sus esfuerzos para restablecer el control central del aparato estatal. Los comunistas, la JSU y el PSU de Cataluña pidieron una alianza más estrecha de todas las fuerzas sociales «sanas» de España, contra «Franco, los trotskistas, y los incontrolados». En Cataluña los anarquistas habían controlado desde el 18 de julio todas las aduanas de la frontera francesa. El 17 de abril de 1937, los reorganizados carabineros, actuando según órdenes de Juan Negrín, ministro de Hacienda, empezaron a reocupar la frontera. En choques con los carabineros murieron al menos ocho anarquistas. Un destacado militante de la UGT, Roldán Cortada, fue asesi-

nado, probablemente por elementos de la CNT, y su entierro en Barcelona fue ocasión para una manifestación en masa contra los anarquistas.

A finales de marzo, la «Columna de Hierro» fue finalmente militarizada, a costa de docenas de deserciones y varios choques entre sus miembros y las tropas del Gobierno de Valencia[330]. Largo Caballero puso en claro sus intenciones de militarizar asimismo a las restantes milicias obreras de Cataluña. En los últimos días de abril, la prensa del POUM y de los anarquistas dio el toque de alarma. Para ellos, la militarización era simplemente un eufemismo para el desarme y la represión de todos los obreros revolucionarios conscientes de clase. La tensión era tal, que la Generalitat canceló las previstas celebraciones del Primero de Mayo temiendo tiroteos entre la policía y la izquierda anticomunista.

Entre los servicios públicos aún celosamente controlados por los anarquistas estaba la Compañía Telefónica, administración que les permitía escuchar todas las conversaciones oficiales con Valencia o Madrid, así como todas las llamadas extranjeras originadas o dirigidas a Barcelona y Valencia. El 3 de mayo, Rodríguez Salas (consejero de Orden Público de la Generalitat y miembro del PSUC) intentó pacíficamente (eso esperaba), pero por la fuerza si era necesario, hacerse cargo del control de la central telefónica de Barcelona. Llegó con una compañía de guardias de asalto y fue recibido con disparos desde el interior del edificio.

Esta escaramuza condujo a tres días de lucha esporádica en toda la ciudad. El POUM y las fuerzas anarquistas reunidas en Barbastro se dispusieron a marchar sobre Barcelona para defender a sus hermanos del putsch contrarrevolucionario. Luis Companys, los ministros anarquistas del Gobierno de Largo Caballero y Solidaridad Obrera hicieron un llamamiento para un inmediato alto el fuego. Los revolucionarios estaban profundamente

divididos en cuanto a la táctica a seguir. Todos ellos odiaban instintivamente a la guardia de asalto, y pidieron la destitución de los principales consejeros del PSUC, Rodríguez Salas y Juan Comorera. La CNT y el POUM ordenaron oficialmente a sus seguidores que se limitaran a «defenderse», pero esto no arregló nada, ya que la cuestión era si los servicios públicos de Cataluña iban a ser controlados por el Gobierno o por los diversos partidos políticos. Pequeños pero vehementes grupos anarquistas, como las Juventudes Libertarias y los Amigos de Durruti, animaron a la resistencia armada en nombre de todas las conquistas revolucionarias que eran las únicas que hacían que valiera la pena mantener el Frente Popular.

El 5 de mayo Companys obtuvo una frágil tregua, sobre la base de que los consejeros del PSUC tenían que retirarse del Gobierno regional y la cuestión de la Compañía Telefónica quedara para ulteriores negociaciones. Sin embargo, aquella misma noche fue asesinado Antonio Sesé, un funcionario de la UGT, que estaba a punto de entrar en el reorganizado Gabinete. En todo caso, el Gobierno de Valencia no tenía humor para contemporizar más con las izquierdas catalanas. El 6 de mayo llegaron a la ciudad varios miles de guardias de asalto, y la marina republicana hizo una demostración en el puerto. Largo Caballero nombró comandante del frente de Aragón al general Sebastián Pozas, un oficial de carrera que últimamente se había afiliado al Partido Comunista. Las milicias izquierdistas fueron desarmadas, y la disciplina militar fue impuesta en el frente de Aragón. El jefe del Gobierno se comprometió a que no hubiera represalias políticas, pero en los días siguientes una docena de dirigentes de la izquierda anticomunista habrían de ser víctimas de asesinatos motivados en parte por la venganza de la UGT de sus muertos de un pasado reciente, y en parte por la determinación comunista de liquidar físicamente a todos los dirigentes antiestalinistas de Barcelona[331].

En Valencia, los ministros comunistas insistieron en que Largo Caballero destituyera a Ángel Galarza, ministro de la Gobernación, por su fracaso al no descubrir el «complot trotskista» de Barcelona, y pidieron la supresión de La Batalla, órgano del POUM, por haber incitado a la rebelión. El jefe del Gobierno no veía que hubiera motivos que justificaran esas demandas. El 13 de mayo, en una reunión del Gabinete, pidieron la supresión del POUM; como Largo Caballero se negara a seguir discutiendo la cuestión, se marcharon de la sala, precipitando así una crisis de Gobierno[332].

Las muchas facetas de la pugna entre el jefe del Gobierno y sus enemigos llegaron ahora a un punto crítico. Los comunistas le atacaban por su amenaza al control de que disfrutaban de los comisarios, y por su odio patológico al POUM. Pero tanto republicanos como anarquistas se le habían opuesto en el caso de Asensio, y la izquierda anticomunista apenas si saldría en su defensa tras los acontecimientos de Barcelona. Los socialistas moderados, en cambio, ni que decir tiene que se mostraban adversos a la liquidación política (igual que a la física) de los trotskistas, anarquistas y «caballeristas».

Los desacuerdos sobre la estrategia militar jugaron también un gran papel. En abril, Largo Caballero deseaba activar un plan largo tiempo discutido para una ofensiva en Extremadura. Si los republicanos atacaban con energía para reconquistar Mérida y Badajoz, podrían cortar la zona de Burgos de sus suministros y comunicaciones con Andalucía. Se sabía que las líneas nacionalistas estaban poco guarnecidas, y que la población era prorepublicana; así que el Gobierno podría asestar un golpe a los nacionalistas en una zona en donde eran débiles tanto militar como políticamente. Los generales Asensio y Martínez Cabrera habían preparado los primeros planes antes de la dimisión de Asensio. En la primavera el plan de operaciones fue preparado por el coronel

Segismundo Casado, y el coronel Hernández Saravia comenzó en estricto secreto a concentrar tropas cerca de Ciudad Real.

Sin embargo, los consejeros rusos, el Estado Mayor de Madrid y los socialistas de Prieto se opusieron al plan de Extremadura. Los españoles temían dejar desguarnecido el frente de Madrid, y aunque la operación tuviera éxito, su valor estratégico era dudoso, ya que los nacionalistas no encontrarían obstáculos para utilizar las carreteras, las bases aéreas y los servicios telefónicos portugueses. Los consejeros rusos eran partidarios de lanzar una ofensiva cerca de Madrid. Según su punto de vista, como el general Franco había concentrado sus mejores tropas ante la capital, y como gozaba de poco apoyo popular, el modo de ganar la guerra era destruir el ejército que asediaba Madrid. Apoyado por los rusos, Miaja se negó a fines de abril a transferir unidades del ejército del Centro a Ciudad Real, y los oficiales de aviación rusos dijeron claramente a Casado que prácticamente no podrían contar con ninguna aviación[333].

Cuando los comunistas precipitaron la crisis de Gabinete el 13 de mayo, no deseaban aparecer como responsables de la caída de Largo Caballero. Durante las consultas presidenciales para la formación de un nuevo Gobierno, dijeron a Azaña que continuarían colaborando con él con tal de que abandonara la cartera de Guerra, que habría de ser entregada a Prieto. Azaña comunicó estas condiciones al jefe del Gobierno; pero el orgullo de Largo Caballero, el convencimiento de la parte que él había tenido en la creación del nuevo ejército, y su antigua rivalidad con Prieto, no le permitieron aceptar esta solución. También se negó a inclinarse ante la evidente presión rusa sobre los planes militares; pero, al mismo tiempo, no quería debilitar el esfuerzo de guerra sacando a la superficie esta pugna. Dimitió, tal como sus enemigos esperaban que hiciera.

La caída de Largo Caballero no tuvo inmediatas repercusiones espectaculares; pero fue la mayor de las crisis espirituales de las

izquierdas españolas. Él era el primer representante de la clase obrera que había llegado a ser jefe del Gobierno de una República que la Constitución de 1931 declaraba como «de trabajadores de todas clases». A principios de 1936 había sido verdaderamente un «izquierdista infantil», seducido por las fantasías marxistas sobre la marcha de la historia. En septiembre de 1936, la clase media española temió una revolución de tipo soviético cuando él se convirtió en jefe del Gobierno; pero ya en el cargo dedicó sus energías a la reconstrucción del Estado democrático. De buena gana apoyó a Manuel de Irujo en la campaña de este último para mejorar los procedimientos judiciales y las condiciones de las prisiones. Odiando la atmósfera de insinuaciones, luchó para retener al general Asensio. Cuando a finales de la primavera se descubrió que el general Miaja y el coronel Rojo habían sido miembros de la UME, sus enemigos políticos quisieron que los mandara detener. Largo Caballero se negó a considerar que el haber pertenecido a la UME fuera en sí una evidencia de deslealtad, aunque se vio obligado a destituir a Asensio por motivos menos importantes. En el caso del POUM, adoptó una posición similar.

Pero Largo Caballero era un hombre incoherente, incapaz de explicar a sus seguidores la necesidad de disciplina, de cooperación con la clase media, de subordinación a la autoridad central. Sin duda había olvidado sus pinitos revolucionarios de principios de 1936; no pensó en reclamar el crédito de una política de tolerancia hacia todas las facciones políticas de la España republicana, porque jamás se le ocurrió, una vez en el cargo, realizar otra clase de política. Con la defección de sus más cercanos colaboradores como Álvarez del Vayo y Santiago Carrillo, se dio cuenta de que cada vez estaba más aislado. Jamás pareció apreciar las numerosas súplicas del Partido Comunista en circunstancias particulares, o darse cuenta del descrédito que cayó sobre él en el verano de 1936 por dejar que las chekas de los socialistas de izquierda se escudaran tras su nombre.

Largo Caballero tampoco supo apreciar la importancia de las «relaciones públicas». En el otoño de 1936 los comunistas habían creado en él la imagen de un «Lenin español», y en la primavera de 1937 lo hicieron aparecer como un cacique dictando a sus colegas del Frente Popular[334]. El anciano tampoco hizo esfuerzos para atraerse a la prensa, tanto española como extranjera. Los comunistas lanzaron consignas muy claras y se aseguraron de que los agradecidos madrileños se familiarizaran con los retratos de Lenin y Stalin. Largo no disponía de tal máquina publicitaria. Le echaron la culpa de la desunión de la zona republicana y de la pérdida de Málaga, y, en cambio, no le dieron fama por las victorias del Jarama y de Guadalajara. Su propia educación de «tiempo de guerra» había sido demasiado rápida y reciente para que pudiera poner en claro las diferencias entre el «infantilismo izquierdista» de principios de 1936 y el jefe del Gobierno de 1937. Durante los últimos meses que ocupó el cargo defendió las libertades republicanas mejor que un republicano de toda la vida. Amargado, dimitió en silencio, para no provocar más desuniones; pero el pueblo español jamás otorgó a su sucesor, Juan Negrín, la confianza que al principio puso en Largo Caballero. Reconocían en Largo Caballero a un hombre de gran valor y de profunda nobleza y comprendían que había sido derrotado, no por negligencia en el cargo, sino por la resistencia que opuso a las demandas de los comunistas y los rusos. Con el cambio, la República ganó desde el punto de vista técnico y administrativo, pero espiritualmente perdió terreno.

Capítulo 22

LA GUERRA EN EL NORTE

DESDE el momento en que se produjo el alzamiento militar hasta finales de octubre de 1937, una guerra separada se libró en las provincias costeras del Norte. En Santander y Asturias dominaron las fuerzas del ala izquierda del Frente Popular, pero en la muy industrializada región en torno a Bilbao el poder siguió en manos de los nacionalistas vascos, hecho que imprimió un carácter especial a la historia política y militar de la campaña del Norte. El 18 de julio la firme reacción de las autoridades civiles impidió que en Bilbao se produjera alguna sublevación. *Euzkadi*, órgano de los nacionalistas vascos, anunció que en la lucha entre el Gobierno civil republicano por una parte y los monárquicos y el fascismo por otra apoyarían al régimen republicano.

Los carlistas y los militares insurgentes consideraron inmediatamente traidores a los nacionalistas vascos. El simple hecho de que fueran católicos burgueses y adinerados hacía que fuera más incomprensible (e imperdonable) que se pusieran de parte del Gobierno del Frente Popular y contra el levantamiento de las «fuerzas del orden». Conforme las tropas carlistas avanzaban por los pueblos de Álava y Guipúzcoa, iban purgando a las autoridades municipales vascas antes de prestar su atención a los socialistas y anarquistas. Asimismo estaban enfurecidos por la poca entusiástica actitud de los principales prelados. En Pamplona, el obispo Marcelino Olaechea deploró el estallido de la guerra y se

negó a bendecir incondicionalmente a las tropas. Se recordaba que el obispo de Vitoria, Mateo Múgica, había declarado durante la última campaña electoral que el nacionalismo vasco no era incompatible con las obligaciones de un buen católico. El obispo de Pamplona procedía de una familia trabajadora y era bien conocido por el interés que mostraba por las cuestiones sociales. El obispo de Vitoria era un vehemente monárquico que había servido como correo confidencial al cardenal Segura en el verano de 1931. Pero ambos hombres sabían que los nacionalistas vascos, en espíritu y en obras, eran los mejores católicos de su diócesis. Ambos temían el fanatismo primitivo de los carlistas. En los últimos días de julio, el obispo Olaechea empezó a ser estigmatizado de «socialista», y el obispo Múgica tuvo que sufrir mezquinos desaires del general Millán Astray y del diputado carlista por Vitoria, José Luis Oriol[335]. El cardenal Gomá, primado de España, había ido a Navarra unos días antes del estallido de la guerra civil por razones de salud. También él evitó pronunciarse públicamente en Pamplona durante los primeros días; estaba favorablemente dispuesto hacia los insurgentes, pero se daba cuenta de lo importante y delicada que era la cuestión vasca. Esperando evitar una lucha fratricida entre católicos, insistió ante los dos obispos para que publicaran una pastoral condenando la oposición de los nacionalistas vascos al alzamiento. Redactó la pastoral por sí mismo; pero al obispo Olaechea le pareció demasiado fuerte, y éste hizo correcciones y puso añadidos al texto antes de firmarla. En Vitoria, el obispo Múgica deseaba comunicarse con personas de su confianza residentes en Bilbao antes de firmar, y pensó haber recibido permiso de los militares para hacerlo. Pero el mismo día, 6 de agosto, la carta pastoral fue leída por la radio de Vitoria, sin las correcciones del obispo de Pamplona y sin que el obispo de Vitoria diera su asentimiento. Como todavía no había un verdadero frente (los vascos situados en ambos lados de la línea estaban en constante comunicación), las circunstancias que

rodeaban a la carta pastoral eran bien conocidas en Bilbao, así que la carta nunca fue aceptada como una genuina pastoral, a pesar de que el propio obispo Múgica hiciera en septiembre una declaración por radio negando que hubieran ejercido presión sobre él[336].

Los vascos nunca cambiaron su postura inicial de defender el Gobierno civil republicano contra el alzamiento militar. Esperaban, desde luego, que sus relaciones personales y comerciales con Inglaterra les fueran de utilidad, y hasta la caída de Irún el 4 de septiembre no pudieron verdaderamente creer que la frontera francesa estaba permanentemente cerrada. El 7 de septiembre decidieron formar su propio Gobierno, e iniciaron negociaciones con el nuevo Gabinete de Largo Caballero concernientes al nuevo status oficial de los vascos. El primer ministro José Antonio Aguirre quería que Largo Caballero reconociera al Gobierno vasco por un decreto inmediato. Largo Caballero replicó que la aprobación por las Cortes del Estatuto de autonomía largo tiempo pendiente les daría una base legal más firme. También pidió a los vascos que proporcionaran un ministro para el Gobierno de Madrid. El primero de octubre los miembros de las Cortes leales a la República que pudieron trasladarse a Madrid aprobaron el Estatuto por unanimidad. Manuel de Irujo entró a formar parte del Gobierno como ministro sin cartera. Su presencia sirvió para simbolizar la cooperación de los vascos y fue un apoyo a los eventuales esfuerzos de Largo Caballero para mejorar las condiciones de vida en las cárceles y restablecer la ley en la zona republicana.

Durante agosto y septiembre, docenas de sacerdotes sospechosos de ser nacionalistas vascos fueron detenidos en la zona insurgente, y muchos dirigentes políticos vascos fueron encarcelados, cuando no fusilados. En Vitoria, les cortaron el pelo a sus esposas e hijos como señal de vergüenza. En la coronilla les deja-

ban un mechón, donde les ataban una cinta con los colores de la vieja bandera monárquica.

Las mujeres eran conducidas a misa los domingos por la mañana escoltadas por guardianes falangistas y requetés, y después se las hacía desfilar por las calles de la ciudad[337]. Los amigos del obispo Múgica estaban convencidos de que los militares planeaban asesinarle, dando a este acto la apariencia de un accidente o de una «atrocidad de los rojos», en la carretera de Burgos. El obispo de Valencia, que veraneaba en Burgos cuando estalló la guerra civil, intervino cerca de los militares para que no se cometiera tal enormidad. A principios de octubre uno de los primeros actos del nuevo Gobierno del general Franco en Burgos fue pedir la expulsión de Múgica, el cual, a pesar de sus esfuerzos para congraciarse, seguía siendo para las autoridades militares locales un rojoseparatista vasco. El cardenal Gomá fue a Vitoria para lograr la sumisión del obispo, y entre ambos cubrieron las apariencias anunciando que Múgica iba a ir a Roma en cumplimiento de sus deberes como presidente de la Unión Misional del Clero. En las últimas semanas de octubre las autoridades militares mandaron ejecutar a unas docenas de sacerdotes vascos acusados de actividades políticas. A requerimiento del Vaticano, el cardenal Gomá intervino cerca del general Franco y este último ordenó el 6 de noviembre la suspensión de tales ejecuciones[338].

Mientras tanto, los vascos se dispusieron a luchar, estableciendo un frente defensivo a lo largo de las alturas que más o menos forman los límites de las provincias de Guipúzcoa y Vizcaya. Contaban con unos 30 o 40.000 milicianos propios, así como con varios miles de milicianos anarquistas y de la UGT que se habían retirado junto con ellos de San Sebastián. El 26 de septiembre descargaron 5000 fusiles checos y una buena cantidad de municiones que habían comprado a unos contrabandistas de Hamburgo. En octubre llegó un buque ruso a Bilbao llevando

12 aviones y 25 carros acorazados que llevaban montados cañones de 47 mm y ametralladoras pesadas. Esto permitió a los vascos establecer excelentes comunicaciones y puestos de reconocimiento cercanos al frente, pero en total eran demasiado poca cosa para su uso defensivo. Bilbao era el centro de la industria española del acero, con minas de hierro en Vizcaya y la disponibilidad del carbón de Asturias; pero no se pudo llegar a un arreglo práctico que pudiera traer el carbón asturiano a Bilbao. El dominio del aire por los insurgentes y el hecho de que la ciudad de Oviedo estuviera en poder de éstos, con su nudo ferroviario, hacía que la tarea fuera muy difícil. Pero el principal obstáculo para la cooperación era el permanente rencor que reinaba entre las autoridades vascas y los jefes revolucionarios de Asturias. La burguesía católica y el proletariado ateo eran enemigos tanto en el campo religioso como en el de la lucha de clases. También tenían concepciones totalmente diferentes sobre los modos de lucha. La milicia revolucionaria huía en campo abierto y luchaba heroicamente en las ciudades. Si estas últimas no podían ser defendidas, dejaban que se incendiaran para que no las aprovechara el enemigo. Los vascos consideraron el incendio de Irún por los anarquistas como un acto criminal, y los anarquistas (así como algunos socialistas y comunistas) tildaron a los vascos de traidores cuando evacuaron San Sebastián sin tratar de resistir.

El plan militar vasco era defender las alturas en el límite provincial, mientras construían un cinturón de fortificaciones en torno a la ciudad de Bilbao. Sus milicianos eran bravos, disciplinados, y sabían recurrir a muchos recursos. A finales de septiembre los insurgentes pensaron que la marcha sobre Bilbao sería un paseo de tres semanas; pero los vascos los detuvieron en los límites de Vizcaya hasta abril de 1937. Mientras tanto, los mineros asturianos y los obreros bilbaínos del ramo de la edificación construyeron el «Cinturón de Hierro», de acuerdo con los planes de ingenieros vascos, uno de los cuales se pasó al enemigo en

enero con las fotocopias en el bolsillo. Fuera o no por derrotismo, inercia o escasez de materiales y mano de obra para hacer nuevos planos, las obras continuaron basándose en el proyecto caído en manos del enemigo, aunque de hecho jamás se completaron. La extremada falta de confianza entre los vascos y sus aliados de Santander y Asturias obstaculizó todo el esfuerzo defensivo. El 26 de septiembre y de nuevo el 4 de enero, tras las incursiones aéreas alemanas sobre la ciudad, los milicianos asaltaron las cárceles y lincharon a un gran número de presos políticos. Tras la segunda serie de incidentes, el Gobierno vasco decidió que las prisiones fueran custodiadas solamente por sus propios milicianos. De este modo pudieron acabar con los asaltos a las cárceles; pero los obreros de quienes habían de depender para el transporte y la construcción, así como las autoridades revolucionarias de las que habían esperado recibir carbón asturiano, los consideraron por su parte como «fascistas».

En los primeros meses de 1937 los vascos pusieron todas sus esperanzas en la ayuda de Inglaterra y del Gobierno de Madrid. La marina insurgente declaró el bloqueo de Bilbao. Como el Gobierno de Burgos no estaba reconocido internacionalmente, esta declaración no tenía ni siquiera la ligera fuerza de la costumbre naval internacional, y los ingleses, por razones tanto comerciales como de simpatía, se negaron a reconocerlo. El Gobierno vasco convirtió 24 botes de pesca en rastreadores de minas, y éstos patrullaban el abra de la ría de Bilbao junto con media docena de lanchas a motor protegidos por cañones costeros que podían alcanzar más allá del límite de las tres millas. Los buques de pesca de altura fueron convertidos en burladores del bloqueo, armándolos lo mejor que pudieron, utilizándolos para traer víveres y provisiones de todas clases, así como para asegurar la continuación de la exportación de mineral de hierro.

La actitud de los ingleses varió según las circunstancias. Algunos barcos ingleses cargados con víveres, en ocasiones escoltados

por buques de guerra ingleses hasta el límite de las tres millas, penetraron en el puerto de Bilbao. Los capitanes que más simpatizaban con los vascos arriesgaban propiedades de sus respectivas compañías para llevar alimentos o sacar refugiados, ancianos y niños sub alimentados. La armada británica no deseaba luchar contra los nacionalistas, pero tampoco quería concederles los derechos de beligerancia que les permitirían registrar los buques neutrales con destino a puertos españoles. Las consideraciones humanitarias jugaron un importante papel. Aunque la mayoría de los oficiales británicos eran de ideas conservadoras, estaban horrorizados por las cosas que habían visto y oído al recoger refugiados en los puertos gallegos en los primeros días de guerra. Daban por supuesto que Bilbao caería en la primavera, y estaban decididos a sacar todos los refugiados políticos que pudieran, pues de otro modo serían fusilados.

El 6 de abril, el *Almirante Cervera*, tratando de reforzar el bloqueo, detuvo al carguero británico Thorpehall a unas cinco millas de la costa. Como aparecieran dos destructores británicos, el *Almirante Cervera* se retiró, pero Inglaterra ordenó entonces a sus buques mercantes que no se dirigieran a Bilbao, basándose en que el puerto estaba intensamente minado y efectivamente bloqueado. El día 20, otro carguero británico, el *Seven Seas Spray*, atendiendo a las afirmaciones vascas de que el puerto estaba libre, llevó desde Valencia un cargamento de víveres, sin que la armada nacionalista se atreviera a obstaculizarle, tras lo cual el Gobierno británico anuló su orden anterior. Hasta la caída de Bilbao continuaron entrando de vez en cuando buques en el puerto con cargamentos de víveres, y saliendo otros con cargamento de mineral; pero los vascos no pudieron comprar armas legalmente o en cantidad en ningún sitio[339].

Hasta poco después de la batalla del Jarama, los nacionalistas dejaron correr el tiempo en los límites de Vizcaya, y las ocasionales escaramuzas les convencieron de que tendrían que hacer un

gran esfuerzo para tomar Bilbao. Durante el mes de marzo, el general Mola concentró unos 40.000 soldados en Guipúzcoa y Álava, con navarros y marroquíes en la vanguardia y los italianos como reserva. La campaña del Norte fue la operación más importante hasta entonces en la que el equipo alemán se viera implicado, y la Legión Cóndor actuó como una unidad independiente, con su propia red de radio y teléfonos, servidores alemanes para las piezas de artillería, mecánicos y pilotos. Como los vascos no tenían artillería antiaérea y sólo unos pocos aviones, los alemanes virtualmente operaban en condiciones de laboratorio[340]. Las incursiones de bombardeo sobre los sistemas de trincheras causaban muy pocas bajas, debido a su poca puntería; pero a menudo lograban que tropas mal entrenadas abandonaran posiciones ventajosas y a veces hasta alteraban los nervios de los soldados más disciplinados. Las posiciones más fuertes fueron tomadas más bien por movimientos de flanco y no al asalto. Un defecto de las trincheras vascas consistía en que eran rectilíneas, dando de cara al frente, y no ofreciendo protección contra los ataques de flanco. En cuanto los aviones o la artillería habían desalojado una compañía, toda la línea se derrumbaba, pues si no los otros serían atacados de costado o rodeados. Los pasos montañosos fueron lenta y metódicamente ocupados de este modo durante el mes de abril, con pocas bajas por ambos bandos.

El día 26 los aviadores de la Legión Cóndor realizaron lo que había de convertirse en uno de los experimentos de terror calculado más famosos de la historia. Escogiendo un día de mercado en Guernica, una ciudad indefensa y sin objetivos militares, que ni siquiera estaba en la línea de avance hacia Bilbao, primero dejaron caer bombas explosivas pesadas y luego practicaron el ametrallamiento de los civiles que huían de la ciudad, a la que finalmente prendieron fuego con bombas incendiarias. En la operación invirtieron 2 horas y 45 minutos, con intervalos entre uno y otro procedimiento para juzgar la efectividad. La ciudad está

situada en un amplio valle. El tiempo era bueno y la visibilidad excelente.

Guernica fue no sólo bien escogida desde el punto de vista de un experimento militar. Era la capital medieval y tradicional de Euzkadi, y no había un modo más efectivo para simbolizar la voluntad nacionalista de destruir la autonomía vasca que destruyendo la ciudad de Guernica. Ante la oleada internacional de indignación que siguió inmediatamente a la noticia, Hitler reaccionó insistiendo en que las autoridades de Burgos manifestaran claramente que Alemania no era responsable del bombardeo. El día 29 Burgos anunció que la ciudad había sido incendiada por los «rojos», mito que algunos portavoces españoles han tratado de mantener hasta ahora. Pero el relato de testigos como el canónigo Alberto Onaindía, un sacerdote vasco de irreprochable sinceridad, y la confirmación de todos los puntos esenciales por el testimonio de varios oficiales alemanes durante los procesos de Nüremberg en 1946 no dejan lugar a dudas[341].

El bombardeo de Guernica e incursiones similares contra Éibar y Durango pusieron más de manifiesto la desesperada necesidad de aviación que sentían los vascos, si es que habían de continuar defendiéndose por sí mismos. Madrid estaba deseoso de proporcionarles varios cazas rusos, a pesar del riesgo que eso supondría para la defensa de la capital. El problema era cómo entregarles los aviones, dado que, aun en las condiciones meteorológicas más favorables, apenas si tenían radio de acción para volar sin etapas de Madrid a Bilbao. Prieto, ministro de Defensa, e Hidalgo de Cisneros, jefe de operaciones de las fuerzas aéreas, esperaban que los franceses permitirían que los aviones cruzaran su territorio. El 8 de mayo quince aviones aterrizaron en Toulouse, pretextando que los fuertes vientos y la escasez de combustible les habían obligado a alterar su ruta. Los funcionarios de la No-intervención les permitieron llenar los depósitos a condición de que regresaran a Barcelona. El día 17 una docena de aviones ate-

rrizaron en Pau, contando que procedían de Santander y se habían perdido en la niebla. Los funcionarios de la No-intervención desarmaron los aparatos, y finalmente les permitieron partir para Barcelona, advirtiendo al Gobierno republicano que si había más vuelos de esa clase, los aviones serían confiscados. Una semana más tarde, Hidalgo de Cisneros corrió el riesgo de enviar los aviones directamente a Bilbao y siete aparatos pudieron llegar a salvo[342]. Durante dos semanas, los muchachos que jugaban en las afueras de la ciudad, al ver los aparatos despegar, contaban «nuestra aviación», uno, dos, tres, cuatro; al día siguiente, uno, dos, tres, hasta el 6 de junio, una semana antes de la ofensiva final, en que ya no quedaba ninguno.

En la segunda mitad de mayo, los nacionalistas estrecharon el cerco de Bilbao. El día 18, en Amorebieta, el cura párroco del pueblo cruzó las líneas en lo que él esperaba sería una misión de conciliación. Las autoridades militares nacionalistas lo sometieron a consejo de guerra y lo fusilaron, pretextando que había sido el jefe de la cheka de Amorebieta. Luego dijeron a los habitantes del pueblo que había sido fusilado por los «rojos[343]». Durante los primeros días de junio, los aviones y la artillería de la Legión Cóndor bombardearon el llamado «Cinturón de Hierro». Como disponían de los planos, su fuego era muy preciso. En lo que respecta a la calidad, los cañones antiaéreos de 37 y 88 mm fueron las mejores armas que los alemanes ensayaron en España. Su movilidad y puntería les hacía muy útiles como artillería ligera de campaña, puesto que no eran necesarios para la defensa antiaérea. Pulverizaron las trincheras enemigas con granadas trazadoras y forzaron al abandono de muchas posiciones sin disparar un tiro.

Dejando aparte el hecho de que los planos del «Cinturón de Hierro» habían sido entregados por un acto de traición, aquél tenía la misma debilidad general de las otras fortificaciones vascas. Las trincheras formaban un delgado perímetro en las colinas que

rodeaban la ciudad, y en casi todas las zonas sólo había dos líneas, separadas entre sí por 200 o 300 metros. Se erguían en las cimas, y el cemento en general no estaba disimulado ante el enemigo, sin que hubiera posiciones en profundidad en la contrapendiente, y sin protección en los flancos. Algunos pocos comandantes enérgicos, viendo la inutilidad de las defensas preparadas, construyeron en las proximidades otros sistemas de trincheras en zigzag, que permitían el fuego cruzado, disimuladas con ramas de pino. Fueron capaces de conservar dichas posiciones durante un cierto número de días; pero sus hombres estaban ya al final desmoralizados al ver que las granadas trazadoras caían directamente sobre las trincheras del «Cinturón de Hierro[344]». Los comentaristas tanto militares como políticos de aquella época sospecharon traición en todo el planteamiento de la defensa de Bilbao. Indudablemente, una gran proporción de los nacionalistas vascos eran derrotistas desde el principio, hablando en términos militares; pero los errores que cometieron al planear sus fortificaciones pudieron también ser debidos al hecho de que como arquitectos e ingenieros no se habían dedicado en su carrera más que a tareas civiles. Cuesta trabajo creer que planearan a propósito un sistema de trincheras indefendible para sus propios hijos y hermanos.

El anillo de defensa fue roto el 12 de junio. En la semana que siguió, las milicias asturianas, santanderinas y vascas se retiraron hacía el Oeste. La policía vasca impidió todo gesto desesperado en las cárceles y protegió contra el sabotaje las fábricas y los muelles portuarios no bombardeados. Al igual que en San Sebastián, trataron de dejar la ciudad intacta en vez de practicar una política de tierra quemada. Aquella noche, lanchas motoras y botes de pesca, atestados de gente, se deslizaron por la ría, algunos con refugiados que se dirigieron a San Juan de Luz, otros con hombres que pensaban proseguir combatiendo en Santander y Gijón. Quizás huyeran de un modo u otro 200.000 personas

de la zona de Bilbao. El día 19 el ejército nacionalista entró sin hallar resistencia y comenzó inmediatamente a distribuir víveres a los millares de mujeres que se alineaban en las calles.

Unos días después Burgos anunció la abrogación del concierto económico para las provincias de Guipúzcoa y Vizcaya. En 1840 el Gobierno monárquico absolutista castigó a los vascos por la parte que habían tenido en el alzamiento carlista. Ahora, una dictadura militar centralista los castigaba por haberse puesto de parte de una República en aras de la autonomía regional y el Gobierno democrático. El concierto siguió vigente en Álava y Navarra, las provincias que se habían incorporado a la causa nacionalista. Por otra parte, la purga física en Bilbao fue relativamente más suave que en otras zonas. Franco estaba deseoso de que la industria vasca volviera a ponerse en funcionamiento lo antes posible y a reanudar la exportación de mineral de hierro, así que decidió actuar moderadamente para asegurarse la cooperación de los industriales vascos.

La guerra en el País Vasco tuvo repercusiones propias en todo el mundo. Muchas personas que no mostraban simpatías por los regímenes frente-populistas de Madrid o Barcelona, o que esperaron una dictadura suave al inicio del alzamiento militar, se sintieron inquietos por la suerte corrida por los vascos. El trato que habían dado al obispo Múgica y el fusilamiento de los sacerdotes vascos fue rápidamente conocido en los círculos católicos franceses. Los intelectuales católicos Jacques Maritain y Francois Mauriac no sólo presidieron un comité de ayuda a los refugiados vascos, sino que condenaron en los términos más enérgicos al régimen nacionalista. Como la zona de Bilbao era más bien industrial y no productora de alimentos, la escasez de víveres fue muy aguda durante el invierno y la primavera. Ciudadanos ingleses, belgas y holandeses, al margen de sus opiniones políticas, comprendieron rápidamente la crueldad de un bloqueo naval que in-

cluía los artículos alimenticios en la lista de artículos de contrabando.

Los niños vascos acogidos en hogares franceses e ingleses echaban a correr hacia los sótanos o sufrían ataques de histeria en cuanto veían aparecer un avión en el cielo, mostrando así a sus angustiados padres adoptivos lo que significaba una guerra. El exiliado obispo Múgica se adhirió al ruego del cardenal Gomá de que los niños refugiados fueran colocados en hogares católicos, condición que no era fácil de encontrar en Inglaterra, donde los protestantes se habían mostrado más dispuestos que nadie a acoger refugiados. En los Estados Unidos la jerarquía eclesiástica objetó con vehemencia los planes de un comité predominantemente protestante para llevar 500 niños vascos a América mientras durase la guerra. No es que los católicos de ambos países lamentaran menos los sufrimientos de los niños; pero la mayor parte de sus portavoces estaban enfurecidos por la implicación que eso suponía, de que los niños no habrían sido bien atendidos en España por el victorioso Gobierno nacionalista[345].

El cardenal Gomá dio un paso importante como portavoz de la Iglesia española. Hombre de fuerte carácter, aferrado a sus opiniones, había procurado no hacer afirmaciones específicas de naturaleza política desde que ostentaba el cargo de cardenal-arzobispo de Toledo. Sin embargo, era un hombre de puntos de vista fundamentalmente conservadores, y a menudo fascistas. En un discurso que pronunció en Buenos Aires el 12 de octubre de 1934, con motivo del Día de la Raza, invitó a sus oyentes a que dirigieran sus miradas al viejo mundo, «*al otro lado de los mares, el cual había enterrado a las democracias, y avanzaba hacia la cima de las dictaduras*[346]». A su regreso a España unas semanas después, compartió el punto de vista derechista de que el Gobierno había sido demasiado suave en la represión de la revolución de Asturias. Cuando la victoria electoral del Frente Popular, reconoció, con un análisis muy agudo de los resultados, que los sufrimientos de

la clase obrera no habían sido tenidos en cuenta de un modo inteligente o generoso por los gobiernos del centro-derecha. Sin embargo, encarado con la oleada de agitación anticlerical y revolucionaria de finales de la primavera de 1936, opinó que quizá sólo una dictadura militar podría proteger a la Iglesia[347].

Su primera declaración pública sobre la guerra fue una alocución por radio que hizo desde Pamplona el 28 de septiembre de 1936, celebrando la liberación del Alcázar. Explicó que los nacionalistas luchaban contra la Anti-España, el «alma bastarda de los hijos de Moscú», los judíos y masones que habían envenenado a un pueblo ingenuo con ideas tártaras y mongolas, y que estaban erigiendo un sistema manejado por la Internacional semítica. En diciembre, en su primera pastoral de tiempo de guerra, titulada «*El caso de España*», repitió acusaciones similares, y atribuyó los sufrimientos de España además a la imitación servil de los modos extranjeros, a la farsa del parlamentarismo, la falsedad del sufragio universal, y las insensatas libertades de enseñanza universitaria y de prensa. El 10 de enero de 1937 publicó una carta abierta al presidente Aguirre, del Gobierno vasco, en la cual, aunque deploraba las ejecuciones de los sacerdotes vascos, lamentaba igualmente la «aberración» que les había llevado a tan lamentables incidentes. Preguntó a los vascos cómo es que podían unirse a las hordas marxistas para luchar contra sus hermanos católicos sólo por «un matiz de formas políticas[348]».

Ni el cardenal Gomá, ni los dirigentes nacionalistas, ni en general los conservadores españoles comprendieron jamás por qué los vascos lucharon al lado de la República. Intentaron explicarlo en lo sucesivo como él resultado de un predominante sentimiento «separatista», acusándoles de que cooperaban con la República tan sólo por el Estatuto de autonomía de octubre de 1936. Pero los vascos se habían puesto del lado de la República el 18 de julio de 1936, y jamás cambiaron dicha posición. Sus ministros formaron parte tanto del Gobierno de Largo Caballero

como del de Negrín, y al margen de sus amplias discrepancias de criterio siempre honraron las intenciones de ambos presidentes del Consejo de ministros.

Entre los nacionalistas vascos y sus enemigos carlistas y castellanos había un tremendo abismo en la actitud hacia el trato de los otros seres humanos. Los vascos asignaron tantos de sus milicianos propios como fueron necesarios para proteger a los presos políticos que estaban en su poder. Dieron buena acogida a la Cruz Roja Internacional y le concedieron toda clase de facilidades en sus esfuerzos para el intercambio de prisioneros. Cuando detenían sacerdotes que intentaban pasarse a las líneas nacionalistas, los juzgaban en tribunales regulares donde eran defendidos por abogados conservadores elegidos por ellos mismos. Dentro del Gobierno republicano, dedicaron sus esfuerzos especialmente a la protección de los presos políticos y los católicos, y jamás habrían seguido formando parte del Gobierno si hubieran visto que los sucesivos jefes del mismo no aprobaban completamente sus esfuerzos. En su país practicaron la democracia política e iniciaron una reforma agraria en beneficio de los numerosos arrendatarios; en sus discusiones jamás resonaban fulminaciones contra los masones o judíos. En el otro lado de la línea del frente, sus enemigos fusilaban a sus oponentes políticos, incluyendo sacerdotes, humillaban públicamente a sus esposas e hijos, exaltaban la dictadura y negaban categóricamente el principio de igualdad en los propuestos intercambios de prisioneros.

En el medio siglo que había precedido a la guerra civil, los vascos habían asimilado los mejores ideales de la Ilustración del siglo XVIII y visto la prosperidad de los vascos franceses bajo un régimen de tolerancia religiosa y de educación general. En sus tratos con los ingleses, admiraron no solamente el progreso económico, sino también la constante extensión de la democracia y el espíritu del «juego limpio». Finalmente, interpretaron las declaraciones sociales de León XIII no como mera contrapropa-

ganda ante la difusión del marxismo, sino como un programa de democracia social y económica dentro de una estructura de vida cristiana. En Burgos y en Pamplona las autoridades hablaban y actuaban cotidianamente de acuerdo con su desprecio por los valores humanos de los vascos. El cardenal Gomá quizá no se daba cuenta de lo parecidas que eran sus declaraciones a aquéllas de los gobernantes neopaganos y racistas de la Alemania nazi. Para él, la disidencia vasca era el resultado de un «matiz de formas políticas». Para los vascos, como para todos los elementos liberales de toda la España republicana, el régimen de Burgos representaba aquella Castilla retrógrada de la cual había escrito tristemente el gran poeta Antonio Machado:

> Castilla miserable, ayer dominadora,
> envuelta en sus andrajos desprecia cuanto ignora.

Tras la caída de Bilbao los soldados republicanos se retiraron hacia el Oeste. Los vascos establecieron una administración propia en las ciudades portuarias de Laredo y Santoña. Las milicias locales de Santander y Asturias se prepararon a defender sus respectivas patrias chicas. Todo el mundo sabía que sólo era cuestión de tiempo el que los nacionalistas conquistaran todo el Norte. A la fuerte corriente de derrotismo se añadió un creciente resentimiento contra Valencia, que el Gobierno central trataba desesperadamente de contrarrestar con pequeñas pero espectaculares entregas de armas, bien por avión o burlando el bloqueo naval. Y a principios de julio el ejército del Centro lanzó una ofensiva en Brunete, uno de cuyos objetivos era aliviar la presión sobre el frente Norte. A finales de junio y en julio se produjeron muchas deserciones. Los soldados que se retiraban a través de las comarcas de donde eran originarios se ponían en contacto con los campesinos, rogándoles por ellos y sus amigos, y los campesinos se prestaban a tratar con los oficiales franquistas el modo como los desertores podían cruzar las líneas. Los vencedores avan-

zaban lentamente para beneficiarse en todo lo posible de este desgaste del enemigo en retirada.

La triunfal ofensiva contra Santander en el mes de agosto fue la operación militar italiana más importante de la guerra. Derrotadas en Guadalajara, y mantenidas en reserva durante la campaña de Bilbao, las divisiones italianas, compuestas quizá por unos 60.000 hombres, gozando del apoyo de artillería, carros blindados y aviones, tomaron la delantera. Hallaron pocas trincheras y ninguna línea de fortificaciones. Los republicanos seguían luchando con sus unidades de milicias separadas, no como ejército. Carecían virtualmente de aviones y tanques. De vez en cuando se hacían fuertes en un nido de ametralladoras entre las alturas o en la curva de una carretera; pero el principal obstáculo para los italianos fue lo montañoso del país[349]. Se lanzaban entusiasmados al ejercicio logístico de mover un ejército complejo y motorizado a través de los estrechos pasos, y practicaban con su artillería disparando a cero contra los sucesivos nidos de ametralladoras. El día 26 de agosto desfilaron ante la atemorizada población de Santander con todo su equipo y llevando gigantescos retratos de Mussolini.

Al mismo tiempo las autoridades vascas de Santoña negociaron una rendición separada con el general Mancini. Mancini había presenciado la feroz represión de Málaga, y como muchos de los oficiales italianos, se sintió horrorizado por el aspecto cuantitativo de los fusilamientos que tenían lugar en cada provincia conquistada. Los vascos propusieron rendirse con sus armas a los italianos, mantener el orden público y garantizar la vida de sus rehenes[350]. A cambio, el general Mancini se comprometería a garantizar las vidas de los soldados vascos, autorizar la emigración de sus oficiales y utilizar su influencia para proteger la población vasca contra toda persecución política. Es perfectamente comprensible, dadas las desesperadas circunstancias en que se encontraban, que los vascos intentaran rendirse a los italianos, y el

general Mancini se sintió sin duda halagado por haber recibido tal petición, pero no tenía autoridad para aceptar la rendición. Al enterarse los oficiales nacionalistas de estas gestiones, enviaron inmediatamente tropas, que llegaron a Santoña justamente cuando los primeros botes cargados de vascos se disponían a zarpar. Todos fueron detenidos, y se puede decir que, en general, la situación de los vascos empeoró por esta tentativa de evitar el tener que rendirse al ejército nacionalista.

Septiembre y octubre fueron dedicados a las operaciones de limpieza en Asturias. Aquí, donde el recuerdo de 1934 estaba todavía vivo, los aterrorizados habitantes de los pueblos los abandonaban en masa en cuanto los conquistadores se aproximaban. Los mineros practicaron la política de tierra quemada, y en las ruinas de sus casas luchaban hasta la muerte con cargas de dinamita. Conforme su situación militar se fue haciendo más y más desesperada, muchos huyeron para unirse a los grupos de guerrilleros que luchaban en las montañas más inaccesibles. Otros, al enterarse de que su pueblo había caído, decidían que la guerra había terminado para ellos. Gijón y Avilés cayeron el 21 de octubre, y los sitiadores de Oviedo que quedaban se rindieron. En esta última ciudad apenas si quedaba un edificio intacto. Tanto en Santander como en Gijón, las autoridades nacionalistas encontraron grandes reservas de provisiones que no se habían utilizado: ropa interior, medias, vino, leche en polvo, pescado en conserva. No hay una explicación precisa para este fenómeno, que había de darse repetidamente en la rendición de otras ciudades. El amontonamiento y la ineficacia jugaron su parte. En todo caso, los nacionalistas, que habían traído víveres con ellos, y que establecieron cocinas de auxilio en cada pueblo, impresionaron a la hambrienta población por el contraste entre su abundancia aparente y la propia escasez[351].

A finales de octubre la campaña del Norte había terminado. Los muelles y las fábricas de Bilbao ya estaban reparados, y el

mineral de hierro volvió a ser exportado tras tan sólo un mes de interrupción. Las carreteras, ferrocarriles y dársenas estaban siendo reparados por los milicianos, que ahora eran prisioneros de guerra. Los luchadores más ardientes habían engrosado las filas de las bandas de guerrilleros; pero la mayoría de la población, mal nutrida y moralmente deprimida por su aislamiento de la principal zona republicana, y por las jamás terminadas querellas intestinas de los comités del Frente Popular, aceptó pasivamente el nuevo régimen. Las tropas italianas y navarras estaban ahora listas para ser trasladadas a otros frentes.

Capítulo 23

LAS INICIATIVAS DEL GOBIERNO NEGRÍN

EL 17 de mayo cayó Largo Caballero, para ser reemplazado como jefe del Gobierno por Juan Negrín, el socialista moderado que había sido ministro de Hacienda. Juan Negrín procedía de una familia comerciante de las islas Canarias. En la Universidad de Madrid fue uno de los amigos más destacados del histólogo Ramón y Cajal, premio Nóbel. Había trabajado como graduado en Alemania y se benefició de la estimulante atmósfera artística y política de los primeros años de la república de Weimar tanto como de sus estudios de laboratorio. En 1921 ganó por oposición la cátedra de Fisiología de la Universidad de Madrid. En 1929 se convirtió en presidente del comité de la Facultad encargado de la construcción de la Ciudad Universitaria, y por aquella época se afilió al Partido Socialista[352].

Negrín era un hombre de gran generosidad y de un entusiasmo desinteresado, que empleaba sus ingresos personales para mejorar el laboratorio y biblioteca de la Facultad de Medicina (donde su colección de revistas científicas alemanas sigue estando disponible todavía). Combinaba su pasión por el trabajo con una pasión casi igual contra lo que supusiera intromisión, ayudando a los estudiantes a publicar sus investigaciones en lugar de aprovecharse de sus resultados para labrarse su propia reputación. Compró a sus hijos cámaras fotográficas alemanas muy caras; pe-

ro se negaba a que lo retrataran. En las ceremonias celebradas para señalar las diversas etapas de la construcción de la Ciudad Universitaria, deliberadamente evitó el situarse en los lugares más visibles. En agosto de 1936, cuando muchos hombres de la izquierda moderada estaban desmoralizados por el terror anárquico de los «paseos», Negrín recorría de noche las calles de Madrid y se atrevió a penetrar en las chekas para hablar en favor de sospechosos detenidos. Ayudó a varios colegas a enviar sus familias al extranjero, mientras que él tenía dos hijos en el frente.

En las Cortes de la anteguerra Negrín colaboró generalmente con los prietistas del partido, y se mostró particularmente activo en la defensa de los diputados socialistas detenidos en el verano de 1934, con motivo de la huelga de campesinos. Como ministro de Hacienda, a finales de 1936, reformó el cuerpo de Carabineros, convirtiéndolo en una *élite* y un cuerpo disciplinado; logró (relativamente) contener la inflación y estar en muy buenas relaciones con los representantes comerciales rusos, con los cuales tenía un trato constante. No tenía muy buena opinión de Largo Caballero, y sin vacilar acababa con las reuniones del Gobierno sin haber informado al primer ministro. Este pequeño defecto no disminuyó la apreciación que le tenían los miembros moderados del Gabinete. Azaña, Giral y en general todos los republicanos se sintieron aliviados cuando este burgués genial y perfectamente capacitado sustituyó al inflexible y burocrático jefe sindical que había sido primer ministro durante casi nueve meses. Además de sus otras dotes, el nuevo jefe del Gobierno hablaba con soltura el alemán y bastante bien el francés y el inglés, así como un poco de ruso. Los corresponsales extranjeros podían, por tanto, describirlo fácilmente como un premier británico o un presidente americano. Estaba en muy buenas relaciones con todos ellos, y había de disfrutar de mejor prensa que Largo Caballero.

Negrín escogió colaboradores capaces y de mentalidad democrática: Giral como ministro de Asuntos Exteriores, Prieto para ministro de Defensa, Irujo de ministro de Justicia y Julián Zugazagoitia como ministro de la Gobernación. Irujo consintió en participar con la condición de que gozaría de libertad, no sólo para continuar la obra que había realizado bajo Largo Caballero en relación con las cárceles, sino para restaurar los procedimientos profesionales en los tribunales y los usos judiciales que existían antes de la guerra civil. Zugazagoitia, como director de *El Socialista*, había escrito enérgicamente contra los «paseos» en las terribles semanas al principio de la guerra y en varias ocasiones denunció a las chekas anarquistas y más tarde a las comunistas. Ahora era de presumir que tendría la oportunidad de acabar con dichos abusos de una vez por todas.

Pero la tarea más importante era ganar la guerra, y para lograr esto, la República debía tomar la iniciativa. En la primavera y el verano de 1937 las fuerzas nacionalistas estaban atareadas con la reducción de las provincias norteñas. Una ofensiva en el frente central les asestaría un golpe por la espalda y aliviaría la presión sobre el territorio restante del Norte. Demostraría a los rusos un espíritu de iniciativa militar que sus consejeros habían echado de menos hasta ahora. Una victoria republicana animaría igualmente a los franceses a abrir la frontera una vez más, y esto en sí era un asunto de importancia vital, porque varios cargueros rusos habían sido hundidos durante la primavera y ahora comunicaron al Gobierno de Valencia que en el futuro deberían encargarse ellos mismos del transporte. En almacenes franceses había mucho material ruso y de otras procedencias, ya pagado con el oro del Banco de España, pero del que no se podía disponer mientras que los franceses observaran escrupulosamente los acuerdos de No-intervención.

El sector escogido estaba a menos de quince millas al oeste de Madrid, una zona que había estado tranquila desde los combates

de enero en la carretera de La Coruña. Las líneas opuestas se enfrentaban entre sí de Éste a Oeste. El plan era avanzar hacia el Sur hasta la villa de Brunete, importante nudo de carreteras; desde esta aldea los atacantes podrían envolver al ejército sitiador por la espalda, levantando así el asedio de Madrid. El ejército republicano comprendía en total por entonces unos 600.000 hombres, de los cuales alrededor de 50.000 fueron concentrados para la ofensiva de Brunete. Las unidades de aquel ejército más endurecidas por las batallas estaban presentes: las divisiones de Líster y «El Campesino», y tres de las brigadas internacionales. Estaban bien provistas de ametralladoras y granadas de la época de Verdún, y con cañones Vickers Armstrong fabricados para el ejército zarista en 1916. Iban apoyadas por unos 100 tanques rusos y por quizá cien aviones, también rusos, pilotados ahora en su mayoría por pilotos españoles.

Los planes para la ofensiva de Brunete fueron obra de los consejeros rusos y del Estado Mayor de Madrid. La decisión de atacar Brunete en lugar de organizar una ofensiva en Extremadura fue uno de los aspectos de la pugna entre Largo Caballero y sus oponentes. Además de este factor político, que era muy conocido en Madrid, un tal capitán Luján del Estado Mayor de Miaja se pasó a los nacionalistas con una primitiva versión del plan de Brunete. Sin embargo, cuando los republicanos atacaron el 6 de julio, lograron romper el frente por efecto de la sorpresa, avanzando unas cinco millas para rodear y luego tomar por asalto Brunete el primer día. Los historiadores republicanos han sugerido que esto ilustra la pobre calidad del servicio de inteligencia militar nacionalista; pero ilustra mucho más la constante verdad de que por ambos bandos las líneas estaban muy mal guarnecidas aparte de las zonas de batalla inmediatas. Ni los republicanos ni los nacionalistas contaron jamás con las suficientes reservas de hombres para sostener frentes largos, y las reservas nacionalistas

estaban concentradas entonces para los combates que los llevarían a conquistar el Norte.

Al cabo de dos días, el general Varela pudo trasladar los suficientes blindados e infantería para contrarrestar el empuje de la ofensiva. Sobre el terreno llano y con temperaturas de más de 38 grados centígrados a la sombra, los dos ejércitos lucharon en lo que los médicos y enfermeras de ambos bandos recordaron como la batalla más sangrienta de toda la guerra. Ni Líster ni «El Campesino» contaron las bajas mientras luchaban para conservar el terreno que habían ganado en los primeros cuatro días. Uno y otro ejército cañonearon por error sus propias líneas avanzadas; los fallos en las comunicaciones y la cobardía llevaron casi a motines y a ejecuciones en el campo de batalla en varias unidades republicanas. Por encima llegaron a aparecer hasta 200 aviones el 10 y el 11 de julio, mientras los republicanos trataban de conservar su superioridad inicial frente a los refuerzos nacionalistas.

Hasta el 19 de julio los republicanos, a costa de terribles pérdidas, consiguieron mantener el saliente que habían creado al apoderarse de Brunete. Para entonces, sin embargo, los nacionalistas habían concentrado una abrumadora cantidad de artillería y aviación retirada de las reservas acumuladas para la ofensiva de Santander, mientras que las reservas republicanas de hombres y armas fueron comprometidas totalmente en la batalla. Durante la semana del 19 al 26 de julio, los republicanos se retiraron hasta casi alcanzar sus posiciones de partida. Los pilotos alemanes exultaban de gozo puesto que virtualmente nadie les disputaba el dominio del aire y se maravillaban de la tenacidad de los defensores, que sólo podían ser desalojados de sus trincheras y posiciones artilleras después de ser alcanzados directamente repetidas veces. Centenares de hombres valientes que pudieron haber salvado sus vidas con una anterior retirada, murieron corriendo bajo el fuego de las ametralladoras de los Heinkels y Messerschmidts[353]. Por todas partes, en los choques de la infantería, los

republicanos en retirada tenían que pagar el mismo terrible precio en vidas que su propio avance les había costado[354]. En Navalcarnero y San Martín de Valdeiglesias jovencitas que se educaban en los colegios de monjas y a las que jamás se les había enseñado nada de la biología humana, atendían en silencio a los heridos que en sus delirios blasfemaban. La penicilina aún no había sido descubierta y los médicos jóvenes aprendían experimentalmente que la gangrena no se producía con tanta frecuencia si tras las amputaciones las heridas eran dejadas abiertas. En ambos lados, cada noche iban autobuses para traer los heridos que no podían ser evacuados durante el día por el cañoneo de la artillería. Un coronel ruso que estaba ligeramente herido, al ver que la ofensiva había fracasado, se suicidó[355].

La batalla de Brunete retardó la caída de Santander; pero no levantó, ni amenazó con levantar, el asedio de Madrid. En el verano de 1937 el equipo perdido no podía ser reemplazado, y los hombres entrenados eran demasiado preciosos, aunque seguía habiendo abundantes disponibilidades de material humano. Sin embargo, Negrín y Prieto estaban decididos a conservar la iniciativa. El frente de Aragón había estado tranquilo desde los dos primeros meses de la guerra. Los anarquistas y los nacionalistas catalanes hacía tiempo que se quejaban de lo desatendido que el Gobierno tenía a su frente, y la baja moral de sus tropas podía ser explicada sin duda por la ausencia de actividad. El 24 de agosto los republicanos iniciaron una serie de acciones menores con la intención de envolver y luego tomar Zaragoza. Los ataques más importantes se produjeron contra los pueblos de Belchite y Quinto, que cubrían por el Sudeste los accesos a Zaragoza a través del valle del Ebro.

A la zona de Belchite-Quinto sólo podían ser asignados unos 10.000 hombres, incluyendo varios centenares de internacionales americanos, y unos pocos aviones. Las guarniciones nacionalistas combinadas ascendían quizá a unos 7000 hombres, todos

ellos españoles. Los atacantes se aprovecharon de la sorpresa, y en los prontamente rodeados pueblos ambos ejércitos lucharon con valor. Como sus hermanos de la zona republicana, las milicias nacionalistas eran fanáticamente valientes y muy aptas para la defensa de edificios. Los pueblos tuvieron que ser tomados casa por casa, en luchas que duraron una semana. Cuando una casa era sitiada, sus defensores podían escapar en el último momento por la puerta trasera para unirse a los defensores de la casa contigua. Herbert Matthews, corresponsal del New York Times, describió parapetos formados hasta de ocho cadáveres uno encima de otro y caracterizó a Belchite, tras de su toma, como una «masa fétida de desastre». La capacidad de ofensiva republicana quedó completamente agotada por la lucha en ambos pueblos[356].

Los ataques locales iniciados al norte del Ebro no condujeron a nada, porque se carecía de coordinación, suministros y de servicio de inteligencia militar. Al general Kleber se le ordenó que avanzara a lo largo de la carretera Barcelona-Zaragoza; pero cuando pidió informes en el cuartel general del ejército de Aragón, le dijeron con hosquedad que no había enemigos a lo largo de la carretera. Avanzando con precaución, con tropas en su mayoría anarquistas, halló que la carretera estaba efectivamente tranquila hasta que de repente fue sorprendido por el fuego cruzado procedente de dos colinas bien fortificadas en un paso estrecho de la carretera. Hizo someter las colinas al fuego de su artillería ligera; pero la mitad de los proyectiles o no eran del tamaño apropiado o no estallaban. Entonces ordenó a un batallón anarquista que tomara al asalto una de las colinas. Llegó hasta la mitad del camino y luego se retiró ante una granizada de ráfagas de ametralladora. Entonces los volvió a enviar loma arriba, acompañados por 100 hombres de caballería que habían sido asignados a esta columna, pero sin caballos. La fuerza combinada tomó la colina. Kleber propuso entonces continuar el avance con los hombres de caballería, dejando la altura conquistada en ma-

nos de los anarquistas; pero cuando aquéllos descendieron, los anarquistas hicieron lo mismo, y los nacionalistas volvieron a ocupar la colina sin lucha. Kleber no encontró resistencia en ningún otro punto; pero ¿de qué le serviría avanzar con tales soldados, tales cañones y semejante falta de información referente a la localización de las fortificaciones en un frente que había estado estacionario durante ocho meses[357]? Varias unidades republicanas lanzaron breves ataques hasta mediados de septiembre; pero el único resultado tangible de la ofensiva de Aragón fue la costosa conquista de Quinto y Belchite.

Después que los nacionalistas conquistaron Gijón a finales de octubre, era evidente que el general Franco concentraría pronto sus fuerzas bien en el frente de Aragón o en el de Madrid. Prieto, en colaboración con los coroneles Hernández Saravia y Rojo, aceleró los preparativos de una nueva ofensiva que permitiría a los republicanos escoger el campo de batalla y desequilibrar los planes nacionalistas. Escogieron la ciudad de Teruel, situada en un terreno elevado y rocoso, sobre el río Turia, que se sabía que estaba mal guarnecida y que constituía un saliente rodeado aproximadamente en sus dos tercios por las líneas republicanas. Para esta ofensiva concentraron de 90 a 100.000 soldados, todos los cañones de campaña de la primera guerra mundial que habían podido embarcar en Marsella o comprar a contrabandistas, todas las municiones de fusil y ametralladora, las granadas, espoletas, obuses y camiones transformados en tanques producidos en 1937 por las fábricas catalanas. Conocían la decisión de Franco de lanzarse al asalto de Madrid el 18 de diciembre, y planearon atacar Teruel una semana antes; pero tuvieron que retrasar la ofensiva cuatro días por causa de una huelga de maquinistas en Barcelona, y finalmente se lanzaron al ataque en la tremendamente fría y ventosa mañana del 15 de diciembre[358].

Lograron una completa sorpresa, y forzaron a los nacionalistas a retrasar su ataque a Madrid. La moral era excelente, a pesar

del frío intensísimo y la mortífera puntería del fuego de morteros y artillería de los defensores. Durante el día 15 empezó a caer nieve y el 17 una verdadera ventisca cortó las comunicaciones entre el cuartel general y las tropas que avanzaban. Los aviones tenían que quedarse en el suelo y los camiones se atascaban en las carreteras heladas; pero la infantería republicana siguió adelante, y hasta los hombres ligeramente heridos se levantaban de la nieve para proseguir el avance. El 21 de diciembre los republicanos comenzaron a entrar en la ciudad, abriéndose paso en una lucha casa por casa. Los ametralladores cubrían puertas y ventanas mientras que los dinamiteros avanzaban para volar los fortines. Los atacantes se apoderaron de las plantas bajas de los edificios, cuyos pisos superiores fueron defendidos hasta la muerte. Como en la Ciudad Universitaria en noviembre de 1936, por los huecos de las escaleras eran arrojadas granadas y maldiciones, y las cañerías y los alambres eran destrozados, mientras que los soldados forcejeaban y luchaban a la bayoneta entre sí en medio de la oscuridad.

Los nacionalistas se apresuraron a enviar refuerzos desde el frente de Madrid y el día 29 el general Varela, que de nuevo era el jefe de operaciones de un contraataque relámpago, atacó desde el Noroeste, apoyado por la aviación de la Legión Cóndor. En la víspera de Año Nuevo el pánico se apoderó de los soldados republicanos, y durante cuatro horas la ciudad quedó completamente abierta para el avance de las fuerzas de Varela; pero los nacionalistas no se enteraron a tiempo de esta oportunidad que se les ofrecía, y por la mañana las tropas habían regresado a sus puestos y la disciplina estaba restablecida. En el contraataque habían conquistado La Muela, una zona de terreno elevado en las afueras de la ciudad, mientras que dentro de ella los republicanos proseguían su avance calle por calle.

La guarnición al mando del coronel d'Harcourt, grandemente reducida, se vio aislada en el sótano de uno de los principales

edificios, sin agua, y estorbada por los varios centenares de refugiados civiles, entre los que figuraban el obispo de Teruel y el presidente de la Cruz Roja local. Este último salió con bandera blanca pidiendo permiso para evacuar los heridos del hospital de la Asunción, que había sido sitiado, pero no tocado, por los republicanos a su entrada en la ciudad. Prieto aprovechó la oportunidad para humanizar la conducta en la guerra, en una de las pocas ocasiones en que militarmente los republicanos llevaron la voz cantante. Garantizó la evacuación del hospital y también prometió que no habría represalias contra todas las personas que no estuvieran en edad militar y que se hubieran refugiado con la guarnición. El 7 de enero de 1938, después de que los ancianos, las mujeres y los niños hubieran abandonado el sótano, la famélica guarnición pidió al coronel que se rindiera, puesto que su situación militar era desesperada.

En las seis semanas siguientes los republicanos defendieron la parte que poseían de la ciudad contra ataques aéreos y artilleros cada vez más fuertes. Pero más al Norte, fuerzas motorizadas al mando del coronel Aranda empujaron hacia el Éste las líneas republicanas, amenazando inexorablemente a la ciudad con el asedio. A finales de enero fueron llevados miembros de las brigadas internacionales para fortalecer la defensa. Los republicanos, sin embargo, no disponían de reservas para contraatacar en las afueras de la ciudad. Resistieron todo lo posible, por razones de moral y de prestigio, sufriendo un terrible castigo; pero se vieron obligados a evacuar Teruel apresuradamente el 21 de febrero, pues si no toda la guarnición asediada habría quedado cortada de sus líneas. La división de «El Campesino» fue la última en evacuar, teniendo que luchar duramente para abrirse camino a través de las líneas nacionalistas que se estrechaban y poder unirse así al ejército republicano en retirada. Según el embajador alemán, los nacionalistas tomaron unos 14 500 prisioneros, de los

cuales sólo un puñado eran extranjeros, hecho este último que el general Franco le pidió que mantuviera en secreto[359].

En la segunda mitad de 1937 el ejército republicano había hecho tres intentos significativos para pasar a la ofensiva, que demostraron la disciplina y combatividad de sus soldados. Había logrado la sorpresa táctica y forzaron a los nacionalistas a luchar en el terreno por ellos elegido. Ambos ejércitos combatieron heroicamente y consintieron en sufrir fuertes sacrificios por razones de prestigio; los nacionalistas, por recuperar hasta la última pulgada de terreno perdido, sin parar mientes en su valor estratégico; los republicanos, para alcanzar victorias, por costosas y temporales que fueran. La superioridad material de los nacionalistas se fue haciendo cada vez más evidente en estas batallas, al igual que en la campaña del Norte. A mediados de 1937 los rusos redujeron mucho sus envíos de tanques y aviones, mientras que el peso de los suministros italianos y alemanes, así como la disponibilidad de soldados italianos, aumentó rápidamente. El ejército republicano, consciente de la superioridad material de su oponente, se veía obstaculizado por una psicología totalmente defensiva; preparó excelentes trincheras e hizo que el enemigo pagara con grandes pérdidas cada pulgada de terreno que conquistaba, pero era incapaz de explotar sus propios éxitos iniciales, como en los primeros días de Brunete y Teruel.

Los especialistas de inteligencia de todos los ejércitos europeos observaban la actuación y las tácticas de los tanques rusos, italianos y alemanes. Los tanques rusos de silueta baja, fuertemente acorazados, avanzaban acompañados por infantería. Tanto en Brunete como en Teruel, por la razón que fuera, la infantería no los había seguido lo bastante de cerca. Los tanquistas, enjaulados entre una maquinaria calurosa y rechinante, no gozaban de buena visibilidad y sus máquinas eran aisladas fácilmente y capturadas intactas. El general Von Thoma, al mando de los tanques de la Legión Cóndor, afirmó en 1938 haber añadido unos 60 tan-

ques rusos a sus fuerzas, la mayoría de ellos capturados por moros que fueron premiados con 500 pesetas por vehículo. Los alemanes insistían en que sus tanques, que eran algo más ligeros y rápidos que los rusos, fueran utilizados en grupos para romper el frente enemigo; estos ataques iban acompañados por carros blindados y motocicletas para comunicarse, pero no dependían de la infantería de modo inmediato[360]. La táctica alemana, predecesora de la Blitzkrieg de la segunda guerra mundial, tuvo más éxito, aunque, sin embargo, no del todo por causa de su inherente superioridad. Los alemanes tenían en campaña a miles de técnicos propios bien entrenados, y la superioridad material general del ejército nacionalista contribuyó no poco al éxito de las tácticas de sus tanques. En Brunete, donde su influencia fue predominante, los rusos fueron pródigos en hombres y cañones en un esfuerzo por explotar la ruptura de las líneas enemigas en un frente estrecho, pero importante. Habrían de derrochar cañones y hombres de modo similar en la guerra de Finlandia y en la segunda guerra mundial, y su táctica tuvo más de un precedente de matanzas tales como las tres batallas de Ypres en la primera guerra mundial.

Durante los mismos meses el Gobierno republicano tomó una serie de iniciativas políticas. Desde el principio de la guerra, Prieto afirmó que el bando ganador sería aquél que tuviera una retaguardia más sana. En esto, como en la mayoría de los temas importantes de la época, Negrín estaba de acuerdo, y dio su pleno apoyo a Irujo y Zugazagoitia. El ministro de Justicia decretó la restauración de la toga y el birrete en los tribunales, se aseguró de que los presidentes de los tribunales populares fueran jueces de carrera, y dispuso que, sin dar publicidad, se pusiera en libertad a todos los sacerdotes encarcelados por el simple hecho de serlo. En las cárceles no ondearía más bandera que la republicana y los directores serían nombrados por antigüedad entre los miembros del cuerpo de Prisiones antes que por su filiación polí-

tica. En cooperación con el ministro de la Gobernación estableció un sistema por el cual, a discreción del director, y tras promesa del internado, los presos políticos podían ser puestos provisionalmente en libertad en casos familiares importantes. Bajo este sistema nadie se fugó[361].

En agosto el Gobierno decretó el derecho al culto católico en privado, aunque las iglesias siguieron cerradas, y en Cataluña la Generalitat facilitó, sin darles publicidad, los necesarios contactos del cardenal Vidal i Barraquer, ahora en Roma, con su diócesis. Los comunistas insistieron ante Negrín, como habían insistido ante Largo Caballero, en la conveniencia de fusionar los partidos socialista y comunista. Negrín replicó de modo cortés, pero firme, que la propuesta no era apropiada para un país democrático, y el primero de octubre el Partido Socialista, a petición de Prieto y Negrín, se opuso formalmente a la fusión[362].

Sin embargo, militar y diplomáticamente el Gobierno dependía completamente de la buena voluntad de la Unión Soviética. Las purgas paranoicas de Stalin estaban en su más alto punto en la primavera y el verano de 1937. El dictador ruso no vaciló en extender sus actividades políticas a España, donde estaba representado principalmente por el coronel Orlov, de la NKVD, y por Erno Gerö, el comunista húngaro que actuaba en Barcelona con el nombre de «Pedro». El 16 de junio, a petición de los comunistas, fueron detenidos unos 40 dirigentes del POUM, y el día 22 el Gobierno anunció la creación de un nuevo tribunal de espionaje, ante el cual comparecerían pronto.

Andrés Nin, que era la personalidad más importante del POUM, fue separado de los otros prisioneros y llevado en secreto a una cárcel comunista privada en Alcalá de Henares, cerca de Madrid. Allí fue torturado e interrogado por Orlov, quien probablemente intentaba obtener de él, a la fuerza, una de aquellas confesiones orales espectaculares que habían señalado en Moscú los juicios de las purgas. Nin era una figura muy conocida, tanto

en España como en el extranjero. Fue uno de los fundadores de la Tercera Internacional y se unió a Trotski poco después del exilio de éste. Había sido consejero de Justicia de la Generalitat en 1936 y fue uno de los principales teóricos de la revolución colectivista catalana[363].

Tras su desaparición, Irujo y Zugazagoitia trataron de mantener públicamente la versión de que estaba en manos del Gobierno, mientras que dentro del Gobierno amenazaron con dimitir ante esta flagrante violación de la autoridad gubernamental por parte de los comunistas. Negrín pidió a los ministros del partido que le dijeran dónde estaba Nin. Éstos insistieron en que lo ignoraban, lo que quizá fuera verdad; pero nadie les creyó. Negrín e Irujo tampoco hicieron mucho caso de las pruebas documentales que los comunistas pretendían tener, y que ligaban a los jefes del POUM con los servicios secretos de los nacionalistas.

Mientras tanto Orlov no pudo obtener la confesión deseada de Nin, así que se hizo necesario liquidarlo simplemente. El coronel preparó un secuestro simulado, usando miembros alemanes de las brigadas internacionales, a quienes él y los comunistas trataron luego de hacer pasar por agentes de la Gestapo. A principios de agosto pretendían que Nin había escapado así a Salamanca o Berlín, cuando en realidad lo habían asesinado.

El caso Nin fue un terrible golpe moral al prestigio del Gobierno Negrín. Dos meses después de haber ocupado el cargo, con enérgicas promesas de restablecer la justicia y la seguridad personal, el jefe del Gobierno se vio obligado a tolerar el ultraje comunista o a batirse en retirada, con el riesgo de ser destruido como lo fue Largo Caballero. Escogió tragarse la rabia, y pudo convencer a Irujo y Zugazagoitia de que su Gobierno hallaría medios en el futuro para controlar totalmente los asuntos internos. Destituyó como director general de Seguridad al coronel Ortega, hombre al que él había nombrado en mayo, pero que

evidentemente cooperó con Orlov. A mediados de agosto anunció la creación del Servicio de Inteligencia Militar (SIM) dirigido por un socialista del ala de Prieto, con la misión de proteger el esfuerzo de guerra contra las actividades fascistas o contrarrevolucionarias. Mientras tanto, los consejeros rusos comenzaron a ser cambiados cada vez con mayor frecuencia, y era un secreto a voces que muchos de ellos habían sido fusilados tras regresar a su país[364]. Los envíos de armas rusas habían disminuido rápidamente, tanto por razones prácticas como políticas, y el Gobierno ordenó poner discretos carteles en Barcelona y Valencia pidiendo al pueblo que no hablara mal de Rusia y que recordara que la Unión Soviética era la única gran potencia que había ayudado a la República.

Pensara lo que pensase acerca de los métodos soviéticos, Negrín no se desanimó ni por el caso Nin ni por el fracaso de la ofensiva de Brunete. Actuó con presteza para afirmar la autoridad de su Gobierno contra todas las formas de disidencia regional y política. El 11 de agosto el Gobierno anunció la disolución del Consejo de Aragón, la administración dominada por los anarquistas que había sido reconocida por Largo Caballero en diciembre de 1936. Se sabía que los campesinos odiaban al Consejo, los anarquistas desertaron del frente durante las luchas en Barcelona, y la mera existencia del Consejo era un desafío a la autoridad del Gobierno central. Por todas estas razones, Negrín no vaciló en enviar tropas y detener a los funcionarios anarquistas. Sin embargo, en cuanto su autoridad fue quebrantada, fueron puestos en libertad[365].

El 16 de agosto fueron prohibidos los mítines políticos en Barcelona, ciudad en donde la mixtura de regionalismo, «infantilismo izquierdista» y derrotismo, constituían una continua sangría del esfuerzo de guerra. El primero de octubre, Negrín logró el control del Partido Socialista, arreglándoselas para que Largo Caballero fuera destituido como jefe de la UGT y poniendo en

su lugar a González Peña, que entonces era un incondicional de Negrín como jefe de la ejecutiva del partido. El 17 de octubre se permitió a Largo Caballero que pronunciara un discurso público en Madrid, para que explicara las circunstancias de su dimisión como jefe del Gobierno; pero poco después se le impidió que pronunciara una serie de discursos[366]. A finales de octubre el Gobierno se trasladó de Valencia a Barcelona, para poder controlar mejor Cataluña. A su vez se afirmó el control gubernamental de la prensa cuando el órgano principal de Largo Caballero, *Adelante*, y el de la Generalitat, *La Vanguardia*, se convirtieron en portavoces de Negrín.

Mientras tanto, en el Ministerio de Defensa, Prieto tenía que enfrentarse con la constante interferencia soviética. Tras la ficción de las jerarquías españolas del Estado Mayor, los rusos mantenían el control directo de sus tanques y aviones. Algunos generales españoles ni siquiera sabían dónde estaban situados algunos de sus campos de aviación. Bombardearon Valladolid contra las órdenes de Prieto, y fracasaron al tratar de bombardear una central eléctrica de Córdoba de acuerdo con sus órdenes. Anticipándose a la caída de Gijón, el 19 de octubre Prieto preparó un telegrama ordenando al Ciscar, el mejor destructor de la marina republicana, que zarpara para Casablanca. Uno de los oficiales rusos le pidió que cambiara la orden, y como Prieto se negara, el oficial no dijo ni una palabra más; pero sin que el ministro lo supiera el telegrama fue retrasado cinco días y para entonces el Ciscar ya había sido hundido por la aviación nacionalista en el puerto de Gijón.

El partido continuó manteniendo a la vez su propia política e infiltrándose en la del Gobierno. Como el SIM no pudiera localizar a cierto comunista, cuya detención había sido ordenada por Prieto, el partido le informó que ellos ya habían detenido al individuo en cuestión y se estaban encargando del caso. En otra ocasión Prieto destituyó al jefe del SIM en Madrid porque este

último nombró a un cierto número de agentes comunistas sin consentimiento del ministro (como le había ocurrido a Largo Caballero cuando el nombramiento de comisarios políticos). En noviembre Prieto pudo destituir a algunos comisarios a los que tenía objeciones que oponer, y también sustituyó a Álvarez del Vayo como comisario general[367]. La actitud de Negrín en todos estos casos fue la de que la autoridad del Gobierno debería afirmarse siempre que fuera posible. Pero los suministros rusos eran indispensables, y los comunistas habían producido los mejores jefes en campaña del ejército; así que Negrín no respaldaba a nadie que tuviera un choque abierto con los comunistas en el que estuvieran involucrados asuntos militares.

La batalla de Teruel agotó los recursos del ejército republicano. Al mismo tiempo los nacionalistas transfirieron la masa de sus fuerzas hacia el Éste, y se prepararon para enlazar su reconquista de Teruel con una ofensiva general hacia Levante y Cataluña. A lo largo de una línea Norte-Sur que iba de Zaragoza a Teruel, pudieron concentrar 100.000 hombres como mínimo, contando con unidades españolas y marroquíes de alto espíritu combativo que iban a la vanguardia. En el curso del año 1937 habían podido reunir unos 700 aviones italianos y 250 alemanes, de 150 a 200 tanques, y millares de camiones de diversos tamaños. La mayor parte de ellos estaban disponibles para la nueva ofensiva. En los aeródromos los aviones se alineaban con las alas juntas, y en las bases de aprovisionamiento, los camiones Ford, Studebaker e italianos con las ruedas casi rozándose, pues no había temor a ninguna incursión aérea.

El ataque fue lanzado el 9 de marzo. Belchite y Quinto cayeron el primer día, y al cabo de una semana los nacionalistas habían avanzado un promedio de 100 Km. a lo largo de toda la línea. Tanques empleando las tácticas alemanas de los Panzers rompieron el frente en puntos escogidos y rodearon a los soldados republicanos atrincherados, que fueron entonces bombar-

deados y ametrallados desde el aire conforme se retiraban de sus posiciones fijas. A veces, una insistencia en la resistencia desesperada despertaba la admiración del enemigo victorioso; pero la rapidez de su avance en la mayor parte de las zonas dependía más del estado de las carreteras y las comunicaciones que de la acción de los defensores. En Zaragoza, los nacionalistas, entusiasmados, compraban imágenes de la Virgen del Pilar montadas en cascos de granadas y las jóvenes de Auxilio Social iban en los camiones con víveres a los pueblos recién conquistados. En aquella misma semana, Hitler ocupó Austria, y un segundo Gobierno Léon Blum se formó en Francia. El jefe del Gobierno, Negrín, marchó en avión a París para suplicar la reapertura de la frontera, cosa que Blum concedió inmediatamente, y los suministros rusos tanto tiempo retenido comenzaron a penetrar rápidamente procedentes de Burdeos, Marsella y Perpignan, con dirección a Barcelona.

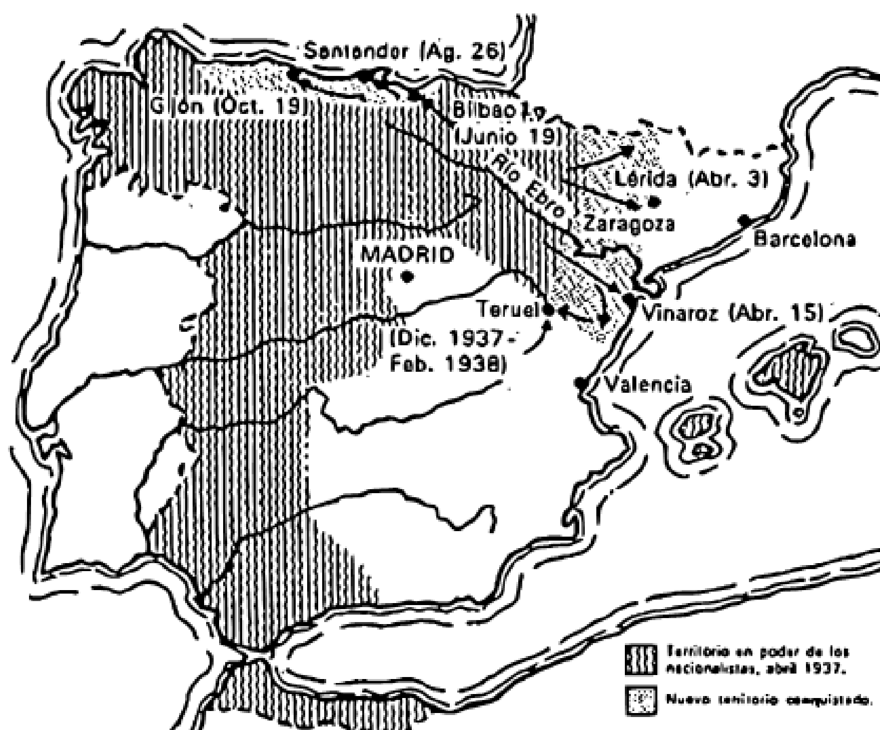
Mussolini, actuando por su cuenta, replicó a los franceses con una serie de incursiones aéreas masivas contra Barcelona, empezando la noche del 16 de marzo, en que había luna llena[368]. Los italianos emplearon bombas de espoleta retardada diseñadas para perforar los tejados y estallar luego en el interior de los edificios; también utilizaron un tipo de bomba que estallaba con una potente fuerza lateral, de modo que destruía cosas y personas a pocas pulgadas del suelo. El número de aviones y el peso de las bombas lanzadas era mucho mayor que en las incursiones de noviembre de 1936 sobre Madrid; pero, al igual que en este caso, los daños causados a los objetivos militares fueron muy pequeños. Más, por otra parte, ocurriendo tras 20 meses de guerra, y afectando a una ciudad que lentamente se iba muriendo de hambre, los bombardeos contribuyeron mucho al rápido hundimiento de la moral de la población[369]. Como en los casos de Madrid y Guernica, las potencias occidentales protestaron por lo que claramente iba a ser la suerte reservada a la población civil en

cualquier guerra futura. De acuerdo con su malicioso yerno y ministro de Asuntos Exteriores, conde Ciano, Mussolini se sintió encantado de que los italianos adquirieran también una reputación de aplicar el *Schrecklichkeit*.

La victoriosa ofensiva continuó. En los primeros días de abril, el ala norte de los nacionalistas se apoderó de Lérida y estableció una línea a lo largo del río Segre que llegaba hasta los Pirineos, ocupando asimismo la ciudad de Tremp, cuya central hidráulica proporcionaba a Barcelona la mayor parte de la electricidad que consumía. Otras unidades se precipitaron por el valle del río Ebro abajo, y el 15 de abril alcanzaron Vinaroz, en la costa del Mediterráneo, aislando así a Cataluña de las provincias centrales y meridionales que permanecían bajo el control republicano; pero luego, ya en los Pirineos y en el Maestrazgo, entre el relieve montañoso y los olivares, donde los tanques no eran tan efectivos, el avance fue encontrando una mayor resistencia, aunque hacia finales de abril los nacionalistas ocupaban un sector de la costa mediterránea desde la desembocadura del Ebro hasta unos 80 Km más al Sur[370].

El desastre militar del ejército republicano provocó una crisis dentro del Gobierno Negrín. Durante la segunda mitad de marzo, el jefe del Gobierno seguía decidido a proseguir la lucha, mientras que Azaña y Prieto consideraban la guerra ya como pérdida. Jesús Hernández, ministro comunista de Instrucción Pública, utilizando el seudónimo de «Juan Ventura» y burlando la censura, atacó a Prieto en *La Vanguardia*. Estando el Gobierno reunido en el palacio de Pedralbes, que era la residencia de Azaña, los comunistas organizaron una manifestación que irrumpió en los jardines del palacio con gritos de: «¡abajo los ministros traidores!». Negrín no era contrario a asustar al presidente, al que antes había respetado mucho, pero al que había llegado a considerar un cobarde. Sin embargo, quería conservar a Prieto en el Gabinete, a pesar de que cada vez estaba más fastidiado por

lo que creía innecesario tono derrotista de Prieto cuando éste describía el desastre militar. Pero el 27 de marzo el embajador francés preguntó a Negrín si compartía la opinión de su ministro de Defensa de que la guerra estaba perdida. Cuando precisamente acababa de obtener la reapertura de la frontera, Negrín no estaba de humor para que un derrotista estuviera encargado del ejército. Unos días antes, había dicho en la reunión de la ejecutiva del Partido Socialista que no deseaba continuar como jefe del Gobierno sin Prieto como ministro de Defensa, pero tras el incidente con el embajador Labonne envió a Julián Zugazagoitia, que era amigo de ambos, para que pidiera a Prieto su dimisión[371].



Mapa 7. Conquistas en el norte, abril-octubre de 1937. Avances hacia el Mediterráneo, marzo-junio de 1938.

El asunto Prieto agravó la continua desunión dentro del campo republicano. El Partido Socialista había quedado dividido por

la caída de Largo Caballero, y cesó de funcionar como partido después de la forzada dimisión de Prieto. Es imposible decir con precisión si Negrín actuó de acuerdo con los comunistas para desacreditar a Prieto tras la pérdida de Teruel. Dejando aparte que estuviera o no enterado de antemano de la manifestación en Pedralbes y de los artículos de «Juan Ventura», ya hacía tiempo que creía que los comunistas eran los únicos aliados enérgicos en quienes podía confiar para proseguir la guerra. La unidad democrática de mayo de 1937 fue sacrificada conscientemente para satisfacer al grupo que apoyaba de modo más consistente el esfuerzo bélico. En la reorganización del Gobierno del 5 de abril de 1938, Álvarez del Vayo reemplazó a Giral como ministro de Asuntos Exteriores. Irujo y Zugazagoitia, a los que se debía la mejora en las prácticas policíacas y judiciales, abandonaron los Ministerios de Justicia y Gobernación en manos de Ramón González Peña y Paulino Gómez, hombres menos calificados, pero que eran socialistas partidarios de Negrín. Éste, además de la presidencia del Consejo de Ministros, se hizo cargo de la cartera de Defensa.

La disensión entre Prieto y Negrín constituyó asimismo una crisis emocional en la vida de ambos hombres; los dos habían sido amigos y colaboradores en los últimos ocho años, y sin discusión eran los dos dirigentes más capaces que la España republicana había producido en tiempo de guerra. Para Prieto siempre había sido un axioma que la República sólo podría finalmente triunfar con la ayuda de Inglaterra. A principios de 1938 el antifascista Anthony Edén había sido sustituido en el Foreign Office por Lord Halifax, campeón del apaciguamiento, y los ingleses estaban muy atareados tratando de llegar a un acuerdo con Mussolini sobre el Mediterráneo. Al mismo tiempo, la ayuda rusa había disminuido considerablemente y siempre estaba acompañada del chantaje político. La reapertura de la frontera francesa no pudo contrapesar estos hechos sombríos.

Prieto carecía también del temperamento necesario para ser un dirigente de tiempo de guerra. Uno de los deberes del Gobierno era confirmar las sentencias de muerte. Negrín y la mayoría de los ministros regularmente votaban por la ejecución de tales sentencias que nunca eran numerosas. Prieto e Irujo generalmente votaban contra la ejecución. En los preparativos para la ofensiva de Teruel, Prieto realizó prodigios en el aspecto de los aprovisionamientos, y en los primeros días se sintió gozoso, no sólo por el triunfo, sino por el número relativamente pequeño de bajas. Tras el derrumbamiento del frente en marzo, tuvieron que ser llamados a filas campesinos adolescentes, la situación alimenticia en la retaguardia era desastrosa y Barcelona estaba siendo destruida desde el aire. Hombre siempre de modos dramáticos, dejó escapar cada vez con más frecuencia frases pesimistas. Cuando a finales de marzo el general Rojo y el coronel Hidalgo de Cisneros hablaron de rendirse al general Franco, Prieto pensó que este gesto no aliviaría la suerte del ejército derrotado, pero insistió en unirse a ellos si decidían seguir adelante con esa actitud[372].

Negrín se daba también cuenta de todos los problemas y deficiencias que preocupaban a Prieto; pero prefería creer que Inglaterra y Francia acabarían por cambiar de política, y en contraste con Azaña y Prieto, extrajo nuevas fuerzas emocionales de la adversidad. Se veía a sí mismo como encarnación de la voluntad de resistencia, de morir de pie antes que vivir de rodillas, como «la Pasionaria» había dicho en los primeros días del asedio de Madrid. Su misión era mantener un ejército en campaña, y sostener la moral de los jefes de ese ejército. Conocía los sufrimientos y la baja moral de la retaguardia; pero estas cosas, por terribles que fueran, no debían interferirse con la defensa de la República. La diferencia entre ambos hombres era una diferencia en la importancia que concedían a los diversos factores en su modo de pensar[373].

La dimisión de Prieto no produjo una completa ruptura de la coalición gubernamental. Giral e Irujo volvieron a unirse al Gobierno como ministros sin cartera, y Zugazagoitia quedó a disposición del primer ministro. El general Rojo e Hidalgo de Cisneros sirvieron al nuevo ministro de Defensa como habían servido a Prieto. Pero quedó perfectamente claro que la base del apoyo a Negrín se había estrechado.

Capítulo 24

LA EVOLUCIÓN DE LA ESPAÑA NACIONALISTA

DESDE el momento en que lograron transportar con éxito el ejército de África a la otra orilla del estrecho de Gibraltar, los jefes nacionalistas nunca dudaron de su victoria final. La defensa de Madrid, y las batallas del Jarama, Guadalajara, Brunete y Teruel, pusieron duramente a prueba la moral de sus tropas; retrasaron la victoria durante meses y la hicieron más costosa en hombres y material que lo que en un principio se había supuesto; pero los éxitos militares republicanos eran puramente defensivos, y en ningún momento interrumpieron la construcción de un nuevo Estado en la parte cada vez mayor del territorio nacional controlada por el general Franco.

La confianza de los nacionalistas era compartida no sólo por sus principales aliados, Italia y Alemania, sino por los hombres de negocios británicos, que eran los extranjeros que más exponían en las exportaciones mineras y agrícolas de España. Mientras que las ideologías y experimentos revolucionarios de la zona republicana provocaban la hostilidad de los hombres de negocios, los jefes nacionalistas no sólo mantuvieron una economía en orden, sino que resultaron ser administradores muy capaces y astutos negociadores en todo lo relacionado con la posición comercial de España.

Hasta casi el final de la guerra, Andalucía fue un feudo particular del general Gonzalo Queipo de Llano. Éste se aseguró en primer lugar de que las instalaciones portuarias de Sevilla, Cádiz, Algeciras, y poco después Huelva, operaran virtualmente sin interrupción. Aceitunas, naranjas, jerez y piritas de hierro eran embarcados hacia Inglaterra y los países del norte de Europa en cantidades normales. El hecho de que la Junta de Burgos no estuviera internacionalmente reconocida liberaba a los militares de las obligaciones gubernamentales existentes el 18 de julio. Burgos fijó un tipo de cambio para la libra esterlina de 42 pesetas. La cotización real en Londres era aproximadamente de 70, y este tipo de cambio abusivo hizo que en casos aislados fuera difícil comprar maquinaria, pero los exportadores lo aceptaron a cambio de las ventajas de la paz laboral, continuidad y buenas relaciones con aquéllos que, estaban convencidos, ganarían la guerra.

Queipo de Llano distribuyó semillas a los cultivadores de cereales y extendió el cultivo de arroz en las marismas. Andalucía alimentaba a Marruecos y a las islas Baleares y contribuía al aprovisionamiento de Castilla, siendo capaz de hacer esto sin implantar el racionamiento o elevar los precios de modo significativo hasta muy entrado el año de 1938. Queipo disfrutaba de una reputación de general «preocupado por las cuestiones sociales». En su charla radiofónica del 4 de marzo de 1937 anunció a los campesinos un sistema de préstamos en el cual habrían de pagar un 5 por ciento anual de interés, en lugar de tener que acudir a tiburones prestamistas (como él los calificó) que cargaban «sólo un 5 por ciento mensual». En varias ocasiones decretó moratorias en el pago de hipotecas y protegió a los arrendatarios contra el desahucio por falta de pago. Por la radio solicitó donativos para comprar tierras en donde establecer a las familias de los necesitados «soldaditos». El dinero fue utilizado para comprar fincas a precios de confiscación a los terratenientes cuyas simpatías repu-

blicanas los convertían en blancos fáciles del chantaje. No se llevaban cuentas. Fueron edificadas unas cuantas aldeas a lo Potemkin, y una cantidad desconocida de dinero en efectivo y de tierras se convirtió en botín del general y sus amigos. Queipo también inició en marzo de 1937 un plan de construcción de viviendas en Sevilla, al que se dio mucha publicidad, y el 19 de junio de 1938 entregó las llaves de las primeras 124 casas terminadas a los propietarios que habían sido elegidos a suertes entre familias trabajadoras o de combatientes. La aristocracia titulada contribuyó con tierras que fueron utilizadas para huertos familiares. De sus más de 35.000 acres que poseía, el duque de Alba entregó 40[374].

El pago de la ayuda ítalo-alemana planteó problemas. Mussolini fue menos exigente que Stalin con la República o que Hitler con los nacionalistas. Como revela el diario de Ciano, Mussolini estaba muy preocupado con su reputación de virilidad, así como con la reputación de Italia por la misma causa. Se sentía orgulloso de verse envuelto en una cruzada anticomunista, del terror sembrado por aviones italianos y del papel desempeñado por su infantería en la campaña del Norte. Soñaba con un nuevo Imperio Romano, con expulsar a Inglaterra del Mediterráneo y a Francia de Túnez y Argelia. A menudo se irritaba por la lentitud y la obstinación de Franco; pero cualesquiera que fueran sus conflictos, estaba comprometido en la causa hasta el final, y su vanidad no le permitía ponerse ahora a discutir de finanzas. En agosto de 1936 se organizó una empresa comercial mixta hispano-italiana, la SAFNI, encargada de manejar las piritas, el aceite de oliva y las lanas que España había de entregar a cambio de equipo militar. Informes de mediados de 1937 indicaron que los italianos estaban recibiendo poco a cambio de las armas entregadas hasta entonces[375]. Los españoles, en cambio, se sintieron fastidiados al saber que el aceite de oliva español era envasado y vendido en los mercados mundiales como aceite italiano.

Tras la conquista del Norte, Italia se hizo cargo de algunas de las enlatadoras de pescado de Gijón. Mussolini amenazaba con reducir las exportaciones italianas a España; pero no llevó a cabo tales amenazas, ni Italia recuperó jamás ninguna proporción apreciable de sus inversiones en la victoria nacionalista.

El pago de la ayuda alemana fue acordado sobre una base estrictamente comercial a los diez días del comienzo de la guerra civil. Una compañía nacional hispano alemana la *HISMA/ROWAK*, fue establecida, encargándose la *HISMA* (Compañía Hispano marroquí de Transportes) de las exportaciones españolas a Alemania y la *ROWAK* (Rohstoffe und Waren Einkaufsgesellschaft) de facilitar las exportaciones alemanas a España. El principal organizador económico de la compañía fue Johannes Bernhardt, el comerciante alemán que ya llevaba tiempo establecido en Tetuán y que fue el que transmitió a Hitler el primer pedido de aviones del general Franco[376]. Las minas del Riff fueron requisadas a sus propietarios franceses e ingleses en agosto de 1936, y en enero de 1937 la HISMA firmó un contrato para entregar a Alemania el 60 por ciento de la producción de Río Tinto a 42 pesetas la libra esterlina, o sea el tipo de cambio establecido por el general Franco. Para las transacciones de efectivo HISMA mantuvo un gran crédito en pesetas, y ROWAK un saldo en marcos en Berlín. La compañía gozaba del monopolio bajo la supervisión de ambos gobiernos. Además del mineral, trataba con trigo, cueros y verduras.

Los alemanes estaban aún más preocupados con las ventajas económicas de la posguerra que con el pago inmediato. Hasta finales de 1938, el general Franco resistió sagazmente a sus esfuerzos, reiterando en todas las conversaciones que el suyo sólo era un Gobierno provisional que no podía disponer del patrimonio nacional. Una ley española en vigor limitaba la participación extranjera en el capital de las empresas españolas al 25 por ciento. En marzo de 1939 concedió un nuevo límite superior, del 40

por ciento, pero sin aceptar ningún compromiso específico. Sin embargo, el 19 de diciembre de 1938, cuando necesitó cantidades masivas de armas para la proyectada ofensiva contra Cataluña, y tras de que Hitler hubiera ganado en Munich su mayor victoria en tiempo de paz, Franco consintió en la creación de MONTANA, una unión de las cinco compañías mineras peninsulares, poseyendo los alemanes en las tres mayores el 15 por ciento del capital. Los alemanes también obtuvieron el control de la Mauretania Mining Company de Tetuán[377].

Con esta importante excepción, el generalísimo mantuvo su independencia económica a través de la guerra. Tras la caída de Bilbao, en junio de 1937, dirigió descaradamente la tajada del león del mineral vizcaíno hacia su tradicional mercado inglés, a pesar del disgusto de los alemanes. Hallando los vehículos americanos más de su gusto que los alemanes o italianos, utilizó sus ganancias en divisas para comprar 1200 camiones italianos, 1800 alemanes y 12.000 Ford, Studebaker y G. M. Nada ilustra mejor el éxito e independencia de la política comercial nacionalista que el hecho de que en 1937 exportaron por valor de 60.000.000 de dólares a la zona de la libra esterlina y de 31.000.000 de dólares a Alemania a través de HISMA, por un total de 91.000.000 de dólares, mientras que el total de las exportaciones de la España no dividida en 1935 había ascendido a sólo 115.000.000 de dólares[378].

Las compañías inglesas que poseían la mayoría de las acciones de las minas de Río Tinto y Peñarroya no presentaron quejas oficiales durante la guerra acerca de los tipos de cambio abusivos o la exportación de casi la mitad del mineral producido a Alemania. Estaban convencidas de que la victoria de Franco serviría a la larga a sus intereses, y su actitud hizo que los diversos intereses franceses, belgas y americanos adoptaran la misma actitud. En sus tratos con las compañías extranjeras, Franco se benefició del respaldo financiero y de las relaciones de ciertos particulares. A

principios de 1937 se informó que Juan March había contribuido con 15.000.000 de libras esterlinas antes del alzamiento, y que asimismo financió buena parte de la ocupación italiana de Mallorca. El exrey Alfonso XIII dio 10.000.000 de dólares, y su hijo don Juan se ofreció al ejército nacionalista. Se dijo que simpatizantes latinoamericanos, ingleses y americanos contribuyeron con un millón de libras esterlinas. Franco se benefició también de la hábil diplomacia del moderado general Jordana, que era más bien probritánico. Pero el generalísimo no dejaba que nadie le suplantara en el primer papel como negociante-diplomático, y muchas personas entendidas a las que disgustaba su régimen político se sintieron orgullosas al ver los duros regateos que sostuvo con los socios comerciales de España.

La economía nacionalista disfrutó también de las ventajas de un estricto orden público y de la cooperación de los hombres de negocios. Las huelgas fueron problemas y los salarios se congelaron, generalmente a niveles parecidos a los del 15 de febrero de 1936, antes de la victoria electoral del Frente Popular y las subsiguientes alzas de salarios de la primavera. Había escasez de tejidos, puesto que la mayoría de las factorías textiles estaban localizadas en Cataluña, y el mantenimiento de los ferrocarriles y la maquinaria sufría por el hecho de que una alta proporción de los trabajadores especializados habían huido a las guerrillas asturianas o a la zona republicana. Pero los pocos observadores que viajaron por ambas zonas (en su mayoría personal consular y periodistas suizos) se fijaron en que las fincas de la España nacionalista estaban cuidadosamente cultivadas, igual que en tiempos de paz, mientras que en las provincias republicanas con frecuencia era evidente el descuido. El costo de la vida subió sólo un 50 por ciento en la zona nacionalista durante la guerra. El tiempo de la grave escasez y de la inflación vendría después[379].

El carácter político del nuevo Estado combinaba los rasgos superficiales del fascismo con los de una dictadura militar intensa-

mente personal y tradicional. Al igual que el Partido Comunista en la España republicana, en la España nacionalista la Falange tuvo un crecimiento fenomenal: de unos 5000 miembros en febrero de 1936 a quizá 60.000 a finales de primavera y 1000.000 en agosto de 1936, hasta más de 2000.000 durante los años de la guerra. Como el Partido Comunista, se sentía predestinada a guiar el desarrollo de sus aliados menos maduros políticamente, y al igual también que el Partido Comunista, carecía de dirigentes de categoría nacional. Aquí terminan, sin embargo, las analogías, porque la Falange no era un partido de técnicos, ni tenía ningún programa coherente y sólido.

En los años 1937-1938 existían al menos cuatro grupos distintos dentro de la Falange. Había el grupo pequeño, pero elocuente, que predicaba una revolución sindicalista, la creación de una economía descentralizada en donde los sindicatos laborales tendrían participación en la dirección de las industrias, y en la cual las grandes fincas rústicas serían distribuidas a los campesinos que de verdad trabajaran la tierra. La mayoría de los intelectuales falangistas, y los asociados supervivientes más cercanos de José Antonio y Ramiro Ledesma, pertenecían a este grupo. El segundo grupo estaba compuesto por un pequeño pero importante núcleo de terroristas reaccionarios, aquéllos que habían intentado asesinar a liberales y diputados socialistas y que habían disparado contra los mítines políticos y cortejos de entierros en la primavera de 1936. Luego había una masa de jóvenes católicos y universitarios, muchos de los cuales habían pertenecido a la JAP antes de la guerra. Finalmente, había una masa de exanarquistas y comunistas, especialmente en Andalucía, donde el demagógico general Queipo de Llano les había impelido a ponerse la camisa azul como «salvavidas», y a los cuales se refería sonriente la sofisticada aristocracia monárquica, como «nuestros rojos» y la «FAIlange».

Estos grupos heterogéneos estaban unidos por una aspiración común: que la guerra civil condujera a una transformación revolucionaria de España. Ninguno de ellos sentía deseos de luchar en defensa de la aristocracia terrateniente o por la restauración de los privilegios clericales. Emocionalmente eran tan antiburgueses y anticapitalistas como anticomunistas. Imitando a los nazis, hablaban de sangre y de raza, pero sin ningún objetivo práctico a la vista. Hablaban también del destino imperial de España, a veces azorando al Gobierno con la publicación de mapas de «Iberia», en los cuales la frontera portuguesa no figuraba, y de vez en cuando servían al Gobierno haciendo gestos amenazadores en dirección a Gibraltar. Los editoriales falangistas recogían las frases de Mussolini acerca de la necesidad de la violencia heroica y de que las naciones viriles se templaban en las guerras. Rechazaban las soluciones esquemáticas e intelectuales y definían la política como el arte de dirigir a los pueblos por medio de la intuición y la improvisación[380].

Los falangistas rendían también un ardiente culto al héroe. Los «camisas viejas» hablaban de José Antonio y de Mussolini en términos personales y emotivos que casi ningún comunista empleaba respecto a Stalin, y mucho menos hacia José Díaz. La masa juvenil, inquieta y no sofisticada, carecía de un dirigente destacado. José Antonio, Onésimo Redondo y Julio Ruiz de Alda habían muerto. Hedilla y Aznar, los jefes de las facciones de principios de 1937, eran mediocridades. Raimundo Fernández Cuesta, que por un intercambio salió de la cárcel de Madrid en octubre de 1937 y fue uno de los primeros compañeros de José Antonio, se convirtió en secretario general de la Falange, pero sólo después de que Serrano Súñer rechazara el puesto, y nunca gozó de gran influencia política[381].

La Falange fue muy útil al Caudillo, precisamente porque no tenía ni un programa coherente ni un dirigente destacado. Su fraseología fascista constituía una válvula de escape para presio-

nes que de otro modo habrían tomado una dirección verdaderamente revolucionaria, y el general Franco comenzó a salpicar sus discursos con los adjetivos nacional-sindicalista, social, unitario, imperial y misionero. No perdía el tiempo en los balcones ni intentaba hipnotizar a las masas con su voz. Prefería que el culto al héroe de la Falange se enfocara hacia el «ausente», y uno de los ritos establecidos de la Falange era empezar sus mítines con la invocación de la presencia mística del fundador gritando a coro: «¡José Antonio, presente!». Cosa muy curiosa para una organización que hablaba tanto de virilidad, los resultados prácticos más importantes de la Falange fueron los que consiguieron Pilar Primo de Rivera, hermana del fundador y jefa de la Sección Femenina, y Mercedes Sanz Bachiller, viuda de Onésimo Redondo, que fueron el alma de una red de centenares de comedores infantiles y organizaron los servicios de enfermeras tanto en el frente como en la retaguardia, así como la distribución de alimentos en los territorios recién conquistados[382].

Mientras tanto, el general Franco gobernaba la España nacionalista a la manera militar, personal y arbitraria y en nada ideológica de los grandes dictadores hispánicos del siglo XIX como Narváez en España, Rosas en la Argentina y Porfirio Díaz en México. Hacía mucho caso de los consejos de Serrano Súñer, cuya influencia dio lugar a numerosos chistes acerca del cuñadismo como forma de gobierno, y sobre él mismo, al que llamaban el cuñadísimo (remedo de lo de generalísimo). Sin embargo, el general Franco no se dejó manejar por nadie en ningún momento, y sin duda éste, en la vida civil de un país democrático, habría tenido una brillante carrera política.

El 3 de enero de 1938 formó su primer Gobierno regular, cuya composición reflejaba bien las varias corrientes políticas que había en la España nacionalista. Había dos monárquicos que habían ocupado cargos importantes antes del advenimiento de la República: el general Gómez Jordana, ministro de Asuntos Ex-

teriores, y Andrés Amado, ministro de Hacienda. Dos carlistas: el conde de Rodezno, como ministro de Justicia, y Pedro Sáinz Rodríguez, como ministro de Educación Nacional. Figuraban dos falangistas: el «camisa vieja» Raimundo Fernández Cuesta como ministro secretario general del Movimiento, y el menos prestigioso González Bueno como ministro de Trabajo. El general Dávila, un incondicional de Franco entre los militares, se convirtió en ministro del Ejército. El general Martínez Anido, que reprimió a la CNT en Barcelona en los primeros años de la década de 1920, y que había sido ministro de la Gobernación durante la dictadura de Primo de Rivera, se convirtió en ministro de Orden Público. Serrano Súñer actuó como ministro de la Gobernación y Juan Antonio Suances, industrial muy próspero, que era amigo de juventud de Franco, pasó a ser ministro de Industria y Comercio. Era un grupo cuidadosamente equilibrado de expertos que representaban a las principales tendencias políticas. Prestaron juramento de sus cargos en el histórico monasterio de las Huelgas, cercano a Burgos, en una ceremonia que Serrano Súñer describió como «íntima, ferviente y devota, como una vigilia en armas», tras lo cual las monjas sirvieron jerez en el claustro, acompañado de las tradicionales obleas hechas con yema de huevo[383]. El momento era solemne y la apariencia apropiada para el generalísimo no era la del fascismo moderno, sino la de los Reyes Católicos.

Este Gobierno elaboró varias leyes fundamentales en el curso del año 1938. El 9 de marzo promulgó el Fuero del Trabajo, disponiendo los salarios y condiciones de trabajo en la industria y protegiendo los contratos de los arrendatarios agrícolas; sin embargo, no se aplicaba al peonaje de los grandes latifundios. En abril el Gobierno creó el Servicio Nacional de la Reforma Económica Social de la Tierra. La República había distribuido alrededor de medio millón de acres a los campesinos antes de la guerra, y a principios de 1938 varios millones adicionales de acres

estaban siendo administrados en forma de granjas cooperativas o colectivas. La tarea del nuevo servicio sería devolver las propiedades a sus antiguos propietarios y sustituir la reforma agraria republicana y revolucionaria por una forma no especificada de «colonización».

El 5 de abril el Estatuto de autonomía de Cataluña fue derogado oficialmente. El 22 de abril se publicó una ley de prensa que la ponía bajo el control del Estado y establecía la censura. El 3 de mayo los jesuitas, a los que se consideraba una orden especialmente española, fueron acogidos de nuevo en España, y sus propiedades, la mayoría de las cuales habían estado en manos de otras órdenes y de corporaciones ficticias desde 1932, les fueron devueltas. El 19 de julio el general Franco se convirtió en «capitán general del Ejército y de la Armada»; hecho que, si bien no aumentaba su autoridad efectiva, era muy significativo, porque en el pasado este título sólo había sido ostentado por el rey. El 15 de diciembre se devolvió la ciudadanía al desterrado rey Alfonso XIII y le fueron devueltas las propiedades de su familia. Estas leyes confirmaron la tendencia hacia un Estado centralizado, una economía controlada por el Gobierno y la restauración de los intereses creados económicos y religiosos de la época anterior a la República. El Fuero del Trabajo era sólo palabrería para contentar a la izquierda de la Falange[384].

Las primeras declaraciones justificando el alzamiento militar no habían hablado para nada de religión; pero la influencia de la Iglesia aumentó rápidamente en la zona nacionalista[385]. A principios de 1937, se ordenó específicamente a los maestros de las escuelas primarias que tuvieran una imagen de la Virgen en sus clases, y todas las aulas de enseñanza secundaria o universitaria deberían tener un crucifijo colgado de la pared. En el frente se celebraba misa regularmente y la asistencia a ella era obligatoria para todos los militares y funcionarios civiles. En Mallorca la Iglesia anunció por Pascua un censo. Los párrocos distribuyeron

formularios en donde había que declarar dónde y cuándo se habían cumplido las obligaciones pascuales. En la Pascua de 1936 sólo había cumplido el 14 por ciento de la población; pero en 1937 cumplió casi todo el mundo[386].

El Gobierno decretó que la enseñanza religiosa sería obligatoria en las escuelas primarias y secundarias, excepto para los marroquíes. Todos los maestros fueron sometidos a un examen para averiguar sus creencias religiosas, y muchas escuelas tuvieron que ser cerradas por falta de maestros con antecedentes religiosos satisfactorios. La Iglesia organizó cursillos de orientación religiosa para todos los maestros sobre el papel del cristianismo en los métodos de enseñanza y la doctrina ética. Estas leyes dieron a la Iglesia un poder que jamás había tenido en tiempos modernos, puesto que incluso bajo la Monarquía era posible a los padres evitar que sus hijos recibieran enseñanza religiosa, y había habido muchos colegios privados y aulas universitarias que eran laicas en la práctica, ya que no en teoría. En marzo de 1938, la ley republicana del divorcio, ya abolida en la práctica, fue oficialmente derogada. Las mujeres de la clase media que supervisaban los hospitales y los comedores también se dedicaron a *recatolizar* a las masas, pues entre ellas estaba extendida la creencia de que los conflictos sociales en España eran principalmente debidos a la falta de caridad cristiana entre los ricos y a la falta de fe entre los pobres.

El primero de julio de 1937, el prestigio de la causa nacionalista se acrecentó mucho por la publicación de la Carta Colectiva de los obispos españoles, redactada por el cardenal Gomá y firmada por todos los prelados, con las significativas excepciones del obispo Múgica, de Vitoria, y del cardenal Vidal i Barraquer, de Tarragona. La jerarquía española adoptó la posición de que el alzamiento del 18 de julio había sido un levantamiento «*civicomilitar*» por parte de los elementos civiles más sanos y mejor calificados de la nación, así como por parte del ejército. La Iglesia ha-

bía sido víctima de la legislación laica, que infringió sus derechos y libertades. Había aconsejado respeto por las autoridades constituidas mientras que tales autoridades permitieron la quema de las iglesias, la sublevación de Cataluña y Asturias y el caos general de la primavera de 1936. La Iglesia no había deseado la guerra; pero estaba agradecida por la protección que los nacionalistas le habían prestado, mientras que en la zona republicana los sacerdotes sufrían el martirio a millares. El cardenal Gomá citó a Santo Tomás en lo referente al derecho legítimo a la defensa propia y se refirió a la «irrefutable» evidencia documental de que el alzamiento se había anticipado a una revolución soviética en España largo tiempo planeada. La Carta Colectiva, publicada poco después de la caída de Bilbao, colocó a la Iglesia oficialmente al lado de los nacionalistas, y en octubre el papa Pío XI envió un nuncio a Salamanca[387].

Las repercusiones diplomáticas de la guerra fueron favorables a los nacionalistas desde el principio. El impulso inicial de Francia de ayudar a la República fue contrarrestado por el temor a Hitler, las presiones británicas y la posibilidad de una guerra civil en la propia Francia. La corriente de ayuda ítalo-alemana no fue ni mucho menos obstaculizada por el plan de No-intervención, y si en el otoño de 1936 Rusia se apresuró a dar a la República una ayuda más o menos equivalente, hay que considerar que la Unión Soviética estaba mucho más lejos de España que las potencias fascistas y no deseaba incurrir abiertamente en el desagrado de las potencias occidentales. A partir de noviembre de 1936 cada vez fue mayor la diferencia entre la ayuda rusa y la que recibían los nacionalistas.

En febrero de 1937 los diplomáticos republicanos insinuaron a Inglaterra y Francia que el Gobierno consideraría la revisión del status de Marruecos si las potencias occidentales no revisaban su política con respecto a la guerra civil. Como Franco dependía en gran manera del reclutamiento de soldados marroquíes, se

sintió indudablemente aliviado cuando el Times de Londres dio la noticia de estas tentativas el 18 de marzo, junto con la indicación de que los británicos habían rechazado la proposición. El 18 de marzo fue también el día en que el ejército republicano capturó a los italianos en retirada una masa de pruebas documentales demostrando que más de 50.000 soldados italianos, pertenecientes a unidades regulares uniformadas, habían llegado a España. Cuando las potencias occidentales se negaron a actuar de acuerdo con esta evidencia, el general Franco pudo estar ya absolutamente seguro de que no se opondrían a su victoria.

Durante algunos meses el comité de No-intervención discutió sobre un territorio neutral y las patrullas marítimas. El 19 de abril de 1937, pusieron en práctica un plan por el cual los navíos británicos y franceses patrullarían las costas nacionalistas y los navíos italianos y alemanes patrullarían (como «neutrales») las costas republicanas. Los buques centinelas estaban autorizados a abordar barcos para «verificar» su destino; pero no lo estaban a registrarlos ni a apoderarse de los cargamentos. También fueron estacionados observadores británicos en las fronteras francesas y portuguesa. No se pensó en la supervisión aérea.

En el curso de abril y mayo unos 35 buques de siete nacionalidades fueron «sometidos a acción beligerante» en la proximidad de puertos republicanos[388]. Ni Burgos ni Valencia habían reconocido la legalidad de estas patrullas, y el Gobierno republicano advirtió que en todo caso se consideraba libre para atacar a los buques de guerra italianos y alemanes en aguas territoriales. A finales de mayo ocurrieron algunos incidentes, siendo el más grave el bombardeo del Deutschland en el puerto de Ibiza el 29 de mayo. El Deutschland se vengó cañoneando la ciudad de Almería el día 31. El 15 de junio Alemania anunció que el Leipzig había sido atacado con torpedos en alta mar. El Gobierno de Valencia unió a su denegación una oferta para que la marina británica investigara el incidente alegado, oferta que rechazaron los ale-

manes, porque en realidad sólo estaban buscando un pretexto plausible para retirarse de las patrullas. El 23 de junio Italia y Alemania anunciaron su retirada, que, según ellas, se había hecho necesaria por la piratería del Gobierno de Valencia. Los portugueses, que habían accedido de mala gana a permitir algunos observadores británicos en su frontera, les retiraron la autorización a finales de junio. El 12 de julio Francia retiró asimismo las facilidades a los observadores en su línea fronteriza.

Las patrullas británicas y francesas no interfirieron en lo más mínimo los embarques a la España nacionalista, y ahora incluso la sombra fastidiosa del control había desaparecido. La conquista del Norte permitió a los nacionalistas concentrar su marina de guerra en el Mediterráneo. El estallido de la guerra chino-japonesa, junto con la pérdida de una docena de cargueros que les fueron hundidos, hizo que los rusos redujeran radicalmente su ayuda[389]. Los franceses temían descontentar a los británicos volviendo a abrir su frontera, aunque, como orgullo diplomático, habían retirado las facilidades a los observadores después de que Portugal lo hubiera hecho.

La República se vio así virtualmente aislada a mediados de 1937 por una combinación de hechos diplomáticos y navales. Mussolini, sin embargo, fue demasiado lejos queriendo aprovecharse de la ventaja. Submarinos «desconocidos» atacaron buques mercantes ingleses y de otros países neutrales en el Mediterráneo durante julio y agosto, así que los británicos, preocupados por esta amenaza inmediata a su dominio de los mares, convocaron una conferencia en Nyon, Suiza, para tratar de la «piratería». Alemania e Italia respondieron a la invitación con la sugestión de que el caso fuera llevado al comité de No-intervención. Pero los británicos indicaron lo vital que era para ellos el asunto, negándose a prestarse al juego. Las invitaciones fueron enviadas el 6 de septiembre y la conferencia se reunió el día 10. En una semana de deliberaciones, Gran Bretaña, Francia, Rusia y varias peque-

ñas potencias mediterráneas convinieron en hundir inmediatamente cualquier submarino que atacara a cualquier buque que no fuera español, y dispusieron una patrulla naval francobritánica por el Mediterráneo occidental. Cesaron los misteriosos torpedeos. Italia, a propia petición, incluso se unió a la nueva patrulla creada en virtud de dichos acuerdos[390].

Este raro ejemplo de firmeza británica con las potencias fascistas no fueron por supuesto, desfavorable a la causa de la España nacionalista. Los buques que estaban siendo atacados no eran los que llevaban suministros en sus puertos, y los acuerdos de Nyon no interrumpieron los embarques italianos y alemanes. Meramente demostraron que los británicos podían reaccionar y reaccionarían ante un desafío naval italiano. Además, aunque los acuerdos de Nyon acabaron con el torpedeo de buques no españoles, Italia continuó los frecuentes bombardeos contra buques de todas las nacionalidades en puertos republicanos o en ruta hacia ellos. En el otoño de 1937 entregó 4 destructores y 2 submarinos a los nacionalistas[391]. En lo sucesivo, el único golpe contra la flota combinada italonacionalista fue el espectacular hundimiento del crucero nacionalista Baleares por destructores republicanos en la noche del 5 de marzo de 1938.

El mayor problema aún sin resolver entre Franco y los británicos era la cuestión de los derechos de beligerancia. Los ingleses se habían negado desde el principio a conceder tales derechos a ninguno de ambos bandos, puesto que tal reconocimiento de la beligerancia les daría derecho para confiscar cargamentos en alta mar. El Gobierno británico quería que los nacionalistas ganaran la guerra, pero también quería conservar el dominio de los mares y evitar incidentes que pudieran amenazar con extender la lucha más allá del territorio español. Tras la caída de Bilbao en junio de 1937, el comercio británico con la España nacionalista aumentó muchísimo, y Franco amenazó con discriminar a los británicos si éstos no le concedían los derechos de beligerancia. También pa-

recía que la guerra iba a acabar pronto y los británicos estaban preocupados por el gran número de italianos que había en la península y por las posibles concesiones militares, navales y comerciales que los nacionalistas habían hecho a Italia.

En el verano de 1937 hablaron de conceder los derechos de beligerancia a cambio de la retirada de las tropas italianas. El 4 de noviembre el comité de No-intervención votó el restablecimiento de las patrullas fronterizas para supervisar la retirada de los voluntarios extranjeros de ambos bandos. Los derechos de beligerancia serían concedidos cuando hubiera sido retirado un número «sustancial». Siguieron diez meses de completa detención acerca de la manera de supervisar la retirada. Mientras tanto, los británicos negociaron un acuerdo naval por su cuenta con Italia, por el cual se les aseguraba que Italia no tenía ambiciones territoriales sobre las islas Baleares y repatriaría todas sus fuerzas en cuanto los nacionalistas hubieran ganado la guerra. El acuerdo fue anunciado el 16 de abril de 1938, al día siguiente de que el general Alonso Vega alcanzara el mar en Vinaroz, aislando así a Cataluña de la zona central republicana. Las cláusulas específicas del tratado comenzarían a aplicarse cuando un número «sustancial» de italianos hubieran sido repatriados, y de nuevo, en abril de 1938, pareció a los británicos que la guerra iba a acabar dentro de poco.

Dado que los aviones italianos y nacionalistas atacaban sin vacilar a todo buque que se dirigiera a puertos republicanos, la continua negativa a conceder los derechos de beligerancia no tenía importancia práctica. El principal inconveniente para el general Franco era que la concesión de los derechos de beligerancia hubiera sido ligada a la retirada de las tropas extranjeras, lo que le obligaría a mostrar que dependía completamente de esas fuerzas. Además, durante 1938 los británicos habían presentado varias reclamaciones por daños sufridos por buques suyos bombardeados. Los nacionalistas apenas si podían ocultar su desdén por

un Gobierno que evidentemente deseaba su victoria, y que a la vez pedía compensaciones por los daños causados a buques británicos que comerciaban con la República.

Así que desde mediados de 1937 la política interna y la situación económica, combinadas con la coyuntura diplomática internacional, evolucionaron de modo muy favorable para el general Franco. De vez en cuando se recibía informes de inquietud en la Andalucía meridional, de actividades guerrilleras en Asturias, de peleas callejeras entre falangistas y carlistas, o entre oficiales españoles e italianos; pero eran incidentes aislados. En la España nacionalista había bajo la superficie casi tantas corrientes ideológicas en conflicto como en la España republicana; pero estaban desorganizadas y carecían de dirigentes. El general Franco era simultáneamente un jefe autoritario de inmenso prestigio personal y un diestro político que manejaba las fuerzas contradictorias de su campo y hacía buen uso de los talentos diplomáticos y administrativos que tenía a su disposición. Los diplomáticos residentes en Valencia o Barcelona frecuentemente no sabían quién era el que dirigía la política y en manos de quién estaba la autoridad. En el caso de Salamanca, los portavoces podían ser Serrano Súñer, el general Jordana o el duque de Alba; pero el oyente sabía siempre que la política era la del general Franco.

La gran debilidad de la España nacionalista era que carecía del apoyo del pueblo. La clase media y la juventud católica se habían sumado a la causa. Verdaderamente, sus instructores alemanes en el campamento para el entrenamiento de oficiales pasaban grandes apuros para refrenar su entusiasmo por las tácticas románticas. Consideraban una cobardía sentarse en una trinchera y estarse callado en vez de gritar insultos y lanzarse inmediatamente a la carga contra el enemigo. En Brunete, Belchite y Teruel demostraron tener el mismo valor y resistencia física que los republicanos, y vertían su sangre con la misma generosidad por una causa a la que honraban. Pero en el otoño de 1937, cuando am-

bos ejércitos alcanzaron probablemente su máximo volumen, el general Franco contaba con 250.000 soldados españoles de esta clase, distribuidos en unidades de milicias carlistas y falangistas, mientras que el ejército republicano totalizaba 600.000 españoles antifascistas. De aquí que Franco dependiera completamente de los 100.000 moros, los 70.000 italianos y los varios millares de alemanes y portugueses[392]. Sólo con tropas extranjeras y la superioridad en armamento podía él de hecho ganar la guerra, a pesar de todos los factores políticos y diplomáticos que favorecían su causa.

Esta situación estrechó sus relaciones con Alemania e Italia. Los gobiernos de estos países habían suprimido la libertad y encerrado a millares de sus oponentes en campos de concentración; pero con todo gozaban de un alto grado de apoyo popular. Jamás habrían tenido que decir, como Franco dijo al embajador alemán en mayo de 1938, que el 40 por ciento de la población «no era de fiar[393]». No estaban enteramente satisfechos de verter sangre y empobrecer su tesoro con una guerra larga y agotadora para imponer un régimen impopular. Los oficiales italianos criticaban abiertamente la feroz represión que tenía lugar en las zonas conquistadas, y los alemanes pensaban que sólo con grandes reformas sociales podrían ganarse la voluntad del pueblo. El embajador Von Faupel, que flirteó con la izquierda falangista, fue reemplazado por Von Stohrer, que era más conservador y correcto, en mayo de 1937. Pero los informes de ambos hombres, así como los de los diplomáticos italianos, coinciden en la impopularidad del régimen. Cuando la batalla de Teruel, Von Stohrer llegó a pensar que las fuerzas oponentes estaban equilibradas y que el tiempo trabajaba a favor de los republicanos. A principios de la primavera de 1938, cuando se habló de una de las muchas propuestas de mediación, escribió que había que impedirla porque cualquier referéndum sobre la futura forma de gobierno sería ganado por la República.

Así que Franco necesitaba renovar constantemente sus peticiones de ayuda tanto en hombres como en armas y renunciar a cualquier concesión diplomática que dependiera de la retirada de las tropas italianas. También se negó a considerar la mediación, de cualquier origen o en cualesquiera circunstancias. Estaba decidido a gozar de una victoria total sobre la República, costara lo que costase. En esto, como en todas sus decisiones políticas y económicas, la voluntad de hierro del generalísimo quería salirse con la suya.

Capítulo 25

ESFUERZOS PARA LIMITAR LOS SUFRIMIENTOS Y LA DESTRUCCIÓN

DESDE el principio de la guerra se hicieron tentativas para limitar los sufrimientos de los no combatientes. Los buques de guerra británicos y franceses embarcaron a varios miles de personas en Barcelona, y el Gobierno de la Generalitat facilitó esa emigración[394]. En Madrid otros miles se refugiaron en las embajadas latinoamericanas, cuyas prácticas diplomáticas reconocían el derecho a acoger refugiados políticos en las legaciones extranjeras. Varias embajadas europeas abrieron asimismo sus puertas, y el Gobierno Giral les permitió que alquilaran otros edificios a fin de que pudieran albergar a los refugiados. En Gibraltar los británicos permitieron en los primeros días que centenares de personas cruzaran la línea, y en los puertos gallegos los capitanes ingleses embarcaron a las pocas personas que pudieron llegar hasta sus barcos[395]. Cuando el ejército nacionalista se acercó a Madrid, el general Franco señaló una zona, que era principalmente el distrito residencial de la clase media, que no sería cañoneada, y esta limitación fue estrictamente observada. Igualmente, a la caída de Bilbao, la artillería nacionalista recibió órdenes de no bombardear el trozo de costa en donde familias no combatientes estaban subiendo a bordo de los buques de rescate, bajo la supervisión de los cónsules extranjeros. En general, ambos bandos respetaron la Cruz Roja en los hospitales. Hubo

algunos casos en que los aviadores bombardearon hospitales; mas parece que lo hicieron por su cuenta. Ninguna nación ha logrado jamás enseñar a todos sus soldados a disparar sólo contra objetivos militares.

La Cruz Roja Internacional ofreció inmediatamente sus servicios para intercambiar no combatientes y rehenes, e intentó que tanto Madrid como Burgos reconocieran las reglas de la convención de La Haya de 1907 y la convención de Ginebra de 1929 respecto al trato debido a los prisioneros. Las reglas de La Haya fueron observadas tanto por las potencias centrales como los aliados durante la primera guerra mundial. Estas reglas no se aplicaban a las guerras civiles, pero la Cruz Roja Internacional consideró el conflicto español como una excelente ocasión para extender los principios humanitarios lo más ampliamente posible. En agosto, el doctor Marcel Junod obtuvo del jefe del Gobierno, Giral, un compromiso verbal para permitir la emigración de mujeres y niños, cosa que en realidad ya estaba ocurriendo en los puertos catalanes y levantinos controlados por el Gobierno. En Burgos, Junod fue recibido por los generales Cabanellas y Mola. Este último expuso brutalmente el principal problema de todas las futuras negociaciones cuando preguntó al doctor cómo podía proponer intercambiar caballeros por rojos. Mola opinaba también que los «rojos» ya habían fusilado a todas las personas que habría merecido la pena salvar, y manifestó que si empezaban a circular rumores referentes a un intercambio general fusilarían a los rehenes que les quedaban.

El 3 de septiembre el Gobierno Giral entregó a la CRI una declaración escrita ofreciendo intercambiar grupos de no combatientes, especialmente mujeres y niños. El 15 de septiembre la Junta de Burgos ofreció igualmente intercambiar mujeres y niños que expresaran su deseo de abandonar la zona nacionalista; pero añadieron un preámbulo en el que se decía que no había ab-

solutamente rehenes militares ni civiles. Este preámbulo hizo difícil suponer que los nacionalistas fueran a negociar en serio.

Sin embargo, a mediados de septiembre el doctor Junod hizo varios viajes entre Burgos y Bilbao. En la capital vasca el jefe de la policía estaba dispuesto a entregar todos los reclusos en el barco prisión que había en el puerto. A cada incursión aérea nacionalista sobre la ciudad había habido linchamientos, y las autoridades vascas estaban ansiosas por hallar una solución que fuera a la vez humana y práctica. El doctor Junod obtuvo autorización de Burgos para el intercambio de 130 mujeres y niños. El 27 de septiembre los vascos embarcaron de noche a 130 de sus prisioneros a bordo del buque británico Exmouth, aprovechando la oscuridad para no llamar la atención. Tras una feliz travesía hasta San Juan de Luz y una cena en su honor en Burgos, el doctor pidió que a cambio fueran enviadas 130 personas a Bilbao. Le dijeron que las mujeres vascas ya habían sido libertadas y no quisieron regresar a Bilbao. Entonces presentó la lista preparada por el Gobierno vasco y recibió una rotunda negativa.

Al cabo de un mes de más esfuerzos, le entregaron una docena de adultos y le prometieron 40 niños que estaban pasando sus vacaciones en Burgos el 18 de julio. Los niños tenían que estar en San Juan de Luz el 25 de octubre y el Exmouth los estaba esperando cuando un telegrama de Burgos les avisó que no llegarían. El doctor Junod embarcó para Bilbao, e intentó explicar la situación entre gritos de «¡Abajo la Cruz Roja!». Prometió hacer un esfuerzo final a través de amigos carlistas y diez días después pudo entregar los cuarenta niños. El incidente terminó justamente cuando las fuerzas del general Mola llegaron a las puertas de Madrid, y esta historia, rápidamente conocida a través de la zona republicana, puede que contribuyera a afirmar la lealtad de la clase media para con la República[396].

Desde principios de noviembre de 1936 hasta finales de febrero de 1937, las circunstancias no fueron propicias para la nego-

ciación de intercambios de no combatientes. La República luchaba por sobrevivir y los nacionalistas anticipaban una victoria rápida y total. Sin embargo, tras la batalla del Jarama, era evidente que la guerra continuaría durante muchos meses, y también que cualquier acuerdo de intercambios aceptable debería cubrir los prisioneros de guerra así como a los civiles. En marzo de 1937 el doctor Junod pidió a Largo Caballero que permitiera el intercambio de militares prisioneros, en particular de los aviadores, que eran odiados por la población civil de ambas zonas y que regularmente eran condenados a muerte y a menudo linchados. Reprochando a la CRI su fracaso en lograr de Burgos la igualdad en los intercambios en el pasado, el jefe del Gobierno se negó a comprometerse sobre política general, pero concedió un aplazamiento de dos semanas a varias ejecuciones pendientes. Mientras tanto, el doctor Junod esperaba abrir nuevas negociaciones con los nacionalistas a través de los buenos oficios de Ramón Serrano Súñer, a quien él había ayudado a escapar de Madrid.

Siguieron dieciocho meses de penoso regateo, dado que la gran diferencia de criterios entre los republicanos y los nacionalistas permitía tan sólo lograr acuerdos mínimos. Una fuente de incomprensiones inevitable era el diferente trato legal de los combatientes prisioneros. El 9 de abril de 1937 el Gobierno de Largo Caballero decretó que en lo sucesivo los prisioneros no serían sometidos a consejo de guerra, excepto por orden específica del Gabinete. Mientras Largo Caballero ocupó el cargo, sólo dio dos órdenes de esta clase, y Negrín, siendo jefe del Gobierno, sólo dio unas cuantas docenas de ellas. Sin embargo, en la zona nacionalista, los prisioneros de guerra eran sometidos regularmente a tribunales marciales, y un considerable número de ellos eran condenados a muerte, mientras que una buena proporción recibían sentencias a veinte y treinta años de prisión. Cuando ambos gobiernos regatearon acerca de sus listas de cautivos, los nacio-

nalistas insistieron en que no podían cambiar hombres convictos de graves delitos por simples detenidos[397]. En este punto la diferencia de actitudes era insalvable, y efectivamente impidió cualquier intercambio masivo de prisioneros.

A mediados de diciembre de 1937 parecía que 200 prisioneros retenidos en Barcelona iban a ser canjeados por 200 vascos capturados durante la conquista del Norte. Los nacionalistas habían redactado ambas listas y al comunicarlas a la CRI insistieron en que fueran aceptadas sin ningún cambio. Los que ellos ofrecían eran milicianos sin ninguna especialidad profesional, y los que pedían eran oficiales de carrera, sobre todo especialistas de artillería. El Gobierno republicano se mostraba reacio a aceptar un intercambio en el cual el valor militar de ambas listas era tan desigual, y en las que además el enemigo demandaba la prerrogativa de nombrar a los que habían de ser intercambiados de ambos bandos. Mientras tanto, el 27 de diciembre, las autoridades de Valencia recibieron un telegrama de la delegación vasca en Bayona informando que unos 140 milicianos vascos recientemente capturados habían sido fusilados. El 29 de diciembre el Gobierno republicano se mostró de acuerdo para comenzar un intercambio de 25 hombres de cada lista. Al mismo tiempo, informaron a la CRI que mientras durasen los intercambios suspenderían todas las ejecuciones pendientes, con tal de que los nacionalistas hicieran lo mismo. Las autoridades de Salamanca no respondieron directamente a esta proposición, pero en las semanas siguientes fueron hechos otros 16 intercambios. El 28 de enero de 1938 los nacionalistas informaron a la CRI que estaban dispuestos a suspender las penas de muerte contra los restantes 159 (200 menos 41) milicianos vascos y contra los prisioneros últimamente capturados en Teruel y el frente de Aragón. Esta concesión, que cubría una proporción muy limitada de los prisioneros en manos nacionalistas, no era suficiente a ojos del Gobierno republicano, y de estas dos listas no se hicieron más intercambios[398].

Durante toda la guerra hubo varios factores generales que limitaron la efectividad de los esfuerzos de la CRI. Los delegados explicaban incansablemente que ellos no tenían en cuenta la culpabilidad de los prisioneros, sino el trato que se les diera hasta el momento de su liberación o ejecución, y que cualquier información que consiguieran acerca de las prisiones seguiría siendo absolutamente confidencial, ya que verdaderamente la falta de publicidad era una condición fundamental de su tarea. En la zona republicana las autoridades estaban dispuestas a reconocer los principios humanitarios, pero su orgullo les impedía reconocer la existencia de prisiones incontroladas, como las del Partido Comunista. Todos los delegados, de acuerdo con la constitución de la CRI, eran de nacionalidad suiza. La organización era completamente autónoma, pero los republicanos no podían vencer por completo una cierta desconfianza, basada en el hecho de que el Gobierno suizo, así como la mayoría de la prensa suiza, parecía anticipar con satisfacción la victoria final de los generales.

En la zona nacionalista los delegados tenían que enfrentarse con fuertes prejuicios por el hecho de que eran protestantes. El representante en Burgos, elegido por su conocido conservadurismo, y por la amistad de sus tiempos de colegial que tenía con varias personalidades monárquicas, nunca logró obtener una entrevista con el cardenal Gomá, por mucho que lo intentó. La aristocracia en general tomaba a mal la mera presencia de la Cruz Roja, presencia que implicaba que podía haber circunstancias que necesitaban ser comprobadas por gente de fuera. Los delegados no se alejaban mucho de sus oficinas para evitar que los acusaran de espionaje, y muchas autoridades militares estaban convencidas de que la Cruz Roja era tan «roja» como el enemigo. Ambos bandos exigían garantías de que los combatientes intercambiados no volverían a luchar, garantías que, por supuesto, la CRI no estaba en condiciones de dar.

Aunque las negociaciones comenzaron en abril de 1937, los primeros cambios reales no se hicieron hasta octubre. Casi todos los acuerdos implicaban tan sólo individuos o grupos pequeños, y hacia el final de la guerra cada bando sólo había entregado a la CRI 647 prisioneros[399]. A finales de 1936 los republicanos permitieron a la CRI ayudar a las viudas de hombres que habían sido asesinados en la zona del Frente Popular en las primeras semanas de la guerra, y mientras duró el conflicto facilitaron la emigración de no combatientes. Ambos bandos tampoco aceptaron las reglas de La Haya y Ginebra concernientes al intercambio de personal médico, visitas regulares a las prisiones y la entrega a la CRI de la lista completa de prisioneros. En cambio, ambos bandos permitieron a la CRI que estableciera un servicio de mensajes por el cual las familias podían saber si sus hijos o hermanos seguían estando vivos. Unos tres millones de peticiones de información y dos millones de respuestas fueron transmitidas vía Ginebra en el curso de la guerra. Un aspecto final e infortunado de los esfuerzos de la CRI, desde el punto de vista de la opinión pública española, era que la gran mayoría de los intercambiados eran extranjeros: aviadores italianos y alemanes, marinos y pilotos rusos, y miembros de las brigadas internacionales. Ambos bandos deseaban evitar las complicaciones innecesarias con las potencias extranjeras, así que los prisioneros de otras nacionalidades eran mejor tratados que los españoles.

La presencia de miles de refugiados en las embajadas de Madrid planteó uno de los problemas humanos y políticos más difíciles de la guerra. El 18 de julio de 1936 la mayoría de los embajadores acreditados ante la República española estaban veraneando en San Sebastián o de permiso en sus respectivos países. El decano del cuerpo diplomático en Madrid, en aquella época, era el embajador chileno, Aurelio Núñez Morgado. El derecho a acoger refugiados políticos en las embajadas era una vieja costumbre respetada en la América latina, y esta práctica fue específicamen-

te reafirmada en las conferencias interamericanas de La Habana en 1928 y de Montevideo en 1933. El señor Núñez se dedicó inmediatamente a formar una organización de emergencia del cuerpo diplomático, la cual, bajo su presidencia, se reunió varias veces a la semana durante los meses de agosto y septiembre[400].

La situación en Madrid fue virtualmente única en la historia diplomática. El derecho de asilo tal como se practicaba en la América latina se sobreentendía que se aplicaba a jefes de gobiernos derribados por revoluciones o personalidades prominentes que pertenecieran a partidos políticos perseguidos. Ninguna de las personas que buscó refugio en las embajadas de Madrid eran dirigentes de un régimen derribado, y sólo una pequeña minoría de ellos eran figuras destacadas de los partidos antigubernamentales. En cuanto a los diplomáticos, sustentaban una gran variedad de criterios con referencia a los derechos e injusticias de la guerra civil. Núñez, y los embajadores peruano y cubano, favorecían claramente a los insurgentes y sostenían que en la zona del Frente Popular estaba ocurriendo una verdadera revolución comunista. Los embajadores de la República Argentina y El Salvador sostenían puntos de vista más moderados y estaban dispuestos a conceder asilo político hasta el límite físico del recinto de sus embajadas. Pero cuando Núñez habló de que el cuerpo diplomático se retirara de Madrid en bloque, adoptaron la posición de que, basándose en consideraciones humanitarias y políticas, deberían permanecer en Madrid para apuntalar la autoridad del Gobierno legítimo, todavía internacionalmente reconocido. El embajador mexicano dijo a sus colegas que su país había sufrido una revolución similar, que su embajada concedería el asilo, pero que deseaba la victoria de la República.

Hubo amplio acuerdo entre todos los diplomáticos latinoamericanos y europeos para hacer todo lo que estuviera en sus manos, a fin de ayudar a las víctimas de la persecución religiosa y política. Pero llegar a tal acuerdo suponía vencer muchas dificul-

tades legales. La práctica diplomática europea contemporánea no incluía el derecho de asilo en las embajadas para los oponentes de un Gobierno reconocido. Tanto los cónsules británicos como norteamericanos tenían instrucciones de no abrir sus embajadas a refugiados de nacionalidad española, basándose en que tal acción supondría una intervención en los asuntos internos de una nación amiga. El embajador ruso, que llegó a Madrid a finales de agosto, se negó a asistir a las reuniones. La Unión Soviética no reconocía el derecho de asilo en las embajadas ni el derecho del embajador chileno a hablar en nombre del cuerpo diplomático. Se presentaron graves cuestiones por el hundimiento temporal de la autoridad del Gobierno. ¿Deberían reconocer los diplomáticos los documentos de identificación y los salvoconductos firmados por la delegación del Gobierno vasco autónomo? La mayoría estaban dispuestos a reconocerlos. ¿Deberían tratar con los comités de milicias? El embajador peruano mostró su asombro porque el cónsul británico lo hubiera hecho. ¿Debería aplicarse el principio de extraterritorialidad a los apartamientos habitados por los cónsules y los secretarios de embajada, así como a los locales alquilados por los embajadores? Los diplomáticos más acentuadamente partidarios de los insurgentes habrían querido que se afirmara tal pretensión; pero el cuerpo diplomático, en conjunto, no accedió.

La prensa y la radio de Madrid fueron hostiles a las embajadas desde el principio, alegando (lo cual no era cierto) que en ellas buscaban refugio sólo fascistas. Entre otros, la esposa del presidente Azaña, las hijas de Indalecio Prieto, y las familias de numerosos diputados republicanos de los partidos de derechas e izquierdas, salieron de España gracias a la embajada argentina en el crucero argentino 25 de Mayo. Augusto Barcia, ministro de Asuntos Exteriores del Gobierno Giral, proporcionó automóviles del Gobierno en varias ocasiones para transportar personas amenazadas a la embajada chilena. Cuando en septiembre llega-

ron a Ginebra rumores de que las embajadas podrían verse obligadas a cerrar sus oficinas en Madrid, el delegado español Ossorio y Gallardo declaró que el Gobierno republicano reconocía el derecho de asilo y garantizaba las vidas de los refugiados en las embajadas. A mediados de septiembre el nuevo jefe del Gobierno, Largo Caballero, rogó en privado al embajador Núñez que protegiera a las sobrinas de los duques de Veragua (descendientes de Cristóbal Colón, que habían sido asesinados en Madrid[401]). Largo Caballero acogió también con entusiasmo la oferta del embajador chileno de visitar Toledo en un esfuerzo para que fueran evacuadas las mujeres y niños del Alcázar.

Sin embargo, el 13 de octubre, Álvarez del Vayo, ministro de Asuntos Exteriores, envió a Núñez una nota referente al derecho de asilo, en la cual aludía a la presencia de «delincuentes políticos» en las embajadas. A partir de aquel día, la cuestión de las embajadas se complicó con la fuerte antipatía que mutuamente se profesaban ambos hombres[402]. Parecía que el Gobierno actuaba con ganas de fastidiar; pero la situación era extremadamente compleja. Por una parte había los impulsos genuinamente humanos de los gobiernos Giral y Largo Caballero, y su disposición, dentro de ciertos límites, a utilizar las embajadas para proteger de los anarquistas a personas inocentes, en el otoño de 1936, y de los comunistas a principios de 1937. Pero la actitud claramente pronacionalista del embajador Núñez constituía una constante provocación hacia el Gobierno de Madrid. Además, un cierto número de embajadas europeas, especialmente las de Turquía, Polonia, Finlandia, Holanda, Noruega y Bélgica, extendieron mucho sus facilidades alquilando edificios extra.

Se abusó mucho de la letra y el espíritu del asilo político. Las legaciones peruana y cubana eran conocidos centros de espionaje, aunque intocables gracias a la inmunidad diplomática[403]. Los encargados de negocios holandés y noruego eran ciudadanos alemanes, que estaban en condiciones de servir a Alemania en la Es-

paña republicana después de que los alemanes hubieran reconocido al Gobierno de Franco en noviembre de 1936. De noche se hacían disparos desde los edificios de las embajadas. Los alimentos y los artículos de lujo entraban sin pagar impuestos. En 1937 los asilados comían mucho mejor que la mayoría de los madrileños, y algunos de ellos se dedicaron a un lucrativo mercado negro. Habiéndose restablecido el orden en las calles, los amigos y las familias se podían visitar con toda libertad, trayendo informes de valor militar que luego podían ser enviados a Salamanca en la valija diplomática, o radiados con impunidad desde los transmisores instalados en las legaciones[404].

Los espectaculares abusos no anularon los esfuerzos genuinamente humanitarios. Entre los refugiados en la embajada chilena había muchos, conservadores completamente honorables, como el ingeniero Manuel Lorenzo Pardo. El hospital alemán, cuando fue puesto bajo la bandera chilena, prestó servicios esenciales a niños y ancianos sin distinciones políticas. El embajador dominicano acogía a reaccionarios, pero organizó también un hogar para niños republicanos evacuados de los pueblos o separados de sus familias por la guerra[405]. El encargado de negocios holandés, a pesar de sus relaciones con los nazis, ayudó a la delegación vasca en su trabajo a favor de los republicanos moderados y de las víctimas no políticas de la persecución de las chekas. Pero las evidentes simpatías profascistas de los diplomáticos más activos habrían acabado con la paciencia de cualquier régimen democrático. Al mismo tiempo, el Gobierno de Madrid no podía obtener absolutamente ninguna contrapartida por su propia política de tolerancia. Los consulados extranjeros en Sevilla y La Coruña estaban prohibidos a los refugiados, y el Gobierno de Burgos se negaba a reconocer incluso su misma existencia.

El Gobierno de Largo Caballero quería que las embajadas se vaciaran lo más posible. La mayor dificultad, al igual que con los intercambios de prisioneros, era la cuestión de garantizar que los

refugiados liberados no volverían a tomar las armas contra la República. Álvarez del Vayo negoció acuerdos separados con Francia, Holanda, Turquía, Checoslovaquia y Cuba, por los cuales España aprobaba la evacuación de los refugiados, mientras que los gobiernos contratantes se comprometían a impedir que aquellas personas emigraran luego a la España nacionalista[406]. Bajo tales acuerdos, unas 1000 personas en edad militar abandonaron la España republicana a principios de 1937. La mayoría de los gobiernos honraron sus compromisos, pero los belgas soltaron a su contingente incondicionalmente tan pronto como pisó suelo francés, retrasando con esto considerablemente los arreglos de nuevas evacuaciones[407].

Entre los refugiados en las legaciones se producían acalorados debates acerca de la conveniencia de marchar, especialmente entre los meses de noviembre de 1936 a abril de 1937, período en el cual pareció razonable suponer que el ejército nacionalista entraría en Madrid en breve[408]. ¿Para qué arriesgarse a un viaje desagradable y a un exilio temporal, si la guerra estaba a punto de terminar? Sin embargo, para muchos oficiales era importante que el ejército victorioso no los hallase en las embajadas. Las autoridades de Burgos no ocultaban su menosprecio por los militares que se habían refugiado en las embajadas en vez de luchar en el cuartel de la Montaña o pasarse a las líneas insurgentes en los primeros días de la guerra. Tales oficiales podían rehabilitarse parcialmente abandonando la España republicana y ofreciendo a Burgos sus servicios; mas para hacer eso tendrían que faltar deliberadamente a la promesa hecha a las autoridades republicanas para que éstas les dejaran marchar.

La cuestión jamás fue resuelta del todo. En conjunto, de 15.000 a 20.000 personas buscaron refugio en un momento u otro, la mayoría de ellas en los tres primeros meses de la guerra. El Gobierno anunció a finales de junio de 1937 que 4000 personas habían sido evacuadas de las embajadas; pero esta cifra es sólo

una mínima indicación, ya que no se llevaban registros de entradas y salidas. Al final de la guerra, el total de refugiados era de unas 3000 personas[409]. La publicidad que se dio a la cuestión de las embajadas fue en general desfavorable a la República. El origen del problema era un constante recordatorio de la impotencia del Gobierno en las primeras semanas de la guerra. Las cartas y entrevistas en los periódicos, ampliamente publicadas en Europa y la América latina por los refugiados, naturalmente dieron énfasis a la penosa situación en el interior de Madrid y reforzaron la preferencia de los conservadores por los nacionalistas, como «fuerzas del orden».

Era evidente para todos que cuanto más durara la guerra, más dependerían sus resultados de la intervención internacional, y destruiría más la fibra moral y física de España. Casi todos los dirigentes republicanos confiaron en un momento u otro en la mediación como un medio para acabar la lucha. El socialista moderado Julián Besteiro adoptó una posición pacifista, prácticamente desde el principio. El presidente Azaña pasó de la desesperación más negra de los primeros meses de la guerra a una posición de optimismo moderado cuando, a principios de 1937, la autoridad legal iba siendo reforzada y el ejército republicano estaba respondiendo favorablemente. Pero jamás creyó ni por un instante que la República pudiera ganar la guerra. Se debería hacer todo lo posible para utilizar las limitadas posibilidades de regateo de la República a fin de lograr una paz negociada[410].

Con este fin en el ánimo, pidió a Besteiro que representara a España en la coronación de Jorge VI en mayo de 1937. La opinión mundial estaba inquieta por la evidencia del envío masivo de tropas italianas a España y el comité de No-intervención había estado discutiendo propuestas para la retirada de los «voluntarios» extranjeros de ambos bandos. Azaña vio en esas propuestas la mejor oportunidad para una tregua y una mediación de paz. Como presidente, no tenía autoridad constitucional para

tomar tal iniciativa; pero como muchos estadistas, antes y después, estaba dispuesto a violar la letra de la ley por una causa vital. Más que cualquiera otra de las personalidades del Gobierno sentía como algo personal el peso de la miseria y destrucción ocasionadas por la guerra. No tenía confianza en Álvarez del Vayo como ministro de Asuntos Exteriores, y aprovechó esta oportunidad de ponerse en contacto con el Foreign Office a través de Besteiro.

Él, así como el jefe del Gobierno, fueron al aeropuerto de Valencia para despedir al enviado especial a Londres. Dado que Besteiro y Largo Caballero no se hablaban, a nadie pareció extraño que Azaña se retirara para hablar privadamente con don Julián. Azaña pidió a Besteiro que insistiera en la cuestión de la retirada de los voluntarios, y que sondeara la buena voluntad de los ingleses para mediar. Aparentemente dio a Besteiro la impresión de que hablaba tanto en nombre del jefe del Gobierno como de sí mismo. Cuando Besteiro regresó, Largo Caballero había sido reemplazado por Juan Negrín. Los resultados específicos de sus conversaciones en Londres no están claros, porque el nuevo primer ministro no quiso oír el informe. Debido a la actuación sigilosa de Azaña, la desavenencia en el Gobierno era completa. Puesto que Largo Caballero no supo nada del aspecto diplomático del viaje de Besteiro, y dado que tales iniciativas eran constitucionalmente prerrogativa del primer ministro, Negrín, quien intentaba intensificar el esfuerzo de guerra, no se propuso empezar tratando con un «derrotista» que equivocadamente creía que tenía autoridad para buscar una mediación[411].

Además, a partir de mediados de 1937, las personalidades republicanas no habían dejado de hacer tentativas. Prieto, que tenía muchos amigos entre los vascos a ambos lados de las líneas, y con múltiples contactos personales en San Juan de Luz entre los diplomáticos, trató varias veces de sondear un posible deseo de negociación. Sin embargo, en contraste con Besteiro, se daba

cuenta de que no tenía poderes para hacer proposiciones, y no trató de hacerlas; pero sabía que en la España nacionalista, bajo la superficie, no había unanimidad, y que era difícil a todo aquél que tuviera sentimientos humanitarios creer que el general Franco sacrificaría unas docenas de millares de vidas más antes que aceptar toda forma de compromiso[412].

Los representantes de la Generalitat en Francia y Bélgica parece ser que también buscaron la mediación. Es imposible saber exactamente qué es lo que hicieron, dado que todo tomó la forma de insinuaciones, tentativas, tonos de voz, y puesto que ni ellos ni sus interlocutores podían cometer el error de considerarlos autorizados para negociar. Todas estas actividades contribuyeron a crear una sensación de debilidad y falta de autoridad estructurada en la República[413]. En Salamanca, nadie hizo la menor insinuación acerca de una negociación, y el contraste en espíritu y autoridad era claro para todos los que quisieran verlo.

Sin embargo, aunque los republicanos hubieran sido totalmente discretos en sus esfuerzos diplomáticos, es muy dudoso que hubieran logrado una mediación. En numerosas ocasiones, los diplomáticos simpatizantes de los nacionalistas mencionaron esta posibilidad en Salamanca. El general Gómez Jordana les daba siempre la misma y firme réplica: no había ni que pensar en una mediación, porque si la República no era aplastada totalmente, la guerra civil se reanudaría al cabo de pocos años. Si Inglaterra, con su dominio de los mares y su posición como principal cliente del comercio de exportación español, hubiera deseado ejercer presión para que se llegara a una paz de compromiso, tal presión habría alterado la postura nacionalista. Pero el Gobierno Chamberlain dedicaba todos sus esfuerzos a apaciguar a Hitler y Mussolini. La dimisión de Anthony Eden como encargado del Foreign Office en febrero de 1938 indicaba, si es que hacían falta pruebas, que Chamberlain prefería la victoria del general Franco

como formando parte de su entendimiento con Mussolini en el Mediterráneo.

Durante toda la guerra los no combatientes estuvieron retirándose constantemente ante el avance de los ejércitos y pasando las líneas en los puntos menos guarnecidos. Los que se pasaban a la zona nacionalista eran en general personas de medios, y su número no era muy grande. También se trasladaban a una zona en donde la situación alimenticia y la organización general económica eran muy superiores, así que su llegada creaba pocos problemas. Sin embargo, decenas de miles de personas, la mayoría carentes de medios económicos, huyeron a la zona republicana, en donde la situación alimenticia empeoraba.

Durante el otoño de 1936 millares de campesinos de Extremadura y Andalucía invadieron Madrid. Vivían en las estaciones del «metro», en los campos de fútbol, en el parque del Retiro y en los palacios abandonados. Los hombres se incorporaban al ejército, y el Gobierno, después de noviembre, trató de evacuar sus familias hacia la retaguardia; pero éstas prefirieron quedarse, especialmente porque así podían beneficiarse, aunque ligeramente, del racionamiento militar. Después de la batalla del Jarama, el perímetro estricto de Madrid permaneció en calma. El ejército organizó cursillos literarios en las trincheras, y los hijos de los campesinos podían unirse con sus padres mientras recibían los rudimentos de una educación. Los elementos civiles de más edad se resistían también a la idea de la evacuación, por razones diferentes. Muchos de ellos esperaban que los nacionalistas entraran pronto en Madrid, y ya habían visto con qué frecuencia los departamentos vacíos eran saqueados. Adoptaron una actitud puramente fatalista hacia los bombardeos y cañoneos, que en todo caso eran poco frecuentes después del primer ataque general contra la ciudad. En su conjunto, la población de Madrid aumentó más del 50 por ciento durante la guerra.

En agosto de 1936, los archiveros y bibliotecarios de la capital tomaron la iniciativa para salvar los tesoros de arte del país amenazados de destrucción. Bajo la dirección nominal del Ministerio de Instrucción Pública, formaron la Junta Delegada de Incautación, Protección y Conservación del Tesoro Artístico Nacional. Con la ayuda de los elementos más cultos de la UGT y la CNT, imprimieron folletos ilustrados explicando a los refugiados y a los soldados el valor de los objetos de arte en medio de los cuales vivían ahora en los palacios. Fueron a los conventos abandonados y saqueados con personal de mudanzas para trasladar todos los objetos valiosos al Prado, y salvaron más de un edificio de ser saqueado con el simple medio de colocar un letrero diciendo «Requisado para uso del Gobierno». En los palacios impidieron que las familias refugiadas siguieran cocinando en los suelos de parquet, y les pidieron su ayuda para amontonar las obras de arte en un par de habitaciones. Luego colocaron sobre las puertas un gran letrero de incautado, estampado como si fuera un pasaporte con los sellos de una docena de sindicatos, comités y partidos políticos del Frente Popular. Cuando había camiones disponibles, las obras de arte eran llevadas al Museo del Prado; pero hubo varios casos en que cuando el propietario del palacio regresó en 1939, se encontró con que la insignia de la Junta aún protegía las pinturas allá donde habían sido apresuradamente almacenadas a finales de 1936[414].

La ciudad de Barcelona había sido la Meca de los campesinos españoles sin tierra, ya desde los comienzos de la industrialización en el siglo XIX. Las provincias de Alicante, Murcia y Almería habían proporcionado tradicionalmente gran número de peones a Cataluña. La guerra y el bloqueo desorganizaron rápidamente su siempre precaria situación económica, y familias enteras emigraron al Norte. En enero de 1937 los representantes de los cuáqueros estimaron que por las calles de Barcelona vagaban unos 25.000 niños; hacia octubre de 1937 había unos 500.000

refugiados en la capital catalana. Al final de la guerra ya ascendían a 800.000, incluyendo un contingente de más de 50.000 refugiados del Norte que habían sido evacuados a través de Francia, en parte por su propia elección y en parte a petición del Gobierno francés, siendo repatriados por la frontera catalana. Tras la ofensiva nacionalista de Aragón en la primavera de 1938, más de un millón de personas sin hogar atestaron las provincias de Tarragona, Barcelona y Gerona. Es imposible dar siquiera un número aproximado de cuántas personas en semejantes condiciones vagaban en la zona que va de Valencia a Almería. A principios de 1938 había también unos 90.000 refugiados en la España nacionalista, muchos de ellos niños vascos y asturianos separados de sus familias. La ocupación de la costa Norte a finales de 1937, junto con la ofensiva de Aragón, añadieron un número enorme de personas angustiadas a la población de la zona nacionalista. Por primera vez se notó la escasez de víveres, y el Auxilio Social fue incapaz de atender debidamente a la situación en Lérida y en la costa mediterránea.

En Barcelona los cuáqueros establecieron cantinas que eran servidas por mujeres refugiadas. En marzo de 1937 distribuyeron leche de acuerdo con las siguientes raciones teóricas: un litro tres veces por semana a los niños de hasta nueve meses de edad; un litro y tres cuartos de litro diarios para los de nueve meses a seis años. Pero la mayoría de las veces no había leche disponible para los que tenían más de dos años de edad. Dos veces por semana se distribuía media libra de azúcar y un paquete de bizcochos y a veces se podía disponer de aceite de hígado de bacalao por prescripción médica. En Murcia, donde hallaron las peores condiciones de hacinamiento y desnutrición, y en donde las dificultades de trabajo eran infinitamente más grandes que en Cataluña, dieron de comer a miles de niños a base de pan y cacao, y en ocasiones algunas ciruelas para los que tenían menos de seis años.

Durante el primer año de la guerra la población de Barcelona dio a los refugiados una simpática bienvenida. Una organización de ayuda a los niños, Pro Infancia Obrera, en la que figuraban representantes de todos los partidos del Frente Popular, ayudó a los cuáqueros a situar niños en hogares, y como pronto esto resultara impracticable, a organizar campamentos en los estadios y en los espacios abiertos de los grupos escolares de los muchos suburbios industriales de Barcelona. Hasta donde fue posible mantuvieron la instrucción escolar y enseñaron oficios manuales a los adolescentes. En marzo de 1938 los nacionalistas se apoderaron de las centrales eléctricas de los Pirineos de cuya energía dependían la industria y los servicios públicos de Cataluña. Ante la falta de transportes, y con la cada vez más aguda escasez de víveres, la gente hubo de abandonar todas las otras actividades a la imprescindible de la búsqueda de alimentos y dejó de ejercer toda actividad física que no fuera la de recorrer los kilómetros necesarios para obtener un mínimo de alimentación[415].

Pronto aparecieron entre los refugiados la sarna, sintomática de las insalubres condiciones de vida, y la pelagra, debida a la carencia de vitaminas. La población autóctona dispuso de la mayoría de los alimentos hasta principios de 1938, pero hacia el verano no había manera de obtener carne y grasas como no fuera en el mercado negro, y normalmente las personas acomodadas se consideraban afortunadas si tenían pan y lentejas en cantidad razonable y de vez en cuando algún huevo de la granja del primo del portero. Las personas de más de cincuenta años que hasta entonces habían gozado de buena salud podían por lo general proseguir las actividades normales. Los niños de la ciudad enfermaban más rápidamente que sus primos de los pueblos. Uno de los primeros síntomas dramáticos de la subalimentación era el fallo de las piernas de una persona, e incidentes de esta clase eran cosa corriente en las colas del pan y entre los obreros de las fábricas que tenían que recorrer largas distancias para llegar a sus talleres.

Según los informes de los hospitales de Barcelona, los fallecimientos por desnutrición, en su mayoría de niños y ancianos, se duplicaron con largueza de 1936 a 1937, y volvieron a duplicarse en 1938. Dichas estadísticas no cuentan por entero la historia, porque se refieren principalmente a la población local, que era la que acudía en primer lugar para ser tratada en los hospitales[416].

Los problemas de los sufrimientos de los civiles jamás pudieron ser separados de los problemas propios de la guerra en sí. Varios gobiernos y sociedades eclesiásticas y caritativas alzaron sus voces contra los bombardeos de ciudades como Madrid, Bilbao, Barcelona y Valencia. Las autoridades nacionalistas replicaban con la lista de los objetivos militares situados en dichas ciudades, y enumerando las incursiones llevadas por las fuerzas republicanas. La mayoría de éstas produjeron pocas bajas. El peligro venía más de los cascotes de los proyectiles antiaéreos que caían al suelo que de las bombas lanzadas. Sin embargo, hubo una docena de incursiones sobre las principales ciudades nacionalistas que costaron cada una docenas de muertos o quizá más, y en estricta lógica no había distinción moral entre las incursiones de un bando y las del otro[417].

Los británicos objetaron repetidamente al bloqueo impuesto a los buques que llevaban alimentos; los nacionalistas replicaban que la República había enviado a Rusia las reservas españolas de oro para comprar armas, y que la entrada de buques con víveres en los puertos republicanos constituiría, en efecto, una ayuda al esfuerzo de guerra[418]. Sólo en febrero de 1939, cuando ya se veía claramente que la guerra iba a terminar con la rendición incondicional de la República, ordenó el general Franco a su marina de guerra que permitiera que barcos con víveres penetraran en los puertos levantinos.

En la España nacionalista, los cuáqueros, como los delegados de la Cruz Roja, eran sospechosos por ser protestantes. La mayoría de ellos simpatizaban con la República, y sus ideas políticas

eran verdaderamente aquéllas que la prensa falangista estigmatizaba como la «Internacional rojo-masónica». Se les permitió ayudar en el socorro de Oviedo y Gijón a finales de 1937, y a distribuir provisiones en Zaragoza, Teruel y Lérida en la primavera de 1938; pero jamás pudieron establecer relaciones de confianza y cordialidad con Auxilio Social. Médicos latinoamericanos acudieron voluntarios a ofrecer sus servicios a ambos bandos, y el famoso cirujano norteamericano doctor Edward Barsky estableció un hospital de campaña en la zona republicana. En estos casos los ideales políticos de dichos médicos fueron los que determinaron su elección de bando.

Similares dificultades se presentaron a los esfuerzos de diversas sociedades nacionales de la Cruz Roja. En proporción a su población y recursos, la Cruz Roja de los diversos países latinoamericanos hizo la contribución más importante. Sus comités nacionales estaban compuestos, en general, por conservadores acomodados que simpatizaban con el bando nacionalista. En Europa, donde los gobiernos británicos, sueco y suizo hicieron contribuciones particularmente importantes a la Cruz Roja, el comité internacional de Ginebra pudo lograr que más o menos fuera la misma ayuda a cada bando, enviándose más ropas y medicinas a la España nacionalista y más alimentos a la republicana. Las cuestiones de orgullo y eficacia obstaculizaron asimismo la distribución. Al final de la guerra había en Burgos un hospital móvil completo sin desembalar que llegó de Ginebra un año antes. El ejército se negó a aceptar la condición de reconocer públicamente que era un hospital de la Cruz Roja, y la CRI no deseaba que fuera, en la práctica, confiscado. Al término de la guerra los representantes de los cuáqueros y de la Cruz Roja hallaron ciertas cantidades de latas de conservas medicinas y ropas intactas en almacenes de ambas zonas.

Es extremadamente difícil medir la importancia de esta conducta para aliviar los sufrimientos humanos. El número de per-

sonas que escaparon a Gibraltar, a buques británicos y franceses, y a las embajadas de Madrid, no eran más que una minúscula fracción de la población que de buena gana habría querido librarse de la guerra. Para sus amigos comprometidos en uno de los bandos eran oportunistas que huían de sus responsabilidades políticas en un momento crucial. Y en las embajadas, ciertamente, una alta proporción eran en realidad beligerantes que se aprovechaban de la protección que les brindaba un pabellón extranjero. Los médicos o chóferes de ambulancias que se ofrecían a Madrid o Burgos, las sociedades nacionales de la Cruz Roja que aportaban sus contribuciones, realmente hacían algo por aliviar los sufrimientos humanos, pero no sin hacer una elección política. Los gobiernos que protestaban de los bombardeos aéreos no estaban preparados para abandonar las armas y las ambiciones que les habían llevado en el pasado y les llevarían en el futuro, a realizar actos parecidos. El número de prisioneros intercambiado suponía menos del uno por ciento del total capturado, y los socorros alimenticios suministrados por los cuáqueros llegaron, y de modo temporal, quizá tan sólo a un 10 por ciento de los que de veras los necesitaban.

Sin embargo, el significado de estos esfuerzos no debe ser juzgado solamente por su base numérica. La guerra civil comenzó con una terrible ansia de exterminio del enemigo absoluto. Conforme los meses fueron pasando, fue cada vez mayor el número de personas que sólo deseaba la vuelta de la paz y un grado de mutua conciliación. Pero una creciente proporción de los recursos humanos y físicos de la nación estaban siendo arrojados a la guerra, y el que resultaría probablemente victorioso ya se había comprometido públicamente a no aceptar ningún compromiso. En estas circunstancias cada gesto de paz tenía un valor absoluto: cada prisionero intercambiado, cada refugiado escondido, cada niño alimentado, cada obra de arte salvaguardada era importante. Los prisioneros alimentaban esperanzas de liberación por el

solo hecho de que se negociaran intercambios. Las jóvenes de la clase media de Auxilio Social podían creer que sus actos de caridad contribuían al futuro de España. La presencia de los cuáqueros testimoniaba que había seres humanos capaces de sacrificar las comodidades de que gozaban para ayudar a otros seres humanos con los que hasta entonces no les había ligado ningún lazo personal, sentimental o histórico. Los delegados de la CRI trabajaban para ampliar la base en que aplicar un tratamiento civilizado a los prisioneros militares y políticos. Los funcionarios republicanos que buscaron la mediación mostraron su disposición para dejar de lado todas las viejas animosidades y aceptar compromisos para acabar con el derramamiento de sangre. La suma de todas estas acciones fue pequeña en sus efectos prácticos, pero ayudaron a una callada y sufriente población a mantener un mínimo de fe en la decencia humana.

Capítulo 26

LA BATALLA DEL EBRO Y LA CAÍDA DE CATALUÑA

EL 15 de abril de 1938 los nacionalistas llegaron al mar Mediterráneo en Vinaroz, cortando así a Cataluña de la zona central republicana y privando a Barcelona de energía eléctrica. Contaban con una abrumadora superioridad de material y sufrieron muy ligeras bajas. Habían capturado miles de prisioneros, y la desorganización de la defensa republicana en muchos sectores sugería desmoralización así como escasez de material. La aviación nacionalista bombardeaba a placer los objetivos elegidos y el pueblo de la zona republicana comparaba sardónicamente a sus propios aviones con el arco iris, puesto que aparecían después de que la tormenta hubiera pasado.

Sin embargo, en el terreno político y de la moral, la victoria nacionalista no fue ni mucho menos decisiva. En Lérida sólo hallaron a unos centenares de viejos y en Barbastro solamente mujeres y niños[419]. Como en Andalucía en el otoño de 1936, la población huía ante el invasor, quemando o intentando quemar pueblos y cosechas. Los oficiales del ejército de África, acostumbrados a la guerra colonial, se sentían poco afectados ante tantos sufrimientos; pero el ejército nacionalista en Aragón incluía ahora a miles de oficiales jóvenes que habían abandonado las universidades presentándose voluntarios para servir a lo que ellos consideraban un alzamiento nacional contra un caos intolerable

y la amenaza del comunismo. Estos oficiales se sintieron deprimidos al ver que los campesinos huían. Reaccionaron indignados ante los rumores de que los italianos estaban bombardeando Barcelona, bombardeos que jamás eran mencionados por la prensa nacionalista. Entre oficiales italianos y españoles hubo choques callejeros, y el general Yagüe causó sensación en Burgos el 19 de abril declarando en un discurso público que los españoles de ambos bandos eran muy valientes y sugiriendo que la Falange tendiera una mano de reconciliación a los «rojos[420]». Los funcionarios fronterizos franceses, al empadronar a los hombres en edad militar que se habían retirado hasta la frontera de los Pirineos, hallaron que menos de un 5 por ciento deseaban ser repatriados a la zona nacionalista. Una abrumadora mayoría escogió regresar a Cataluña[421].

En la España republicana la firme voluntad del jefe del Gobierno, Negrín, detuvo el pánico en los primeros días de abril. Con la frontera francesa abierta de nuevo, penetraron por ella armas, gasolina y alimentos, que fueron rápidamente entregados al ejército, lo que permitió a este oponer poco a poco más resistencia a los nacionalistas en los últimos días del mes. La marina de guerra republicana escoltaba convoyes de buques con aprovisionamientos entre Barcelona y Valencia y en las ciudades costeras se hicieron grandes preparativos para defenderse de los ataques aéreos. Los obreros de los altos hornos de Sagunto permanecieron en sus puestos a pesar de los repetidos e intensos bombardeos de la ciudad[422]. El jefe del Gobierno visitaba el frente constantemente, infundiendo a las tropas sus propias y renovadas energías y optimismo. Para los obreros españoles no había profesiones más respetadas que las de médico y profesor. Juan Negrín era ambas cosas y además un hombre cuya cálida personalidad inspiraba la lealtad a soldados y oficiales. Los soldados se llamaban a sí mismos, orgullosamente, los hijos de Negrín; a sus abundantes aunque no particularmente variadas raciones, lente-

jas de Negrín, y a su programa de trece puntos, los puntos de Negrín. Para la mayoría de los hombres no comprometidos con ninguna ideología política particular, su imagen borraba las de Azaña, Prieto y Largo Caballero.

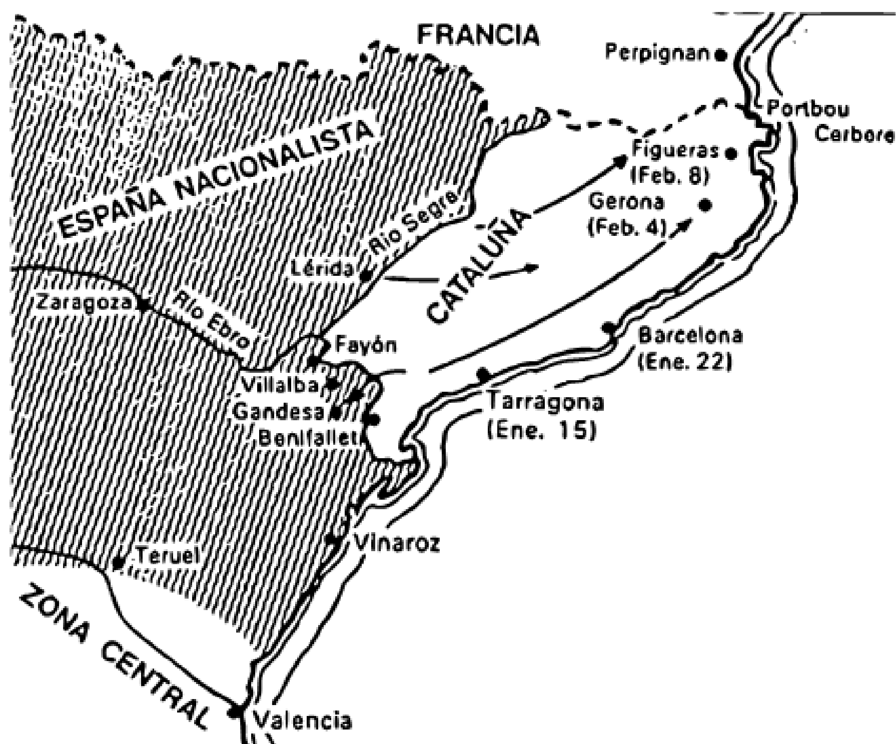
Fortalecido por el aumento de su autoridad personal y la renovación de la ayuda francesa, Negrín definió públicamente el primero de mayo de 1938 la actitud de la República española. En la forma de trece puntos, propuso el mantenimiento de la integridad política y económica de España contra toda penetración extranjera; afirmó a la vez la libertad de conciencia y las libertades regionales; pidió una reforma agraria con respeto, al mismo tiempo, para la pequeña propiedad y las propiedades extranjeras de firmas no complicadas en la rebelión militar. Propuso una amnistía política y la retirada de todas las tropas extranjeras. Reafirmaba la adhesión de su país a la Sociedad de Naciones y a los principios de la seguridad colectiva.

El discurso fue una réplica directa a varias leyes nacionalistas recientes aboliendo las reformas y libertades establecidas entre 1931 y 1936. También presentaba a la opinión mundial la imagen de un régimen cuyos propósitos y métodos eran similares a los de las democracias occidentales. Era un esfuerzo supremo para convencer a los gobiernos de Occidente de su propio interés en la supervivencia de la República. La falta de respuesta internacional fue una amarga desilusión para Negrín. Los Estados Unidos no cambiaron su actitud de neutralidad, ni Inglaterra su política de apaciguamiento. En Francia, Daladier, que había sustituido a Blum el 3 de abril, era prorrepublicano, pero a la vez aún más tímido que este último frente a las amenazas fascistas y las presiones británicas. A finales de mayo la frontera fue cerrada de nuevo, ostensiblemente como un paso para obtener el consentimiento fascista para la retirada de los voluntarios extranjeros de España[423].

Fuera del ejército la posición de Negrín no era tan fuerte. Cuanto más se veía él como la encarnación de la resistencia republicana, más lo temían los diversos elementos del Frente Popular como un dictador potencial. Como ministro de Defensa nombró a sus únicos partidarios incondicionales, los comunistas, dándoles los cargos de subsecretarios del Ejército, Marina y Aviación. Jesús Hernández encabezaba el cuerpo de comisarios de guerra en la zona central, y la prensa comunista ensalzó la personalidad de Negrín como había ensalzado la de Largo Caballero a finales de 1936. En la primavera de 1936 hubo un perceptible aumento en las detenciones y penas de muerte entre los civiles. El SIM estaba controlado en gran parte por los comunistas[424]. Su terror reflejaba el aumento del derrotismo tras las victorias nacionalistas y los rudos métodos de justicia subsiguientes a la sustitución de Prieto, Irujo y Zugazagoitia en todos los puestos de verdadera autoridad. Se había iniciado un círculo vicioso, del que nunca podría escapar el jefe del Gobierno. Él, personalmente, era un patriota, un burgués y un demócrata, pero la situación internacional le obligaba a depender cada vez más de los comunistas, y con el aumento de su poder, inevitablemente se enajenó a la izquierda no comunista e hizo menos probable que nunca un cambio en la política exterior de las potencias occidentales.

Como el discurso de los trece puntos no logró alterar la situación diplomática, Negrín decidió que sólo una acción militar espectacular podría salvar a la República de la asfixia lenta. A causa de su inferioridad material, el ejército republicano no podía esperar lanzarse a la ofensiva en un frente amplio o en campo abierto. Pero Brunete y Teruel habían demostrado que el general Franco se veía obligado por razones de prestigio a recuperar cada pulgada de terreno que le arrebataba la acción del enemigo. Negrín, trabajando en estrecha colaboración con su jefe de Estado Mayor, el general Vicente Rojo, buscó un campo de batalla en donde se diera un duro golpe a las comunicaciones del ejército

nacionalista, trasladando la lucha a terreno montañoso para minimizar la superioridad del enemigo, y que permitiera a la República concentrar sus reservas y suministros. Escogieron la curva del río Ebro entre Fayón y Benifallet, una zona defendida tan sólo por una división nacionalista. Al norte de esta curva concentraron quizá 100.000 hombres, unos 100 aviones operacionales, más de 100 cañones pesados, y varias docenas de cañones antiaéreos ligeros. A principios de junio las tropas estaban ensayando el uso de pontones y botes pequeños. Su entrenamiento para la batalla anticipó el hecho de que las comunicaciones con la retaguardia serían muy difíciles, y que las ametralladoras y los morteros tendrían que hacer la mayor parte de la tarea que generalmente se asigna a la artillería de campaña.



Mapa 8. El Ebro, julio-noviembre de 1938. Cataluña, diciembre de 1938-febrero de 1939.

Los republicanos comenzaron a cruzar el Ebro en la noche del 24 de julio. La maniobra logró una completa sorpresa, y en el curso de una semana unos 50.000 hombres ocuparon las colinas al sur del río. Durante el día los republicanos utilizaban toda su artillería antiaérea para obligar a los aviones nacionalistas a volar alto y esto, junto con la estrechez del objetivo, protegió los puentes. Sin embargo, la mayoría de los hombres y aprovisionamientos cruzaban de noche. Los nacionalistas abrieron los embalses situados en los ríos pirenaicos tributarios del Ebro, y cuando estas aguas desbordadas descendieron a la zona de batalla destruyeron temporalmente los pontones. Mientras tanto, el general Franco se apresuró a enviar refuerzos a la zona, dando por resultado que hacia el primero de agosto el avance republicano se detuvo en las cercanías de Gandesa y Villalba de los Arcos. El ejército estableció sus líneas, utilizando pozos para puestos de mando y parapetos de piedra como cobertura. La comarca era montañosa, pero poco arbolada, y el suelo era demasiado duro en muchas partes para cavar refugios. Para subir hasta allá los víveres y municiones y evacuar a los heridos se había de esperar a la noche y utilizar tan sólo botes pequeños. La artillería nacionalista mantenía a los soldados republicanos pegados al suelo durante el día y destruyó todas las comunicaciones terrestres. Las órdenes eran simples, como en la defensa de Madrid en noviembre de 1936: nada de retirada en ninguna parte, por ninguna razón[425].

El lanzamiento de la ofensiva en el Ebro no produjo la unidad política en la zona republicana. Tras la marcha de Prieto del Ministerio de Defensa, el presidente Azaña temió lo que él juzgaba tendencias dictatoriales de la personalidad de Negrín. Compartía la extendida creencia de que tras las aplastantes victorias nacionalistas de marzo y abril la guerra estaba perdida. También creía, al igual que creyó el presidente Alcalá-Zamora antes que él, que su papel como jefe del Estado le daba implícitamente el derecho

de veto en momentos cruciales de la política, aunque la Constitución más bien diera énfasis a las limitaciones que a las prerrogativas del presidente de la República.

En Madrid, Julián Besteiro miraba a Negrín como un aventurero que estaba jugando con las vidas de millones de compatriotas. El resentimiento databa de la negativa de Negrín a oír el informe de Besteiro sobre sus conversaciones diplomáticas en Londres, en mayo de 1937. Los madrileños que iban a Barcelona en 1938 se quedaban sorprendidos ante la evidencia del poder comunista en todas las ramas del Gobierno. Cuando antiguos amigos preguntaron a Negrín acerca de esto, él se echó a reír, como si oyera un rumor tonto, y aseguró a sus interlocutores que él no era el instrumento de nadie. Para Besteiro tales informes significaban que Negrín se engañaba a sí mismo o bien a los republicanos españoles, y, en ambos casos, era un hombre peligroso. En junio Besteiro concedió una entrevista a un editor australiano en la que se declaró dispuesto a formar un Gobierno de mediación. En Barcelona Azaña habló de una tregua y de la retirada de todas las tropas extranjeras como el primer paso, y el más esencial, hacia el restablecimiento de la paz. Desesperando de ser verdaderamente comprendido por las potencias extranjeras, actuaba con la convicción de que si se lograba una tregua, por breve que fuera, ningún bando podría continuar la lucha[426].

El éxito inicial del cruce del río Ebro elevó el prestigio de Negrín, pero cuando el avance se detuvo el primero de agosto, y se hizo evidente que la masa del ejército republicano podría quedar ahora atrapada y aniquilada en una bolsa con el río a sus espaldas, aumentaron las críticas contra el jefe del Gobierno mucho más que nunca. Sabiendo que Azaña deseaba llamar a Besteiro, precipitó él mismo la crisis con un decreto colocando todas las fábricas catalanas de material de guerra bajo la jurisdicción de la Subsecretaría de Armamento. Los representantes catalanes y vasco en el Gabinete dimitieron. En el despacho de Azaña se recibieron

muchísimos telegramas desde el frente pidiendo que Negrín siguiera al frente del Gobierno. Las fuerzas aéreas hicieron una demostración sobre la ciudad de un modo que recordaba los métodos empleados para impresionar al presidente durante la crisis del pasado marzo. Sus amigos íntimos le presionaron para que dimitiera; pero Azaña pensaba en una paz mediada como el único servicio que aún podría hacer al pueblo español siguiendo en el cargo, y como el ejército apoyaba a Negrín, no quería arriesgarse a una guerra civil dentro de la guerra civil despidiendo al jefe del Gobierno. El 16 de agosto, Negrín formó su tercer Gabinete, simplemente reemplazando los ministros catalanes y vasco, ninguno de los cuales ocupaba un puesto importante[427].

En las sierras que dominan Gandesa los nacionalistas tenían ahora la iniciativa. Prepararon sus contraataques con barreras artilleras que duraban todo el día, pues sus cañones estaban casi juntos unos con otros, como en las grandes batallas del frente occidental en la primera guerra mundial, y la artillería era relevada de vez en cuando por la aviación de bombardeo. Pero cuando la infantería se lanzó a la carga, los defensores supieron hacerles frente y concentraron un fuego mortífero de ametralladoras y morteros. La batalla continuó de este modo durante 90 días, durante los cuales los nacionalistas lograron una penetración máxima de 8 Km. en un frente de más de 30 de longitud. El general Franco estaba impaciente por el lento progreso de la contraofensiva. La aviación nacionalista protestó por el uso de sus bombarderos como artillería, y los italianos ponían cara hosca en sus tiendas[428]. Los ávidos oficiales jóvenes que habían desfilado por el este de Aragón durante la primavera morían ahora dirigiendo cargas intrépidas contra las obstinadas unidades de un ejército republicano *que había sido batido según todas las reglas; pero que no parecía haberse enterado de ello*.

La actuación del ejército republicano recordó al mundo Verdún y Madrid; pero en contraste con la situación de noviembre

de 1936, la zona republicana tenía un Gobierno que no sólo hablaba el lenguaje de la democracia burguesa, sino que ya hacía tiempo que había reducido a los «incontrolables» al orden. El SIM empleaba la tortura contra los enemigos políticos de los comunistas, pero también protegió a unos 2000 sacerdotes que celebraban misa en privado en domicilios de Barcelona[429]. Periodistas tan respetados como Herbert Matthews, Vincent Sheean, Lawrence Fernsworth, Louis Fischer y «Pertinax» informaron de la orientación moderada y prooccidental del Gobierno de Negrín y escribieron en tonos admirativos de la recuperación militar y de la administración civil. Conservadores prominentes como Winston Churchill y el exsecretario de Estado de los Estados Unidos, Henry L. Stimson, se declararon favorables a la República en el verano de 1938. El agregado militar francés, que ya había aconsejado a Blum en marzo que ayudara a la República, tomó un avión en el frente del Ebro en dirección a su país en un inútil esfuerzo para convencer al general Gamelin de que Francia debería intervenir directamente. A principios de septiembre Negrín voló hacia Suiza, ostensiblemente para asistir a un congreso médico internacional, mas en realidad para hacer un supremo esfuerzo a fin de lograr una paz de compromiso en un encuentro secreto con el duque de Alba[430].

Pero el general Franco no quería ningún compromiso, y la suerte militar de la República quedaría pronto echada como subproducto de una gran crisis internacional. En marzo de 1938 Hitler había ocupado Austria, y al cabo de pocas semanas exigió que las zonas fronterizas de Checoslovaquia fueran entregadas a Alemania, basándose en que la mayoría de su población era alemana. Checoslovaquia tenía firmados pactos de asistencia mutuas con Francia y la Unión Soviética, y poseía una línea de fuertes fortificaciones a lo largo de su frontera con Alemania y un ejército que tenía la reputación de poseer la mayor potencia de fuego por hombre en el continente europeo. Inglaterra envió

a lord Runciman, amigo íntimo de Chamberlain, para «mediar» entre la minoría de alemanes sudetes y el Gobierno checo. Runciman presionó a los checos para que cedieran en todos los puntos importantes; pero éstos se negaron finalmente a aceptar lo que habría sido una simple rendición bajo los auspicios británicos. Los alemanes se prepararon para la guerra, y en septiembre el flujo de suministros a los nacionalistas fue cortado radicalmente debido a las necesidades propias del ejército alemán[431].

El 15 de septiembre, el primer ministro Chamberlain partió en avión para entrevistarse con Hitler, recibió las exigencias mínimas de éste y en los días siguientes arrancó el amargo consentimiento de los checos. Pero cuando llevó ese consentimiento a Alemania, el día 22, Hitler presentó una serie de nuevas exigencias. Chamberlain quedó anonadado, y no protestó cuando los checos decretaron la movilización general. En Londres se apresuraron a construir refugios antiaéreos en Hyde Park. Moscú aseguró a los checos que Rusia honraría el tratado de ayuda mutua, y ya parecía que la guerra era inevitable. En la última semana de septiembre el general Franco se apresuró a asegurar a Londres y París que sería neutral en caso de guerra. A sus indignados aliados explicó que España no estaría en condiciones de ayudarles efectivamente, y replicó a las críticas alemanas quejándose de que Hitler lo hubiera mantenido completamente a oscuras de los planes alemanes. Mientras tanto, los diplomáticos franceses e italianos multiplicaban sus esfuerzos de último momento para evitar una guerra que ninguno de sus gobiernos deseaba. Como resultado, los jefes de Gobierno de Inglaterra, Francia, Italia y Alemania se reunieron en Munich el 28 de septiembre. Sin consultar a Rusia o a Checoslovaquia, forzaron a esta última a atender virtualmente toda la lista de las exigencias máximas de Hitler.

El pacto de Munich fue un golpe mortal a las esperanzas diplomáticas de la República española. Si la guerra hubiera estallado en septiembre de 1938, Rusia y las democracias occidentales

habrían sido aliadas en la lucha militar contra el fascismo, como lo eran los comunistas y las fuerzas democráticas dentro de España. El ejército republicano habría estado activamente comprometido desde el primer momento en contener a las tropas italianas y alemanas, y los gobiernos occidentales seguramente habrían aceptado a la República española como aliado en dichas circunstancias[432]. El pacto de Munich, por el contrario, no sólo demostraba la determinación de Chamberlain de proseguir con la política de apaciguamiento; con su evidente desaire a Rusia, obligaba a este país inevitablemente a proteger su propia seguridad mediante un acuerdo con la Alemania hitleriana.

Munich preocupó por el momento a los nacionalistas. Franco temía que las mismas cuatro potencias que habían decidido el destino de Checoslovaquia cortaran las alas de su victoria total. Pero no tenía por qué mostrar ansiedad. Mussolini había hablado a Chamberlain de repatriar unos 10.000 veteranos; los dos estadistas convinieron en que esta acción sería una señal apropiada para que los acuerdos anglo-italianos del 16 de abril surtieran completo efecto. No era probable que Chamberlain hiciera nada que encorajinara a los italianos. La verdad es que los aviones italianos prosiguieron sus ataques contra los barcos británicos y de otros países neutrales, tras la breve pausa de las negociaciones de Munich.

El 2 de octubre Negrín preguntó en un discurso cuánto tiempo seguirían los españoles matándose entre sí. El mismo día el embajador alemán informó que en la España nacionalista el cansancio de la guerra era terrible, y advirtió a su Gobierno que aún sería necesario un esfuerzo mayor en la entrega de armamentos para asegurar la victoria de Franco[433]. En San Sebastián el diario de la Falange, Unidad, publicó un editorial que decía: «El Caudillo debería saber que España no se convertirá en un cementerio de patriotas[434]». Munich acabó con las esperanzas diplomáticas de la República y provocó el temor a un compromiso no desea-

do en Salamanca; pero el orgulloso ejército republicano se aferró obstinadamente a las sierras de Gandesa, y el generalísimo mantuvo su resolución de luchar hasta la victoria total. A finales de octubre había reunido suministros y refuerzos de unos 30.000 a 40.000 hombres a las órdenes del general García Valiño. En las dos primeras semanas de noviembre los nacionalistas forzaron al ejército republicano a evacuar todo el saliente ganado a finales de julio. Cada ejército había sufrido quizás unas 40.000 bajas en la más agotadora batalla de la guerra[435]. Los republicanos habían comprometido virtualmente todo su armamento y todas sus unidades de combate experimentadas. Los nacionalistas perdieron la mayoría de sus mejores oficiales jóvenes. Los tanques y camiones estaban muy necesitados de reparación, pues a falta de engrase cuidadoso, la inexistencia de piezas de recambio, las castigadoras tormentas de arena del este de Aragón y las rocosas laderas del campo de batalla del Ebro habían cobrado su portazgo.

Pero el generalísimo aún tenía centenares de aviones, cañones y vehículos a motor. Pidió a los alemanes nuevos grandes suministros de municiones de todos los tipos y que los hombres y las máquinas de la Legión Cóndor pudieran estar de nuevo presentables. El precio de Alemania fue un acuerdo mucho más favorable sobre los derechos mineros, y el 19 de noviembre Salamanca convino por primera vez en ceder a los alemanes una participación mayoritaria en cinco minas importantes, para pagar las facturas de la Legión Cóndor, e importar maquinaria alemana para minas, que debería ser pagada con mineral[436].

En la hambrienta Barcelona, el Gobierno perseveraba en la restauración de la democracia española. Negrín negoció en privado con un comité de católicos catalanes, incluyendo al obispo de Lérida, un acuerdo para restaurar públicamente el culto católico. En aquel verano ya se habían celebrado misas en los frentes del Ebro y de Madrid. El jefe del Gobierno quería que las iglesias fueran abiertas de nuevo; pero el comité no quiso dar la aparien-

cia de que todo era normal cuando de hecho los católicos aún sufrían persecución por algunos elementos del Frente Popular. A cambio se mostraron de acuerdo en celebrar misa en unos 30 garajes y almacenes que fueron designados por el Gobierno y protegidos por la policía[437]. Sin embargo, apenas si había sido puesto en efecto el plan cuando la ciudad cayó en manos de los nacionalistas.

Igualmente en octubre el Gobierno sometió a proceso a los dirigentes del POUM que llevaban tanto tiempo en la cárcel. Habían sido acusados, en una purga estilo moscovita, de recibir subsidios de los nacionalistas y de planear el asesinato de importantes figuras políticas, entre ellas Prieto y el coronel Modesto. En contraste con los procesos de Moscú, estas acusaciones sin base fueron rápidamente rechazadas. El tribunal dictó cinco sentencias de prisión por la reconocida participación en el alzamiento de mayo de 1937 en Barcelona. No hubo penas de muerte, y todos los presos fueron puestos en libertad antes de que llegara el ejército nacionalista[438]. También en octubre el Gobierno disolvió las brigadas internacionales y el 15 de noviembre desfilaron por Barcelona, que rindió tributo a los miles de europeos y americanos antifascistas que habían luchado para defender la democracia mundial en España.

El 16 de noviembre unos 10.000 veteranos italianos regresaron a su país, y el acuerdo mediterráneo anglo-italiano tomó efectividad. El día 19 fueron firmados los nuevos acuerdos mineros entre Berlín y Salamanca. Los suministros fluyeron rápidamente a los nacionalistas y éstos pudieron el 23 de diciembre lanzar una ofensiva final y decisiva contra el ejército republicano. Unos 350.000 hombres atacaron a lo largo de la línea Segre-Ebro, de Lérida a Tortosa. Poseían una superioridad absoluta en suministros y armas de todos los tipos, con un cañón de campaña para cada diez yardas de frente, dominio de los aires que nadie desafiaba, y las suficientes facilidades de transporte para

permitir a las tropas que avanzaban ser relevadas cada 48 horas en cualquier sector donde tropezaran con fuerte resistencia. Frente a ellos había 90.000 hombres a medio armar cuya moral y suministros habían quedado agotados en la batalla del Ebro. Sólo las unidades comunistas de choque de Líster, Galán y Tagüeña opusieron seria resistencia. El 15 de enero los nacionalistas entraron en Tarragona sin lucha[439].

El Gobierno, desanimado, habló de convertir Barcelona en un segundo Madrid, pero un pánico irresistible se apoderó de la población de Cataluña y medio millón de seres humanos comenzaron a tomar penosamente la ruta que llevaba a la frontera francesa. El Gobierno puso en libertad a los prisioneros políticos. Los izquierdistas se unieron a las masas en retirada, los derechistas fueron protegidos por la policía y los delegados de la Cruz Roja. Sin embargo, sus protectores fueron incapaces de impedir algunos linchamientos aislados. La mayoría de la población, así como de los funcionarios municipales, aguardaron pasivamente la llegada de los nacionalistas. El día 26 las tropas del general Yagüe comenzaron a ocupar la ciudad, virtualmente sin disparar ni un tiro. Los médicos del ejército nacionalista hallaron que los pacientes de los hospitales llevaban dos o tres días sin comer e hicieron todo lo que pudieron para proteger a los militares heridos de los soldados victoriosos que querían acabar con ellos. Los moros entraron en los departamentos vacíos, llevándose las alfombras y los objetos de plata, que ingenuamente trataban de vender a los vecinos del mismo edificio. Las tiendas estaban cerradas y los cierres echados. Las tropas recibieron cuatro días de «libertad», tras lo cual se restauró rápidamente la disciplina, y los nacionalistas comenzaron a administrar la ciudad con la cooperación de la mayoría de los empleados municipales. Su aviación bombardeó las carreteras que llevaban a Francia. La Liga de los Derechos del Hombre quiso amparar las carreteras con banderas de la Cruz Roja, pero la CRI rechazó la petición, como una cla-

ra violación de la convención de Ginebra. En todo caso habría sido un gesto inútil, ya que los aviadores conocían perfectamente a quién estaban bombardeando[440].

El Gobierno se retiró a Figueras, la última ciudad de importancia en la carretera a Francia. El 4 de febrero los nacionalistas ocuparon Gerona; el día 6, los dirigentes de la República, Azaña, Negrín, Companys, Aguirre y Martínez Barrio cruzaron la frontera juntos, a pie. El 8 de febrero los nacionalistas llegaron a Figueras, y aquel mismo día la marina de guerra británica preparó la transferencia de Menorca de la autoridad republicana a la nacionalista, ganándose así crédito diplomático ante el general Franco, dándose la satisfacción de que Mussolini no dominara las Baleares, y evacuando a varios centenares de personas que de otro modo habrían sufrido prisión o muerte[441]. En la tarde del 9 de febrero los nacionalistas ocuparon la frontera desde Le Perthus a Port Bou, y para el 12 prácticamente toda la frontera estaba cerrada.

Capítulo 27

EL FIN DE LA GUERRA

EN las dos primeras semanas de febrero de 1939, la principal preocupación del jefe del Gobierno, Negrín, era acabar con la guerra sobre la base de que no hubiera represalias. En la última reunión de las Cortes, el primero de febrero, en Figueras, anunció las tres condiciones con las cuales esperaba lograr la paz: la independencia e integridad territorial de España tendrían que ser garantizadas (contra el posible control italiano de las Baleares y el control alemán de las minas); el pueblo habría de tener libertad para escoger la futura forma de gobierno; los soldados y oficiales republicanos habrían de recibir garantías de que no sufrirían represalias. Unos días después, en el pueblo de Agullana, se reunió con el encargado de negocios británico Stevenson y con el embajador francés Henry. Esperando que ellos mediaran en Salamanca, les confió que en realidad la tercera condición, la garantía contra las represalias, era la única sobre la que el Gobierno se veía absolutamente obligado a insistir antes de deponer las armas. Tras cruzar la frontera el día 6, estableció su cuartel general en el consulado español en Toulouse[442].

Entre el 27 de enero y el 10 de febrero, aproximadamente medio millón de españoles en retirada penetraron en Francia. Familias con individuos de tres generaciones, empujando carretones de dos ruedas atiborrados con colchones, utensilios y muñecas, atestaron las carreteras desde Barcelona a Port Bou. Hacia el 5 de febrero los franceses habían contado 170.000 personas, pues

hasta esta fecha sólo habían permitido el cruce de la frontera a los civiles. Del 5 al 9 permitieron la entrada a 300.000 soldados a condición de que entregaran las armas en la frontera. Mientras los gendarmes conducían a los refugiados hacia los campos de concentración improvisados en las playas cercanas a Argeles y St. Cyprien, los campesinos franceses los miraban al pasar, algunos con lágrimas en los ojos, otros murmurando: sales rouges (sucios rojos). Los soldados, en su mayoría, mantuvieron la disciplina durante la retirada. Orgullosamente formaban filas y cruzaron la frontera en formación militar. Teniéndose a sí mismos como defensores del Gobierno legítimo de la República y de la democracia mundial, se indignaban de que los gendarmes franceses los cachearan como si fueran una horda de criminales sospechosos. El general Rojo y su Estado Mayor se esforzaron para minimizar la mala voluntad entre la policía y el ejército en desbandada.

Los franceses, con su larga tradición en la concesión del asilo político y conociendo las represalias que los nacionalistas llevaban a cabo en los territorios conquistados por ellos, no vacilaron en concederles refugio, pero estaban completamente impreparados para recibir aquel alud de gente y no deseaban complicar sus futuras relaciones con los vencedores. Los representantes de Burgos, acompañados por oficiales franceses, visitaron los campos para invitar a los soldados exrepublicanos a que se repatriaran. Prometieron que nadie sería perseguido por sus opiniones o por haber pertenecido a organizaciones políticas. Por otra parte, el 13 de febrero el general Franco publicó un decreto referente a las responsabilidades políticas de todos aquéllos que se habían opuesto al movimiento nacional por la acción o por la «grave pasividad» desde el primero de octubre de 1934. Esto significaba claramente que todos los funcionarios civiles, jefes de partidos y voluntarios de las milicias que habían apoyado al Frente Popular tendrían que responder de sus actividades. Los veteranos consideraban sus posibilidades mientras camiones y café caliente espe-

raban a todos aquéllos que escogieran la repatriación. A finales de febrero y en marzo quizás unos 70.000 hombres cruzaron la Francia meridional para regresar a España por la frontera de Hendaya-Irún[443].

En Toulouse, Negrín, Del Vayo y Uribe intentaron convencer a Azaña y a sus colegas del Gabinete para que regresaran al territorio aún en manos republicanas, bien para ayudar a una ordenada rendición y evacuación de dicho territorio o para proseguir la lucha, según las circunstancias. Los tres puntos de Negrín no obtuvieron ninguna respuesta de los nacionalistas. El general Franco declaró repetidamente a los representantes británico y francés que la guerra estaba terminada y que no tenía intención de negociar con Negrín ni con nadie. El 22 de febrero Negrín llegó a la conclusión de que no quedaba otra alternativa que continuar luchando. El general Rojo ya había presentado la dimisión, diciendo que se negaba a pedir al pueblo español que cometiera suicidio[444]. Martínez Barrio, presidente de las Cortes; José Antonio Aguirre, jefe del Gobierno vasco, y Luis Companys, presidente de la Generalitat, adoptaron la misma posición que Azaña.

Negrín, acompañado por Álvarez del Vayo y sus ministros, se dirigió en avión a la zona central. El 26 de febrero, en el aeropuerto de Los Llanos, no muy lejos de Valencia, se reunió con los comandantes jefes de lo que restaba del ejército. Les dijo que había estado tratando de conseguir una paz honorable por medio de negociaciones, no sólo desde la reunión de las Cortes en Figueras, sino en varias ocasiones desde la primavera de 1938. Concluyó diciendo que la República no tenía más elección que resistir. Los oficiales de carrera que habían sido leales a la República desde el 18 de julio, los generales Matallana, Escobar y Menéndez, eran de la opinión que sería imposible proseguir la resistencia militar[445]. Mientras tanto, el 24 de febrero el general Franco, seguro de la victoria, llegó a un acuerdo con los cuáque-

ros por el cual la armada nacionalista permitiría que buques cargados de alimentos entraran en los puertos republicanos[446].

El 27 de febrero Francia e Inglaterra anunciaron su reconocimiento del Gobierno nacionalista. Horas después, Manuel Azaña dimitió, y Martínez Barrio su sucesor constitucional, se negó a ejercer el cargo. La estructura de la segunda República española se había derrumbado. La gran mayoría de sus jefes militares y civiles creían que ya no les quedaba por hacer más que acabar con la matanza y esperar que los nacionalistas fueran misericordiosos con la población después de que los dirigentes derrotados se quitaran de en medio. En la zona central, Negrín consideraba su responsabilidad de un modo muy distinto. Sin hacer caso de lo hecho por Azaña (que siempre fue un derrotista), el jefe del Gobierno que había querido la batalla del Ebro no podía rendir la España republicana a un enemigo que negaba toda clase de garantías. En respuesta al pesimismo de los oficiales, habló de la artillería y las ametralladoras rusas que esperaban en Marsella, y de un rumor muy extendido entre los soldados sobre motores de aviación americanos que se suponían en camino.

El 2 de marzo, desesperado, anunció una serie de nombramientos con los que esperaba conservar el control de la zona central. Los oficiales comunistas que habían dirigido la única resistencia concertada durante la lucha en Cataluña fueron ascendidos: el coronel Modesto fue nombrado general jefe del ejército del Centro (en sustitución de Miaja), los comandantes Líster y Galán obtuvieron el grado de coroneles. Oficiales comunistas fueron nombrados para regir los puertos de Alicante y Cartagena. En Madrid, Negrín trató de conservar la lealtad del coronel Casado, un oficial de carrera que no era comunista y que había servido a Largo Caballero y a él mismo y al que ahora nombró general.

Los nombramientos de Negrín sólo sirvieron para precipitar su caída. Los elementos no comunistas reaccionaron inmediata-

mente, no tanto por los ascensos merecidos de los oficiales comunistas, sino ante la perspectiva del control comunista de los puertos por los que habría de tener lugar toda la evacuación. El 4 de marzo hubo un confuso levantamiento en Cartagena, implicando a la vez a falangistas y grupos izquierdistas, y la flota zarpó para el África del Norte francesa. Jesús Hernández, comisario general para la zona Centro-Sur, envió tropas al mando de oficiales comunistas para reprimirlo[447].

Los acontecimientos más importantes, sin embargo, ocurrieron en Madrid. El coronel Casado había puesto bien en claro en Los Llanos y en ulteriores conversaciones telefónicas que no estaba de acuerdo con la política de resistencia a ultranza de Negrín. Durante los últimos días de febrero, comenzó en Madrid las negociaciones para la formación de un Consejo Nacional de Defensa, que se haría cargo del poder con el propósito de terminar la guerra en las mejores condiciones posibles, si Negrín persistía en sus esfuerzos para continuar la lucha. La dimisión de Azaña y los ascensos del 2 de marzo (Casado se negó a aceptar el suyo cuando Negrín se dirigió a él por primera vez llamándole «general») apresuraron la decisión de los enemigos del jefe del Gobierno.

En Madrid los ánimos habían cambiado mucho desde los heroicos días de noviembre de 1936. Hasta bien entrada la primavera de 1937, el pueblo había creído en la victoria, y estaba jubiloso al darse cuenta de que en su ciudad se estaban desarrollando acontecimientos de importancia mundial. Luego vino la caída de Largo Caballero, la pérdida de Bilbao y la horrible e inútil carnicería de Brunete. La guerra había acabado con un jaque mate que tenía a todos con los nervios en tensión, los principales teatros de acción estaban lejos de Madrid, pero con el enemigo acampado a las puertas, mientras que el hambre y el frío iban desgastando la moral de los ciudadanos. La inflación galopante significaba la bancarrota de la economía republicana. La emisora de Burgos

radiaba las series y números de los billetes de banco que los nacionalistas aceptarían como válidos a su entrada en la capital y los comerciantes se negaban francamente a aceptar otros. La clase obrera de Madrid era en su mayoría socialista o anarquista; la clase media, en gran parte republicana moderada. En noviembre de 1936 ambas acogieron bien tanto las armas como los oficiales rusos, y brindaron por la salud de José Stalin. El frente unido de elementos democráticos y de extrema izquierda contra el fascismo había sido una realidad en carne y hueso. A finales de 1937 la población había dejado de ser «compañera de viaje». La influencia comunista en el ejército, naturalmente, provocó el resentimiento de los otros partidos. La mayoría de los socialistas consideraban a Negrín un renegado, y los republicanos liberales, aun admirando su habilidad y sus intenciones, lo consideraban el hombre fachada de los comunistas.

La personalidad civil más admirada en Madrid era indudablemente el socialista moderado Julián Besteiro, que era madrileño, había sido catedrático de Lógica y decano de la Universidad. Fue concejal del Ayuntamiento de Madrid y había ocupado un escaño en las Cortes desde 1918 hasta el golpe de Estado de Primo de Rivera. En 1931 los otros diputados lo eligieron para presidir las Cortes Constituyentes. Educado en la Institución Libre de Enseñanza, dio allí frecuentes conferencias, así como en la Casa del Pueblo. Había sido compañero íntimo de Pablo Iglesias, y varias veces presidente de la UGT. Así que durante décadas participó activamente en las mejores fases liberales, intelectuales y socialistas de la vida de Madrid. Durante la guerra fue particularmente querido por su lealtad a la ciudad. Se quedó en Madrid cuando el Gobierno y las Cortes se marcharon a Valencia. A principios de 1937 le ofrecieron la embajada en la Argentina. Como estaba enfermo, pudo haber aprovechado la oportunidad para servir a la República y de paso escapar de la guerra[448]. Pero como concejal del municipio estaba ocupado con los problemas

del alojamiento y las condiciones generales de vida de los refugiados, y declaró que no deseaba abandonar la ciudad mientras estuviera sitiada. Tras el fracaso de su misión en Londres, en mayo de 1937, regresó inmediatamente a Madrid, diciendo que no volvería a dejar la ciudad de nuevo, excepto para hacer un servicio mayor al pueblo español, con lo que quería decir, y todo el mundo sabía lo que quería decir, para presidir un Gobierno que negociara la paz[449].

El pesimismo de Besteiro era tanto político como militar. En su opinión, la República había llegado con el adelanto de una generación, antes de que hubiera echado raíces en las masas españolas una actitud tolerante y cultivada, y antes de que la UGT hubiera tenido tiempo de preparar una generación de obreros políticamente educados y con la necesaria experiencia administrativa en el autogobierno. Como presidente de las Cortes Constituyentes, no participó personalmente en los debates, como es natural. Sin embargo, era bien sabido que le disgustaban los torrentes de oratoria anticlerical y los ataques dogmáticos contra el papel de las escuelas de la Iglesia. En 1933 consideró la evolución izquierdista de Largo Caballero como un desastre político. Se opuso francamente a la línea revolucionaria y en las juntas del partido votó contra el plan de un levantamiento en octubre de 1934. Al mismo tiempo compartía por entero la desconfianza de las izquierdas hacia Gil Robles y la determinación de resistir al fascismo, por la fuerza, si fuere necesario. Por lo tanto, apoyó sin vacilar a la República el 18 de julio. Pero pronto, el horror a los «paseos» y luego el creciente poderío de los comunistas le hicieron adoptar una actitud pasiva, apolítica, en relación con las autoridades. Su lealtad era para la República de 1931-36, y para las tradiciones de Francisco Giner de los Ríos y Pablo Iglesias, no para la República de Largo Caballero y Juan Negrín.

La personalidad de Besteiro, como la de tantos otros socialistas y liberales españoles, incluía un profundo elemento religioso.

Como catedrático de filosofía, enseñaba lógica sin rastro de misticismo, y en las discusiones económicas abogaba por el marxismo ortodoxo. Al igual que muchos intelectuales de países católicos, sus sentimientos religiosos carecían de expresión porque rechazaba a la Iglesia católica sin desear luchar contra ella o sustituirla por otra Iglesia. Durante años se había cuidado de una latente tuberculosis. Ahora, trabajando intensamente y viviendo sin la adecuada alimentación ni calefacción, se fue agudizando cada vez más ésta. En marzo de 1939 estaba preparado para hacer cualquier sacrificio a fin de aliviar los sufrimientos de los que eran más jóvenes y gozaban de buena salud, frente a los cuales se sentía responsable como dirigente de una causa que había fracasado. En lo más profundo de su alma sentía el deseo del sacrificio expiatorio, la esperanza de que su prisión y muerte pudieran aliviar el peso de las represalias contra otros[450].

La Junta, tal como fue organizada por el coronel Casado, representaba prácticamente a todos los elementos no comunistas del Frente Popular en la zona de Madrid. Casado retuvo la cartera de Defensa y Besteiro actuó como ministro de Estado, ante la posibilidad de negociaciones con Burgos. Un socialista del ala de Caballero, Wenceslao Carrillo, se hizo cargo del Ministerio de la Gobernación. El general Miaja, que se había hecho comunista durante la defensa de Madrid, y que como comandante de los ejércitos de la zona central se había mostrado partidario de la resistencia hasta la celebración de la conferencia de Los Llanos, se unió a la conspiración en el último momento. Su prestigio hizo que, naturalmente, fuera elegido como presidente de la Junta. Los generales Matallana y Menéndez, militares de carrera apolíticos, que eran muy respetados, apoyaron a la Junta, al igual que Cipriano Mera, el principal oficial anarquista del frente de Madrid, y lo mismo hicieron prácticamente todos los dirigentes de la UGT y la CNT en la ciudad.

La Junta se hizo cargo del poder el 5 de marzo y Besteiro explicó por radio sus propósitos al pueblo de Madrid. Acusó a Negrín de tratar de proseguir en el cargo a pesar de la dimisión de Azaña y su extrema posición minoritaria dentro del Gobierno tras la pérdida de Cataluña. Dijo que Negrín estaba engañando al pueblo con falsas esperanzas de llegada de más armamento y de una guerra mundial que sumergiría el conflicto español en una guerra victoriosa contra las potencias fascistas. Instigó al pueblo a obedecer a la Junta de Casado y a mostrar su valor por el modo en que aceptaran la derrota.

Negrín no reaccionó inmediatamente al golpe de Madrid. Los jefes militares comunistas de Madrid y Ciudad Real, tras un par de días de incertidumbre sobre la actitud a adoptar, se sublevaron contra Casado, provocando así una guerra civil en estas dos ciudades. Las tropas de Cipriano Mera en la capital y del general Escobar en Ciudad Real inclinaron pronto la balanza en favor de la Junta de Casado. Un problema mucho más difícil fue convencer a los comunistas de las filas de su espantoso error y restablecer un cierto grado de autoridad moral en favor del Consejo. El 9 de marzo, Edmundo Domínguez, un socialista de Negrín, habló por radio para insistir en que Negrín no deseaba mantenerse en el cargo por la fuerza, que no había opuesto resistencia a Casado y que no había «desmentido ni desautorizado al Consejo Nacional de Defensa». Al día siguiente el general Matallana habló por radio para decir de modo razonable y calmoso que nadie había derribado al Gobierno de Negrín; sencillamente había caído por sí mismo[451].

Las contradicciones de la posición personal de Negrín, junto con su agotamiento físico, culminaron en su sorprendente pasividad. Un año y medio de mando en tiempo de guerra había revelado un grado de habilidad ejecutiva y un gusto por el poder, los cuales apenas si el propio Negrín habría sospechado antes de 1937. Había hallado a Azaña desmoralizado. En cuanto a Prieto,

su admirado mentor político, era un brillante analista y organizador, un colega leal e incansable, pero que se alteraba fácilmente por las malas noticias y que dependía cada vez más de la ecuanimidad y el poder de decisión de Negrín. Desde el momento en que ocupó el cargo de jefe del Gobierno, trabajó igualmente bien con los militares de carrera más importantes, como Rojo y Matallana, y con los principales jefes comunistas producidos por la guerra, como Líster y Modesto. Entre tantas desilusiones militares y diplomáticas se veía a sí mismo como el hombre de quien dependían incluso sus más enérgicos colaboradores para renovar su coraje en los momentos difíciles. Había salvado a la República del colapso en abril de 1938, y sin su buen ánimo, la milagrosa resistencia del Ebro habría sido inconcebible.

Considerando la situación general de la República, no sentía el peso de los malos recuerdos ni los escrúpulos de los dirigentes anteriores. Besteiro se preguntaba si la República no había advenido demasiado pronto para tener éxito. Azaña no podía evitar el preguntarse si su anticlericalismo de 1931-1933 no lo hacía en cierto modo responsable del frenesí de 1936. La rivalidad entre Prieto y Largo Caballero había paralizado al Partido Socialista, y ambos hombres sentían escrúpulos que reducían su efectividad como dirigentes de guerra. Prieto odiaba las sentencias de muerte, y Largo Caballero habría dejado el cargo antes que acceder a la supresión de la izquierda no comunista. Los principales republicanos moderados, tales como Giral, Martínez Barrio, Bernardo Giner y Julio Just, eran hombres de temperamento pacifista, al igual que los dirigentes vascos Aguirre e Irujo y los catalanes Companys y Tarradellas. Todos ellos eran hombres cuyas energías estaban más o menos enervadas por hacerse a sí mismos preguntas acerca de sus errores pasados y tratando de minimizar los sufrimientos durante la guerra. Negrín era también fundamentalmente un civil y hombre pacífico; pero la muerte de algunos individuos no pesaba en su mente, ni tenía virtualmente un pasa-

do político sobre el que reflexionar. Admiraba el coraje, la tenacidad y la voluntad de mando. No era extraño que le parecieran cobardía los escrúpulos que él no podía compartir.

Consideraba que las fuerzas más importantes de la zona republicana eran los comunistas y los anarquistas, y que las fuerzas nacionalistas más significativas eran la Falange y los requetés. Esta opinión refleja el gran peso que otorgaba a aquéllos que actuaban, y su relativa despreocupación por los republicanos y socialistas moderados demuestra lo despegado que estaba de las labores y preocupaciones de la gran mayoría de las izquierdas españolas. Se tenía a sí mismo como fuera de la contextura de los partidos políticos y como dirigente de la España democrática y civil, al igual que el general Franco (asimismo un hombre de poco pasado político) era el jefe de la España militar y reaccionaria. Una vez confió al general Rojo que se sentía más próximo a algunos de los nacionalistas menos sectarios que a muchos de los dirigentes del Frente Popular[452]. Pudo haber considerado, hasta los primeros días de marzo de 1939, que de algún modo podría llegar a un entendimiento con sus oponentes, aunque éstos no mostraron mucho respeto por los viejos políticos de partido, hacia los que él tampoco sentía gran estima.

Hasta la caída de Cataluña, Negrín estuvo absolutamente convencido de su misión. Sabía que su ejército era disciplinado y estaba bien mandado. Mantuvo su cooperación con los oficiales más capaces sin tener en cuenta sus filiaciones políticas. No se hacía ilusiones sobre los motivos que guiaban a las diversas potencias europeas. Por otra parte, su disgusto hacia los partidos políticos le impidió probablemente darse cuenta de hasta qué punto la moral de los civiles se había derrumbado, y el colapso completo de principios de febrero puede que le sorprendiera. En todo caso, tras la batalla de Cataluña, perdió la seguridad que le había guiado a través de sus 18 meses de jefatura gubernamental. Sus críticos le han acusado de hipocresía porque a mediados de

febrero de 1939 dijo en una ocasión que estaba planeando la evacuación de la zona central y en otra que lo único que se podía hacer era resistir, resistir, resistir. Se sentía igualmente responsable del medio millón de refugiados que había en las playas al sur de Perpignan y de los 250.000 soldados republicanos que había en la zona central. En las últimas semanas de la guerra sus actos no fueron nunca decisiones, sino, tan sólo, meros reflejos. Ante la negativa de los nacionalistas a negociar, un reflejo de luchar; ante el golpe de Casado, un reflejo de rendición, para evitar el peor mal de todos, una guerra civil dentro de la guerra civil.

El 5 de marzo tomó un avión en la posición llamada Dácar, cerca de Elda, y regresó a Francia sin tomar posición ante el establecimiento de la Junta de Casado. El 15 de marzo la resistencia comunista había sido aplastada, a costa de unos centenares de muertos en la lucha y la ejecución de dos oficiales comunistas en Madrid. La Junta de Casado esperaba poder negociar ahora el fin de la guerra con los nacionalistas. La prensa de Madrid empezó a referirse a las «fuerzas bajo el mando del general Franco» dejando lo de «las hordas fascistas». Besteiro habló por Radio Madrid de preparar una «paz honorable». Serrano Súñer habló por Radio Zaragoza de una «paz victoriosa». El 14 de marzo Burgos anunció el establecimiento de un tribunal de Responsabilidades Políticas, el cual, bajo la presidencia del propio Serrano Súñer, juzgaría los actos de todos aquéllos que se hubieran opuesto al Movimiento Nacional desde el primero de octubre de 1934.

Al igual que Negrín antes que ellos, Besteiro y Casado esperaron lograr al menos un punto esencial: una garantía contra las represalias políticas. Pidieron que en el caso de celebrarse procesos se concedieran los procedimientos de los tribunales civiles y los derechos de la defensa al igual que en tiempo de paz. Pidieron que fuera respetada la libertad de los militares profesionales tanto como la de los milicianos, a menos que fueran culpables de delitos comunes. Los nacionalistas contestaron del mismo modo

como habían hablado a los soldados desmovilizados en los campos de concentración franceses y como replicaron a los diplomáticos ingleses que les preguntaron sobre sus intenciones hacia el enemigo derrotado. Serían generosos con «aquéllos que, no habiendo cometido delitos, habían sido arrastrados a la lucha por el engaño». «Ni el mero servicio en las fuerzas rojas ni el haber pertenecido a partidos políticos sin relación con el movimiento nacional serían considerados motivos de responsabilidad política.»[453]. Pero en cuanto a los procedimientos específicos y garantías, los derrotados tendrían que entregarse a la merced de los vencedores. En el pasado, las derechas españolas jamás habían querido garantizar las normas occidentales de justicia. Era quimérico suponer que lo harían ahora al término de una guerra civil en la que habían luchado para preservar a España de los males del liberalismo occidental.

Sin embargo, hicieron la comedia. El 23 de marzo dos oficiales que representaban a Casado se trasladaron en avión a Burgos para negociar. Se encontraron con una demanda de rendición de la aviación republicana entre las 3 y las 6 de la tarde del 25 de marzo. El plazo era imposible por lo corto, y los oficiales de Madrid explicaron que su petición de un aplazamiento estaba motivada en parte por la inseguridad de si todos los pilotos obedecerían las órdenes de llevar sus aparatos a Burgos. Sus interlocutores parecieron comprender este razonamiento y concedieron una nueva entrevista para el mismo día 25. Parecía que las negociaciones de paz iban bien, cuando a las seis en punto los representantes nacionalistas recibieron órdenes de romper las negociaciones dado que las fuerzas aéreas no se habían entregado según lo estipulado. Los oficiales republicanos se vieron obligados a regresar a Madrid.

En la mañana del día 26 Madrid ofreció entregar los aviones al día siguiente. Como no se recibiera respuesta, ofrecieron unas horas más tarde entregar los aviones aquella tarde. Los naciona-

listas replicaron ahora que se iba a iniciar el avance en todos los frentes y que los soldados republicanos deberían alzar bandera blanca y enviar rehenes a los comandantes nacionalistas. Julián Besteiro habló por radio una vez más para pedir a los soldados y al pueblo que salieran al encuentro de los nacionalistas como hermanos, en señal de reconciliación. Burgos había indicado que permitiría a los oficiales de la Junta que se marcharan de España, y en su despacho, en los sótanos del Ministerio de Hacienda, Besteiro insistió a sus colegas más jóvenes que debían aprovechar la oportunidad que se les ofrecía. Él decidió quedarse en Madrid. La entrada de los vencedores fue retrasada otras 24 horas por la tarea de retirar las minas que habían sido colocadas a lo largo de los límites occidentales de la ciudad ya hacía más de dos años. Aun así, varias personas resultaron heridas al salir al encuentro del ejército entrante el 30 de marzo.

Durante los días 28 al 30 de marzo, los nacionalistas recibieron la rendición de las guarniciones republicanas de la zona Centro-Sur, casi sin incidentes. Los últimos botes a motor y barcos de pesca zarparon de Valencia y pequeños grupos de refugiados, tanto militares como civiles, siguieron escapándose a través de la montañosa frontera de Aragón. En Alicante, el general italiano Gambara estaba dispuesto a permitir la evacuación de los refugiados políticos que esperaban en el consulado argentino. El 31 de marzo, un crucero francés apareció frente a la costa, pero dio media vuelta en vista de que las aguas estaban minadas y la recepción era insegura. A últimas horas del día llegó la Legión Extranjera, que tomó la jurisdicción de manos del general Gambara[454]. El primero de abril de 1939 la guerra terminó con la victoria completa e incondicional del general Franco.

Capítulo 28

LA TRAGEDIA DE ESPAÑA

UNO de los rasgos típicos del pueblo español ha sido el súbito derroche de energía por una causa idealista. A mediados del siglo XIII, con la reconquista de Andalucía, hizo un tremendo esfuerzo para asimilar los valores políticos, culturales y religiosos de musulmanes y judíos, dando así virtualmente un ejemplo único de coexistencia constructiva entre las tres grandes religiones: judaica, cristiana e islámica. Tras el descubrimiento de América, los españoles, animados en gran medida por un ideal mesiánico, despoblaron su patria para convertir al cristianismo a los pueblos de América y Filipinas, y vertieron su sangre y sus tesoros en el esfuerzo de Carlos V para mantener la unidad religiosa de Europa. En 1808, considerando a Napoleón el Anticristo, resistieron a los ejércitos franceses como no lo hizo ningún otro pueblo europeo.

El período que culminó en la segunda República y la guerra civil fue también uno de esos grandes estallidos de energía motivados en primer lugar por causas idealistas. Pero esta vez el gran propósito no era la conquista o asimilación de otras culturas, ni un esfuerzo para imponer la unidad religiosa e imperial como en el caso de la Contrarreforma. Fue un esfuerzo para asimilar el pasado de España y elevar el nivel económico y cultural de la secularmente descuidada madre patria. Durante el medio siglo anterior a 1930, la clase media estuvo admirando la prosperidad de la Europa occidental y la clase obrera absorbiendo los conceptos

de socialismo y anarquismo. Una generación de escritores y filósofos, partiendo de posiciones emocionales e ideológicas muy diferentes, intentó sintetizar lo mejor de la herencia española con lo mejor de la cultura europea del siglo XIX. La industria moderna había comenzado a desarrollarse en las provincias del Norte.

Cuando advino la República en 1931, pillando de sorpresa a muchos de sus dirigentes, los españoles quisieron hacer todo en seguida: separar la Iglesia del Estado, crear escuelas primarias y secundarias, reformar las universidades, reducir el número y aumentar la eficacia de la burocracia y el Ejército, conceder la igualdad legal a la mujer, distribuir los grandes latifundios entre los campesinos, mejorar el sistema de justicia aplicado tanto a los individuos como a las organizaciones políticas y laborales, construir carreteras, pantanos y centrales eléctricas, conceder la autonomía a las principales minorías culturales (los catalanes y los vascos). Quisieron dar a España rápidamente las libertades políticas y religiosas, y el sistema educativo público, de alta calidad, que Francia había logrado tras un siglo de experimentos y conflictos desde 1789. Querían que España, como nación, y asimismo los pueblos de España por separado, gozaran de esa afirmación de la autonomía cultural y de originalidad que era uno de los generosos ideales del siglo XIX. También querían que España gozara de aquellos beneficios, reales o imaginarios, que ellos veían emerger de los primeros años de la revolución soviética. Había enormes diferencias entre los grupos políticos de la clase media, y dentro de los partidos de izquierda, en la evaluación de lo que constituía la herencia deseable de las revoluciones francesas y rusa, y del liberalismo y el nacionalismo del siglo XIX. Pero en 1931 toda la energía política de España estaba dedicada a la consecución de estos diversos ideales europeos.

Es fácil decir, como muchos comentaristas tanto de las derechas como de las izquierdas han dicho, que la República trató de hacer demasiado, y hacerlo aprisa. Por ataques simultáneos a los

privilegios atrincherados del Ejército, la Iglesia y los terratenientes, el nuevo régimen provocó la hostilidad combinada de todas las poderosas fuerzas conservadoras del país. Al tratar de electrificar los ferrocarriles, construir pantanos, escuelas y carreteras secundarias, todo de una vez, creó déficit e invitó a los errores técnicos y a la corrupción financiera. Por medio de los planes para eliminar el presupuesto del clero y cerrar las escuelas de la Iglesia en un plazo de dos años, causó inconvenientes a los sacerdotes y disminuyó las facilidades disponibles para la educación. Éstas son las mayores críticas que se pueden hacer desde un punto de vista pragmático.

Los más severos críticos derechistas han acusado a la República de tratar de destruir la contextura tradicional de la sociedad. Para ellos, la separación de la Iglesia y el Estado, las reformas del Ejército, la ley del divorcio y el sistema de escuela laica no eran formas de progreso que rompieran viejas trabas. Eran ataques al concepto de España tal como ellos entendían a España, y la República europeizante representaba para ellos la «Anti-España». Los críticos marxistas, por otra parte, han reprochado con sarcasmo la timidez del nuevo régimen. Desde su punto de vista, la República se limitó a platónicas amenazas que en realidad no tocaron el poder de la Iglesia, el Ejército y los terratenientes. De ahí la impaciencia de la clase obrera y de los campesinos sin tierras, quienes en 1934 se fueron desligando rápidamente de la República, mientras que los críticos izquierdistas bromeaban sobre los dirigentes republicanos, tildándolos de políticos con «un brillante futuro en el pasado».

Aun reconociendo que en todas estas críticas hay una parte de verdad, no acepto la conclusión de que por causa de estos errores fuera inevitable el fracaso de la República y el estallido de la guerra civil. Hasta el verano de 1934, todos los conflictos surgidos de la legislación republicana eran susceptibles de una solución parlamentaria. En el caso de la Iglesia, por ejemplo, las Cor-

tes Constituyentes subestimaron claramente la fuerza de los sentimientos católicos en defensa de las órdenes religiosas y las escuelas. Las elecciones de 1933 pusieron en claro este cálculo erróneo, y las escuelas y conventos siguieron operando como en el pasado. En el caso del programa de obras públicas tipo New-Deal de Prieto, el debate fue exactamente igual al que tuvo lugar en todos los países occidentales en la década de los 1930 concerniente al déficit financiero y al patronazgo gubernamental de proyectos industriales en países capitalistas. Hubo mucha alarma cuando Marcelino Domingo importó trigo y cuando compró para el Gobierno carbón asturiano, que de otro modo era invendible. El régimen del general Franco ha hecho ambas cosas en numerosas ocasiones. Los altos oficiales del Ejército se sintieron perseguidos cuando Azaña puso en ejecución las leyes de reforma del mismo. El Gobierno que le sucedió conservó las principales reformas estructurales mientras que ascendía a los oficiales de mayor prestigio en cada cuerpo, y no hay razón para suponer que en circunstancias de paz el Gobierno civil y el ejército profesional no pudieran haber llegado a nueva comprensión del papel de aquél en la República. Los conflictos de jurisdicción entre el Gobierno central y los gobiernos regionales podían muy bien también hallar soluciones negociadas. De los principales problemas con que tropezó la República, a mí me parece que el único para el que era verdaderamente imposible hallar una solución moderada y legislativa era el de la reforma agraria.

La conclusión a que he llegado con referencia a las posibilidades de la República en sus primeros tres años están basadas en la atención con que seguí, día tras día, la obra legislativa de las Cortes y la administración de las leyes y departamentos más importantes. Dentro de la mayoría anticlerical y antimilitarista siempre hubo sinceros y dignos defensores de los mejores elementos de la Iglesia y el Ejército. Dentro de la mayoría de cen-

tro-derecha elegida en 1933 hubo siempre defensores del programa de escuelas públicas, de las obras hidráulicas y de la nueva legislación social. Si el problema de la reforma agraria desafiaba incluso los comienzos de una solución viable, esto no se debía meramente a la timidez, los temores ideológicos o el egoísmo de los diputados. La enorme variedad de condiciones geográficas y sociales, la ignorancia técnica de los campesinos, las cuestiones del pago de las tierras y las inversiones para el mejor uso de ellas, la primitiva conciencia política y los odios largo tiempo reprimidos del campesinado, el sabotaje de los terratenientes y de la guardia civil de cualquier suave esfuerzo en favor de ellos, todos estos factores se interpusieron y se interponen aún hoy día con la solución del problema de la tierra.

La crisis de la República parlamentaria ocurrió en el verano y otoño de 1934. Según la Constitución republicana, al igual que bajo la monárquica, el ministro de la Gobernación recibía amplios poderes discrecionales para el mantenimiento del orden público. Miguel Maura, Santiago Casares Quiroga y Diego Martínez Barrio se vieron todos ellos obligados, como ministros de la Gobernación, a utilizar policías armados para reprimir los levantamientos anarquistas; pero fueron escrupulosos y no emplearon más que el mínimo de fuerza compatible con la preservación del orden público y tuvieron cuidado de no confundir los problemas de orden público con las cuestiones políticas y sociales.

En la primavera de 1934, el nuevo ministro de la Gobernación, Rafael Salazar Alonso, adoptó la posición de que las huelgas no eran simplemente conflictos económicos, y que la República debía ser defendida por todos los medios disponibles contra la próxima «revolución marxista». En junio, los recién organizados campesinos de Extremadura y Andalucía amenazaron con una huelga general, que si la hubieran llevado a cabo habría echado a perder la cosecha, Algunos de sus jefes locales eran demagogos semianalfabetos que redactaban folletos exaltando la

quema de cosechas y el asesinato de los terratenientes. Los dirigentes nacionales responsables trataron de disuadirles de que no se declararan en huelga. El ministro de la Gobernación prefirió, sin embargo, castigar los paros locales esporádicos con la deportación de centenares de campesinos sin tierras a cárceles de Castilla y con la detención de varios diputados socialistas, violando la inmunidad parlamentaria. Al defenderse ante las Cortes, insistió en que tanto los sindicatos campesinos como los socialistas estaban preparando la revolución y que la inmunidad parlamentaria no incluía el derecho a hacer propaganda revolucionaria. Con su acción, castigó más ideales y afiliaciones que hechos. La derecha parlamentaria le aplaudió, y Samper, el jefe del Gobierno, aunque estaba ansioso por aplacar a la opinión liberal, no condenó el abuso. Los socialistas, tanto moderados como revolucionarios, advirtieron que no dejarían que les enmudecieran y que les amordazaran, como había ocurrido en Alemania a partir de enero de 1933 y en Austria desde febrero de 1934.

Los problemas regionales pasaron a primer plano en el verano de 1934, al mismo tiempo que el abuso político del poder de la policía. El Gobierno de Companys se negó a aceptar la decisión del Tribunal de Garantías anulando la ley de Cultivos catalana, y los municipios vascos desafiaron al Gobierno en cuestiones de impuestos y elecciones locales. En cada caso el primer ministro, Samper, estaba negociando soluciones de compromiso que esperaba presentar a las Cortes en otoño. Mientras tanto, se descubrieron los desembarcos de armas en Asturias, y la CEDA anunció de antemano que retiraría su apoyo a Samper, pues consideraba inaceptables sus concesiones a los catalanes y a los vascos.

Por lo tanto, se planteó una crisis parlamentaria tan pronto como comenzaron las reuniones de Cortes el primero de octubre. La CEDA era la minoría más numerosa de la Cámara. Había apoyado a la coalición centro-derecha sin entrar a formar parte del Gabinete, pero ahora demandó su derecho a ocupar varias

carteras ministeriales. En circunstancias parlamentarias normales, Gil Robles se habría unido al Gobierno ya desde mucho tiempo antes, pero no sólo los socialistas y los republicanos liberales, sino el católico y conservador presidente Alcalá-Zamora desconfiaban profundamente de él. Gil Robles había insistido siempre en que respetaría la legalidad establecida, pero no criticó en lo más mínimo el trato que Salazar Alonso había dado a los campesinos o a los diputados socialistas. Públicamente había distinguido a su movimiento tanto del fascismo como del nazismo, pero era admirador de Dollfuss y nunca condenó los métodos del dictador austriaco para aplastar a la oposición. Cuando le preguntaban si era leal a la República, explicaba que la forma de régimen era «accidental». Todo el mundo sabía que su partido dependía del apoyo financiero monárquico.

En estas circunstancias, todos los dirigentes moderados de los partidos como Azaña, Martínez Barrio, Felipe Sánchez Román y Miguel Maura advirtieron al presidente de la República que no permitiera la entrada de la CEDA en el Gobierno, y todos ellos rompieron públicamente con él cuando anunció que Lerroux formaría un Gabinete con tres ministros de la CEDA. Un dividido Partido Socialista desencadenó la huelga general, que para los jefes mineros de la UGT significaba una insurrección armada en Asturias. En Barcelona, el Gobierno Companys trató de organizar una especie de pronunciamiento civil, proclamando el Estado catalán dentro de la República «federal» española, e invitando a un «Gobierno democrático en el exilio» a establecerse en Barcelona. En la zona de Oviedo los mineros crearon una Comuna basada en la cooperación de los socialistas de izquierda, los comunistas, anarquistas y trotskistas. Los más primitivos de entre ellos cometieron unas docenas de asesinatos y algunos saqueos. En Cataluña, la sublevación cedió rápidamente ante la firmeza y el sentido común del general Domingo Batet, mientras que en Asturias, el Gobierno, temeroso de depender de las tropas

españolas, empleó a los moros y al Tercio de extranjeros para «pacificar» la provincia. Dos semanas de lucha, seguidas por dos meses de implacable represión, provocaron un escándalo internacional. La constante censura impidió a la opinión pública española saber lo que había pasado durante la lucha armada y luego en las comisarías de policía y en las cárceles. Varios centenares de ayuntamientos fueron suspendidos, y los nombrados por el Gobierno ejercieron sus funciones durante todo el año 1935.

Considerados en su ilación, la huelga de los campesinos, los alzamientos de octubre, la larga y continuada suspensión de las autoridades locales elegidas, y la fuerte represión asturiana, estuvieron a punto de destruir la República. Un régimen democrático no podría actuar si el ministro de la Gobernación se sentía libre para detener a voluntad a los oponentes políticos. Tampoco podía actuar si el jefe de la minoría mayor de las Cortes se negaba a declarar su lealtad a la República, o un sector del Partido Socialista preparaba, y participaba en ella, una sublevación armada contra el Gabinete elegido constitucionalmente. Era imposible que actuase si los gobiernos regionales se alzaban contra Madrid, y si las fuerzas armadas o la policía imponían su ley al restablecer el orden. No podía actuar si mes tras mes se prolongaba la censura de prensa y centenares de concejales municipales elegidos tenían que seguir suspendidos porque sus miembros pertenecían a los mismos partidos políticos que algunos de los dirigentes revolucionarios. Éstos no eran problemas que, como las controversias mencionadas, pudieran ser resueltos dentro de una República democrática con cierta experiencia, espíritu de compromiso y una creciente madurez política. Eran abusos que atacaban las bases del régimen.

En los veinte meses que transcurrieron de octubre de 1934 a julio de 1936 pudieron haber sido aprendidas las terribles lecciones de la revolución de Asturias. Pero de hecho la revolución de octubre pareció, tanto a las derechas como a las izquierdas, que

había sido mal liquidada. Las primeras sostenían que las sentencias de muerte debieron haber sido cumplidas y que las investigaciones sobre la tortura constituían un ataque intolerable contra las fuerzas armadas que habían salvado a España del comunismo. Las últimas se negaron a reconocer la responsabilidad de aquéllos que se habían sublevado con las armas en la mano contra el Gobierno constitucional. Presentaban a los mineros (y al Gobierno catalán) como víctimas completamente inocentes de la «provocación fascista». La arbitraria suspensión de centenares de concejales municipales y los frenéticos esfuerzos para complicar a Azaña dieron por resultado una alianza defensiva entre los republicanos moderados y las izquierdas. La opinión pública española en 1935 estaba dominada por dos emociones completamente negativas: el temor al fascismo y el temor al comunismo. En presencia de la continuada censura y de la esterilidad parlamentaria, los grupos de acción directa de las derechas y las izquierdas prepararon el terreno para una prueba de fuerza.

Al mismo tiempo, es importante poner de relieve que no había nada inevitable o irreversible en la degradación de la situación. Un historiador debe tratar estrictamente con lo que pasó más bien que con lo que pudo haber pasado; pero si no menciona los factores que pudieron haber producido un diferente curso para los acontecimientos, corre el riesgo de dar una falsa impresión de «predestinación». Dentro de la coalición centro-derecha había hombres como Manuel Giménez Fernández, dispuesto a trabajar para una efectiva reforma agraria; como Filiberto Villalobos, determinado a proseguir la construcción de escuelas públicas; como Joaquín Chapaprieta, decidido a cortar el despilfarro administrativo y a redistribuir los impuestos de un modo más equitativo. Los ministros radicales de Obras Públicas no estaban tan capacitados como Indalecio Prieto, pero intentaron continuar el desarrollo hidráulico. Una gran fracción de la coalición gobernante apoyó a Portela Valladares cuando éste resistió

con éxito los esfuerzos de Gil Robles para que la guardia civil fuera puesta bajo la autoridad del ministro de la Guerra. Si las heridas de la revolución asturiana hubieran sanado, estos elementos constructivos de la derecha moderada habrían tenido mucho mayor peso. En el otoño de 1935 algunos de estos dirigentes insistieron en el restablecimiento de los ayuntamientos suspendidos y de la Generalitat catalana, así como en la amnistía para miles de presos políticos, antes de la próxima campaña electoral. A fines de 1935, sólo una amnistía habría alterado toda la naturaleza de aquella campaña, y es por tanto perfectamente razonable decir que todo el curso de los acontecimientos que culminaron en la guerra civil pudo haber sido evitado. Esta posibilidad ha sido oscurecida por los escritos polémicos. La mayoría de los intérpretes izquierdistas, han identificado sin discriminación a la mayoría de las Cortes de 1933-1935 con la reacción y el fascismo. Los intérpretes franquistas se han complacido en sus propios razonamientos para pretender que la causa nacionalista en la guerra era la causa de la derecha moderada.

La victoria de las izquierdas en las elecciones de febrero de 1936 llevó al poder a Manuel Azaña una vez más. En términos del programa del Frente Popular y de la nueva mayoría de las Cortes, el Gobierno reasumiría ahora la construcción de una República laica y reformista cuyos fundamentos habían sido puestos en el período de 1931-1933. Sin embargo, varias circunstancias hicieron absolutamente imposible para Azaña gobernar como él, y la mayoría del pueblo que había votado por él, esperaron. La estabilidad de sus primeros gobiernos dependió de la cooperación de los socialistas; pero éstos estaban siempre internamente divididos sobre la conveniencia o no de compartir el poder con los republicanos burgueses. Durante el período de las Cortes Constituyentes habían apoyado firmemente a Azaña; pero los desengaños como el de la reforma agraria, la amargura acumulada por la represión asturiana, el progreso de las teorías

revolucionarias entre los miembros más jóvenes y la conversión de Largo Caballero a la posición revolucionaria, alteraron radicalmente la postura de los socialistas. Ahora intentaban más bien espolear al Gobierno reformista de las izquierdas que compartir la responsabilidad con él para la puesta en práctica de un programa gradual.

La radicalización del Partido Socialista se reflejó en la intoxicación revolucionaria que se desarrollaba entre las masas. Esta intoxicación no respondía a ningún programa específico o de partido, ni era controlada por la UGT o la CNT. Para los comunistas era positivamente embarazosa. He conocido a varios intelectuales caballeristas en el exilio, todos ellos admiradores de Hugh Gaitskell y Paul Henri Spaak. He conocido a obreros caballeristas en España cuya principal preocupación era, y es, gozar de completa libertad sindical, sea bajo una Monarquía o una República. (Eran los «accidentalistas» de la izquierda, lo mismo que la mayoría de la CEDA constituía los «accidentalistas» de la derecha).

Largo Caballero fue un estuquista, un burócrata sindical y un recién converso marxista. Pero el fenómeno «caballerista» sólo puede ser comprendido en términos de la cuestión campesina. Tenía las mismas raíces que el movimiento zapatista en México y la revolución castrista en Cuba. Durante décadas, los oradores anarquistas estuvieron predicando la dignidad del trabajo y la absoluta igualdad del hombre con los campesinos que los terratenientes trataban como animales domésticos. Los dos primeros años de la República trajeron sustanciales ventajas políticas y económicas a los campesinos, y un gran aumento de la propaganda marxista y anarquista. Desde el principio del período Lerroux, una especie de «guerra fría» en el campo redujo los salarios a niveles prerrepublicanos. Luego, la huelga de los campesinos y la sublevación de Asturias dio al Gobierno la oportunidad de reprimir a la organización obrera en las poblaciones pequeñas.

Las esperanzas frustradas, y los salarios de hambre, conformaron una mentalidad revolucionaria entre las masas rurales, y más de un joven intelectual marxista, que en los países del norte de Europa habría sido un socialdemócrata, abrazó el ideal revolucionario, indignado por la suerte de los campesinos.

La corriente caballerista fue más fuerte desde el verano de 1934 hasta finales de 1936. Emocionalmente estuvo motivada por el irresistible deseo de lograr la plena camaradería entre la clase media liberal y los intelectuales por un lado, y el proletariado agrícola e industrial por el otro. Asumía sin vacilación alguna que el proletariado era la clase que guiaría los destinos de la humanidad en un futuro libre de explotación. Los caballeristas no tenían programa dogmático, ni rendían culto al héroe. Largo Caballero no era considerado un *Duce* o un *Führer*. No tenía escoltas de motoristas ni se le dedicaban canciones. Simbolizaba lo mejor que la clase obrera española había producido en el camino de la autoeducación y la dedicación absoluta a la liberación económica y espiritual de las masas.

Largo Caballero no era el único dirigente del Partido Socialista, desde luego. Julián Besteiro podía igualarse a él por su dedicación, honestidad y ausencia de toda ambición mundana. Sin embargo, en el contexto internacional, Besteiro era el equivalente preciso de aquellos generosos pero ineficaces profesores italianos, alemanes y austriacos que no habían constituido obstáculo alguno para el triunfo del fascismo en sus países. Indalecio Prieto era un político más mundano y práctico que Besteiro, pero igualmente, en el contexto internacional, se parecía a un Ramsay Mac Donald que era más admirado fuera de su partido que dentro de él, y que sería capaz de presidir (como había presidido Mac Donald en la Inglaterra de 1931) un Gobierno de «unión nacional», que en realidad se limitaría a entregar el país a los reaccionarios. En España, Largo Caballero era el único jefe socialista del que se podía dar por descontado que no se «vendería» a

la burguesía, y era el único dirigente de cualquier partido que podía hallar entusiastas colaboradores en todos los sectores desde el campo republicano liberal a los comunistas y anarquistas.

El movimiento caballerista incluía también ciertas ilusiones temporales. Los escritores de *Claridad* habían visitado algunas granjas colectivas escogidas de la Unión Soviética y dado por supuesto que lo que veían en estas aldeas a lo Potemkin era la verdad, o sería muy pronto la verdad de toda la vida rural en Rusia. Stalin promulgó en 1935 una Constitución que no sólo garantizaba las principales libertades «burguesas» logradas por la Revolución Francesa, sino que incluía el derecho al trabajo y prometía la construcción de una sociedad completamente sin clases. Desde luego no todas aquellas garantías y libertades habían sido trasladadas a la práctica. Pero los españoles estaban acostumbrados a las constituciones que formulaban una futura armazón más bien que una presente realidad. Su propia Constitución era de este tipo. Como eran completamente honestos en sus intenciones, supusieron que José Stalin también lo era. Las purgas sangrientas, que iban a constituir una completa burla de la libertad soviética, no comenzaron hasta agosto de 1936, tras el comienzo de la guerra civil en España.

Al creer que España estaba preparada para el Gobierno proletario, los dirigentes y obreros de la UGT hicieron igualmente suposiciones optimistas sobre los beneficios automáticos de la socialización. Prieto sabía, por su experiencia con los ferrocarriles nacionalizados, que el control gubernamental y los altos salarios no garantizaban de momento un manejo más eficiente y no llevaban en sí mismos a los obreros a mostrar más simpatía por los problemas de gestión. La mayoría de los elementos de la UGT no estaban preparados para reconocer este hecho. Durante décadas la moral optimista de los obreros conscientes de clase, y su sentido de la injusticia del sistema capitalista, les afirmaron en la creencia de que el proletariado era el único que «en realidad» ha-

cía el trabajo productivo, y que por lo tanto deberían gobernar. Subestimaban grandemente la complejidad de las funciones organizativas y administrativas ejecutadas por aquéllos a quienes sólo sabían ver como explotadores.

El efecto práctico de estas esperanzas e ilusiones variadas fue que en lugar de apoyar al Gobierno de Azaña a principios de la primavera de 1936, la mayoría socialista anticipó la frustración de los liberales burgueses y esperó confiadamente alcanzar el poder para el proletariado en un futuro que ya se podía vislumbrar. Al mismo tiempo la derecha antidemocrática preparó francamente el derribo de la República. La Falange se expansionó rápidamente. El prestigio de Calvo Sotelo aumentó mientras el de Gil Robles decaía. Oficiales activistas conspiraron preparando un alzamiento y los carlistas se preparaban para una cruzada armada. El Partido Radical de Lerroux había sido destruido por su continuo apaciguamiento de los monárquicos y de la Iglesia, y, finalmente, por el escándalo del estraperlo. En junio de 1936 los hombres de la República liberal: Azaña, Casares Quiroga, Martínez Barrio, Felipe Sánchez Román y Miguel Maura, se hallaban completamente aislados entre los militares, monárquicos y la derecha fascista por un lado, y la izquierda marxista y anarquista por el otro. Tras la sublevación de Asturias, unos buenos estadistas aún pudieron salvar a la República. A mediados de 1936 las fuerzas parlamentarias democráticas ya no podían controlar la situación.

Considerando en conjunto la historia de los cinco años de paz de la República, creo que hubo varios factores importantes que trabaron al régimen desde el principio. Uno de los más importantes fue que el nuevo régimen nunca pudo contar con la ayuda leal de los cuerpos establecidos de funcionarios civiles. En la España del siglo XX las carreras de los servicios públicos estaban abiertas al talento. Hombres de origen modesto (Pedro Segura en la Iglesia, Francisco Franco en el ejército, Niceto Alcalá-Za-

mora en los cuerpos judiciales y civiles) se distinguieron por sus méritos. Pero los nombramientos más altos seguían siendo un don del rey. De los hombres que ocupaban altos cargos del Estado, en 1931, muchos estaban de veras agradecidos a Alfonso XIII. La mayoría de ellos, dejando aparte sus sentimientos hacia el rey, apreciaban mucho las relaciones aristocráticas que su éxito profesional les había proporcionado. Inmediatamente estigmatizaron de «desagradecidos» a la minoría de jueces, obispos y generales que favorecieron públicamente al nuevo régimen, y al igual que los funcionarios públicos alemanes bajo la República de Weimar, mostraban su desdén hacia una «República de trabajadores de todas clases».

También hubo desde los primeros días un problema de disciplina política, simbolizado gráficamente por el tan empleado adjetivo: desbordado. Uno tras otro, los dirigentes responsables se vieron, o hundidos o forzados a adoptar posiciones extremas por sus seguidores más radicales, o por grupos que amenazaban con atraerse a sus partidarios. Alcalá-Zamora fue desbordado por una masa de diputados anticlericales que hallaron en Azaña a un dirigente más capaz. El socialista moderado Prieto fue desbordado por Largo Caballero, que tomó la jefatura de los socialistas revolucionarios. Y Largo Caballero, a su vez, fue amenazado a su izquierda por el extremismo de las posiciones de la CNT. Lerroux fue desbordado por la actitud militante en favor de la Iglesia, el Ejército y la aristocracia social y financiera tomada por Gil Robles, y Gil Robles fue desbordado por la fraseología nazi de algunos de sus seguidores, y, finalmente, por el monarquismo reaccionario de Calvo Sotelo.

En relación con esto, había la debilidad que de modo sucinto expresa la frase: *gastado por el poder*. Los diputados eran bulliciosos, retóricos, poco experimentados, deseosos de gozar de los frutos de su cargo público. Al igual que con los diputados de las tercera y cuarta repúblicas francesas, el derribo del Gobierno

existente era el deporte casero favorito. El primer ministro y sus principales colaboradores tenían que emplear constantemente sus dotes persuasivas para mantener la disciplina de su mayoría parlamentaria. Una gran variedad de motivos, desde los basados en los más altos principios a los más caprichosos o sórdidos, podían influir en los votos de los diputados. Ciertamente era verdad que, tras cada cambio ministerial, los principales ministros eran *gastados por el poder*.

Muchos analistas han llegado, examinando estos fenómenos, a la conclusión de que los españoles están incapacitados para la democracia política. Pero debe ser recordado que la República siguió a una dictadura de siete años y que la precedente Monarquía constitucional había falseado regularmente los resultados de las elecciones y la labor de las Cortes. La Democracia sólo puede ser aprendida a través de la experiencia, y la libre agitación política siempre incluye, quiérase o no, ciertas «componendas» en las alturas. Además, si uno fuera a juzgar tan sólo basándose en la Commonwealth cromwelliana o en el Congreso Continental, llegaría fácilmente a la conclusión de que ni el pueblo inglés ni el norteamericano son capaces de autogobernarse.

La República sufrió también de lo que los historiadores nacionalistas han llamado un constante estado de desorden, pero que yo creo que sería mejor calificado como estado de intranquilidad. Desde la época de Napoleón, y especialmente tras el comienzo de las guerras carlistas, la clase media española estuvo preocupada por la cuestión del *orden público*. La forma más segura de desacreditar a un Gobierno era demostrar que no podía controlar a los masones, a los carlistas, a los estudiantes o a los anarquistas, según fuera el caso. La guardia civil, fundada en 1844, pronto fue conocida como *La Benemérita* porque limpió los caminos rurales y los pasos montañosos de aquellas bandas cuyos miembros eran medio Robin Hood y medio bandidos, indivi-

duos que constituyeron el material humano de las guerrillas carlistas y de las sublevaciones populares anarquistas.

La República sabía que había de mantener el orden público si quería ganarse el consenso final de la clase media. Los anarquistas, opuestos por principio a toda participación política, se dieron cuenta de que la amenaza de desorden era su mejor arma para obtener concesiones de la burguesía. Los monárquicos, que a veces estaban en buenas relaciones con los anarquistas en las zonas rurales, hallaron fácil subvencionar y provocar las actividades anarquistas como medio de desacreditar al nuevo régimen. Hasta finales de la primavera de 1936, los desórdenes anarquistas fueron locales y esporádicos, y sofocados fácilmente. Pero su frecuente repetición, y la amplia publicidad que se les daba en circunstancias de completa libertad política, engendraron un estado de intranquilidad que llegó hasta minar la estabilidad, y los nervios, de los gabinetes republicanos.

En proporción a la amenaza que pareciera haber contra el orden público, aumentaba el peligro de la intervención militar. En todos los países hispánicos, las fuerzas armadas tienden a verse a sí mismas, mucho más que a los gobernantes civiles, como los guardianes decisivos de la legalidad. Hablando en general, estos países tienen clases medias pequeñas, políticamente tímidas e inexpertas, clases obreras militantes y desesperadamente pobres, así como tradiciones de libertad intelectual que proceden en gran medida de la agitación política libremente conducida sin que haya una adecuada expresión constitucional para tal agitación. Cuando un régimen dado, sea conservador o liberal, honesto o corrompido, amenaza ser desbordado por la creciente agitación social, el Ejército toma sobre sí el deber de restablecer el orden público.

La República española comenzó la obra de dotar a España de instituciones que respondieran a la expresión democrática de la opinión pública. El Gobierno y el Ejército se miraron mutua-

mente con desconfianza desde el primer momento, el primero conociendo la tendencia de los militares a considerarse los árbitros de la política nacional, los segundos sabiendo que uno de los principales propósitos de la República sería reducir el poder político del Ejército. En agosto de 1932 el general Sanjurjo se definió a sí mismo como el defensor de la nación contra las Cortes «ilegítimas» y las exageradas concesiones a la libertad regional. En octubre de 1934, el Ejército halló natural y correcto que el Gobierno trajera tropas africanas para aplastar la sublevación de Asturias, y se sintió halagado en el curso de 1935 al verse consultado por los políticos sobre la oportunidad de un golpe militar en el caso de nuevas agitaciones revolucionarias. En el momento de la victoria electoral del Frente Popular, en febrero de 1936, elementos militares ofrecieron sus servicios a Portela Valladares para anular las elecciones, y en el transcurso de la primavera advirtieron a Azaña repetidamente contra los «insultos» al Ejército y el creciente estado de desorden.

Mientras tanto, prepararon un *putsch* que habría de gozar del apoyo de los gobiernos de Italia, Portugal y Alemania, y la ayuda de poderosos intereses privados de Inglaterra. Intentaron un pronunciamiento que derribara al débil Gobierno republicano en nombre de la ley y el orden, contrarrestando así la posibilidad de un dominio parlamentario o revolucionario de la izquierda militante. La resistencia del pueblo en las grandes ciudades y la manifiesta ausencia de apoyo popular en todas partes, excepto en Navarra y partes de Castilla la Vieja, convirtieron rápidamente un pronunciamiento fracasado en una guerra civil.

En la zona del Frente Popular, la derrota del pronunciamiento animó el fervor revolucionario de las masas, que inmediatamente inauguraron una gran variedad de experimentos colectivos locales de inspiración semianarquista y semimarxista, y que condujeron a una feroz purga de sacerdotes, policías y elementos militares, así como de personalidades civiles tenidas por cómpli-

ces de los sublevados. En la zona insurgente, fanáticos carlistas y falangistas compitieron en la purga física de elementos moderados y de extrema izquierda en el norte de España, mientras que el ejército de África flagelaba Andalucía al modo característico de los ejércitos coloniales de todas las épocas. El particular salvajismo de la guerra durante el primer año queda explicado sólo en parte, sin embargo, por la psicología colonial de los oficiales de carrera y el fanatismo ideológico de los milicianos de derechas e izquierdas. El pueblo español ignoraba en gran medida el alcance destructor de las armas modernas. En las guerras carlistas del siglo XIX se luchó con pequeños destacamentos armados de fusiles y mosquetes. España no había visto nada parecido a la carnicería de la guerra de Crimea, las batallas austro-francesas en el norte de Italia en 1859 (que precisamente inspiraron a Henri Dunant la fundación de la Cruz Roja Internacional) y la guerra civil norteamericana. España no había vivido el sitio de París por los prusianos ni la Comuna de 1871, ni tampoco la primera guerra mundial.

La guerra civil vino como la suelta climática de las pasiones políticas de un siglo. Carlistas y liberales habían estado luchando para dominar a la nación desde la época de la Revolución Francesa. Ninguno de los choques anteriores fue decisivo, y ambos partidos reconocieron inmediatamente que se jugaban el todo por el todo en el verano de 1936. En el bando de las izquierdas, el marxismo y el anarquismo contribuyeron igualmente a la creencia del «destino manifiesto» entre el proletariado. Entre los militares las humillaciones de la guerra con los Estados Unidos en 1898 y las frustraciones de las campañas de Marruecos crearon una casta de oficiales ávida de establecer el dominio colonial sobre la población de la madre patria. En el bando de las derechas, el fascismo y el nazismo parecieron en general formas de «destino manifiesto» capaz de contrarrestar la rebeldía del proletariado. En ambos bandos, los compromisos emocionales se vie-

ron reforzados por las actitudes hacia la herencia de las revoluciones francesa y rusa.

Quizá no haya habido período en la historia de ninguna nación (incluyendo a la Francia revolucionaria de 1789-1799 y la revolucionaria Rusia de 1917-1928), en que una proporción tan grande del pueblo actuara conscientemente por convicciones íntimas, como lo hizo el pueblo español durante los años 1931-1939. Los ritos de la tauromaquia y la herencia de la Inquisición fueron también dramáticos ingredientes de la crueldad desplegada en la guerra. Pero la coyuntura de pasiones políticas e ideológicas es ciertamente la principal explicación. Los que gustan de creer en la supuesta crueldad natural de los españoles tienden a olvidar que durante la guerra de Independencia de los Estados Unidos, a los leales a Inglaterra se les untaba de alquitrán y se les emplumaba; las campañas de la Vendée durante la Revolución Francesa, las características de la segunda guerra mundial en la Europa oriental, las fanáticas matanzas ocurridas en los pasados años en Argelia, Angola y El Congo. Dondequiera que el hombre considera que sus enemigos no pertenecen a la misma porción privilegiada de la especie humana que ellos, ocurren las mismas salvajadas.

Hacia la primavera de 1937 las peores pasiones se habían encalmado. En la zona republicana el Gobierno de Largo Caballero trabajó firmemente para restablecer la autoridad del Estado y permitió un grado de libertad política tan amplio como permitieron la mayoría de los regímenes democráticos maduros en tiempo de guerra. En la zona nacionalista, la dictadura personal y conservadora del general Franco impuso rápidamente su autoridad sobre los carlistas y la Falange. El régimen siguió siendo tan cruel y represivo como en los primeros días, pero su poder fue ejercido a través de canales más «normales». A los ojos de la mayoría de los españoles, el planteamiento era entre una España democrática e izquierdista y una España militar y reaccionaria.

Fuerzas extranjeras se vieron grandemente comprometidas desde el principio. Sólo la ayuda de varias potencias permitió a los insurgentes recobrarse del fracaso del pronunciamiento, y la oportuna llegada de armamento ruso salvó a la República en noviembre. Pero en términos psicológicos, al menos, la mayoría de los españoles creyeron hasta la primavera de 1937 que su destino sería decidido principalmente por fuerzas españolas.

Sin embargo, cuanto más tiempo duraba la guerra, evidentemente más decisivas eran las intervenciones extranjeras. La Legión Cóndor y los italianos fueron decisivos en la campaña del Norte, de abril a octubre de 1937. Stalin decidió la caída de Largo Caballero y la supresión del POUM. Los consejeros rusos escogieron Brunete como lugar para la primera ofensiva republicana. La reapertura de la frontera francesa en marzo de 1938 hizo posible la continuación de la resistencia por parte de la República. El creciente favoritismo británico hacia los nacionalistas, el apaciguamiento de Italia y Alemania, y, finalmente, el pacto de Munich, decidieron la suerte de la República. Desde mediados de 1937 la guerra no fue más que una agonía prolongada. En ninguna de ambas zonas correspondió la política gubernamental a las fuerzas políticas tal como existían en 1936. La capacidad militar de ambos bandos dependió casi enteramente de los actos de las grandes potencias europeas.

A través de la década de los 1930 la situación internacional se desarrolló de modo desfavorable para la República española. Los años de paz coincidieron con la fase peor de la depresión económica mundial. La República se comprometió a desembolsos en un programa de obras públicas tipo New-Deal en una época en que los Estados Unidos, Inglaterra y Alemania tenían gobiernos conservadores para quienes los presupuestos equilibrados y la empresa privada eran las únicas virtudes económicas. Toda nación importante trataba de resolver los problemas de la depresión por medio de la autarquía más bien que por la expansión del

comercio, y el Banco de Francia era la única institución extranjera que se mostró dispuesta a ayudar al nuevo régimen, a respaldar la peseta.

La victoria electoral de las derechas en 1933 respondió a un movimiento de la opinión pública dentro de España; pero también coincidió con la consolidación de regímenes fascistas en Alemania y Austria. En los dos años y medio que precedieron al estallido de la guerra civil, las derechas confiaron en el fascismo como «ola del futuro», y las izquierdas estuvieron decididas a no dejarse derrotar de la forma que lo habían sido las izquierdas alemanas y austriacas. La huelga de los campesinos y la sublevación de Asturias es probable que no hubieran ocurrido, y seguramente no habrían tenido tan desastrosas consecuencias si Alemania y Austria hubieran gozado todavía de la libertad política en 1934.

Durante la guerra, la opinión pública en los países occidentales fue en su mayor parte favorable a los republicanos; pero exceptuando la ayuda médica y el envío de los voluntarios de las brigadas internacionales, esta opinión no tuvo ningún valor práctico para la República. En cuanto a los Estados Unidos, el neutralismo y el aislacionismo contrapesaron las conocidas simpatías personales del presidente hacia la República. El Gobierno inglés favorecía a los nacionalistas, y Francia consideró imposible desafiar a la vez a las potencias fascistas y a Inglaterra ayudando a la República española. Durante la segunda guerra mundial, el ejército de los Estados Unidos aplicó a aquéllos que lucharon en las brigadas internacionales la expresiva frase de «antifascistas prematuros».

La guerra en sí constituyó la más amarga de las educaciones políticas para el pueblo español. Éste aprendió lo que el dominio militar hace al tejido de la vida civil, y sufrieron la vana jactancia de la mentalidad fascista. Fue el primer pueblo europeo en experimentar los bombardeos aéreos en masa, y el único pueblo de la Europa occidental que sufriera directamente la cínica explota-

ción comunista del ideal del Frente Popular. Aprendieron los peligros del izquierdismo infantil, tanto en los aspectos políticos como en los económicos de una economía colectivizada. También se enteraron de que una guerra civil pone a una pequeña nación a merced de las grandes potencias.

Respecto al desarrollo de España, el resultado más importante de la guerra civil fue la derrota total de los liberales y las izquierdas. La Iglesia y el Ejército lograron un poder más grande que bajo ningún gobierno conservador monárquico o dictadura militar de todo el siglo XIX. Los terratenientes volvieron a recuperar sus fincas y su autoridad, y el abismo entre su nivel de vida y el de los campesinos siguió siendo tan grande como antes de 1931. La Institución Libre de Enseñanza y sus varias filiales fueron suprimidas. La censura de prensa, de libros, teatro y cine se hizo mucho más severa que en tiempos de Primo de Rivera. (Tal censura existió bajo la Monarquía sólo en momentos de grave tensión social). Ciertamente, puede decirse que el general Franco creó el régimen más poderoso y represivo que haya existido en España desde el reinado de Felipe II.

La guerra civil fue seguida por una represión política masiva. El general Franco no siguió el ejemplo de un Lincoln que terminó la guerra de secesión en los Estados Unidos «sin malicia hacia nadie» y de un general Grant que dijo a Lee que los soldados confederados desmovilizados podrían llevarse a casa sus mulas y empezar la arada de primavera. Decenas de millares de veteranos republicanos fueron fusilados, con o sin el beneficio de alguna forma de consejo de guerra. Otras decenas de millares habrían de pasar años en trabajos forzados, reparando carreteras y ferrocarriles, alquilados por salarios de peonaje a contratistas particulares, o construyendo el gigantesco mausoleo del Caudillo, el Valle de los Caídos.

Sin embargo, a pesar de la victoria total y de la represión en masa, la guerra civil no arregló nada. Ni el general Franco ni las

clases poderosas que lo apoyaban tenían nada que ofrecer en el terreno de un programa social que pudiera resolver los problemas históricos del país. El remate de la tragedia de la guerra fue la absoluta falta de imaginación o de magnanimidad de los vencedores. La masa del pueblo, exhausta por ocho años de inestabilidad y luchas, habría cooperado de buena gana en un programa de recuperación nacional. Pero tal programa sólo podría haber sido cumplido con la ayuda de las potencias democráticas, y a expensas de las clases dominantes que habían apoyado la causa nacionalista. Habría requerido simpatía hacia las democracias y no hacia el Eje durante la guerra, y un regreso a la libertad política e intelectual tras ella, como ocurrió en Italia. Habría requerido la construcción de millares de escuelas, de una redistribución significativa de la riqueza, una reducción radical del poderío de la aristocracia terrateniente y financiera. El temperamento del dictador, y la naturaleza de las fuerzas de que su régimen depende, se combinaron para que tales cambios se redujeran al mínimo. La creciente industrialización, el ejemplo de la prosperidad de la Europa de la posguerra y la influencia del dinero y los métodos norteamericanos, ayudaron a la recuperación económica gradual de España en la década de los 1950. Pero desde el punto de vista ideológico y político, el régimen conserva su carácter original de dictadura militar reaccionaria.

Con respecto a los años 1931-1936, la interpretación histórica ha sido dura hasta ahora para la República española. En efecto, los historiadores franquistas y liberal-izquierdistas han coincidido parcialmente en sus críticas. Los primeros explican que los dirigentes republicanos eran tímidos y unos resentidos, si no homosexuales. Los últimos hablan irónicamente de aquellos intelectuales escrupulosos que, según ellos, debieron actuar como los jacobinos de 1793, pero que en cambio trataron de distribuir las tierras y construir, escuelas sin fusilar a sus oponentes. La primera interpretación está dominada por los mitos fascistas acerca

de la virilidad, y la segunda por las exageradas analogías con la Revolución Francesa.

Los esfuerzos de la República española deben ser considerados en un contexto más amplio. En el último medio siglo, el privilegiado mundo occidental ha llegado a ser consciente de la existencia de muchas naciones subdesarrolladas, primero en la Europa oriental y los Balcanes, luego en el Oriente medio, Asia, África y la América latina. Entre finales del siglo XIX y los tiempos actuales ha habido una multitud de movimientos políticos que han intentado dar un cierto grado de libertad y prosperidad a muchos países. La República española resiste la comparación con los mejores de estos movimientos: la República de Checoslovaquia (también destruida por el fascismo), la Revolución mexicana y la República de la India. Ningún gobierno extranjero progresivo ha iniciado más proyectos beneficiosos que los gobiernos españoles de los años 1931-1934. Ningún gobierno español hizo tanto por el pueblo desde los tiempos de Carlos III en el siglo XVIII.

La guerra civil tuvo también un significado positivo que con el tiempo trascenderá de los sufrimientos y destrucciones que fueron sus inmediatas consecuencias. Es un terrible dilema humano, repetido, que a veces los hombres no tienen más elección que someterse a la tiranía o luchar en una guerra que con toda probabilidad destruirá muchas de las instituciones que ellos trataban de defender. En julio de 1936 el pueblo español se encaró con la alternativa de sumisión o resistencia. Escogió resistir y, como sus antepasados en más de dos mil años, luchó magníficamente. Pero el ejército republicano no luchaba para expulsar moros, o para subyugar holandeses o indios reacios. La minoría de españoles que continuaba las tradiciones de imperialismo e intolerancia figuraba en las filas del ejército nacionalista. La mayoría luchó para preservar de la tiranía a España y a Europa. Fueron vencidos, pero no humillados en sus almas. La grandeza moral

de una República generosa y de una lucha titánica por la libertad servirá bien a su espíritu en el futuro.

APÉNDICES

A) CRONOLOGÍA

1875-1923	Monarquía constitucional.
1898	Guerra con los Estados Unidos y fin del Imperio colonial.
	1909
25-30 de julio	«Semana Trágica» de Barcelona.
	1917
13-17 de agosto	Huelga revolucionaria dirigida por Besteiro y Caballero.
	1921
20 de julio	Desastre de Annual. Suicidio del general Silvestre.
1921-1922	Terrorismo anarquista y represión gubernamental en Barcelona y Zaragoza.
	1923
13 de septiembre	Pronunciamiento de Primo de Rivera.
	1930
28 de enero	Destitución de Primo de Rivera.
17 de agosto	Reunión en San Sebastián de dirigentes republicanos.
10 de octubre	El Partido Socialista se une al Comité Revolucionario.
12 de diciembre	Fracasa una sublevación en Jaca (Galán y García Hernández).
	1931

14 de febrero	Dimite el Gobierno Berenguer.
18 de febrero	Aznar forma un Gobierno interino.
14 de marzo	Ledesma Ramos funda el semanario nacionalsindica-lista *La Conquista del Estado*.
12 de abril	Elecciones municipales. Victoria republicana.
14 de abril	Proclamación de la República y expatriación del rey.
28 de abril	Primer decreto sobre Términos municipales.
7 de mayo	Carta pastoral del cardenal Segura.
10-11 de mayo	Quema de conventos.
30 de mayo	El Vaticano niega el placet al embajador Zulueta.
31 de mayo	Suspensión de *ABC* y *El Debate*.
Mayo - junio	Decretos sobre educación laica, rentas rurales y cultivo obligatorio.
3 de junio	Convocatoria de las Cortes Constituyentes.
12-15 de junio	El cardenal Segura regresa de incógnito y es expulsado.
13 de junio	Onésimo Redondo funda en Valladolid el diario *Libertad*.
16 de junio	Azaña promulga la primera serie de decretos sobre la reforma del Ejército.
28 de junio	Elecciones para las Cortes Constituyentes
4 de julio	Huelga de la Telefónica (CNT).
14 de julio	Apertura de las Cortes; cierre de la Academia General Militar de Zaragoza.
20-27 de	Huelga general y ley marcial en Sevilla.

julio	
18 de agosto	El dictamen sobre el proyecto de Constitución pasa a las Cortes.
9-14 de octubre	Debate sobre el artículo 26; dimisiones de Alcalá-Za-mora y Miguel Maura; Azaña, jefe del Gobierno.
20 de octubre	Ley de Defensa de la República.
14 de noviembre	Primer número de *Mundo Obrero* (órgano del Partido Comunista).
19 de noviembre	El ex rey Alfonso XIII condenado *in absentia* por las Cortes.
9 de diciembre	Promulgación de la Constitución.
Diciembre	Primer número de *Acción Española*; fundación de las JONS.
	1932
1 de enero	Asesinato de guardias civiles en Castilblanco.
5 de enero	Choque de los obreros de Amedo (Logroño) con la guardia civil.
7 de enero-30 nov.	Suspensión de *Mundo Obrero*.
20-27 de enero	Alzamiento en la cuenca del Llobregat; huelgas generales de la CNT.
Enero	Disolución de la Compañía de Jesús; puesta en vigor de la ley del Divorcio; secularización de los cementerios.
Abril	Isidro Gomá y Tomás es nombrado cardenal-arzobispo de Toledo.
Abril-mayo	Importaciones de trigo por orden de Marcelino Domingo.

28 de julio	Ley de Orden Público.
10 de agosto	Sublevación de Sanjurjo; suspensión de Acción Española.
Septiembre	Leyes del Estatuto de Cataluña y de Reforma Agraria.
	1933
Enero	Motines anarquistas en Cataluña y Casas Viejas.
1 de marzo	Fundación de Renovación Española.
Abril	Elecciones municipales desfavorables al Gobierno Azaña.
Mayo	Ley de Congregaciones.
Julio	La ley de Defensa de la República es derogada. Pastoral condenando la ley de Congregaciones.
Verano	Comienzan las Misiones Pedagógicas.
Agosto	Quema de cosechas en Extremadura.
4-5 de septiembre	Derrota del Gobierno en las elecciones del Tribunal de Garantías.
9 de octubre	Gobierno de Martínez Barrio; disolución de las Cortes Constituyentes.
29 de octubre	José Antonio Primo de Rivera funda en Madrid la Falange Española.
5 de noviembre	Plebiscito para el Estatuto vasco.
19 de noviembre	Victoria electoral de las derechas; Lerroux, jefe del Gobierno.
8-11 de diciembre	Alzamientos anarquistas en Cataluña y Aragón.
	1934
Febrero	Fusión de la Falange con las JONS; formación de la Alianza Obrera. Los agrarios de Martínez de Velasco se declaran republicanos; en Austria es

	clausurado el Parlamento y suprimido el Partido Socialista.
3 de marzo	Salazar Alonso sustituye a Martínez Barrio en el Ministerio de la Gobernación: huelga general de 4 semanas en Zaragoza, organizada por Durruti.
31 de marzo	Acuerdo del Quirinal entre Mussolini y los monárquicos.
Abril	Ocupación de Ifni; fusión de los partidos de Marcelino Domingo y Azaña; ley de Haberes del clero.
11 de abril	La Generalitat aprueba la ley de los rabassaires.
22 de abril	Gil Robles celebra un mitin de masas en El Escorial.
25 de abril	Dimisión del Gobierno Lerroux; crisis por la amnistía de Sanjurjo; Samper, nuevo jefe del Gobierno.
3 de mayo	Acción Española, clausurada desde el 10 de agosto de 1932, reanuda sus actividades.
16 de mayo	Ruptura entre Lerroux y Martínez Barrio.
9 de junio	El Tribunal de Garantías veta la ley de los rabassaires.
5-11 de junio	Huelga de campesinos en Andalucía y Extremadura; detención de diputados socialistas. Se prohíbe a los militares adherirse a los partidos y sindicatos.
9 de septiembre	Gil Robles celebra una concentración en Covadonga.
13 de septiembre	Descubrimiento del desembarco de armas del *Turquesa*.
1 de octubre	Dimisión de Samper; Gobierno Lerroux con tres ministros de la CEDA.

6 de octubre	Sublevación en Cataluña y Asturias; declaración del estado de guerra; son enviadas a Asturias la Legión Extranjera y tropas moras.
	1935
1 de febrero	Vázquez y Arguelles son ejecutados en Oviedo.
1 de marzo	Ley agraria de Giménez Fernández.
13 de marzo	Discurso de Marcelino Domingo pidiendo la unidad de las izquierdas.
21 de marzo	Debate sobre las responsabilidades de Azaña; fundación de *Política*, órgano de Izquierda Republicana.
30 de marzo	Crisis sobre el indulto de los socialistas asturianos; Gobierno de Lerroux con cinco ministros de la CEDA.
12 de abril	Se anuncia la fusión de los partidos de Azaña, Martínez Barrio y Sánchez-Román.
7 de mayo	Gil Robles, ministro de la Guerra; Pórtela Valladares en Gobernación.
23 de junio	El Tribunal de Garantías condena al Gobierno catalán del 6 de octubre.
1 de julio	Disolución del Patronato de las propiedades de la Compañía de Jesús.
13 de julio	Primer numero de *Claridad* (órgano de los socialistas de Largo Caballero).
20 de julio	Fracaso de los esfuerzos para condenar a Azaña en las segundas Cortes.
20 de octubre	Mitin de masas de Azaña en el campo de Comillas.
29 de octubre	Lerroux forzado a dimitir por causa del escándalo del estraperto; Gobierno Chapaprieta.

Finales de noviembre	Denuncia del caso Nombela.
14 de diciembre	Pórtela Valladares forma Gobierno.
20 de diciembre	El Partido Socialista vota la coalición con la izquierda republicana; Largo Caballero dimite su cargo en el comité ejecutivo.
	1936
2 de enero	Reaparición de *Mundo Obrero*; finaliza la censura de prensa.
7 de enero	Disolución de las Cortes.
15 de enero	Pacto y plataforma electoral del Frente Popular.
16 de febrero	Victoria electoral del Frente Popular.
19 de febrero	Gobierno de Azaña; amnistía de los presos políticos.
23 de febrero	Suspensión del pago de las rentas en Andalucía.
26 de febrero	Restablecimiento de la Generalitat y del Gobierno Companys.
11 de marzo	Azaña advierte a Largo Caballero y obtiene de este la promesa del cese de las manifestaciones.
13 de marzo	Intento de asesinato de Jiménez de Asúa.
15 de marzo	La Falange, declarada ilegal; detención de José Antonio; ultimátum del Ejército a Azaña sobre los desórdenes; Martínez Barrio, presidente de las nuevas Cortes; canto de la Internacional en su apertura.
16 de	Decreto confiscando los latifundios devueltos en

marzo	Andalucía.
22 de marzo	Es asesinado en Oviedo el diputado derechista Martínez.
1 de abril	Fusión de las juventudes socialista y comunista.
3 de abril	A petición de las derechas se retrasan las elecciones municipales.
7 de abril	Las Cortes destituyen a Alcalá-Zamora.
9 de mayo	Asesinato del capitán Faraudo.
10 de mayo	Azaña, presidente de la República.
12 de mayo	Casares Quiroga, jefe del Gobierno tras la negativa de Prieto.
Junio	Huelgas del ramo de la construcción y de los ascensoristas en Madrid.
10-15 de junio	Luchas sindicales en Málaga, Tánger y Cádiz.
16 de junio	Discursos de Calvo Sotelo y Gil Robles en las Cortes sobre los desórdenes.
12 de julio	Asesinato del teniente Castillo.
13 de julio	Asesinato de Calvo Sotelo.
17-20 de julio	Pronunciamiento en Marruecos y la Península.
20 de julio	Formación del Gobierno Giral; el Gobierno apela a Francia; Franco envía emisarios a Italia y Alemania.
27 de julio	Sevilla bajo el control de los insurgentes; llegan refuerzos por aire desde Marruecos.
28-30 de julio	Llegan a Marruecos y Sevilla aviones italianos y alemanes; aviones franceses anticuados van a Madrid.
6 de agosto	Pastoral Múgica-Olaechea por Radio Vitoria.
8 de agosto	Cierre de la frontera francesa; comienzo unilateral

	de la No-intervención.
14 de agosto	Los insurgentes se apoderan de Badajoz.
24 de agosto	Italia, Alemania y Portugal aceptan la No-intervención «en principio».
Finales de agosto	Antonov-Ovseenko en Barcelona, Rosenberg en Madrid.
3 de septiembre	Los insurgentes se apoderan de Talavera.
4 de septiembre	Gobierno de Largo Caballero con republicanos, socialistas y comunistas.
5 de septiembre	Los insurgentes toman Irún; la ciudad es incendiada por los anarquistas.
7 de septiembre	Aguirre forma el Gobierno vasco.
9 de septiembre	Primera reunión del Comité de No-intervención en Londres.
12 de septiembre	Los insurgentes se apoderan de San Sebastián.
27 de septiembre	Gobierno de la Generalitat con la Esquerra, el PSUC y el POUM; participación anarquista.
28 de septiembre	Los insurgentes se apoderan de Toledo; el Comité de No-intervención se niega a escuchar las acusaciones contra Portugal.
1 de octubre	Las Cortes aprueban el Estatuto vasco; Franco es nombrado generalísimo.
6 de octubre	Los soviéticos declaran que no se sentirán más ligados por la No-intervención que Alemania, Italia y Portugal.
17 de octubre	Los insurgentes toman Illescas.

24 de octubre	Primeros tanques rusos en acción; oficiales rusos llegan a Madrid; los aviones alemanes e italianos bombardean la capital.
2 de noviembre	Los insurgentes en el valle del Manzanares; cazas rusos sobre Madrid.
4 de noviembre	Los anarquistas se unen al Gobierno de Largo Caballero.
6 de noviembre	El Gobierno se traslada a Valencia; Miaja, presidente de la Junta de Defensa de Madrid.
8 de noviembre	Asalto general contra Madrid; llegada de las brigadas internacionales.
18 de noviembre	Se suspende el asalto a Madrid; Alemania e Italia reconocen al Gobierno de Burgos.
20 de noviembre	José Antonio es ejecutado en Alicante.
Diciembre	Se forma en Sevilla la Legión Cóndor.
18 de diciembre	Las primeras unidades italianas de infantería zarpan de Nápoles.
23 de diciembre	Es reconocido el Consejo de Aragón.
	1937
10 de febrero	Los nacionalistas se apoderan de Málaga.
6-15 de febrero	Batalla del Jarama.
21 de febrero	Dimisión de Asensio; se pide la retirada de Rosenberg.
8-18 de marzo	Batalla de Guadalajara.
6-22 de abril	Los ingleses aceptan el bloqueo de Bilbao.

19 de abril	Franco ordena la fusión de Falange y los carlistas; comienzan las patrullas navales y terrestres de la No-intervención.
23 de abril	Disolución de la Junta de Defensa de Madrid.
26 de abril	Bombardeo de Guernica.
3-8 de mayo	Guerra civil en Barcelona.
17 de mayo	Formación del Gobierno Negrín.
31 de mayo	El *Deutscbland* cañonea Almería.
3 de junio	El general Mola muere en accidente de aviación
16 de junio	Detención de los dirigentes del POUM.
19 de junio	Caída de Bilbao.
23 de junio	Italia y Alemania dejan las patrullas navales.
30 de junio	Portugal da fin a las patrullas fronterizas de la No-intervención.
1 de julio	Carta colectiva de los obispos españoles.
12 de julio	Francia acaba con las patrullas fronterizas de la No-intervención.
7-26 de julio	Batalla de Brúñete.
28 de julio	Gobierno catalán sin la participación anarquista.
7 de agosto	Se autoriza el culto católico en privado.
10 de agosto	Es disuelto el Consejo de Aragón.
15 de agosto	Creación del SIM; se prohíben las reuniones políticas en Cataluña.
17 de agosto	Pacto de unidad de los partidos socialista y comunista (a falta de una fusión).
24 de	Batallas de Belchite y Quinto.

agosto-15 de septiembre	
26 de agosto	Caída de Santander.
14-17 de septiembre	Acuerdos de Nyon sobre la piratería.
1 de octubre	Largo Caballero cesa como jefe de la UGT.
7 de octubre	El nuncio papal llega a Salamanca.
19 de octubre	Los nacionalistas se apoderan de Gijón.
31 de octubre	El Gobierno Negrín se traslada a Barcelona.
18 de noviembre	Alvarez del Vayo dimite como comisario general.
14 de diciembre	Se inicia la ofensiva de Teruel.
	1938
30 de enero	Entran a formar parte del Gobierno de Burgos elementos civiles.
22 de febrero	Los nacionalistas vuelven a apoderarse de Teruel.
9 de marzo	Comienza la ofensiva nacionalista en Aragón.
11 de marzo	Hitler se apodera de Austria.
13 de marzo	Blum, jefe del Gobierno francés; apertura de la frontera.
5 de abril	Se reorganiza el Gobierno de Negrín; dimisión de Prieto.

Abril	Burgos promulga leyes aboliendo el divorcio, la autonomía de Cataluña y la reforma agraria.
15 de abril	Los nacionalistas llegan al Mediterráneo.
1Mediados de junio	Cierre de la frontera francesa.
24 de julio	Comienza la batalla del Ebro.
9 de septiembre	Conversaciones secretas de paz entre Negrín y el duque de Alba (sin resultado).
30 de septiembre	Acuerdo de Munich.
Finales de octubre	Proceso de los dirigentes del POUM en Barcelona.
15 de noviembre	Retirada del Ebro; desfile de despedida de las brigadas internacionales.
19 de noviembre	Burgos hace concesiones mineras a cambio de las últimas entregas alemanas de armas.
23 de diciembre	Ofensiva nacionalista en Cataluña.
	1939
15 de enero	Los nacionalistas se apoderan de Tarragona.
26 de enero	Ocupación de Barcelona.
4 de febrero	Ocupación de Gerona.
5-9 de febrero	Desbandada hacia la frontera francesa; los nacionalistas terminan la ocupación de Cataluña.
9 de febrero	Menorca es transferida a los nacionalistas.
13 de febrero	Ley nacionalista de responsabilidades políticas.

27 de febrero	Francia e Inglaterra reconocen al Gobierno de Burgos; dimisión de Azaña.
2 de marzo	Ascensos militares de Negrín; decisión de continuar la guerra.
5 de marzo	Se forma el Consejo de Defensa Nacional; el Gobierno de Negrín marcha en avión a Francia.
7-11 de marzo	Sublevación comunista en Madrid.
15 de marzo	Los alemanes ocupan Checoslovaquia.
23-26 de marzo	Fracasan los esfuerzos para negociar de la Junta de Casado.
28 de marzo	Los nacionalistas entran en Madrid
1 de abril	Total rendición del ejército republicano.
Mayo-junio	Repatriación de las tropas italianas y alemanas.

B) LA LEYENDA NEGRA DE LA REPÚBLICA ESPAÑOLA

UNO de los temas principales de todas las historias oficiales del período es que la República nació de un complot masónico y estuvo en todo momento controlada por las fuerzas de la «masonería internacional». La acusación es una fantástica distorsión montada sobre una pequeña base de verdad. Muchos de los principales dirigentes republicanos eran masones. Melquíades Álvarez, jefe del muy conservador y unitario Partido Reformista; Manuel Portela Valladares, dirigente de un pequeño partido de «centro», y Diego Martínez Barrio, primero un seguidor de Lerroux y luego fundador del pequeño partido liberal Unión Republicana, eran masones del grado treinta y tres. Un cierto número de otras figuras importantes como Marcelino Domingo y Luis Companys eran masones de importancia jerárquica menor. Los dirigentes radicales Alejandro Lerroux y Rafael Salazar Alonso fueron miembros hasta 1932. Algunos militares de ideas liberales pertenecieron a la orden, especialmente los generales López Ochoa y Sebastián Pozas. Un puñado de intelectuales socialistas, como Jiménez de Asúa y Fernando de los Ríos, también fueron masones, al igual que el diputado comunista doctor Cayetano Bolívar, que utilizaba en la organización el seudónimo de «Lenin». Hubo persistentes rumores de que el presidente Alcalá-Zamora era masón; pero éste no sólo no se unió a ellos, sino que compartía muchos de los exagerados temores hacia la masonería comunes entre los católicos españoles. Manuel Azaña se hizo masón a finales de 1931. Indalecio Prieto recordaba con gratitud y de modo humorístico a los pocos ma-

sones excéntricos y filantrópicos que conoció cuando era aprendiz, pero nunca se afilió a la masonería.

Las logias españolas, pues, incluían una gran variedad de políticos republicanos. Los de grados más importantes eran republicanos anticlericales socialmente conservadores, de clase media. La Gran Logia Española, en su reunión en Madrid los días 23-25 de mayo de 1931 (después de la quema de iglesias y la marcha del cardenal Segura, y antes de las elecciones a las Cortes Constituyentes), adoptó una declaración de principios que incluía los siguientes puntos: libertad de pensamiento, de expresión y religión; igualdad ante la ley; sufragio universal; separación de la Iglesia y el Estado; matrimonio civil y divorcio; expulsión de las órdenes religiosas no españolas y control de las otras a través de una ley de Asociaciones; abolición de la pena de muerte; ejército voluntario; enseñanza laica y gratuita, incluyendo en la instrucción el esperanto, la lengua universal; usufructo de la tierra por aquéllos que la trabajan, y un Estado «federal», respetando las municipalidades, las regiones y otros «grupos internacionales e intercontinentales». Los masones abogaban, pues, por una República federal, garantizando las libertades asociadas con las revoluciones francesas y americana, y se identificaron con las esperanzas idealistas de los primeros años del siglo XX, tales como la adopción del esperanto y la abolición de los ejércitos de reclutamiento forzoso y la pena capital.

La masonería puede haber jugado un pequeño papel durante el período de Azaña, facilitando la unión entre los republicanos. La multiplicidad de pequeños partidos personalistas pudo ser contrarrestada por el hecho de que muchos de los dirigentes eran masones. En 1932 y 1933, Lerroux, Salazar Alonso y sus amigos se retiraron de la masonería, como parte de su evolución hacia la derecha. Para poder calificarse y gobernar a favor de los monárquicos y clericales quisieron demostrar su cambio de sentimientos cortando sus relaciones con los anticlericales. Cuando Martí-

nez Barrio rompió con Lerroux, bastantes radicales que asimismo eran masones siguieron al primero. En *La pequeña historia* interpreta la ruptura como un complot masónico; pero puesto que Martínez Barrio estaba protestando contra la política clerical y policíaca de su jefe, es de lo más natural que los masones simpatizaran con él. Igualmente, cuando Portela Valladares, como ministro de la Gobernación, se resistió a los esfuerzos de Gil Robles para que la guardia civil fuera transferida al Ministerio de la Guerra, los conservadores vieron en ello un complot masónico.

También hay pruebas de que los masones ayudaron a sus hermanos, y a otras víctimas, a escapar en los momentos de severa represión. Carezco de pruebas documentales sobre este punto; pero un cierto número de personas evidentemente bien informadas me dijeron que los masones organizaron una especie de «ferrocarril subterráneo» gracias al cual republicanos andaluces pudieron huir a Gibraltar durante los primeros meses del dominio de Queipo de Llano. También, y gracias a la intervención personal del general López Ochoa en Oviedo, los masones salvaron a cierto número de personas de ir a la cárcel o de la muerte, durante la represión de Asturias.

Está claro que muchos republicanos anticlericales eran masones y que los principios políticos masónicos coincidían en gran medida con los puntos de vista de la coalición republicano-socialista de 1931-1933. Los historiadores oficiales españoles, sin embargo, han pintado a la República, y, durante la guerra, al Frente Popular, como meros muñecos en manos de la Internacional masónica. Sus conclusiones se basan principalmente en las obras de Eduardo Comín Colomer, especialista en cuestiones de masonería y comunismo, entre cuyos libros figuran *Lo que España debe a la masonería* (Barcelona, 1956) e *Historia secreta de la segunda República* (Barcelona, 1959). Comín Colomer relaciona como masones no sólo a la gran mayoría de los diputados liberales republicanos, sino a docenas de socialistas de izquierda (incluyendo a

Largo Caballero, al que, sin embargo, coloca en una logia francesa), anarquistas y comunistas. Mostré esta lista a varios antiguos masones españoles en Francia y a un grupo de masones en España. Estos últimos la hicieron pasar alrededor de la mesa y discutieron durante varias horas acerca de ciertos nombres tras haber borrado de la lista a más de la mitad de ellos. En todas estas discusiones quedó claro que los nombres tachados pertenecían a hombres que rechazaron insinuaciones o invitaciones de los masones. Muchos años después de la guerra civil, el Gobierno de Franco mantuvo en Salamanca un verdadero archivo de las actividades masónicas. Era deber de los archiveros el enviar un cierto número de fichas a Madrid cada mes con los nombres de los masones últimamente descubiertos. Todo aquél que fuera mencionado en cartas de miembros conocidos o en supuestos apuntes de agendas era finalmente fichado como masón. La inclusión en las listas de todos los amigos y asociados de masones conocidos explica sencillamente el fantástico nomenclátor producido por el señor Comín.

En muchos documentos en donde se trata de la influencia de los masones, la «Internacional masónica» es calificada despectivamente con los adjetivos «jacobina», «judía» y «comunista». El temor obsesivo a los masones tiene en España raíces históricas. En Italia, España y Austria fueron a menudo los colaboradores de los ejércitos revolucionarios franceses. Gran parte de la propaganda para la independencia de México y de las colonias sudamericanas de España fue producida y distribuida en sus logias. Funcionarios del Gobierno de Franco me dijeron que los masones habían sido siempre agentes de Inglaterra, el enemigo tradicional de España. En cuanto a los adjetivos de «judía» y «comunista», tienen exactamente la misma fuerza emotiva y el menosprecio de la verdad que cuando son utilizados por los reaccionarios de todo el mundo occidental. En la página 443 de la Historia secreta, por ejemplo, Comín Colomer cita en tono aprobato-

rio otro libro en el cual se califica a Alcalá-Zamora de «criptojudío», a Portela de degenerado y «criptojudío» y a Francisco Cambó (rico conservador catalán) de «enriquecido por el siniestro y maquiavélico jefe de la judería europea, Walther Rathenau». Todos los datos específicos aducidos para demostrar que la República española era un muñeco en manos de la Internacional masónica son del mismo carácter.

Un segundo *Leitmotiv* de la leyenda negra es la acusación, dos veces rechazada por las investigaciones de las Cortes, de que Azaña, jefe del Gobierno, ordenó a la policía no hacer prisioneros y dirigir «los tiros a la barriga» durante la sublevación anarquista de Casas Viejas en enero de 1933. Quien lanzó esta acusación fue el capitán de la guardia de asalto Manuel Rojas, cuando los periodistas descubrieron que había mandado fusilar a 14 prisioneros. La acusación fue apoyada por otra persona, el capitán Barba Hernández, del Estado Mayor. En mayo de 1934 el capitán Rojas fue sometido a proceso por asesinato en Cádiz, y la declaración principal apareció en los números de *El Sol* correspondientes al 23, 24 y 27 de mayo.

El capitán Rojas alegó que en una entrevista en la que no había presentes más personas, el director general de Seguridad, Arturo Menéndez, le ordenó que no hiciera prisioneros ni heridos, y que varias semanas después, cuando ya estaba en la cárcel, el teniente coronel Hernández Saravia, a quien él consideraba como un hermano mayor, le ofreció un millón de pesetas si se callaba. Tampoco hubo otras personas presentes en esta entrevista. Al ser sometido a careos, Rojas insistió en sus acusaciones, mientras que Menéndez y Hernández Saravia las negaban rotundamente. Menéndez explicó luego al tribunal que cualquier oficial o funcionario de policía tenía derecho a pedir una copia escrita de las órdenes que recibía si pensaba que contravenían a la ley. El tribunal esperó que el defensor diera una explicación sobre este punto; pero no pudo ofrecer ninguna.

Al día siguiente, el capitán Barba Hernández testificó que uno de los ayudantes militares de Azaña utilizó la frase «los tiros a la barriga», asimismo en otra entrevista en la que nadie más estuvo presente. La acusación indicó que tales órdenes no se habían dado a otros oficiales, y que varios alzamientos anarquistas habían sido reprimidos en diferentes partes de España sin que se fusilara a los prisioneros. El capitán Barba, que poco antes había declarado que el deber militar requería el estricto cumplimiento de las órdenes tal como eran dadas, explicó ahora la suavidad empleada en otras zonas, diciendo que, al transmitirlas, él había «suavizado» dichas órdenes.

Para el tribunal quedó claro que Rojas y Barba estaban mintiendo para apoyarse el uno al otro. Debido a las otras pruebas existentes contra Rojas, fue sentenciado a 21 años de cárcel. Sin embargo, los monárquicos volvieron a presentar contra Azaña los cargos por el asunto de Casas Viejas en las sesiones de las Cortes en marzo y de nuevo en julio de 1935. En la segunda ocasión, el capitán Barba fue uno de los fundadores de la UME. Él y otros iniciaron la purga en Zaragoza en las primeras semanas de la guerra, e incluso entre los más reaccionarios se ganó la reputación de ser un criminal sediento de sangre. El capitán Rojas jugó un importante papel en la purga de Granada y prosiguió ocupando altos cargos militares después de la guerra civil. Arturo Menéndez fue sacado del expreso Barcelona-Madrid en Zaragoza, el 18 de julio, y luego fusilado por los nacionalistas. Hernández Saravia se convirtió en uno de los principales generales del ejército republicano durante la guerra. La gente «bien» de España aún habla con tono horrorizado de «lo de Casas Viejas» y del sadismo criminal de Azaña.

Otro tercer elemento importante en la leyenda negra es la afirmación de que las fuerzas izquierdistas del Frente Popular intentaron establecer una España soviética bajo el mando de Largo Caballero y que la revolución había de ocurrir entre el 11 de ma-

yo y el 29 de junio, que la fecha fue retrasada por razones sin especificar hasta el primero de agosto, y que el alzamiento militar del 18 de julio se anticipó, por lo tanto, a una revolución soviética. Prácticamente todos los oficiales nacionalistas con quienes hablé dieron por sentado que esta acusación era cierta, y así consta en la mayoría de las historias nacionalistas. Sin embargo, el estudio mejor documentado hecho en España sobre la izquierda revolucionaria no hace mención de este complot: Maximiano García Venero, *Historia de las internacionales en España* (Madrid, 1956-57, 3 volúmenes). García Venero se refiere con gran detalle a la formación del Frente Popular, a los viajes de los socialistas de izquierda a Rusia, a las relaciones amistosas entre miembros de los partidos socialistas y comunistas franceses y españoles, las visitas de agentes rusos a España; pero nunca una palabra acerca del «Soviet» de junio de 1936. Por otra parte, el historiador inglés Hugh Thomas, habiendo visto referencias de evidencia documental aparente en fecha tan temprana como el 7 de agosto de 1936 en el *Diario de Navarra*, llegó a la conclusión de que los documentos del Diario no eran falsos (*The Spanish Civil War*, p. 108 n.).

Dichos documentos recibieron una gran publicidad internacional cuando fueron publicados por el *Times* de Londres el 3 de mayo de 1938, y al año siguiente en Bilbao. Éstos declaran que el 16 de mayo de 1936, en la Casa del Pueblo de Valencia, representantes de los partidos comunistas francés, español y ruso adoptaron un plan por el cual habría de iniciarse un movimiento revolucionario en ambos países cuando Léon Blum se convirtiera en jefe del Gobierno de Francia. A continuación de una campaña de propaganda para desacreditar a los reformistas como Besteiro y Prieto y una intensa agitación para destruir la autoridad del Estado burgués, el Soviet se apoderaría del poder en ambos países. Largo Caballero sería su presidente en España, y la mayoría de los comisarios, socialistas de izquierda.

Hay muchas cosas improbables en estos documentos. En 1936 la Internacional Comunista estaba orientada enteramente hacia el establecimiento de un frente antifascista de todas las fuerzas burguesas y proletarias que se oponían al fascismo. En España, los comunistas criticaban abiertamente el «izquierdismo infantil» de los socialistas de Largo Caballero. Los documentos sobre el plan del Soviet piden a uno que crea que los comunistas deseaban derribar los gobiernos de Frente Popular de Francia y España y que los planes del comité que incluía a algunos rusos preparaban una lista de comisarios con mayoría caballerista. Como comisario de Justicia nombraron a Luis Jiménez de Asúa. Luego, junto con Thorez, José Díaz, George Dimitrov, Largo Caballero y otros, Vincent Auriol habría de ser uno de los principales inspiradores. También eran citados los anarquistas David Antona, García Oliver y Ángel Pestaña.

Creo que esta increíble combinación de nombres revela que los documentos fueron preparados por elementos derechistas mal informados. Jiménez de Asúa apoyó constantemente a Prieto y al Gobierno legal y parlamentario. Fue el principal autor de la Constitución de 1931. Sin embargo, como abogado defensor de los campesinos de Castilblanco y de varios dirigentes socialistas después de la sublevación de Asturias se ganó esa clase de odio ciego que llevaría a las derechas a imaginarlo como «comisario de Justicia». Vincent Auriol era un parlamentario socialista francés, que vino a España en nombre de la Liga Internacional de los Derechos del Hombre para pedir a Alcalá-Zamora y Lerroux la amnistía para los dirigentes socialistas condenados a muerte en febrero de 1935. Esta acción lo calificó fácilmente para ser colocado entre los dirigentes soviéticos por la propaganda derechista. Y en cuanto a los anarquistas citados, David Antona era uno de los jefes extremistas de la CNT que hicieron más difícil la cooperación con la UGT. Por otra parte, Pestaña se había convertido a los ideales reformistas y no se llevaba bien ni con la mayoría

de la CNT ni con los socialistas de Largo Caballero. Las derechas, sin embargo, eran capaces de describir fácilmente a estos hombres como colaboradores de Largo Caballero en la preparación de una España soviética.

El plan de un Soviet no puede tampoco conciliarse con los sucesos conocidos de junio de 1936. Los dirigentes de la UGT y la CNT estaban completamente enfrascados en las rivalidades mutuas surgidas de la huelga del ramo de la construcción. A finales de junio, los jefes caballeristas se hallaban forcejeando con la CNT para que aceptara la mediación a fin de *no destruir* la autoridad del Gobierno de Casares Quiroga. Largo Caballero estuvo en Inglaterra y Francia a finales de junio y principios de julio. Finalmente, jamás se ha ofrecido evidencia para la afirmación de que el plan fue retrasado hasta el primero de agosto. Pero tal afirmación es necesaria para explicar la absoluta falta de actividad «soviética» entre el 11 de mayo y el 29 de junio, y para justificar el alzamiento militar del 18 de julio como medida preventiva[455].

Los historiadores de todas las ideologías han deplorado con amargura la leyenda negra referente a la España imperial y su historia colonial. Los menos dignos de ellos se han dedicado a la creación de una fantástica leyenda negra contra la República.

C) LAS ELECCIONES DE LA SEGUNDA REPÚBLICA ESPAÑOLA

DURANTE el período republicano hubo cinco elecciones de carácter nacional; las elecciones municipales de abril de 1931 y abril de 1933; las elecciones para las Cortes Constituyentes de junio de 1931, y las dos elecciones para las Cortes de noviembre de 1933 y febrero de 1936. La primera de ellas tuvo valor de plebiscito. Aparte de las grandes ciudades, sólo resultaron elegidos candidatos monárquicos; pero en las ciudades donde había alternativa, la votación fue fuertemente favorable a los republicanos. El propio rey, los principales generales y casi todos los consejeros del monarca interpretaron los resultados de las elecciones del 12 de abril de 1931 como una repudiación de la Monarquía, o al menos de la persona de Alfonso XIII. Las interpretaciones oficiales de años posteriores han indicado que los resultados jamás acabaron de ser contados, que fueron elegidos 22.000 concejales monárquicos contra sólo 5000 republicanos, y que el Gobierno provisional obligó al rey a marcharse de España el 14 de abril. Sin embargo, todo esto está fuera de la cuestión. En aquella época y tres años más tarde, el rey y sus partidarios reconocían a la votación del 12 de abril como un plebiscito contra la Monarquía en aquellos distritos electorales donde los votantes tuvieron posibilidades de elegir.

Las elecciones del 28 de junio de 1931 tuvieron lugar bajo el sistema recién establecido que concedía el voto a la mujer y que otorgaba el 80 por ciento de los escaños de cada distrito electoral al partido que lograra la mayoría; rasgo que fue pensado con la intención de animar la formación de listas de coalición y evitar la posibilidad de unas Cortes con muchos partidos pequeños y nin-

guna mayoría efectiva. Estas elecciones fueron libres en el sentido de que el ministro de la Gobernación garantizó la completa libertad de acción política en lugar de amañar los resultados (como había sido lo acostumbrado bajo la Monarquía). Por otra parte, la oposición no tuvo tiempo para organizarse, y el Partido Socialista, así como los varios partidos republicanos pequeños, llevaron a sus listas de coalición a muchos candidatos que eran virtualmente desconocidos para los dirigentes de dichos partidos. Como resultado, los socialistas y sus aliados republicanos estuvieron sin duda alguna exageradamente representados en relación con la opinión pública. Muchos de los intelectuales más destacados de la nación fueron elegidos por su prestigio personal más que como miembros de un determinado partido. Así que las Cortes Constituyentes combinaron el carácter de una «asamblea de notables» con el de una asamblea popular en la cual participaban muchos diputados nuevos e inexpertos, y en la que las izquierdas estaban exageradamente representadas.

Cuando se celebraron las elecciones municipales de abril de 1933, los monárquicos y las derechas ya habían tenido en general tiempo para organizarse. De los 16.000 concejales municipales elegidos, 9800 pertenecían a partidos que estuvieron representados en el Gobierno provisional. De los 5000 concejales derechistas que aproximadamente salieron elegidos, quizá la mitad eran monárquicos confesados y la otra mitad «accidentalistas». Es imposible hacer afirmaciones que no sean aproximadas, porque los monárquicos, los agrarios de Martínez de Velasco y los candidatos católicos se agruparon bajo la jefatura de Gil Robles al hacer las listas de coalición, y los miembros de los dos últimos partidos se mostraban indecisos en su actitud hacia la República. Las elecciones municipales indicaron así un país en el que los dos tercios de los votantes eran decididamente republicanos, así como los políticos que estaban lo suficientemente interesados como para participar en el gobierno municipal.

Estas elecciones indicaron también disgusto hacia el Gobierno de Azaña y la fuerza local del Partido Radical. Mientras que 9800 concejales pertenecían a partidos que habían formado parte del Gobierno provisional, sólo 5000 pertenecían a los partidos republicanos de izquierda y al Partido Socialista representados en el Gobierno de Azaña. Sólo los radicales consiguieron sacar elegidos 2479 concejales. Sin embargo, es difícil hacer otra representación más detallada. Los resultados numéricos no corresponden exactamente a las preferencias de los votantes, porque las listas de coalición fueron preparadas por los jefes de los partidos y porque en circunstancias locales hubo listas únicas, y muchos candidatos no estaban ligados por compromisos de partido. El presidente de la República y la prensa conservadora interpretaron las elecciones como una inclinación hacia la derecha. Pero también es posible que muchos de los votos contra los partidos del Gobierno fueran una protesta contra la brutalidad policíaca en Casas Viejas más bien que un voto contra la política legislativa y económica en general del Gobierno. El éxito de los radicales indica que eran el partido de los negocios locales y de los intereses políticos en el sentido convencional del término. Desde un punto de vista nacional no estaban claramente identificados con otro principio que no fuera la forma republicana de gobierno. Los políticos pragmáticos, los funcionarios civiles, notarios y propietarios se unieron a los radicales, que eran los más interesados en cuestiones de política local.

Las elecciones a Cortes de noviembre de 1933 y de febrero de 1936 fueron sin duda las elecciones más representativas de toda la historia española. En ellas iban involucrados problemas de carácter nacional que estaban claros para los votantes. El Gobierno garantizó la libertad de prensa, reunión y acción política. En cada caso fueron precedidas por un período de seis semanas en el que los partidos negociaron sus listas de coalición.

En ambas circunstancias, las derechas, el centro y las izquierdas tuvieron amplias oportunidades de utilización de todos sus recursos económicos, políticos e ideológicos.

Las elecciones de noviembre de 1933 mostraron que en la política española había tres grandes partidos: el socialista, el radical y el católico. Cuando los socialistas y los partidos republicanos de izquierda actuaron separadamente tras una coalición, fue inmediatamente obvio que la masa de votantes de la anterior coalición de Azaña consistía en socialistas. Los radicales conservaban la fuerza que habían mostrado anteriormente entre los votantes municipales de la clase media. Gil Robles, con la coalición de la CEDA, mostró que había una masa de votantes católicos en las ciudades, así como en las zonas rurales del Norte y el Levante de España. A juzgar por la oratoria de la campaña de la CEDA y de su éxito en las urnas, estos votantes reaccionaban principalmente contra la legislación anticlerical de las Cortes Constituyentes. No eran ni monárquicos ni fascistas. Antonio Goicoechea, Calvo Sotelo y José Antonio Primo de Rivera no encontraron un amplio eco en la opinión pública. Las masas católicas votaron contra Marcelino Domingo porque era masón y anticlerical, no porque hubiera importado trigo. Ni votaron contra el programa de obras públicas de Prieto o la política de impuestos de Carner.

Puesto que la CEDA era una coalición y no un partido; dado que Gil Robles era joven, tímido y conservador, y como los monárquicos proporcionaron la mayor parte del dinero para la campaña de la CEDA, la influencia monárquica era más fuerte dentro del bloque católico que lo que merecía ser; pero los actos de la CEDA eran los de un partido de masas que representaba a la clase media y al campesinado católicos dentro de la República. La misma irregularidad en la formación de coaliciones en zonas diferentes, el regateo por los escaños dentro de la coalición, y el hecho de que a veces los radicales llegaran a acuerdos informales con la CEDA, mientras que en otras ocasiones se ponían en

contra de ellos, hace imposible la tarea de evaluar en términos de porcentajes la fuerza relativa de los radicales y del bloque católico. Los partidos no monárquicos de la CEDA recibieron unos 110 escaños, los radicales 100, y los socialistas 58. Pero el manejo de la ley electoral y los acuerdos de coalición, más que el poder del voto, explican estos números. A la única conclusión a la que uno puede llegar es que éstos eran los grupos con una masa de seguidores, y que los varios partidos republicanos de izquierda, los tradicionalistas (carlistas), los monárquicos alfonsinos (Renovación Española), la Falange y las JONS eran grupos minoritarios diferenciados, numéricamente hablando.

Las elecciones de febrero de 1936 indicaron una polarización en torno a una coalición de izquierdas, en la cual los socialistas constituían la masa básica, y una coalición derechista basada en los católicos. Estas coaliciones eran casi iguales en fuerza electoral, y en muchas ciudades y provincias el margen de la victoria fue sólo de un 1 o un 2 por ciento. La fuerte mayoría izquierdista en las Cortes resultó del hecho de que numerosas ligeras victorias del voto popular dieron a la coalición triunfante el 80 por ciento de los escaños en cada provincia. Los radicales desaparecieron virtualmente. Los que eran anticlericales y se oponían a la dureza empleada en Asturias tras los sucesos de octubre votaron en febrero de 1936 por el Frente Popular. Los que aprobaron la actuación de Lerroux como jefe del Gobierno votaron por las derechas. El escándalo del estraperlo destruyó lo que quedaba del prestigio personal de Lerroux. En 1936, de una población de 25.000.000, los votantes fueron 9 250.000. Esto significa la más alta participación electoral en la historia española, y una proporción que difícilmente se alcanza aun en las elecciones legislativas de muchas democracias maduras. De esos 9 250.000 votos, aproximadamente 4.000.000 fueron para las derechas, 4.000.000 para las izquierdas, quizá medio millón para el centro (Portela y Alcalá-Zamora) y 750.000 para los anarquistas.

Aunque la polarización en torno a dos coaliciones hace fácil decir que España estaba casi igualmente dividida entre las derechas y las izquierdas en 1936, es aún más difícil que en 1933 decir qué es lo que los votantes querían realmente. Dentro de las listas de coalición, los candidatos no eran identificados con partidos. Pero cada partido presentó en las ciudades a los hombres más conocidos, y el votante políticamente consciente podía indicar sus preferencias numerando, tachando y por otros recursos informales. Donde los votantes actuaron de este modo, muy a menudo indicaron su preferencia por los moderados. En 1933, debido a la justeza del resultado electoral en Madrid, fue necesaria una segunda vuelta para determinar cuántos socialistas y cuántos miembros de la coalición derechista se sentarían en las Cortes. En esta segunda vuelta decisiva, los votantes conservadores colocaron al distinguido monárquico Luca de Tena el último de la lista. Los votantes socialistas dieron en ambos casos el primero y segundo lugar a Julián Besteiro y Luis Jiménez de Asúa. En la primera vuelta Largo Caballero fue el tercero en la lista socialista; pero entre la primera y segunda votación, Largo Caballero hizo una serie de declaraciones afirmando que si los socialistas eran defraudados por la República, pensarían en términos revolucionarios para alcanzar el poder. En la segunda votación Largo Caballero apareció al final de la lista socialista.

En 1936, muchos votantes actuaron como el filósofo Ortega y Gasset, quien, de acuerdo con lo dicho por sus amigos, votó por el Frente Popular, pero tachó todos los nombres exceptuando el de Besteiro. En Madrid la mayoría del Frente Popular escogió trece diputados en un orden que da la impresión de haber sido simultáneamente un plebiscito en favor de la moderación. En lo alto de la lista, Martínez Barrio, que representaba el ala derecha de la coalición, y que casi estaba en el centro político si se consideraban los antecedentes de los cinco años de régimen republicano; luego Julián Besteiro, muy querido en Madrid, y que re-

presentaba igualmente la opinión más gradualista dentro del Partido Socialista; en tercer lugar Azaña, seguido por otros republicanos de izquierda y por los socialistas de izquierda Álvarez del Vayo, Araquistáin y Largo Caballero, y al final de la lista José Díaz, secretario general del Partido Comunista. No tuve la oportunidad de ver datos similares detallados de las listas de los vencedores en todo el país, y, en todo caso, el recuento de votos no fue muy exacto en la mayoría de las zonas. Pero de acuerdo con los resultados enviados de provincias el 20 de febrero, los candidatos que obtuvieron mejores resultados en todas las victorias del Frente Popular, excepto en tres, fueron o republicanos de izquierda o miembros de la Esquerra, y con cuatro excepciones los candidatos de resultados máximos en los casos de victorias derechistas eran miembros de la CEDA.

Salvador de Madariaga, analizando las elecciones del Frente Popular en su libro *Spain* (pp. 44-48, edición de 1958), llega a la conclusión de que los españoles votaron en la proporción de 2 a 1 contra el marxismo, de 2 a 1 contra los clericales y militaristas, de 8 a 1 contra una revolución socialista (la de Largo Caballero y los comunistas) y casi unánimemente contra una sublevación militar. Pero estas proporciones se basan en las filiaciones de partido de los diputados elegidos. Dado que las listas electorales fueron preparadas por los jefes de los partidos, no se pueden atribuir estas proporciones a la elección de los votantes. Por otra parte, los dirigentes indudablemente dieron mayor representación a los moderados dentro de sus coaliciones para atraerse los votos de los indecisos. Esta táctica, junto con el hecho de que los moderados obtuvieron individualmente el mayor número de votos, justifican la conclusión general de que los votantes españoles esperaban en 1936 que hombres mesurados ocuparan el poder. Si uno se pregunta entonces por qué no votaron en mayor número por los partidos de centro, la contestación es que temían desperdiciar los votos. Cuando uno compara 1933 con 1936, está claro

que España evolucionaba hacia un sistema de dos partidos. Para la gran masa de votantes que no eran ni socialistas revolucionarios ni fascistas, las elecciones eran una pugna entre Azaña y Gil Robles, entre la izquierda parlamentaria y la derecha parlamentaria. Esta verdad ha sido oscurecida por el hecho de que inmediatamente después de las elecciones, el ala revolucionaria del Frente Popular, los reaccionarios monárquicos, los grupos juveniles militantes, y los militares, se negaron a permitir que funcionara un Gobierno parlamentario.

Una comparación entre las elecciones de 1933 y 1936 indica asimismo que hubo pocos cambios en la fuerza relativa de las derechas y las izquierdas en las diferentes partes del país. Concediendo que había una tendencia hacia el sistema de dos partidos, o de dos coaliciones, y dado que los anarquistas se abstuvieron en 1933 y votaron en 1936, aparece en ambos casos que las izquierdas eran fuertes en las ciudades industriales, en Cataluña, Galicia y Andalucía; que las derechas eran fuertes en ambas Castillas y Navarra; que Valencia y buena parte de Levante y Aragón estaban divididos casi en partes iguales entre derechas e izquierdas.

Partiendo de los datos de las cinco elecciones arriba citadas, se pueden hacer ciertas observaciones generales. La primera de todas, que la masa de la opinión española era favorable a la República, aunque esta observación debe ser calificada por el hecho de que cuanto más se adentre uno hacia la derecha va hallando con más frecuencia hombres dispuestos a recurrir a un putsch militar, y que cuanto más se adentre uno hacia la izquierda, halla hombres hablando de la República como una etapa preliminar en el camino hacia una dictadura del proletariado. Las Cortes de una sola Cámara carecieron de continuidad, pues sólo un quinto de los diputados sirvieron en las tres Cortes. La ley electoral, que fue pensada para producir mayorías legislativas manejables, fue demasiado lejos, en sus efectos prácticos, hasta exasperar la opi-

nión de las minorías. Ni las izquierdas en 1933, ni las derechas en 1936, aceptaron de buen grado el que una pequeña mayoría de votos diera a sus rivales un gran número de escaños.

Sin embargo, más importante que la debilidad de la ley electoral fue el hecho de que los hombres más capaces producidos por la República no fueran jefes de grandes partidos. Azaña y Martínez Barrio eran jefes de pequeños partidos republicanos de izquierda; Miguel Maura capitaneaba un diminuto grupo conservador republicano; Joaquín Chapaprieta era un conservador ilustrado sin partido; Indalecio Prieto era fuerte dentro de la ejecutiva del Partido Socialista, pero las masas seguían a Largo Caballero.

Un cierto número de elecciones especiales se merecen un breve comentario. Los plebiscitos referentes a los estatutos de autonomía de Cataluña (1931), Euzkadi (1933) y Galicia (1936), fueron favorables de modo abrumador a la autonomía regional. Un plebiscito es una forma tosca, y a menudo discutible, de conceder el voto. En estos casos, sin embargo, a los votantes se les sometieron textos específicos y las votaciones fueron precedidas de amplias discusiones públicas. Navarra, en cambio, rechazó el mismo texto que aprobaron los vascos. Así que parece correcto conceder que estos plebiscitos reflejaban el verdadero estado de la opinión pública en aquellas provincias. En septiembre de 1933, las primeras elecciones para el Tribunal de Garantías mostraron que los concejales municipales y los abogados de España eran más conservadores que el Gobierno. En abril de 1935 fueron canceladas las elecciones municipales. Para cubrir las numerosas vacantes producidas en ambas Cortes no se celebraron elecciones parciales, y las elecciones municipales previstas para abril de 1936 fueron aplazadas por mutuo acuerdo entre las derechas y el Gobierno de Azaña. Estas cancelaciones y la ausencia de elecciones parciales indican el hecho de que las elecciones fueron

siempre consideradas una amenaza potencial al orden público y al prestigio del Gobierno existente.

Dejando a un lado la información que proporcionan acerca de la opinión pública, las elecciones de la época republicana son interesantes en comparación con el pasado español y con las de otros países. Bajo la Monarquía constitucional, España disfrutó de una sustancial libertad de prensa y de propaganda electoral en las grandes ciudades. Pero antes de 1931 todas las elecciones fueron más o menos amañadas. Desde 1939 ha habido elecciones menores dentro de las corporaciones, como, por ejemplo, los colegios de abogados y en los sindicatos verticales; pero no ha habido en absoluto libertad de prensa o de acción política, y las Cortes son meramente un cuerpo ceremonial nombrado por el dictador, sin funciones legislativas.

Comparadas con las elecciones generales de la Europa occidental, Escandinavia, Inglaterra o los Estados Unidos, incluso las más representativas de las elecciones republicanas fueron señaladas por la violencia en las urnas y la corrupción en el recuento. Sin embargo, los resultados no eran conocidos de antemano y por eso fueron más representativas que los resultados de las elecciones mexicanas. Y admiten favorablemente la comparación con las elecciones más libres de países como la Argentina, Chile y Uruguay. Desde luego fueron infinitamente más democráticas que las elecciones en las democracias populares de la Europa oriental. Merece la pena señalar todo esto, puesto que la propaganda oficial en España lleva 25 años inculcando a muchos españoles un penoso complejo de inferioridad sobre su capacidad para vivir de acuerdo con las normas de la democracia.

D) MUERTES ATRIBUIBLES A LA GUERRA CIVIL

DEBIDO a las condiciones reinantes en España durante y después de la guerra civil, nunca ha sido posible facilitar ni siquiera aproximadamente totales detallados de las muertes de todas clases atribuibles a la guerra. Sin embargo, es posible establecer ciertos límites máximos y mínimos admisibles, y juzgar la importancia proporcional de los diferentes factores. El Gobierno victorioso, ansioso de impresionar al pueblo con el alto costo de la guerra, ha empleado habitualmente la frase *un millón de muertos*. José María Gironella, escritor enterado y valiente, empleó tal frase como título de una novela que describía la guerra de un modo mucho más objetivo que cualquier otra obra de ficción o no publicada en España. Al mismo tiempo, en el prólogo, Gironella declaraba que aunque creía que la frase «un millón de muertos» simbolizaba apropiadamente la devastación de la lucha, en realidad sólo murieron poco más de medio millón de personas.

Poco después de la guerra, un médico de Santander con algunos conocimientos de estadística y demografía, Jesús Villar Salinas, publicó un estudio titulado *Repercusiones demográficas de la última guerra civil española* (Madrid, 1942). La población de España había ido aumentando a un buen promedio en la década anterior a la guerra. El doctor Villar extendió el promedio de crecimiento del período 1926-35 hasta 1939, y llegó a la conclusión de que sin la guerra, la población de España habría sido de 1 100.000 personas más que las que revelaba el censo de 1940. Si sustraemos a ese cálculo los 300.000 emigrados (que había a mediados de 1940), el estudio del doctor Villar enumera unas

800.000 muertes. Las estimaciones demográficas de este tipo han de ser aproximadas, incluso en los casos en que se hayan llevado estadísticas cuidadosas; pero el estudio de Villar impresiona por una razón particular. En 1940, examinando las listas de muertes civiles y de bajas de guerra de que pudo disponer, estimó la población total de España en una cifra que resultó diferir tan sólo en 17.000 personas de la cifra del censo publicado en marzo de 1941.

Teniendo en cuenta las tres estimaciones más arriba citadas, comencé por la hipótesis de que habían muerto de medio millón a un millón de personas, y de que en números redondos la cifra de 800.000 para el período de 1936 a mediados de 1940 podía ser bastante aproximada. Entonces traté de estimar por separado los totales de muertes atribuidas a diferentes causas: batallas, represión en ambos bandos, incursiones aéreas y enfermedades.

La batalla más encarnizada de la guerra, y una de las más cuidadosamente observadas por corresponsales experimentados, fue la del Ebro. El 19 de noviembre de 1938, el *Times* de Londres estimaba que en los combates del 25 de julio al 15 de noviembre, cada bando había sufrido unas 40.000 bajas. Esta estimación concuerda con la importancia numérica de las fuerzas comprometidas y la naturaleza de la lucha. Los republicanos habían concentrado de 90 a 100.000 hombres, de los cuales alrededor de la mitad cruzaron el río en la última semana de julio. A partir de principios de agosto, en los combates intervino la artillería, y un fuego de ametralladoras y morteros comparable al de las batallas en el frente occidental en la primera guerra mundial; pero en un frente de sólo unos 25 km. Suponiendo que al final estuvieran comprometidos 100.000 hombres de cada bando, es razonable creer que sufrieran un 40 por ciento de bajas en una batalla de tal intensidad. Al estimar la proporción de muertos en una cifra total de bajas, es normal contar un muerto por cada cinco bajas. Esto significaría 8000 muertos por cada bando. Todos los relatos

están de acuerdo en describir la bravura francamente suicida de los atacantes y los defensores. Si aumentamos en un 50 por ciento la proporción «normal» de muertes, esto significaría 12.000 por cada bando, y redondeando, un máximo posible de 25.000 muertos para toda la batalla en su conjunto.

Las otras batallas largas y sangrientas fueron las del Jarama, Brunete y Teruel. En el Jarama, el general Orgaz atacó con un máximo de 40.000 soldados, y en Brunete, la República lanzó casi 50.000 hombres a la ofensiva. La batalla del Jarama duró unos diez días, y la de Brunete tres semanas. De nuevo los informes periodísticos y médicos concuerdan en la intensidad de la lucha. Los combates acabaron por agotamiento temporal. Si cada bando sufrió un 50 por ciento de bajas, que es un promedio muy elevado, de las cuales un 20-25 por ciento pueden ser consideradas muertes, eso seguiría significando que no hubo más de 10.000 muertos en cada caso. En Teruel hubo casi 100.000 hombres comprometidos de cada bando en los últimos días; pero, exceptuando los combates más duros dentro del casco urbano de la ciudad, las bajas fueron relativamente ligeras. Los republicanos avanzaron rápidamente en los primeros días, y al final, tras el gran esfuerzo nacionalista, se retiraron hacia el Este para evitar el cerco. Los historiadores nacionalistas pretenden que los republicanos sufrieron 50.000 bajas; pero aun aceptando esta cifra tan alta, llegamos aproximadamente a las 10.000 muertes, y estimando que los vencedores en este caso sufrieran la mitad de muertes que los vencidos, el total para la batalla ascendería a 15.000. (Ante cifra tan alta cito en comparación el cálculo del general Rojo de que los republicanos sufrieron 6000 bajas en Teruel).

Las bajas fueron también muy elevadas en el asalto a Madrid en noviembre de 1936; pero las fuerzas comprometidas eran todavía pequeñas. El general Mola llegó ante la capital con un ejército de 20.000 hombres, de los cuales empleó unos 5000 en

las columnas atacantes. Conocemos más detalles de la lucha en la Ciudad Universitaria que en los otros sectores de las proximidades occidentales de Madrid. Durante los combates de noviembre puede que murieran 2000 internacionales en la Ciudad Universitaria. Los atacantes perderían como máximo 4 o 5000 hombres en todo el frente antes de verse obligados a suspender el asalto. Así que no es razonable suponer que por aquel tiempo hubiera más de 10.000 muertes, como máximo. Tanto los relatos nacionalistas como republicanos implican que los combates locales de finales de diciembre y de enero cerca de Madrid costaron tanto como el principal asalto, así que de nuevo una estimación de más o menos 10.000 muertos.

El costo militar del resto de la guerra fue relativamente ligero. Los nacionalistas perdieron más hombres en Madrid en noviembre que durante toda su campaña en Andalucía y Extremadura. Las milicias lucharon sólo esporádicamente, y su total de muertes en este período corresponde más a las represalias que a bajas de categoría militar. La campaña del Norte fue asimismo relativamente ligera en bajas. Las milicias vascas no llegaron a contar con más de 50.000 hombres, y no practicaron la resistencia suicida. Unos 80.000 soldados nacionalistas tomaron Santander, y todos los relatos de la marcha a través de Guipúzcoa, Vizcaya y Santander destacan la naturaleza esporádica de la lucha. Grandes sectores de los frentes de Aragón, Castilla la Nueva y Andalucía estuvieron tranquilos durante toda la guerra, y los combates fueron esporádicos en la conquista de Cataluña en 1939. Las operaciones de guerrilla en Galicia y Asturias ocuparon a bastantes soldados nacionalistas, pero no hubo combates importantes. Creo que una estimación de 20.000 bajas militares cubriría la campaña del Norte y los frentes tranquilos.

Basándome en los razonamientos expuestos más arriba, he llegado a una estimación de unas 100.000 muertes en los campos de batalla, distribuyéndose como sigue:

10 000	en Madrid durante noviembre de 1936
10 000	en las cercanías de Madrid durante diciembre-enero
10 000	en el Jarama
10 000	en Brunete
15 000	en Teruel
25 000	en el Ebro
20 000	en todo el resto de la guerra
-----------	
100 000	

He puesto a propósito cifras aproximadas. Sospecho que, por ejemplo, teniendo en cuenta todos los factores de modo más exhaustivo, la batalla de Brunete costó más de 10.000 muertos y menos la del Jarama. Dudo que en Teruel hubiera 15.000 muertos; pero puedo haber subestimado las muertes en otros frentes menos importantes.

Este total de 100.000 es menor del que figura en cualesquiera de las historias militares que he leído. En el caso de las versiones nacionalistas creo que es debido al hecho de que Aznar y los autores de *Cruzada* exageraron bastante, por razones políticas, el número y equipo de las fuerzas republicanas, y de aquí las cifras de los muertos y heridos que causaron los nacionalistas a dichas fuerzas. En el caso de las historias prorrepublicanas, el deseo de ensalzar el heroísmo y de rendir tributo al valor de los vencidos les llevó a la exageración. Así el general Rojo escribió en *¡Alerta los pueblos!*, que 100.000 hombres murieron por la República. Al decir eso tal vez quiso expresar que incluía a las muertes por represalia en dicha cifra; pero en todo caso, dado que estimó 6000 muertes republicanas en Teruel, y menos de 10.000 en el Ebro, es difícil ver cómo los muertos en el campo de batalla del ejército republicano podían ascender a la cifra de 100.000.

Por otra parte, mi estimación concuerda con el número de las fuerzas comprometidas. El ejército republicano llegó a contar como máximo con 600.000 hombres y los nacionalistas tuvieron a un total de 500.000 hombres en armas (incluyendo a las fuer-

zas italianas, alemanas y portuguesas). Es verosímil que en una enconada guerra civil de dos años y medio de duración en la que intervinieron 1 100.000 hombres, el 40 o el 50 por ciento de ellos hubiera sido al menos ligeramente herido alguna vez. Esto significaría 500.000 bajas, de las cuales un 20 por ciento, o sea 100.000, fueron muertos.

En el caso de las represalias es aún más difícil ser exactos. Sólo podemos reunir informes sueltos y ofrecer simultáneamente al lector las bases de un razonamiento, gracias al cual hemos llegado a una estimación. En 1943 el Ministerio de Justicia publicó una masa de testimonios y de documentos referente a los asesinatos en la zona republicana, bajo el título de *Causa general*. En su conclusión, la obra declara que el ministerio investigó debidamente 85.940 casos de dicho tipo, declaración que fue ampliamente aceptada por escritores posteriores, quizá porque parece mostrar un espíritu de moderación en relación con la pretensión anterior de que hubo hasta 300.000 casos.

La información de *Causa* es muy detallada y específica para las ciudades de Madrid y Bilbao y la persecución religiosa en Cataluña. Incluye relatos detallados de los incidentes más graves ocurridos en varios sitios, tal como el asesinato de sacerdotes en Ciudad Real, el asalto a la cárcel de Jaén y el asesinato de más de cien oficiales de la Armada. Estudié esta obra página por página, totalizando los números que daba el texto, redondeando las estimaciones totales concediendo de más, y no restando ni aun en el caso de que el texto indicara que podía haber una duplicidad entre un relato y otro. En total sumé 6000. Como ya he indicado, no abarca a toda España. Sin embargo, describe los incidentes principales y mejor conocidos de asesinatos en masa, y es innecesario decir que no minimiza las culpas de los «rojos». Es un caso de acusación sin defensa. Sus notas políticas distorsionan tan violentamente la historia del período, que ningún erudito serio puede otorgar crédito a sus pretensiones sin otra confirmación.

Dada la ausencia de esa otra evidencia, ni por un momento acepto la cifra de 85 940 asesinatos allí imputados a los «rojos».

Una fuente de información mucho más digna de crédito, aunque en un campo limitado, es la *Historia de la persecución religiosa en España*, 1936-1939 (Madrid, 1961), de Antonio Montero. Tras años de cuidadosa investigación, el autor relaciona a unos 6800 religiosos como víctimas del terror en la zona del Frente Popular. La cifra es alta, pero digna de crédito, pues había unos 30.000 sacerdotes y frailes en la España de 1936. También, separando ambas categorías, Montero muestra que el 13 por ciento de los sacerdotes seculares y el 23 por ciento de los frailes fueron muertos. Esto concuerda con unas circunstancias en donde los sacerdotes podían esconderse más fácilmente y era más probable que encontraran civiles que atestiguaran a su favor ante los comités revolucionarios.

Según todos los testimonios, las principales víctimas fueron los curas y guardias civiles (en los pueblos) y los falangistas conocidos (en las grandes ciudades). Evidentemente, los guardias y los falangistas eran más capaces de defenderse físicamente que los curas, y también estaban mejor preparados psicológicamente para reaccionar ante una acción violenta que no para convertirse fácilmente en víctimas. En 1936 había 32.000 guardias civiles. Más de la mitad de ellos se sublevaron con los insurgentes, y algunos miles fueron leales a la República, especialmente en Cataluña y Levante. Otros tantos miles se limitaron a quitarse sus uniformes (si estaban en la zona del Frente Popular) y desaparecieron de los pueblos donde podían temer que los asesinaran. Es difícil creer que más de 1000 guardias civiles cayeran víctimas de la violencia revolucionaria. Consideraciones similares se aplican a la Falange. En la época de las elecciones de febrero de 1936, la Falange sólo contaba con 5000 afiliados. Creció rápidamente durante la primavera y llegó a alcanzar 60.000 antes del estallido de la guerra civil. Sin embargo, la gran mayoría de estos nuevos

miembros no eran conocidos por los comités revolucionarios como jefes a los que se pudiera hacer responsable del alzamiento. Pero, con tal de hacer una estimación, supongamos que en julio los revolucionarios conocieran los nombres de 10.000 falangistas en la zona de España dominada por el Frente Popular. No me parece verosímil que fueran asesinados ni siquiera 2000 de ellos.

Otra cifra estimativa a la que doy gran crédito, porque la he recibido independientemente de varios médicos y de un miembro de la Cruz Roja española que se ocupó de esta cuestión desde el primer momento, da un total de 6000 víctimas para la ciudad de Madrid (incluyendo a los presos sacados de las cárceles los días 5 y 6 de noviembre, los curas y falangistas). En las otras ciudades importantes, como Barcelona y Valencia, hubo un terrorismo similar, pero en menor escala, y las víctimas potenciales tuvieron también mayores facilidades para escaparse debido a la proximidad del mar. Si 6000 es una estimación razonable para Madrid, 6000 también cubriría Barcelona y Valencia.

En los pueblos la situación varió grandemente, como ya he descrito en el capítulo dedicado a la revolución y el terror. Pero en los pueblos había pocas personas que por definición pudieran ser consideradas como enemigas: a lo sumo el cura, los guardias civiles, y algunos terratenientes odiados o sus representantes. En Andalucía los campesinos a menudo detuvieron a tales personas inmediatamente. La mayoría de ellos, lejos de ser fusilados, fueron puestos en libertad por el ejército invasor. En Cataluña y Levante los anarquistas detuvieron a muchos terratenientes y monárquicos en el supuesto de que era probable que hubiesen respaldado el alzamiento; pero la mayoría de estas personas fueron puestas en libertad cuando la evidencia y el testimonio de campesinos que los conocían de muchos años indicaron que no tenían nada que ver con la sublevación. Finalmente, debe ser recordado, con respecto a ciudades y pueblos, que la gran mayoría de asesinatos ocurrieron en los tres primeros meses de la guerra.

Hay que admitir que ésta es la categoría más difícil para hacer aún estimaciones limitadas. Si, por ejemplo, 500 pueblos de la zona del Frente Popular fueron testigos de 10 asesinatos cada uno, el total sería de 5000. No creo que en tal número de pueblos se asesinara realmente a tal número de personas. En grandes extensiones de Castilla la Nueva y Aragón no ocurrió prácticamente ninguna violencia revolucionaria. Sin embargo, en vez de subestimar el total, sostuve la hipótesis de 5000 confiando enteramente que era más que suficiente. Estimando por lo alto, deseé también asegurarme de que cubría también incidentes como el linchamiento de los aviadores derribados y el fusilamiento de rehenes tras las incursiones aéreas.

Hay pocos casos numéricamente importantes que puedan ser relacionados tras los primeros meses. Las luchas en Barcelona durante mayo de 1937 tal vez produjeron unas 1000 víctimas, que hay que calificar más bien en las categorías de asesinato o represalia que no en las de bajas militares. Quizá se produjeron otras 1000 víctimas en Madrid durante marzo de 1939. El SIM efectuó en 1938 numerosos asesinatos políticos, y tanto los comunistas como los anarquistas, en el frente, o en bases militares, fueron culpables de crímenes políticos en pequeña escala; inevitablemente pequeños porque tenían que actuar primariamente como aliados, por muchas disputas o arreglos de cuentas que aplazaran para después de la guerra. En los momentos de peor tensión, los comunistas, anarquistas y el POUM podían creer que los dirigentes de los grupos rivales deberían ser liquidados físicamente; pero jamás adoptaron tal actitud hacia los miembros corrientes. Por lo tanto, calculo que 1000 sería una cifra alta para los asesinatos políticos, dejando aparte los alzamientos de Barcelona y Madrid para los cuales ya he concedido cifras más altas de lo verosímil.

Basándome en los razonamientos anteriores, he llegado a una estimación de tanteo de 20.000 muertes por asesinato en la zona

del Frente Popular, desglosándose como sigue:

100.000	en Madrid	Virtualmente durante los tres primeros meses de guerra
10.000	en Barcelona y Valencia	
50.000	en otras ciudades, pueblos y aldeas	
20.000	en mayo de 1973 en Barcelona	
200.000	en marzo de 1939 en Madrid	
200.000	SIM, etcétera.	
20.000		

Refiriéndonos a las estimaciones por categoría en lugar de por zonas geográficas:

6800 sacerdotes (casi el total).
1000 guardias civiles
2000 falangistas

En resumen, que apenas si la mitad del total corresponde a las categorías de los que eran obvios enemigos para los revolucionarios.

La categoría simple de muertos mayor fue causada por las represalias llevadas a cabo por los carlistas, falangistas y militares. Detrás de las líneas, la liquidación física del enemigo fue un proceso constante a través de la guerra. Los nacionalistas tenían, por definición, muchos más enemigos que los revolucionarios: todos los miembros de los partidos del Frente Popular, los masones, todos los funcionarios de los sindicatos de la UGT o la CNT o de las casas del pueblo; todos los miembros de los jurados mixtos que en general habían votado en favor de las demandas de los obreros. La represión fue efectuada en tres etapas. Al estallido de la guerra, las detenciones y fusilamientos en masa de tales personas correspondió al terror revolucionario en la zona del Frente Popular; pero hubo muchas más víctimas, porque tales detenciones y fusilamientos fueron oficialmente sancionados y porque

una gran parte de la población era considerada hostil. En la segunda etapa, el ejército nacionalista, al conquistar zonas que habían estado en poder del Frente Popular, llevó a cabo fuertes represalias para vengar las de los revolucionarios y para poder controlar a una población hostil con pocas tropas. En los pueblos andaluces, como en los castellanos, hay muchos testimonios concernientes a represalias del orden del 60 por 6, 90 por 9, y así sucesivamente. En la tercera etapa, que duró al menos hasta el año 1943, las autoridades militares celebraron juicios sumarísimos masivos seguidos por ejecuciones en gran escala.

Para las tres etapas la evidencia está clara en el sentido cualitativo; pero las cifras se han de estimar de un modo aproximado. Los archivos de las prisiones y los registros de fallecimientos son equívocos, puesto que es conocido que de modo regular se firmaban documentos para la liberación de hombres que eran llevados a fusilar, y que certificados alegando ataques al corazón o de apoplejía se redactaban para cadáveres que habían quedado al borde de los caminos. Las técnicas de ejecución incluían la desfiguración deliberada de los cadáveres para que no pudieran ser reconocidos. Funcionarios de aquella época han testificado que las familias sentían temor a dar por desaparecidos a miembros masculinos de las mismas, ni iban a identificar los cuerpos de los muertos.

En lo referente a las ejecuciones políticas de los primeros meses de la guerra ofrezco seguidamente varias ilustraciones del tipo de estimaciones sobre las cuales he basado mis conclusiones. Un médico forense, miembro de uno de los partidos republicanos moderados de los 1930, con una década de servicios en el gobierno civil de una de las provincias afectadas, me dio lo que consideraba una estimación mínima de los seis primeros meses: 15.000 para la provincia de Valladolid, 15.000 para la de Zamora y 4000 para la de Salamanca. (Recibí confirmación por separado del hecho de que la represión hubiera sido menos severa en Sala-

manca que en las otras dos provincias). Un funcionario municipal de Sevilla, que fue encarcelado el 19 de julio por ser socialista, y que salvó la vida porque uno de los jueces testificó en el juicio sumarísimo que en 1932, siendo miembro de un jurado mixto, se mostró «favorable» y no votó siempre por los trabajadores, estimó en 6000 las ejecuciones en la ciudad a finales de 1936. Su estimación estaba basada en el número de hombres que eran sacados cada noche de la prisión mientras él estuvo allí, junto con informes similares que obtuvo de amigos que estuvieron encerrados en otras cárceles de Sevilla, y que lograron sobrevivir. Hablé con otras personas en la misma ciudad, que consideraron esta estimación extremadamente modesta. Un notario, exmiembro de la CEDA, que había vivido siempre en la provincia de Córdoba, trató en 1946 de determinar lo más exactamente posible el número de ejecuciones políticas en Andalucía. Pudo consultar a otros notarios y las listas municipales de muertos. Habló con curas párrocos, quienes podían nombrar docenas de víctimas católicas (y a cuyas familias no se les permitió poner sus nombres en ninguna lápida sepulcral). Se puso en contacto con numerosos exmiembros de la UGT y la CNT. Estimó un total de 26.000 para la provincia de Granada, 32.000 para la de Córdoba y 47.000 para la de Sevilla.

En el curso de un año de investigaciones, sostuve más de una docena de charlas con oficiales nacionalistas que me describieron los primeros días de la guerra. En un pueblo de Aragón los trabajadores se quedaron en sus casas durante el fin de semana del 18-19 de julio. Luego, oyendo que había caído el cuartel de la Montaña, organizaron una manifestación, armados de escopetas. «Nosotros» volvimos las ametralladoras hacia ellos. En aquel momento no resultaron muchos muertos, desde luego, pero huyeron a la Casa del Pueblo y allí la *limpia* fue fácil. El pueblo estuvo tranquilo todo el resto de la guerra. En una ciudad costera de Andalucía, los «rojos» pensaron ingenuamente que una huelga

general acabaría con el alzamiento. El oficial que se apoderó de la ciudad describió cómo sus hombres, que sólo eran un «puñado», ametrallaron a las oleadas de obreros que avanzaban. Más de uno me explicó que fusilaban a todo el que veían vestido con mono o que tenía una señal morada en el hombro. Al fin y al cabo el ejército tenía prisa, y no disponía de tiempo ni de hombres que desperdiciar en la retaguardia. En el tono de estas descripciones no había nada excitado, pagado de sí mismo o defensivo. Esos oficiales trataban el asunto como si fuera cosa de exterminar sabandijas. Una de las impresiones más fuertes que me llevaron finalmente a aceptar cifras tan altas para las represalias nacionalistas fue el hecho de que estos oficiales evidentemente no tenían a sus enemigos por seres humanos. No estaban matando hombres; estaban haciendo una limpieza de ratas. Si yo les mencionaba Badajoz, estaban prontos a explicar la importancia de la unión de las fuerzas del Norte y del Sur. Lejos de considerar una calumnia las ejecuciones en la plaza de toros, evocaban otros incidentes parecidos de los que no informó la prensa mundial. En general, las descripciones hechas por los conquistadores coincidían bastante con las de los conquistados, excepto en los puntos de vista y en los adjetivos empleados.

Hacia mediados de 1937 las limpias militares y las apasionadas ejecuciones de los carlistas y falangistas habían casi totalmente terminado. Pero los tribunales marciales y los piquetes de ejecución siguieron trabajando durante más de otros cinco años. Elena de la Souchère, en *Explication de l'Espagne* (París, 1962), da a conocer los resultados de su lectura de las estadísticas oficiales en el período inmediato de la posguerra. En la categoría de muertes violentas, el total para 1939-1941 es superior en 84.000 al del total para la misma categoría de los tres años precedentes a la guerra (siendo la población de uno por ciento más numerosa en el último período). Las cifras de muertes en su conjunto son superiores en 220.000 en los años 1939-1941 que en los tres años

anteriores a la guerra. La cifra de 84.000 es indudablemente menor que el número de ejecuciones, puesto que muchas de ellas fueron relacionadas como fallecimientos por causas naturales. La cifra de 220.000 es demasiado alta, puesto que se han de tener en cuenta las altas cifras de muertes debidas a las enfermedades y a la desnutrición de la posguerra. Pero una buena parte de las 220.000 pueden ser atribuidas a ejecuciones o a fallecimientos debidos a las condiciones de vida en los campos de concentración, muertes que no habrían ocurrido excepto como parte de una proscripción en masa.

Después de la guerra el Gobierno mantuvo prisiones militares en cada una de las 50 capitales de provincia y utilizó docenas de edificios de escuelas y conventos en las grandes ciudades, que fueron convertidos en cárceles atestadas de presos. Casi 70.000 veteranos republicanos regresaron a España a través de Hendaya a finales de febrero y en marzo de 1939, y unos 300.000 soldados y guerrilleros depusieron las armas en toda España en los últimos días de marzo. Ya había decenas de millares que esperaban en los calabozos nacionalistas y en los campos de prisioneros de guerra, y más de 100.000 obreros de Cataluña y Levante habían contribuido a la fabricación de material de guerra. Así que más de medio millón de hombres eran candidatos a juicios sumarísimos en la primavera de 1939. Todos ellos se habían opuesto al Movimiento Nacional desde el primero de octubre de 1934, según la ley de Responsabilidades Políticas.

Las autoridades nacionalistas quedaron al parecer sorprendidas por la obediencia del ejército derrotado al informar en los centros de desmovilización, y carecían de personal preparado para hacerse cargo de ellos. Miles de hombres fueron devueltos a sus hogares en vagones de ganado, y no se les dio de comer en un viaje de ocho o diez días. Otros millares esperaron en condiciones similares de inanición en los campos de concentración establecidos en las afueras de las grandes ciudades.

Las mujeres llevaban víveres a sus esposos o hermanos, así como regalos para los guardianes que verosímilmente podían aliviar su suerte. Los que no tenían familia, o estaban lejos de casa, subsistían a base de sopas acuosas que contenían un poco de lentejas o mondas de verduras. Los hombres eran sometidos a consejo de guerra por «rebelión militar» en grupos de 20 y 30, día tras día, en cada uno de los centenares de prisiones. Soldados reclutados eran destinados a lo que eufemísticamente se llamaba el *servicio de ambulancia*. Su verdadera tarea era recoger los cuerpos de los hombres que se habían dirigido a la muerte en hilera frente a una ametralladora. Muchos reclutas pagaban 25 pesetas a soldados con el estómago más fuerte que el suyo para poder excusarse de hacer ese servicio. Los presos más cultos servían como empleados, y estaban encargados de hacer recibos por las pertenencias de sus camaradas internados, y por el dinero para gastos que les traían sus familias. Tales empleados tenían que enterarse a la fuerza de los miles de ejecuciones ocurridas en sus prisiones en los años 1939-1941, y de las que en menor número ocurrieron en 1942 y 1943. Como los «rojos» acabaron por ser prácticamente exterminados y se acercaba la derrota de Alemania, en 1943 se redujo grandemente el número de ejecuciones. Cada vez con más frecuencia, los que habían sido condenados a muerte vieron sus sentencias capitales conmutadas por las de 30 años en campos de trabajo y cada día de trabajo les valía por dos de la sentencia original. No hay manera de saber qué proporción de sentencias de muerte fueron conmutadas así, ni cuántos hombres murieron a causa de la disentería, tifus, tuberculosis o de la combinación del exceso de trabajo y la subalimentación en los campos de trabajo.

De acuerdo con el tipo de evidencia cualitativa que hemos dado más arriba, y las indicaciones generales estadísticas de Elena de la Souchère, considero cierto que cerca de 200.000 hombres fallecieron en los años 1939-1943. Un oficial de carrera y aboga-

do, que sirvió con los nacionalistas durante la guerra y fue nombrado defensor en los juicios sumarísimos en masa, me juró que, basándose sólo en las listas del Ministerio de la Gobernación, sabía que hacia el fin de la segunda guerra mundial iban ejecutadas más de 300.000 sentencias de muerte. Un exdiputado republicano que dio estimaciones muy bajas para la represión en Asturias, que no luchó en la guerra y que pasó encarcelado los años 1939-1947, estaba absolutamente convencido, comparando las notas de su cárcel de gran ciudad con las de amigos que llevaron la cuenta en otras prisiones, de que 300.000 era una estimación mínima para la represión de la posguerra. En todo caso, las ejecuciones políticas de los nacionalistas durante y después de la guerra constituyeron el capítulo mayor de muertes atribuibles a la guerra civil.

Aún quedan los factores de las incursiones aéreas y de las muertes por enfermedad. Las principales incursiones aéreas tuvieron lugar contra Madrid en noviembre de 1936 y contra Barcelona en marzo y mayo de 1938. Los informes indicativos policiales y periodísticos, aunque incompletos, sugieren que aun en los ataques más intensos murieron centenares y no millares de personas. Para toda la guerra, el total puede calcularse entre 5000 y 10.000, y esta última cifra puede tenerse realmente como máxima. En cuanto a las enfermedades, el tifus, la tuberculosis y las varias dolencias originadas por la subalimentación eran endémicas en toda España; pero los servicios sanitarios fueron excelentes en ambos bandos (excepto en las cárceles), así que no se produjeron epidemias. Es dudoso que puedan ser atribuidas 50.000 muertes al aumento de enfermedades endémicas durante la guerra. Yo creo que la mayoría de las muertes en la posguerra fueron debidas a ejecuciones; pero sin duda muchos ancianos, particularmente intelectuales, fallecieron dadas las condiciones de vida de las cárceles. Debido al estallido de la segunda guerra

mundial, los víveres y los medicamentos fueron más escasos en el período 1939-1941 que lo habían sido durante la guerra civil.

Sumando las estimaciones separadas, tenemos:

100.000	muertos en los campos de batalla
10.000	por las incursiones aéreas
50.000	por enfermedades y desnutrición (durante la guerra civil)
20.000	por represalias políticas en la zona republicana
200.000	por represalias nacionalistas durante la guerra
200.000	prisioneros «rojos» muertos por ejecución o enfermedades de 1939 a 1943.
580.000	

El total se queda más bien corto, de acuerdo con la opinión española y mundial, y según las estimaciones demográficas del doctor Villar Salinas (800.000). Debo recalcar una vez más la naturaleza inevitablemente aproximada de todas las cifras. Sin embargo, creo que mis primeras cuatro cifras tienden hacia el máximo. Con respecto a las dos últimas cifras pueden hacerse algunas comparaciones. En las dos semanas que siguieron a la Comuna de París en 1871, el ejército francés colocó 15 puestos de ametralladoras en las plazas y parques de la ciudad y fusiló de 17.000 a 25.000 communards. Al año siguiente quizá fallecieran 3000 personas más en las cárceles o buques-prisiones. París tenía en aquella época menos de 2.000.000 de habitantes. La represión que aquí he resumido se aplicó a una nación de 25.000.000 de habitantes y continuó por un período de seis años.

En el último año de la guerra civil, el Gobierno republicano discutió repetidamente la cuestión de si merecía la pena continuar la resistencia en una guerra en que militarmente no había esperanzas de ganar. Uno de los constantes argumentos de Negrín fue el de que morirían más hombres si la República se rendía que si se resistía. En este punto tenía toda la razón. El lector escéptico debe recordar lo que es perfectamente conocido acerca de la conducta de los nazis en la segunda guerra mundial. Los

hombres que ocupaban el poder en España tenían la misma ideología, y ya habían horrorizado más de una vez a los alemanes y a los italianos.

Cuando Heinrich Himmler visitó Madrid en 1941, en relación con el entrenamiento de la policía política española, desaprobó, por razones prácticas, el promedio de ejecuciones. La desnazificación de Alemania y la desestalinización de Rusia han revelado el alcance del asesinato en masa practicado por los gobiernos totalitarios en el siglo XX. Los hombres que hicieron tales cosas en España siguen siendo sus dirigentes. Naturalmente, desde 1945 no se han comportado como se comportaron de 1936 a 1945. Pero algún día, con un cambio de régimen, el mundo se enterará abiertamente de los crímenes que hoy sólo pueden ser deducidos por evidencias fragmentadas y pobremente documentadas.

BIBLIOGRAFÍA

AL preparar esta bibliografía me he guiado por varias consideraciones. Con referencia a la España de los años 1930 hay una extraordinaria cantidad de literatura efímera, puramente propagandística. Antes de registrar un libro o periódico, apliqué una regla práctica: que para incluirlo en la lista debería tomar de él algunas notas positivas. La relación no deja por eso de ser menos exhaustiva, pero creo que cualquier erudito que consulte las obras relacionadas más abajo las hallará ciertamente valiosas en algún aspecto.

Las secciones I, II y III contienen, respectivamente, obras sobre antecedentes, estudios que tratan principalmente de la República de 1931-1936 y estudios sobre la guerra civil. Inevitablemente hay superposiciones en una división semejante. Antes que duplicar numerosas anotaciones, he tratado sencillamente de relacionar cada libro una sola vez, en la sección donde fue más valioso para mis investigaciones. En la sección II las indicaciones breves, significativas, son dadas con muchas de las anotaciones. Muchas obras en las secciones II y III (las señaladas con un asterisco) han sido comentadas en las notas al pie, y el índice preparado por el autor puede guiar a los lectores interesados en dichos comentarios. Las secciones IV y V relacionan, respectivamente, periódicos de la época republicana y publicaciones diversas. Estas anotaciones indican su significado dondequiera que el título no habla por sí mismo.

I. OBRAS DE FONDO

Alba, Víctor, *Histoire des républiques espagnoles, Vincennes*, 1948. Un punto de vista marxista y catalanista bien informado, comparando las debilidades de la primera y segunda repúblicas.

Baelen, Jean, *Principaux traits du développement économique de l'Espagne*, París, 1924.

Barceló, José Luis, *Historia económica de España*, Madrid, 1952.

Barea, Arturo, *The forging of a Rebel*, Nueva York, 1946. (Edición en castellano: *La forja de un rebelde*, Buenos Aires, 1951). Autobiografía rica en información acerca de la vida de la clase obrera y de la clase media baja en las primeras décadas del siglo xx.

Bec, René, *La dictature espagnole de Primo de Rivera*, Montpellier, 1933. Trata del problema de la indiferencia política entre las personas instruidas.

Brenan, Gerald, *The Spanish Labyrinth*, Cambridge, 1943. (Traducción castellana: *El laberinto español*, París, 1962). Especialmente valioso sobre los anarquistas, la cuestión catalana y los problemas de la tierra; también es muy útil por su bibliografía y para las notas.

Bruguera, F. G., *Histoire contemporaine de l'Espagne*, París, 1953. Una de las primeras tentativas para dar información económica y demográfica desde el año 1789 en adelante.

Deakin, Frank B., *Spain Today*, Londres, 1924.

Díaz del Moral, Juan, *Historia de las agitaciones campesinas andaluzas: Córdoba*, Madrid, 1929. Único como estudio objetivo de los aspectos económicos y políticos del problema agrario; sólo

trata de la provincia de Córdoba en el medio siglo que va de 1880 a 1930.

Domingo, Marcelino. *¿A dónde va España?*, Madrid, 1930.

Fernández Almagro, Melchor, *Historia del reinado de Don Alfonso XIII*, Barcelona, 1933.

García Venero, Maximiano, *Historia del nacionalismo vasco*, Madrid, 1945; *Historia del nacionalismo* catalán, Madrid, 1944.

Jiménez de Asúa, Luis, *Al servicio de la nueva generación*, Madrid, 1930. Vivido reflejo de las esperanzas reformistas de la clase media en vísperas de la segunda República.

Jobit, Pierre, *Les éducateurs de l'Espagne moderne*, París, 1936. Fundamental para la comprensión del krausismo.

Jupin, Rene, *La question agraire en Andalousie*, París, 1932.

López Morillas, José, *El krausismo español*, México, D. F., 1956.

Lorenzo, Anselmo, *El proletariado militante*, México, D. F., 1943. Muy valioso para conocer la psicología y los ideales de los dirigentes del anarquismo español que se educaron a sí mismos en las ciudades industriales de Cataluña. Esta edición es una reimpresión de la original, publicada en 1901 en Barcelona.

Lorenzo Pardo, Manuel, *La conquista del Ebro*, Zaragoza, 1931. Obra del más importante de los ingenieros hidráulicos españoles; se refiere a los logros de la década de los veinte y planes futuros.

Madariaga, Salvador de, *Spain*, Nueva York, 1958. (Traducción española: España, Buenos Aires, 1964). Rica en recuerdos personales de los grupos liberales durante las décadas que precedieron a la República. Las anteriores ediciones de 1930 y 1943 contienen los mismos capítulos de fondo al igual que la presente edición disponible.

Marvaud, Ángel, *L' Espagne au* XXe *siècle*, París, 1913; *La question sociale en Espagne*, París, 1910.

Maura Gamazo, Gabriel, *Bosquejo histórico de la dictadura*, 2 volúmenes, Madrid, 1930.

Moróte, Luis, *Los frailes en España*, Madrid, 1904.

Ossorio y Gallardo, Ángel, *Diccionario político español*, Buenos Aires, 1945; *La España de mi vida*, Buenos Aires, 1941 y *Mis memorias*, Buenos Aires, 1946.

Pabón y Suárez, Jesús, *Cambó*, Barcelona, 1952.

Reventós, Manuel, *Assaig sobre alguns episodis històrics dels moviments socials a Barcelona en el segle* XIX, Barcelona, 1925.

Rodríguez Revilla, Vicente, *El agro español y sus moradores*, Madrid, 1931.

Romanones, Álvaro de Figueroa y Torres, conde de, *Las responsabilidades políticas del antiguo régimen de 1875 a 1923*, Madrid, 1924. Clara y hábil defensa de la Monarquía constitucional.

Sancho Izquierdo, Miguel, *El programa mínimo de las derechas*, Zaragoza, 1919. Especialmente interesante como precursor del programa de la CEDA.

Santullano, Luis A., *El pensamiento vivo de Manuel B. Cossío*, Buenos Aires, 1946.

Sóffner, W., *Die deutsch-spanischen Handelsbeziehungen*, Eilenburg, 1929.

Spain, Resources, Industries, Trade and Public Finance, U. S. Department of Commerce, Trade. Info. Bull. No. 739,1930.

Torrubiano Ripoll, J., *Beatería y religión*, Madrid, 1930.

Trend, J. B., *The origins of Modern Spain*, Cambridge, Inglaterra, 1934. Trata principalmente de las corrientes intelectuales liberales, 1860-1930.

Vicens Vives, Jaime, *Aproximación a la historia de España*, Barcelona, 1952; *Industrials i polítics del segle* XIX, Barcelona, 1958;

Historia social y económica de España y América, vol. IV, siglos XIX y XX, Barcelona, 1959.

Vilar, Pierre, *Histoire de l'Espagne*, París, 1947. (Traducción castellana: *Historia de España*, París, 1963). Esta obra, juntamente con la *Aproximación* de Vicens Vives, arriba citada, es indispensable para cualquier estudioso de la historia española, ambas como las interpretaciones breves más incisivas de que se dispone.

(En la obra de Gerald Brenan, *The Spanish Labyrinth*, puede hallarse una bibliografía crítica de obras de fondo mucho más extensa).

II. LA SEGUNDA REPÚBLICA, 1931-1936

Ackermann, Georg, *Spanien Wirtschaftlich Gesehen*, Berlín, 1939.

Adams, Alexander, *Economic Conditions in Spain*, Londres, 1930, 1933, 1935.

Aguirre y Lecube, José Antonio, *Entre la libertad y la revolución, 1930-1935*, Bilbao, 1936.

Albert Despujol, Carlos de, *La gran tragedia de España, 1931-1939*, Madrid, 1940.

Albornoz, Álvaro de, *Páginas del destierro*, México, D. F., 1941; *El partido republicano*, Madrid, sin fecha; *La política religiosa de la República*, Madrid, 1935; *Al servicio de la República*, Madrid, 1936.

Alcalá-Zamora, Niceto, *Régimen político de convivencia en España*, Buenos Aires, 1945.

Altabella Gracia, Pedro P., *El catolicismo de los nacionalistas vascos*, Vitoria, 1939.

Álvarez, Basilio, *Dos años de agitación política*, Alcalá de Henares, 1933.

Angulo, Enrique de, *Diez horas de Estat català*, Barcelona, 1935.

Ansaldo, Juan Antonio, *Mémoires d'un monarchiste espagnol, 1931-1952*, Monaco, 1952.

Aragón Montejo, José, *La revancha del campo*, Madrid, 1929.

Arrabal, Juan, *José María Gil Robles*, Madrid, 1933.

Arrarás, Joaquín, *Historia de la segunda República española, vol. I*, Madrid, 1956; (ed.), *Memorias íntimas de Azaña*, Madrid, 1939.

Azaña, Manuel, *Discursos en campo abierto*, Madrid, 1936; *En el poder y en la oposición*, 2 volúmenes, Madrid, 1934; *Mi rebelión en Barcelona*, Madrid, 1935; *Una política*, Madrid, 1932.

Barcena, F. A., *Los jesuitas españoles*, Madrid, 1932.

Barea, Usa y Arturo, *Spain in the Post-war World*, Londres, 1945.

Barrail, Henri, *L'autonomie régionale en Espagne*, Lyon, 1933.

Bazán, Armando, *España ante el abismo*, Santiago de Chile, 1937.

Bedoya, Javier M. de, *Siete años de lucha*, Valladolid, 1939.

Benavides, Manuel D., *El último pirata del Mediterráneo*, Barcelona, 1934.

Burgo, Jaime del, *Requetés en Navarra antes del alzamiento*, San Sebastián, 1939.

Camín, Alfonso, *El valle negro*, México, 1938.

Canel, José (seudónimo), *Octubre rojo en Asturias*, Madrid, 1935.

Carbó, Eusebio C, *Reconstrucción de España*, México, D. F., 1945.

Carrión, Pascual, *Los latifundios en España*, Madrid, 1932.

Casona, Alejandro (seud. de Alejandro Rodríguez Álvarez), *Una misión pedagógico-social en Sanabria*, Buenos Aires, 1941.

Castillejo, José, *War of Ideas in Spain*, Londres, 1937.

Comín Colomer, Eduardo, *Historia secreta de la segunda República*, Barcelona, 1959.

Conze, Edward, *Spain Today*, Londres, 1936.

Cossío, Francisco de, *Manolo*, Valladolid, 1939.

Dalmau, E. Isern, *Política fiscal de la República*, Barcelona, 1933.

Díaz-Ambrona, Domingo, *Panorama*, Madrid, 1933.

Diez Vicario, v. de, *¿Laica España?*, Toledo, 1933.

Domingo, Marcelino, *La experiencia del poder*, Madrid, 1934.

España, *Diario de sesiones de las Cortes Constituyentes,* *1931-1933*, 25 volúmenes, Madrid, 1933; Instituto de Reforma Agraria, *Agrarian Reform in Spain*, Londres, 1937; Leyes, estatutos, etc., *Reforma agraria*, Madrid, 1932; Ministerio de Trabajo, *Anuario español de política social*, Madrid, 1934.

Esteban Infantes, Emilio, *General Sanjurjo*, Barcelona, 1958; La sublevación del general Sanjurjo, Madrid, 1933.

Fábregas, Joan P., *La crisis mundial y sus repercusiones en España*, Barcelona, 1933; *Factors econòmics de la revolució*, Barcelona, 1937.

Fernández Almagro, Melchor, *Catalanismo y República española*, Madrid, 1932; *Historia de la República española*, Madrid, 1940.

Fernsworth, Lawrence, *Spain's Struggle for Freedom*, Boston, 1957.

Fuentes Irurozqui, Manuel, *Síntesis de la economía española*, Madrid, 1946; *Viaje a través de la España económica*, Madrid, 1948.

Galindo Herrero, Santiago, *Los partidos monárquicos bajo la segunda República*, 2.a ed., Madrid, 1956.

García Venero, Maximiano, *Historia de los internacionales en España*, 3 volúmenes, Madrid, 1957.

González-Blanco, Pedro, *Ordenación y prosperidad de España*, Madrid, 1934.

Gordón Ordás, Félix, *Una campaña parlamentaria, el artículo 26… y los haberes pasivos al clero*, Madrid, 1934.

Grossi, Manuel, *La insurrección de Asturias*, Barcelona, 1935.

Gual Villalbí, Pedro, *Política económica*, Barcelona, 1936.

Guixé, Juan, *¿Qué ha hecho la República?*, Madrid, 1933. (Una edición ligeramente abreviada apareció en lengua francesa con el título: *Le vrai visage de la République espagnole*, París, 1938).

Hidalgo, Diego, *¿Por qué fui lanzado del Ministerio de la Guerra?*, Madrid, 1934.

Iniesta Corredor, Alfonso, *Educación española*, Madrid, 1942.

Iturralde, Juan de (seud. del padre Juan de Usabiaga), *El catolicismo y la cruzada de Franco*, 2 volúmenes, Vienne, Francia, 1955 y 1960.

Jato, David, *La rebelión de los estudiantes*, Madrid, 1953.

Jiménez de Asúa, Luis. *Castilblanco*, Madrid, 1933; *La Constitución política de la democracia española*, Santiago de Chile, 1942; *Proceso histórico de la Constitución de la República española*, Madrid, 1932.

Ledesma Ramos, Ramiro, *Discurso a las juventudes de España*, Madrid, 1935.

Lefaucheux, Charles, *La peseta et l'économie espagnole depuis 1928*, París, 1935.

Lerroux, Alejandro, *La pequeña historia*, Buenos Aires, 1945; *Trayectoria política*, Madrid, 1934.

Lesaffre, Jean, *Le problème national de la Catalogne et sa solution par le statut de 1932*, Montpellier, 1934.

Lindner, Elli, *El derecho arancelario español*, Barcelona, 1934.

Lizarra, A. de (seud. de Andrés María de Irujo), *Los vascos y la República española…*, Buenos Aires, 1944.

Llopis, Rodolfo, *Hacia una escuela más humana*, Madrid, 1934; La revolución en la escuela, Madrid, 1933.

Lubac, André, *Le tribunal espagnol des garanties constitutionnelles*, Montpellier, 1936.

Madden, Marie R., «The Church and Catholic Action in Contemporary Spain», *The Catholic Historical Review*, XVIII, 19-60.

Madrid, Francisco, *Film de la República comunista libertaria*, Barcelona, 1932; *Ocho meses y un día en el Gobierno civil de Barcelona*, Barcelona, 1932.

Manning, Leah, *What I Saw in Spain*, Londres, 1935.

Manrique, Gervasio, *Sistema español de organización escolar*, Madrid, 1935.

Manuel, Frank E., *The politics of Modern Spain*, Nueva York, 1938.

Martí, Casimir; Nadal, Jordi y Vicens Vives, Jaume, «El moviment obrer a Espanya de 1929 a 1936 en relació amb la crisi econòmica», Serra d'Or, febrero, 1961.

Martínez Aguiar, Manuel, *¿A dónde va el Estado español?*, Madrid, 1935.

Maurín, Joaquín, *Hacia la segunda revolución*, Barcelona, 1935.

Mendizábal, Alfred, *Aux origines d'une tragédie*, París, 1937. (Publicado en inglés con el título *The Martyrdom of Spain*, Londres, 1937).

Miguel, Antonio, *El potencial económico de España*, Madrid, 1935.

Minlos, Bruno R., *Paysans d'Espagne en lutte pour la terre et la liberté*, París, 1937.

Miravitlles, Jaume, *Crítica del 6 d'Octubre*, Barcelona, 1935.

Moch, Jules y Picard-Moch, Germaine, *L'oeuvre d'une révolution. L'Espagne républicaine*, París, 1933.

Mola Vidal, Emilio, *Obras completas*, Valladolid, 1940.

Montes Agudo, Gumersindo, *Vieja guardia*, Madrid, 1939.

Mora, Constancia de la, *In Place of Splendor*, Nueva York, 1939. (Edición en castellano: *Doble esplendor*, México, 1944).

Mori, Arturo, *Crónica de las Cortes constituyentes de la segunda República española*, Madrid, 1931-1934.

Ortega y Gasset, José, *Rectificación de la República*, Madrid, 1931.

Ossorio, Ángel, *Vida y sacrificio de Companys*, Buenos Aires, 1943.

Patronato de misiones pedagógicas, 2 volúmenes, Madrid, 1934 y 1935.

Payne, Stanley, *Falange, A History of Spanish Fascism*, Stanford, 1961. (Traducción castellana: *Falange. Historia del fascismo español*, París, 1965).

Peers, E. Allison, *Catalonia Infelix*, Londres, 1937; *Spain, the Church and the Orders*, Londres, 1939; *The Spanish Tragedy, 1930-1936*, Londres, 1937.

Peiró, Francisco, *El problema religioso-social de España*, Madrid, 1936.

Pildaín y Zapiaín, Antonio de, *En defensa de la Iglesia y de la libertad de enseñanza*, Madrid, 1935.

Pla, José, *Historia de la segunda República española*, 4 volúmenes, Barcelona, 1940-1941.

Prats, Alardo, *El Gobierno de la Generalidad en el banquillo*, Madrid, 1935.

Rama, Carlos M., *La crisis española del siglo XX*, México, D. F., 1960.

Ramos Oliveira, A., *Politics, Economics and Men of Modern Spain 1808-1946*, Londres, 1946; *La revolución española de Octubre*, Madrid, 1935.

Requejo San Román, Jesús, *Los jesuitas*, Madrid, 1932.

Romanones, Conde de, *Las últimas horas de una Monarquía*, Madrid, 1931.

Salazar Alonso, Rafael, *Bajo el signo de la revolución*, Madrid, 1935.

Schveitzer, Marcel N., *Notes sur la vie économique de l'Espagne en 1931-1932*, Argel, 1933.

Sedwick, Frank, *The Tragedy of Manuel Azaña*, Columbus, Ohio, 1963.

Sender, Ramón J., *Viaje a la aldea del crimen*, Madrid, 1934.

Sieberer, Antón, *Katalonien gegen Kastilien*, Viena, 1936. (Apareció una edición francesa con el título: *Espagne contre Espagne*, Ginebra, 1937).

Smith, Rhea Marsh, *The Day of the Liberáis in Spain*, Filadelfia, 1938.

Souchère, Elena de la, *Explication de l'Espagne*, París, 1962; *Una poderosa fuerza secreta*, San Sebastián, 1940.

Venegas, José, *Las elecciones del Frente Popular*, Buenos Aires, 1942.

Ventosa y Calvell, Juan, *La situación política y los problemas económicos de España*, Barcelona, 1932.

Vicens, Juan, *L'Espagne vivante*, París, 1938.

Villanueva, Francisco, *Azaña* (El Gobierno), México, D. F., 1941.

Xirau, Joaquín, Manuel B. *Cossío y la educación en España*, México, 1945.

Young, Sir George, *The New Spain*, Londres, 1933.

(Para más bibliografía sobre el período republicano, en particular sobre el desarrollo de los movimientos monárquico y fascista, véase *Falange*, de Stanley Payne).

III. LA GUERRA CIVIL,1936-1939

Abad de Santillán, Diego, *La revolución y la guerra en España*, La Habana, 1938; *Por qué perdimos la guerra*, Buenos Aires, 1940.

Aberrigoyen, Iñaki de, *7 mois et 7 jours dans l'Espagne de Franco*, París, 1938. (Edición en castellano: *7 meses y 7 días en la España de Franco*, Caracas, 1964).

Acier, Marcel (ed.), *From Spanish Trenches*, Nueva York, 1937.

Álvarez del Vayo, Julio, *Freedom's Battle*, Nueva York, 1940; *The Last Optimist*, Nueva York, 1949.

Avilés, Gabriel, *Tribunales rojos*, Barcelona, 1939.

Ayerra Redín, Marino, *No me avergoncé del Evangelio*, Buenos Aires, 1959. (Segunda edición de la obra cuyo título original era *Desde mi parroquia*).

Azaña, Manuel, *Discurso… en el Ayuntamiento de Valencia*, 21 de enero, 1937; *Discurso… en el paraninfo de la Universidad de Valencia*, 18 de julio, 1937; *Discurso… en el Ayuntamiento de Madrid*, 13 de noviembre, 1937; *Discurso… en el día 18 de julio de 1938 en Barcelona; La velada en Benicarló*, Buenos Aires, 1939.

Aznar, Manuel, *Historia militar de la guerra de España*, Madrid, 1940.

Bahamonde, Antonio, *Memoirs of a Spanish Nationalist*, Londres, 1939.

Bauer, Eddy, *Rouge et or*, Neuchâtel, 1938.

Beltrán Güell, Felipe, *Preparación y desarrollo del alzamiento nacional*. Valladolid, 1939; Rutas de la victoria, Barcelona, 1939.

Bernanos, Georges, *Les grands cimetières sous la lune*, París, 1938. (Traducción castellana: *Los grandes cementerios bajo la luna*, Santiago de Chile, 1939).

Bessie, Alvah, *Men in Battle*, Nueva York, 1939.

Beumelberg, Werner, *Kampf um Spanien*, Berlín, 1940.

Bley, Wulf (ed.), *Das Buch der Spanienflieger*, Leipzig, 1939.

Bolloten, Burnett, *The Grand Camouflage*, Londres, 1961. (Traducción castellana: *El gran engaño*, Barcelona, 1967).

Borkenau, Franz, *The Spanish Cockpit*, Londres, 1937. (Traducción castellana: *El reñidero español*, París, 1971).

Bowers, Claude G., *Misión en España*, México, 1965.

Brereton, Geoffrey, *Inside Spain*, Londres, 1938.

Broué, Pierre y Témime, Émile, *La révolution et la guerre d'Espagne*, París, 1961. (Traducción castellana: *La revolución y la guerra de España*, México, 1962).

Buckley, Henry, *Life and Death of the Spanish Republic*, Londres, 1940.

Camín, Alfonso, *España a hierro y fuego*, México, 1938.

Cantalupo, Roberto, *Fu la Spagna*, Milán, 1948.

Cardozo, Harold G., *March of a Nation*, Londres, 1937.

Carrascal, G., *Asturias*, Valladolid, 1938.

Carreras, Luis, *The Glory of Martyred Spain*, Londres, 1939.

Casado, Segismundo, *The Last Days of Madrid*, Londres, 1939.

Cattell, David T., *Communism and the Spanish Civil War*, Berkeley, 1955; *Soviet Diplomacy and the Spanish Civil War*, Berkeley, 1955.

Cavero y Cavero, Francisco, *Con la segunda bandera en el frente de Aragón*, Zaragoza, 1938.

Chamson, André, *Rien qu'un témoignage*, París, 1937.

Ciano, Galeazzo, *The Ciano Diaries, 1939-1943*, editados por Hugh Gibson, Nueva York, 1946; *Ciano's Hidden Diary, 1937-1938*, traducción y notas por Andreas Mayor, Nueva York, 1953.

Le Clergé Basque, París, 1938.

Clérisse, Henri, *Espagne, 1936-1937*, París, 1937.

Colmegna, Héctor, *Diario de un médico argentino en la guerra de España*, Buenos Aires, 1941.

Colodny, Robert G., *The Struggle for Madrid*, Nueva York, 1958.

Cot, Pierre, *The Triumph of Treason*, Nueva York, 1941.

Cox, Geoffrey, *The Defense of Madrid*, Londres, 1937.

Cruz Roja Internacional. XVI[e] *Conférence internationale de la Croix-Rouge, Rapport general du comité internationale de la Croix-Rouge sur son activité d'août 1934 a mars 1938*, Ginebra, 1948; XVII[e] *Conférence de la Croix-Rouge, Rapport complémentaire sur l'activité internationale de la Croix-Rouge relative à la guerre civile en Espagne* (au 1[er]. Juin 1938 au 31 août 1939 et a ses suites). Mimeografiado, Ginebra, 1948.

Curtis, Noah y Gilbey, Cyril, *Malnutrition*, Londres, 1944.

De Companys a Indalecio Prieto, Buenos Aires, 1939.

Delaprée, Louis, *Mort en Espagne*, París, 1937.

Deschamps, Bernard, *La vérité sur Guadalajara*, París, 1938.

Diego, Capitán de, *Belchite*, Barcelona, 1939.

Documents on German Foreign Policy, 1918-1943, series D, vol. III. Alemania y la guerra civil española, Washington, 1950.

Domínguez, Edmundo, *Los vencedores de Negrín*, México, D. F., 1940.

Dundas, Lawrence, *Behind the Spanish Mask*, Nueva York, 1943.

Eden, Anthony, *Facing the Dictators*, volumen 2 de *Memoirs of Anthony Eden*, Boston, 1962.

Ehrenburg, Iliá «Recuerdos del período de preguerra», resumidos en *The Current Digest of the Soviet Press*, 5 y 12 de septiembre, 1962.

España, Estado Mayor Central del Ejército, Servicio Histórico Militar. *Guerra de minas en España, 1936-1939*. Madrid, 1948.

España, *Foreign Intervention in Spain*, coleccionado y editado por «Hispanicus», volumen 1, julio 1936-enero 1937, Londres, 1937.

España, Ministerio de Justicia, *The Red Domination in Spain*, Madrid, 1946. (Este volumen es la traducción oficial de *Causa general*).

España, Libro Blanco español. *The ltalian Invasión of Spain*, Washington, 1937.

Faldella, Emilio, *Venti mesi di guerra in Spagna*, Florencia, 1939.

Feis, Herbert, *The Spanish Story*, Nueva York, 1948.

Fischer, Louis, *Men and Politics*, Nueva York, 1941.

Fonteriz, Luis de (seud.), *Red Terror in Madrid*, Londres, 1937.

Führing, Hellmut H., *Wir funken für Franco*, Breslau, 1941.

Gabriel, José, *La vida y la muerte en Aragón*, Buenos Aires, 1938.

Galíndez, Jesús de, *Los vascos en el Madrid sitiado*, Buenos Aires, 1945.

García Mercadal, J., *Aire, tierra y mar*, 3 volúmenes, Zaragoza, 1939.

García Morato, Joaquín, *Guerra en el aire*, Madrid, 1940.

García Pradas, J., *Cómo terminó la guerra de España*, Buenos Aires, 1940.

Garibaldini in Spagna, Madrid, 1937.

Gerahty, Cecil, *The Road to Madrid*, Londres, 1937.

Gillain, Nick, *Le mercenaire*, París, 1938.

Giral, José, *Año y medio de gestiones de canjes*, Barcelona, 1938.

Goded, Manuel, *Un faccioso cien por cien*, Zaragoza, 1939.

Gomá y Tomás, Isidro, cardenal, *Pastorales de la guerra de España*, Madrid, 1955; *Por Dios y por España*, Barcelona, 1940.

Gómez, Carlos A., *La guerra de España*, 2 volúmenes, Buenos Aires, 1940.

Gómez Oliveiros, Benito, *General Moscardó*, Barcelona, 1956.

Gonzálbez Ruiz, Francisco, *Yo he creído en Franco*, París, 1937.

Gorkín, Julián, *Caníbales políticos*, México, D. F., 1941.

Gutiérrez, Ricardo, *Memorias de un azul*, Salamanca, 1937.

Hamilton Thomas J., *; Appeasement's Child, the Franco Regime in Spain*, Nueva York, 1943.

Hanighen, Frank C. (ed.), *Nothing But Danger*, Londres, 1940.

Hart, Merwin K., *America Looks at Spain*, Nueva York, 1939.

Hemingway, Ernest, «The Spanish War», Fact, 15 de julio de 1938.

Henríquez Caubín, Julián, *La batalla del Ebro*, México, D. F., 1949.

Hernández, Jesús, *La grande trahison*, París, 1953. (La edición española original fue publicada con el título de *Yo fui ministro de Stalin*, México, D. F., 1953. Una edición expurgada de propa-

ganda fue publicada en España, bajo el título de *Yo, ministro de Stalin en España*).

«**Hispanicus**», *Foreign Intervention in Spain*, volumen I, Londres, 1937.

Hubbard, John R., «How Franco Financed His War», *The Journal of Modern History*, diciembre, 1953.

Iribarren, José María, *Con el general Mola*, Zaragoza, 1937.

Junod, Marcel, *Le troisième combattant*, París, 1947.

Kaminski, H. E., *Ceux de Barcelone*, París, 1937.

Kershner, Howard E., *Quaker Service in Modern War*, Nueva York, 1950.

Kindelán, Alfredo, *Mis cuadernos de guerra*, Madrid, 1945.

Knickerbocker, H. R., *The Siege of the Alcázar*, Filadelfia, 1936.

Koestler, Arthur, *Spanish Testament*, Londres, 1937.

Krivitsky, Walter G., *In Stalin's Secret Service*, Nueva York, 1939.

Lacruz, Francisco, *El alzamiento, la revolución y el terror en Barcelona*, Barcelona, 1943.

Langdon-Davies, John, *Behind the Spanish Barricades*, Londres, 1936; *The Spanish Church and Politics*, Nueva York, 1938.

Largo Caballero, Francisco, *Mis recuerdos*, México, 1954.

Last, Jef, *The Spanish Tragedy*, Londres, 1939.

Lent, Alfred, *Wir kämpften für Spanien*, Berlín, 1939.

Liddell-Hart, B. H., *The Germans Generals Talk*, Nueva York, 1948. *Lo que han hecho en Galicia*, París, 1938.

Lizarza Iribarren, Antonio, *Memorias de la conspiración, 1931-1936*, 3.ª ed., Pamplona, 1954.

Longo, Luigi, *Die Internationalen Brigaden in Spanien*, Berlín, 1958. (El original italiano apareció con el título de *Le brigate in-*

ternazionali in Spagna, Roma, 1956. Traducción castellana: *Las brigadas internacionales en España*, México, 1966).

López Fernández, Antonio, *Defensa de Madrid*, México, 1945.

Lowenstein, príncipe Hubertus Friedrich de, *A Catholic in Republican Spain*, Londres, 1937.

Lozoya, marqués de (Juan de Contreras), *La iniciación en Segovia del movimiento nacional*, Segovia, 1938.

Lunn, Arnold, *Spanish Rehearsal*, Nueva York, 1937.

Mac Neill-Moss, Geoffrey, *The Epic of the Alcázar*, Londres, 1937.

Martín Artajo, Javier, «*No me cuente Ud. su caso*», Madrid, 1955.

Martín Blázquez, José, *I Helped to Build an Army*, Londres, 1939.

Matthews, Herbert, *The education of a Correspondent*, Nueva York, 1946; *Two Wars and More to Come*, Nueva York, 1938.

Mattioli, Guido, *L'aviazione legionaria in Spagna*, Roma, 1940.

Mas Cullagh, Francis, *In Franco's Spain*, Londres, 1937.

Merin, Peter, *Spain Between Death and Birth*, Nueva York, 1938.

Montero, Antonio, *Historia de la persecución religiosa en España, 1936-1939*, Madrid, 1961.

Montserrat, Víctor (seud. del padre Tarragó), *Le drame d'un peuple incompris*, París, 1937.

Moure-Mariño, Luis, *Galicia en la guerra*, Madrid, 1939.

Nenni, Pietro, *La guerre d'Espagne*, París, 1960. (La edición original apareció con el título de Spagna, Roma, 1958. Traducción castellana: *La guerra de España*, México, 1964).

Núñez Morgado, A., *Los sucesos de España vistos por un diplomático*, Buenos Aires, 1941.

O'Duffy, Eoin, Crusade in Spain, Clanskeagh, 1938.

Orwell, Georges, *Chemises noires, brunes, vertes en Espagne*, París, 1938.

Packard, Reynolds y Eleanor, *Balcony Empire*, Nueva York, 1942.

Padelford, Norman, J., *International Law and Diplomacy in the Spanish Civil Strife*, Nueva York, 1939; «The International Non-Intervention Agreement and the Spanish Civil War», *The American Journal of International Law*, octubre, 1937.

Padelford, N. J. y Seymour, H. G., «Some International Problems of the Spanish Civil War», *The Political Science Quarterly*, septiembre, 1937.

Pedro y Pons, A., *Enfermedades por insuficiencia alimenticia*, Barcelona, 1940.

Peers, E. Allison, *Spain in Eclipse*, Londres, 1943.

Peirats, José, *La CNT en la revolución española*, 3 volúmenes, Toulouse, 1951-1952.

Pemán, José María, *Un soldado en la historia*, Cádiz, 1954.

Pérez Salas, Jesús, *Guerra en España*, México, D. F., 1947.

Pérez Solís, Óscar, *Sitio y defensa de Oviedo*, Valladolid, 1938.

Prats y Beltrán, Alardo, *Vanguardia y retaguardia de Aragón*, Buenos Aires, 1938.

Prieto, Indalecio, *Cómo y por qué salí del Ministerio de Defensa Nacional*, París, 1939; *Confesiones y rectificaciones*, México, 1942; *Palabras al viento*, México, 1942.

Prieto y Negrín, *Epistolario*, París, 1939.

Puzzo, Dante, A., *Spain and the Great Powers, 1936-1941*, Nueva York, 1962.

Rama, Carlos M., *La crisis española del siglo XX*, México, 1960.

Ramón-Laca, Julio de, *Cómo fue gobernada Andalucía*, Sevilla, 1939.

Regler, Gustav, *The Great Crusade*, Nueva York, 1940; *The Owl of Minerva*, Nueva York, 1960.

Renn, Ludwig (seud. de A. F. Vieth von Golssenau), *Der Spanische Krieg*, Berlín, 1956.

Rieger, Max, *Espionnage en Espagne*, París, 1938.

Rojo, Vicente, *¡Alerta los pueblos!*, Buenos Aires, 1939; *España heroica*, Buenos Aires, 1942.

Romancero de la résistance espagnole, editado por Darío Puccini, París, 1962. (Publicado originalmente como *Romancero della resistenza spagnola*, Milán, 1960).

Ruiz Vilaplana, Antonio, *Burgos Justice*, Nueva York, 1938. (El original español apareció con el título de *Doy fe*, París, 1937).

Saint-Charmant, Jean de, «Le problème religieux en Catalogne». Revue des Deux Mondes, 15 febrero de 1939.

Sánchez Guerra, Rafael, *Mis prisiones*, Buenos Aires, 1946.

Sencourt, Robert, *Spain's Ordeal*, Nueva York, 1940.

Serrano Súñer, Ramón, *Entre Hendaya y Gibraltar*, Madrid, 1947.

Sevilla Andrés, Diego, *Historia política de la zona roja*, Madrid, 1954.

Silva, Carlos de, *General Millán Astray*, Barcelona, 1956.

Smith, Lois Elwyn, *México y los republicanos españoles*, Berkeley, 1955.

Solano Palacio, Fernando, *La tragedia del Norte*, Barcelona, 1938.

Soler, Juan M. (seud. de Máximo Silvio), *La guerra en el frente de Aragón*, Barcelona, 1937.

Sommerfield, John, *Volunteer in Spain*, Londres, 1937.

Somoza Silva, Lázaro, *El general Miaja*, México, D. F., 1944.

Spanish Relief Committee, San Francisco, 1937. *Spanish Liberals Speak on the Counterrevolution in Spain*.

Steer, G. L., *The Tree of Gernika*, Londres, 1938.

Tarradellas, Josep, *The Financial Work of the Generalitat of Catalunya*, Barcelona, 1938.

Taylor, F. Jay, *The United States and the Spanish Civil War*, Nueva York, 1956.

Thomas, Hugh, *The Spanish Civil War*, Londres y Nueva York, 1961. (Traducción castellana: *La guerra civil española*, 2 volúmenes, Barcelona, 1976).

Toynbee, Arnold (ed.), *Survey of International Affairs, 1937*, vol. II, Londres, 1938 y vol. 1, 1938, Londres, 1941.

Trabal, Josep A., *Final d'etapa*, Barcelona, 1937.

Treyvaud, O., *Les deux Espagnes*, Lausanne, 1937.

Van der Esch, P. A. M., *Prelude to War*, La Haya, 1951.

Vigón, Jorge, *General Mola* (con el subtítulo de «El Conspirador»). Barcelona, 1957.

Villar Salinas, Jesús, *Repercusiones demográficas de la última guerra civil española*, Madrid, 1942.

Volunteer for Liberty, edición limitada para los veteranos de la brigada Abraham Lincoln, Nueva York, 1949.

Whitaker, John T., «Prelude to War. A Witness from Spain», *Foreign Affairs*, octubre, 1942.

Wet, Oloff de, *Cardboard Crucifix*, Londres, 1938.

Wintringham, Tom, *English Captain*, Londres, 1939.

Ximénez de Sandoval, Felipe, *José Antonio*, Barcelona, 1941.

Ybarra y Bergé, Javier, *Mi diario de la guerra de España*, Bilbao, 1941.

Zugazagoitia, J., *Historia de la guerra en España*, Buenos Aires, 1940.

(Para más bibliografía y examen de fuentes de información sobre la guerra civil, véanse en particular las obras de Broué y Términe, *La guerre et la révolution d'Espagne*; R. G. Colodny, *The Struggle for Madrid* y Hugh Thomas, *The Spanish Civil War*).

IV. PRINCIPALES PERIÓDICOS DE LA ÉPOCA REPUBLICANA

Durante los años 1931-1936 cada facción o grupo de intereses publicó sus propios diarios. El estudio sobre la prensa de este período ya de por sí merece un libro. Yo me he limitado a poner en la siguiente lista todos los que hojeé, y que pueden consultarse en las hemerotecas de las principales ciudades españolas.

ABC, Madrid y Sevilla (principal diario monárquico).

Arriba, Madrid (órgano de la Falange).

Claridad, Madrid (órgano del ala revolucionaria del Partido Socialista, acaudillada por Largo Caballero en 1935-1936).

Diario de Navarra, Pamplona (diario carlista).

El Debate, Madrid (órgano de Acción Católica y de Gil Robles).

El Liberal, Bilbao (órgano personal de Prieto).

El Liberal, Madrid (diario republicano anticlerical).

El Pueblo, Valencia (periódico republicano moderado).

El Socialista, Madrid (órgano oficial del partido, de tendencia prietista).

El Sol, Madrid (puede ser considerado como el *The Manchester Guardian* y el *Le Monde* de España).

Euzkadi, Bilbao (órgano de los nacionalistas vascos).

La Batalla, Barcelona (órgano del POUM, el más importante de los diarios marxistas no comunistas en Cataluña).

La Gaceta del Norte, Bilbao (representando a los círculos conservadores de hombres de negocios).

La Nación, Madrid (órgano personal de Calvo Sotelo).

La Vanguardia, Barcelona (representando a los intereses industriales y comerciales conservadores, y ofreciendo más noticias económicas detalladas que ningún otro diario de España).

(En mis estudios sobre la guerra civil hice relativamente poco uso de diarios españoles. En el libro de Burnett Bolloten, *The Grand Camouflage*, hay una bibliografía particularmente valiosa de la prensa del tiempo de la guerra).

V. PUBLICACIONES Y REVISTAS

Adelante, México, D. F., 1942-1945. Contiene valiosas discusiones, polémicas y memorias de los dirigentes republicanos exiliados.

Anuario estadístico de España, 1914-1934 (publicado por el Instituto Geográfico, Catastral y de Estadística).

Boletín de Información, publicación conjunta de la CNT, AIT y la FAI (Barcelona, 17 de septiembre de 1936-1.º de marzo de 1938). Una de las fuentes de información más detalladas sobre las colectivizaciones anarquistas y la interpretación anarquista de la guerra civil. Disponible en la Biblioteca del Congreso.

Boletín del Centro de Investigaciones Especiales o Laboratorios de Estadística. Se publicó irregularmente de 1933 a 1935; contiene estudios sobre los problemas del desarrollo en zonas concretas, y estadísticas anteriormente no recogidas, sobre materias como el uso de bibliotecas.

Boletín de la Institución Libre de Enseñanza, Madrid, 1877-1936. Contiene una gran variedad de información sobre las tendencias educativas y científicas en España y el extranjero.

Boletín del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, Madrid, 1929-1936. Informes mensuales sobre el costo de la vida, provincia por provincia, y referencias detalladas a todas las huelgas y aplicaciones de las leyes laborales.

Bulletin of Spanish Studies (editado por E. Allison Peers, de la Universidad de Liverpool, 1923 en adelante). Aunque se trata principalmente de un boletín literario, contiene crónicas mensuales con noticias útiles para ir siguiendo las reacciones de los intelectuales españoles durante los años de la República.

Bulletin périodique de la presse espagnole, publicado por el ministerio francés de Asuntos Exteriores. Valioso porque cubre día a día las fuentes de información de la prensa y la radio españolas de ambas zonas durante la guerra civil. El catálogo de la Biblioteca del Congreso abarca de mayo de 1936 a mayo de 1940.

Butlletí Informació, Neuilly-sur-Seine. Órgano en mimeógrafo de la Generalitat en el exilio, que contiene artículos de interés histórico.

Cuadernos Americanos, México, D. F., 1941 y ss.

Cuadernos del Congreso por la Libertad de la Cultura, París, 1953 y ss. Ambos Cuadernos contienen importantes artículos biográficos, filosóficos y culturales referentes a la historia de la República y la guerra civil.

Economía Española, Madrid, 1933-1936. Órgano de la Unión Económica Española, conteniendo artículos de solvencia profesional, generalmente de puntos de vista conservadores y críticos de la política republicana.

El Socialista, Toulouse, 1944 en adelante. Contiene valiosos artículos escritos tanto por republicanos liberales como por emigrados socialistas La colección casi completa está disponible en la sede central del Partido Socialista Obrero Español, en Toulouse.

Hora de España, Madrid, 1937-1938. Publicado por jóvenes intelectuales representantes de todas las tendencias del Frente Popular.

Ibérica, Nueva York. Contiene muchos comentarios biográficos y políticos concernientes a la República y la guerra civil.

Information télégraphique, publicado por la agencia Espagne y conteniendo despachos diarios desde la zona republicana, septiembre 1937-enero 1939. Disponible en la Biblioteca del Congreso.

Journal of the United Service Institution (para los años 1936-1938). Diario militar británico que publicaba informes

técnicos trimestrales sobre el funcionamiento del armamento en la guerra civil.

New York Times (años 1931-1939).

Revista Nacional de Economía, Madrid, 1916-1935.

Revue Internationale de la Croix-Rouge, Ginebra, 1936-1939.

The Times, Londres (años 1931-1939).



GABRIEL JACKSON (Nueva York, 1921) es un historiador e hispanista estadounidense, de familia hebrea, se graduó en Historia y Literatura en 1942 en el Harvard College y se doctoró en la Universidad de Toulouse con una tesis sobre el regeneracionismo de Joaquín Costa. Es considerado autoridad en el periodo de la Segunda República Española y la Guerra Civil Española. Reside junto a su hija en el estado de Oregón tras vivir 26 años en Barcelona. También reflexionó sobre los problemas económicos de entreguerras, el auge del fascismo y el conflicto entre democracia y totalitarismo. Entró en contacto, por casualidad, con la cultura española gracias a los exiliados republicanos en México, en la década de 1940. Recibió el Premio Elio Antonio de Nebrija (2003). En 1997, Jackson dio su apoyo al Foro Babel, colectivo centrado en la defensa de un mayor uso del castellano en Cataluña, en el que se alinearon también Albert Boadella, Rosa María Sardà y Rosa Regàs.

Notas

[1] «How Franco Financed His War, Part II», ponencia leída en la conferencia de la *Society for Spanish and Portuguese Hístorical Studies*, La Jolla, California, marzo de 1974. <<

[2] En Español en el original. <<

[3] En Español en el original. <<

[4] En Español en el original. <<

[5] En español, en el original. <<

[6] Conde de Romanones, *Las últimas horas de una Monarquía*, Madrid, 1931,pp, 81 y ss. <<

[7] Emilio Mola y Vidal, *Lo que yo supe* en *Obras completas*, Valladolid, 1940. El general Mola fue el último director general de Seguridad de la Monarquía. <<

[8] Luis de Zulueta, *El Sol* 14 de abril de 1935; artículo conmemorando la proclamación de la República. <<

[9] *ABC*, 16 de abril de 1931; *El Sol*, 16 de febrero de 1935. La referencia del último añade la declaración de González Peña sobre este incidente en el juicio sumarísimo que se le siguió tras la revolución de Asturias. <<

[10] Miguel Maura, que fue ministro de la Gobernación en el gobierno provisional y con el cual sostuve una detenida conversación en abril de 1961 referente a los primeros meses del régimen, elogió mucho la conducta de Companys con respecto a Madrid. <<

[11] Francisco Madrid, *Ocho meses y un día en el Gobierno civil de Barcelona*, Barcelona, 1932, p. 133. <<

[12] *New York Times*, 26 de mayo de 1931; Rhea Marsh Smith, *The Day of the Liberals in Spain*, Filadelfía, 1938, p. 90. <<

[13] Joaquín Arrarás, *Historia de la segunda República española*, Madrid, 1956, I, 77. pp. 96-97. Esta obra abarca tan sólo los dos primeros años de la República. Es especialmente útil por sus relatos detallados de los conflictos sociales y de la sublevación de Sanjurjo. Su selección de datos y su énfasis refleja fuertemente la preocupación derechista por el orden público y la reputación de los militares. <<

[14] Con respecto al número de iglesias incendiadas, he aceptado las cifras dadas por *El Sol* y el *New York Times* en sus reportajes durante la semana que siguió al 10 de mayo. Antonio Montero Moreno, en su *Historia de la persecución religiosa en España*, Madrid, 1961 p. 25, enumera unos 119 ataques. Ante tales discrepancias el historiador sólo puede admitir que la justeza numérica es imposible. Al mismo tiempo, sería una solución muy fácil el escoger un número intermedio entre los informes de la época y el dado por los investigadores católicos; pero eso tampoco sería verídico. Habiendo hablado con muchos sacerdotes y seglares católicos en España en 1960, estoy convencido de que sufren del más exagerado complejo de persecución y que, con toda sinceridad, los sacerdotes que estudiaron los sucesos de mayo en los últimos años han enumerado iglesias que fueron «saqueadas», simplemente con que un testigo de los acontecimientos de hacía 30 años dijera que había oído que tal o cual edificio fue atacado. Es muy posible que a los periodistas de la época se les escaparan algunos incidentes; pero noticias tan sensacionales no es verosímil que fueran minimizadas por *El Sol* o el *New York Times*; periódicos celosos de su reputación de fidelidad y juego limpio. Por lo tanto he basado mi número en sus reportajes. <<

[15] *El Sol* 14 de mayo de 1931, y también su reportaje del 16 de junio de un discurso de Miguel Maura en Zamora. <<

[16] F. Madrid, *Ocho meses*, pp. 146-148. <<

[17] J. Arrarás, *Historia*, I, pp. 102-105; *The Times*, Londres, 16 junio de 1931. <<

[18] Luis Jiménez de Asúa, *La constitución de la democracia española y el problema regional*, Buenos Aires, I946, pp. 57-58. <<

[19] Juan Ventosa y Calvell, *La situación política y los problemas económicos de España*, Barcelona, 1932, pp, 10-14, sobre la baja de la peseta; pp. 142-149 sobre el préstamo Morgan. <<

[20] *New York Times*, 31 de mayo de 1931 Sobre el problema de la fuga de capitales véase *La peseta et l'économie espagnole depuis 1928*, de Charles Lefaucheux, París, 1935, pp. 54-56, y *El derecho arancelario español*, de Elli Lindner, Barcelona, 1934, Lindner acepta la estimación de la Banca Soler y Torra Hermanos, de Barcelona, de que unos 250.000.000 de pesetas fueron exportados ilegalmente de marzo a diciembre de 1931. <<

[21] Deliberadamente he redondeado las cifras. La dificultad de etiquetar a los partidos e individuos se puede apreciar comparando los esfuerzos de varios eruditos al analizar la composición de las Cortes Constituyentes. Véase R, M. Smith, *The Day of the Liberals*, pp. 116-117; E. Allison Peers, *The Spanish Tragedy*, 1930-1936, Nueva York, 1936, p. 61; Frank E. Manuel, *The Politics of Modem Spain*, Nueva York, 1938, p+ 66, y Gerald Brenan, *The Spanish Labyrinth*, Cambridge, 1943, pp, 232-234. Estando en España, discutí el problema con varios exdiputados a Cortes, todos los cuales convinieron en que aquéllas estuvieron compuestas de numerosos grupos más bien personalistas que no políticos en el sentido británico y aun francés del vocablo. <<

[22] *El Socialista*, 13 de junio de 1931. La acusación se repitió luego en julio y agosto. <<

[23] J. Arrarás, *Historia*, I, 125-126; *New York Times*, 7 de julio de 1931; *El Sol*, 23-30 de julio de 1931 <<

[24] L. Jiménez de Asúa, *La constitución de la democracia española y el problema regional*, da el texto completo de la Constitución y contiene un análisis crítico. Véase R. M. Smith. *The Day of the Liberáls*, con la crónica diaria de las de liberaciones del 14 de julio al 9 de diciembre. Para los debates, el *Diario de sesiones de las Cortes Constituyentes*, 1931-1933, 25 volúmenes, Madrid, 1933. El diario está disponible en la Biblioteca del Congreso. Hay extractos muy útiles y de más fácil consulta, editados por Arturo Morí, *Crónica de las Cortes Constituyentes de la segunda República española*, 12 volúmenes, Madrid, 1931 y 1934. <<

[25] Frank Kluckhohn en *New York Times*, 21 y 22 de agosto de 1931. <<

[26] Juan de Iturralde, *El catolicismo y la cruzada de Franco*, 2 vols. Vienne (Francia), 1955 y 1960, I, pp. 339-343. <<

[27] Manuel Azaña, *Una política*, Madrid, 1932, contiene el texto ligeramente corregido de su discurso en las Cortes el 13 de octubre. Los debates sobre el artículo 26 a que he aludido aparecen en el vol. III de la *Crónica de Mori* y en los vols. 5 y 6 del *Diario*. <<

[28] *New York Times*. 14 y 16 de octubre de 1931. <<

[29] *El Sol*, 15 de octubre de 1931, para la entrevista de Maura, *El Debate*, 15 y 16 de octubre, para la reacción de Gil Robles. <<

[30] José Ortega y Gasset, *Rectificación de la República*, Madrid, 1931. <<

[31] Conversación con Miguel Maura, abril de 1961 <<

[32] Montero, *Historia de la persecución religiosa*, pp. 34-35. <<

[33] Rodolfo Llopis, *Hacia una escuela más humana*, Madrid, 1934, pp. 26-30. <<

[34] Alfonso Iniesta Corredor, *Educación española*, Madrid, 1942, pp. 31-40,68-69, en donde se refieren de modo apasionado y sucinto las preocupaciones de la Iglesia por la secularización de la vida española bajo la Monarquía y la República. Hay muchas referencias similares en los discursos de Gil Robles ante las Cortes y en la obra de Antonio de Pildaín y Zapiaín, *En defensa de la iglesia y la libertad de enseñanza*, Madrid, 1935. Esta última es una colección de discursos ante las Cortes de un sacerdote vasco que luego llegó a ser obispo de las islas Canarias. <<

[35] Alfredo Mendizábal, *Aux origines d' une tragédie*, París, 1937, p. 168. Esta obra, publicada en inglés con el título de *The Martyrdom of Spain*, Londres, 1937, ofrece un punto de vista católico liberal del problema entre la Iglesia y el Estado bajo la República. Mendizábal era un profesor de derecho. <<

[36] Isa y Arturo Barea, *Spain in the Postwar World*, Londres, 1945, p. 14, Como agente de patentes antes de la guerra civil, Barea conocía bastante la estructura bancaria e industrial. Sin embargo, de acuerdo con un cuidadoso análisis sociológico del mundo español de los negocios que ahora está siendo preparado por Juan Linz, parece ser que los graduados jesuitas no ocupaban un número desproporcionado de las direcciones de la industria privada española. Debo esta información a la amabilidad del profesor Linz. <<

[37] Con respecto a la riqueza de los jesuitas y sus medios de disimularla, me he basado en las siguientes fuentes: J. Torrubiano Ripoll, *Beatería y religión*, Madrid, 1930; Álvaro de Albornoz, *La política religiosa de la República*, Madrid, 1935, particularmente el apéndice, que contiene varias cartas ilustrando algunas técnicas de disimulo: artículos en *El Liberal* de Madrid de 1 y 12 de junio de 1935 y en *Política* del 15 de agosto de 1935, Torrubiano Ripoll cuyo libro consiste en una compilación de artículos que aparecieron en *El Liberal* en la década de los veinte, era miembro del partido de Alcalá-Zamora. Albornoz era uno de los dirigentes

del partido radical-socialista y tuvo una parte muy destacada en la pugna parlamentaria en favor del artículo 26. He comprobado todo el material arriba citado con varios sacerdotes y abogados en España, todos los cuales me confirmaron los hechos. En estas conversaciones, ciertamente, tuve la impresión de que muchos sacerdotes y seglares católicos sentían más enemistad hacia la Compañía de Jesús que el propio Gobierno Azaña. <<

[38] *The Times*, Londres, 27 y 28 de enero y 6 de febrero de 1932; Indalecio Prieto en *El Socialista*, Toulouse, 13 de diciembre de 1951. <<

[39] Mi estudio de las escuelas primarias se basa en las siguientes fuentes: Fernando de los Ríos, discurso ante la Cortes, publicado en *El Sol* de 1.° de marzo de 1932; un estudio aparecido en un editorial de *El Sol*, 27 de diciembre de 1932; Rodolfo Llopis, *La revolución en la escuela*, Madrid, 1933, y también su artículo en *Leviatán*, julio, 1934, n.° 3; E. Allison Peers, *Spain, the Ckurch and the Orders*, Londres, 1939, pp. 150-152; Alfredo Mendizábal, *Aux Origines*, pp. 170-171. También pude beneficiarme de conversaciones personales con el señor Llopis y con cuatro exmaestros de escuelas primarias de Madrid y Sevilla. <<

[40] Manuel Azaña, *Una política*, pp. 142 y ss., una discusión que en esencia repite su discurso ante las Cortes el 2 de diciembre de 1931, presentando el nuevo cuerpo. <<

[41] *El Sol*, 25 de febrero de 1932. <<

[42] *Diario de las Cortes*, 25 de febrero, l.° de marzo de 1932. Las intervenciones de Azaña se dan también en *Una política*. <<

[43] Un artículo de Mildred Adams, publicado en el *New York Times* del 25 de junio de 1933, resume su punto de vista favorable a las distintas reformas. Para análisis más técnicos y críticos, véase Emilio Mola, *Obras*, pp. 1078-1089, y en general toda la parte: «El pasado, Azaña, y el porvenir». También aproveché varias conversaciones con un general de Estado Mayor retirado,

que fue diputado conservador del partido de Alcalá-Zamora y uno de los autores de la legislación. <<

[44] Mi relato de los sucesos de Castilblanco está basado en las actas de la acusación y la defensa, citadas extensamente, aunque no en su totalidad, por Luis Jiménez de Asúa en *Castilblanco*, Madrid, 1933. <<

[45] *El Sol*, 4 y 7 de agosto de 1931, dio detalles de los resultados electorales. <<

[46] *Diario de las Cortes* de junio-septiembre de 1932. El curso del debate está muy bien extractado en el *Bulletin of Spanish Studies*, octubre de 1932, y enero de 1933. El editor, profesor E Allison Peers, de la Universidad de Liverpool, estaba particularmente interesado en la política y la cultura catalanas. <<

[47] 16. J. Arrarás, *Historia*, I, cap. 18-20 para los hechos positivos. Mi punto de vista sobre los motivos de Sanjurjo está basado más en conversaciones con oficiales que lo conocieron y civiles relacionados con su proceso. Véase también entrevista en *El Sol*, 29 de noviembre de 1931, y en *Revue Hehdomadaire*, 9 de abril de 1932. <<

[48] Marcelino Domingo, *La experiencia del poder*, Madrid, 1934, pp. 218-255. <<

[49] *Anuario español de política social*, Madrid, 1934, pp. 112-114. El *Anuario* proporciona no sólo las cifras anuales sobre el volumen de la Federación de Trabajadores de la Tierra, sino también los textos de las importantes leyes agrarias, laborales y de seguridad social de la Monarquía y de la República. Gerald Brenan, *The Spanish Labyrinth*, pp. 273 y ss., estudia la expansión de la UGT. Véanse también Jules Moch y Germaine Picard-Moch, *L' Espagne républicaine*, París, 1933, pp. 228-230, 281 y ss., para los puntos de vista del Partido Socialista sobre las cuestiones de la organización rural y la reforma agraria. Los autores visitaron

España en el verano de 1932 y como socialistas franceses gozaron de la confianza de sus colegas españoles. <<

[50] En español, en el original. <<

[51] *El Sol*, 9 de julio de 1933 <<

[52] Brenan, *The Spanish Labyrinth*, pp. 336-340, y J. Langdon-Davies, *Behind the Spanish Barricades*, Londres, 1936, pp. 66-68, 78-80, estudian varias colectividades tradicionales españolas. La obra pionera y monumental sobre el tema es la de Joaquín Costa, *Colectivismo agrario en España*, Madrid, 1898 <<

[53] El estudio más completo y objetivo, que abarca las condiciones geográficas y sociales, y resume los anteriores planes de reforma, es la obra de Pascual Carrión, *Los latifundios en España*. Madrid. 1932. Fue la fuente de datos para muchos diputados de puntos de vista muy diferentes. <<

[54] *Agrarian Reform in Spain*, Londres, 1937, p. 29. <<

[55] *El Sol*, 30 de agosto y 20 de septiembre de 1933. <<

[56] *El Sol*, 1 de septiembre de 1933, para el texto de la ley propuesta. <<

[57] En español, en el original. <<

[58] M. Domingo, *La experiencia del poder*, pp. 237-252. *El Sol*, 30 de enero, 12 de junio, 7 de julio de 1932 y 18 de febrero de 1933. <<

[59] Los aspectos técnicos y sociales del problema del carbón están tratados en los artículos aparecidos en *El Sol* el 22 de octubre, el 15 y el 19 de noviembre de 1932. Sobre el problema de la calidad del carbón, véase la obra de Manuel Fuentes Irurozqui, *Síntesis de la economía española*, Madrid, 1946, p. 38. <<

[60] *El Sol*, 12 de octubre de 1932, 11 y 20 de abril de 1933. <<

[61] *El Sol*, 7 y 10 de enero de 1934, publicó artículos analizando el complicado problema ferroviario desde el principio de la década de los 20. Un editorial del 9 de junio de 1934 recordaba

la honesta conducta de Prieto ante las demandas de los trabajadores en el verano de 1931. <<

[62] Mi información sobre las realizaciones en obras hidráulicas proviene principalmente de los documentos privados del finado Manuel Lorenzo Pardo, en cuya oficina sostuve valiosísimas conversaciones. El testimonio del señor Lorenzo Pardo sobre la eficacia de la administración de Prieto es mucho más impresionante, ya que él era de ideas políticas muy conservadoras, y un gran admirador de Salazar, el dictador portugués. Con referencia a las Obras del Cíjara, luego denominadas Plan Badajoz, véanse los artículos de Manuel Díaz Marta en *El Socialista*, Toulouse, 21 de marzo y 29 de agosto de 1957. El señor Díaz Marta fue uno de los ingenieros hidráulicos que trabajaron en el equipo original del proyecto. <<

[63] A finales de marzo de 1935, en el curso de un debate de altura en las Cortes sobre el régimen de Azaña, José María Cid, de la CEDA, y Rafael Guerra del Río, del Partido Radical, que se sucedieron en el Ministerio de Obras Públicas, hicieron grandes elogios del programa de Prieto. Véase *Política*, 28 de marzo y 11 de abril de 1935. <<

[64] Prieto, en *El Socialista*, 27 de mayo de 1954 <<

[65] Mis informes referentes a los aspectos favorables de la situación económica están tomados de los datos estadísticos sobre salarios, precios y producción de la obra *Síntesis de la economía española* de Fuentes Irurozqui, informes que luego discutí con varios economistas que ahora trabajan para bancos de Madrid. Con respecto a los déficit presupuestarios de la Dictadura y de la República, el 18 de mayo de 1934 hubo un detallado debate sobre la cuestión entre José Calvo Sotelo, ministro de Hacienda con Primo de Rivera, e Indalecio Prieto, que defendía la actuación del Gobierno Azaña. En este debate los radicales, los mauristas y

la Lliga Catalana apoyaron el análisis de Prieto, sobre el cual están basadas mis conclusiones. <<

[66] Las páginas financieras de *La Vanguardia* de Barcelona, así como la mayoría de las fuentes estadísticas, apoyan la afirmación general de que 1933 fue el año peor de la depresión. Sin embargo, en un análisis muy competente de Antonio de Miguel en *Economía Española*, octubre de 1933, pp. 81-88, se arguye que las industrias mineras mejoraron su situación después de 1932 y que el promedio de nuevas inversiones estaba aumentando. Como las estadísticas españolas son poco de fiar y hay una gran variedad de condiciones locales, es imposible afirmar con certeza lo grave que llegó a ser la depresión en España. <<

[67] Casimir Martí, Jordi Nadal y Jaume Vicens i Vives, «El moviment obrer a Espanya de 1929 a 1936 en relació amb la crisi econòmica», *Serra d'Or*, febrero de 1961. En este excelente estudio de los tres especialistas, el análisis de las huelgas es del padre Martí, que amablemente me permitió examinar material suyo aún no publicado, y del cual pude extraer los datos estadísticos que he dado más arriba. La parte preparada por el fallecido Jaume Vicens i Vives refuerza las conclusiones a que llegué antes sobre que los conflictos sociales de la época republicana tuvieron un origen más político y *pasional* que económico. <<

[68] *El Sol*, 10, 21 y 22 de enero de 1932. <<

[69] F. G. Bruguera, *Histoire contemporaine de l'Espagne*, París, 1953, pp. 400-401. Véase también la entrevista de Casares Quiroga con el *New York Times*, 18 de enero de 1932. <<

[70] J. Arrarás, *Historia*, I, pp. 333-334. <<

[71] *El Sol*, 3 de noviembre de 1932. <<

[72] Artículo en *El Sol*, 10 de enero de 1933, resumiendo las detenciones de finales de 1932. <<

[73] Ramón J. Sender, *Viaje a la aldea del crimen*, Madrid, 1934, cuenta la historia con detalle y cita en abundancia las declaracio-

nes hechas después por los campesinos a los investigadores parlamentarios. <<

[74] Véase el apéndice B para un detallado examen de las acusaciones del capitán Rojas. <<

[75] *El Sol*, 27 de enero de 1933. <<

[76] *Economía Española*, marzo de 1933, pp. 63-65. <<

[77] *El Sol*, 19 de julio de 1933. En varios reportajes de periódicos se expresó el convencimiento de que la Unión Económica y otras asociaciones funcionaban como importantes grupos de presión en la política española. Sin embargo, no he podido obtener información en ninguno de los periódicos disponibles del número de sus miembros, su riqueza, etcétera. <<

[78] Los datos sobre el número de escuelas secundarias de la Iglesia y de sus facultades proceden de la obra de Mendizábal, *Aux origines d'une tragédie*, p. 171. Una discusión más interesante del papel histórico de estas escuelas apareció con la firma de Américo Castro en *El Sol*, 13 de agosto de 1933. <<

[79] El *New York Times* del 11 de junio y el 30 de julio de 1933 llevaba excelentes artículos de Frank L. Kluckhohn acerca del significado del debate sobre la ley de Congregaciones y la reacción de la Iglesia ante el mismo. <<

[80] Mi examen de las divisiones internas de la jerarquía eclesiástica con respecto a la República está basado en la obra de Juan de Iturralde, *El catolicismo y la cruzada de Franco*, I, pp. 313-354. Ésta es la obra de un sacerdote vasco exilado cuyo seudónimo «Iturralde» significa «cercano a la fuente», y cuya documentación incluye, entre otras cosas, cartas y memorándums de los cardenales Segura y Gomá. Los eclesiásticos españoles trataron de persuadir al autor de que no publicara el libro; pero no han podido poner en entredicho su autenticidad. También he comprobado la interpretación que da Iturralde de las memorias de personas de Madrid que conocieron a la vez al nuncio y a los prelados. <<

[81] *Patronato de misiones pedagógicas*, 2 volúmenes, Madrid, 1934 y 1935, contiene numerosas fotografías y relatos personales detallados. G. Somolinos d'Ardois, *Las misiones pedagógicas de España* (1931-1936), *Cuadernos Americanos*, septiembre-octubre de 1953, resume los antecedentes y propósitos. Véase también Juan Guixé, *Le vrai visage de la république espagnole*, París, 1938, páginas 122 y ss., y las entrevistas con estudiantes que participaron. *El Sol*, 6 de agosto de 1932. <<

[82] David T. Cattell, *Communism and the Spanish Civil War*, Berkeley, 1955, p. 20. <<

[83] *El Sol*, 4, 6 y 15 de agosto de 1933, publicaba artículos especiales sobre las rivalidades de los sindicatos y la violencia portuaria en Sevilla. En 1961 tuve en Sevilla la oportunidad de discutir el contenido de dichos artículos, así como de enterarme de los primeros esfuerzos del «Comité de Reconstrucción», conversando con dos antiguos funcionarios municipales. <<

[84] El número de incendios fue muy exagerado en el debate. El año 1933 fue agrícolamente más pobre que los años 1932 y 1934, pero las estadísticas de Fuentes Irurozqui en *Síntesis de la economía* indican que las cosechas en Extremadura y Andalucía fueron proporcionalmente tan buenas como las de ambas Castillas. <<

[85] *El Sol*, 19 de abril y 27 de julio de 1933. <<

[86] 19. Santiago Galindo Herrero, *Los partidos monárquicos bajo la segunda República*, 2.ª ed., Madrid, 1956, pp. 167-220. Al contar la historia de los partidos monárquicos, el autor, que es profundamente monárquico, analiza las relaciones entre estos partidos y la CEDA. <<

[87] Charles Foltz, *Masquerade in Spain*, Boston, 1948, pp. 61-65, y Stanley G. Payne, *Falange, a History of Spanish Fascism*, Stanford, 1961, pp. 11-16. <<

[88] Payne, *Falange*, p. 45. <<

[89] *New York Times*, 13 de noviembre de 1933 <<

[90] Véase apéndice C para un detallado examen del significado de ambas Cortes y las elecciones locales durante la República. <<

[91] En español, en el original. <<

[92] *Economía Española*, diciembre de 1933, pp. 11 y ss. <<

[93] Alejandro Lerroux, *La pequeña historia*, Buenos Aires, 1945. Este libro es extremadamente valioso para el estudio de los sentimientos personales de Lerroux y para los detalles de maniobras políticas dentro de los gabinetes de 1934 y 1935. <<

[94] Brenan, *Spanish Labyrinth*, pp. 274-275. En una conversación que tuve en Nueva York 1960 con el señor Maurín, éste no recordaba el entusiasmo que le era atribuido en éste de la obra de Brenan. Habló de la Alianza como desbaratada desde el principio por la antipatía que reinaba entre Largo Caballero y los catalanes. Tampoco *El Socialista* de la primavera y el verano de 1934 da la impresión de que el nuevo movimiento fuera muy importante. <<

[95] En *El Sol*, 17 de enero de 1934, el doctor Marañón elogiaba por ejemplar la conducta de Martínez Barrio tanto en el manejo, de las elecciones de noviembre de 1933 como de los levantamientos anarquistas de diciembre. <<

[96] Los detalles dados en los párrafos anteriores, y que parecerán increíbles, están sacados de conversaciones que sostuve en 1961 en Zaragoza con varios propietarios de pequeños negocios, que habían tenido continuo trato con hombres de la CNT y la FAI en la década de los años veinte y principio de la de los treinta. <<

[97] *El Sol* y *La Vanguardia*, marzo y abril de 1934. Un interesante artículo sobre la evacuación de los niños apareció en *La Humanitat* (Barcelona), 9 de mayo de 1934. <<

[98] Galindo Herrero, *Partidos monárquicos*, pp. 212-217, ilustra el tipo de presión que hacían los monárquicos reaccionarios so-

bre Gil Robles. El profesor católico liberal Alfredo Mendizábal, por otra parte, le critica duramente por no haber hecho una declaración de lealtad a la República. Véase *Aux Origines*, pp. 190, 195. <<

[99] Payne, *Falange*, pp. 48-57. <<

[100] Véase *El Debate* del 24 de abril de 1934, para el texto del discurso de Gil Robles y *La Vanguardia*, para la descripción de la muchedumbre reunida en El Escorial y de la huelga general de Madrid. <<

[101] Lerroux, *La pequeña historia*, pp. 248-252. <<

[102] *El Sol* del 25 de abril, da el texto del mensaje del presidente. *El Sol* del 25-29 de abril y *El Debate* del 26-27 de abril sobre la crisis del Gabinete. <<

[103] Brenan, *Spanish Labyrinth*, pp. 277-278. <<

[104] *La Vanguardia*, 22 de abril de 1934. André Lubac, *Le tribunal espagnol des garanties constitutionnelles*, Montpellier, 1936, pp. 83-96. El volumen de Lubac es una tesis doctoral en derecho y proporciona un claro informe del complejo papel del tribunal. <<

[105] *La Vanguardia*, 9 y 10 de Junio de 1934. Manuel Azaña, *Mi rebelión en Barcelona*, Madrid, 1935, p. 235. <<

[106] *El Sol*, 26 y 27 de mayo, 1, 3, 6 y 18 de junio de 1934. <<

[107] Rafael Salazar Alonso, *Bajo el signo de la revolución*, Madrid, 1935, pp. 142-144, 151-153 y passim. <<

[108] *El Sol*, 23 de junio de 1934. <<

[109] *El Sol*, 11 de junio, para el incidente, 20 y 21 de agosto para el juicio. El 26 de septiembre se informó que un abogado había comunicado al Tribunal Supremo que amigos de Merry del Val le ofrecieron una indemnización si desistía de sus esfuerzos para reanudar el juicio. Falangistas y socialistas que vivían en Madrid en aquella época me han informado de este incidente en

idénticos términos. Véase también Payne, *Falange*, pp. 49-50, para un relato que incluye la admisión por Merry del Val de su culpabilidad, por David Jato, del Sindicato Español Universitario, la organización estudiantil de *Falange*. <<

[110] *El Sol* y *El Socialista*, 4 de julio de 1934, para el debate en las Cortes sobre las detenciones de diputados. <<

[111] Mi relato sobre el conflicto acerca del artículo 10 y de las elecciones municipales está basado en *El Sol*, agosto de 1934. Un excelente artículo sobre el tema apareció en *Current History*, noviembre de 1934. Sobre la cuestión vasca en su conjunto véase *Le clergé basque*, París, 1938. Datos importantes sobre la división lingüística de las cuatro provincias y su estructura municipal aparecieron en la obra editada por Arnold Toynbee, *Survey of International Affairs*, 1937, vol. II, Londres, 1938, p. 41. <<

[112] *El Sol*, 10 de julio de 1934. <<

[113] *Ibid*., 4 de agosto de 1934. <<

[114] *La Vanguardia* y *El Debate*, 10 de septiembre de 1934 <<

[115] Prieto en *El Socialista* (Toulouse), 15 de octubre de 1953. J. Álvarez del Vayo, *The Last Optimist*, Nueva York, 1949, pp. 261-262. <<

[116] Las cifras son de Salazar Alonso, *Bajo el signo*, pp. 259-262. Para información sobre otras pequeñas aprehensiones de armas escondidas, véase *La Vanguardia*, 20 de septiembre de 1934, y Economía Española, septiembre de 1934, p. 111. <<

[117] *El Sol*, 11 y 12 de septiembre de 1934. <<

[118] *Ibid*., 18 de septiembre de 1934 <<

[119] *La Vanguardia*, 1 de junio de 1935. Diversos diarios se refirieron al discurso. Su citación directa por Ángel Ossorio y Gallardo formó parte de la defensa del Gobierno catalán, cuando éste fue juzgado en mayo de 1935 por los acontecimientos del 6 de octubre de 1934. <<

[120] La verdad relativa a las sublevaciones de Cataluña y Asturias es extremadamente difícil de averiguar. Las pasiones políticas impidieron a la mayoría de los observadores reconocer las verdades desagradables con respecto al bando con el cual simpatizaban. La censura de prensa duró a lo largo de todo el año 1935. Varios agentes del ejército, la guardia civil y la guardia de asalto fueron la ley en sí mismos en las investigaciones tras los sucesos. Los liberales españoles, franceses e ingleses que se conmovieron por la suerte de los mineros, a menudo sabían muy poco de lo que realmente ocurrió. Las fuerzas de la represión reaccionaron violentamente ante cualquier interrogatorio civil acerca de su conducta. La censura fue levantada a principios de 1936; pero los comentarios periodísticos en aquella época ya se hacían en función de la campaña electoral. Después de la guerra civil, en España sólo ha podido documentarse la versión del bando victorioso. No hace falta decir que los millares de izquierdistas enterados que huyeron de España al término de la guerra civil no llevaban documentos en su equipaje. Teniendo en cuenta estos hechos, he tratado en todo lo posible de basar mi relato en el periodismo más competente desde el punto de vista profesional de la época, y en el testimonio directo de participantes, particularmente cuando ese testimonio viene de investigadores oficiales y de procesos en los cuales los testigos estaban bajo promesa de decir verdad y podían ser sometidos a confrontación. <<

[121] *El Sol*, 29 de marzo y primero de julio de 1933, artículos sobre los problemas surgidos respecto a la transferencia de poderes, por el historiador catalán moderado A. Rovira i Virgili. También Jesús Pérez Salas, *Guerra en España*, México, D. F., 1947, pp. 59-60. El autor comandó la guardia municipal de Barcelona durante parte de 1933. <<

[122] *New York Times*, 23 y 26 de octubre, 6 de noviembre de 1933; 29 de abril y 30 de septiembre de 1934. Lawrence Fernsworth, corresponsal del NYT en Barcelona, estaba particular-

mente bien informado. Para comprender el tremendo ímpetu del sentimiento nacionalista catalán, véase E. Allison Peers, *Catalonia Infelix*, Londres, 1937, Antón Sieberer, *Katalonien gegen Kastilien*, Viena, 1936, y Brenan, *Spanish Labyrinth*, cap. 2. <<

[123] Enrique de Ángulo, *Diez horas de Estat Català*, Barcelona, 1935, pp. 30-33. Esta obra es un detallado relato de un competente periodista barcelonés que no simpatizaba con el nacionalismo catalán. <<

[124] E. de Ángulo, *op. cit.*, pp. 36-41. También el testimonio de Companys y de Rafael Sánchez Guerra, secretario del presidente Alcalá-Zamora, en el proceso a la Generalitat en 1935, *El Sol*, 29 de mayo de 1935. <<

[125] Diego Hidalgo, *¿Por qué fui lanzado del ministerio de la Guerra?*, Madrid, 1934, pp. 67-68. <<

[126] Ángulo, *Diez horas, passim*, y el testimonio del general Batet y de los miembros de la Generalitat, dado completo por *La Vanguardia* del 28 de mayo de 1935. El proceso está bien extractado, desde un punto de vista simpatizante, por Alardo Prats, *El Gobierno de la Generalidad en el banquillo*, Madrid, 1935. <<

[127] El ministro de la Guerra habló de 20-30.000 revolucionarios, y el profesor Mendizábal, que vivía en Oviedo, habla en *Aux origines d'une tragédie*, pp. 201-204, de 20.000 militantes socialistas y 6000 comunistas. Tanto Mendizábal como otro testigo presencial, un comunista alemán emigrado, Hans Theodore Joel, que escribió en *Living Age*, febrero, 1935, pp. 493 y ss., habla de 8000 militantes que se abrieron camino luchando hasta Oviedo. En vista de estas cifras, me inclino a pensar que Brenan, en *The Spanish Labyrinth*, exagera cuando habla de 70.000 sublevados. Sin embargo, éste es uno de los muchos factores que durante tanto tiempo fue ocultado al público por la censura y la propaganda que aseguró que jamás se pueda disponer de cifras. <<

[128] Excepto donde se especifica lo contrario, el siguiente relato de los días 5-13 de octubre está basado en la obra de Manuel Grossi, *La insurrección de Asturias*, Barcelona, 1935, y de José Cartel (seud.), *Octubre rojo en Asturias*, Madrid, 1935. La primera es un trabajo de un veterano minero de treinta años, que perteneció al Bloque Obrero y Campesino (comunistas no estalinistas), y que fue miembro del comité de Oviedo. Escribe sin floreos literarios y con evidente candor. La segunda es la obra de un periodista experimentado, claramente admirador de los socialistas moderados Teodomiro Menéndez y Julián Besteiro. Ambos relatos son bastante consistentes y completamente congruentes con los detalles que yo utilicé. <<

[129] Mendizábal, *Aux origines*, pp. 207-209. <<

[130] *El Sol*, 23, 28 y 30 de octubre, para los informes sobre el terror y la prevención del terror entre los revolucionarios. <<

[131] Hidalgo, *op. cit.*, pp. 83-88. <<

[132] Fernando Solano Palacio, *La tragedia del Norte*, Barcelona, 1938, p. 90. <<

[133] *Le Populaire*, 5 y 6 de enero de 1935. El diario socialista francés hizo una entrevista a Tomás en la prisión donde esperaba su proceso, en un tiempo en que la censura impedía la discusión en la prensa española. <<

[134] *lbid*. y Brenan, *Spanish Labyrinth*, pp. 287-289. <<

[135] Lerroux, *La pequeña historia*, pp. 330-336, 362-364. <<

[136] *El Sol*, 30 de diciembre de 1934, para el informe sobre el intento de suicidio. *Le Populaire*, 13 de enero de 1935, para el informe de De los Ríos sobre su visita a la enfermería de la prisión. <<

[137] *El Sol* y *Le Populaire*, 10 de febrero de 1935. <<

[138] *El Sol*, 16 de febrero de 1935. <<

[139] *Le Populaire*, 11 y 16 de febrero de 1935. Sucesos no mencionados en la prensa española. <<

[140] Lerroux, *op. cit.*, pp. 372-375. Véase también el tributo a los motivos de Lerroux, por Indalecio Prieto, en *El Socialista* (Toulouse), 10 de mayo de 1956. <<

[141] Manuel Azaña, *Mi rebelión en Barcelona*, Madrid, 1935, pp. 5-6, para el texto de la carta, pp. 90-125 y *passim* para su conversación con Lluhí y su detención. Véase también Frank Sedwick, *The tragedy of Manuel Azaña*, Columbus, Ohio, 1963, pp. 137-139 y 251-260 para detalles sobre el encarcelamiento de Azaña, incluyendo una carta, no publicada hasta ahora, de Ángel Ossorio, abogado defensor de Azaña. <<

[142] *La Vanguardia*, 21, 22 y 26 de marzo de 1935. *Política* (órgano de Izquierda Republicana), 28 de marzo de 1935. <<

[143] *El Sol*, 20 de abril de 1935. <<

[144] *New York Times*, 2 de marzo y 27 de octubre de 1935. *El Sol*, primero de diciembre de 1935, en donde «un agricultor» ofrecía un análisis técnico —de una página— de los efectos de las tres leyes agrarias de 1935. <<

[145] *El Sol*, 8 de octubre de 1935. *Economía Española*, septiembre de 1935, pp. 60-62. <<

[146] Américo Castro en *El Sol*, 30 de junio de 1934, y Claudio Sánchez Albornoz en *Política*, 17 de octubre de 1935. <<

[147] *El Sol*, 30 de noviembre de 1935. <<

[148] *El Liberal*, Madrid, 25 y 30 de mayo, 1-12 de junio de 1935. *New York Times*, 8 de septiembre de 1935. <<

[149] En el curso de mis investigaciones en España, pregunté al señor Gil Robles acerca de los repetidos rumores de que él consideró la posibilidad de un golpe de estado, mientras fue ministro de la Guerra entre el 8 de mayo y el 14 de diciembre de 1934. Negó terminantemente todos estos rumores, y yo acepto su negativa en lo que se refiere a él. Sin embargo, hice las mismas pre-

guntas independientemente a varios de sus colaboradores particulares y del partido, y todos creían que él verdaderamente había considerado la posibilidad de un golpe de estado, dándome nombres y fechas para apoyar sus aserciones. Es innecesario decir que en estos casos las personas entrevistadas habrían aprobado, o al menos «comprendido», tal golpe. Véanse también las desfavorables interpretaciones de Gil Robles como ministro de la Guerra en la obra de Mendizábal, *Aux origines*, pp. 214-222, y de Brenan, *Spanish Labyrinth*, pp. 291-293. Salvador de Madariaga, en *Spain*, Nueva York, 1958, lo defiende en cambio, indicando el gran número de oportunidades que tuvo de haber querido. <<

[150] Galindo Herrero, *Los partidos monárquicos*, pp. 230-234. <<

[151] *Ibid*., 246-265. <<

[152] *El Socialista*, 16 de septiembre de 1934, citó al promotor Strauss, y habló de la licencia que había obtenido a través del sobrino y del hijo de una personalidad que ocupaba un alto cargo. La referencia indirecta a Lerroux era clara, así que el escándalo ya se había iniciado aun antes de la revolución de Octubre. <<

[153] Lerroux, *op. cit*., pp. 419-422, 445-455. <<

[154] *Economía Española*, diciembre de 1935, pp. 45-46. <<

[155] Payne, *Falange*, caps. 3 y 4. Felipe Ximénez de Sandoval, *José Antonio*, Barcelona, 1941, passim. El primero es un estudio erudito, el segundo una biografía sentimental y anecdótica, valiosa, sin embargo, precisamente porque muestra la adoración creada en torno a su personalidad. Véase también la obra de Gumersindo Montes Agudo, *Vieja guardia*, Madrid, 1939, por las excelentes fotos de los jefes originales de *Falange* y de las JONS. <<

[156] *Claridad*, 21 de diciembre de 1935. <<

[157] *El Sol*, 22 de diciembre de 1935 <<

[158] José Venegas, *Las elecciones del Frente Popular*, Buenos Aires, 1942, pp. 68-69. <<

[159] *El Sol*, 17 y 18 de febrero de 1936. Mendizábal, *Aux origines*, pp. 233-238. <<

[160] Todas las cifras utilizadas en los párrafos anteriores proceden de Venegas, *op. cit.*, pp. 31-32, 46-47, 65 y *passim*. Son las cifras de las juntas, no adulteradas por las polémicas post-electorales. Brenan, en *Spanish Labyrinth*, utiliza también estas cifras como las hoy disponibles de más confianza. Mendizábal, *op. cit.*, p. 239, emplea las cifras de *El Debate*, el cual, agrandando el significado de centro, da al centro-derecha un total de 4 910.000 contra 4 356.000 que reconoce como votos legítimos del Frente Popular. Madariaga, *Spain* (ed. 1958), pp. 445-446, limita el Frente Popular a 4 206.000 votos, negándose a concederle los votos de la segunda vuelta, de que se informó el 20 de febrero. Dado que estos votos fueron contados por juntas nombradas bajo Portela, y que todas las quejas registradas en aquel tiempo referentes a fraude y terror procedieron de las izquierdas, su proceder parece un poco arbitrario para minimizar el total de votos de las izquierdas. <<

[161] Brenan, *op. cit.*, p. 300, informa del discurso de Portela ante las Cortes en Valencia el primero de octubre de 1937, acusando a Gil Robles y a Franco de proponer un golpe militar. Véase también José María Iribarren, *Con el general Mola*, Zaragoza, 1937, pp. 9-13, para una versión de la iniciativa de Franco. Gil Robles dijo a Stanley Payne en Madrid, en 1959, que «políticos conservadores asustados» apremiaron a Franco y otros generales a actuar; pero que Franco rehusó (*Falange*, p. 94). Yo no sé si Gil Robles pensaba incluirse en dicha categoría; pero me aseguró en 1961 que siempre se había opuesto a los golpes militares. Varios oficiales que lucharon en el bando nacionalista durante la guerra civil creían, por razones que a mí me parecen convincentes, que Franco era demasiado frío e inteligente para dejarse arrastrar por un movimiento de pánico. Tal conclusión contradice el relato de Iribarren; pero es más aceptable por el he-

cho notorio de la larga vacilación de Franco antes de sumarse a la conspiración militar en la primavera de 1936. <<

[162] Mi versión de la transferencia de poderes se basa en un artículo de Diego Martínez Barrio, publicado en la edición madrileña del *ABC* del 23 de febrero de 1937. Este artículo me fue recomendado por su absoluta corrección, por un miembro del Gobierno Portela que estuvo presente en la oficina de Portela todo el día 18, y que leyó el artículo estando en la cárcel de Madrid, donde pasó los años de la guerra civil. Sin mencionar el artículo, pregunté una vez al señor Martínez Barrio en París sobre este incidente. Su versión oral se correspondía completamente con la que él escribió 23 años atrás. Tranquilizado por la evidencia de tan buena memoria y por tal honestidad, recurrí a él para otros muchos detalles a los que no he puesto nota al pie separadamente. <<

[163] El *New York Times* y el *Times* de Londres fueron mis principales fuentes de información día a día, con respecto a la violencia callejera a principios de la primavera de 1936. Para informes más detallados e incidentes más importantes, véase el *New York Times* del 21 de febrero, 2, 12-17, 19 y 25 de marzo; 4 y 8 de abril; *The Times*, Londres, 16 de marzo. Don Amós Salvador me explicó en Madrid en 1960 las dificultades habidas ante la ineficacia de una policía no siempre leal. <<

[164] La numerosa literatura polémica sobre la guerra civil puede hacer creer fácilmente a los lectores que las luchas callejeras formaban verdaderamente parte de un complot fascista o comunista coherente. Yo llegué a la conclusión contraria basándome en numerosas conversaciones con hombres que fueron miembros de la *Falange*, la JAP o la JSU en la primavera de 1936. En cuanto al número de víctimas, Payne, en *Falange*, p. 104, ha estimado, basándose en un cuidadoso examen de los informes de *Falange*, que en los tres meses siguientes a las elecciones de febrero fueron asesinados unos 40 falangistas y «más» de 50 izquierdistas, así co-

mo varios conservadores. Las técnicas de la violencia falangista anterior a la guerra civil, no siempre aprobadas por José Antonio, pueden ser vistas en la obra de Luis Moure-Mariño, *Galicia en la guerra*, Madrid, 1939, pp. 202-227; y también en el artículo titulado «Las cruzadas de España», publicado en *Living Age*, octubre de 1936, por un joven inglés que perteneció a una patrulla terrorista en Valencia poco después de las elecciones de febrero. <<

[165] *El Sol*, 4 de abril de 1936. <<

[166] Esta explicación me la dio un antiguo diputado «nicetista», amigo íntimo del presidente. <<

[167] *El Sol*, 16 de abril de 1936. <<

[168] *El Sol*, 25 de abril y 6 de mayo de 1936. <<

[169] *El Sol*, 28 de abril, y José Venegas, *Las elecciones del frente popular*, p. 50. *El Sol*, 3 de junio de 1936, para el debate retrospectivo final en las Cortes sobre las elecciones en Cuenca. <<

[170] Venegas, *op. cit.*, pp. 70-71. <<

[171] *Claridad*, 18 y 30 de enero de 1936. <<

[172] Cattell, *Communism and the Spanish Civil War*, pp. 31-33. <<

[173] Mi análisis está basado principalmente en *Claridad*. Véase también la entrevista concedida por Luis Araquistáin a Frederick Birchall, *New York Times*, 26 de junio de 1936. <<

[174] Cattell, *op. cit.*, p. 33. <<

[175] *El Socialista*, 4 de enero de 1936. <<

[176] *El Sol*, 4 de marzo y 12 de abril de 1936. <<

[177] *El Sol*, 9 de julio de 1936. <<

[178] *Economía Española*, marzo, 1936, pp. 323-337. <<

[179] *The Times*, Londres, 29 de mayo de 1936. <<

[180] *El Sol*, 17 de enero de 1936. <<

[181] *The Times*, Londres, 11 y 13 de abril de 1936. <<

[182] *Ibid.*, 22 de mayo de 1936. <<

[183] Información dada por el señor Giménez Fernández. <<

[184] *El Sol*, 14 de mayo de 1936 <<

[185] *El Sol*, 17 y 18 de junio de 1936. <<

[186] *New York Times*, 9 de julio de 1936. <<

[187] *El Sol*, 3 y 12 de junio de 1936. *El Socialista, Claridad* y *Mundo Obrero* criticaron estas tácticas como «provocaciones anarquistas». El 23 de junio *Solidaridad Obrera* dijo en un editorial que la acumulación de huelgas perjudicaba los intereses de la clase trabajadora, y que los obreros debían buscar una baja de los precios antes que una subida de salarios. <<

[188] *El Sol*, 24 de junio. <<

[189] *El Sol*, 7 de julio. <<

[190] *El Sol*, 1 y 2 de julio, informó de los votos tal como fueron relacionados por el comité ejecutivo (prietista), y por las agrupaciones (secciones locales, fuertemente caballeristas). Sumando ambos informes se obtiene un margen de 6 a 5 para el ejecutivo. <<

[191] El cuadro que he hecho de la situación en Extremadura está basado en dos artículos de Pedro Perdomo publicados en *El Sol* los días 16 y 17 de julio de 1936; y en conversaciones con amigos del entonces ministro de Agricultura, Mariano Ruiz Funes. <<

[192] A menos que lo especifique, he dependido, al resumir la conspiración, de dos biografías muy bien documentadas de los principales generales, escritas por oficiales que colaboraron con ellos: Jorge Vigón, *General Mola*, Barcelona, 1957, y Emilio Esteban-Infantes, *General Sanjurjo*, Barcelona, 1958. Hay muchos detalles fascinantes en las memorias de personajes secundarios, pero muy activos, tales como Antonio Lizarza y Juan Antonio

Ansaldo. Se deben aceptar con más cautela las afirmaciones de ciertos carlistas, falangistas y miembros de la UME que afirman apasionadamente haber sido los «verdaderos» iniciadores del *Movimiento*. Basándome en mis lecturas y conversaciones, estoy convencido de que los planes más importantes fueron hechos por los oficiales, encabezados por Mola; que muchas de las pretensiones de personajes derechistas sólo reflejan su rabia porque los militares no les otorgaron su plena confianza y su frustración por los resultados políticos de la guerra civil, de la que habían esperado algo muy diferente de la dictadura del general Franco. <<

[193] Según Manuel Goded, *Un faccioso cien por cien*, Zaragoza, 1939, pp. 26-27, el general Goded, José Antonio y Gil Robles también asistieron a las reuniones de Madrid. Esta afirmación ilustra la imposibilidad que hay, a estas alturas, de saber por completo la verdad. Él escribió su libro para justificar a su padre, que fue muy criticado por haberse rendido en Barcelona el 19 de julio. De ahí su interés en pretender para él un papel importante en los preparativos preliminares. Ni Vigón ni Esteban-Infantes hablan de Goded como uno de los dirigentes de la conspiración; pero esto puede ser explicado muy bien por el hecho de que Goded cayó oficialmente en semidesgracia desde su muerte. El mencionar a José Antonio ayudaría al autor a asociar la memoria de su padre con el santo patrón del *Movimiento*. Y en cuanto a Gil Robles, ésta es simplemente una referencia más a él, referencias todas que él negó por su parte. No se dan detalles de lugares ni fechas. Nadie puede probar quién asistió y quién no asistió. <<

[194] J. M. Iribarren, *Con el general Mola*, p. 15. <<

[195] A. de Lizarra (seud. de Andrés María de Irujo), *Los vascos y la República española*, Buenos Aires, 1944, pp. 33-36. <<

[196] Jesús Pérez Salas, *Guerra en España*, pp. 75-76, 79, pretende, en contraste con todos los otros escritores, que Azaña y Casares Quiroga estaban al tanto de la conspiración militar. Él era

un leal republicano catalán y oficial de carrera que gozaba de la confianza personal de Azaña. Sin embargo, sus conversaciones con Azaña y con amigos de Casares Quiroga tuvieron lugar a finales de marzo. Esto puede constituir, por tanto, una pieza más de evidencia indirecta de que, hacia julio, Azaña y Casares Quiroga pensaban que el peligro había pasado. <<

[197] *El Sol*, 17 de julio de 1936. Prácticamente casi todo el número estaba dedicado al debate en las Cortes referente al asesinato de Calvo Sotelo. <<

[198] Vígón, *Mola*, pp. 98-103. <<

[199] Antonio Lizarza Iribarren, *Memorias de la conspiración*, 1931-1936, Pamplona. 19543, pp. 104-111. El señor Lizarza era el correo entre ambos generales. Véase también Hugh Thomas, *The Spanish Civil War*, Nueva York, 1961, pp. 118-119, versión concordada en documentación carlista perteneciente a Fal Conde. <<

[200] Reynolds y Eleanor Packard, *Balcony Empire*, Nueva York, 1942, pp. 38-40. <<

[201] Pierre Broué y Émile Témime, *La révolution et la guerre d'Espagne*, París, 1961, pp. 82 84. Este libro realmente admirable traza excelentes bosquejos de lo ocurrido en muchas partes de España (pp. 82-102), detalles de los cuales he incorporado en los párrafos siguientes sin hacer notas adicionales. <<

[202] El texto de la alocución por radio se publicó en la obra de Iturralde, *El catolicismo y la cruzada de Franco*, II, pp. 22-26. <<

[203] Vigón, *Mola*, pp. 121-127, para el rápido éxito en el norte de España. También tuve la oportunidad de interrogar en Zaragoza, Valladolid y Salamanca a varias personas que vivían allí desde hacía muchos años y que conocieron los primeros días de la guerra en dichas ciudades. <<

[204] Vigón, *Mola*, pp. 108-109. <<

[205] Antonio Ruiz Vilaplana, *Burgos Justice*, Nueva York, 1938, pp. 17-24. El autor era abogado y funcionario judicial en Burgos en la época del alzamiento. Emigró a Francia en junio de 1937; la edición original de este libro se titulaba *Doy Fe*. <<

[206] Francisco de Cossío, *Manolo*, Valladolid, 1939, pp. 115-128, da un cuadro vívido de las emociones y actos de los jóvenes falangistas en la toma de Valladolid. El libro, en su conjunto, es un relato literario y emotivo de las reacciones de la clase media conservadora de Castilla la Vieja hacia la República. <<

[207] Vigón, *Mola*, pp. 141 y ss., para los primeros días en Andalucía y Extremadura. También sostuve conversaciones con oficiales nacionalistas que tomaron parte en las acciones de Algeciras y Cádiz. <<

[208] Antonio Bahamonde, *Memoirs of a Spanish Nationalist*, Londres, 1939, pp. 27-31; Harold Cardozo, *March of a Nation*, Londres, 1937, pp. 11-15. Bahamonde fue un funcionario civil a las órdenes de Queipo de Llano y emigró en 1938. Sus memorias están señaladas por la premura y su repugnancia ante los hechos que había vivido, pero sus detalles fueron ampliamente confirmados por mis entrevistas en Sevilla. Cardozo era un periodista inglés favorable a los insurgentes desde el principio. <<

[209] En lo referente a Madrid, he dependido de la obra de Vigón, *Mola*; de Julián Zugazagoitia, pp. 42 y ss., y de los recuerdos de muchos madrileños. Zugazagoitia era el director de *El Socialista* y conoció personalmente a todos los principales personajes izquierdistas que intervinieron en el drama del cuartel de la Montaña. <<

[210] J. Pérez Salas, *Guerra en España*, pp. 83-84, detalla los cambios en los mandos de la policía y la tropa hechos por la Generalitat en junio de 1936. Pérez fue uno de los que aconsejó tales cambios, y cree que fueron un importante factor en el triunfo republicano en Barcelona. <<

[211] Manuel Goded, *Un faccioso cien por cien*, pp. 37-49, para los detalles del papel del general. «Remembrança, 19 de julio del 1936», *Butlletí d'informacio*, s. f. (Órgano en mimeógrafo de la Generalitat en el exilio), y Jesús Pérez Salas, *Guerra en España*, pp. 97-101 para los acontecimientos de Barcelona. Las palabras que yo atribuyo al general Goded están tomadas de *Un faccioso*, pp. 58-59. La versión dada en «Remembrança» es prácticamente la misma, exceptuando la frase adicional: «para evitar un inútil derramamiento de sangre». La rendición de Goded es un punto delicado en las memorias españolas. Muchos nacionalistas lo tienen por cobarde y traidor, mientras que los veteranos republicanos creen que lamentó el alzamiento desde el momento en que se dio cuenta del escaso apoyo popular con que contaba. Su hijo explica la alocución por radio como la única cosa que podía hacer su padre, para evitar que de la sublevada Palma salieran más fuerzas aéreas y navales en dirección a Barcelona, ciudad esta última en la que habrían sido capturadas, sin que afectaran para nada al resultado final de la lucha. <<

[212] G. L. Steer, *The Tree of Gernika*, Londres, 1938, pp. 68-70; A. de Lizarra, *Los vascos y la República española*, Buenos Aires, 1944, pp. 20-26, 41-57. Lizarra era un diputado nacionalista vasco, y en su libro utiliza abundantemente las memorias no publicadas de su primo y colega, Manuel de Irujo. <<

[213] Óscar Pérez Solís, *Sitio y defensa de Oviedo*, Valladolid, 1938, pp. 39-41; G. Carrascal, *Asturias*, Valladolid, 1938, pp. 50-54. Ambas obras son relatos altamente laudatorios del mando del coronel Aranda. Pérez Solís era un excomunista y durante la guerra civil se convirtió en uno de los principales ideólogos del Movimiento. Véase también Fernando Solano Palacio, *La tragedia del Norte*, Barcelona, 1938, pp. 23-33, para la versión anarquista de los primeros días en Asturias. <<

[214] *Lo que han hecho en Galicia*, París, 1938, pp. 11-28, 160-175; Luis Moure-Mariño, *Galicia en la guerra*, Madrid, 1939,

pp. 34-37. El primero es un relato detallado de dos refugiados; el segundo, la obra de uno de los fundadores de la *Falange* en Galicia. Sus descripciones de los primeros días concuerdan entre sí. <<

[215] Esta información me la dio Miguel Maura en una conversación. <<

[216] Véase el artículo de Indalecio Prieto en *El Socialista*, el 19 de julio de 1956. En una carta que me dirigió, Prieto añadió que el propio marqués había confirmado sus informes en 1948, y citó dos estadistas extranjeros que oyeron la misma versión del incidente. Un amigo íntimo de Azaña me describió la recepción por el presidente del mensaje por teletipo, pues estaba con él en aquella ocasión. <<

[217] Lizarza, *Memorias de la conspiración*, pp. 24-27, 35 <<

[218] Hugh Thomas, *The Spanish Civil War*, p. 101 <<

[219] Información recibida en una entrevista con el general Kindelán, Madrid, 1960. <<

[220] Charles Foltz, Jr., *The Masquerade in Spain*, Boston, 1948, pp. 46-48. <<

[221] Werner Beumelberg, *Kampf um Spanien*, Berlín, 1940, pp. 22-26. Esta obra es una historia no oficial de la Legión Cóndor. Los datos que publica fueron luego todos confirmados por documentos del ministerio alemán de Asuntos Exteriores publicados tras la Segunda Guerra Mundial. Por lo tanto, al referirme a la intervención alemana, he contado con su verosimilitud general. <<

[222] Pierre Cot, *The Triumph of Treason*, Nueva York, 1941, pp. 341-342. <<

[223] Beumelberg, *Kampf*, pp. 28-29, y Guido Mattioli, *L'aviazione legionaria in Spagna*, Roma, 1940, pp. 14-24. También Georges Oudard, *Chemises noires, brunes, vertes en Espagne*, París, 1938, pp. 190-194. Oudard era un periodista veterano de la pri-

mera guerra mundial, en general favorable a los nacionalistas; pero muy moderado y positivo en su reportaje. <<

[224] F. Jay Taylor, *The United States and the Spanish Civil War*, Nueva York, 1956, p. 66. Robert Garland Colodny, *The Struggle for Madrid*, Nueva York, 1958, pp. 150-151. <<

[225] Beumelberg, *Kampf*, p. 28. Toynbee, *Survey of International Affairs*, 1937, II, p. 231. <<

[226] Herbert Feis, *The Spanish Story*, Nueva York, 1948, p. 269. <<

[227] Pierre Cot, *The Triumph of Treason*, pp. 338-355; y el testimonio de Léon Blum durante la investigación de la Cámara de diputados francesa sobre las relaciones exteriores en el período 1933-1945, testimonio del 27 de julio de 1947. <<

[228] Taylor, *op. cit.*, p. 57 y ss. <<

[229] Mattioli, *L'aviazione legionaria* y Hellmut H. *Führing, Wir funken für Franco*, Breslau, 1941, *passim*. <<

[230] Cattell, *Communism and the Spanish Civil War*, pp. 70-71. <<

[231] P. A. M. Van der Esch, *Prelude to War*, La Haya, 1951, p. 44, basada en las memorias del general Krivitski. *Prelude* da el mejor relato general disponible de la diplomacia y la intervención extranjera en la guerra civil. <<

[232] Lois Elwyn Smith, *México and the Spanish Republicans*, Berkeley, 1955, pp. 190-191. <<

[233] Foltz, *Masquerade in Spain*, pp. 43-44; Vigón, *Mola*, pp. 200-201. <<

[234] José Martín Blázquez, *I Helped to Build an Army*, Londres, 1939, pp. 175-182, y Pietro Nenni, *La guerre d'Espagne*, París, 1960, *passim*, contienen mucho material interesante sobre las operaciones militares en la sierra. Martín Blázquez era un oficial de carrera simpatizante con la República. Pietro Nenni, el socia-

lista italiano de izquierda, figuró entre los primeros emigrados antifascistas que entraron en España, y se convirtió en uno de los jefes de las Brigadas Internacionales. <<

[235] Información obtenida en conversaciones sostenidas en Valencia, 1960. <<

[236] Vigón, *Mola*, pp. 161-163. Broué y Témime, *La révolution et la guerre d'Espagne*, páginas 100-101 y 116-120. <<

[237] G. Carrascal, *Asturias*, pp. 66-67. Solano Palacio, *La tragedia del Norte*, pp. 41 y *passim*. <<

[238] Con referencia al avance del ejército de África, he dependido principalmente de Harold Cardozo, *March of a Nation*, Londres, 1937; H. R. Knickerbocker, *The Siege of the Alcázar*, Filadelfia, 1936, y Cecil Gerahty, *The Road to Madrid*, Londres, 1937. Cardozo y Knickerbocker fueron excelentes periodistas que ya eran corresponsales de guerra veteranos antes de 1936. El libro de Knickerbocker, a pesar de su título, es en gran parte un diario de sus experiencias con las columnas victoriosas en Andalucía y Extremadura. Gerahty no era tan buen corresponsal; pero tenía muchas relaciones sociales, que le permitieron observar más libremente que la mayoría de los extranjeros. Aunque sean incompletas, he confiado en estas fuentes más que en los varios volúmenes de la historia oficial llamada *Cruzada o en la Historia militar de la guerra de España*, Madrid, 1940, de Manuel Aznar. Esta última contiene muchos mapas esquemáticos excelentes, y mucha información sobre el orden de las batallas; pero enumera tan sólo las bajas de los «rojos»; la tercera edición, de 1938, es casi idéntica a la primera en los puntos más importantes, que yo comprobé con la esperanza de que el acceso de Aznar a los archivos haría que, veinte años después, contara la verdadera historia. Algunos oficiales que lucharon en bandos opuestos en la guerra civil consideran al libro de Aznar como propagandístico, mientras que confirmaron la información que yo obtuve de Cardozo

y Knickerbocker. Puesto que nadie más que Aznar y sus colaboradores han visto los archivos, y puesto que *Cruzada* está deformado por su evidente intento propagandístico, el material periodístico de la época sigue siendo la mejor fuente de información. <<

[239] Los reportajes de los periodistas franceses y portugueses son citados ampliamente por Arthur Koestler en su obra, *L'Espagneensanglantée*, París, 1937. El despacho de Jay Allen del 25 de agosto al *Tribune* de Chicago fue publicado en muchos periódicos y folletos. El *New York Times* del 16 de septiembre de 1936 publicaba la historia del fotógrafo francés René Bru, que filmó a unos mil prisioneros que esperaban la ejecución en la plaza de toros de Anandaleja, así como pilas de cadáveres siendo quemados. Fue detenido y encarcelado en Sevilla. Dos semanas más tarde fue puesto en libertad en Tánger; pero tuvo que dejar sus películas a las autoridades insurgentes. Véase también J. T. Whitaker, «Prelude to War. A Witness from Spain», *Foreign Affairs*, octubre, 1942, pp. 104-106; para varias francas declaraciones del terror de masas hechas por oficiales españoles y por el capitán alemán Ronald von Strunk, que acompañaba al ejército de África. Véase H. Thomas, *The Spanish Civil War*, p. 247, para un punto de vista escéptico sobre lo que el autor llama la masacre de Badajoz. <<

[240] Arthur Koestler, *Spanish Testament*, Londres, 1937, pp. 149-157, incluyendo declaraciones juradas prestadas por personas que escaparon del Alcázar. <<

[241] Aurelio Núñez Morgado, *Los sucesos de España vistos por un diplomático*, Buenos Aires, 1941, pp. 214-221, para el relato del embajador. *The Red domination in Spain*, Madrid, 1946, pp. 325-337 para el relato del coronel Moscardó. <<

[242] Una versión muy completa de «La verdad sobre la ejecución de Luis Moscardó», hijo del coronel, puede hallarse en el li-

bro de Herbert R. Southworth *El mito de la cruzada de Franco*, París, 1963. (N. del E.). <<

[243] H. Thomas, *op. cit.*, p. 203, da detalles convincentes que apoyan la autenticidad de la historia. <<

[244] Con referencia a la caída de Irún y de San Sebastián, he dependido principalmente de G. L. Steer, *The Tree of Gernika*, Londres, 1938, pp. 32-58. Steer gozaba de la confianza de los nacionalistas vascos. En su libro demuestra conocer poco al resto de España; pero es altamente informativo de los aspectos militares y políticos de la guerra, tal como eran vistos por los vascos. <<

[245] Carlos M. Rama, *La crisis española del siglo XX*, México, 1960, pp. 249-250, basada en un artículo de García Oliver en *Solidaridad Obrera*, 18 de julio de 1937. Aunque lo cite en este caso por su información sobre la guerra civil, este libro es un estudio detallado y muy reflexivo de las modalidades políticas y el pensamiento político subyacente en la guerra civil. <<

[246] El problema del vocabulario presenta grandes dificultades al hablar de la guerra civil. He rechazado términos generales como «rojos» y «blancos», «fascistas» y «marxistas», no por sus asociaciones emotivas, sino porque no son términos exactos para una buena proporción de las fuerzas en presencia. «Rebeldes» y «leales» son un poco más exactos; pero si se utilizan para denominar ambos bandos suponen un cierto grado de deliberación legal que no creo fuera importante en el momento de la elección de bando hecha por la mayoría de aquéllos que pudieron elegir. Durante los primeros 3 o 4 meses de la guerra, el Gobierno de Madrid gozaba tan sólo de una autoridad nominal en su zona. Por lo tanto, me ha parecido que llamarla «zona del Frente Popular» es un término muy apropiado para calificar al territorio que se declaraba leal al Gobierno republicano. Igualmente, durante el mismo período, la junta de Burgos no había alcanzado

una organización interna completa ni el reconocimiento internacional. Así que el término «insurgentes» me pareció razonablemente adecuado y neutral para las fuerzas mandadas por los generales Franco, Mola y Queipo de Llano. Después de noviembre de 1936, el gobierno de Largo Caballero primero, y luego el de Negrín, impusieron su autoridad cada vez más en la zona republicana, y el general Franco fue estableciendo sin cesar su autoridad personal y la categoría internacional de su Gobierno. En estas condiciones, los términos «republicanos» y «nacionalistas» me parecen los mejores. «Republicanos» se justifica por el hecho de que las fuerzas revolucionarías estaban en franca retirada, mientras que el Gobierno afirmaba repetidamente los fines y el programa de República reformista y liberal. «Nacionalistas» se justifica por el hecho de que el Gobierno de Burgos afirmó rápidamente la primacía de Castilla sobre todas las regiones, y gobernó con la ayuda de las fuerzas religiosas y económicas más conservadoras de España. No hace falta decir que en las complejas circunstancias de la revolución y la guerra civil, cualquier término simple aplicado a cualquiera de ambos bandos puede ser fácilmente objetado. <<

[247] *New York Times*, 17 de septiembre de 1936. <<

[248] Mis principales fuentes de información sobre la revolución en Cataluña, Levante y Castilla fueron: H. E. Kaminski, *Ceux de Barcelone*, París, 1937; Anton Sieberer, *Katalonien gegen Kastilien*, Viena, 1936; Franz Borkenau, *The Spanish Cockpit*, Londres, 1937, y José Peirats, *La CNT en la revolución española*, 3 volúmenes, Toulouse, 1951-1952. Asimismo me he basado en Rama, *op. cit.*, cap. 5; Broué y Témime, *La révolution et la guerre d'Espagne*, part. I, caps. 5 y 6; y José Martín Blázquez, *I Helped to Build an Army*, Londres, 1939. Tuve la oportunidad de hablar en Zaragoza, Barcelona y Valencia con varias personas que conocieron personalmente los experimentos sociales y el terror revolucionario. <<

[249] Solano Palacio, *La tragedia del Norte*, pp. 73-87. Hay muy poca información impresa con referencia a las zonas dominadas por los republicanos en Asturias en 1936-37, ya que dicha zona quedó aislada del resto de la zona republicana. Solano Palacio era anarquista, y he confiado en lo que él dice con respecto a las colectivizaciones, puesto que sus informes sobre las acciones militares coinciden con los de los corresponsales extranjeros y los historiadores nacionalistas. <<

[250] Joaquín Costa, en su obra monumental *Colectivismo agrario*, reavivó el interés de los españoles a finales del siglo XIX hacia las variadas tradiciones colectivistas de la Península. J. Langdon-Davies, *Behind the Spanish Barricades*, Londres, 1936, describe las colectividades de los pescadores catalanes. Yo he analizado la relación de estas tradiciones de origen medieval con la revolución de 1936 en mi artículo: «The Origins of Spanish Anarchism», *The Southwestern Social Science Quarterly*, septiembre de 1955, pp. 135-147. <<

[251] Gerald Brenan, *The Spanish Labyrinth*, Cambridge, 1943, p. 275; y *Claridad*, 13 de julio, 17 de agosto y 14 de septiembre de 1935, así como 7 de abril de 1936. <<

[252] Kaminski, *op. cit.*, pp. 68-74, para la entrevista con Federica Montseny. <<

[253] Borkenau, *op. cit.*, pp. 125 y ss. <<

[254] Toynbee, *Survey*, 1937, II, pp. 86-87. <<

[255] G. L. Steer, *The Tree of Gernika*, p. 139. Javier Ybarra y Bergé, *Mi diario de la guerra de España*, Bilbao, 1941, pp. 31-48. <<

[256] A. Montero, *La persecución religiosa*, pp. 762-764 para cifras detalladas. <<

[257] Jesús de Galíndez, *Los vascos en el Madrid sitiado*, Buenos Aires, 1945, pp. 58, 87 y passim. Este libro es la mejor fuente de información acerca de «paseos», prisiones, justicia y la actuación

(buena y mala) de los comités revolucionarios de Madrid. Con referencia a la elogiable y valerosa labor del tribunal popular de Valencia, véase *The Times*, Londres, 15 de octubre de 1936. <<

[258] *Red Terror in Madrid*, Londres, 1957, es un relato circunstancial anónimo de un refugiado que huyó de la ciudad, y describe en las pp. 59-61 la liberación de un canónigo de la catedral de Madrid y el fusilamiento de la persona que lo denunció falsamente. Oí historias similares tanto en Barcelona como en Madrid, de personas de ideas sociales y políticas conservadoras. <<

[259] Con referencia a la rendición de la iglesia de los carmelitas, véase Megan Laird, «A Diary of Revolution», *The Atlantic Monthly*, noviembre de 1936, pp. 513-533. <<

[260] Brenan, *Spanish Labyrinth*, p. 49. <<

[261] Mis relatos sobre el cardenal Vidal i Barraquer y el profesor García Morente están basados en entrevistas que tuve con personas muy relacionadas con ambos, de ideas políticas conservadoras. <<

[262] Borkenau, *op. cit.*, pp. 97-98, habla de las ejecuciones en las zonas rurales de Aragón organizadas por la columna de Durruti; pero en una conversación aparte que tuve con dos terratenientes monárquicos, uno de ellos profesor universitario y el otro abogado, escuché una enérgica defensa de la activa oposición de Durruti a los asesinatos. <<

[263] Alfredo Kindelán, *Mis cuadernos de guerra*, Madrid, 1945, pp. 47-59. Kindelán era un general monárquico que organizó las fuerzas aéreas españolas bajo Alfonso XIII y que dirigió la aviación nacionalista durante la guerra civil. Con respecto al modo como Franco asumió el título de «jefe del Estado», me he basado en Joaquín Satrústegui, discurso en el hotel Menfis, 29 de enero de 1959. Satrústegui es uno de los principales dirigentes de la oposición monárquica, y copias de su discurso en mimeógrafo circularon abundantemente. <<

[264] Con referencia a Sevilla, he dependido en gran parte de Antonio Bahamonde, *Memoirs of a Spanish Nationalist*, Londres, 1939; Julio de Ramón-Laca, *Cómo fue gobernada Andalucía*, Sevilla, 1939, y fragmentos de Arthur Koestler, *Spanish Testament*, Londres, 1937. Bahamonde sirvió en el equipo de propaganda de Queipo, y escribía como refugiado. El libro de Ramón-Laca es un relato semioficial escrito por un ardiente admirador del general. <<

[265] Lo que conozco sobre la actitud de Unamuno procede principalmente de amigos suyos que aún viven en Salamanca, con detalles suplementarios basados en el artículo de Luis Portillo en *Golden Horizon*, Londres, 1953. <<

[266] De un reportaje de Anita Brenner en el *New York Times Magazine*, 8 de octubre de 1933. La interpretación general de su conducta política es mía, basada en el *Diario de las Cortes de 1931-33*. <<

[267] Mis principales fuentes impresas sobre Castilla y Galicia fueron, respectivamente, Antonio Ruiz Vilaplana, *Burgos Justice*, Nueva York, 1938, y *Lo que han hecho en Galicia*, París, 1938, libros ambos ya citados en el cap. 13. Con referencia a las purgas en Sevilla, Salamanca, Valladolid y Galicia, sin embargo, mis notas tomadas de lecturas fueron menos importantes que el testimonio oral de unas quince personas que vivieron los primeros meses de la guerra civil en aquellas provincias. <<

[268] Iturralde, *El catolicismo y la cruzada de Franco*, vol. II, I parte, cap. 8; y Marino Ayerra Redín, *No me avergoncé del Evangelio*, Buenos Aires, 1959. Esta obra, escrita por el anterior cura párroco de Alsasua, apareció primero en 1956 con el título *Desde mi parroquia*. Igualmente Iñaki de Aberrigoyen, *7 mois el 7 jours dans l'Espagne de Franco*, París, 1938, pp. 120-126, diario de un sacerdote nacionalista vasco. <<

[269] Georges Bernanos, *Les grands cimetières sous la lune*, París, 1938, pp. 138-140, para el incidente de Porto Cristo; *passim* para otros detalles sobre la represión en Mallorca. <<

[270] Ayerra Redín, pp. 89-90. Véase apéndice D, para el esfuerzo de evaluar el número total de muertes por todas las causas en la guerra civil. <<

[271] Ayerra Redín, *op. cit.*, pp. 138-139. <<

[272] Véase el artículo anónimo publicado en *Living Age*, octubre de 1936, escrito por un joven inglés que pasó unos meses de aventuras en Valencia con terroristas de extrema derecha, recorriendo las calles en autos de la CNT y la UGT. <<

[273] *Documents on Germán Foreign Policy*, 1918-1945, series D, vol. III, «Alemania y la guerra civil española», Washington, 1950, p. 53. En notas sucesivas se hace referencia a ellos como DGFP. <<

[274] *Foreign Policy Reports* (publicados por Foreign Policy Association, Nueva York), número de 1 de diciembre de 1936, e «Hispanicus», *Foreign Intervention in Spain*, vol. I, Londres, 1937, pp. 200 y ss., y *passim* para la llegada de los envíos alemanes e italianos. El Foreign Policy Report está basado ampliamente en el *New York Times*, y el volumen de «Hispanicus» consiste ampliamente en extractos de los principales diarios británicos. Vale la pena hacer notar que la prensa de habla inglesa de la época informó de la ayuda de las potencias del Eje cuando ésta fue confirmada por la publicación de los DGFP y del diario del conde Ciano. <<

[275] Oloff de Wet, *Cardboard Crucifix*, Londres, 1933, passim. El autor era un piloto mercenario, que tripuló los viejos aparatos franceses Potez para los republicanos en septiembre y octubre de 1936. Su libro contiene muchos detalles interesantes de la actuación de los aviones insurgentes y republicanos durante aquellos meses. <<

[276] Louis Fischer, *Men and Politics*, Nueva York, 1941, pp. 372-377. Martín Blázquez, *I Helped to Build an Army*, pp. 214-215. <<

[277] Toynbee, *Survey*, 1937, II, pp. 246-252, para las primeras reuniones del comité de No-intervención. En éste, así como en los siguientes capítulos, mis fuentes principales sobre el comité son el *Survey*; P. A. M. Van der Esch, *Prelude to War*, La Haya, 1951, y los siguientes artículos: N. J. Padelford, «The International Non-Intervention Agreement and the Spanish Civil War», *American Journal of International Law*, octubre, 1937; y N. J. Padelford y H. G. Seymour, «Some International Problems of the Spanish Civil War», *The Political Science Quarterly*, septiembre, 1937. <<

[278] Estas cifras han sido tomadas de R. G. Colodny, *The Struggle for Madrid*, p. 161, que a su vez se basa en los informes del *New York Times* sobre la llegada de armamento ruso a los puertos españoles. En 1960 pude sostener en Madrid dos conversaciones muy detalladas con funcionarios del Archivo militar con referencia a la intervención rusa y germano-italiana, los cuales insistieron mucho en que todas las estimaciones internacionales eran incorrectas, ya que la intervención rusa era mucho más importante de lo que se decía y la intervención germano italiana mucho menor. Aseguraron que buena parte del material que había en los archivos podían apoyar sus afirmaciones. Sin embargo, en el transcurso de diez meses no pude conseguir permiso para ver tal material, y puesto que mis interlocutores no contradijeron específicamente las fuentes en que he basado mi obra, confío razonablemente en las estimaciones que ofrezco. <<

[279] David T. Cattell, *Soviet Diplomacy and the Spanish Civil War*, Berlceley, 1957, p. 46. <<

[280] Ha habido muchas discusiones sobre la transferencia del oro. Creo que la más ilustrativa es la que hubo entre Luis Ara-

quistáin e Indalecio Prieto. Comenzó por un artículo de Araquistáin publicado en *Cuadernos del Congreso por la Libertad de la Cultura*, marzo, 1958, que Prieto comentó en *El Socialista* el 13 de noviembre de 1958; Araquistáin replicó en el mismo diario el 27 de noviembre; y Prieto hizo un nuevo comentario el 18 de diciembre. He adoptado lo esencial del punto de vista de Araquistáin de que Azaña y Prieto no pudieron desconocer del todo los planes de Largo Caballero y Negrín. Por otra parte, acepto la afirmación de Prieto de que la República no podía, como alega Araquistáin, depositar ese oro en Suiza. Dada la actitud de los diversos gobiernos y grupos financieros en octubre de 1936, el Gobierno republicano no podía contar con más potencias extranjeras que México y Rusia, eso suponiendo que el oro tenía que salir de España. <<

[281] Louis Fischer, *Mett and Politics*, p, 383, para el incidente de las fotografías. La fascinante cuestión de las identidades es discutida por Fischer, por Walter G. Krivitsky, *In Stalin's Secret Service*, Nueva York, 1939, y por varios otros. La contradictoria información es resumida por Colodny, pp. 162-165, con referencia al general comúnmente conocido por Goriev (posiblemente el general Berzin); y pp. 179-180 para Emil Kleber, que Colodny cree que era el general Gregory Stern, del ejército rojo. Tuve la oportunidad de discutir la identificación de este último con dos antiguos oficiales republicanos que conocieron bien a Kleber. Uno de ellos vio que a éste lo trataban con indiferencia en el cuartel general, y el otro estuvo presente cuando los proyectiles disparados por orden de Kleber no estallaron. Ninguno de los dos creyó, ni por un momento, que fuera un general del ejército rojo. Parece haber quedado bien establecido que los mariscales Koniev y Malinovski estuvieron en España y es muy probable que también el propio mariscal Zukov. El problema de la identificación se presenta no sólo por la propensión de los rusos al secreto, sino por el hecho de que muchos de los oficiales que lu-

charon en España fueron fusilados en las purgas, y que luego todas las biografías oficiales quedaron afectadas por los ascensos o las caídas en desgracia. Probablemente jamás sabremos toda la verdad. Pero, sin embargo, el punto importante, y que está claro, es que muchos oficiales rusos de alta graduación estuvieron en España durante la guerra civil, y que fueron altos consejeros de la mayor capacidad. <<

[282] Las cifras de bajas de las incursiones aéreas de octubre y noviembre varían mucho. Mi «menos de cincuenta» se basa en los informes de la guardia municipal de Madrid, referentes al período de 20 de octubre a 20 de noviembre, que tuve ocasión de examinar. Es muy probable que las cifras de la guardia municipal fueran incompletas. Por otra parte, el número de aviones y el peso de las bombas no podían causar muchas bajas, con la excepción de las incursiones masivas de 17 y 18 de noviembre. <<

[283] Antonio López Fernández, *Defensa de Madrid*, México, 1945, pp. 135 y ss. Este libro es una biografía de Miaja en tono lisonjero escrita por su antiguo ayudante de campo. Sin embargo, es muy positivo y es un buen correctivo al exagerado énfasis que la mayoría de los libros franceses e ingleses dan al papel de las brigadas internacionales. <<

[284] Para información militar y logística sobre el asalto a Madrid, y también en páginas posteriores sobre las batallas del Jarama y Guadalajara, he dependido principalmente del excelente estudio de Robert G. Colodny, *The Struggle for Madrid*. Es un material positivo, aunque no su interpretación, siempre comprobada en muchas otras fuentes de información. <<

[285] John T. Whitaker, «Prelude to War. A Witness from Spain», *Foreign Affairs*, octubre de 1942, p. 115. Whitaker acompañó a los moros hasta las orillas del Manzanares, esperando ser el primer corresponsal que entrara en la ciudad con las tropas de Franco. La batería en el Retiro era popularmente conocida como

«el abuelo» y sus disparos como «tosidos». Galíndez, Los vascos, p. 64. Su presencia fue una de las justificaciones de los nacionalistas para su bombardeo de las cercanías del Prado en noviembre. <<

[286] Los historiadores nacionalistas han exagerado el papel de los rusos y las brigadas internacionales en Madrid, en un esfuerzo por explicar, desde su punto de vista, el fracaso de Varela en tomar la ciudad. Los corresponsales extranjeros y los veteranos de las brigadas contribuyeron luego inadvertidamente a esta exageración, porque sus propias emociones y sus intereses políticos estaban unidos a los internacionales. No pretendo ser un historiador militar, y no puedo hacer listas de nombres sin perjudicar a muchos hombres que todavía viven en España. Pero estoy convencido, por la geografía del frente a Madrid (del cual los internacionales mantuvieron una parte muy exigua, aunque vital) y por el número de entrevistas con oficiales republicanos, que unos 30 o 50 profesionales, mandando 40.000 milicianos mal armados, jugaron un papel absolutamente crucial en la batalla de diez días, que detuvo el ejército nacionalista a las puertas de la capital. No eran la clase de hombres que pudieran buscar publicidad en aquel tiempo, y las circunstancias han hecho que el silencio fuera aconsejable desde entonces. <<

[287] La naturaleza del incidente es bien conocida gracias a muchas fuentes informativas; pero la estimación del número de víctimas varía grandemente. He aceptado, como más aproximado, la cifra de 1020 dada por Jesús de Galíndez en *Los vascos en el Madrid sitiado*, p. 66. <<

[288] Ludwig Renn, *Der Spanische Krieg*, Berlín, 1956, pp. 70-72 y *passim* para observaciones sobre el estado del entrenamiento, la moral y la eficiencia de las diversas milicias. Renn, cuyo verdadero nombre era Arnold Friedrich Vieth von Golssenau, era un comunista de origen aristocrático. Fue capitán en el ejército imperial alemán durante la primera guerra mundial, y

juzgó a las tropas españolas e internacionales con criterio profesional. De todas las memorias de miembros de las brigadas internacionales, ésta es la más competente, como comentario de los acontecimientos vividos. <<

[289] Kaminski, *Ceux de Barcelone*, pp. 60-65. Los oradores en el entierro fueron García Oliver, que dos semanas antes se había convertido en el primer anarquista en formar parte del Gobierno, como ministro de Justicia de Largo Caballero; Vladimir A. Antonov-Ovseenko, «viejo bolchevique», cónsul en Barcelona, que luego habría de ser fusilado en las purgas soviéticas durante 1937, y Luis Companys, que habría de ser entregado al Gobierno de Franco por la Gestapo y fusilado en 1940. <<

[290] La cifra de 100.000 soldados italianos transportados procede del periódico naval italiano Forze Ármate. Ha sido citada en muchos relatos y puede que sea la base en que se apoya la pretensión de que 100.000 italianos o más prestaron servicio en España. Dado que el artículo fue publicado en junio de 1939, he dado por supuesto que el autor no se sentía inclinado a minimizar la contribución italiana. Al mismo tiempo, ya es sabido que Mussolini envió 4 divisiones completas con sus equipos y servicios de transportes, así como otras fuerzas auxiliares. Las 4 divisiones ascenderían a unos 60.000 hombres, y considerando esto, y teniendo en cuenta además a los aviadores, tanquistas y personal técnico, yo diría que fueron «unos 70.000». Supongo que el resto hasta los 100.000 serían moros, porque por un lado *Forze* no quiere decir que todas las tropas fueran italianas y por otra parte varios oficiales de la Legión me dijeron que habían hecho un intenso reclutamiento en África del Norte después de la detención del avance ante Madrid. <<

[291] Beumelberg, *Kampf um Spanien*, p. 56. Así como las declaraciones del general Jaenecke, que fue jefe del Estado Mayor de Hitler para las operaciones en España, citado en la obra de Colodny, *The Struggle for Madrid*, pp. 166-167. <<

[292] Eoin O'Duffy, *Crusade in Spain*, Clanskeagh, 1938, p. 155 para su número, y *passim* para su papel militar en el frente del Jarama. <<

[293] Ésta era la estimación del general Monasterio, entonces encargado de todas las milicias nacionalistas, y que me fue citada por un oficial falangista que colaboró con el general. <<

[294] E. Allison Peers, *Spain in Eclipse*, Londres, 1943, pp. 101-106. <<

[295] Douglas Jerrold, en *Nineteenth Century*, abril de 1937, publicaba un detallado artículo sobre los propósitos civiles y los logros del régimen nacionalista a principios de 1937. Véase también el manual oficial de la Sección Femenina de la *Falange*, para información sobre comedores y hospitales. <<

[296] DGFP, pp. 124, 137-139, 155-156, 236 y *passim*. <<

[297] Una gran variedad de fuentes informativas, tanto republicanas como nacionalistas, eleva el número total de los internacionales a 30-40..000 durante la guerra. Hay mucho desacuerdo sobre el número en acción en un momento dado y el significado de su contribución. Yo he seguido el análisis de su composición que dio Colodny. Había 5 brigadas, numeradas de la 11 a la 15 (una de las causas de la confusión sobre su número total) con fuerzas efectivas en el campo de batalla de 2 a 3000 hombres cada una. Empleadas como fuerzas de choque o para defender posiciones clave, naturalmente sufrieron muchas bajas. Así que es razonable suponer unos 40.000 extranjeros, la mayoría de ellos voluntarios por una causa, y los otros mercenarios, que lucharon en 5 brigadas cuya fuerza variaba entre 10-15..000 hombres. De la enorme literatura que hay de las brigadas en forma de memorias, hallé especialmente útiles las siguientes: Tom Wintringham, *English Captain*, Londres, 1939, para información sobre el entrenamiento y la política interna de las brigadas, y su papel en el Jarama; John Sommerfield, *Volunteer in Spain*, Londres, 1937,

obra de un romántico comunista inglés que luchó en noviembre en Madrid; Alvah Bessie, *Men in Battle*, Nueva York, 1939, concerniente a la desastrosa retirada a principios de 1938 y la batalla del Ebro; Pietro Nenni, *La Guerre d'Espagne*, París, 1960 (publicada primero en 1958 en Italia con el título de *Spagna*) para la experiencia e interpretación de un exilado antifascista no comunista, políticamente muy activo. <<

[298] Alvah Bessie, *Men in Battle*, p. 181. <<

[299] Muchos escritores han tratado de estimar la proporción de miembros del Partido Comunista en las brigadas. En su introducción a la tan leída novela de Gustav Regler, referente a la defensa de Madrid, *The Great Crusade*, Nueva York, 1940, Ernest Hemingway escribió que la mayoría de los hombres de la 11 brigada eran comunistas (casi todos alemanes), y que en la 12 «algunos eran comunistas, pero que había hombres de todas las creencias políticas». El secreto que guardaba el partido sobre sus miembros y el hecho de que en ciertas circunstancias el partido prefería que ciertas personas no fueran miembros de él, hace imposible el dar cifras exactas. En todo caso, lo más importante es el hecho de que la gran mayoría de los internacionales, y de los componentes de la JSU, actuaron como «compañeros de viaje», por sus razones propias. Vieron a los comunistas como los más eficaces organizadores de la resistencia antifascista en Europa. Cuando en agosto de 1939 se firmó el pacto Hitler-Stalin, los «compañeros de viaje» se apearon del tren; pero eso fue cinco meses después del fin de la guerra civil. <<

[300] Krivitsky, *In Stalin's Secret Service*, p. 91 y *passim*. <<

[301] Por España han circulado historias muy embrolladas con respecto a los esfuerzos para rescatar a José Antonio. Yo era escéptico hasta que me contó lo anterior un profesional evidentemente desengañado, que fue uno de los participantes. <<

[302] Payne, *Falange*, pp. 132 y ss. Para la evolución hacia la izquierda del pensamiento de José Antonio, compárese el Gobierno que propuso en 1935 (Payne, p. 110) con el Gobierno citado en su testamento (Payne, p. 111). <<

[303] Burnett Bolloten, *The Grand Camouflage*, Londres, 1961, p. 227, Martín Blázquez, *I Helped to Build an Army*, pp. 316 y ss. Francisco Largo Caballero, *Mis recuerdos*, México, 1954, pp. 182 y ss. También conversaciones con Manuel de Irujo, en París, 1961. <<

[304] Sobre las contiendas de junio véase *El Sol*, 12 de junio de 1936. Sobre el terror en Málaga, véase el *New York Times*, 26-27 de julio y 19 de septiembre de 1936, y el *ABC* de Sevilla, 3 y 5 de marzo de 1937. Concerniente a las condiciones generales de la defensa de Málaga, véase la obra de Koestler antes citada, *Spanish Testament*, pp. 186-199, y Borkenau, *The Spanish Cockpit*, pp. 216-228. <<

[305] Hay grandes divergencias en la estimación del número y composición de las fuerzas que tomaron Málaga. Reynolds Packard en *Balcony Empire* habla de 40.000 soldados, la mitad de los cuales, al menos, eran italianos. Rechazo esto porque unas fuerzas tan numerosas para un objetivo tan pequeño, cuando las fuerzas nacionalistas estaban concentradas al máximo cerca de Madrid, no tiene sentido. El general Kindelán en sus *Cuadernos* habla de 25.000, dos tercios de los cuales eran españoles. Yo dudo de esto por varias razones. En primer lugar, los escritos de Kindelán son muy valiosos por su perspicacia cualitativa en lo referente a estrategia y equipo, pero siempre trató de quitar importancia a la ayuda prestada a los nacionalistas por los alemanes e italianos. Su declaración también significaría que Franco tenía 16.000 soldados españoles sobrantes para destinar a la campaña de Málaga tras el terrible desgaste de la batalla de Madrid, y mientras estaba preparando una ofensiva más importante en el frente del Jarama. Por otra parte, una posible explicación en lo

referente a las cifras, que ya he citado en el texto, es que, Kindelán, como muchos oficiales españoles, podía incluir a los moros dentro del término «españoles», dado que desde luego los moros formaban una gran parte del ejército de África. Las cifras que he empleado son las de R. Sencourt, *Spain's Ordeal*, Nueva York, 1940, p. 227, obra de un corresponsal británico que simpatizaba con los monárquicos y que conocía de tiempo a España. A mí me parecen las más congruentes con las necesidades logísticas de la campaña y con el tipo de tropas de que habría dispuesto el general Queipo de Llano. Por otra parte, no hay duda de que los italianos pudieron haber contribuido con más de 5000 hombres. El embajador Von Faupel, en un despacho del 18 de enero de 1937, se refería a los 20.000 italianos ya listos para la acción en las cercanías de Sevilla (DGFP, p. 229). Así que no hay certeza numérica, y doy esta detallada nota para ilustrar la clase de adivinanzas repetidamente necesarias al tratar de juzgar las estadísticas militares. <<

[306] Foltz, *Masquerade in Spain*, pp. 77-78. <<

[307] Roberto Cantalupo, *Fu la Spagna*, Milán, 1948, pp. 131-137. <<

[308] Sobre la actuación de los aviones rusos en el Jarama y Guadalajara, hay muchos detalles interesantes en un artículo de Eugene Finick titulado, «I fly for Spain», *Harper's*, enero de 1938. Los relatos que yo hago de ambas batallas han sido tomados en su conjunto de Colodny y de *English Captain*, Londres, 1939, de Tom Wintringham. <<

[309] Colodny, *Struggle for Madrid*, pp. 129-130 y *passim*. <<

[310] Luigi Longo, *Die Internationalen Brigaden in Spanien*, Berlín, 1958, pp. 220 y ss., Renn, *Der Spanische Krieg*, pp. 201-240, valioso no solamente por el papel de las brigadas internacionales, sino por los comentarios sobre táctica militar y los dibujos de mapa. <<

[311] El episodio de los altavoces y su crucial significado para los antifascistas extranjeros, tanto comunistas como no comunistas, está magníficamente evocado en forma de ficción por Gustav Regler, *The Great Crusade*, pp. 374-378, y en su autobiografía, *The Owl of Minerva*, Nueva York, 1960, pp. 283-312 y *passim*. <<

[312] *The Italia Invasión of Spain*, Washington, 1937. El Gobierno de Madrid publicó asimismo ediciones en francés y español que fueron ampliamente distribuidas en todas las capitales del mundo. <<

[313] Anthony Eden, *Facing the Dictators*, vol. 2 de *Memoirs of Anthony Eden*, Boston, 1962, pp. 464-465, 487-490. <<

[314] Además de las obras anteriormente citadas de Toynbee, Survey, y de Van der Esch, *Prelude to War*, la diplomacia de las grandes potencias es analizada con detalle por David T. Cattell en *Soviet Diplomacy and the Spanish Civil War*, Berkeley, 1957, y Dante Puzzo, *Spain and the Great Powers*, 1936-1941, Nueva York, 1960. <<

[315] F. Jay Taylor, *The United States and the Spanish Civil War*, pp. 76-89, 133 <<

[316] Son varias las versiones sobre la salida de Serrano Súñer: A. de Lizarra dice que el ministro Irujo apoyó su salida de la cárcel como enfermo, en lo que coinciden Broué y Témime agregando que logró refugiarse en una legación y el embajador argentino le ayudó a embarcar en el vapor Tucumán con destino a Marsella; Hugh Thomas afirma que fue por gestión del doctor Marañón como lo llevaron a un sanatorio; Junod, delegado de la Cruz Roja, declara que él le ayudó a escapar de Madrid, y Largo Caballero, en su libro *Mis recuerdos*, p. 208, escribe que «se hizo el canje del señor Serrano Súñer». (N. del E.). <<

[317] Foltz, *Masquerade*, p. 83. <<

[318] Ramón Serrano Súñer, *Entre Hendaya y Gibraltar*, Madrid, 1947, pp. 23-29 y *passim*. Serrano da a entender claramente que

las ideas eran suyas, y que moldeó el pensamiento de su cuñado. Puede que él, como otras muchas personas, subestimara la capacidad de Franco para pensar por sí mismo. <<

[319] Payne, *Falange*, pp. 164-166. <<

[320] Cantalupo, *Fu la Spagna*, pp. 230-234. <<

[321] Broué y Términe, *La révolution et la guerre d'Espagne*, pp. 208 y ss. <<

[322] Prieto en *El Socialista*, Toulouse, 18 de diciembre de 1958 <<

[323] Largo Caballero, *Mis recuerdos*, pp. 224-226. <<

[324] Burnett Bolloten, *The Grand Camouflage*, pp. 226 y ss. En todo el presente capítulo me he basado ampliamente en este estudio cuidadosamente documentado del Partido Comunista en 1936-1937. No tiene rival por su análisis de la prensa de tiempo de guerra, de la que Bolloten, que era un corresponsal de la UP en España, formó una gran colección. J. Pérez Salas, *Guerra en España, passim*, contiene mucho material valioso sobre los nombramientos del Estado Mayor del ejército, en relación con la pugna de los comunistas contra los anticomunistas y de las rivalidades entre los militares de carrera y las milicias. <<

[325] Para el clímax del asunto Asensio, Largo Caballero, *Mis recuerdos*, p. 193; Julio Álvarez del Vayo, *Freedom's Battle*, Nueva York, 1940, p. 126. Los Recuerdos consisten en cartas escritas por Largo Caballero al final de la segunda guerra mundial, sin acceso a documentos. Su extremada amargura, y su dependencia de la memoria, limitan su utilidad cuando habla de las reacciones de otras personas. Sin embargo, ofrecen un punto de vista propio honesto y revelador, y en el caso presente el relato de Álvarez del Vayo concuerda con el de Largo Caballero excepto en los motivos. <<

[326] Martín Blázquez, *op. cit.*, pp. 319-321, considera a Cerón el mejor nombramiento profesional que Largo Caballero podía

hacer dadas las circunstancias. <<

[327] Broué y Témime, *op. cit.*, pp. 249-250. <<

[328] A. Núñez Morgado, *Los sucesos de España vistos por un diplomático*, pp. 285-288, y Galíndez, *Los vascos, passim*, con referencia a Melchor Rodríguez. El delegado de prisiones de la CNT se hizo legendario entre los presos políticos de Madrid, como tuve ocasión de enterarme gracias a varias personas que me preguntaron qué le había ocurrido después de la guerra. <<

[329] Largo Caballero, *op. cit.*, pp. 223-224. <<

[330] Además del libro de Bolloten anteriormente citado, véase el artículo de Lawrence Fernsworth en *Foreign Affairs*, julio, 1937, pp. 666 y ss., para la «Columna de Hierro» y otros detalles sobre la reafirmación del poder político del Gobierno. <<

[331] Broué y Témime, *op. cit.*, pp. 258-266, ofrece el mejor relato breve de los sucesos de Barcelona. Pietro Nenni, *La guerre d'Espagne*, pp. 75, 177, cita un cierto número de víctimas antiestalinistas de nacionalidad española, italiana y rusa. Nenni, en conjunto, se muestra amistoso hacia los comunistas, aunque no deja de hacerles críticas. George Orwell, *Homage to Catalonia*, Londres, 1938, da un cuadro vivo, de simpatizante, de la situación tal como era vista por las milicias del POUM; pero el lector ha de tener en cuenta, sobre las honestas afirmaciones de Orwell, que él conocía muy poco las complejidades políticas de la pugna. <<

[332] Largo Caballero, *op. cit.*, pp. 218 y ss. <<

[333] Luis Araquistáin, en *El comunismo y la guerra de España*, Carmaux, Tarn (Francia), 1939, dice que Largo Caballero estuvo preparando la ofensiva de Extremadura «durante meses», y el coronel Segismundo Casado en *The Last Days of Madrid*, Londres, 1939, pp. 71-74, relata cómo los rusos sabotearon dichos planes y la resistencia de Miaja a la idea de trasladar tropas desde Madrid. En una larga conversación sobre el Gobierno de Largo Ca-

ballero, Rodolfo Llopis, que fue su secretario de Gabinete, dio énfasis ante mí a la importancia del plan de una ofensiva en Extremadura, y Julio Just, el republicano de izquierda que fue ministro de Obras Públicas en el Gobierno de Largo Caballero, me dijo que había preparado docenas de puentes portátiles y enviado a Ciudad Real numerosos trenes con suministros. Por otra parte Prieto me dijo lisa y llanamente que al hacerse cargo del Ministerio de Defensa el 17 de mayo no halló en absoluto disposiciones prácticas para una ofensiva en Extremadura, y esta afirmación fue confirmada por un oficial general que ahora vive en España. Así que la evidencia concerniente a la importancia práctica de este asunto es contradictoria, pero su importancia política está clara: la alineación de aquéllos que seguían las directrices rusas contra los que seguían las órdenes de Largo Caballero como jefe del Gobierno y ministro de la Guerra. <<

[334] El modo como los comunistas contribuyeron primero a ensalzar la figura de Largo Caballero y luego a minar su reputación puede ser seguido vívidamente en la autobiografía de Jesús Hernández, publicada simultáneamente como *La grande trahison*, París, 1953, y *Yo fui ministro de Stalin*, México, D. F., 1953. Varios escritores de este período se han basado principalmente en Hernández para describir la caída de Largo Caballero. Yo he preferido no confiar en él para datos específicos por varias razones. Hernández, como joven comunista, tomó parte en un intento fracasado para asesinar a Prieto. En 1936-38 fue sucesivamente encargado de destruir la reputación de Asensio, luego la de Largo Caballero, y, finalmente, la de Prieto. Después de la guerra fue expulsado del Partido Comunista español. Sus colegas de Gabinete, Prieto y Manuel de Irujo, con los cuales discutí ciertos puntos de este libro, eran de la opinión de que estaba tratando de decir la verdad. Por lo tanto, utilicé su obra tan sólo para corroborar otras fuentes. El lector debe estar asimismo advertido de una edición española expurgada, mucho más sensacionalista en

su tono que la genuina, publicada con el título de *Yo, ministro de Stalin en España*. <<

[335] Juan de Iturralde, *El catolicismo y la cruzada de Franco*, II, pp. 279-289. <<

[336] *Ibídem*, II, pp. 300-303. <<

[337] Carta del padre Luis Ramírez, enviada desde Vitoria a un sacerdote amigo suyo en Bélgica, 17 de octubre de 1936, citada en la obra de Iturralde, II, pp. 439-440. <<

[338] *Ibid.*, pp. 425-428, para el fusilamiento de sacerdotes vascos. Sobre la situación del clero nacionalista vasco, véase también Iñaki de Aberrigoyen, *7 mois el 7 jours dans l'Espagne de Franco*, obra de un sacerdote, miembro de la organización laboral católica Solidaridad de Obreros Vascos. <<

[339] Con referencia al armamento y la política del Gobierno vasco, he dependido principalmente de G. L. Steer, *The Tree of Gernika*. Para más información sobre los aspectos navales, del *Surtey of International Affairs*, 1937, II, y de Hugh Thomas, *The Spanish Civil War*, pp. 407-411. <<

[340] Hellmut H. Führing, *Wir funken für Franco*, Breslau, 1941, pp. 171-187 y *passim*. También Reynolds y Eleanor Packard, *Balcony Empire*, pp. 52-56. <<

[341] Víctor Montserrat, *Le drame d'un peuple incompris*, París, 1937, pp. 70-75 para el relato de Onaindía; Steer, *Tree of Gernika*, pp. 246-250 para la evidencia corroboradora de otros periodistas que visitaron la ciudad después de la declaración nacionalista de que los «rojos» la habían incendiado. <<

[342] Steer, *op. cit.*, pp. 278-281. J. Zugazagoitia, *Historia de la guerra en España*, pp. 254 y passim. <<

[343] Iturralde, II, pp. 425-426. <<

[344] Sobre el fracaso de la defensa de Bilbao véase en particular el artículo del Wing Commander A. W. H. James en *The Journal*

of the United Service Institute de febrero de 1939, así como las observaciones del corresponsal de guerra suizo Eddy Bauer, *Rouge et Or*, Neuchâtel, 1938, pp. 71-72. <<

[345] F. Jay Taylor, *The United States and the Spanish Civil War*, Nueva York, 1956. El capítulo 7 trata en detalle la actitud de los católicos de los Estados Unidos hacia la guerra. Véase también el editorial de *Commonweal*, 18 de junio de 1937. <<

[346] Citado por Iturralde, I, p. 429 <<

[347] Iturralde, I, pp. 403-406. El cardenal Gomá salió de Toledo poco antes del estallido de la guerra civil. Sus papeles y correspondencia fueron finalmente recuperados por los vascos. Estos papeles son la principal fuente documental del primer volumen de Iturralde. <<

[348] Iturralde, II, pp. 264-266, para la alocución por radio; para las pastorales véase *Pastorales de la guerra de España*, Madrid, 1955, del cardenal Isidro Gomá y Tomás. <<

[349] Aunque Santander era principalmente un objetivo italiano, los pilotos alemanes también ayudaron. Uno de los más vívidos testimonios de la acción aérea en las montañas es el del comandante Handrick en la edición de Wulf Bley, *Das Buch der Spanienflieger*, Leipzig, 1939, pp. 146 y siguientes. <<

[350] R. Cantalupo, *Fu la Spagna*, pp. 226 y *passim*. Steer, *Tree of Gernika*, pp. 386-394. <<

[351] Para muchos detalles de la guerra en el Norte me basé en los relatos de dos excelentes corresponsales que acompañaban a las fuerzas nacionalistas: Georges Oudard, *Chemises noires, brunes, vertes en Espagne*, París, 1938 y O. Treyvaud, *Les deux Espagnes*, Lausanne, 1937; también en las memorias muy humanas y no ideológicas de un joven médico argentino que sirvió en el ejército nacionalista en el Norte en 1936-37: Héctor Colmegna, *Diario de un médico argentino en la guerra de España*, Buenos Aires,

1941; y sobre el positivo relato militar de un periodista italiano: Emilio Faldella, *Venti mesi di guerra in Spagna*, Florencia, 1939 <<

[352] Arthur Rosenblueth, en *Cuadernos Americanos*, marzo de 1957, concerniente a la carrera de Negrín. <<

[353] *Buch der Spanienflieger*, pp. 94-105. <<

[354] Con respecto a las batallas de Brunete y de Teruel, he dependido principalmente de Manuel Aznar, *Historia militar de la guerra de España*, Madrid, 1940, y de Vicente Rojo, *España heroica*, Buenos Aires, 1942. La comparación de Aznar en puntos específicos con la obra de periodistas extranjeros y con los DGFP indica que exageró mucho el número y el equipo de los republicanos para ensalzar la valía del ejército nacionalista. Así que no he aceptado las cifras no verificadas cuando escribe, por ejemplo, que los republicanos tenían 128 tanques y 150 aviones en Brunete, que sufrieron más de 25.000 bajas (más de la mitad de la fuerza atacante), etc. Rojo expone las tácticas y la naturaleza de la lucha sin tratar de especificar mucho los números. Con respecto al curso de las batallas, los dos relatos son bastante coincidentes entre sí. También son muy valiosas, por sus observaciones técnicas y la claridad de detalles, las páginas sobre Brunete en la obra de Renn, *Der Spanische Krieg*, pp. 299-318. <<

[355] Por casualidad, mis conversaciones en España incluyeron entrevistas separadas con una enfermera monárquica, una funcionaría de la Sección Femenina de la *Falange*, y un médico apolítico que trabajó en los hospitales nacionalistas durante la batalla de Brunete, así como una enfermera y un médico que actuaron en diversos hospitales de Madrid durante el mismo período. <<

[356] Herbert Matthews, *Two Wars and More to Come*, Nueva York, 1938, pp. 301-310. Rojo, *España heroica*, pp. 115-127. <<

[357] Información referente a Kleber en Aragón, procedente de uno de los oficiales de su Estado Mayor. <<

[358] Con referencia a la huelga, véase el artículo de Indalecio Prieto en *Adelante*, México, D. F., 4 de mayo de 1942; sobre la producción de guerra en Cataluña, *De Companys a Indalecio Prieto*, Buenos Aires, 1939. El texto era una carta escrita en contestación a las críticas sobre el esfuerzo catalán de guerra. Con respecto a la batalla, he utilizado, además de Aznar y Rojo, a Herbert Matthews, *The Education of a Correspondent*, Nueva York, 1946, pp. 97-117, y su despacho al *New York Times* del 8 de enero de 1938. También hay un excelente relato basado en reportajes de periódicos británicos y alemanes en el *Survey of International Affairs*, 1938, I, pp. 260-263. <<

[359] DGFP, p. 615 <<

[360] B. H. Liddell-Hart, *The German Generals Talk*, Nueva York, 1948, pp. 91-93; y en el informe basado en las observaciones militares inglesas y francesas en *The Journal of the United Service Infantry*, febrero de 1939, pp. 91-99. <<

[361] Información sobre los tribunales y prisiones tomada de Manuel de Irujo. <<

[362] *Survey of International Affairs*, 1937, II, pp. 112-113, Cattell, *Communism*, p. 169; Zugazagoitia, *Historia de la guerra en España, passim*. Los capítulos de Katharine Duff en el *Survey* sobre los años 1937 y 1938 son excelentes, especialmente en lo referente al desarrollo interno de las Españas republicana y nacionalista. Su trabajo muestra que un lector de periódicos cuidadoso, con algún conocimiento retrospectivo de España, podría apreciar las principales características y matices mientras se desarrollaba la lucha. <<

[363] Julián Gorkín, *Caníbales políticos*, México, D. F., 1941, pp. 247-250. Gorkín era un dirigente del POUM, y por su conocimiento personal de los muchos grupos izquierdistas estaba más capacitado que nadie para poder reconstituir la historia de lo ocurrido a Nin. Al mismo tiempo, la prensa socialista y trotskis-

ta mundial contó el relato más o menos como se refiere aquí. Los comunistas calificaron el relato de calumnia, y los dirigentes liberales del Frente Popular mantuvieron un embarazoso silencio. La autobiografía de Jesús Hernández, *La grande trahison (Yo fui ministro de Stalin*), confirmó la historia en detalle. <<

[364] Iliá Ehrenburg, en sus memorias publicadas en forma seriada en *Novy Mir* (mayo de 1962) y extractadas en el *Current Digest of the Soviet Press* (5 y 12 de septiembre de 1962), declara sin rodeos que virtualmente todos los rusos enviados a España murieron allí o a su regreso a la Unión Soviética. También es de interés, aunque no cite a Ehrenburg como una autoridad en materia política, que se refiriera al POUM en estas memorias como una fuerza antifascista. <<

[365] José Peirats, *La CNT en la revolución española*, Toulouse, 1951-52, II, pp. 360-364. Ésta es la historia oficial anarquista de la guerra, pobremente escrita y editada, pero conteniendo valiosos documentos. El presente testimonio de la lenidad del Gobierno viene de un autor que era violentamente antinegrinista. <<

[366] Los deseos contradictorios del Gobierno de silenciar a Largo Caballero sin ofenderlo personalmente se muestran bien a las claras en su relato de los esfuerzos que hizo para mantener su compromiso de hablar en Alicante: *Mis recuerdos*, pp. 235-238. <<

[367] Indalecio Prieto, *Cómo y por qué salí del Ministerio de Defensa Nacional*, detallada explicación del autor al Partido Socialista. <<

[368] Galeazzo Ciano, *Ciano's Hidden Díary*, Nueva York, 1953, pp. 91-92. <<

[369] H. Matthews, *Education of a Correspondent*, pp. 122-128; Virginia Cowles, artículo en el *New York Times*, 16 de marzo de 1938. <<

[370] Sobre la ofensiva de Aragón son particularmente valiosas las observaciones de un periodista suizo favorable a los nacionalistas, pero que no intentó hacer propaganda: Eddy Bauer, *Rouge et Or*, Neuchâtel, 1938. También me beneficié de conversaciones con dos oficiales nacionalistas. <<

[371] *El Epistolario*, París, 1939, de Prieto y Negrín da detalles completos de sus diferencias políticas, y muestra la extrema reserva de Negrín acerca de sus sentimientos personales. <<

[372] Zugazagoitia da cuenta de este episodio en *Historia de la guerra en España*. Esta obra es única para la historia interna de los gobiernos de Negrín y para las relaciones personales entre Azaña, Prieto y Negrín. Zugazagoitia, escribiendo rápidamente y de memoria, pero con años de experiencia como escritor y un largo conocimiento íntimo de los círculos socialistas y republicanos, logró dar un relato más equilibrado de la política de la zona republicana que muchos escritores posteriores. <<

[373] Mi juicio sobre la personalidad de Negrín y de sus diferencias con Prieto se basa principalmente en el *Epistolario*, suplementario por los puntos de vista de Negrín expresados por los periodistas Louis Fischer, Herbert Matthews y Lawrence Fernsworth, por conversaciones con el ingeniero español socialista en cuyo domicilio se hicieron varios esfuerzos después de la guerra para reconciliar a ambos hombres, y por la obra arriba citada de Julián Zugazagoitia. <<

[374] Julio de Ramón-Laca, *Cómo fue gobernada Andalucía*, Sevilla, 1939, y *ABC*, edición de Sevilla. <<

[375] J. R. Hubbard, «How Franco Financed His War», *The Journal of Modern History*, diciembre de 1935, p. 397 <<

[376] H. Feis, *The Spanish Story*, p. 281. DGFP, pp. 230, 234 y passim. <<

[377] Hubbard, *op. cit.*, pp. 398-403. También el artículo de J. Berthet, *L'Europe Nouvelle* (editado por «Pertinax»), 26 de febre-

ro de 1938. <<

[378] Hubbard, *op. cit.*, p. 404 <<

[379] El 50 por ciento estimado ha sido dado por el Royal Institute: *Survey of International Affairs*, 1938, I, pp. 292-294, sobre las condiciones económicas generales de la zona nacionalista véanse también los artículos de Harold Gallender en el *New York Times*, 2 de abril, 14 y 15 de mayo de 1938. <<

[380] Véase Javier M. de Bedoya, *Siete años de lucha*, Valladolid, 1939, para una serie de editoriales reimpresos y tomados de Libertad, el órgano de la *Falange* de Valladolid. También tuve la oportunidad de discutir la composición y los fines de la *Falange* del tiempo de la guerra con tres «camisas viejas», dos de los cuales habían sido amigos íntimos de José Antonio y el tercero discípulo de Onésimo Redondo. Véase también el antes citado Payne, *Falange*. <<

[381] Payne, *op. cit.*, pp. 179, 186-187. <<

[382] Merwin K. Hart, *America Looks at Spain*, Nueva York, 1939, pp. 103-110. <<

[383] Ramón Serrano Súñer, *Entre Hendaya y Gibraltar*, Madrid, 1947, pp. 64-65. <<

[384] Con referencia a la legislación véase E. Allison Peers, *Spain in Eclipse*, 1937-43, Londres, 1943, y Carlos M. Rama, *La crisis española del siglo XX*, México, D. F., 1960 <<

[385] Iturralde, *El catolicismo y la cruzada de Franco*, I, pp. 99-104, para el laicismo de Franco y Mola. <<

[386] Georges Bernanos, *Les grands cimetières sous la lune*, París, 1938, pp. 141-143. <<

[387] Cardenal Gomá, *Pastorales de la guerra*, pp. 147-190. <<

[388] Las varias fuentes de información dan totales algo diferentes del número de incidentes y de la importancia de los daños. Obviamente es imposible en tiempo de guerra informar con

exactitud de todos los ataques contra buques aislados. He tomado estas cifras de N. J. Padelford y H. G. Seymour, «Some International Problems of the Spanish Civil War», *The Political Science Quarterly*, septiembre de 1937. <<

[389] D. Cattell, *Soviet Diplomacy and the Spanish Civil War*, pp. 115-116. <<

[390] John C. De Wilde, *Foreign Policy Reports*, primero de abril de 1938. Anthony E. *Facing the Dictators*, pp. 515 y s. <<

[391] *Survey of International Affairs*, 1938, I, pp. 272-274. <<

[392] En la clasificación de las fuerzas nacionalistas he utilizado las cifras de un periodista suizo, O. Tryvaud, *Les deux Espagnes*, Lausanne, 1937, pp. 161-162. Él realizó una encuesta sobre este tema particular en septiembre, y tanto sus razonamientos como sus totales eran coincidentes con los otros informes esparcidos que yo tenía. El ejército republicano a finales de 1937 era estimado en 600.000 hombres según el generalmente bien informado *Times* de Londres. <<

[393] DGFP, pp. 657-663 para el extenso análisis hecho por Von Stohrer de la debilidad interna del régimen de Franco. <<

[394] Lawrence Fernsworth, en el *New York Times* del 2 de enero de 1938, y el testimonio de algunos conservadores catalanes, que ahora viven en Barcelona. <<

[395] Alfonso Camín, *España a hierro y fuego*, México, 1938, passim. <<

[396] Para las negociaciones con ambos bandos véase Marcel Junod, *Le troisième combattant*, París, 1947, pp. 83-104. La restante información sobre las condiciones en que trabajó la CRI la obtuve en entrevistas en Ginebra con el fallecido doctor Junod, y otros dos delegados de la época. Sobre el servicio de noticias, condiciones de las prisiones, y el número exacto de intercambios, véase *Rapport Général du Comité International de la Croix-Rouge sur son activité d'août 1934 a mars 1938*, Ginebra, 1938. Las

oficinas de la CRI en Ginebra facilitaron amablemente también un *Rapport Complémentaire… relatif a la guerre civile en Espagne… et à ses suites*, en ciclostilo, preparado en 1948. <<

[397] José Giral, *Año y medio de gestiones de canjes*, Barcelona, 1938, pp. 5, 41. El señor Giral era jefe del Gobierno en agosto de 1936, cuando los primeros delegados de la CRI llegaron a España. En marzo de 1937 Largo Caballero le pidió que representara al Gobierno republicano en todas las negociaciones con vistas al intercambio de prisioneros, y continuó con estas funciones bajo Negrín hasta finales de 1938. Año y medio incluye buena parte de la correspondencia relativa a los esfuerzos de intercambio, junto con docenas de historias de casos de negociaciones afortunadas o fracasadas. Estoy en deuda con la familia del señor Giral por una copia en microfilm de fuente tan importante. <<

[398] *Ibídem*, pp. 55-68. <<

[399] *Revue Internationale de la Croix-Rouge*, mayo de 1939, p. 435. <<

[400] A. Núñez Morgado, *Los sucesos de España*, p. 192. También pp. 200-240 para los resúmenes detallados de las discusiones entre los diplomáticos sobre las cuales se han basado los anteriores párrafos. <<

[401] A. Núñez Morgado, *op. cit.*, p. 229. <<

[402] *Ibídem*, pp. 230-232. J. Álvarez del Vayo, *La guerra empezó en España*, pp. 241 242. <<

[403] J. de Galíndez, *Los vascos*, pp. 103, 115, 168-169. <<

[404] Segismundo Casado, *The Last Days of Madrid*, Londres, 1939, pp. 87-93; artículo sobre las embajadas por Indalecio Prieto en *El Socialista*, 21 de diciembre de 1951. Hay numerosas referencias a las actividades de la «quinta columna» en el libro de Claude Bowers, *Misión en España*, 2.a ed., Ed. Grijalbo, México, 1966 <<

[405] Galíndez, *op. cit.*, p. 97. <<

[406] *Survey of International Affairs*, 1937, II, pp. 388-390. <<

[407] Galíndez, *op. cit.*, p. 101 <<

[408] En relación con ello véase la obra de semificción, pero muy bien documentada sobre la vida en las embajadas y hospitales, *No me cuente usted su caso*, Madrid, 1955, de Javier Martín Artajo. El autor, que luego sería ministro de Asuntos Exteriores del Gobierno de Franco, pasó una buena parte de la guerra en la embajada mexicana. <<

[409] La estimación del número de refugiados en las embajadas varía de 5000 a 20.000. He seguido los razonamientos de Burnett Bolloten, quien, en *The Grand Camouflage*, da una estimación aproximada a los 20.000, observando que Núñez Morgado calculaba 15.000, Álvarez del Vayo 20.000, y que sólo la poco importante legación de Noruega llegó a tener 900 en una ocasión. Las estimaciones más bajas pueden muy bien basarse en informes de 1938. Así que acepto como probablemente correcta la cifra de la CRI de 2500 hacia finales de la guerra. <<

[410] Manuel Azaña, *Discurso en el Ayuntamiento de Valencia*, 21 de enero de 1937 <<

[411] A pesar de que la misión de Besteiro no tuvo consecuencias prácticas, fue un hecho de gran importancia moral, porque determinó de antemano la incomprensión entre Besteiro y Negrín. Mi convicción de que Besteiro pensaba que estaba autorizado para buscar una mediación se basa en conversaciones separadas con tres de sus amigos en Madrid, más el artículo de José del Río en *El Socialista*, 24 de septiembre de 1959. Debo a don Pablo Azcárate, embajador republicano en Londres, la información de que Besteiro tenía que dar énfasis a la cuestión de la retirada de los voluntarios. La entrevista en el aeropuerto y la irritación de Besteiro tras de su regreso son descritos brevemente por Largo Caballero en *Mis recuerdos*, pp. 199-200, y también tuve la opor-

tunidad de discutir toda la cuestión con Rodolfo Llopis, que fue subsecretario de la Presidencia con Largo Caballero <<

[412] Prieto en *El Socialista*, Toulouse, 5 de marzo de 1959. <<

[413] Zugazagoitia, *op. cit.*, pp. 418-423. <<

[414] Un exmiembro de la Junta me describió sus actividades y me mostró, orgulloso, su colección de folletos y carteles escritos en la campaña para educar a los refugiados en los palacios de Madrid. Véase también Galíndez, *op. cit.*, pp. 130-132. <<

[415] Sobre el número de refugiados, y los esfuerzos de los cuáqueros en Cataluña, dependí principalmente de Noah Curtís y Cyril Gilbey, *Malnutrition*, Londres, 1944, pp. 46-71. El libro contiene una gran cantidad de informes técnicos sobre la organización de los socorros alimenticios, y compara la experiencia cuáquera en Austria, de 1919 a 1924, con la experiencia en Cataluña, 1936-39. Véase también Grace Rhoads, «The Quakers in Spain», *The Christian Century*, 24 de agosto de 1938; y el artículo de Alfred W. Jones en el *New York Times Magazine*, 3 de abril de 1938. <<

[416] A. Pedro Pons, *Enfermedades por insuficiencia alimenticia observadas en Barcelona durante la guerra*, Barcelona, 1940. El autor era profesor de medicina clínica en la Universidad de Barcelona. <<

[417] De modo extraoficial tuve la oportunidad de ver la lista completa de los ataques aéreos republicanos contra territorio insurgente hecha por el Ministerio del Aire nacionalista. <<

[418] *Survey of International Affairs*, 1938, I, pp. 386-387. <<

[419] Véanse los detallados despachos de William Carney al *New York Times*, 4 y 5 de abril de 1938. <<

[420] Harold Callender en el *New York Times*, 5 y 6 de junio de 1938. <<

[421] *Survey of International Affairs*, 1938, I, p. 394. <<

[422] Vincent Sheean, *Not Peace but a Sword*, Nueva York, 1939, pp. 140-148. <<

[423] *Survey*, 1938, I, pp. 314-316. *New York Times*, 23 y 27 de marzo, 13 y 17 de abril, 19 y 20 de mayo, 21 de junio y 3 de julio de 1938. <<

[424] Gabriel Avilés, *Tribunales Rojos*, Barcelona, 1939, ofrece un sobrio y detallado relato de los tribunales y prisiones del SIM. El autor era un abogado liberal amigo íntimo de Companys. Pertenece al grupo pequeño y poco conocido de abogados que dedicaron todas sus energías y valor a la lucha por el mantenimiento de los procedimientos legales en la España republicana. Véanse también los informativos artículos de Lawrence Fernsworth en el *New York Times* de 20 y 24 de abril y 25 de mayo de 1938. <<

[425] Para la batalla del Ebro he dependido principalmente de Vicente Rojo, *España heroica*, Buenos Aires, 1942, pp., 168-190, y Alvah Bessie, *Men in Battle*, Nueva York, 1939, pp. 275-290. En España tuve la oportunidad de consultar con oficiales tanto del ejército republicano como del nacionalista sobre cuestiones de suministros, tácticas y moral. <<

[426] Zugazagoitia, *Historia de la guerra en España*, pp. 430-432, 438-440. <<

[427] Sobre la crisis de agosto y su trasfondo, véase Zugazagoitia, *op. cit.*, pp. 430-465 *passim* y Prieto y Negrín, *Epistolario*, p. 105. Recibí confirmación de la interpretación que dio Zugazagoitia a las actitudes de Besteiro y Azaña de amigos sobrevivientes de ambos. <<

[428] Alfredo Kindelán, *Mis cuadernos de guerra*, pp. 150 y ss. <<

[429] Lawrence Fernsworth, en el *New York Times*, 23 de marzo de 1938, informó de que había descubierto una renovada actividad de los 2000 sacerdotes que se estimaba existían en Barcelo-

na. Por fuentes católicas privadas me enteré de que el SIM protegió a dichos sacerdotes. <<

[430] H. Thomas, *The Spanish Civil War*, p. 554, información basada en los documentos del Departamento de Estado para 1938. Véase también Prieto en *El Socialista*, Toulouse, 19 de febrero de 1953. <<

[431] Thomas, *op. cit.*, p. 553 <<

[432] Gracias a un amigo íntimo de Negrín me enteré de que el jefe del Gobierno recibió un mensaje personal de Winston Churchill en noviembre de 1938, diciendo, en efecto: «siga haciendo lo que está haciendo». <<

[433] GDFP, pp. 754 y ss. <<

[434] Citado en *The Nation*, 31 de diciembre de 1938, con la información de que el periódico en cuestión había sido confiscado. <<

[435] Ésta es la estimación de bajas de *The Times* de Londres, de 19 de noviembre de 1938. Se la sometí al general Rojo y a varios otros oficiales de la época, todos los cuales la hallaron decididamente más razonable que la estimación de 100.000 bajas de los «rojos» dadas por Aznar. El general Rojo incluso pensaba que las cifras del *Times* podían ser un poco elevadas. <<

[436] GDFP, pp. 769-771. <<

[437] Información procedente de personalidades barcelonesas que intervinieron en las negociaciones. <<

[438] *New York Times*, 12, 14, 18 y 30 de octubre de 1938. Gorkín, *Caníbales políticos*, pp. 260 y ss. Gorkín fue uno de los defensores. <<

[439] Para la batalla de Cataluña he dependido de Vicente Rojo, *¡Alerta los pueblos!*, Buenos Aires, 1939; del *Survey of International Affairs*, 1938, 1, pp. 274-278, y Herbert Matthews, *The Education of a Correspondent*, Nueva York, 1946, pp. 144 y ss. <<

[440] Los periodistas norteamericanos, ingleses y franceses que habían estado destacados en Barcelona marcharon antes de la entrada de los nacionalistas. Mi relato está basado en entrevistas con varios ciudadanos, un oficial republicano encargado del mantenimiento del orden en la retirada, dos oficiales nacionalistas y un médico que entraron con las tropas del general Yagüe, y un delegado de la Cruz Roja Internacional que estaba presente. La cuestión del empleo de la bandera de la Cruz Roja es estudiada en el ya citado informe en mimeógrafo *Rapport Complémentaire* de 1948 sobre las actividades de la CRI durante la guerra civil española. <<

[441] *Survey*, 1938, I, p. 301. <<

[442] Zugazagoitia, *op. cit.*, p. 509; Broué y Témime, *op. cit.*, pp. 483, 487-490. Estos últimos autores están particularmente bien informados sobre las actividades republicanas en suelo francés durante las últimas semanas de la guerra. <<

[443] Mis cifras sobre el número de refugiados y de soldados que regresaron a España proceden del *Rapport Complémentaire* de 1948 referente a las actividades de la CRI en la guerra civil española. <<

[444] Zugazagoitia, *op. cit.*, p. 522. <<

[445] Mis fuentes de información principales sobre la reunión de Los Llanos, y luego sobre el golpe de Estado de Casado, fueron Segismundo Casado, *The Last Days of Madrid*, Londres, 1939, y Edmundo Domínguez, *Los vencedores de Negrín*, México, D. F., 1940. Ambos son relatos muy detallados, pero he tratado de limitar mi resumen a puntos que están corroborados por otras fuentes. La obra de Casado estuvo motivada por un deseo casi histérico de autojustificación. Domínguez escribió la suya en Orán durante la primavera de 1939, período en el cual estuvo apasionadamente convencido de que la guerra no se había perdido militarmente y de que Negrín había sido «traicionado». <<

[446] Kershner, *Quaker Service in Modern War*, pp. 43-46. <<

[447] Broué y Témime, *op. cit.*, p. 491. <<

[448] En el diario *ABC*, Madrid, 20 de febrero de 1937, hizo la declaración de que la oferta le honraba, pero que había perdido a los que le eran más queridos en la ciudad y que estaba decidido en las presentes circunstancias a no abandonarla. <<

[449] Sobre la carrera de Besteiro véase el conmovedor artículo de Rodolfo Llopis en *Cuadernos del Congreso por la Libertad de la Cultura*, diciembre, 1961. Llopis fue discrepante de Besteiro dentro del Partido Socialista durante algún tiempo. <<

[450] Mi punto de vista sobre Besteiro fue grandemente influido por conversaciones con varios de sus amigos íntimos en Madrid, y con uno de los sacerdotes vascos que lo conocieron (que casi lo idolatró), mientras estuvieron juntos en la prisión de Carmona, después de la guerra. <<

[451] Los discursos por radio de Besteiro, Domínguez y Matallana fueron publicados en *El Socialista* de Madrid el 7, 10 y 11 de marzo de 1939, respectivamente. Ulterior confirmación de la pasividad de Negrín puede ser hallada en el relato de J. García Pradas, *Cómo terminó la guerra de España*, Buenos Aires, 1940, pp. 72-76. El autor era el director de la CNT en Madrid, y fue miembro de la Junta de Casado. <<

[452] Sobre la personalidad de Negrín como primer ministro en tiempo de guerra véase especialmente Vicente Rojo, *¡Alerta los pueblos!*, pp. 222-225, y Zugazagoitia, pp. 408-416, 480 <<

[453] Las frases citadas han sido tomadas de declaraciones nacionalistas publicadas por *El Socialista*, 28 de marzo de 1939, en su detallado relato de los esfuerzos de negociación. Este periódico, durante febrero y marzo, es una fuente indispensable para comprender el fin de la guerra. <<

[454] Zugazagoitia, pp. 580-583. <<

[455] Véase también D. Cattell, *Communism and the Spanish Civil War*, pp. 42-43, quien llega a la misma conclusión a través del examen de otras pruebas. <<

ÍNDICE